

TERCER INFORME DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS DE JUSTICIA,
ÓRGANOS AUTÓNOMOS DE CONTROL Y REFORMA CONSTITUCIONAL
SOBRE JUSTICIA AMBIENTAL, ÓRGANOS AUTÓNOMOS, JUSTICIA
CONSTITUCIONAL Y OTRAS MATERIAS.

INDICE DEL INFORME

I.- ANTECEDENTES GENERALES..... 2

**II.- OBJETO DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS DE JUSTICIA, ÓRGANOS
AUTÓNOMOS Y REFORMA CONSTITUCIONAL..... 3**

III.- DELIBERACIÓN CONSTITUCIONAL 4

 A. Discusión en general..... 4

 (i) Audiencias públicas y valoración de la participación popular 4

 (ii) Visitas y actividades en terreno 9

 (iii) Deliberación en general..... 10

 (iv) Votación en general 11

 B. Discusión en particular 15

 (i) Sistematización de las normas aprobadas en general 15

 (ii) Audiencias públicas adicionales 15

 (iii) Votación en particular..... 21

 (iv) Indicaciones rechazadas 197

IV.- PROPUESTA CONSTITUCIONAL..... 236

V.- ANEXOS. 265

 A. Detalle de las votaciones en general 265

 B. Detalle de las votaciones en particular 271

 C. Informe de enlace transversal 284

 (i) Convencional Carol Bown 284

HONORABLE PLENO DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL:

La Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos y Reforma Constitucional, pasa a informar del desarrollo de su labor y cumplimiento de la labor encomendada por el Pleno de la Convención Constitucional, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

I.- ANTECEDENTES GENERALES

La Convención Constitucional, en sus sesiones 20ª, 21ª, 22ª, 23ª y 24ª, celebradas los días 14, 23, 27, 28 y 29 de septiembre de 2021, aprobó su Reglamento General. Su artículo 61 creó siete comisiones temáticas encargadas de estudiar, deliberar y aprobar propuestas de normas constitucionales y disposiciones transitorias que serán sometidas para su discusión y aprobación por el Pleno. En particular, el numeral 6 de la referida norma estableció la “Comisión sobre Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional”.

Con fecha 8 de octubre de 2021, mediante el oficio N° 163, se informó de la integración de las Comisiones, quedando la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos y Reforma Constitucional integrada por los siguientes convencionales constituyentes:

1. Carol Bown
2. Daniel Bravo
3. Ruggero Cozzi
4. Andrés Cruz
5. Mauricio Daza
6. Hugo Gutiérrez
7. Vanessa Hoppe
8. Ruth Hurtado
9. Luis Jiménez (PPOO)
10. Patricia Labra
11. Tomás Laibe
12. Natividad Llanquileo (PPOO)
13. Rodrigo Logan
14. Luis Mayol
15. Manuela Royo
16. Daniel Stingo
17. Christian Viera
18. Ingrid Villena
19. Manuel Woldarsky

Según la normativa antes referida, la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos y Reforma Constitucional se constituyó el pasado 19 de octubre de 2021. En dicha sesión se procedió a elegir a la **Coordinación** de la Comisión, la que recayó en la convencional constituyente señora Vanessa Hoppe y el convencional constituyente señor Christian Viera.

Adicionalmente, durante la sesión de fecha 21 de octubre de 2021, la Comisión procedió a elegir como integrante titular de la **Comisión de Participación Popular** al convencional Tomás Laibe y como integrante suplente a la convencional Carol Bown. En lo tocante a **enlaces transversales**, con fecha 3 de febrero se renovaron estos cargos, resultando elegidas las convencionales Manuela Royo y Carol Bown. Los informes emitidos por las convencionales en ejercicio de este rol se encuentran disponibles en el **Anexo C**.

II.- OBJETO DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS DE JUSTICIA, ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y REFORMA CONSTITUCIONAL

De acuerdo al artículo 67 de la Convención Constitucional, la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos y Reforma Constitucional abordará, a lo menos, los siguientes temas:

- a) Poder Judicial;
- b) Sistema de justicia constitucional;
- c) Ministerio Público y sistema de persecución penal;
- d) Órganos de control y órganos autónomos;
- e) Acciones constitucionales y garantías institucionales a los Derechos Humanos y de los Derechos de la Naturaleza;
- f) Justicia local;
- g) Pluralismo jurídico y sistemas propios indígenas;
- h) Reforma constitucional;
- i) Normas transitorias;
- j) Defensoría de los Pueblos y de la Naturaleza;
- k) Justicia administrativa;
- l) Defensoría Penal Pública y de las víctimas;
- m) Institucionalidad, gasto fiscal y políticas públicas en Derechos Humanos, y
- n) Justicia ambiental.

Cabe señalar que en un primer informe, la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos y Reforma Constitucional informó al Pleno de su propuesta constitucional referida a “§ Principios generales del Sistema Nacional de Justicia”. En un segundo informe se abordaron, entre otras, las materias señaladas en las letras a), f), g) y k), proponiendo además una serie de normas transitorias (letra i).

En este tercer informe, se da cuenta de la deliberación y las propuestas referidas a las materias restantes, es decir, aquéllas referidas en las letras b), c), d), e), h), j), l), m) y n); y de sus respectivas normas transitorias (letra i).

Adicionalmente, cabe informar que mediante el Oficio N° 616, la Mesa Directiva, redestinó a esta Comisión diez iniciativas constitucionales desde la Comisión de Derechos Fundamentales, sobre reinserción social, derechos de personas privadas de libertad y amnistía, las que también se incorporaron a este informe.

III.- DELIBERACIÓN CONSTITUCIONAL

A. Discusión en general

Tal y como se informara en los informes previos de la Comisión, para abordar en general el mandato de proponer normas constitucionales referidas a las materias de competencia de la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos y Reforma Constitucional; a lo largo del trabajo de la Comisión: (i) se recibieron audiencias públicas con representantes de órganos e instituciones del Estado, así como de representantes de la academia y centros de estudio, de la sociedad civil, ONGs, gremios y la ciudadanía; (ii) se desarrollaron visitas y actividades en terreno, para recopilar mayor información y antecedentes sobre estas materias; y (iii) se recopilaron las iniciativas constituyentes vinculadas a la competencia de la Comisión y se deliberó en torno a las mismas.

(i) Audiencias públicas y valoración de la participación popular

Cabe reiterar que durante el proceso de audiencias públicas, se agendaron **127 audiencias públicas**, cuyo contenido consta en las actas de la Comisión y en las respectivas minutas o presentaciones hechas llegar por las y los expositores, documentos puestos a disposición de la ciudadanía en el siguiente enlace: https://www.cconstituyente.cl/comisiones/comision_presentaciones.aspx?prmID=1

Estas audiencias incluyeron la exposición de representantes de diversos órganos del Estado, organizaciones internacionales, ONGs, organizaciones sociales, gremios, miembros de la academia y particulares.

Una **síntesis elaborada por la Agrupación de Universidades Regionales**, sistematizando los argumentos y diversas consideraciones expuestas a lo largo de cada una de estas audiencias puede ser consultada en el Anexo B del Primer Informe de la Comisión o en el documento disponible en el siguiente enlace: https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=2070&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION

Se reitera a su vez, el listado completo de expositores en la siguiente tabla:

ÓRGANOS DEL ESTADO	
Guillermo Silva	Corte Suprema
Jorge Abbott	Ministerio Público
Juan Jose Romero Gonzalo García	Tribunal Constitucional
Jorge Bermúdez	Contraloría General de la República
Mario Marcel	Banco Central

Andrés Tagle	Servicio Electoral – SERVEL
Jorge Dahm Carmen Gloria Valladares	Tribunal Calificador de Elecciones – TRICEL
Carlos Mora	Defensoría Penal Pública
Federico Aguirre Paula Ballesteros	Instituto Nacional de Derechos Humanos – INDH
Ignacio Malig	Corporación Nacional de Desarrollo Indígena – CONADI
Alejandro Díaz María Paz Acevedo	Corporación Asistencia Judicial – CAJ
Patricia Muñoz	Defensoría de la Niñez
Gloria de la Fuente David Ibaceta	Consejo para la Transparencia
Lilia Pérez	Dirección del Trabajo
Juan Enrique Vargas Cristina Villareal	Academia Judicial
Christian Alveal	Gendarmería
Carolina Cuevas	Consejo Nacional de Televisión – CNTV
Juan Peribonio Pamela Villagrán	Consejo de Defensa del Estado – CDE
Joaquín Cortés	Comisión para el Mercado Financiero
ACADEMIA Y CENTROS DE ESTUDIO	
Katherine Becerra	Universidad Católica del Norte
Yanira Zuñiga	Universidad Austral
Daniela Acatino	
Pablo Soto	
Diego Pardo	
Myrna Villegas	Universidad de Chile
Enrique Navarro	
Salvador Millaleo	
Cristian Roman	
José de Gregorio	
Luis Cordero	
Felipe Abbott	Centro de DDHH – Universidad de Chile
Nancy Yáñez	Observatorio Constitucional de Género – Centro de DDHH – Universidad de Chile
Jose Francisco García	Pontificia Universidad Católica
Carmen Domínguez	
José Luis Lara Arroyo	
Cristian Villalonga	Foro Constitucional – Pontificia Universidad Católica
María Elena Santibáñez	
Ricardo Lillo Sophia Romero	Red de Investigadores de Derecho Procesal

Manuel Núñez	Asociación Chilena de Derecho Constitucional
Miguel Melin	Universidad de la Frontera
Felipe Gorioitia	Universidad de Valparaíso
Fabián Huepe	Universidad de Concepción
Sergio Verdugo	Centro de Justicia Constitucional Universidad del Desarrollo
Catalina Salem	
Marisol Peña	
Cristian Vargas	Universidad del Desarrollo
Alejandro Lagos	Universidad del Desarrollo – sede Concepción
Richard Albert	Universidad de Texas, EE.UU
Jorge Contesse	Rutgers School of Law – Newark, EE.UU
Rodrigo Correa	Universidad Adolfo Ibáñez
Constanza Salgado	
Verónica Undurraga	
Christian Rojas	
Miriam Henríquez Jaime Arellano	Núcleo de Análisis Político y Constitucional - Universidad Alberto Hurtado
Gustavo Poblete	Universidad Alberto Hurtado
Raúl Núñez Claudio Díaz	Instituto Chileno de Derecho Procesal
Jose Luis Ugarte	Universidad Diego Portales
Domingo Lovera	
Humberto Noguera Gonzalo Aguilar	Centro de Estudios Constitucionales – Universidad de Talca
Pablo Contreras	Universidad Autónoma
Boaventura de Sousa Santos	Centro de Estudios Sociales – Universidad de Coímbra, Portugal
Silvia Bagni	Universidad de Bolonia, Italia
Silvia Serrano Oscar A. Cabrera	Instituto O'Neill para el Derecho y la Salud Nacional y Global – Universidad de Georgetown, EE.UU
Soledad Lagos Daniela Escobar	Académico/as por el Diálogo en el Proceso Constituyente
Roberto Gargarella	Universidad Torcuato Di Tella y Universidad Buenos Aires, Argentina
SOCIEDAD CIVIL Y ONG	
José Aylwin	Observatorio Ciudadano
Claudio Alvarado	Instituto de Estudios de la Sociedad – IES
Jorge Barrera	Fundación Jaime Guzmán
Viviana Krsticevic	Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL
Maria Cristina Tello Lis Cid Salazar	Agrupación PRAIS DDHH Nacimiento
Patricio Dinamarca Claudina Caamaño	Coordinación usuarios y usuarias PRAIS Arauco

Ricardo Díaz Nicole Friz	Cabildo Arauco Soberano
Úrsula Indacochea	Fundación para el debido proceso
Lucas Sierra	Centro de Estudios Públicos
Teresa Valdés Natalia Dembowski	Observatorio de Género y Equidad
Camila Maturana Mariela Infante	Corporación Humanas – Plataforma "Nada sin Nosotras"
Carola Catroneo Florencia Pinto	Asociación de Abogadas Feministas de Chile – ABOFEM
Marco Fandiño	Centro de Estudios de Justicia de las Américas – CEJA
Gaby Rivera Marta Vega	Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos – AFDD
Gabriela Curinao Mabel Lopez	Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas
Davor Harasic Trinidad Luengo	Asociación por las Libertades Públicas
Gabriela Burdiles Victoria Belemmi	ONG FIMA
Rodrigo Sepúlveda	Eco San Joaquín
Pamela Nahuelcheo Wladimir Martínez	Protocolo de Atención a usuarios/as de tribunales Macro región sur – Pau-Manu
Leonardo Hernández	Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales – CLAPES
David Debrott Claudio Lara	Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina y el Caribe – SEPLA
Camila de la Maza Ananías Reyes	Articulación de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos
Juanita Fernández Hernán Narbona	Organizaciones de Derechos Humanos y Ambientales
Robinson Fuentes Ingeborg Block	Capítulo Chileno del Ombudsman
Ariadna Beroiz Marysabel Pavez	Fundación Derecho y Defensa Animal
Karen Ardiles	Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA
Lui Laura Zapana Daniel Ardita	Movimiento Internacional por los Derechos de la Madre Tierra-Naturaleza
Héctor Vega Luis Aguayo	Fundación Nueva Educación y Sociedad – FNES
Sofía Lanyon María Belén Bravo	Amnistía Internacional Chile
René Solís de Ovando Segovia	Centro Iberoamericano de Estudios Sociales – CIBES, España
Patricio Segura Erwin Sandoval	Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén – CODESA
Rodrigo Correa	Imagina Chile
GREMIOS	
Mauricio Olave Veronica Vymazal	Asociación de Magistrados de Chile
Patricio Aguilar Alejandra Ugalde	Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial – APRAJUD

Carola Rivas Susan Sepúlveda	Asociación de Magistradas de Chile
Francisco Bravo Alejandra Godoy	Asociación Nacional de Fiscales
Paulina Ruiz Tagle Claudio Carvallo	Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público
Francisco Alvarado	Asociación de Defensores Penales Públicos de Chile
Marcelo Inostroza	Federación Nacional de Corporaciones de Asistencia Judicial
Gema Aguila Karin Mendoza	Asociación de Magistrados, Administradores y Empleados del Poder Judicial – ANEJUD
Sebastián Paredes	Sindicato Nueva Esperanza
Mirko Bonacic-Doric Francisco Hurtado	Agrupación de Jueces de Policía Local del Maule
Carola Quezada	Instituto Nacional de Jueces Secretarios Abogados de Juzgados de Policía Local
Claudia Diaz-Muñoz Claudia Elizalde	Asociación Gremial de Secretarios de Juzgados de Policía Local de Chile
Hector Humeres Leonor Etcheberry	Colegio de Abogados de Chile
Juan Antonio Moreno Claudia Donaire	Sindicato Inter empresas Líder de Trabajadores de Walmart Chile
Andrea Castro René Morales	Asociación de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile – ADIPTGEN
Eduardo Riquelme	Secretario Nacional Asociación Nacional de sub oficiales y gendarmes – ANSOG
PERSONA NATURAL	
Leticia Maria Flavia	Poder Judicial de Argentina
Jose Huentenlao Maria Yancaman	Particulares
Maria Soledad Cisternas	Defensora de DDHH, mujeres y niñas con discapacidad
Maria Cristina Vargas	Egresada de Derecho
Daniel Urrutia	Juez de Garantía de Santiago
Cesar Antonio Pizarro	Particular
Carlos Montalva Juan Milani	Particulares
Israel Gonzalez	Particular
Daniela López	Particular
Milthon Miranda	Particular
Rafael Harvey	Particular
Michelle Labbe	Particular
Patricia Pérez	Ex Ministra de Justicia
Luis Bates	Ex Ministro de Justicia

Respecto de la **valoración congruente y razonada que hizo la Comisión de la participación popular**, en los términos de lo señalado en la letra h) del artículo 93 del Reglamento General, la Comisión agradeció los numerosos y valiosos insumos

que fueron puestos a disposición, enfatizando que los mismos fueron debidamente considerados para efectos de la elaboración de iniciativas constitucionales, así como en el desarrollo de las indicaciones contenidas en este informe.

En particular, para la elaboración de la presente propuesta constitucional se destacó la presentación de **cuatro iniciativas populares de norma**, dos de ellas sobre Banco Central autónomo, una tercera sobre garantías de respeto a derechos humanos y no repetición, y una última sobre libertad de presos políticos. Asimismo, se destacó la presentación de **siete iniciativas constitucionales indígenas** sobre órganos autónomos, defensoría e institucionalidad ambiental, acción constitucional de revisión de procesos judiciales penales de personas indígenas e indulto para presos políticos mapuches.

(ii) Visitas y actividades en terreno

Adicionalmente, se reitera lo informado respecto de las visitas y actividades en terreno, las que incluyeron la temática de justicia ambiental:

Actividad	Fecha	Lugar	Descripción
Visita a centro penitenciario	24/11/2021	Arauco	La actividad tuvo como objetivo conocer en terreno las instituciones locales del sistema judicial. En particular, se visitó el Centro Penitenciario de Arauco, recorrieron sus instalaciones y recibieron información acerca de los programas que desarrollan, donde el personal les expuso cifras relacionadas con la población penal del recinto.
Encuentro constituyente por una nueva Justicia Ambiental	24/11/2021	Laraquete	Las y los convencionales recibieron testimonios de personas que han enfrentado procesos judiciales en la defensa ambiental de sus territorios o comunidades o que se encuentran en algún proceso institucional que diga relación con decisiones del Estado que tengan impacto ambiental. Se escuchó a las siguientes organizaciones: 1. Agrupación JJ.VV Laraquete 2. Agrupación Protectora del Humedal Tubul Raqui 3. Defensa de la Laguna La Señoraza 4. ONG Defensa Ambiental 5. Red de Humedales del Biobío 6. Fundación Manzana Verde 7. Asamblea Ambiental Biobío.
Encuentro por Justicia Plurinacional	25/11/2021	Arauco Ruka de la Comunidad	El encuentro se realizó con comunidades indígenas de la comuna de Arauco, con el objetivo de identificar problemas y desafíos de la actual institucionalidad,

		Indígena Marihuen, sector La Guinga s/n.	<p>desde la perspectiva de los usuarios mapuche. Asimismo, se intentó detectar la existencia de mecanismos propios de solución de conflictos, distintos a los judiciales.</p> <p>Las comunidades que participaron fueron:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Comunidad Marihuen 2. Comunidad Regui-Quillay 3. Lof Los Vilos 4. Comunidad Chilcoco. 5. Comunidad Juan Agustin Antileo Lincopi. 6. Comunidad Marican Dumuleo. 7. Comunidad Raqui Chico. 8. Comunidad Newen Lafken Mapu.
--	--	--	--

(iii) Deliberación en general

Luego de realizadas las audiencias públicas y actividades, se procedió a la deliberación en general de las iniciativas presentadas. La metodología acordada por la Comisión para dicha deliberación consistió en una presentación de diez minutos de alguno de los o las autoras de cada iniciativa, lo que fue seguido de preguntas y comentarios por integrantes de la Comisión y las respectivas aclaraciones a dichas consultas o precisiones respecto de lo planteado en la Comisión.

Se desarrolló la presentación de iniciativas constitucionales a lo largo de **13 sesiones**, cuyas actas recogieron en detalle el debate realizado al interior de la Comisión. A continuación, se pone a disposición el detalle de las iniciativas deliberadas en cada una de las sesiones y el respectivo enlace a sus actas.

Sesión y link al acta	Iniciativas presentadas
Sesión N° 30 – 02.02.22 https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=2092&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION	ICC N° 15-4 / 22-6 / 25-6 / 202-6 / 409-6 / 96-6 / 179-6 / 77-6 /190-6
Sesión N° 31 – 03.02.22 https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=2098&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION	ICC N° 172-6 / 349-6 / 173-6 / 201-6 IPN N° 04-6
Sesión N° 32 – 04.02.22 https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=2098&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION	ICC N° 76-6 / 412-6
Sesión N° 37 – 15.02.22 https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=2213&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION	ICC N° 574-6 / 564-6 / 466-1 / 913-6 / 186-6 / 963-1 / 588-6 / 813-6 / 943-6 / 657-6 y 1028-6 / 1017-6 / 785-6
Sesión N° 38 – 16.02.22 https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=2203&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION	ICC N° 643-6 / 717-6 / 866-6 / 936-6 / 937-6 / 439-6 y 521-6 / 573-6 / 792-5 / 914-6 ICI N° 62-6

Sesión N° 39 – 17.02.22 https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=2364&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION	ICC N° 557-6 / 625-6 / 954-6 / 876-6 / 816-6 / 457-6 / 1006-4 / 788-5 / 894-6 / 558-6 / 580-6 ICI N° 87-6
Sesión N° 40 – 21.02.22 https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=2258&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION	ICC N° 631-6 / 641-6 / 798-6 / 214-6 / 400-6 / 465-6 / 579-6 / 592-6 / 711-6 / 168-6 / 733-6 / 344-3 / 924-3 IPN N° 46-4
Sesión N° 41 – 22.02.22 https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=2272&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION	ICC N° 889-6 / 714-6 / 801-6 / 541-6 / 815-6 / 899-4 / 1016-7 / 839-4 / 902-6 / 370-4 / 560-6 / 608-6 / 578-6 / 695-6 / 706-6 / 850-6 / 909-6 / 917-6 / 431-6 / 615-6 / 763-6 / 559-6 / 805-6 ICI N° 105-6
Sesión N° 43 – 23.02.22 https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=2260&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION	ICC N° 366-4 / 440-6 / 444-6 / 445-6 / 53-6 / 112-4 / 160-4 / 181-6 / 182-6 / IPN N° 20-6 ICI N° 183-3 (art. xx8, xx42, xx3 trans.)
Sesión N° 44 – 24.02.22 https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=2261&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION	ICC N° 802-6 / 205-6 / 501-3 / 731-6 / 803-6 / 817-6 y 940-6 / 829-1 / 880-6 / 900-6 / 1026-4 / 861-6 ICI N° 242-6
Sesión N° 45 – 25.02.22 https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=2297&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION	ICC N° 89-6 / 184-6 / 325-6 / 472-6 / 562-6 / 729-6 / 223-6 / 915-6 / 377-2 / 694-6 / 467-6 / 544-6
Sesión N° 46 – 28.02.22 https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=2266&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION	ICC N° 460-6 / 490-6 / 748-6 / 918-6 / 756-6 / 1007-4 / 1034-6 / 964-5 / 425-6 ICI N° 92-4
Sesión N° 55 – 17.03.22 https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=2400&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION	ICC N° 611-4 / 653-4 / 619-4 / 1031-4 / 452-4 y 529-4 / 461-4 / 703-4 IPN N° 55-4 ICI N° 183-3 (Art.xx37)

(iv) Votación en general

La Comisión realizó la votación en general de las iniciativas contenidas en este informe en tres sesiones. En definitiva, se recibieron **145 propuestas constitucionales**, por parte de convencionales constituyentes, populares y populares indígenas.

En sesiones desarrolladas con fechas 8, 9 y 17 de marzo de 2022, se procedió a la votación en general de estas iniciativas, correspondientes al segundo y tercer bloque temático y a las derivadas por la Mesa directiva desde la Comisión de Derechos Fundamentales respectivamente, arrojando los siguientes resultados:

VOTACIÓN EN GENERAL		
Iniciativa	Tema	Resultado
ICC N° 179-6	Ministerio Público	Rechazada (7-11-1)
ICC N° 560-6	Ministerio Público	Aprobada (19-0-0)
ICC N° 608-6	Ministerio Público	Rechazada (2-14-2)
ICC N° 695-6	Ministerio Público	Rechazada (6-11-2)

ICC N° 706-6	Ministerio Público	Rechazada (4-13-2)
ICC N° 850-6	Ministerio Público	Rechazada (7-11-1)
ICC N° 909-6	Ministerio Público	Aprobada (13-5-1)
ICC N° 917-6	Ministerio Público	Rechazada (2-15-2)
ICC N° 763-6	Legalidad de los delitos y las penas	Aprobada (12-5-2)
ICC N° 615-6	Norma transitoria para Ministerio Público	Aprobada (14-5-0)
ICC N° 25-6	Consejo de defensa del ciudadano	Rechazada (6-12-1)
ICC N° 96-6	Defensoría Penal Pública	Rechazada (4-12-3)
ICC N° 202-6	Sistema Nacional de Defensa Jurídica Integral	Aprobada (15-1-3)
ICC N° 431-6	Debido proceso y Defensoría Penal Pública	Aprobada (13-5-1)
ICC N° 559-6	Defensoría Penal Pública	Aprobada (18-0-1)
ICC N° 805-6	Defensoría Penal Pública	Aprobada (13-4-2)
ICC N° 861-6	Derecho asistencia a víctimas	Aprobada (11-8-0)
ICC N° 440-6	Tutela judicial efectiva y debido proceso	Rechazada (8-10-1)
ICC N° 444-6	Derecho a un proceso con todas las garantías	Aprobada (15-4-0)
ICC N° 445-6	Tutela judicial efectiva	Aprobada (15-4-0)
ICC N° 15-4	Defensoría de los Pueblos, Naturaleza, y Consumidor [Punto 5, art. xx(2), xx(3) y xx(4)]	Rechazada (4-13-2)
ICC N° 22-6	Establece mecanismos de garantía de los derechos fundamentales	Retirada por sus autores
ICC N° 77-6	Defensor del Pueblo	Rechazada (7-12-0)
ICC N° 190-6	Defensoría de los pueblos y la naturaleza y deberes de Defensoría Penal Pública y Ministerio Público	Aprobada (14-5-0)
ICC N° 366-6	Ombudsperson	Rechazada (2-15-2)
ICC N° 409-6	Defensoría del Pueblo	Aprobada (18-1-0)
ICC N° 466-6	Defensoría de los Derechos Humanos	Aprobada (16-2-1)
ICC N° 564-6	Defensoría constitucional de los pueblos y la naturaleza	Rechazada (3-15-1)
ICC N° 574-6	Defensoría de los pueblos	Aprobada (14-5-0)
ICC N° 657-6 y 1028-6	Defensoría de los Derechos Humanos de los pueblos	Rechazada (2-16-1)
ICC N° 1017-6	Defensorías regionales de los Derechos Humanos de los pueblos	Rechazada (5-13-1)
ICC N° 913-6	Defensoría de los pueblos y naciones indígenas	Rechazada (8-9-1)
ICC N° 963-1 [Art. xx(2)]	Contraloría indígena	Rechazada (2-17-0)
ICC N° 588-6	Instituto Nacional de Derechos Humanos	Rechazada (3-12-4)
ICC N° 813-6	Agencia chilena de Derechos Humanos	Rechazada (6-12-1)
ICC N° 943-6	Defensoría judicial de la discapacidad	Rechazada (7-8-4)
ICC N° 785-6	Defensor del usuario ante la Administración del Estado	Rechazada (7-12-0)
ICI N° 186-6	Defensoría del Itxofill Mogren	Rechazada (4-12-3)
IPN N° 20-6	Garantía de respeto de los DDHH por parte del Presidente de la República ("Cárcel para Sebastián Piñera").	Aprobada (10-8-1)
ICC N° 76-6	Control de mérito en la nueva Constitución	Rechazada (6-12-1)
ICC N° 173-6	Contraloría General de la República	Rechazada (6-12-1)
ICC N° 201-6	Contraloría General de la República	Rechazada (7-11-1)
ICC N° 558-6	Contraloría General de la República	Aprobada (16-2-1)
ICC N° 580-6	Contraloría General de la República	Aprobada (14-5-0)
ICC N° 631-6	Contraloría General de la República	Aprobada (12-6-1)
ICC N° 641-6	Contraloría General de la República	Aprobada (14-4-1)
ICC N° 798-6	Contraloría General de la República	Rechazada (7-12-0)

ICC N° 172-6	Banco Central	Rechazada (7-12-0)
ICC N° 349-6	Banco Central	Rechazada (7-12-0)
ICC N° 412-6	Banco Central	Rechazada (2-17-0)
ICC N° 643-6	Banco Central	Rechazada (3-15-1)
ICC N° 717-6	Banco Central	Aprobada (14-4-0)
ICC N° 866-6	Banco Central	Aprobada (10-5-4)
ICC N° 937-6	Banco Central	Aprobada (18-1-0)
IPN N° 04-6	Banco Central	Aprobada (14-3-2)
IPN N° 46-6	Banco Central	Aprobada (7-12-0)
ICC N° 168-6	Consejo Nacional de Políticas de Estado	Rechazada (7-12-0)
ICC N° 733-6	Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Públicas	Rechazada (7-12-0)
ICC N° 344-3	Dirección de Servicio Civil	Aprobada (15-4-0)
ICC N° 924-3	Dirección Nacional de Servicio Civil	Aprobada (12-5-2)
ICC N° 714-6	Órgano autónomo de empleo fiscal	Rechazada (5-13-1)
ICC N° 801-6	Consejo de contiendas de competencia	Aprobada (12-7-1)
ICC N° 541-6	Servicio Nacional de fe pública	Aprobada (15-4-0)
ICC N° 815-6	Consejo Nacional contra la corrupción	Rechazada (8-9-2)
ICC N° 899-4	Consejo de participación ciudadana	Rechazada (7-9-3)
ICC N° 839-4	Defensoría de las personas consumidoras y usuarias	Rechazada (3-13-3)
ICC N° 902-6	Servicio Nacional del Consumidor	Aprobada (13-5-1)
ICC N° 1016-7	Cámara del artesanado y acción constitucional	Rechazada (3-13-3)
ICC N° 370-4	Consejo de verdad, reparación y no reparación	Aprobada (10-8-1)
ICC N° 636-6	Función notarial y registral	Aprobada (14-4-1)
ICC N° 889-6	Consejo de pueblos indígenas	Aprobada (13-5-1)
ICI N° 105-6	Sustitución de Notarías y Conservador de Bienes Raíces	Rechazada (7-12-0)
ICI N° 183-3 (art xx42 y xx3)	FFAA, de Orden y Seguridad y artículo transitorio	Rechazada (6-10-0)
ICC N° 439-5 y 521-5	Defensoría de la tierra	Rechazada (3-14-2)
ICC N° 573-6	Defensoría de la naturaleza	Aprobada (14-5-0)
ICC N° 625-6	Agencia Nacional de Aguas	Rechazada (8-9-2)
ICC N° 792-5	Defensoría de la naturaleza y jurisdicción ambiental	Rechazada (3-15-1)
ICC N° 914-6	Defensoría de la naturaleza	Aprobada (12-6-1)
ICC N° 557-6	Agencia Nacional de Aguas	Aprobada (17-2-0)
ICC N° 954-5	Estatuto del agua	Aprobada (14-5-0)
ICC N° 816-6	Consejo autónomo del medio ambiente	Aprobada (13-5-1)
ICC N° 876-6	Consejo nacional transición productiva socio-ecológica	Aprobada (11-6-2)
ICC N° 457	Justicia ambiental	Aprobada (14-5-0)
ICC N° 1006-6	Justicia ambiental	Rechazada (6-9-4)
ICC N° 788-5	Acceso a la justicia ambiental	Rechazada (6-11-2)
ICI N° 62-6	Agencia ambiental por la madre tierra	Rechazada (7-10-2)
ICI N° 87-6	Institucionalidad ambiental indígena	Rechazada (7-10-2)
ICC N° 214-6	Establece la participación indígena en la integración del servicio electoral	Aprobada (14-5-0)
ICC N° 400-6	Servicio y registro electoral	Rechazada (8-11-0)
ICC N° 465-6	Justicia electoral	Aprobada (18-1-0)
ICC N° 579-6	Sistema y justicia electoral	Aprobada (13-6-0)
ICC N° 592-6	Servicio electoral	Rechazada (7-9-3)
ICC N° 711-6	Tribunal calificador de elecciones	Aprobada (12-6-1)

ICC N° 89-6	Justicia constitucional	Aprobada (14-2-2)
ICC N° 184-6	Corte constitucional	Rechazada (6-12-0)
ICC N° 325-6	Jurisdicción constitucional	Aprobada (15-2-1)
ICC N° 472-6	Corte constitucional	Aprobada (15-3-0)
ICC N° 562-6	Corte constitucional	Rechazada (7-11-0)
ICC N° 729-6	Jurisdicción constitucional (capítulo I y II, y primero transitorio)	Rechazada (7-9-2)
ICC N° 915-6	Corte constitucional plurinacional	Aprobada (12-5-1)
ICC N° 223-6	Plebiscitos para reformas constitucionales	Rechazada (6-11-2)
ICC N° 377-6	Reforma constitucional	Rechazada (8-10-1)
ICC N° 425-6	Reforma y reemplazo de la Constitución	Aprobada (14-2-3)
ICC N° 467-6	Reforma y reemplazo de la Constitución	Aprobada (13-4-2)
ICC N° 544-6	Reforma y reemplazo de la Constitución	Aprobada (17-1-1)
ICC N° 694-6	Reforma constitucional	Rechazada (7-11-1)
ICC N° 53-6	Reclamación de nacionalidad	Aprobada (12-6-1)
ICC N° 112-4	Acciones constitucionales	Rechazada (5-12-2)
ICC N° 160-4	Acciones de tutela y habeas corpus	Rechazada (7-11-1)
ICC N° 181-6	Recurso de protección	Rechazada (7-11-1)
ICC N° 182-6	Recurso de amparo económico	Rechazada (7-12-1)
ICC N° 205-6	Acción por lesión de derechos por parte del estado	Rechazada (7-11-1)
ICC N° 501-3	Acción constitucional por actos de la administración del estado	Rechazada (8-11-0)
ICC N° 731-6	Garantía de los derechos fundamentales	Rechazada (6-13-0)
ICC N° 802-6	Acción por falta de servicio judicial	Aprobada (14-5-0)
ICC N° 803-6	Acción de protección	Aprobada (14-4-1)
ICC N° 817-6 y 940-6	Acciones constitucionales protectoras de derechos fundamentales	Aprobada (17-1-1)
ICC N° 829-1	Acción de inconstitucionalidad por omisión	Rechazada (7-11-1)
ICC N° 880-6	Acciones de tutela de derechos fundamentales	Aprobada (14-4-1)
ICC N° 900-6	Habeas corpus	Aprobada (18-1-0)
ICC N° 964-5	Mecanismos de garantía	Rechazada (9-9-1)
ICC N° 1026-4	Amparo de personas con discapacidad	Rechazada (6-10-3)
ICI N° 242-6	Acción constitucional de revisión de procesos judiciales penales de personas indígenas	Rechazada (6-10-3)
ICC N° 460-6	Norma transitoria que otorga amnistía por razones humanitarias	Rechazada (6-6-4)
ICC N° 490-6	Norma transitoria que mandata la creación de un nuevo Ministerio de la Discapacidad	Rechazada (6-7-4)
ICC N° 748-6	Norma transitoria que dispone terminar con el secreto de la Comisión Valech	Rechazada (6-5-5)
ICC N° 756-6	Norma transitoria sobre extinción de deudas contraídas por estudiantes de educación superior	Rechazada (7-7-3)
ICC N° 918-6	Norma transitoria sobre la continuidad de la legislación vigente y leyes que mandata la Constitución	Rechazada (8-9-0)
ICC N° 1007-6	Norma transitoria sobre protección de personas mayores en los procesos judiciales	Rechazada (4-7-6)
ICC N° 1034-6	Norma transitoria sobre Comisión evaluadora de jueces	Rechazada (7-9-1)
ICI N° 92-4	Norma transitoria que otorga indulto general a los presos políticos mapuche	Rechazada (6-6-5)

ICC N° 611-4	Derechos de las personas privadas de libertad	Aprobada (12-1-3)
ICC N° 653-4	Derecho a la reinserción social	Aprobada (16-0-0)
ICC N° 619-4	Derechos fundamentales de las personas privadas de libertad	Rechazada (7-7-3)
ICC N° 1031-4	Derechos de las personas privadas de libertad	Aprobada (17-0-0)
ICC N° 461-4	Fin a prisión política en el Estado de Chile	Rechazada (8-9-0)
ICC N° 452-4 y 529-4	Fin a prisión política	Retiradas por sus autores
ICC N° 703-4	Norma transitoria relativa a libertad de presos políticos del estallido social	Rechazada (8-9-0)
IPN N° 55-4	Por la libertad de los presos políticos de la rebelión popular	Primera votación: Empate (8-8-0) Segunda votación: Aprobada (9-8-0)
ICI N° 183 (Art. xx37)	Indulto general a presos políticos mapuches	Rechazada (7-9-0)

El detalle de cada una de las votaciones puede ser consultado en el **Anexo A** de este informe o en los siguientes links:

Sesión	Fecha	Enlace a las votaciones
N° 52	8-03-22	https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion.aspx?prmlD=30&prmlDSession=754
N° 53	9-03-22	https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion.aspx?prmlD=30&prmlDSession=762
N° 55	17-03-22	https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion.aspx?prmlD=30&prmlDSession=812

B. Discusión en particular

(i) Sistematización de las normas aprobadas en general

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 91 del Reglamento General de la Convención, la Coordinación elaboró un texto sistematizado, cuya versión final fue enviado a todas y todos los convencionales con fecha 17 de marzo de 2022. Este texto recogió todas las propuestas aprobadas en general, otorgando el plazo de seis días para la presentación de indicaciones.

(ii) Audiencias públicas adicionales

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 42, inciso tercero, del Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación y Educación Popular Constituyente, el lunes 14 de marzo de 2022 se recibieron cinco audiencias durante el debate de las normas constitucionales, cuyo detalle puede ser consultado en el acta de la respectiva sesión, disponible en el siguiente link: https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmlD=2351&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION

En particular, las personas expositivas, se refirieron a los temas de justicia ambiental, defensor del pueblo, acciones constitucionales y reforma constitucional, señalando lo siguiente:

1.- Sras. Liliana Galdámez, María Nora González y Ximena Insunza, Profesoras Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Las profesoras fueron invitadas para exponer sobre Justicia Ambiental. En primer lugar, la profesora Galdámez se refirió al derecho a un medio ambiente libre de contaminación y los problemas de su regulación constitucional actual, apuntando al recurso de protección e indicando que la propuesta constitucional de la Comisión se hace cargo de varios de los problemas actuales. Explicó que la propuesta abarca tanto el diseño institucional con la Defensoría, como la tutela constitucional. Para dar cuenta de los problemas de la tutela constitucional, se refirió al caso de Quinteros-Puchuncaví, en donde se dictó una sentencia que previa varias acciones, pero no contaba con mecanismos que permitieran a la corte supervisar estos mandatos que surgen de la sentencia. Mencionó también el caso del Rally Dakar, en donde la Corte Suprema dictaminó que no existía interés directo en la protección de una zona tan lejana al domicilio de la recurrente, que accionó desde Santiago, para destacar el problema del requisito del “entorno adyacente”. Otro problema que mencionó fue el de contra quién se recurre, en tanto en causas ambientales esto puede ser muy complejo. Por último, mencionó la disparidad en el acceso a asesoría especializada. Respecto de la propuesta, advirtió que la disparidad de acciones puede ir contra el objetivo que se busca, pudiendo ser preferible una sola acción constitucional en donde se contenga la posibilidad de accionar por temas medioambientales, destacando la importancia de las medidas precautorias o cautelares.

En segundo término, se entregó la palabra a la profesora María Nora González, creadora de la clínica ambiental, quien destacó la introducción de formas alternativas de resolución de conflictos, pues esto permite a las personas participar con información en la toma de decisiones. En este sentido, llamó a abandonar la lógica binaria de titulares de proyectos vs. comunidades que se oponen a dichos proyectos, señalando que es una lógica insuficiente para hacerse cargo del problema y generar los diálogos necesarios. Destacó los ejemplos de agencias ambientales interinstitucionales en Colombia, Perú, EE.UU y Nueva Zelanda. Explicó que es necesario permitir la participación, para lograr una construcción conjunta de estos proyectos, donde el Estado debe garantizar los mecanismos colaborativos y preventivos, puntos en los que podría mejorarse la redacción de las normas propuestas.

La convencional Royo consultó dónde es preferible presentar estas acciones para facilitar el acceso a tutela medioambiental y cuál debería ser el ámbito de competencia de los tribunales ambientales. El convencional Stingo señaló si no es ingenuo buscar prácticas colaborativas a la luz de la práctica de la institucionalidad actual. Por su parte, el convencional Daza consultó por la falta de imparcialidad de las autoridades técnicas actuales; por la integración de personas que no son abogados en los tribunales ambientales; si son suficientes; y si sería aconsejable establecer salas especializadas en la justicia común. La convencional Hoppe hizo preguntas relativas al diseño de la Defensoría de la Naturaleza y si la responsabilidad estricta podría solucionar algunas de las limitaciones probatorias de la tutela

constitucional. Por último, el convencional Jiménez preguntó si deberían fiscalizarse acuerdos privados entre comunidades y empresas; y si la Defensoría debería ser litigante o solo persuasiva.

La profesora Insunza señaló que justicia ambiental no es sinónimo de judicatura especializada, y en este sentido la idea de una sala especializada puede ser mejor diseño para algunos conflictos medioambientales. Respecto de la acción de daño ambiental, deberá evaluarse cómo queda el diseño de la responsabilidad general. Asimismo, es necesario compatibilizar estas materias con las normas generales de responsabilidad administrativa y normas generales de resolución de conflictos. Respecto del modelo de Defensoría, es necesario preguntarse por sus objetivos para efecto de pensar en su mejor diseño. Sobre el modelo actual de evaluación de proyectos, compartió que puede mejorarse, pero no necesariamente debe eliminarse, y por ejemplo, indicó que debería promoverse la información temprana. De forma similar, la Superintendencia del Medio Ambiente puede mejorarse, pero destacó que han implicado un avance importante en la fiscalización. Respecto de la designación de los ministros de tribunales medioambientales, señaló que probablemente sea materia de ley.

2.- Sr. Robinson Fuentes y Sra. Estela Espinoza, Capítulo Chileno del Ombudsman.

El Presidente y la Directora del capítulo chileno del Ombudsman, se refirieron a las propuestas de Defensor del Pueblo. El señor Fuentes señaló que solo la iniciativa N° 409 es propiamente una Defensoría, siendo las otras iniciativas propuestas de instituciones nacionales de DD.HH. En este sentido, destacó el ámbito de derechos que protege, proponiendo que se incorporen no solo los derechos fundamentales, sino también de gobernanza, es decir, el ámbito de derechos de usuario/as de servicios públicos, dado que así lo exigen los estándares internacionales de DD.HH. Asimismo, llamó a incorporar la idea de “control de finalidad”, para garantizar que los órganos públicos velen por el interés ciudadano en el ejercicio de funciones y que éstas no se suspendan durante estados de excepción constitucional. Por último, señaló que la litigación es parte de la esencia de una Defensoría pero no es lo único que abarca la institución, dado que no todo abuso es necesariamente ilegal, no todo juicio se gana y puede generar una cooptación de abogados.

La señora Espinoza se refirió al diseño institucional, señalando que no es aconsejable un diseño colegiado, dada la poca experiencia comparada con ese modelo y el riesgo de cuoteo político y la lentitud en la toma de decisiones. Es por ello que aconsejaron una forma unipersonal. Sobre la forma de nombramiento, recordó que los Principios de París disponen que la administración solo puede nombrar a integrantes con derecho a voz. Su consejo es que el defensor o defensora sea nombrado por mayoría absoluta de miembros de la Cámara o del Congreso unicameral, a propuesta de organizaciones de la sociedad civil. Valoraron las normas que disponen la rendición de cuentas y las normas de “congelamiento”, después de sus funciones. Respecto de sus funciones, destacó la necesidad de incluir facultades de mediación, vigilancia de instituciones privadas que ejercen funciones públicas, así como prever consejos consultivos de la sociedad civil.

La convencional Villena consultó si es aconsejable optar por una litigación estratégica y no asumir todas las causas de violaciones a derechos humanos. El convencional Stingo preguntó por otras funciones fundamentales. Por último, el convencional Bravo consultó por la duración óptima del cargo.

El señor Fuentes señaló que la principal función de una Defensoría es la defensa de derechos humanos y poder constituirse en terreno. Respecto de la iniciativa de normas, señaló que hay Defensorías latinoamericanas que tienen esa atribución, dado que es también una forma de ejercer control sobre la agenda parlamentaria. Destacó también la necesidad de poder recibir y tramitar quejas, para que se investiguen, se solicite información y puedan emitirse informes consultivos, lo que no obstaculiza las funciones del Ministerio Público o la Contraloría. Respecto de la dicotomía de magistratura de persuasión vs litigación, señaló que no ven una dicotomía y pueden ejercerse ambas funciones, pero la litigación no es la función principal, en tanto tampoco previenen los abusos. Asimismo, insistió en la necesidad de poder fiscalizar a organismos privados que ejercen funciones públicas. Por último, sobre la duración proponen cinco años con una reelección, o con una mayor duración que las autoridades que supervigilan.

3.- Sr. Raúl Letelier, Profesor del Departamento de Derecho Público, Universidad de Chile.

El señor Letelier fue invitado para referirse a acciones constitucionales. A este respecto, mencionó algunos criterios normativos que a su juicio representan un salto cualitativo en estas propuestas, mencionando en primer lugar la entrega del conocimiento de estas acciones a los tribunales de primera instancia, lo que permitirá descentralizar el conocimiento de estas acciones, permitirá un vínculo más estrecho con temas de competencia común y con futuros tribunales contenciosos administrativos, distribuirá mejor la carga de trabajo y de forma más expedita. No obstante, cuestionó la propuesta de entregar a la Corte Suprema la función de unificar jurisprudencia en este ámbito, dado que en lo cautelar prima la aplicación del derecho y no lo interpretativo. Un segundo avance en estas propuestas es contemplar la compensación por prisión sin condena, de forma automática e igualitaria y distinguiéndola de la acción por negligencia judicial. Una tercera propuesta meritoria es la acción de amparo, la que consideró completa, la radica en el juez de garantía, abarca también las condiciones de privación de libertad, aunque advirtió un error al referirse a la impugnación ante el “tribunal que lo hubiera dictado”.

A continuación se refirió a tres problemas de estas propuestas: (i) respecto de la norma sobre principios para la protección jurisdiccional de derechos fundamental, señaló que la protección no es solamente vía acciones constitucionales, por lo que podría resultar problemática y simplificadora, debiendo tal vez limitarse solo a acciones constitucionales; (ii) además, no le parece correcto imponer el requisito de agotamiento de recursos administrativos; sobre la acción de pérdida de nacionalidad, repite el error de entregarse a la Corte Suprema, lo que implica dejar una única instancia; y se establece que se resolverá como jurado, lo que implica no entregar razones de la decisión; y (iii) sobre algunas acciones populares, indicó que tienen contornos poco claros, no quedando claro en la regulación propuesta cuando operarían, señalando que puede ser más efectivo entregar legitimación activa

institucional; asimismo, criticó la competencia de las Cortes de Apelaciones en la acción de tutela ambiental.

La convencional Royo consultó por la acción de error judicial y la intervención del Consejo de Defensa del Estado. Los convencionales Stingo y Viera preguntaron por la necesidad de incluir la acción de reclamación de nacionalidad en forma específica y quién debería conocerla. El convencional Bravo consultó su opinión por la extensión de la acción por falta de servicio judicial a decisiones administrativas. La convencional Hurtado preguntó qué acciones constitucionales deberían quedar consagradas en el texto constitucional.

El señor Letelier señaló que no hay que tener miedo que los órganos del Estado compitan entre sí, de acuerdo a su propio ethos, dado que son los tribunales quienes deben adjudicar con objetividad e imparcialidad. En este sentido, el Consejo de Defensa del Estado vela por el erario público, y por ende su aproximación a la indemnización por error judicial será distinta y es positivo que así sea. Respecto de la acción de protección de nacionalidad, señaló que los hechos dañinos de la acción de protección ocurren en el país, mientras que en el caso de la nacionalidad puede darse un daño consular o internacional, tiene ciertas particularidades que hicieron incluirla en la Constitución, considerando que debería conocerla la Corte de Apelaciones. Sobre la ampliación de la acción por error judicial a decisiones administrativas, consideró que es una buena ampliación. Por último, sobre las acciones que deben estar en la Constitucional, mencionó el recurso de protección, el habeas corpus, la compensación por error judicial y la acción por reclamación de nacionalidad.

4.- Sra. Viviana Ponce de León, Profesora de Derecho Constitucional, Universidad Austral de Chile.

La señora Ponce de León fue invitada a exponer sobre reforma constitucional, señalando que es necesario ver cómo interactúan estas reglas con factores políticos. En este sentido, llamó a abordar tres aspectos: (i) el grado de flexibilidad; (ii) los actores relevantes; y (iii) el procedimiento de sustitución de la Constitución.

Sobre el primer aspecto, señaló que la Constitución tiene una aspiración de estabilidad y otra de flexibilidad, por lo que lo ideal es aspirar a una forma de continuo, estableciendo un procedimiento de reforma más exigente, lo que suele concentrarse en el quorum de aprobación necesario. En este punto, hay razones para preferir la mayoría absoluta en vez de una calificada, mencionando la igualdad en el peso de cada integrante del órgano legislativo y no entregar un sesgo a favor del status quo. Aclaró que existen otros factores que inciden en la tramitación de las reformas (plazos, trámites, actores que participen) y su flexibilidad. Indicó que una regulación minuciosa en este sentido, rigidizará las reformas. Agregó que la incorporación de cláusulas pétreas, sustrae algunos aspectos de estos procesos de reforma, punto en el que algunas iniciativas identifican materias que quedan entregadas a una Asamblea Constituyente y otras que identifican materias que deberían ser sometidas a plebiscito. Sobre esto, señaló que es preferible identificar estas materias según su ubicación en el texto constitucional, para no someterlo a diversas interpretaciones.

Respecto de los actores relevantes, indicó que es pacífico que el Legislativo y el Ejecutivo participen de estos procesos de reforma, pero en algunas iniciativas se

añade a la ciudadanía, ya sea para proponer reformas o para decidir vía referéndum o plebiscito ratificatorio. Explicó que esto es reflejo de una tendencia creciente a nivel global.

Por problemas de conexión, se vio interrumpida la presentación.

5.- Sr. Sebastián Zárte, Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Autónoma de Chile.

El señor Zárte también se refirió al tema de la reforma constitucional, señalando que hará una referencia a la importancia de esta regulación, entregará una visión comparada, las ventajas y desventajas de mecanismos de democracia semi-directa. En primer lugar, indicó que la reforma debe ser vista como una forma de defensa de la Constitución, ya que evita problemas de ilegitimidad del texto, permite la adaptación nuevos problemas sociales y evolución constitucional e impide el desmoronamiento constitucional.

Sobre la rigidez del texto constitucional actual, señaló que a nivel comparado está dentro del estándar. Explicó que realizó una comparación de 134 Constituciones, sobre la base de distintos factores (quorum, órganos que intervienen, otros resguardos como cláusulas pétreas, distinción por capítulos, tiempos de “enfriamiento”, entre otros). Al construir un índice de flexibilidad (1 a 10 según rigidez), la Constitución chilena obtenía un índice de 4. Informó que el 50% de las constituciones vigentes exige 2/3 o más y que solo un 9% de éstas corresponden a constituciones flexibles. A continuación, hizo referencia a los mecanismos de resguardo en constituciones como la francesa y la italiana, en donde el plebiscito ratificatorio solo se realiza si no se alcanza el quorum supra mayoritario. Otras constituciones exigen la aprobación por un Congreso posterior. En este contexto, señaló que le parece desaconsejable alterar el proceso de reforma, enfatizando que la rigidez constitucional es un mecanismo de defensa y se encuentra dentro de los parámetros del derecho comparado.

Respecto de mecanismos de democracia semi directa en los procesos de reforma constitucional, señaló que es necesario distinguir los mecanismos “desde arriba” vs mecanismos “desde abajo”. Los primeros están sujetos a potenciales manejos de los partidos políticos y poderes constituidos, las preguntas de un referéndum pueden ser formuladas de forma inductiva y representan un peligro de rigidizar en extremos cualquier reforma constitucional menor. Sobre los segundos tipos de mecanismos, explicó que existe menor posibilidad de manipulación, pero requieren un control y una ratificación de los poderes constituidos para equilibrar la democracia representativa con semidirecta.

En suma, concluyó que rebajar la rigidez constitucional implica desproteger a la Constitución; que el quórum de 2/3 debiera mantenerse como estándar, con cláusulas pétreas, como prohibición de retroceder en materia de DDHH; advirtió que los plebiscitos no son la panacea, especialmente aquéllos convocados “desde arriba” y que plebiscitar todo rigidiza en extremo.

La convencional Hurtado consultó su opinión por el quorum de 4/7 y a qué materias les asignaría un quorum más elevado. El convencional Stingo señaló que la

rigidez actual no pudo encauzar el estallido social, por lo que no estuvo de acuerdo en mantenerlo en esta nueva Constitución.

Sobre los quorum diferenciados, el señor Zárate indicó que pueden ser interesantes, pero fue de la opinión que la base sea 2/3 y tener cuidado con los capítulos que quedan sujetos a mayores exigencias, dado que ha pasado que se evitan estas exigencias apuntando a otros capítulos, como sucedió con los retiros previsionales. Respecto de la consulta del convencional Stingo, señaló que la Constitución debe ser la “casa de todos”, para que no quede sujeta a mayorías circunstanciales, que se base en consensos transversales. En su opinión, el quorum constitucional no fue un factor determinante en el estallido social.

(iii) Votación en particular

Durante las sesiones de fecha 28, 29 y 30 de marzo; y 4 de abril se desarrolló la votación en particular en la Comisión. El detalle de cada una de las votaciones puede ser consultado en el **Anexo B** de este informe o en los siguientes links:

Sesión	Fecha	Enlace a las votaciones
N° 56	28-03-2022	https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion.aspx?prmlId=30&prmlIdSesion=836
N° 57	29-03-2022	https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion.aspx?prmlId=30&prmlIdSesion=840
N° 58	30-03-2022	https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion.aspx?prmlId=30&prmlIdSesion=853
N° 60	04-04-2022	https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion.aspx?prmlId=30&prmlIdSesion=863

Las votaciones realizadas fueron las siguientes:

Al epígrafe “§ Justicia Ambiental”.-

No habiendo indicaciones al epígrafe, se sometió a votación, y fue **aprobado (14-3-1)**.

Al artículo 1° que se sustituye por uno nuevo.-

“Artículo 1.- Prevención y solución de conflictos socioambientales. El Estado establecerá mecanismos colaborativos de gestión para la prevención y solución de conflictos ambientales garantizando el acceso equitativo e informado, con asesoramiento profesional y técnico especializado gratuito, además garantizará la infraestructura, equipamiento e instalaciones necesarias para tal fin a nivel nacional y regional. La ley asegurará la inclusión de formas colaborativas y preventivas de solución de conflictos ambientales, promoviendo el diálogo y participación informada de las personas, grupos o comunidades afectadas en el ejercicio de estos derechos.”

El convencional Viera expresó que algunos temas no están madurados como para que puedan significar una propuesta definitiva, y en ese contexto, señaló que votará a favor de la indicación N°1 para que se apruebe y pueda ser revisada en el Pleno. El convencional Daza se pronunció en el mismo sentido, indicando que le parece importante fortalecer la vía administrativa de solución de controversias

ambientales pues requieren de un análisis técnico relevante, propio de la administración.

La convencional Bown manifestó que lo relacionado al artículo 1 es más materia de ley y que no hay razón que explique que la administración ambiental se vea ante tribunales ambientales, porque acarrea activismo judicial. El convencional Cozzi cuestionó cuál es el sentido de crear tribunales ambientales a nivel constitucional toda vez que estos ya existen con rango legal.

La convencional Royo explicó que radicar las acciones constitucionales en tribunales ordinarios obedece a una cuestión sistémica que piensa la competencia de las acciones constitucionales radicada en los tribunales de instancia. La convencional Hoppe afirmó que la iniciativa releva la importancia de las materias ambientales en la nueva Constitución porque es una necesidad para las personas que habitan los territorios.

Indicación N°1 de CC Hope y Royo para sustituir el actual artículo 1, por el siguiente:

“Artículo 1.- Tribunales Ambientales. Los Tribunales Ambientales conocen y resuelven las acciones de impugnación de la legalidad de los actos administrativos que se pronuncien sobre materia ambiental, de la acción de Reparación por Daño Ambiental y de la Acción de Tutela Ambiental y de los Derechos de la Naturaleza.

Habrán al menos un Tribunal Ambiental en cada Región del país y se constituirán de forma unipersonal. Para decidir los conflictos de su competencia, deberán tener en consideración los principios ambientales presentes en esta Constitución y los Tratados Internacionales ratificados y vigentes en materia ambiental.

Las acciones para impugnar la legalidad de los actos administrativos que se pronuncien sobre materia ambiental, podrán interponerse directamente a los Tribunales Ambientales, sin que pueda exigirse el agotamiento previo de la vía administrativa.

La ley dispondrá medidas especiales que posibiliten materialmente el acceso a la Justicia Ambiental a aquellas personas, grupos, comunidades o territorios vulnerables.”

Sometida a votación fue **aprobada (13-4-1)**.

Indicación N° 2 de CC Harboe para sustituir el artículo 1 por uno del siguiente tenor:

“Artículo 1.- Prevención y solución de conflictos socioambientales. El Estado promoverá el pleno respeto y cuidado del medio ambiente y establecerá instituciones y mecanismos colaborativos de gestión para la prevención y solución de conflictos ambientales. Una ley establecerá las formas de participación de las comunidades”

Se entiende **rechazada** por incompatible.

Al artículo 2 que se sustituye.-

“Artículo 2.- Justicia especializada. Tribunales Ambientales. El Estado deberá garantizar la existencia de Tribunales Ambientales en cada Región, el que tendrá competencias para:

a) Conocer de las acciones que establezca la ley, respecto de la legalidad de los actos de la administración del Estado que se refieran a materia ambiental.

b) Conocer de las acciones que establezca la ley, respecto de la legalidad de las normas dictadas por la administración para regular la protección ambiental.

c) Conocer de la acción de Reparación por Daño Ambiental.

Para decidir los conflictos que se sustancien ante ellos, deberán tener en consideración los principios ambientales presentes en esta Constitución y los instrumentos internacionales en materia ambiental, tales como el principio preventivo, principio precautorio, principio de no regresión, principio de participación ciudadana, principio in dubio pro natura, principio de justicia ambiental y principio de responsabilidad.

El legislador habrá de disponer medidas especiales, que posibiliten materialmente el acceso a la Justicia Ambiental a aquellas personas, grupos, comunidades o territorios vulnerables.

Las acciones para impugnar la legalidad de los actos administrativos que se pronuncien sobre materia ambiental, podrán interponerse directamente a los Tribunales Ambientales, sin que pueda exigirse el agotamiento previo de la vía administrativa.

La composición de estos órganos jurisdiccionales deberá respetar los criterios de paridad. Corresponde al Consejo Supremo de la Justicia delimitar su integración y procedimientos de funcionamiento.”

Indicación N° 3 de las CC Hope y Royo para sustituir el actual artículo 2, por el siguiente:

“Artículo 2.- Mecanismos colaborativos en conflictos socioambientales. Es deber del Estado promover e implementar mecanismos colaborativos de gestión para la prevención y solución de conflictos socioambientales, garantizando el acceso gratuito e informado, para toda persona o comunidad afectada en el ejercicio de sus derechos ambientales.

La ley asegurará la infraestructura, equipamiento e instalaciones necesarias para tal fin a nivel nacional y regional, junto con el asesoramiento profesional y técnico especializado para promover el diálogo entre todas las partes interesadas.”

Sometida a votación fue **aprobada (14-5-0)**.

Además, se presentaron las siguientes indicaciones:

Indicación N° 4 de CC Harboe para sustituir el inciso primero del artículo 2 por uno del siguiente tenor: “Existirá al menos un Tribunal ambiental en cada región del país, los que tendrán las siguientes competencias:”

Indicación N°5 de CC Harboe para sustituir los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 2 por uno del siguiente tenor: “Una ley determinará su organización, integración, sistema recursivo, normas de funcionamiento y demás potestades necesarias para el cumplimiento de sus fines. Corresponde a la ley delimitar su integración y procedimientos de funcionamiento.”

Las indicaciones **N° 4 y 5** se entienden **rechazadas por incompatibles con la ya aprobada**.

Al título “§ Ministerio Público” que se sustituye.-

Indicación N° 6 de CC CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para reemplazar el título del subtítulo “§ Ministerio Público”, por uno nuevo del siguiente tenor: “Capítulo [XX].- Ministerio Público”.

La convencional Bown advirtió que colocarle nombre de capítulo y número a los títulos es asunto de la Comisión de Armonización.

Sometida a votación fue **aprobada (18-0-1)**.

Al artículo 3 que se sustituye.-

“Artículo 3.- De la organización y funciones del Ministerio Público. Un organismo autónomo, denominado Ministerio Público, conformado como persona jurídica de derecho público, dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos que pudiesen ser constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado.

Ejercerá la acción penal pública en representación exclusiva de la sociedad, en la forma prevista por la ley. En dichas funciones deberá velar por el respeto y promoción de los derechos humanos, considerando también los intereses de la víctima, respecto de quienes deberá adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para protegerlas, al igual que a los testigos.

Ninguna ley ni autoridad podrán en caso alguno impedir o establecer condiciones que entorpezcan el desarrollo de la investigación y el ejercicio de la acción penal pública cuando se trate de hechos que comprometan el interés público, el patrimonio de la nación o contra bienes jurídicos colectivos.”

El convencional Daza relevó la importancia de este órgano autónomo constitucional, indicando que lo más importante de esta norma es lo establecido en su inciso tercero. Afirmó que en los delitos tributarios se instrumentaliza la acción penal y ello da pie al abuso. Lo mismo en asuntos de libre competencia. El convencional Cruz explicó que las indicaciones mantienen una continuidad en el órgano pero con perfeccionamientos. Por ejemplo, que la acción penal pública se ejerza en nombre de la sociedad.

El convencional Cozzi celebró que se mantiene el nombre de Ministerio Público y la importancia de establecer su competencia respecto de los delitos complejos. No obstante, no estuvo de acuerdo en eliminar el carácter jerárquizado que tiene el Ministerio Público.

Indicación N°7 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para reemplazar el artículo 3 del texto sistematizado, por un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo 3.- Del Ministerio Público. El Ministerio Público es un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene como funciones dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos que pudiesen ser constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado.

Ejercerá la acción penal pública en representación exclusiva de la sociedad, en la forma prevista por la ley. En dichas funciones deberá velar por el respeto y promoción de los derechos humanos, considerando también los intereses de la víctima, respecto de quienes deberá adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para protegerlas, al igual que a los testigos.

Ninguna ley ni autoridad podrá en caso alguno impedir o establecer condiciones que entorpezcan el desarrollo de la investigación y el ejercicio de la acción penal pública cuando se trate de hechos que comprometan el interés público, el patrimonio de la nación o contra bienes jurídicos colectivos.

En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales.

La víctima del delito y las demás personas que determine la ley podrán ejercer igualmente la acción penal.

El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública para el ejercicio de sus funciones. La autoridad policial requerida deberá cumplir sin más trámite dichas órdenes y no podrá calificar su fundamento,

oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibición, a menos que ésta sea verbal, de la autorización judicial.

Las actuaciones que amenacen, priven o perturben al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura, requerirán siempre de autorización judicial previa y motivada.”.

Sometida a votación fue **aprobada (14-4-1)**.

Adicionalmente, se presentaron las siguientes indicaciones:

Indicación N° 8 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 3, por el siguiente:

“Artículo 3.- Un organismo autónomo y jerarquizado denominado Ministerio Público, conformado como persona jurídica de derecho público, dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos que pudiesen ser constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado. Ejercerá la acción penal pública en representación exclusiva de la sociedad, en la forma prevista por la ley. En dichas funciones deberá velar por el respeto y promoción de los derechos humanos, considerando también los intereses de la víctima, respecto de quienes deberá adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para protegerlas, al igual que a los testigos.

Ninguna ley ni autoridad podrán en caso alguno impedir o establecer condiciones que entorpezcan el desarrollo de la investigación y el ejercicio de la acción penal pública cuando se trate de hechos que comprometan el interés público, el patrimonio de la nación o bienes jurídicos colectivos”.

Indicación N° 9 de CC Harboe para sustituir el artículo 3 por uno del siguiente tenor:

“Artículo 3.- Un organismo del Estado, autónomo, jerarquizado, con el nombre de Ministerio Público, dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales, y en sus investigaciones deberá apegarse a las exigencias del Debido Proceso consagrado en de esta Constitución. Todo acto que contravenga tales exigencias es nulo y acarreará las consecuencias indemnizatorias y correctivas previstas en la ley.

El ofendido por el delito y las demás personas que determine la ley podrán ejercer igualmente la acción penal.

El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad durante la investigación, sin perjuicio de su dependencia dispuesta en el artículo XX de esta Carta, asumiendo completamente la responsabilidad jerárquica sobre las consecuencias que el ejercicio de tal prerrogativa pueda acarrear. Con todo, las actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben, requerirán de aprobación judicial previa a una solicitud escrita y fundada del fiscal a cargo de la investigación, sin perjuicio de dejar constancia de su encargo. La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite dichas órdenes y no podrá calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibición de la autorización judicial previa ya descrita.”

Las **indicaciones N° 8 y 9** se entienden rechazadas por incompatibles.

Indicación N° 10 de CC Logan para incorporar, en el artículo 3 inciso 1°, las palabras “y jerarquizado” luego de la palabra “autónomo,”. Sometida a votación fue **aprobada (12-6-1)**.

Indicaciones N° 11, 12 y 13 de CC Logan para sustituir, en el artículo 3 inciso 1°, las palabras “la víctima” por “las víctimas”; en el artículo 3 inciso 1°, la palabra “deberá” por “deberán”; y para eliminar, en el artículo 3 inciso 2°, la palabra “contra”. Sometidas a votación conjunta fueron **rechazadas (7-11-1)**.

Al artículo 3 A que se suprime.-

“Artículo 3 A.- Estructura organizacional y funciones. El Ministerio Público es un organismo autónomo funcional y financieramente, que forma parte del Sistema Nacional de Justicia. Está integrado por los y las fiscales, los funcionarios y las funcionarias, el o la fiscal nacional, los y las fiscales regionales y los cargos directivos, quienes serán designados y designadas, previo concurso público, por el Consejo Supremo de Justicia, ajustándose a las normas que la Constitución y la ley determinen.

Existirá un o una fiscal regional en cada una de las regiones o zonas geográficas en las cuales se divida el país, a menos que la ley disponga que exista más de un o una fiscal en una región o zona geográfica determinada. El o la fiscal regional será responsable de la conducción administrativa del Ministerio Público en su territorio y no tendrá facultades para dirigir la investigación de hechos constitutivos de delito ni para ejercer la acción penal pública.”

Indicaciones N° 14 y 15 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez; y Harboe para suprimir el artículo 3 A. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (17-1-1)**.

Adicionalmente, se presentaron las siguientes indicaciones:

Indicación N° 16 de CC Logan para sustituir, en el artículo 3 A inciso 1°, la frase “autónomo funcional y financieramente,” por la frase “jerarquizado, funcional y financieramente autónomo.”

Indicación N° 17 de CC Logan para sustituir, en el artículo 3 A inciso 1°, la frase “Está integrado por los y las fiscales, los funcionarios y las funcionarias, el o la fiscal nacional, los y las fiscales regionales y los cargos directivos, quienes serán designados y designadas, previo concurso público, por el Consejo Supremo de Justicia, ajustándose a las normas que la Constitución y la ley determinen.” por la frase, “Está integrado por el o la Fiscal Nacional; por los y las fiscales regionales y supra territoriales; por fiscales adjuntos y por funcionarios y funcionarias. El Ministerio Público tiene a su cargo la dirección, en forma exclusiva, de la investigación de los hechos constitutivos de delitos y el ejercicio de la acción penal pública y la adopción de medidas para proteger a las víctimas y testigos.”

Indicación N° 18 de CC Logan para sustituir el artículo 3 A inciso 2, por el siguiente: “Existirá una o un Fiscal Regional en cada una de las regiones del país, a menos que por su cantidad de población o por su extensión territorial, sea necesario nombrar más de uno. Podrán crearse fiscalías supra territoriales a nivel nacional, especializadas en la investigación de delitos complejos que la ley determinará”.

Las **indicaciones N° 16, 17 y 18** se entienden **rechazadas** por incompatibles.

Al artículo 4 que se suprime.-

“Artículo 4.- El Ministerio Público, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, debe respetar y promover los principios de interculturalidad,

pluralismo jurídico Indígena y plurinacionalidad. Las políticas de formación y especialización que se impartan o adopten para los funcionarios del Ministerio Público, deberán considerar la especialización en justicia intercultural y cultura Indígena.”

Indicación N° 19 y 20 de CC Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez; y Harboe para suprimir el artículo 4. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (19-0-0)**.

Adicionalmente, se presentó la **indicación N° 21** de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 4, por el siguiente:

“Artículo 4.- Estructura organizacional y funciones. El Ministerio Público es un organismo autónomo funcional y financieramente. Está integrado por los y las fiscales, los funcionarios y las funcionarias, el o la fiscal nacional, los y las fiscales regionales y los cargos directivos.

Existirá un o una fiscal regional en cada una de las regiones o zonas geográficas en las cuales se divida el país, a menos que la ley disponga que exista más de un o una fiscal en una región o zona geográfica determinada. El o la fiscal regional será responsable de la conducción administrativa del Ministerio Público en su territorio.”

Se entiende **rechazada** por incompatible con las ya aprobadas.

A los artículos 5, 6, 7 y 7 A que se suprimen.-

“Artículo 5.- *Principios que inspiran la función de persecución penal. Los y las Fiscales deben desempeñar su rol de persecución penal observando los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, con perspectiva de género y respetando la igualdad ante la ley, sin hacer diferencias de trato que no esté expresamente consagradas en la ley.*”

“Artículo 6.- *Del principio de legalidad de los delitos y las penas. Ninguna persona podrá ser perseguida, castigada penalmente u objeto de una medida de seguridad penal, sino en virtud de una ley propiamente tal que haya entrado en vigor con anterioridad a la perpetración del hecho, salvo que posteriormente entre en vigencia una nueva ley favorable para el imputado.*

La ley no podrá castigar ningún hecho sin que la conducta que constituye su núcleo esté expresa y determinadamente contemplada en ella.”

“Artículo 7.- *Ninguna ley ni autoridad podrán en caso alguno impedir o establecer condiciones que entorpezcan el desarrollo de la investigación y el ejercicio de la acción penal pública cuando se trate de hechos que comprometan el interés público, el patrimonio de la nación o contra bienes jurídicos colectivos.*

Estas funciones serán desarrolladas por intermedio de los fiscales, quienes serán independientes en el ejercicio de ellas, sin que ninguna autoridad o persona pueda interferir en las mismas, debiendo actuar conforme con los principios de legalidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad, oportunidad, mínima intervención penal y garantías del debido proceso. En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales.

En materias laborales sus funcionarios se regirán por las normas del Derecho del Trabajo, sin perjuicio de sus reglamentaciones internas y del estatuto legal de la institución.

El ofendido por el delito y las demás personas que determine la ley podrán ejercer igualmente la acción penal.

El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública para el ejercicio de sus funciones. La autoridad policial requerida deberá cumplir sin más trámite dichas órdenes y no podrá calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibición de la autorización judicial, salvo que esta orden sea verbal.

Las actuaciones que priven, amenacen o perturben al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben, requerirán siempre de aprobación judicial previa.”

“Artículo 7 A.- Investigación de los delitos y persecución penal estatal. Los y las fiscales del Ministerio Público tienen a su cargo la dirección, en forma exclusiva, de la investigación de los hechos constitutivos de delitos y el ejercicio de la acción penal pública, actuando con independencia y sin injerencias indebidas de cualquier persona o institución pública o privada. El o la fiscal nacional y los y las fiscales regionales no pueden desarrollar en ningún caso actividades de investigación ni ejercer la acción penal pública.

Los y las fiscales deben someter su acción a la ley y a los criterios generales de actuación que se dicten a partir de las políticas de persecución penal definidas de la forma prevista en la presente Constitución. Bajo ningún respecto los y las fiscales pueden ejercer facultades jurisdiccionales.

Las actuaciones de investigación que priven, restrinjan o perturben al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura requerirán de aprobación judicial previa.

Los y las fiscales pueden impartir órdenes directas a las policías durante las investigaciones que desarrollen. La autoridad requerida debe cumplir sin más trámite dichas órdenes y sin calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo para requerir la exhibición de la autorización judicial previa, en los casos previstos en el inciso anterior

Los delitos en los cuales se encuentre comprometido el interés público y el patrimonio fiscal son siempre de acción penal pública y la ley no podrá limitar, restringir ni condicionar su investigación y persecución.”

Indicaciones N° 22, 24, 25 y 38 de Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para suprimir el artículo 5, 6, 7 y 7A. Sometidas a votación fueron **aprobadas (19-0-0)**.

Además, se presentaron las siguientes indicaciones:

Indicación N° 23 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para suprimir en el artículo 5 la siguiente frase: “con perspectiva de género y, luego de la palabra “objetividad”.

Indicación N° 26 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 7, y remplazarlo por el siguiente:

“Artículo 7.- Ninguna ley ni autoridad podrán en caso alguno impedir o establecer condiciones que entorpezcan el desarrollo de la investigación y el ejercicio de la acción penal pública cuando se trate de hechos que comprometan el interés público, el patrimonio de la nación o contra bienes jurídicos colectivos.

Estas funciones serán desarrolladas por intermedio de los fiscales, quienes serán independientes en el ejercicio de ellas, sin que ninguna autoridad o persona externa pueda interferir en las mismas, debiendo actuar conforme con los principios de legalidad, objetividad, responsabilidad, unidad de acción, oportunidad, mínima

intervención penal y garantías del debido proceso. En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales.

En materias laborales sus funcionarios se regirán por las normas del Derecho del Trabajo, sin perjuicio de sus reglamentaciones internas y del estatuto legal de la institución.

El Ministerio Público será financieramente autónomo. El ofendido por el delito y las demás personas que determine la ley podrán ejercer igualmente la acción penal.

El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública para el ejercicio de sus funciones y participará tanto en la fijación de metas y objetivos como en la evaluación del cumplimiento de estas órdenes, metas y objetivos en la forma que determine la ley. La autoridad policial requerida deberá cumplir sin más trámite dichas órdenes y no podrá calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibición de la autorización judicial, salvo que esta orden sea verbal.

Las actuaciones que priven, amenacen o perturben al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura, requerirán siempre de aprobación judicial previa.”

Indicación N° 27 de CC Logan para sustituir, en el artículo 7 inciso 1°, la palabra “podrán” por “podrá”.

Indicación N° 28 de CC Logan para eliminar, en el artículo 7 inciso 1°, la palabra “contra”.

Indicación N° 29 de CC Logan para eliminar, en el artículo 7 inciso 2°, la frase “quienes serán independientes en el ejercicio de ellas”.

Indicación N° 30 de Logan para incorporar, en el artículo 7 inciso 2°, la palabra “externa” luego de la palabra “persona”.

Indicación N° 31 CC Logan para eliminar, en el artículo 7 inciso 2°, la palabra “autonomía”.

Indicación N° 32 de CC Logan para incorporar, en el artículo 7 inciso 2° la frase “de acción” luego de la palabra “unidad”.

Indicación N° 33 de CC Logan para incorporar, en el artículo 7 inciso 3°, la frase “El Ministerio Público será financieramente autónomo.”, antes de “En materias laborales...”

Indicación N° 34 de CC Logan para incorporar, en el artículo 7 inciso 5 la frase “y participará tanto en la fijación de metas y objetivos como en la evaluación del cumplimiento de estas órdenes, metas y objetivos en la forma que determine la ley.” luego de la frase “para el ejercicio de sus funciones”

Indicación N° 35 de CC Logan para sustituir, en el artículo 7 inciso 5, la segunda palabra “salvo” por “a menos”.

Indicación N° 36 de CC Logan para incorporar al inciso final del artículo 7, la palabra “restrinjan” entre las palabras “amenacen” y “o”.

Indicación N° 37 de CC Logan para eliminar al inciso final del artículo 7, la frase “o lo restrinjan o perturben”.

Indicación N° 39 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 7 A, y remplazarlo por el siguiente:

“Artículo 7 A.- Investigación de los delitos y persecución penal estatal. Los y las fiscales del Ministerio Público tienen a su cargo la dirección, en forma exclusiva, de la investigación de los hechos constitutivos de delitos y el ejercicio de la acción penal pública, actuando con independencia y sin injerencias indebidas de cualquier persona o institución pública o privada.

Los y las fiscales deben someter su acción a la ley y a los criterios generales de actuación que se dicten a partir de las políticas de persecución penal definidas de la forma prevista en la presente Constitución. Bajo ningún respecto los y las fiscales pueden ejercer facultades jurisdiccionales.

Las actuaciones de investigación que priven, restrinjan o perturben al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura requerirán de aprobación judicial previa

Los y las fiscales pueden impartir órdenes directas a las policías durante las investigaciones que desarrollen y participará tanto en la fijación de metas y objetivos como en la evaluación del cumplimiento de estas órdenes, metas y objetivos en la forma que determine la ley. La autoridad requerida debe cumplir sin más trámite dichas órdenes y sin calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo para requerir la exhibición de la autorización judicial previa, en los casos previstos en el inciso anterior.

Los delitos en los cuales se encuentre comprometido el interés público y el patrimonio fiscal son siempre de acción penal pública y la ley no podrá limitar, restringir ni condicionar su investigación y persecución.”

Indicación N° 40 de CC Logan para eliminar, en el artículo 7 A inciso 1, la frase “con independencia y”.

Indicación N° 41 de CC Logan para incorporar, en el artículo 7 A inciso 1, la frase “externa, ya sea” antes de la frase pública o privada.

Indicación N° 42 de CC Logan para sustituir, en el artículo 7 A inciso 1, la frase “El o la fiscal nacional y los y las fiscales regionales no pueden desarrollar en ningún caso actividades de investigación ni ejercer la acción penal pública.” Por la frase: “De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y testigos.”.

Indicación N° 43 de CC Logan para incorporar, en el artículo 7 A inciso 4, la frase “y participará tanto en la fijación de metas y objetivos como en la evaluación del cumplimiento de estas órdenes, metas y objetivos en la forma que determine la ley.” luego de la frase “que desarrollen”.

Las **indicaciones N° 23, 26 a 37 y 39 a 43** se entienden **rechazadas por incompatibles** con las aprobadas.

Al Artículo 8 que pasa a ser 4.-

“Artículo 8.- Estatuto legal. Una ley determinará la organización y atribuciones del Ministerio Público, señalará las calidades y requisitos que deberán tener y cumplir las y los fiscales para su nombramiento y las causales de su remoción. Los fiscales cesarán en su cargo al cumplir los 75 años, y les serán aplicables las mismas prerrogativas, derechos y obligaciones que a los jueces y juezas.

Las autoridades superiores de la institución deberán siempre fundar aquellas órdenes e instrucciones dirigidas a los fiscales, que puedan afectar una investigación o el ejercicio de la acción penal.”

El convencional Cruz explicó que el ejercicio de las funciones de las autoridades es hasta los 70 años, según lo aprobado en Informes anteriores. El convencional Viera insistió en el punto recalcado por el convencional Cruz. Añadió que el mandato constitucional de respetar los derechos humanos es fundamental.

La convencional Bown estuvo en contra de que los fiscales cesen en sus funciones al cumplir los 70 años. El convencional Cozzi destacó el inciso segundo de la indicación N° 44 por cuanto evita la discrecionalidad y propende a la publicidad de las decisiones. En lo relacionado a la edad, es un asunto que fue aprobado por el Pleno.

Indicación N° 44 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para sustituir, el actual artículo 8 del texto sistematizado, por el siguiente:

“Artículo 4.- De la organización y atribuciones del Ministerio Público. Una ley determinará la organización y atribuciones del Ministerio Público, señalará las calidades y requisitos que deberán tener y cumplir las y los fiscales para su nombramiento y las causales de su remoción. Los fiscales cesarán en su cargo al cumplir los 70 años.

Las autoridades superiores de la institución deberán siempre fundar aquellas órdenes e instrucciones dirigidas a los fiscales que puedan afectar una investigación o el ejercicio de la acción penal.”

Sometida a votación fue **aprobada (16-0-3)**.

Además, se presentaron las siguientes indicaciones:

Indicación N° 45 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir en el artículo 8, y remplazarlo por el siguiente:

“Artículo 8.- Estatuto legal. Una ley determinará la organización y atribuciones del Ministerio Público, señalará las calidades y requisitos que deberán tener y cumplir las y los fiscales para su nombramiento y las causales de su remoción. Los fiscales cesarán en su cargo al cumplir los 75 años.

Las autoridades superiores de la institución deberán siempre fundar aquellas órdenes e instrucciones dirigidas a los fiscales, que puedan afectar una investigación o el ejercicio de la acción penal.”

Indicación N° 46 de CC Harboe para sustituir el artículo 8 por uno del siguiente tenor:

“Artículo 8.- Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones del Ministerio Público, señalará las calidades y requisitos que deberán tener y cumplir los fiscales para su nombramiento y las causales de remoción de los

fiscales adjuntos, en lo no contemplado en la Constitución. Las personas que sean designadas fiscales no podrán tener impedimento alguno que las inhabilite para desempeñar el cargo de juez. Los fiscales regionales y adjuntos cesarán en su cargo al cumplir 75 años de edad.

La ley orgánica constitucional establecerá el grado de independencia y autonomía y la responsabilidad que tendrán los fiscales en la dirección de la investigación y en el ejercicio de la acción penal pública, en los casos que tengan a su cargo. En todo caso, la ley tendrá a la vista la estructura jerárquica del Ministerio Público dispuesta en el artículo 10.”

Indicación N° 47 de CC Logan para eliminar, en el artículo 8 inciso 1, la frase “y les serán aplicables las mismas prerrogativas, derechos y obligaciones que a los jueces y juezas”

Las **indicaciones N° 45, 46 y 47** se entienden **rechazadas** por incompatibles.

Al artículo 8 A que se suprime.-

“Artículo 8 A.- Designación y estatuto aplicable a los integrantes del Ministerio Público. La selección y designación de fiscales, fiscales regionales, funcionarios y funcionarias del Ministerio Público, quedan radicadas en el Consejo Supremo de Justicia, previo proceso de concurso público, con igualdad de acceso de quienes reúnan los requisitos establecidos en la Constitución y la ley. Dicho organismo ejercerá las facultades correccionales y disciplinarias respecto de quienes se desempeñen en la institución.

En el Ministerio Público no existirán cargos de exclusiva confianza del o la fiscal nacional ni de los y las fiscales regionales.

Para optar al cargo de fiscal del Ministerio Público se deben cumplir los mismos requisitos que el ordenamiento establezca para el nombramiento de jueces y juezas.

El cargo de fiscal regional podrá ser desempeñado por quien tenga la calidad de abogado o abogada por un lapso de a los menos diez años y se encuentra habilitado para el ejercicio de la profesión. No será requisito para ser elegido como fiscal regional el tener la calidad de fiscal ni ocupar algún otro cargo dentro del Ministerio Público.

Los y las fiscales regionales duraran cuatro años en sus cargos y no podrá tener lugar su reelección ni una nueva postulación al cargo, ya sea en la misma o en otra región del territorio nacional. Podrán, en todo caso, postular a los cargos vacantes en la institución sujetándose a los requisitos establecidos para ello. Será causal de inhabilidad para asumir el cargo de fiscal regional el haberlo desempeñado previamente en la misma o en otra región del país, de forma interrumpida o ininterrumpida, o cualquiera sea el tiempo que haya transcurrido desde que cesó en el ejercicio de su cargo.

La responsabilidad de él o la fiscal nacional y de los y las fiscales regionales, por el cumplimiento de las obligaciones que la Constitución y la ley les imponen, se podrá hacer efectiva a través del juicio político.”

Indicaciones N° 48 y 49 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez; y Harboe para suprimir el artículo 8 A. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (15-4-0)**.

Además, se presentaron las siguientes indicaciones:

Indicación N° 50 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 8 A y remplazarlo por el siguiente:

“Artículo 8 A.- Designación y estatuto aplicable a los integrantes del Ministerio Público. En el Ministerio Público no existirán cargos de exclusiva confianza del o la fiscal nacional ni de los y las fiscales regionales.

El cargo de fiscal regional podrá ser desempeñado por quien tenga la calidad de abogado o abogada por un lapso de a los menos diez años y se encuentra habilitado para el ejercicio de la profesión. No será requisito para ser elegido como fiscal regional el tener la calidad de fiscal adjunto con a lo menos diez años de experiencia en el cargo.

Los y las fiscales regionales duraran cuatro años en sus cargos y no podrá tener lugar su reelección ni una nueva postulación al cargo, ya sea en la misma o en otra región del territorio nacional. Podrán, en todo caso, postular a los cargos vacantes en la institución sujetándose a los requisitos establecidos para ello. Será causal de inhabilidad para asumir el cargo de fiscal regional el haberlo desempeñado previamente en la misma o en otra región del país, de forma interrumpida o ininterrumpida, o cualquiera sea el tiempo que haya transcurrido desde que cesó en el ejercicio de su cargo.

La responsabilidad de él o la fiscal nacional y de los y las fiscales regionales, por el cumplimiento de las obligaciones que la Constitución y la ley les imponen, se podrá hacer efectiva a través del juicio político.”

Indicación N° 51 de CC Logan para sustituir el artículo 8 A, por otro nuevo del siguiente tenor:

“Artículo 8 A.- Designación y estatuto aplicable a los integrantes del Ministerio Público. La selección y designación de fiscales y funcionarios y funcionarias del Ministerio Público, será regulada por una ley que además definirá el estatuto de responsabilidad administrativa, estableciendo un catálogo de conductas prohibidas, determinando sanciones proporcionadas al tipo de infracción cometida, las que deberán ser acreditadas conforme un procedimiento administrativo legalmente tramitado con pleno respeto a las garantías del debido proceso.

Existirá una o un Fiscal Regional en cada una de las regiones del país, a menos que por su cantidad de población o por su extensión territorial, sea necesario nombrar más de uno.

Podrán crearse fiscalías supra territoriales a nivel nacional, especializadas en la investigación de delitos complejos que la ley determinará.

Las y los fiscales regionales y supra territoriales especializados serán nombrados por Fiscal Nacional de una propuesta en cuaterna paritaria elaborada por el Consejo General del Ministerio Público.

Toda candidata o candidato a fiscal regional o supra territorial especializado, deberá concursar en un procedimiento público y de mérito ante el Consejo Técnico de Evaluación de Antecedentes, y expondrá un plan de trabajo teniendo en cuenta los fenómenos delictuales de la respectiva región o especialidad.

Las y los fiscales regionales y supra territoriales deberán haberse desempeñado como fiscal adjunto, con cinco o más años de experiencia en el cargo, no haber sido fiscal regional o supra territorial durante los dos años anteriores, haber aprobado cursos de formación especializada impartidos por una Escuela de Fiscales establecida por ley y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. Durarán cuatro años en el cargo y una vez concluida íntegramente estas funciones, podrán retornar al cargo que detentaban anteriormente en el Ministerio Público. No podrán ser reelectos ni podrán postular nuevamente a este cargo en ninguna región del país. En el caso de los fiscales supra territoriales,

deberán poseer los conocimientos específicos suficientes para la respectiva área de especialización.”

Las **indicaciones N° 50 y 51** se entienden **rechazadas** por incompatibles.

Al artículo 9 que pasa a ser 5.-

“Artículo 9.- De los fiscales regionales y supra territoriales. Existirá una o un Fiscal Regional en cada una de las regiones del país, a menos que por su cantidad de población o por su extensión territorial, sea necesario nombrar más de uno.

Podrán crearse fiscalías supra territoriales a nivel nacional, especializadas en la investigación de delitos complejos que la ley determinará.

Las y los fiscales regionales y supra territoriales especializados serán nombrados por el Consejo Superior del Ministerio Público.

Toda candidata o candidato a fiscal regional o supra territorial especializado, deberá concursar en un procedimiento público y de mérito ante el Consejo Superior del Ministerio Público, y expondrá un plan de trabajo teniendo en cuenta los fenómenos delictuales de la respectiva región o especialidad.

Las y los fiscales regionales y supra territoriales deberán haberse desempeñado como fiscales adjuntos, con cinco o más años de experiencia en el cargo, no haber sido fiscal regional o supra territorial, haber aprobado cursos de formación especializada impartidos por una Escuela de Fiscales establecida por ley y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. Durarán cuatro años en el cargo y una vez concluida íntegramente estas funciones, podrán retornar al cargo que detentaban anteriormente en el Ministerio Público. No podrán ser reelectos ni podrán postular nuevamente a este cargo en ninguna región del país. En el caso de los fiscales supra territoriales, deberán poseer los conocimientos específicos suficientes para cada área de especialización.”

El convencional Cruz expuso que la indicación N° 52 discurre sobre la base de mantener al Fiscal Regional pero en su inciso segundo tiende a perfeccionar el funcionamiento de la institución en cuanto le otorga un grado de especialidad técnica y evita el compadrazgo en la institución. El convencional Daza explicó que uno de los grandes problemas del Ministerio Público es el mecanismo de nombramientos. Un aspecto importante se relaciona con la práctica llamada “sillas musicales” donde diversas personas van siendo nombradas en diferentes Fiscalías a lo largo del país impidiendo una rotación en los cargos y capturándola. Destacó que la norma involucra un gran avance en la materia en comento.

El convencional Cozzi llamó a evaluar la indicación N° 53 que va en la misma línea de evitar las denominadas “sillas musicales”. Destacó la creación de fiscalías supraterritoriales especializadas para perseguir la delincuencia extendida a trata de personas, narcotráfico, etc.

El convencional Viera sostuvo que la norma de la indiación N° 52 viene a subsanar los problemas que existen en relación con los nombramientos de Fiscales. En lo referido a las Fiscalías supraterritoriales, el grado de especialidad podría cumplirse con unidades especializadas en las Fiscalías regionales.

Indicación N° 52 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para sustituir el actual artículo 9, por el siguiente:

“Artículo 9.- De la Fiscalía Regional. Existirá una Fiscalía Regional en cada región del país, sin perjuicio que la ley podrá establecer más de una por región.

Las y los fiscales regionales deberán haberse desempeñado como fiscales adjuntos durante cinco o más años, no haber ejercido como fiscal regional, haber aprobado cursos de formación especializada y poseer las demás calidades que establezca la ley.

Durarán cuatro años y una vez concluida su labor, podrán retornar a la función que ejercían en el Ministerio Público. No podrán ser reelectos ni postular nuevamente a fiscal regional.”.

Sometida a votación fue **aprobada (13-3-3)**.

Además, se presentaron las siguientes indicaciones:

Indicación N° 53 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 9 y remplazarlo por el siguiente:

“Artículo 9.- De los fiscales regionales y supra territoriales. Existirá una o un Fiscal Regional en cada una de las regiones del país, a menos que por su cantidad de población o por su extensión territorial, sea necesario nombrar más de uno.

Podrán crearse fiscalías supra territoriales a nivel nacional, especializadas en la investigación de delitos complejos que la ley determinará.

Las y los fiscales regionales y supra territoriales especializados serán nombrados por el Consejo Superior del Ministerio Público.

Toda candidata o candidato a fiscal regional o supra territorial especializado, deberá concursar en un procedimiento público y de mérito ante el Consejo Superior del Ministerio Público, y expondrá un plan de trabajo teniendo en cuenta los fenómenos delictuales de la respectiva región o especialidad.

Las y los fiscales regionales y supra territoriales deberán haberse desempeñado como fiscales adjuntos, con cinco o más años de experiencia en el cargo, no haber sido fiscal regional o supra territorial durante los dos años anteriores, haber aprobado cursos de formación especializada impartidos por una Escuela de Fiscales establecida por ley y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. Durarán cuatro años en el cargo y una vez concluida íntegramente estas funciones, podrán retornar al cargo que detentaban anteriormente en el Ministerio Público. No podrán ser reelectos ni podrán postular nuevamente a este cargo en ninguna región del país. En el caso de los fiscales supra territoriales, deberán poseer los conocimientos específicos suficientes para cada área de especialización.”

Indicación N° 54 de CC Harboe para sustituir el artículo 9 por uno del siguiente tenor:

“Artículo 9.- Existirá un Fiscal Regional en cada una de las regiones en que se divide administrativamente el país, a menos que la población o la extensión geográfica de la región hagan necesario nombrar más de uno.

Los fiscales regionales serán nombrados por el Fiscal Nacional, a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones de la respectiva región. En caso que en la región exista más de una Corte de Apelaciones, la terna será formada por un pleno conjunto de todas ellas, especialmente convocado al efecto por el Presidente de la Corte de más antigua creación.

Los fiscales regionales deberán tener a lo menos cinco años de título de abogado, haber cumplido 35 años de edad y poseer las demás calidades necesarias

para ser ciudadano con derecho a sufragio; durarán ocho años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser designados como fiscales regionales por el período siguiente en otra Región, lo que no obsta a que puedan ser nombrados en otro cargo del Ministerio Público.”

Indicación N° 55 de CC Logan para sustituir, en el artículo 9 inciso 3, la frase: “Consejo Superior del Ministerio Público” por la frase “el o la Fiscal Nacional de una propuesta en cuaterna paritaria elaborada por el Consejo General del Ministerio Público.”

Indicación N° 56 de CC Logan para sustituir, en el artículo 9 inciso 4, la frase: “Consejo Superior del Ministerio Público” por la frase “Consejo Técnico de Evaluación de Antecedentes”

Indicación N° 57 de CC Logan para incorporar, en el artículo 9 inciso 5°, la frase “durante los dos años anteriores” luego de la frase “no haber sido fiscal regional o supraterritorial”.

Indicación N° 58 de CC Logan para sustituir, en el artículo 9 inciso 5°, la frase “para cada” por la frase “para la respectiva”.

Las **indicaciones N° 53, 54, 55, 56, 57 y 58** se entienden **rechazadas** por incompatibles con la ya aprobada.

Al artículo 10 que pasa a ser 6.-

“Artículo 10.- Dirección Superior. Un Consejo Superior del Ministerio Público tendrá la dirección superior del organismo, y se configura como órgano independiente, colegiado y paritario.

El Consejo Superior tendrá como funciones:

- a) Dirigir el Ministerio Público e impartir instrucciones generales y especiales al efecto.*
- b) Designar a un Director Ejecutivo del organismo, en un concurso público y transparente;*
- c) Designar de entre sus miembros a un Presidente y Vicepresidente;*
- d) Seleccionar a los fiscales del Ministerio Público, su promoción, traslados y cese de funciones, como de los funcionarios de esta institución, conforme a los principios de igualdad y no discriminación, paridad de género e inclusión, así como de incorporación de los pueblos originarios;*
- e) Velar por la adecuada conducta de los fiscales y funcionarios y su corrección conforme al régimen disciplinario. Los procesos disciplinarios estarán a cargo de una fiscalía independiente, que garantizará el debido proceso, establecida en la forma que determine la ley;*
- f) Supervigilar la formación, capacitación, habilitación y continuo perfeccionamiento de los fiscales y funcionarios del Ministerio Público;*
- g) Determinar la gestión de personas y administrar los recursos financieros, tecnológicos y materiales del Ministerio Público.*
- h) Estudiar y proponer a las autoridades que correspondan la creación o supresión de fiscalías, con el fin de cumplir con las funciones del Ministerio Público en el país.*
- i) Ejercer el supe vigilancia de la Escuela de formación de fiscales y funcionarios del Ministerio Público.*

El Consejo adoptará sus decisiones con el voto favorable de la mayoría de sus miembros en ejercicio.

El Consejo estará compuesto por once miembros, conforme a la siguiente integración:

a) Tres miembros serán fiscales elegidos por sus pares de manera democrática. Los fiscales electos para el ejercicio de esta función quedaran suspendidos de sus cargos en tanto se extienda este.

b) Un miembro será nombrado por el Presidente de la Republica a partir de una propuesta plurinominal del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, de entre académicos de Universidades del Estado o reconocidas por este, con confirmación de la Camara alta. No podrán haber desempeñado cargos de elección popular ni haber sido candidatos a ellos, así como tampoco podrán haber desarrollado funciones en el Gobierno o Administración del Estado en cargos que sean de exclusiva confianza del Presidente de la Republica, en los últimos cuatro años.

c) Tres miembros serán nombrados por el Presidente de la Republica a partir de una propuesta plurinominal seleccionada por el Consejo de Alta Dirección Pública. Los candidatos y candidatas no podrán haber desempeñado cargos de elección popular ni haber sido candidatos a ellos, así como tampoco podrán haber desarrollado funciones en el Gobierno o Administración del Estado en cargos que sean de exclusiva confianza del Presidente de la Republica, en los últimos cuatro años.

d) Dos de los funcionarios del Ministerio Público, elegido por sus estamentos respectivos.

e) Dos representantes de la sociedad civil. La ley establecerá el procedimiento y las condiciones para la designación de estos miembros.

Los miembros del Consejo duraran cuatro años en el cargo y no podrán ser reelegidos, debiendo renovarse por parcialidades de conformidad a lo que señale la ley. Será presidido por el consejero que designe el Consejo.

El cargo de miembro del Consejo Superior es incompatible con todo otro cargo o función en el Estado, sea o no remunerado. Asimismo, mientras duren en sus cargos, los consejeros no podrán ejercer otras actividades particulares remuneradas, con exclusión de las actividades académicas compatibles con el cargo.

Los consejeros no podrán concursar para ser designados en cargos del Ministerio Público mientras dure su desempeño en el Consejo y hasta después de transcurrido un año del plazo en que cesaron en sus funciones.

La ley asegurará que el sistema de nombramientos de los fiscales y funcionarios del Ministerio Público se realice mediante concursos públicos abiertos, transparentes, basados en el mérito profesional y paridad de género. No existirán en esta institución cargos de exclusiva confianza del Consejo ni de los o las fiscales regionales ni los o las fiscales supra territoriales.”

El convencional Cruz expresó que el Consejo será presidido por una persona y tendrá un director ejecutivo. Además, habrá un comité de manera tal que con esto se supera el hecho de que no está sujeto a ningún grado de fiscalización. Es una función análoga al Consejo de la Justicia. El convencional Daza expresó que la indicación propuesta implica un gran cambio en el Ministerio Público que tiene la trascendente labor de ejercer la acción penal pública. La crítica que se hace en relación con que este órgano afectaría la eficacia de la investigación no tiene asidero, pues otras instituciones fiscalizadoras que crearon consejos, como por ejemplo la Comisión para el Mercado Financiero, no se vieron disminuidas en su nivel de eficiencia y organización. El convencional Gutiérrez afirmó que la Convención ha hecho aportes a la vida democrática del país, y uno de ellos es la incorporación de órganos colegiados porque logran los estándares de paridad, plurinacionalidad, entre otros.

El convencional Cozzi discrepó de lo dicho pues un Consejo superior no se aviene con la naturaleza ni objetivos de la persecución penal. A diferencia de la Comisión para el Mercado Financiero, que son órganos reguladores y deliberativos

por naturaleza, el Ministerio Público necesita eficacia en sus labores. Debe tener unidad de propósitos y objetivos.

El convencional Logan afirmó que las soluciones deben obedecer al diagnóstico. En cuanto al tema orgánico se requiere de una cabeza para ejercer responsabilidad. El diagnóstico jamás fue que la figura del Fiscal Nacional fuera mala, lo que se fustigaba era su elección, allí radica el problema. El control del Fiscal, y sus atribuciones son otros de sus problemas. Si el problema era la elección y la funcionalidad, las indicaciones no van en el camino adecuado.

Indicación N° 59 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para sustituir el artículo 10 del texto sistematizado, por el siguiente:

“Artículo 5.- Dirección del Ministerio Público. La dirección superior del Ministerio Público reside en un Consejo Superior, órgano colegiado, paritario, que designará de entre sus miembros a un presidente y a un director ejecutivo.”

Sometida a votación fue **aprobada (13-6-0)**.

Además, se presentaron las siguientes indicaciones:

Indicación N° 60 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir, el artículo 10, y remplazarlo por el siguiente:

“Artículo 10.- Dirección Superior. El Fiscal Nacional del Ministerio Público tendrá la dirección superior del organismo. Será designado por el Presidente de la República con acuerdo de la mayoría de la Cámara de Representantes del Poder Legislativo a propuesta de un organismo denominado Consejo Técnico de Evaluación de Antecedentes, el que incorporará en dicha propuesta a la misma cantidad de mujeres y hombres. El o la Fiscal Nacional deberá tener a lo menos diez años de título de abogado, ser o haber sido fiscal adjunto del Ministerio Público, haber cumplido 35 años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio; durará seis años en el ejercicio de sus funciones y no podrá ser designado para el período siguiente.

El Fiscal Nacional tendrá como funciones:

- a) Dirigir el Ministerio Público e impartir instrucciones generales.
- b) Designar y remover a un Director Ejecutivo del organismo, en un concurso público y transparente;
- c) Seleccionar a los fiscales del Ministerio Público y definir su promoción, traslados y cese de funciones, como de los funcionarios de esta institución, conforme a los principios de igualdad y no discriminación;
- d) Velar por la adecuada conducta de los fiscales y funcionarios y su corrección conforme al régimen disciplinario. Los procesos disciplinarios estarán a cargo de una fiscalía independiente, que garantizará el debido proceso, establecida en la forma que determine la ley;
- e) Supervigilar la formación, capacitación, habilitación y continuo perfeccionamiento de los fiscales y funcionarios del Ministerio Público;
- f) Determinar la gestión de personas y administrar los recursos financieros, tecnológicos y materiales del Ministerio Público.

g) Estudiar y proponer a las autoridades que correspondan la creación o supresión de fiscalías, con el fin de cumplir con las funciones del Ministerio Público en el país. Existirá a lo menos una fiscalía en cada comuna del país.

h) Ejercer la supervigilancia de la Escuela de formación de fiscales y funcionarios del Ministerio Público, y designar a los fiscales que ejercerán la Dirección y funciones académicas temporales en dicha Escuela

Existirá un Consejo Técnico de Evaluación de Antecedentes, el que será funcionalmente autónomo sin que las autoridades institucionales puedan tener injerencia en sus decisiones. Este Consejo estará compuesto por diez miembros, elegidos de forma equitativa y paritaria por votación directa de los fiscales y de los funcionarios del Ministerio Público.

Los integrantes de ese Consejo Técnico deberán contar con un título profesional, podrán o no provenir desde el interior de la institución y tendrán los mismos derechos y obligaciones que los miembros del Consejo encargado del nombramiento de los jueces y funcionarios del Sistema Nacional de Justicia.

El Consejo Técnico de Evaluación de Antecedentes se encargará del análisis curricular y de idoneidad de todos los candidatos y candidatas a Fiscal Nacional, fiscal regional, fiscal supraterritorial especializado y funcionarios de cargos directivos, procediendo a conformar las respectivas listas con las y los postulantes que se encuentran aptos y aptas para asumir los respectivos cargos vacantes, debiendo siempre en el proceso de selección contemplar espacios para la participación y opinión ciudadana.

El Consejo Técnico tomará los acuerdos por mayoría y sus integrantes del durarán seis años en el cargo, no pudiendo ser reelectos y tendrán las mismas restricciones en el desempeño de otras funciones que tienen los miembros del Consejo encargado de los nombramientos en el Sistema Nacional de Justicia”

Indicación N° 61 CC Harboe para sustituir el artículo 10 por uno del siguiente tenor:

“Artículo 10.- El Fiscal Nacional es la autoridad superior del Ministerio Público, de quien dependerán jerárquica y directamente los fiscales regionales y los fiscales adjuntos. El Fiscal Nacional tendrá la superintendencia directiva, correccional y económica del Ministerio Público, en conformidad a la ley orgánica constitucional respectiva.”

Indicación N° 62 de CC Logan para sustituir, en el artículo 10 inciso 1°, la frase “Consejo Superior” por “Fiscal Nacional”.

Indicación N° 63 de CC Logan para agregar, en el artículo 10 inciso 1°, la frase “será designado por el Presidente de la República con acuerdo de la mayoría de la Cámara de Representantes del Poder Legislativo a propuesta de un organismo denominado Consejo Técnico de Evaluación de Antecedentes, el que incorporará en dicha propuesta a la misma cantidad de mujeres y hombres. El o la Fiscal Nacional deberá tener a lo menos 10 años el título de abogado, ser o haber sido fiscal del Ministerio Público, haber cumplido 35 años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio; durará seis años en el ejercicio de sus funciones y no podrá ser designado para el período siguiente. Los nominados deberán comparecer ante la Cámara de Representantes donde expondrán en audiencia pública su Plan Estratégico Nacional, compromiso ético, relación interinstitucional y la propuesta de política de persecución penal”.

Indicación N° 64 de CC Logan para sustituir, en el artículo 10 inciso 2°, la frase “Consejo Superior” por “Fiscal Nacional”.

Indicación N° 65 de CC Logan para eliminar, en el artículo 10 inciso 2° letra a) la frase “y especiales al efecto.”.

Indicación N° 66 de CC Logan para incorporar, en el artículo 10 inciso 2° letra b) la frase “ y remover de sus funciones” luego de la palabra “transparente;”.

Indicación N° 67 de CC Logan para sustituir, en el artículo 10 inciso 2° del artículo 10 la letra c), la frase “de entre sus miembros a un Presidente y Vicepresidente;” por la frase: “Designar a los fiscales regionales y supraterritoriales de la propuesta en cuaterna paritaria elaborada por el Consejo General.

Indicación N° 68 de CC Logan para incorporar, en el artículo 10 inciso 2° letra d) la frase “y definir” luego de la frase “Ministerio Público,”.

Indicación N° 69 de CC Logan para incorporar, en el artículo 10 inciso 2° letra d) del artículo 10, la frase “en la forma que determine la ley” luego de la frase “Ministerio Público,”.

Indicación N° 70 de CC Logan para sustituir, en el artículo 10 inciso 2° letra h) la frase “a las autoridades que correspondan” por la frase “al Consejo General del Ministerio Público”.

Indicación N° 71 de CC Logan para incorporar en el artículo 10 al inciso 2° letra h) la frase final “Existirá a lo menos una fiscalía en cada comuna.”.

Indicación N° 72 de CC Logan para incorporar, en el artículo 10 al inciso 2° letra i), la frase final “y designar, con acuerdo del Consejo General del Ministerio Público, a los fiscales que ejercerán la Dirección y funciones académicas en dicha Escuela”

Indicación N° 73 de CC Logan para sustituir, en el artículo 10 inciso 3°,4°,5°,6°,7° y 8° por los siguientes nuevos incisos 3°, 4° y 5°, del siguiente tenor:

“Existirá un Consejo Técnico de Evaluación de Antecedentes, el que será funcionalmente autónomo sin que las autoridades institucionales puedan tener injerencia en sus decisiones. Este Consejo estará compuesto por once miembros cuyos requisitos y forma de selección estará establecidos por la ley.

El Consejo Técnico de Evaluación de Antecedentes se encargará del análisis curricular y de idoneidad de todos los candidatos y candidatas a Fiscal Nacional, fiscal regional, fiscal supraterritorial especializado y funcionarios de cargos directivos, procediendo a conformar las respectivas listas con las y los postulantes que se encuentran aptos y aptas para asumir los respectivos cargos vacantes, debiendo siempre en el proceso de selección contemplar espacios para la participación y opinión ciudadana.

El Consejo Técnico tomará los acuerdos por mayoría y sus integrantes durarán seis años en el cargo, no pudiendo ser reelectos y tendrán las mismas restricciones

en el desempeño de otras funciones que tienen los miembros del Consejo encargado de los nombramientos en el Sistema Nacional de Justicia.”

Las **indicaciones N° 60 a 73** se entienden **rechazadas** por incompatibles con la ya aprobada.

Al artículo 10 A que pasa a ser 7.-

“Artículo 10 A.- La dirección del Ministerio Público le será encomendada a un Consejo General, órgano de carácter colegiado, deliberativo y paritario, compuesto por los y las fiscales regionales del país y el número de representantes de la sociedad civil que la ley determine, quienes tendrán derecho a voz y voto en la toma de decisiones. Dicho Consejo elegirá a uno o una de sus integrantes, por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, a un o una fiscal nacional, quien presidirá las sesiones el Consejo General y ocupará el cargo por el lapso de dos años, sin posibilidad de ser reelegido.

El Consejo General deberá definir con autonomía las políticas de persecución penal a nivel nacional, regional o de zonas que comprendan parte de alguna región del país o de dos o más regiones y dictará las instrucciones generales que sean necesarias para implementar tales políticas. En dicha labor intervendrán también representantes de la comunidad por medio de procesos de participación ciudadana vinculantes en la forma que la ley determine.

El Consejo General y sus integrantes asumirán también las demás funciones que la ley les encomiende, las que en ningún caso podrán interferir en la dirección de la investigación de los hechos constitutivos de delito ni el ejercicio de la acción penal pública. El Consejo General no tendrá facultades correccionales ni disciplinarias respecto de los y las fiscales del Ministerio Público o de los funcionarios y funcionarias de la institución.

Todos los actos administrativos emanados del Consejo General del Ministerio Público, de las y los fiscales regionales y del o la fiscal nacional, incluidos los actos de naturaleza financiera, estarán sujetos al control y la supervisión de la Contraloría General de la República.”

El convencional Cruz sostuvo que la indicación N° 74 es un complemento indispensable de la cuestión aprobada en relación al Consejo superior. El convencional Daza señaló que su indicación evita la captura del órgano. Además, la norma establece la prohibición a ciertas personas para postular al Consejo, a fin de que la designación de sus integrantes no sea en torno a criterios políticos. El convencional Stingo afirmó que estas indicaciones terminan con la cultura de que la edad de jubilación de las autoridades termina a los 75 años.

La convencional Bown señaló que estos temas no debieran estar contenidos en la Constitución, pues son materia de ley.

Indicación N° 74 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para sustituir el artículo 10 A del texto sistematizado, un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo 6.- Del Consejo Superior del Ministerio Público. El Consejo estará compuesto por siete miembros, designados de la siguiente manera:

a) Tres integrantes elegidos democráticamente por las y los fiscales entre sus pares.

b) Un integrante elegido democráticamente por funcionarios y funcionarias del Ministerio Público entre sus pares.

c) Tres integrantes elegidos por el Congreso plurinacional a partir de ternas elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública. Los candidatos y candidatas no podrán haber desempeñado cargos de elección popular ni haber sido candidatos a

ellos, así como tampoco podrán haber desarrollado funciones en el Gobierno o Administración del Estado en cargos que sean de exclusiva confianza del Presidente de la República, en los últimos cuatro años.

La ley establecerá el procedimiento y los requisitos que deberán reunir los consejeros del Ministerio Público. Los consejeros durarán cuatro años en sus cargos y no podrán ser reelegidos, debiendo renovarse por parcialidades en conformidad a lo que señale la ley.

La calidad de consejero es incompatible con todo otro cargo o función sea o no remunerada, con excepción de la docencia universitaria con los límites que señale la ley.

Las y los consejeros indicados en las letras a) y b) se entenderán suspendidos del ejercicio de su función mientras dure su cometido, pudiendo retornar al ejercicio de sus funciones una vez cumplido este desempeño.”.

Sometida a votación fue **aprobada (12-5-1)**.

Además, se presentaron las siguientes indicaciones:

Indicación N° 75 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 10 A, por uno nuevo del siguiente tenor:

“Artículo 10 A. La dirección del Ministerio Público recaerá en el Fiscal Nacional, quien será designado por el Presidente de la República con acuerdo de la mayoría de la Cámara de Representantes del Poder Legislativo a propuesta de un organismo denominado Consejo Técnico de Evaluación de Antecedentes, el que incorporará en dicha propuesta a la misma cantidad de mujeres y hombres. El o la Fiscal Nacional deberá tener a lo menos diez años de título de abogado, ser o haber sido fiscal adjunto del Ministerio Público, haber cumplido 35 años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio; durará seis años en el ejercicio de sus funciones y no podrá ser designado para el período siguiente.

Existirá un Consejo Técnico de Evaluación de Antecedentes, el que será funcionalmente autónomo sin que las autoridades institucionales puedan tener injerencia en sus decisiones. Este Consejo estará compuesto por diez miembros, elegidos de forma equitativa y paritaria por votación directa de los fiscales y de los funcionarios del Ministerio Público.

Los integrantes de ese Consejo Técnico deberán contar con un título profesional, podrán o no provenir desde el interior de la institución y tendrán los mismos derechos y obligaciones que los miembros del Consejo encargado del nombramiento de los jueces y funcionarios del Sistema Nacional de Justicia.

El Consejo Técnico de Evaluación de Antecedentes se encargará del análisis curricular y de idoneidad de todos los candidatos y candidatas a Fiscal Nacional, fiscal regional, fiscal supraterritorial especializado y funcionarios de cargos directivos, procediendo a conformar las respectivas listas con las y los postulantes que se encuentran aptos y aptas para asumir los respectivos cargos vacantes, debiendo siempre en el proceso de selección contemplar espacios para la participación y opinión ciudadana.

El Consejo Técnico tomará los acuerdos por mayoría y sus integrantes durarán seis años en el cargo, no pudiendo ser reelectos y tendrán las mismas restricciones en el desempeño de otras funciones que tienen los miembros del Consejo encargado de los nombramientos en el Sistema Nacional de Justicia”

Indicación N° 76 de CC Logan para sustituir el artículo 10 A, por uno nuevo del siguiente tenor:

“Artículo 10 A. La dirección del Ministerio Público recaerá en el Fiscal Nacional, quien será designado por el Presidente de la República con acuerdo de la mayoría de la Cámara de Representantes del Poder Legislativo a propuesta de un organismo denominado Consejo Técnico de Evaluación de Antecedentes, el que incorporará en dicha propuesta a la misma cantidad de mujeres y hombres. El o la Fiscal Nacional deberá tener a lo menos diez años de título de abogado, ser o haber sido fiscal adjunto del Ministerio Público, haber cumplido 35 años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio; durará seis años en el ejercicio de sus funciones y no podrá ser designado para el período siguiente.

Existirá un Consejo Técnico de Evaluación de Antecedentes, el que será funcionalmente autónomo sin que las autoridades institucionales puedan tener injerencia en sus decisiones. Este Consejo estará compuesto por once miembros cuyos requisitos y forma de selección estará establecidos por la ley.

El Consejo Técnico de Evaluación de Antecedentes se encargará del análisis curricular y de idoneidad de todos los candidatos y candidatas a Fiscal Nacional, fiscal regional, fiscal supraterritorial especializado y funcionarios de cargos directivos, procediendo a conformar las respectivas listas con las y los postulantes que se encuentran aptos y aptas para asumir los respectivos cargos vacantes, debiendo siempre en el proceso de selección contemplar espacios para la participación y opinión ciudadana.

El Consejo Técnico tomará los acuerdos por mayoría y sus integrantes durarán seis años en el cargo, no pudiendo ser reelectos y tendrán las mismas restricciones en el desempeño de otras funciones que tienen los miembros del Consejo encargado de los nombramientos en el Sistema Nacional de Justicia.”

Indicación N° 77 de CC Harboe para sustituir el artículo 10 A por uno del siguiente tenor:

“Artículo 10A.- El Fiscal Nacional será designado por el Presidente de la República, a propuesta en quina de la Corte Suprema y con acuerdo del Senado adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto. Si el Senado no aprobare la proposición del Presidente de la República, la Corte Suprema deberá completar la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento.

El Fiscal Nacional deberá tener a lo menos diez años de título de abogado, haber cumplido cuarenta años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio; durará ocho años en el ejercicio de sus funciones y no podrá ser designado para el período siguiente.

El Fiscal Nacional cesará en sus funciones al cumplir 75 años de edad.”

Las **indicaciones N° 75, 76 y 77** se entienden **rechazadas** por incompatibles.

Al artículo 11 que pasa a ser 8.-

“Artículo 11.- De la responsabilidad administrativa. El Estado será responsable patrimonialmente por los daños causados por un error injustificado o por la arbitrariedad de los fiscales, en conformidad a la ley, lo que se ventilará en tribunales administrativos en un procedimiento de lato conocimiento. Todo sin perjuicio de la

responsabilidad civil de los fiscales que con sus decisiones hubieran causado responsabilidad patrimonial del Estado.

La ley definirá el estatuto de responsabilidad administrativa de fiscales y funcionarios, estableciendo un catálogo de conductas prohibidas, determinando sanciones proporcionadas al tipo de infracción cometida, las que deberán ser acreditadas conforme un procedimiento administrativo legalmente tramitado con pleno respeto a las garantías del debido proceso. Para aplicar la sanción de remoción se requerirá del voto favorable de los dos tercios de los miembros del Consejo.

El Consejo deberá implementar una Fiscalía de control y asuntos internos, de carácter supra territorial, la que deberá velar por la transparencia, imparcialidad e independencia en el ejercicio de las funciones de los fiscales y estará a cargo de las investigaciones administrativas y penales respecto de los fiscales y funcionarios del Ministerio Público, y propondrá al Consejo, previa formulación de cargos, las sanciones que estime de conformidad a la ley.”

El convencional Cruz sostuvo que la indicación N° 79 pretende responder a las inquietudes que hay sobre el Consejo. Se resuelve el problema de que en el Ministerio Público no hay un órgano de supervigilancia. Serán su Presidente y Director ejecutivo quienes comandarán la institución.

El convencional Viera manifestó que el gran argumento que se utiliza para defender los órganos unipersonales por sobre los colegiados es que los primeros son eficientes y los segundos se burocratizan. En el Ministerio Público la unipersonalidad ha generado dificultades, y que sea colegiado tiene la virtud de que sus decisiones serán deliberadas. El convencional Daza sostuvo la necesidad de establecer que el Ministerio Público funcione armónicamente. En el artículo que pretenden incorporar se disponen reglas acerca de la responsabilidad administrativa en su literal f). El convencional Gutiérrez ejemplificó con el funcionamiento del Consejo de Defensa del Estado, de carácter colegiado, el cual ha sido positivo. Entonces, este Consejo superior no es un peligro para el funcionamiento del Ministerio Público.

El convencional Cozzi sostuvo que el Consejo no se aviene con la naturaleza ni funciones del Ministerio Público. Además, se están dejando fuera ciertas atribuciones con las que hoy cuenta el Fiscal Nacional.

Indicación N° 78 de CC Harboe para suprimir el artículo 11. Sometida a votación fue **rechazada (2-13-3)**.

Indicación N° 79 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para reemplazar el artículo 11 del texto sistematizado, por un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo 7.- Atribuciones del Consejo Superior del Ministerio Público. El Consejo Superior del Ministerio Público tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Dirigir el organismo, velando por el cumplimiento de sus objetivos;
- b) Determinar la política de gestión profesional de las y los funcionarios del Ministerio Público.
- c) Supervigilar la política de persecución penal adoptada por el Comité del Ministerio Público.
- d) Evaluar y calificar permanentemente el desempeño de las y los funcionarios.
- e) Designar a su presidente, a los fiscales regionales, fiscales adjuntos y demás funcionarios del Ministerio Público en conformidad a la ley.

f) Ejercer la potestad disciplinaria respecto de las y los funcionarios, en conformidad a la ley.

g) Definir las necesidades presupuestarias, gestionando los recursos para su adecuado funcionamiento.

h) Las demás atribuciones que establezca la ley.”.

Sometida a votación fue **aprobada (12-5-1)**.

Además, se presentaron las siguientes indicaciones:

Indicación N° 80 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 11 por el siguiente:

“Artículo 11.- De la responsabilidad administrativa. El Estado será responsable patrimonialmente por los daños causados por un error injustificado o por la arbitrariedad de los fiscales, en conformidad a la ley, lo que se ventilará en tribunales administrativos en un procedimiento de lato conocimiento.

La ley definirá el estatuto de responsabilidad administrativa de fiscales y funcionarios, estableciendo un catálogo de conductas prohibidas, determinando sanciones proporcionadas al tipo de infracción cometida, las que deberán ser acreditadas conforme un procedimiento administrativo legalmente tramitado con pleno respeto a las garantías del debido proceso.

Para aplicar la sanción de remoción se requerirá del voto favorable de los dos tercios de los miembros del Consejo. La decisión de remoción de los fiscales será apelable ante la Corte Constitucional quien para ratificarla deberá contar con el voto favorable de dos tercios de sus miembros en ejercicio.

El Consejo deberá implementar una Fiscalía de control y asuntos internos, de carácter supra territorial, la que deberá velar por la transparencia, imparcialidad e independencia en el ejercicio de las funciones de los fiscales y estará a cargo de las investigaciones administrativas respecto de los fiscales y funcionarios del Ministerio Público, y propondrá al Consejo, previa formulación de cargos, las sanciones que estime de conformidad a la ley.”

Indicación N° 81 de CC Logan para eliminar, en el artículo 11 inciso 1°, la frase “Todo sin perjuicio de la responsabilidad civil de los fiscales que con sus decisiones hubieran causado responsabilidad patrimonial del Estado.”.

Indicación N° 82 de CC Logan para incorporar, en el artículo 11 inciso 2°, la frase “General del Ministerio Público. Remoción que será apelable ante la Corte Constitucional” luego de la palabra: “Consejo”.

Indicación N° 83 de CC Logan para incorporar, en el artículo 11 inciso 2°, la frase final. “La decisión de remoción de los fiscales será apelable ante la Corte Constitucional quien para ratificarla deberá contar con el voto favorable de dos tercios de sus miembros en ejercicio”.

Indicación N° 84 de CC Logan para eliminar al inciso 3° del artículo 11, la frase “y penales”.

Las **indicaciones N° 80 a 84** se entienden **rechazadas** por incompatibles.

Al artículo 12 que pasa a ser 9.-

“Artículo 12.- Responsabilidad penal. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, los fiscales y funcionarios del Ministerio Público son personalmente responsables por los delitos en los que incurran en el desempeño de sus funciones.”

El convencional Daza manifestó que la indicación N° 85 establece al Presidente del Consejo. El convencional Cruz agregó que aquí se puede responder a la inquietud existente en torno a no contar con una cabeza que dirija la institución. Además, en cuanto a la falta de atribuciones, eso puede ser designado por ley.

El convencional Cozzi afirmó que no es lo mismo un Fiscal Nacional que un Presidente del Consejo. La responsabilidad política seguirá siendo del órgano colegiado. El convencional Stingo aclaró que no es lo mismo, pues no pretenden aquello. Pretenden una nueva institucionalidad, colegiada, que funcione con mayor reflexión.

Indicación N° 85 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para reemplazar el artículo 12 del texto sistematizado, por un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo 8.- El Presidente del Consejo. El Presidente del Consejo del Ministerio Público dirigirá las sesiones ordinarias y extraordinarias del órgano y representará a la institución ante los demás órganos del Estado, sin perjuicio de las demás atribuciones que señale la ley.”

Sometida a votación fue **aprobada (13-5-1)**.

Adicionalmente, se presentaron las siguientes indicaciones:

Indicación N° 86 de CC Harboe para suprimir en el artículo 12 la frase “Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior,”

Indicación N° 87 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para agregar en el artículo 12 un inciso 2° del siguiente tenor “Las investigaciones penales de fiscales y funcionarios del Ministerio Público estarán a cargo de una fiscalía regional o supraterritorial distinta de aquella de la que el fiscal o funcionario se desempeña”.

Indicación N° 88 de CC Logan para incorporar, en el artículo 12 un inciso 2°, del siguiente tenor “Las investigaciones penales de fiscales y funcionarios del Ministerio Público estarán a cargo de una fiscalía regional o supraterritorial distinta de aquella de la que el fiscal o funcionario se desempeña”.

Las **indicaciones N° 86, 87 y 88** se entienden **rechazadas** por incompatibles con la ya aprobada.

Al artículo 13 que pasa a ser 10.-

“Artículo 13.- Del Comité del Ministerio Público. Existirá un Comité del Ministerio Público, compuesto por el Presidente del Consejo Superior, los fiscales regionales y los fiscales supra territoriales especializados. Este Comité deberá fijar en

el mes de diciembre de cada año los objetivos anuales en materia de persecución penal y los criterios de actuación para el cumplimiento de dichos objetivos, pudiendo establecer orientaciones diferenciadas en las diversas unidades administrativas atendido la naturaleza de los distintos delitos, debiendo siempre velar por la transparencia y objetividad, resguardando los intereses de la sociedad y el respeto de los derechos humanos. El Consejo Superior del Ministerio Público deberá velar por el cumplimiento de estos objetivos."

El convencional Cruz explicó que este Comité determinará la política criminal y será supervisado por el Consejo Superior del Ministerio Público. El convencional Daza señaló que este Comité permite que la determinación de la política criminal sea bajo criterios técnicos. Se hace una separación de la gestión administrativa en el Ministerio Público. El convencional Gutiérrez señaló que con la indicación N° 89 se responde a quién determinará la política criminal. Si habrá un Estado regional es necesario que eso se materialice en materia de persecución penal. El convencional Viera se refirió al segundo inciso de la indicación 89 donde la política criminal se elaborará por expertos. Además, enfatizó en que deberán respetar los derechos humanos.

El convencional Cozzi señaló que la frase final de la indicación N° 89 sobre el respeto a los derechos humanos puede ser redundante pues toda institución del estado debe respetarlos, es una obviedad. De consignarlo, podría llevar a confusiones. El convencional Logan, en un sentido contrario al convencional Cozzi, afirmó que en muchas ocasiones diversos temas se han pasado por alto en las legislaciones al pensar que eran obviedades. El Ministerio Público tiene una responsabilidad social. Es absolutamente necesario que se consigne.

Indicación N° 89 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para reemplazar el artículo 13 del texto sistematizado, por un nuevo artículo del siguiente tenor:

"Artículo 10.- Del Comité del Ministerio Público. Existirá un Comité del Ministerio Público, compuesto por el Presidente del Consejo Superior y los fiscales regionales.

El Comité deberá fijar la política de persecución penal y los criterios de actuación para el cumplimiento de dichos objetivos, debiendo siempre velar por la transparencia y objetividad, resguardando los intereses de la sociedad y el respeto de los derechos humanos."

Sometida a votación fue **aprobada (14-4-1)**.

Además, se presentaron las siguientes indicaciones:

Indicación N° 90 de CC Logan para sustituir, el artículo 13 por otro del siguiente tenor:

"Artículo 13.- Del Consejo General del Ministerio Público. Existirá un Consejo General del Ministerio Público, presidido por el Fiscal Nacional y compuesto además por los fiscales regionales y los fiscales supra territoriales especializados. Este Consejo General, en el mes de diciembre de cada año, y habiendo previamente escuchado a los representantes de las organizaciones civiles que lo soliciten, deberá fijar los objetivos anuales en materia de persecución penal y los criterios de actuación para el cumplimiento de dichos objetivos, pudiendo establecer orientaciones

diferenciadas en las diversas unidades administrativas atendido la naturaleza de los distintos delitos, debiendo siempre velar por la transparencia y objetividad, resguardando los intereses de la sociedad y el respeto de los derechos humanos. Las Asociaciones de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público tendrán siempre derecho a ser oídos por el Consejo General.”

Indicación N° 91 CC Harboe para sustituir en el artículo 13 la frase “Presidente del Consejo Superior” por “Fiscal Nacional”.

Las **indicaciones N° 90 y 91** se entienden **rechazadas** por incompatibles.

Al artículo 14 que pasa a ser 11.-

“Artículo 14.- De los fiscales del Ministerio Público. Existirán fiscales del Ministerio Público a cargo de ejercer las atribuciones que la Constitución y las leyes le entregan a la institución, quienes serán designados por el Consejo Superior del Ministerio Público, a propuesta en terna del fiscal regional o supra territorial especializado respectivo, la que deberá formarse por concurso público de antecedentes y oposición.

Los postulantes a fiscal deberán poseer las calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio, tener el título de abogado y haber aprobado satisfactoriamente un proceso de formación especializado impartido por la Escuela de formación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, institución cuyas atribuciones y organización serán establecidas por ley.

Existirán fiscales asistentes que se encargaran de apoyar la labor de los fiscales adjuntos, quienes además los subrogaran. Los requisitos de nombramiento y funciones de los fiscales asistentes serán determinadas por ley.

Los fiscales adjuntos, fiscales asistentes y funcionarios tendrán un sistema de promoción y ascenso que garantice una carrera funcionaria que fomente la excelencia técnica y la acumulación de experiencia profesional. Los fiscales tendrán, además, la misma inmunidad funcional e intangibilidad remuneratoria establecida para los jueces.”

El convencional Daza se refirió a la importancia de la autonomía de los Fiscales adjuntos. Hoy está en la Ley Orgánica pero no se respeta del todo. El convencional Cruz explicó que se intenta mantener la nomenclatura, además de que la autonomía es desde una independencia externa e interna, pero esta última, morigerada al estar hablando de una institución jerárquica.

El convencional Cozzi afirmó que la redacción puede conducir a equívocos en el marco de la organización jerarquizada de la institución, donde hay una política criminal que existe para cumplirse. En ese contexto, la indicación podría llevar a la total y absoluta del Fiscal en su labor. El convencional Viera consultó al convencional Cozzi cómo imagina una autonomía que no implique absoluta libertad. El convencional Cozzi señaló que la autonomía podría estar dirigida al ejercicio de la acción penal, no a su labor.

El convencional Logan señaló que la autonomía consignada en la indicación N° 92 contiene límites, los cuales son la Constitución y las leyes. El convencional Gutiérrez señaló que autonomía es respecto a la labor en el caso determinado, permitiendo que actúe de acuerdo a su criterio sin recibir pauteos por fuera de la institución.

Indicación N° 92 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para reemplazar el artículo 14, por un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo 11.- Fiscales Adjuntos del Ministerio Público. Existirán fiscales adjuntos del Ministerio Público quienes ejercerán su labor autónomamente en los casos específicos que se les asignen, conforme a los límites establecidos en la Constitución y las leyes.”.

Sometida a votación fue **aprobada (14-4-1)**.

Indicación N° 93 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 14 por el siguiente:

“Artículo 14.- De los fiscales del Ministerio Público. Existirán fiscales adjuntos al Ministerio Público a cargo de ejercer las atribuciones que la Constitución y las leyes le entregan a la institución, quienes serán designados por el Consejo Superior del Ministerio Público, a propuesta en terna del fiscal regional o supra territorial especializado respectivo, la que deberá formarse por concurso público de antecedentes y oposición.

Los postulantes a fiscal adjunto deberán poseer las calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio, tener el título de abogado y haber aprobado satisfactoriamente un proceso de formación especializado impartido por la Escuela de formación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, institución cuyas atribuciones y organización serán establecidas por ley.

Existirán fiscales asistentes que se encargaran de apoyar la labor de los fiscales adjuntos, quienes además los subrogaran. Los requisitos de nombramiento y funciones de los fiscales asistentes serán determinadas por ley.

Los fiscales adjuntos, fiscales asistentes y funcionarios tendrán un sistema de promoción y ascenso que garantice una carrera funcionaria que fomente la excelencia técnica y la acumulación de experiencia profesional. Los fiscales tendrán, inmunidad funcional e intangibilidad remuneratoria.

Los fiscales adjuntos, fiscales asistentes y funcionarios tendrán derecho a ejercer las libertades de expresión y de asociatividad sin mas límite que aquellos legalmente establecidos para todos los funcionarios públicos.

Cada año el Consejo Superior propondrá al Poder Legislativo la dotación de fiscales y funcionarios y el presupuesto necesario para cumplir con las funciones establecidas por esta Constitución. Al momento de discutir la ley de presupuesto y previo a resolver lo relativo al Ministerio Público, se deberá oír al Fiscal Nacional, a las asociaciones de fiscales y funcionarios y a la sociedad civil.”

Indicación N° 94 de Harboe para sustituir en el artículo 14 la frase “Consejo Superior del Ministerio Público” por “fiscal nacional”

Indicación N° 95 de CC Logan para incorporar, en el artículo 14 inciso 1°, la palabra “adjunto” antes de la frase “del Ministerio Público”

Indicación N° 96 de CC Logan para sustituir, en el artículo 14 inciso 1°, la palabra “Consejo Superior” por “Fiscal Nacional”.

Indicación N° 97 de CC Logan para incorporar, en el artículo 14 inciso 2°, la palabra “adjunto” antes de la frase “deberán poseer”.

Indicación N° 98 de CC Logan para eliminar, en el artículo 14 inciso 4° las palabras: “la misma” y “establecida para los jueces”

Indicación N° 99 de CC Logan para incorporar, en el artículo 14 un nuevo inciso 5° del siguiente tenor: “Los fiscales adjuntos, fiscales asistentes y funcionarios tendrán derecho a ejercer las libertades de expresión y de asociatividad sin más límite que aquellos legalmente establecidos para todos los funcionarios públicos.”

Las **indicaciones N° 93 a 99** se entienden **rechazadas** por incompatibles con la ya aprobada.

Al artículo 15, 16 y 17 que se suprimen.-

“Artículo 15.- Equiparación entre fiscales y jueces y juezas. Los y las fiscales tendrán los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones que los jueces y las juezas.”

“Artículo 16.- De la remoción de los consejeros, fiscales regionales y supra territoriales. Los consejeros solo podrán ser removidos por la Corte Constitucional a requerimiento del Presidente de la Republica o de un tercio de los miembros en ejercicio de la Camara baja, previa interpelación, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte Constitucional conocerá del asunto en pleno y en sesión especialmente convocado al efecto y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de los 4/7 de sus miembros en ejercicio. La declaración de remoción se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa que procediere en contra del consejero o fiscal removido.

“Artículo 17.- Inmunidad de los consejeros y fiscales. Los consejeros y fiscales no podrán ser aprehendidos en ejercicio de sus funciones sin orden del tribunal competente, salvo el caso de crimen o simple delito flagrante y solo para ponerlos inmediatamente a disposición del tribunal que debe conocer del asunto en conformidad a la ley.”

Indicación N° 100, 101, 102, 103 y 106 de Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez; Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain; y Logan para eliminar el artículo 15, 16 y 17. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (19-0-0)**.

Además, se presentaron las siguientes indicaciones:

Indicación N° 104 de CC Logan para sustituir el artículo 16, por un nuevo artículo 16 del siguiente tenor:

“Artículo 16.- De la remoción del Fiscal Nacional, fiscales regionales y supra territoriales. El Fiscal Nacional solo podrá ser removido por la Corte Constitucional a requerimiento del Presidente de la Republica o de un tercio de los miembros en ejercicio de la Camara de Representantes, previa interpelación, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte Constitucional conocerá del asunto en pleno y en sesión especialmente convocado al

efecto y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de los 4/7 de sus miembros en ejercicio. La declaración de remoción se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa que procediere en contra del consejero o fiscal removido.

Los fiscales regionales y los fiscales supra territoriales solo podrán ser removidos por la Corte Constitucional a requerimiento del Presidente de la República, del Fiscal Nacional o de la Cámara de Representantes por la mayoría de sus miembros en ejercicio, en casos de negligencia grave o por incumplimiento grave y reiterado de deberes y obligaciones. La Corte Constitucional conocerá del asunto en pleno convocado especialmente al efecto y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de los dos tercios de sus miembros en ejercicio.”

Indicación N° 105 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir en el inciso 2° del artículo 16, la frase “la mayoría” por “los dos tercios”.

Indicación N° 107 de CC Harboe para suprimir del artículo 17 la expresión “los consejeros y”.

Las **indicaciones N° 104, 105 y 107** se entienden **rechazadas** por incompatibles.

Al artículo 18 que pasa a ser 12.-

“Artículo 18.- De la rendición de cuentas. El Presidente del Consejo Superior del Ministerio Público, los fiscales supra territoriales y regionales deberán rendir, anualmente, una cuenta pública de su gestión. En el caso del Presidente del Consejo Superior del Ministerio Público, se rendirá cuenta pública ante la Cámara baja. En el caso de los fiscales regionales, ante la Asamblea Regional respectiva y ante las organizaciones sociales del territorio, convocadas al efecto.”

El convencional Daza explicó que la rendición de cuentas se vincula con el artículo tercero ya acogido, porque el Ministerio Público ejercerá la acción penal en nombre de la sociedad y por ello se justifica la rendición de cuentas. Es importante la transparencia en el Ministerio Público. El convencional Gutiérrez afirmó que esta es una necesidad y celebró que los Fiscales Regionales rindan cuenta a la Asamblea Regional. El convencional Cruz señaló que la indicación se aviene con el tipo de Estado Regional que tendrá el país.

El convencional Logan precisó que la rendición de cuentas es para informar a la ciudadanía lo que se está haciendo. Pero además debe ir con una aprobación de las mismas rendiciones. La indicación N° 110 agrega la rendición ante el Concejo Municipal para poder socializar las cuentas.

Indicación N° 108 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para reemplazar el artículo 18, por un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo 12.- De la rendición de cuentas. El Presidente del Consejo Superior del Ministerio Público y los fiscales regionales deberán rendir, anualmente, una cuenta pública de su gestión. En el caso del Presidente del Consejo Superior, se rendirá la

cuenta ante el Congreso y en el caso de los fiscales regionales, ante la Asamblea Regional.”.

Sometida a votación fue **aprobada (13-2-4)**.

Además, se presentaron las siguientes indicaciones:

Indicación N° 109 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 18, por uno del siguiente tenor:

“Artículo 18.- Quienes ejerzan los cargos de Presidente del Consejo Superior del Ministerio Público, de fiscal supraterritorial, de fiscales regionales y de fiscales jefes comunales deberán rendir anualmente una cuenta pública de su gestión, en la forma determinada en la ley. En el caso de las personas del Fiscal Nacional y fiscales supraterritoriales, rendirán la cuenta pública ante la Cámara de Representantes; los y las fiscales regionales, ante la Asamblea Regional y las organizaciones sociales del territorio, convocadas para tal al efecto y los y las fiscales jefes comunales ante el Concejo Municipal respectivo y organizaciones comunitarias”.

Indicación N° 110 de CC Logan para sustituir el artículo 18 por uno del siguiente tenor:

“Artículo 18. De la rendición de cuentas. Quienes ejerzan los cargos de Fiscal Nacional, de fiscal supraterritorial, de fiscales regionales y de fiscales jefes comunales deberán rendir anualmente una cuenta pública de su gestión, en la forma determinada en la ley. El Fiscal Nacional y fiscales supraterritoriales, rendirán la cuenta pública ante la Cámara de Representantes; los y las fiscales regionales, ante la Asamblea Regional y las organizaciones sociales del territorio, convocadas para tal al efecto y los y las fiscales jefes comunales ante el Concejo Municipal respectivo y organizaciones comunitarias.

Cada año el Consejo General del Ministerio Público propondrá al Poder Legislativo la dotación de fiscales y funcionarios y el presupuesto necesario para cumplir con las funciones establecidas por esta Constitución. Al momento de discutir la ley de presupuesto y previo a resolver lo relativo al Ministerio Público, se deberá oír al Fiscal Nacional, a las asociaciones de fiscales y funcionarios y a la sociedad civil.”

Indicación N° 111 de CC Harboe para sustituir en el artículo 18 la frase “El Presidente del Consejo Superior” por “Fiscal Nacional”.

Las **indicaciones N° 109, 110 y 111** se entienden **rechazadas** por incompatibles.

Al título “§ Garantías procesales y asistencia jurídica” que pasa a ser “§ Del derecho a un proceso con todas las garantías y de la asistencia jurídica”.-

Indicación N° 112 de CC Daza para reemplazar el título “§ Garantías procesales y asistencia jurídica” por uno nuevo del siguiente tenor: “§ Del derecho a un proceso con todas las garantías y de la asistencia jurídica”.

Sometida a votación fue **aprobada (15-1-3)**.

Al artículo 19 que pasa a ser 13.-

“Artículo 19.- Del Derecho a un Proceso con todas las Garantías. Toda persona tiene derecho a un proceso en que se salvaguarden las garantías mínimas que se señalan a continuación, sin perjuicio de las restantes garantías procesales que se puedan establecer en función de lo prescrito en esta Constitución, las leyes y en los tratados internacionales y supranacionales que se encuentren vigentes y hayan sido ratificados por Chile.

Toda persona tiene derecho a ser oída y juzgada por un tribunal ordinario preestablecido, imparcial e independiente; a que los procesos o juicios se resuelvan en un plazo razonable; a que las resoluciones y sentencias judiciales que se dicten se encuentren lo suficientemente motivadas y; a que lo resuelto pueda ser revisado por un tribunal superior.

Los procesos serán orales y públicos, salvo que exista un legítimo interés superior en su reserva; nadie podrá ser considerado o tratado como culpable mientras no exista una sentencia ejecutoriada que así lo declare; ninguna persona estará obligada a declarar contra sí misma en una causa penal; se garantiza la contradictoriedad de los procesos; la igualdad de oportunidades de actuación procesal entre las partes; el derecho a la presentación y rendición de pruebas; la defensa o representación letrada gratuita, sin perjuicio del derecho de toda persona de elegir una representación judicial o designar un defensor de confianza. En las causas penales se le asegurará a los defensores el contar con un tiempo prudencial para preparar esa defensa y nadie podrá ser condenado más de una vez con causa en el mismo hecho por leyes penales generales.

Las garantías procesales mínimas precedentemente consignadas son aplicables, en lo que sea pertinente, a toda clase de procedimientos ya sea judiciales o administrativos.”

El convencional Logan manifestó que hay una diferencia entre los derechos y las garantías de los derechos. El convencional Daza explicó que la indicación N° 113 establece un derecho a acceder al proceso con todas las garantías. Esto es coincidente con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El convencional Cozzi se manifestó a favor de la indicación N° 113 como texto base. Además, precisó que el debido proceso es una herramienta para los litigantes. En ese sentido, advirtió que el derecho a un proceso razonable es un estándar más bajo que “racional”. También advirtió que se indica que el “proceso” será regulado por ley, siendo que es el “procedimiento” el regulado por ley. Indicó que la esencia del debido proceso es resguardar ciertos formalismos del procedimiento.

Indicación N° 113 de CC Daza para reemplazar el artículo 19, por un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo 19.- Derecho a un proceso con todas las garantías. Toda persona tendrá derecho a un proceso razonable y justo, adecuado a sus fines, ante un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley.

El proceso sólo podrá ser regulado por la ley.

Toda persona tiene derecho a un proceso en que se salvaguarden las garantías mínimas que se señalan en esta Constitución, sin perjuicio de las restantes garantías procesales que se establezcan en la ley y en los tratados internacionales que se encuentren vigentes y hayan sido ratificados por Chile.

Toda persona tiene derecho a ser oída y juzgada en procesos o juicios que se resuelvan en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, en igualdad de condiciones y bilateralidad de la audiencia. Las resoluciones y sentencias judiciales

que serán suficientemente motivadas, asegurándose el acceso a un recurso efectivo contra lo resuelto ante un tribunal de mayor grado jurisdiccional que determine la ley.

Los actos procesales deben estar desprovistos de formalismos innecesarios. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades no esenciales.

Toda persona tendrá derecho a la defensa en la forma que la ley señale, sin que ninguna autoridad o individuo pueda impedirlo, restringirlo o perturbarlo indebidamente. En el ejercicio de este derecho se deberá garantizar la comunicación libre y privada con quien ejerza su defensa jurídica.

La Constitución asegura a toda persona el derecho a ser asistida gratuitamente por un traductor, intérprete o facilitador, con el fin de que puedan acceder a toda la información e intervenir en el proceso, considerando todos los ajustes de procedimiento necesarios y adecuados a su persona.”

Sometida a votación fue **aprobada (16-0-3)**.

Además, se presentaron las siguientes indicaciones:

Indicación N° 114 de CC Harboe para sustituir en el artículo 19 el inciso segundo por uno del siguiente tenor “Toda persona tendrá el derecho a ser oída, con las debidas garantías, dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, por un tribunal independiente e imparcial, previamente establecido por ley, para la resolución de sus conflictos jurídicos. En consecuencia, nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que se hallare establecido por la ley con anterioridad a la perpetración del hecho fundante de la pretensión ejercida.”

Indicación N° 115 de CC Harboe para sustituir en el artículo 19 el inciso tercero por uno del siguiente tenor “Toda sentencia emanada de un tribunal deberá fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Los actos del proceso serán públicos, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley para proteger la intimidad, la privacidad, el honor o la seguridad de cualquier persona que debiere tomar parte en el juicio, para evitar la divulgación de un secreto protegido por la ley o para velar por la moral, el orden público o la seguridad nacional en una sociedad democrática. Cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia, los tribunales podrán decretar la reserva de determinados actos del proceso en la medida que ello sea estrictamente necesario.”

Las **indicaciones N° 114 y 115** se entienden **rechazadas** por incompatibles.

Al artículo 20 que se suprime.-

“Artículo 20.- Derecho a la tutela judicial efectiva. La Constitución asegura a todas las personas la igual protección en el ejercicio de sus derechos e intereses y la tutela judicial por parte del Estado.

Toda persona tiene derecho al acceso a la justicia y a ser oída por los órganos que ejercen jurisdicción. La ley podrá establecer requisitos y presupuestos razonables para su ejercicio.

La ley establecerá los procedimientos adecuados y las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento efectivo y oportuno de toda resolución judicial.”

El convencional Daza explicó que su indicación suprime la tutela judicial efectiva porque ya fue aprobada por el pleno.

Indicación N° 116 CC Daza para suprimir el artículo 20 del texto sistematizado, sobre “Derecho a la tutela judicial efectiva”. Sometida a votación fue **aprobada (17-1-1)**.

Al artículo 21 que pasa a ser 14.-

“Artículo 21.- Derecho a la asistencia jurídica. La Constitución asegura a todas las personas la asistencia jurídica en la forma que establece la ley. Ninguna autoridad, individuo o grupo podrá impedirla o restringirla si hubiera sido formalmente requerida.

El Estado asegura la asesoría jurídica gratuita e íntegra por parte de abogadas y abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, a toda persona que no pueda obtenerla por sí misma. La ley establecerá las vías para acreditar la insuficiencia de recursos económicos.”

La convencional Bown sostuvo que en otra oportunidad realizó una indicación en un sentido similar que debiera verse en el marco de este artículo. Sobre esta indicación, el convencional Cozzi señaló que al asumir el patrocinio un abogado, ya no se puede hablar de solamente una asistencia jurídica. Además, ya se aprobaron los centros de justicia comunitario que poseen una orientación, por lo que levantó la alarma para que no se estén duplicando funciones.

El convencional Bravo respondió que él entiende el concepto de asesoría de manera amplia, englobando también medidas extrajudiciales, por lo que le parece correcto el término. Los centros ayudarán a derivar a los mecanismos que requiera el solicitante, no siendo ahí mismo donde se le entregará una solución. El convencional Daza también señaló que la asesoría se refiere a una atención íntegra, no limitándose a presentar un patrocinio en una causa como es hoy en día. Los centros serían otra cosa, pretendiendo ser instancias de diálogo para precaver conflictos, con un carácter más bien preventivo. Sobre la pregunta de la convencional Bown de si con esto se están eliminando los Centros de Asistencia Judicial, el convencional responde que con esta norma no se está eliminando ningún órgano y que será la ley la que tendrá que resolver cómo se resuelve esta asesoría.

Indicación N° 117 del CC Daza para reemplazar el artículo 21 del texto sistematizado, por un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo 21.- Derecho a la asesoría jurídica gratuita. Toda persona tiene derecho a la asesoría jurídica gratuita. El Estado asegura la asesoría jurídica gratuita e íntegra por parte de abogadas y abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, a toda persona que no pueda obtenerla por sí misma. La ley establecerá los medios para concretar este derecho.”

Sometida a votación fue **aprobada (18-0-0)**.

Indicación N° 118 del CC Harboe para sustituir el artículo 21 por uno del siguiente tenor: “Artículo 21.-Derecho a la defensa jurídica. Toda persona tendrá derecho a la defensa jurídica en la forma que la ley señale y a comunicarse libre y privadamente con el abogado de su elección, sin que ninguna autoridad o individuo pueda impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos.” Se entiende **rechazada por incompatible** con la indicación N°117 ya aprobada.

En este punto, se acordó por unanimidad de los integrantes de la Comisión deliberar y someter a votación la **indicación N° 144** de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larraín para agregar el siguiente inciso final: “Asimismo, es deber del Estado otorgar asistencia jurídica especializada para la protección del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, especialmente cuando estos han sido sujetos de medidas de protección, procurando crear todas las condiciones necesarias para el resguardo de sus derechos”.

Sometida a votación fue **aprobada (18-0-0)**.

Artículo nuevo que se rechaza.-

La indicación N° 119 del CC Harboe para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo XXX. Derecho a ser oído y a la prueba. De conformidad con las normas legales de procedimiento aplicables, toda persona tendrá derecho a formular las pretensiones, excepciones, alegaciones y defensas que estimare oportunas, a rendir las pruebas relevantes para acreditar sus presentaciones y a ejercer la impugnación de la sentencia en la forma y oportunidades establecidas en la ley.” Del mismo modo, toda persona tendrá derecho para conocer oportunamente las pretensiones, excepciones y pruebas hechas valer en su contra, así como para examinarlas, contradecirlas y objetarlas, debiendo contar con un tiempo adecuado para la preparación de su defensa.

En consecuencia, toda persona contará con el derecho interrogar a quienes comparezcan a prestar testimonio y de obtener la comparecencia de partes, testigos, peritos u otras personas que puedan aportar antecedentes respecto de los hechos, de conformidad con las normas legales aplicables.”

Sobre esta indicación, el convencional Bravo señaló que se trataría de un artículo muy extenso y que trata materias ya aprobadas, por lo que votará en contra. El convencional Cozzi al contrario consideró que es un buen texto base, con derechos necesarios, a pesar de que puede perfeccionarse. El convencional Logan comentó que aquí se puede observar la diferencia entre un derecho y una garantía.

Sometida a votación fue **rechazada (6-12-1)**.

Artículo nuevo que se rechaza.-

Indicación N° 120 del CC Harboe para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo XXX. Derecho a intérprete o traductor. Las personas que no comprendan o hablen el idioma empleado en el tribunal tendrán el derecho a ser asistidas por un traductor o intérprete para intervenir en el proceso, el cual será gratuito si carecieren de los medios suficientes para pagarlos.”

Sobre esta indicación, el convencional Daza señaló que según lo aprobado en la indicación N° 113, ya estaría contenida la idea base del presente artículo que se desea agregar. El convencional Viera señaló que parte de lo que se votará el día jueves también regula lo propuesto por esta indicación.

Sometida a votación fue **rechazada (7-12-0)**.

Artículo nuevo que se rechaza.-

Indicación N° 121 Del CC Harboe para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo XXX. Derecho a una resolución fundada y a la impugnación. Toda resolución emanada de un tribunal deberá ser fundada, con excepción de aquellas que se pronunciaren sobre cuestiones de mero trámite. La fundamentación expresará sucintamente, pero con precisión, las razones de hecho y de derecho que justificaren las decisiones adoptadas. Las sentencias que resuelvan total o parcialmente el conflicto jurídico sometido a la decisión del tribunal, así como las resoluciones que pongan término al procedimiento o hagan imposible su continuación serán susceptibles de ser impugnadas mediante los recursos establecidos en la ley para ser revisadas por un tribunal distinto, sin perjuicio de las excepciones legales establecidas sobre la base de criterios de razonabilidad y proporcionalidad para la persecución de

finés legítimos, para velar por la uniformidad de la jurisprudencia o para la promoción y fortalecimiento de otros derechos y valores.”

Sobre esta indicación, el convencional Daza volvió a mencionar que la aprobación de la anterior indicación N°113 ya contiene la idea base de lo propuesto por esta indicación.

Sometida a votación fue **rechazada (4-12-3)**.

Epígrafe nuevo que se rechaza.-

Indicación N° 122 Del CC Harboe para agregar un nuevo epígrafe: “Garantías del Proceso Penal”.

Sobre esta indicación, el convencional Daza señaló que no era necesario un nuevo epígrafe, dado que ya tenían un epígrafe aprobado anteriormente que engloba lo que se propone en esta indicación.

Sometida a votación fue **rechazada (1-16-1)**.

Artículo nuevo que pasa a ser 15.-

Indicación N° 123 Del CC Daza Para agregar a continuación del artículo 21, un nuevo artículo 21 bis del siguiente tenor:

“Artículo 21 bis.- Garantías procesales penales. Toda persona imputada por un delito tiene derecho a las siguientes garantías mínimas:

a) Ser presumido como inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. No se podrá presumir de derecho la responsabilidad penal.

b) A ser informada sin demora, en una lengua o idioma que comprenda y en forma detallada de sus derechos, de la naturaleza y causas de la investigación seguida contra ella y de la acusación formulada en su contra.

c) A estar presente en el juicio y a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección. Tendrá derecho a ser asistida por un defensor proporcionado por el Estado, si no pudiere defenderse por sí misma, el cual será gratuito si carece de los medios suficientes para pagarlo. El imputado tendrá derecho a ser defendido por un letrado desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra.

d) Formular las pretensiones, excepciones, alegaciones y defensas que estime oportunas. e) A rendir las pruebas y contrastar efectivamente aquellas que le perjudiquen.

f) A guardar silencio o, en caso de consentir en prestar declaración, no ser obligada a declarar contra sí misma ni a reconocer su culpabilidad. La declaración o reconocimiento de la persona imputada solamente serán válidas si son hechas sin coacción de ninguna naturaleza y en presencia de una abogada o abogado que haya asumido su defensa. Tampoco podrán ser obligados a declarar en su contra sus ascendientes, descendientes, cónyuge, conviviente civil, y demás personas que señale la ley. El ejercicio de este derecho no ocasionará ninguna consecuencia legal adversa.

g) A impugnar de la sentencia en la forma y oportunidades establecidas en la ley, mediante un recurso accesible y eficaz.

h) La persona condenada, absuelta o sobreseída definitivamente por sentencia ejecutoriada, no podrá ser sometida a un nuevo procedimiento, investigación o persecución penal por el mismo hecho.

i) Queda prohibido todo método de investigación o de interrogación que menoscabe o coarte la libertad del imputado para declarar. En consecuencia, no podrá ser sometido a ninguna clase de coacción o amenaza.

j) Las sanciones que se apliquen deberán ser siempre proporcionales a la infracción cometida. Estará prohibida la aplicación de sanciones corporales, la pena de muerte o aquellas que establezcan una privación de libertad indefinida.

k) No podrá imponerse la pena de confiscación de bienes, sin perjuicio del comiso en los casos establecidos por las leyes. El comiso de ganancias no será considerado una pena. Las garantías procesales mínimas precedentemente consignadas son aplicables, en lo que sea pertinente, a toda clase de procedimientos ya sea judiciales o administrativos.”

Sobre esta indicación, el convencional Daza comentó que un catálogo específico de garantías procesales es algo muy relevante, incluyendo garantías tales como la prohibición de doble persecución penal, derecho al silencio, entre otras. Invita a votar esta indicación de manera positiva, esperando futuros insumos para perfeccionar el artículo.

Sometida a votación fue **aprobada (14-2-3)**.

Artículo nuevo que pasa ser 16.-

Indicación N° 124 de CC Daza para agregar a continuación del artículo 21 bis señalado en la indicación anterior, otro nuevo artículo 21 ter del siguiente tenor:

“Artículo 21 ter.- Del principio de legalidad de los delitos y las penas. Ninguna persona podrá ser perseguida, castigada penalmente u objeto de una medida de seguridad penal, sino en virtud de una ley propiamente tal que haya entrado en vigor con anterioridad a la perpetración del hecho, salvo que posteriormente entre en vigencia una nueva ley favorable para el imputado.

La ley no podrá castigar ningún hecho sin que la conducta que constituye su núcleo esté expresa y determinadamente contemplada en ella.”

La convencional Royo invitó a votar a favor por lo fundamental del principio de legalidad en esta materia. El convencional Logan manifestó que también votará a favor, a pesar de considerar que la redacción del artículo podría mejorar.

El convencional Cozzi señaló que hay acuerdo en que estos principios sean recogidos en la Constitución, pero no le deja contento la redacción del inciso segundo, llamando a recoger la redacción actual de la constitución en lo referido al principio de tipicidad. El convencional Logan señaló que es de interés que las leyes no sean completadas por normas legales de rango inferior a la ley. El convencional Cruz señaló que hay delitos que son complementados por reglamentos, por la dificultad de regularlo todo en la ley, como en el caso de la ley de drogas.

Sometida a votación fue **aprobada (14-0-5)**.

Artículo nuevo que se rechaza.-

Indicación N° 125 de CC Harboe para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo XXX. Presunción de inocencia y derechos del imputado. Toda persona acusada de delito penal tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley, en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Por tanto, ninguna persona será considerada culpable de un delito penal ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme.

La información sobre sanciones penales o administrativas sólo podrá ser tratada por un organismo público, dentro de la órbita de sus competencias. Esta información sólo podrá ser comunicada a otro organismo público que la requiera, dentro de la órbita de sus competencias.”

El convencional Woldarsky manifestó su votación en contra por la temática repetida de las indicaciones propuestas. El convencional Logan comentó que la mayoría de las indicaciones hacen eco del catalogo de los derechos del debido proceso, pero no todas las indicaciones repiten, sino que algunas señalan la implementación y conveniencia del uso de las tecnologías y protección de datos personales que serían muy favorables a la propuesta de constitución. La convencional Royo señaló que muchas ya se encuentran en el Código Procesal Penal, por lo que no tiene mucho sentido constitucionalizarla. Sobre lo señalado por el convencional Logan, es importante resguardar el principio de inmediación, por lo que no todos los juicios o rendición de prueba pueden ser garantizados por las tecnologías.

Sometida a votación fue **rechazada (3-13-3)**.

Artículo nuevo que se rechaza.-

Indicación N° 126 del CC Harboe para agregar nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo XXX. Tecnología en la administración de justicia. Una ley establecerá las condiciones de aplicación de tecnologías de automatización en la administración de justicia. En todo caso, ninguna pena que afecte derechos fundamentales podrá ser impuesta a través de decisiones adoptadas exclusivamente a través de sistemas de decisiones automatizadas.”

Sometida a votación fue **rechazada (2-14-3)**.

Artículo nuevo que se rechaza.-

Indicación N° 127 del CC Harboe para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo XXX. Protección de datos personales. La información sobre sanciones penales o administrativas sólo podrá ser tratada por un organismo público, dentro de la órbita de sus competencias. Esta información sólo podrá ser comunicada a otro organismo público que la requiera, dentro de la órbita de sus competencias.”

Sometida a votación fue **rechazada (1-17-1)**.

Artículo nuevo que se rechaza.-

Indicación N° 128 del CC Harboe para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo XXX. Derecho a guardar silencio. Toda persona imputada por un delito penal tiene derecho a guardar silencio. El ejercicio de este derecho no le ocasionará ninguna consecuencia legal adversa; sin embargo, si renuncia a él, todo lo que manifieste podrá ser usado en su contra.”

Sometida a votación fue **rechazada (3-15-1)**.

Artículo nuevo que se rechaza.-

Indicación N° 129 del CC Harboe para agregar un artículo del siguiente tenor:

“Artículo XXX. Derecho a la no autoincriminación. Toda persona imputada por un delito penal tendrá el derecho a no ser obligada a declarar contra sí misma, ni a declararse culpable, así como tendrá el derecho a negarse a responder aquellas preguntas cuya respuesta pudiere acarrearle un peligro de persecución penal a sí misma o a su cónyuge, conviviente, ascendientes, descendientes, pupilos, guardadores, adoptantes, adoptados, parientes colaterales hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad y demás personas que, según los casos y circunstancias, señale la ley.”

Sometida a votación fue **rechazada (2-14-3)**.

Artículo nuevo que se rechaza.-

La indicación N° 130 del CC Harboe para agregar un artículo del siguiente tenor:

“Artículo XXX. Métodos prohibidos de interrogación. Queda absolutamente prohibido todo método de investigación o de interrogación que menoscabe o coarte la libertad del imputado para declarar. En consecuencia, no podrá ser sometido a ninguna clase de coacción, amenaza o promesa. Sólo se admitirá la promesa de una ventaja que estuviere expresamente prevista en la ley penal o procesal penal. Se prohíbe, en consecuencia, todo método que afecte la memoria o la capacidad de comprensión y de dirección de los actos del imputado, en especial cualquier forma de maltrato, amenaza, violencia corporal o psíquica, tortura, engaño, o la administración de psicofármacos y la hipnosis. Estas prohibiciones rigen aun para el evento de que el imputado consintiere en la utilización de alguno de los métodos vedados.”

Sometida a votación fue **rechazada (3-13-3)**.

Artículo nuevo que se rechaza.-

La indicación N° 131 del CC Harboe para agregar un artículo del siguiente tenor:

“Artículo XXX. Derecho a conocer la acusación. Toda persona perseguida penalmente tendrá derecho a ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la acusación formulada en su contra.”

Sometida a votación fue **rechazada (3-13-3)**.

Artículo nuevo que se rechaza.-

Indicación N° 132 del CC Harboe para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo XXX. Derecho a la defensa penal. Toda persona imputada de delito penal tiene el derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley. Todo imputado tendrá derecho a ser informado, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre un defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo. El imputado tendrá derecho a ser defendido por un letrado desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra. Las facultades, derechos y garantías que la Constitución Política de la República, el Código Procesal Penal y otras leyes reconocen al imputado, podrán hacerse valer por la persona a quien se atribuyere participación en un hecho punible desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra y hasta la completa ejecución de la sentencia. Para este efecto, se entenderá por primera actuación del procedimiento cualquiera diligencia o gestión, sea de investigación, de carácter cautelar o de otra especie, que se realizare por o ante un tribunal con competencia en lo criminal, el ministerio público o la policía, en la que se atribuyere a una persona responsabilidad en un hecho punible.”

Sometida a votación fue **rechazada (5-12-2)**.

Artículo nuevo que se rechaza.-

Indicación N° 133 del CC Harboe para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo XXX. Derecho al juicio previo. Ninguna persona podrá ser condenada o penada, ni sometida a una medida de seguridad por hechos que revisten el carácter de delitos penales, sino en virtud de una sentencia fundada, dictada por un tribunal independiente e imparcial. Toda persona tendrá derecho a hallarse presente durante el juicio penal, sin perjuicio de las normas legales que regulen el orden, el decoro y la seguridad de las personas que participen del procedimiento penal.”

Sometida a votación fue **rechazada (4-13-2)**.

Artículo nuevo que se rechaza.-

Indicación N° 134 del CC Harboe para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo XXX. Legalidad de las medidas privativas o restrictivas de libertad. No se podrá citar, arrestar, detener, someter a prisión preventiva ni aplicar cualquier otra forma de privación o restricción de libertad a persona alguna, sino en los casos y en las formas señaladas por la Constitución y las leyes. Las disposiciones legales que autorizan la restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o del ejercicio de alguna de sus facultades serán interpretadas restrictivamente y no se podrán aplicar por analogía.”

Sometida a votación fue **rechazada (3-13-3)**.

Artículo nuevo que se rechaza.-

Indicación N° 135 del CC Harboe para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor

“Artículo XXX. Principio de legalidad de las penas y de tipicidad de los delitos penales. Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella.”

Sometida a votación fue **rechazada (3-13-2)**.

Artículo nuevo que se rechaza.-

Indicación N° 136 del CC Harboe para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo XXX. Jurisdiccionalidad. Nadie puede ser arrestado, detenido o privado de libertad sino por orden de un tribunal y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante, con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes. Con todo, toda persona tendrá derecho a que se le exprese específica y claramente el motivo de su privación de libertad.”

Sometida a votación fue **rechazada (3-13-3)**.

Artículo nuevo que se rechaza.-

Indicación N° 137 del CC Harboe para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo XXX. Privación en lugares destinados al efecto. Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva, preso o privado de libertad, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto. Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso, sin dejar constancia de la orden judicial correspondiente en un registro que será público.”

Sometida a votación fue **rechazada (4-13-2)**.

Artículo nuevo que se rechaza.-

Indicación N° 138 del CC Harboe para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo XXX. Derecho a comunicar la privación de libertad. Ninguna incomunicación puede impedir que el funcionario encargado del lugar de privación de libertad visite al arrestado o detenido, procesado o preso, que se encuentre en tal. Este funcionario está obligado, siempre que el arrestado, detenido o privado de libertad lo requiera, a transmitir al juez competente la copia de la orden de detención, o a reclamar para que se le dé dicha copia, o a dar él mismo un certificado de hallarse detenido aquel individuo, si al tiempo de su detención se hubiere omitido este requisito. La persona privada de libertad tendrá derecho a que el encargado de la guardia del recinto al cual fuere conducido informe, en su presencia, al familiar o a la persona que le indicare, que ha sido detenido, preso o privado de libertad, el motivo de la detención o prisión y el lugar donde se encontrare. La persona imputada tendrá derecho a entrevistarse privadamente con su abogado de acuerdo al régimen del establecimiento de detención o privación de libertad, el que sólo contemplará las restricciones necesarias para el mantenimiento del orden y la seguridad del recinto.”

Sometida a votación fue **rechazada (4-13-2)**.

Artículo nuevo que se rechaza.-

Indicación N° 139 del CC Harboe para agregar un nuevo artículo:

“Artículo XXX. Amparo. Toda persona privada de libertad tendrá derecho a ser conducida sin demora ante un juez de garantía o ante el tribunal que señale la ley, con el objeto de que examine la legalidad de su privación de libertad y, en todo caso, para que examine las condiciones en que se encontrare, constituyéndose, si fuere necesario, en el lugar en que ella estuviere. El juez podrá ordenar la libertad del afectado o adoptar las medidas que fueren procedentes.

El abogado de la persona privada de libertad, sus parientes o cualquier persona en su nombre podrán siempre ocurrir ante el juez que conociere del caso o aquél del lugar donde aquélla se encontrare, para solicitar que ordene que sea conducida a su presencia y se ejerzan las facultades señaladas.”

Sometida a votación fue **rechazada (2-16-1)**.

Artículo nuevo que se rechaza.-

Indicación N° 140 del CC Harboe para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo XXX. Derecho al recurso contra la sentencia condenatoria. Toda persona condenada por un delito penal, incluyendo aquella cuya condena se hubiere impuesto en virtud de un recurso interpuesto en contra de una decisión absolutoria, tendrá el derecho para impugnar la sentencia condenatoria y la pena que se le haya impuesto ante un tribunal distinto mediante un recurso ordinario, accesible y eficaz que permita una revisión integral de las cuestiones de hecho y de derecho. El legislador podrá establecer recursos distintos de la apelación para dichos efectos.”

Sometida a votación fue **rechazada (3-15-1)**.

Artículo nuevo que se rechaza.-

Indicación N° 141 del CC Harboe para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo XXX. Derecho a una única persecución. La persona condenada, absuelta o sobreseída definitivamente por sentencia ejecutoriada, no podrá ser sometida a un nuevo procedimiento, investigación o persecución penal por el mismo hecho.”

Se somete a votación la indicación, resultando **rechazada (3-14-1)**.

Artículo nuevo que se rechaza.-

Indicación N° 142 del CC Harboe para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo XXX. Derecho a la indemnización por error judicial. Toda persona que hubiere sido condenada en cualquier instancia de un proceso penal por una sentencia errónea o arbitraria y luego hubiere sido absuelta o sobreseída tendrá derecho a obtener reparación por los perjuicios efectivamente sufridos. Asimismo, procede este derecho respecto de toda persona que haya sido objeto de una privación de libertad ilegal o arbitraria, así como de aquellas personas sometidas a prisión preventiva y que no fueren condenadas por sentencia firme en dicho proceso, en la medida que no hubieren contribuido a su uso con su comportamiento indebido o negligente.”

Sometida a votación fue **rechazada (2-14-2)**.

Al artículo 22 que pasa a ser 17.-

“Artículo 22.- Sistema Nacional de Defensa Jurídica Integral. Un organismo autónomo, de carácter técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Sistema Nacional de Defensa Jurídica Integral, y con la finalidad de contribuir al acceso a la justicia, tendrá por función prestar asesoría, defensa y representación jurídica letrada, gratuita y de calidad, a las personas que no puedan procurársela por sí mismas, o se encuentren en situación de vulnerabilidad, y brindar apoyo profesional de tipo psicológico y social en los casos que corresponda.

El Sistema Nacional de Defensa Jurídica Integral se organizará de manera paritaria, descentralizada, con equidad territorial, perspectiva de género, perspectiva intercultural y pertinencia cultural, y estará estructurado por las áreas de atención que establezca su ley, la cual deberá considerar a lo menos, áreas de asuntos civiles y de consumo, de defensa laboral, de asuntos de las familias, de contencioso administrativo, de derechos humanos, de medio ambiente y de defensa de víctimas penales.

En lo demás, la composición, organización, funciones y atribuciones del Sistema Nacional de Defensa Jurídica Integral será determinada por la ley.”

El convencional Bravo señaló que esta indicación pretende hacer algunos ajustes, tales como un cambio de nombre al organismo, el cual pretende ir más allá de la actual Corporación de Asistencia Judicial entregando una asesoría multidisciplinaria y siendo un órgano litigador continuo. La convencional Villena complementó diciendo que es necesario mejorar los recursos de este órgano en comparación con la realidad actual. Además, se incluye la defensa de las víctimas penales, por lo que invitó a apoyar la indicación.

El convencional Cozzi celebró la idea, pero señaló que es importante focalizar los servicios de este organismo, dado que el impacto en el mercado legal podría no ser menor.

El convencional Daza señaló que va a apoyar la indicación, comentando que es necesario coordinar estas labores con las nuevas defensorías que van a nacer con esta propuesta de Constitución. No por existir servicios de excelencia significa que se afectará negativamente al mercado laboral de los abogados que se dedican a estas materias, sino que puede ser todo lo contrario, obligando al sector privado a elevar sus estándares.

La convencional Bown celebra que la defensa de las víctimas penales sea incluida, aunque le habría gustado que fueran los primeros mencionados en la propuesta de artículo.

El convencional Logan se refirió a que esta indicación le da al punto de diferenciar la justicia con el actuar de los tribunales, diferenciando la asesoría, la representación y la defensa, otorgándole dignidad a los ciudadanos. La justicia no se logra en tribunales, es algo mucho más amplio. El convencional Viera y la convencional Royo celebraron la propuesta, pero indicaron que esperan vuelva a la Comisión para perfeccionar el segundo inciso sobre las áreas de competencia.

Indicación N° 143 de CC Bravo y Villena para sustituir el actual artículo 22, por uno nuevo del siguiente tenor:

“Artículo 22.- Servicio Integral de Acceso a la Justicia. Un organismo autónomo, de carácter técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Servicio Integral de Acceso a la Justicia, tendrá por función prestar asesoría, defensa y representación jurídica letrada de calidad, así como también brindar apoyo profesional de tipo psicológico y social en los casos que corresponda.

El Servicio Integral de Acceso a la Justicia estará estructurado por las áreas de atención que establezca su ley, la cual deberá considerar a lo menos, áreas de asuntos civiles y de consumo, de defensa laboral, de asuntos de las familias, de contencioso administrativo, de personas mayores, de derechos humanos, de medio ambiente y de defensa de víctimas penales.

En lo demás, la composición, organización, funciones y atribuciones del Servicio Integral de Acceso a la Justicia será determinada por la ley, considerando criterios de paridad y equidad territorial.”

Sometida a votación fue **aprobada (19-0-0)**.

Al artículo 23 que se suprime.-

“Artículo 23.- Es deber del Estado dar asistencia a las personas que hayan sido víctimas de conductas constitutivas de violencia o delito debiendo satisfacer las necesidades de protección, información, representación judicial y reparación que dichas necesidades les genere.”

No habiendo indicaciones al artículo del texto sistematizado, se sometió a votación el mismo y fue **rechazado (8-11-0)**.

Al epígrafe “§ Defensoría Penal Pública” que pasa a ser “Capítulo [XX].- Defensoría Penal Pública”.-

Indicación N° 145 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para reemplazar el título del subtítulo “§ Defensoría Penal Pública”, por uno nuevo del siguiente tenor: “Capítulo [XX].- Defensoría Penal Pública”.

Sobre esta indicación, el convencional Daza señala que existe una asimetría entre la Defensoría y el Ministerio Público, dado que el primero está bajo la dirección

del gobierno de turno, por lo que constitucionalizar este órgano es uno de los cambios mas relevantes que se harán con esta propuesta de carta constitucional.

Sometida a votación fue **aprobada (15-0-4)**.

Al artículo 24 que pasa a ser 18.-

“Artículo 24.- Defensa Penal Pública. Para garantizar el derecho a defensa penal, existirá un organismo autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico y especializado, denominado Defensoría Penal Pública, cuya composición, organización, funciones y atribuciones serán entregadas a la ley respectiva.

La Defensoría Penal Pública se diferenciará de las demás instituciones de defensa de derechos por su especificidad en el ejercicio de sus funciones, asegurándose su independencia interna y externa, que promuevan una defensa adecuada, oportuna y prestada por funcionarios públicos llamados defensores locales, quienes gozaran de autonomía funcional en el ejercicio de su cargo. Para el nombramiento y destitución de los defensores, se deberán cumplir los mismos requisitos que para los jueces.

Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de la Defensoría Penal Pública y señalará las atribuciones, responsabilidades y normas de funcionamiento y fiscalización de que deberán tener y cumplir los Defensores Penales Públicos, y las normas sobre nombramiento y cese de los cargos superiores de la Institución.”

El convencional Cruz señaló que con la indicación N° 146 se viene a especificar que quien pudiese ser perseguido por hechos que pudiesen ser considerados delitos, van a poder demandar al Estado cuando se constaten violaciones de los derechos humanos, por lo que esta indicación debe ser aprobada.

La convencional Llanquileo llamó a aprobar esta indicación, al constitucionalizarse su autonomía. Es relevante que se haga el contrapeso con respecto al Ministerio Público, logrando la igualdad de condiciones entre los dos organismos. La convencional Royo llamó a votar a favor, para garantizar la autonomía de un organismo que es muy importante para muchas personas. Es valioso dotar a las personas imputadas de dignidad. Es relevante que la defensoría posea autonomía en su presupuesto. El convencional Guitierrez indicó que la Reforma Procesal por la que pasó nuestro país fue coja al no consagrar la autonomía de la Defensoría, lo que se estaría corrigiendo con estos cambios.

El convencional Cozzi comparte en lo medular del inciso primero, pero no con el inciso segundo, dada la atribución de denunciar ante Organismos Internacionales de Derechos Humanos, por cuanto no hay comparación de algo así en otras partes del mundo y da la idea de que el Estado está constantemente violando los derechos humanos, por lo que es un artículo que le causa contradicción.

El convencional Daza señala que el principio de igualdad es el que inspira el inciso segundo, para que una persona que no posea los medios de defensa privada pueda acudir en los mismos términos que podría una persona que sí posea ese acceso. El convencional Woldarsky consideró que la indicación es un aporte, destacando el inciso segundo, dado que lo principal es otorgarles dignidad a las personas. La Defensoría ha hecho un gran trabajo, pero en general las instituciones no han dado el ancho en este aspecto, por lo que invitó a votar a favor.

Indicación N° 146 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para reemplazar el artículo 24, por un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo 24.- De la Defensoría Penal Pública. La Defensoría Penal Pública es un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por función proporcionar defensa penal a los imputados por hechos que pudiesen configurar un delito que deban ser conocidos por los tribunales con competencia en lo penal, desde la primera actuación de la investigación dirigida en su contra y hasta la completa ejecución de la pena que le haya sido impuesta, y que carezcan de defensa letrada.

Estará facultada para denunciar al Estado ante los Organismos Internacionales de Derechos Humanos, cuando en el curso de las investigaciones y procedimientos penales en que intervenga, constate violaciones de derechos fundamentales, en coordinación con otros órganos del Estado.

La ley determinará la organización y atribuciones de la Defensoría Penal Pública, debiendo garantizarse su independencia externa.”.

Sometida a votación fue **aprobada (13-5-1)**.

Al artículo 24 A y 24 B que se suprimen.-

“Artículo 24 A.- De la organización y funciones de la Defensoría Penal Pública. La Defensoría Penal Pública es un organismo autónomo, conformado como persona jurídica de derecho público, que tiene por función proporcionar defensa penal a los imputados por hechos que pudiesen configurar un crimen, simple delito o falta que sea competencia de juzgados de garantía o de un tribunal del juicio oral en lo penal y las respectivas cortes, en su caso, desde la primera actuación de la investigación dirigida en su contra y hasta la completa ejecución de la pena que le haya sido impuesta por una sentencia definitiva condenatoria firme, y que carezcan de abogado o estén imposibilitados de obtener asistencia letrada.

La dirección superior de la Defensoría Penal Pública reside en un Consejo Superior, órgano colegiado, paritario, que designará de entre sus miembros a un presidente y a un director ejecutivo, que serán de su exclusiva confianza.”

“Artículo 24 B.- La Defensoría Penal Pública será un órgano autónomo, profesional y técnico, de carácter especializado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya función será proporcionar defensa penal a los imputados/as o acusados/as de un crimen, simple delito o falta que sea de competencia de un juzgado de garantía o de un tribunal de juicio oral en lo penal y de las respectivas Cortes, en su caso, y que carezcan de abogado, desde el inicio de la investigación o procedimiento penal, hasta la completa ejecución de la pena.

Igualmente, estará facultada para denunciar al Estado ante los Organismos Internacionales de Derechos Humanos, especialmente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando en el curso de las investigaciones y procedimientos penales se constaten graves violaciones de garantías fundamentales, esto, previo examen de mérito, a requerimiento del justiciable o familiares directos, en caso de impedimento del primero. Todos los órganos del Estado y de la Administración Pública deberán colaborar para que el ejercicio de la antedicha potestad, una vez ejercida, se concrete.

Una ley orgánica determinará la organización y atribuciones de la Defensoría Penal Pública, debiendo garantizarse su independencia externa.”

Indicaciones N° 147, 148, 149 y 150 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez; y Harboe para suprimir el artículo 24 A y 24 B. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (15-0-4)**.

Al artículo 25 que pasa a ser 19.-

“Artículo 25.- Es deber de la Defensoría Penal Pública prestar defensa jurídica con pertinencia cultural, debiendo garantizar el acceso a una defensa técnica con especialización indígena y asistida por facilitadores interculturales. Las políticas de

formación y especialización que se impartan o adopten para los funcionarios de la Defensoría Penal Pública, deberán considerar la especialización en justicia intercultural y cultura Indígena.”

El convencional Daza señaló que la indicación N° 152 tiene por objeto dejar el mecanismo de las licitaciones en la defensa penal. El convencional Viera enfatizó en la idea recalcando que las defensorías licitadas son un claro ejemplo de la subsidiariedad.

El convencional Cozzi expresó que las defensorías licitadas han colocado incentivos para utilizar eficientemente los recursos. El convencional Stingo aseveró que la posición del convencional Cozzi atiende al lucro en diversos ámbitos. Sin embargo, hay ciertos deberes del Estado, y la defensa de las personas es un deber del Estado. El convencional Cozzi replicó que es razonable cobrar por el trabajo. El convencional Stingo respondió que una cosa es cobrar por el servicio prestado, pero otra es que una persona particular lucre con los deberes del Estado. La convencional Bown aclaró que no le parece que se deje fuera per se licitar la defensa a particulares y que los servicios deben ser remunerados.

La convencional Hoppe señaló que el problema no es lucrar, sino hacerlo en un sistema basado en derechos fundamentales. Señaló que hay estudios que indican que el sistema concesionado no es eficiente. La convencional Royo mencionó que trabajó de defensora licitada, y en ese entonces se pagaba por causas cerradas, por lo que se buscaban salidas alternativas. El convencional Gutiérrez expresó que se debe dar un paso en el sentido que indicaron las personas que acudieron a las audiencias públicas sobre la Defensoría Penal Pública, quienes afirmaron la inconveniencia de las defensorías licitadas.

El convencional Logan distinguió entre Estado subsidiario y Estado subsidiador. El problema de la entrega de recursos a privados es que no se fiscaliza su gasto. La convencional Llanquileo llamó a preguntarse qué ocurriría si los fiscales fueran licitados. Además, se refirió a las condiciones laborales de las defensorías licitadas que son pésimas.

Indicación N° 151 de CC Harboe para suprimir el artículo 25. Sometida a votación fue **rechazada (5-13-1)**.

Indicación N° 152 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para reemplazar el artículo 25, por un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo 25.- De la defensa penal pública. La función de defensa penal pública será ejercida exclusivamente por defensoras y defensores penales públicos. Los servicios de defensa jurídica que preste la Defensoría Penal Pública no podrán ser licitados o delegados en abogados particulares, sin perjuicio de la contratación excepcional que pueda realizar en los casos y forma que establezca la ley.”.

Sometida a votación fue **aprobada (13-2-4)**.

Al artículo 26 que se suprime.-

“Artículo 26.- La función de defensa penal pública será ejercida exclusivamente por defensores/as penales públicos, respecto de los/las cuales deberá garantizarse su autonomía funcional en relación con las causas a su cargo, estabilidad del empleo y naturaleza de funcionarios públicos de carrera. La misma ley orgánica deberá definir los requisitos para postular e ingresar al cargo de defensor/a penal público, debiendo estos cumplir, a lo menos, las exigencias para ingresar a la

Administración del Estado. Requerida la intervención de un defensor/a penal público para un caso, no podrá excusarse de cumplir la función, salvo aquellas excepciones que se regulen legalmente.

Los servicios de defensa jurídica que preste la Defensoría Penal Pública no podrán ser licitados o delegados en abogados particulares, sin perjuicio de la contratación excepcional que pueda realizar en los casos y forma que establezca la ley.

La misma ley determinará la dotación de defensoras y defensores, funcionarias y funcionarios necesarios para dar adecuada cobertura de defensa penal pública en el país, debiendo contemplar divisiones, departamentos o unidades especializadas de defensa, que asuman los conflictos en que estén involucrados personas pertenecientes a pueblos originarios, adolescentes, personas condenadas, migrantes y grupos minoritarios o en especiales condiciones de vulnerabilidad de derechos.”

Indicación N° 153 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para suprimir el artículo 26. Sometida a votación fue **aprobada (16-1-2)**.

Al artículo 27 que pasa a ser 20.-

“Artículo 27.- Consejo Superior de la Defensoría Penal Pública y sus atribuciones. El Consejo Superior estará integrado por once miembros designados de la siguiente manera:

a) un consejero nombrado por el Presidente de la Republica a partir de una propuesta plurinominal del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, de entre académicos de Universidades del Estado o reconocidas por este, con confirmación de la Camara alta. No podrán haber desempeñado cargos de elección popular ni haber sido candidatos a ellos, así como tampoco podrán haber desarrollado funciones en el Gobierno o Administración del Estado en cargos que sean de exclusiva confianza del Presidente de la Republica, en los últimos cuatro años;

b) dos consejeros elegidos por los defensores y personal letrado de la institución;

c) Cuatro miembros serán nombrados por el Presidente de la Republica a partir de una propuesta plurinominal seleccionada por el Consejo de Alta Dirección Pública. Los candidatos y candidatas no podrán haber desempeñado cargos de elección popular ni haber sido candidatos a ellos, así como tampoco podrán haber desarrollado funciones en el Gobierno o Administración del Estado en cargos que sean de exclusiva confianza del Presidente de la Republica, en los últimos cuatro años.

d) dos consejeros elegidos por los funcionarios de la Defensoría Penal Pública;

e) dos consejeros elegidos en representación de la sociedad civil, en la forma que regule la ley.

La ley establecerá el procedimiento y los requisitos que deberán reunir los consejeros de la Defensoría Penal Pública. Los consejeros duraran cuatro años en sus cargos y no podrán ser reelegidos, debiendo renovarse por parcialidades en conformidad a lo que señale la ley.

La calidad de consejero es incompatible con todo otro cargo o función sea o no remunerada, con excepción de la docencia universitaria con los límites que señale la ley.”

El convencional Daza precisó que uno de los principios fundamentales que informan la Defensoría, es que sea una suerte de espejo del Ministerio Público. En ese sentido es que propone un Consejo Superior.

Indicación N° 154 de CC Harboe para suprimir el artículo 27. Sometida a votación fue **rechazada (4-14-1)**.

Indicación N° 155 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para reemplazar el artículo 27, por un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo 27.- Dirección de la Defensoría Penal Pública. La dirección superior de la Defensoría Penal Pública reside en un Consejo Superior, órgano colegiado, paritario, que designará de entre sus miembros a un presidente y a un director ejecutivo.”.

Sometida a votación fue **aprobada (13-4-1)**.

Al artículo 27 A y 27 B que se suprimen.-

“Artículo 27 A.- La dirección superior de la Defensoría Penal Pública estará radicada en una Defensora o Defensor Nacional. Ésta o éste será designado por la o el Presidente de la República, sobre la base de una terna conformada por el Consejo de Alta Dirección Pública mediante un concurso público regido por las normas de los procesos de selección del primer nivel jerárquico de la Administración del Estado, y con acuerdo del Senado (o Parlamento, de ser unicameral) adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio. La o el Defensor Nacional deberá tener a lo menos diez años de título de abogado/a, haber cumplido cuarenta años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio; durará seis años en el ejercicio de sus funciones y no podrá ser designado para un periodo siguiente.”

“Artículo 27 B.- La o el Defensor Nacional tendrá las facultades directivas y disciplinarias de las y los funcionarios de la Defensoría Penal Pública, sin perjuicio de las que correspondan a las o los respectivos Defensores Regionales dentro del ámbito de su región.”

Indicaciones N° 156, 157, 158 y 159 de Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez; y Harboe para suprimir los artículos 27 A y 27 B. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (14-1-4)**.

Al artículo 28 que pasa a ser 21.-

“Artículo 28.- El Consejo Superior de la Defensoría Penal Pública tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Dirigir, organizar y administrar el organismo, supervisar y velar por el cumplimiento de sus objetivos;*
- b) Fijar los criterios de actuación del organismo;*
- c) Fijar la política de gestión de seres humanos y aprobar los reglamentos internos de organización, funcionamiento y personal;*
- d) Nombrar y remover a los defensores regionales en conformidad a la ley, y dotar a las defensorías locales de los recursos necesarios para cumplir con sus tareas;*
- e) Elaborar anualmente el presupuesto de la Defensoría Penal Pública y la política de licitaciones del organismo;*
- f) Representar judicial y extrajudicialmente a la Defensoría Penal Pública, representación que se ejerce a través de su Presidente, y;*
- g) Las demás atribuciones que establezca la ley.”*

El convencional Daza defendió la idea de reproducir los mecanismos establecidos para el Ministerio Público en la Defensoría Penal Pública. El convencional Cruz señaló que la propuesta, a diferencia del Ministerio Público, mantiene la figura del Defensor Nacional. La convencional Hoppe precisó que la creación de este órgano viene a hacer frente a la crítica que decía relación con la designación del Defensor Nacional.

Indicación N° 160 de CC Harboe para suprimir el artículo 28. Sometida a votación fue **rechazada (1-14-4)**.

Indicación N° 161 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para reemplazar el artículo 28, por un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo 28.- Del Consejo Superior de la Defensoría Penal Pública. El Consejo Superior estará integrado por siete integrantes designados de la siguiente manera:

a) Tres integrantes elegidos democráticamente por los defensores y defensoras entre sus pares.

b) Un integrante elegido democráticamente por funcionarios y funcionarias de la Defensoría Penal Pública entre sus pares.

c) Tres integrantes elegidos por el Congreso plurinacional a partir de ternas elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública. Los candidatos y candidatas no podrán haber desempeñado cargos de elección popular ni haber sido candidatos a ellos, así como tampoco podrán haber desarrollado funciones en el Gobierno o Administración del Estado en cargos que sean de exclusiva confianza del Presidente de la República, en los últimos cuatro años.

La ley establecerá el procedimiento y los requisitos que deberán reunir los consejeros de la Defensoría Penal Pública. Los consejeros durarán cuatro años en sus cargos y no podrán ser reelegidos, debiendo renovarse por parcialidades en conformidad a lo que señale la ley.

La calidad de consejero es incompatible con todo otro cargo o función sea o no remunerada, con excepción de la docencia universitaria con los límites que señale la ley.

Las y los consejeros indicados en las letras a) y b) se entenderán suspendidos del ejercicio de su función mientras dure su cometido, pudiendo retornar al ejercicio de sus funciones una vez cumplido este desempeño.”.

Sometida a votación fue **aprobada (14-5-0)**.

Al artículo 28 A que pasa a ser 22.-

“Artículo 28 A.- Habrá un Consejo de la Defensa Penal Pública, cuya integración y funcionamiento será regulado por la respectiva ley orgánica. Tendrá carácter consultivo y, además, vinculante en las siguientes materias:

a.- Conocer de los casos que se sometan a su consideración y que comprometan la responsabilidad internacional del Estado de Chile, y aprobar la denuncia ante los Organismos Internacionales de Derechos Humanos, especialmente ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esto, cuando en el transcurso de las investigaciones y procedimientos penales se constaten graves violaciones de garantías fundamentales.

b.- A propuesta del Defensor o Defensora Nacional, aprobar el presupuesto anual de la Defensoría Penal Pública.

c.- A propuesta del Defensor o Defensora Nacional, aprobar el plan anual de difusión y promoción de los derechos y garantías de personas imputadas, acusadas y condenadas.

d.- A propuesta del Defensor o Defensora Nacional, aprobar el plan anual de auditorías y fiscalizaciones de defensa.

e.- A propuesta del Defensor o Defensora Nacional, aprobar los estándares de defensa y demás instructivos generales de similar naturaleza, incluyendo iniciativas o la creación de unidades especializadas de defensa.”

Indicación N° 162 de CC Harboe para suprimir el artículo 28 A. Sometida a votación fue **rechazada (2-15-2)**.

Indicación N° 163 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para reemplazar el artículo 28 A, por un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo 31.- Atribuciones del Consejo Superior de la Defensoría Penal Pública. El Consejo Superior de la Defensoría Penal Pública tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Dirigir el organismo, velando por el cumplimiento de sus objetivos;
- b) Determinar la política de gestión profesional de las y los funcionarios de la Defensoría Penal Pública.
- c) Evaluar y calificar permanentemente el desempeño de las y los funcionarios.
- d) Designar al defensor nacional y a los defensores regionales en conformidad a la ley.
- e) Ejercer la potestad disciplinaria respecto de las y los funcionarios, en conformidad a la ley.
- f) Definir las necesidades presupuestarias, gestionando los recursos para su adecuado funcionamiento.
- g) Las demás atribuciones que establezca la ley.”.

Sometida a votación fue **aprobada (14-4-1)**.

Al artículo 29 que pasa a ser 23.-

“Artículo 29.- Habrá Defensorías Regionales en cada una de las unidades territoriales regionales en que se divida administrativamente el país, a menos que la población o la extensión geográfica hagan necesario la existencia de más de una. La dirección de las Defensorías Regionales será responsabilidad de una o un Defensor Regional, quienes serán nombrados por la o el Defensor Nacional, sobre la base de una terna conformada por el Consejo de Alta Dirección Pública, previo concurso público de oposición y antecedentes. La o el Defensor Regional deberá tener a lo menos cinco años de título de abogado, haber cumplido treinta y cinco años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio y no encontrarse sujeto a algunas de las inhabilidades e incompatibilidades para el ingreso a la administración pública; durará seis años en el ejercicio de sus funciones y no podrá ser designado para un periodo siguiente. Si el Defensor o Defensora Regional cumplía con anterioridad funciones de defensora o defensor penal público, al cese de su nombramiento, podrá retomar dichas labores habituales.”

Indicación N° 164 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para reemplazar el artículo 29, por un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo 29.- Del Defensor o Defensora Nacional. La o el Defensor Nacional dirigirá las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Superior de la Defensoría Penal Pública y representará a la institución ante los demás órganos del Estado, sin perjuicio de las demás atribuciones que señale la ley.”.

Sometida a votación fue **aprobada (16-3-0)**.

A los artículos 30, 30 A, 31, 32, 32 A, 33 y 33 A que se suprimen.-

“Artículo 30.- Personal de la Defensoría Penal Pública. Los consejeros, defensores regionales, defensores locales y demás personal de la Defensoría Penal Pública se regirán por el Código del Trabajo, sin perjuicio de las normas estatutarias de derecho público que se dicten para salvaguardar la eficacia y eficiencia, la probidad y el interés general en la función pública.”

“Artículo 30 A.- Los y las funcionarios/as de la Defensoría Penal pública se regirán en cuanto a sus derechos, deberes y obligaciones por el Estatuto Administrativo.”

“Artículo 31.- Responsabilidad. Los consejeros, defensores regionales y defensores locales se someten, en cuanto servidores públicos, a los estatutos de responsabilidad penal, administrativa, civil y funcionaria que establezca la ley.”

“Artículo 32.- Remoción de los consejeros, defensores regionales y defensores locales. Los consejeros, defensores regionales y defensores locales solo podrán ser removidos por la Corte Constitucional, a requerimiento del Presidente de la República o de un tercio de los miembros en ejercicio de la Cámara baja. La Corte Constitucional conocerá de la remoción en pleno y en sesión especialmente convocada, pudiendo acordar la remoción con el voto conforme de cuatro séptimo de sus miembros en ejercicio; todo sin perjuicio de las eventuales responsabilidades penal, administrativa o civil que correspondan.”

“Artículo 32 A.- La o el Defensor Nacional y las y los Defensores Regionales solo podrán ser removidos de su cargo por la Corte Suprema, a requerimiento de la o el Presidente de la República o de un tercio de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados (o Parlamento, de ser unicameral), por incapacidad, mal comportamiento, negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones o incompatibilidad sobreviniente. También, por renuncia voluntaria aceptada por la o el Presidente de la República.

La Corte conocerá del asunto en pleno especialmente convocado al efecto y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio.”

“Artículo 33.- De la rendición de cuentas. El presidente del consejo superior de la Defensoría Penal Pública, los defensores regionales y los defensores locales deberán rendir anualmente una cuenta pública de su gestión ante la Cámara alta, Asamblea Regional o Concejo municipal según el orden de autoridades citado.”

“Artículo 33 A.- La Defensoría Penal Pública podrá ser fiscalizada por la Contraloría General de la República, solo en aquellos aspectos relativos a la correcta ejecución presupuestaria, nunca respecto de la función de defensa penal y mérito de las decisiones que adopten en el cumplimiento de la misma. Anualmente, el órgano deberá dar cuenta ante el Senado (o Parlamento) de la gestión realizada, también ante la ciudadanía.”

Indicaciones N° 165 a 177 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez; y Harboe para suprimir los artículos 30 a 33 A. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (16-0-3)**.

Al título “§ De la Defensoría del Pueblo / Defensoría de los Derechos Humanos / “Defensoría de los Pueblos”.-

Indicación N° 178 de CC Bravo y Villena para suprimir los títulos “Defensoría de los Derechos Humanos” y “Defensoría de los Pueblos”. Sometida a votación fue **aprobada (15-2-2)**.

Al artículo 34 que pasa a ser 24.-

“Artículo 34. Defensoría del Pueblo. Un organismo autónomo, de carácter técnico, con personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio y titularidad unipersonal denominada Defensoría del Pueblo. Tendrá por finalidad la promoción, protección y colaboración en la defensa de los derechos asegurados en esta Constitución, en los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y en las leyes, ante los actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y de personas jurídicas de derecho privado que tengan una concesión del Estado u operen previa licitación, que ejerzan

actividades de servicio o utilidad pública, en los términos que establezca la ley respectiva.

La referida ley determinará también la organización, funciones, financiamiento y atribuciones de la Defensoría del Pueblo. Su presupuesto estará fijado en una glosa especial del presupuesto nacional para el desempeño de sus funciones.”

Indicación N° 179 de CC Bravo y Villena al artículo 34 para sustituirlo por el siguiente texto:

“Artículo 34. Defensoría del Pueblo. Un organismo autónomo, de carácter técnico, con personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio y titularidad unipersonal denominada Defensoría del Pueblo tendrá por finalidad la promoción, protección y colaboración en la defensa de los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución, en los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos y en las leyes, ante los actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y de entidades privadas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública, en los términos que establezca la ley respectiva.

La Defensoría del Pueblo velará siempre por el resguardo efectivo del interés ciudadano en la gestión y finalidad que la Constitución y las leyes confieren a dichos órganos y entidades.

La ley determinará la organización, funciones, financiamiento y atribuciones de la Defensoría del Pueblo.

El presupuesto de la Defensoría del Pueblo estará fijado en una glosa especial del presupuesto del Estado para el desempeño de sus funciones.”

Sometida a votación fue **aprobada (14-0-5)**.

Indicación N° 180 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 34 sobre Defensoría del Pueblo, por el siguiente:

“Artículo 34.- Habrá una Defensoría de las Personas, con personalidad jurídica y patrimonio propio, para el control de la Administración del Estado, resolviendo quejas ciudadanas por medio de decisiones de persuasión. Le corresponderá representar los intereses de los ciudadanos ante cualquier organismo de la Administración del Estado. Para ello, a solicitud del usuario, podrá intervenir ante cualquier repartición pública a fin de solicitar cuenta respecto de todo trámite cuya demora ocasione lesión en los derechos de los usuarios.

Las competencias y atribuciones señaladas podrán ser ejercidas por la Defensoría respecto de las personas, naturales o jurídicas, que ejerzan actividades de servicio público o de utilidad pública.

Para un mejor desempeño de la Defensoría, esta tendrá oficinas regionales para el control de la Administración central que esté desconcentrada o descentralizada, y, de las regionales o locales que correspondan a su campo de competencia territorial.

La Defensoría podrá inspeccionar la actividad de los órganos de la Administración del Estado. Asimismo, podrá formular sugerencias, recomendaciones o informes a las respectivas autoridades, los que se orientarán a la adopción de medidas que corrijan o eviten acciones u omisiones que afecten negativamente la regularidad, continuidad e igualdad en la satisfacción de las necesidades públicas a su cargo.

Cada año la Defensoría realizará un informe de su gestión, el que deberá contener su actividad, con especial atención en relación con su quehacer con la Administración del Estado para una mejora continua del mismo.

La Defensoría podrá ejercer las acciones y recursos constitucionales que establezca la ley, optando siempre por funciones de amicus curiae a las de litigante a través de opiniones consultivas”.

Esta indicación se entiende **rechazada** por incompatible con la ya aprobada.

Al artículo 34 A y 34 B que se suprimen.-

“Artículo 34 A. Objeto. La Defensoría de los Derechos Humanos es un órgano autónomo del Estado, encargado de velar por la promoción, educación, observancia y protección de los derechos humanos que hayan sido establecidos en las normas constitucionales, legales y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

En el cumplimiento de sus funciones, la Defensoría de los Derechos Humanos podrá requerir toda la información que sea necesaria, tanto a las autoridades políticas, administrativas, jurisdiccionales y de control, esto en conformidad a la ley.

Una ley regulará lo relativo a su organización, estructura, competencia y funcionamiento. La ley determinará la forma en que la Defensoría se desconcentra territorialmente.”

“Artículo 34 B.- La Defensoría de los Pueblos es una corporación autónoma de derecho público, organismo técnico con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su funcionamiento será descentralizado regionalmente.

Su objeto será la protección, promoción y defensa de los derechos humanos individuales y colectivos, y demás garantías reconocidas en esta Constitución, en la legislación nacional, y en los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile.

Una ley regulará su funcionamiento de acuerdo a lo establecido en esta Constitución.”

Indicación N° 181 y 182 de CC Bravo y Villena para suprimir el artículo 34 A y 34 B. Sometidas a votación fueron **aprobadas (16-0-3)**.

Al artículo 35 que pasa a ser 25.-

“Artículo 35. Actuación de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo actuará de manera gratuita y simplificada, para promover y proteger los derechos humanos, que actuará y ejercerá sus atribuciones, de oficio o a petición de parte, en favor de las personas.

Las autoridades estarán obligadas a colaborar con los requerimientos necesarios para la libre función de la Defensoría del Pueblo, la que podrá acceder a la información reservada de las instituciones, sin obstáculo alguno, y podrá constituirse en dependencias de los órganos objeto de fiscalización.”

Indicación N° 183 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir los artículos 35, 36, 36 A, 36 B, 37 y 37 A, 38, 38 A, 39, 39 A, 39 B, 40, sobre Defensoría del Pueblo, por el siguiente:

“Artículo 35.- La organización y atribuciones de la Defensoría serán reguladas por ley de más alto rango que la Constitución establezca para ello y, a falta de regulación expresa sobre ello, por una ley que sea aprobada por la mayoría absoluta de los congresistas en las respectivas cámaras. La ley tendrá en cuenta especialmente que la naturaleza de la Defensoría es ser una magistratura de opinión y persuasión y que esté ajena a actividades político-partidistas o de independientes que ejerzan cargos políticos, además de las otras particularidades indicadas en los artículos precedentes.

La Defensoría será presidida por el Defensor de las Personas, quien será elegido por los dos tercios de los senadores en ejercicio a propuesta de una quina

formada por el Consejo de la Judicatura u órgano del Poder Judicial equivalente, y, a falta de este, por la Corte Suprema. Los postulantes deberán tener el título de abogado y deberán haber sobresalido en el ámbito académico o profesional por al menos 10 años.

El Defensor de las Personas durará 6 años en el cargo, no podrá ser reelegido, salvo quien haya ejercido en el cargo lo hiciera por menos de dos años. Cesará en el cargo por acuerdo de la mayoría absoluta del Senado a solicitud de una cuarta parte de la Cámara de Diputados, para el caso de notable abandono de deberes.

Para un mejor desempeño de la Defensoría, esta tendrá oficinas regionales para el control de la Administración central que esté desconcentrada o descentralizada, y, de las regionales o locales que correspondan a su campo de competencia territorial.

La organización interna de la Defensoría será la que indique la ley de mayor rango posible para su especial protección”.

Sometida a votación fue **rechazada (6-13-0)**.

Indicación N° 184 de CC CC Bravo y Villena al artículo 35 para sustituirlo por el siguiente texto:

“Artículo 35. Actuación de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo actuará de manera gratuita y simplificada y ejercerá sus atribuciones, de oficio o a petición de parte, en favor de las personas, agrupaciones o pueblos, según sea el caso.

Las autoridades estarán obligadas a colaborar con los requerimientos necesarios para la libre función de la Defensoría del Pueblo, la que podrá acceder a la información reservada de las instituciones, sin obstáculo alguno, y podrá constituirse en dependencias de los órganos objeto de fiscalización.”.

Sometida a votación fue **aprobada (17-0-2)**.

Al artículo 36 que pasa a ser 26.-

“Artículo 36. Atribuciones de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo tendrá, a lo menos, las siguientes atribuciones:

- 1. Fiscalizar a los órganos del Estado en relación a su mandato constitucional de protección de los derechos humanos.*
- 2. Formular recomendaciones a los órganos del Estado, en materia de derechos humanos, con la facultad de fiscalizar el efectivo cumplimiento de las mismas.*
- 3. Realizar acciones de seguimiento y monitoreo respecto de las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales en materia de derechos humanos y las sentencias dictadas en contra del estado por tribunales internacionales.*
- 4. Recibir y tramitar quejas sobre vulneraciones de derechos humanos.*
- 5. Practicar mediaciones o buenos oficios entre las personas y los organismos públicos, en materias de su competencia.*
- 6. Litigar cuando se identifiquen patrones de violación de derechos humanos, a través de la interposición de acciones o recursos constitucionales.*
- 7. Interponer acciones legales ante los tribunales de justicia respecto de hechos que revistan carácter de crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra, tortura, desaparición forzada de personas, y demás que establezca la ley.*
- 8. Custodiar y preservar los antecedentes reunidos por comisiones de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.*
- 9. Educar en derechos humanos.*
- 10. Iniciativa de ley en materias de su competencia.*
- 11. Las demás que fije la ley.”*

Indicación N°185 de CC Bravo y Villena al artículo 36 para sustituirlo por el siguiente texto:

“Artículo 36. Atribuciones de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo tendrá, a lo menos, las siguientes atribuciones:

1. Supervigilar, en relación a su mandato constitucional, a los órganos del Estado y entidades privadas.

2. Formular recomendaciones a los órganos del Estado y entidades privadas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública, en materias de su competencia, las que no serán vinculantes.

3. Realizar acciones de seguimiento y monitoreo respecto de las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales en materia de derechos humanos y las sentencias dictadas en contra del estado por tribunales internacionales.

4. Tramitar quejas o reclamos a solicitud de cualquier persona o agrupación que lo solicite ante el organismo que corresponda, el que estará siempre obligado a proporcionarle la información y colaboración necesaria para su solución.

5. Practicar mediaciones o buenos oficios entre las personas y los organismos públicos o entidades privadas, en materias de su competencia.

6. Litigar cuando se identifiquen patrones de violación de derechos humanos, interponiendo las acciones y recursos que esta Constitución y las leyes establecen, incluidas las de naturaleza colectiva y administrativa, que determine su ley.

7. Interponer acciones legales ante los tribunales de justicia respecto de hechos que revistan carácter de crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra, tortura, desaparición forzada de personas, y demás que establezca la ley.

8. Custodiar y preservar los antecedentes reunidos por comisiones de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

9. Educar en derechos humanos.

10. Iniciativa de ley en materias de su competencia.

11. Las demás que fije la ley.

La Defensoría del Pueblo ejercerá plenamente sus atribuciones en todo tiempo y lugar, incluido durante la vigencia de los estados de excepción que se establezcan.”.

Sometida a votación fue **aprobada (14-0-5)**.

Al artículo 36 A y 36 B que se suprimen.-

“Artículo 36 A. Atribuciones. La Defensoría de los Derechos Humanos tendrá las siguientes atribuciones:

1. Iniciar, de oficio o a petición de parte, la recopilación de antecedentes que afecten la plena vigencia de los derechos humanos, para realizar las recomendaciones necesarias a objeto de enmendar la situación. En caso que los hechos puedan revestir caracteres de delito, los antecedentes deberán ser puestos a disposición del Ministerio Público.

2. Ejercer las acciones legales en asuntos relacionados con su competencia.

3. Comunicar a los distintos órganos del Estado y solicitar su colaboración sobre las situaciones, prácticas o actuaciones en materia de derechos humanos vulnerados.

4. Promover, mediante recomendaciones, la modificación o derogación de legislación, reglamentos y prácticas nacionales que estime contrarios a los derechos humanos.

5. Colaborar con las instituciones internacionales, regionales y de otros países en la promoción y protección de los derechos humanos.

6. Presentar un informe anual sobre la situación en materia de derechos humanos y hacer las recomendaciones que estime convenientes para su resguardo y respeto.

7. Las demás que determine la Constitución y la ley.”

“Artículo 36 B.- La Defensoría de los Pueblos deberá intervenir, de oficio o a petición de partes, en todas las materias donde los derechos humanos de quienes habitan Chile se vean afectados en el contexto del ejercicio de la función pública. Con este objeto, entre otras funciones, deberá:

1. Promover, proteger y defender los derechos humanos de las personas que habitan el país.

2. Representar judicial y extrajudicialmente a las personas que vean afectados sus derechos humanos o fundamentales. Interponer las acciones, sean estas cautelares, administrativas y/o judiciales, ante los órganos de la administración del Estado y/o los Tribunales de Justicia que correspondan y dar correcta tramitación a las mismas.

3. Recibir denuncias, información, testimonios y documentos de personas naturales y organizaciones de Derechos Humanos que den cuenta de amenazas o vulneraciones a los Derechos Humanos, debiendo remitir dichos antecedentes a los organismos policiales encargados de la investigación.

4. Velar por el establecimiento de medidas de protección, ante un hecho inminente, así como la restauración y reparación de vulneraciones que se hubiesen producido.

5. Para el desempeño de su mandato podrá exigir información tanto a órganos, poderes e instituciones del Estado, como a privados, quienes deberán proporcionarla. La ley regulará las sanciones por denegación de información a esta institución.

6. Presentar informe anual de sus actividades y situación nacional en esta materia, señalando además sugerencias al Estado para el resguardo y respeto de estos. Este deberá presentarse a la Presidencia de la República, al Congreso Nacional, Consejo Nacional de Justicia y representantes de la sociedad civil del Consejo de esta Defensoría, quedando a disposición de quien lo solicite, el que será replicado en cada región del país por quienes se desempeñen como Defensoras o Defensores Regionales de la Defensoría de los Pueblos.

7. Custodiar y preservar los antecedentes reunidos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Valech I), Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (Valech II). En el caso de ésta última, deberá facilitar la documentación a los Tribunales de Justicia que así lo soliciten.

8. Colaborar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y demás servicios públicos relacionados en la elaboración de informes sobre el tema que deba presentar ante las instituciones internacionales en materia de Derechos Humanos.

9. Cooperar con las instituciones internacionales regionales o mundiales en la promoción y protección de los derechos humanos.

10. Difundir el conocimiento de los derechos humanos, favorecer su enseñanza en todos los niveles educacionales. Los programas en derechos humanos de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública serán impartidas por la Defensoría de los Pueblos.

11. Realizar investigaciones y publicaciones, y propender a fomentar una cultura de respeto de los derechos humanos en el país.

12. Promover y supervigilar las políticas de memoria y garantías de no repetición.

13. Presentar recomendaciones de cambios normativos o regulatorios a cualquier organismo público con competencias en materia de derechos humanos.

14. Practicar mediaciones voluntarias o buenos oficios entre las personas y los organismos públicos, en materias de su competencia.

Todas aquellas materias establecidas por la ley.”

Indicaciones N° 186 y 187 de CC Bravo y Villena para suprimir el artículo 36 A y 36 B. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (18-0-1).**

Al artículo 37 que pasa a ser 27.-

“Artículo 37. Defensor del Pueblo. La Defensoría del Pueblo estará a cargo de una Defensora o de un Defensor que será designado por acuerdo de la mayoría

absoluta de las y los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados y Diputadas (o Congreso Unicameral), según proposición que efectúen las organizaciones sociales y de derechos humanos, en la forma y cumpliendo los requisitos que determine la ley.

El procedimiento de las organizaciones sociales y de derechos humanos deberá asegurar que las personas propuestas por las organizaciones cumplan los requisitos de experiencia comprobable, trayectoria, pluralismo, compromiso y conocimiento en materia de derechos humanos.

La Defensora o el Defensor del Pueblo durará un período de cinco años en el ejercicio del cargo, y no podrá ser reelegido. Al cesar su mandato y durante los dos años siguientes, no podrá optar a ningún cargo de elección popular ni de exclusiva confianza de alguna autoridad.

Gozará de inamovilidad en su cargo y será inviolable en el ejercicio de sus atribuciones. Cesará en su cargo únicamente por condena por crimen o simple delito, renuncia, enfermedad incompatible con el ejercicio de la función y por remoción. Sólo podrá ser removido por la Corte Suprema, por notable abandono de deberes o por conducta incompatible con la ética pública, los valores democráticos o los derechos humanos, en la forma que establezca la ley.”

Indicación N° 188 de CC Bravo y Villena al artículo 37 para sustituirlo por el siguiente texto:

“Artículo 37. Defensor del Pueblo. La Defensoría del Pueblo estará a cargo de una Defensora o de un Defensor que será designado por acuerdo de la mayoría absoluta de las y los miembros en ejercicio del Congreso, según proposición que efectúen las organizaciones sociales y de derechos humanos, en la forma y cumpliendo los requisitos que determine la ley.

El procedimiento de las organizaciones sociales y de derechos humanos deberá asegurar que las personas propuestas por las organizaciones cumplan los requisitos de experiencia comprobable, trayectoria, pluralismo, compromiso y conocimiento en materia de derechos humanos.

La Defensora o el Defensor del Pueblo durará un período de cinco años en el ejercicio del cargo. Sólo podrá ser reelegido, por una vez para un nuevo período. Al cesar su mandato y durante los dos años siguientes, no podrá optar a ningún cargo de elección popular ni de exclusiva confianza de alguna autoridad.

Gozará de inamovilidad en su cargo y será inviolable en el ejercicio de sus atribuciones. Cesará en su cargo únicamente por condena por crimen o simple delito, renuncia, enfermedad incompatible con el ejercicio de la función y por remoción. Sólo podrá ser removido por el Congreso, por iniciativa propia o del número de ciudadanos/as que determine la ley orgánica, con un quórum igual o superior al de su designación, por notable abandono de deberes o por conducta incompatible con la ética pública, los valores democráticos o los derechos humanos, en la forma que establezca la ley.

La Defensoría del Pueblo rendirá cuenta pública anual ante la ciudadanía, sin perjuicio del informe que deberá remitir una vez al año al Congreso, el que también será público.”.

Sometida a votación fue **aprobada (14-0-5)**.

Al artículo 37 A, 38 y 38 A que suprimen.-

“Artículo 37 A.- La Defensora o Defensor del Pueblo ejercerá sus funciones por un periodo de seis años, sin posibilidad de nueva designación. Para optar al cargo de Defensor o Defensora del Pueblo se requiere, a lo menos:

- a) Ser ciudadano o ciudadana con derecho a sufragio;*
- b) No encontrarse sujeta o sujeto a alguna de las inhabilidades e incompatibilidades para ingresar a la administración pública;*
- c) Debe contar con título profesional y al menos 10 años de experiencia reconocida y destacada en la defensa y/o promoción de los Derechos Fundamentales*
- d) Los demás requisitos que se establezcan en esta Constitución o en la ley.*

Aquella persona designada no podrá ser removida y estará regida por el principio de inamovilidad mientras dure su período.

Su designación se realizará por el Congreso Plurinacional, a partir de una terna realizada por las consejeras y consejeros de la Defensoría de los Pueblos.

La Defensoría desempeñará sus funciones con autonomía de las instituciones públicas, órganos y poderes del Estado, sin perjuicio de aquellas labores de coordinación estratégica con la Defensoría de la Naturaleza y otras instituciones del Estado, para el cumplimiento de sus fines.”

“Artículo 38. Consejo Directivo. La dirección superior estará a cargo del Consejo de la Defensoría de los Derechos Humanos. A este le corresponderá ejercer las atribuciones y cumplir las funciones que se le otorguen a la Defensoría. Estará conformado por cinco integrantes que durarán seis años en sus cargos y será elegidos mediante una propuesta de la o el Presidente de la República, con acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de la Cámara Territorial, quienes podrán tener una renovación parcial cada tres años. Dicho Consejo estará presidido por un Presidente o Presidenta que será elegido entre los mismos consejeros y consejeras. El cargo de Presidente o Presidenta deberá renovarse cada tres años.

Este órgano tendrá una integración paritaria y las y los consejeros tendrán dedicación exclusiva en sus funciones.

Asimismo, el Consejo podrá establecer prioridades temáticas y comisionar a uno o más de sus integrantes para la promoción de uno o más temas en materia de derechos humanos o para el avance en el goce de derechos de grupos de especial protección.

Será atribución exclusiva del Consejo, con la aprobación de la mayoría de sus integrantes en ejercicio, emitir el Informe Anual de Derechos Humanos. Así como cualquier otro informe que el Estado deba presentar en materia de derechos ante organismos internacionales.”

“Artículo 38 A.- La Dirección Superior de la Defensoría de los Pueblos corresponderá a un Consejo, integrado de forma paritaria, de la siguiente manera:

- a) La Defensora o Defensor del Pueblo, quien presidirá el Consejo.*
- b) Las Defensoras o Defensores de las Unidades Especializadas.*
- c) Seis consejeros designados en la forma que establezca la ley, por las instituciones vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos que gocen de personalidad jurídica vigente, inscritas en el registro respectivo que llevará la Defensoría de los Pueblos.*

Las consejeras y consejeros deberán ser personas de reconocida trayectoria en el ámbito de los derechos humanos y serán nombradas por un período de 6 años, pero se renovarán por parcialidades cada tres años.

No podrán ser consejeros o consejeras las integrantes del Congreso Plurinacional, integrantes de Asambleas Legislativas Regionales, las alcaldesas, las concejales, las consejeras regionales, las juezas, las fiscales del Ministerio Público, las funcionarias de la Administración del Estado, ni las integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.”

Indicaciones N° 189, 190 y 191 de CC Bravo y Villena para suprimir los artículos 37 A, 38 y 38 A. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (16-0-3).**

Al artículo 39 que pasa a ser 28.-

“Artículo 39. Organización de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo se organizará internamente, de manera paritaria, con equidad territorial y con la participación de los pueblos indígenas, a través de defensorías regionales y defensorías especializadas, que funcionarán en forma desconcentrada, con autonomía relativa, en conformidad a lo que señale su ley.

Dentro de las defensorías especializadas se contemplarán áreas de derechos de niños, niñas y adolescentes; de mujeres, disidencias y diversidades sexo-genéricas; de personas mayores; de personas de pueblos originarios y

afrodescendientes; de personas con discapacidad; de personas privadas de libertad; de personas migrantes, refugiadas y apátridas; y de derechos humanos en general, sin perjuicio de las demás áreas que señale la ley.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo contará con consejos consultivos nacionales, regionales y comunales y de los pueblos originarios, en los términos que establezca la ley.”

Indicación N° 192 de CC Bravo y Villena al artículo 39 para sustituirlo por el siguiente texto:

“Artículo 39. Organización de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo se organizará internamente, de manera paritaria, con equidad territorial y con la participación de los pueblos indígenas, a través de defensorías regionales y defensorías especializadas, que funcionarán en forma desconcentrada, con autonomía relativa, en conformidad a lo que señale su ley.

Dentro de las defensorías especializadas se contemplarán áreas de derechos de niños, niñas y adolescentes; de mujeres, disidencias y diversidades sexo-genéricas; de personas mayores; de personas de pueblos originarios y afrodescendientes; de personas con discapacidad; de personas privadas de libertad; de personas migrantes, refugiadas y apátridas, sin perjuicio de las demás áreas que señale la ley.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo contará con consejos consultivos nacionales, regionales y comunales y de los pueblos indígenas, en los términos que establezca la ley.”.

Sometida a votación fue **aprobada (14-5-0)**.

Al artículo 39 A, 39 B y 40 que se suprimen.-

“Artículo 39 A. Nombramientos y organización general. El procedimiento para la selección de candidatos y candidatas al Consejo de la Defensoría de los Derechos Humanos se hará mediante un concurso público. Luego, se ofrecerá una nómina de cinco personas al Presidente de la República para su elección. Este proceso deberá contemplar la participación de la sociedad civil en la selección de las candidaturas.

Para la elección de las y los Consejeros se deberán considerar criterios de selección que velen por la paridad de género, plurinacionalidad, representación territorial. Los consejeros deberán ser personas con a lo menos 10 años de reconocida trayectoria en el ámbito de los derechos humanos, sin perjuicio de los demás requisitos que establezca la ley.

Las y los consejeros gozarán de inamovilidad y la ley contemplará los requisitos, responsabilidades, inhabilidades, incompatibilidades y causales para la cesación del cargo.

Existirá una Dirección Ejecutiva que tendrá la representación legal de la Defensoría, y que tendrá como función cumplir los acuerdos del Consejo Directivo y dirigir administrativamente la institución, sin perjuicio de las demás funciones que determine la ley.”

“Artículo 39 B.- La Defensoría de los Pueblos se organizará a través de Defensorías Regionales y Defensorías Especializadas.

Las Defensorías Especializadas son parte de la Defensoría de los Pueblos y existirán a nivel nacional y regional. Existirán las Defensorías Especializadas de la Niñez; Defensoría Especializada de los Pueblos Indígenas y Tribales; Defensoría Especializada de las Personas Mayores; Defensoría Especializada de las Personas Discapacitadas y Neurodivergentes, y aquellas que se creen por ley.

Las distintas Defensorías Especializadas actuarán de forma colaborativa, descentralizada y coordinada con la Defensoría de los Pueblos.”

“Artículo 40.- Existirá una unidad de producción de conocimiento e investigación, tendrá por función gestionar el conocimiento como herramienta en las distintas áreas de especialización de las Defensorías temáticas y de la Defensoría de

la Naturaleza, con el objeto de abordar la educación, la producción de insumos para la defensa de aquellas causas en las que asuma patrocinio y demás fines de estas instituciones.”

Indicaciones N° 193, 194 y 195 CC Bravo y Villena para suprimir los artículos 39 A, 39 B y 40. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (19-0-0).**

Al epígrafe “§ De la Defensoría de la Naturaleza”.-

El convencional Daza manifestó la problemática ambiental que aqueja a las personas en relación a proyectos que puedan afectarles. En ese sentido la Defensoría de la Naturaleza será un apoyo técnico a la hora de evaluar proyectos. El rol será de asesorar técnicamente, diverso a la Defensoría del Pueblo. La convencional Hoppe relevó la importancia de la creación de un órgano como este que garantizará la vida en todas sus formas. Además, es coherente con lo aprobado por el Pleno de la Convención como lo son los derechos de la naturaleza. El convencional Jiménez sostuvo también la importancia de la Defensoría de la naturaleza. Agregó la labor que tendrán las Defensorías fiscalizando al Estado y las empresas.

El convencional Cozzi afirmó que no es obvio, necesario, ni imprescindible que exista una Defensoría de la naturaleza. Lo importante es contar con una institucionalidad sólida y no burocratizar más. Finalizó con la advertencia de que estos organismos se transformen en “ONG del Estado”.

La convencional Royo explicó la coherencia que tiene este órgano con lo ya aprobado por esta Comisión y por el Pleno de la Convención Constitucional. Recalcó relevancia de consagrarlo a nivel constitucional pues existe una emergencia climática. La convencional Llanquileo se refirió a los proyectos extractivistas instalados en las comunidades donde la Defensoría ayudará en la defensa y promoción de los derechos de la naturaleza. El convencional Stingo explicó que en Chile no ha habido un desarrollo equitativo y ponderado que proteja intereses económicos y ambientales, toda vez que los económicos han sido priorizados por sobre los ambientales.

No habiendo indicaciones, se somete a votación el epígrafe siendo **aprobado (13-4-0)**.

Al artículo 41 que pasa a ser 29.-

“Artículo 41.- La Defensoría de la Naturaleza: Es un organismo técnico, autónomo, de derecho público, paritario, plurinacional, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, la que se regulará por estas normas y aquellas que la ley orgánica establezca.

La Defensoría de la Naturaleza tendrá por objeto la difusión, prevención, promoción, defensa y protección de los Derechos de la Naturaleza, de los animales y los derechos humanos ambientales garantizados en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales en materia ambiental, derechos de la Naturaleza y de los animales vigentes en Chile.

La Defensoría velará por el interés colectivo. Para el cumplimiento de sus fines deberá coordinar con la Defensoría de los Pueblos y con los demás órganos estatales, quienes deberán colaborar con aquellos requerimientos relacionados con el ámbito de sus funciones, de acuerdo a los principios constitucionales del buen vivir, in dubio pro-natura, intergeneracional, precautorio, restaurativo, y demás contemplados en la Constitución, las leyes y en los instrumentos internacionales vigentes en Chile.”

El convencional Cozzi señaló que la indicación N° 196 proviene de modelos europeos tales como Francia o Italia. Es necesario avanzar en niveles de desarrollo humano. Abogar por el solo interés ambiental implica colisionar con otros intereses

legítimos. La convencional Hurtado manifestó que es imprescindible abrir las puertas a la sociedad civil y organizaciones que propendan al desarrollo del país.

El convencional Stingo concordó en lo relacionado con la sociedad civil, pues hay muchas comunidades que se han preocupado de temas ambientales. El convencional Woldarsky señaló que la indicación no señala ninguna participación de la sociedad civil, y el artículo del texto sistematizado no la excluye por lo que no está en lo correcto la afirmación hecha al respecto. La convencional Llanquileo estuvo a favor del artículo del texto sistematizado. Además, explicó que lo que para unos es progreso, para muchos es destrucción.

Indicación N° 196 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir los artículos 41, 41 A, 42, 42 A, 43, 44, 45, 45 A, 46, 47 y 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55, por el siguiente:

“Artículo 41.- Habrá un Consejo Económico, Social y Medioambiental, de carácter técnico, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que, emitirá, a requerimiento del Gobierno, su dictamen sobre iniciativas de ley, normas reglamentarias, ordenanzas y decretos, como, asimismo, en la planificación y desarrollo de proyectos que puedan afectar el medio ambiente. Su enfoque deberá tener en vista la protección del medioambiente, como de los factores positivos en lo económico y social de la región y el país.

Para estos efectos, el Consejo podrá designar a cualquiera de sus miembros para que exponga ante el Congreso los dictámenes en relación con su ámbito de competencia.

El Consejo Económico, Social y Medioambiental podrá ser solicitado por vía de petición en las condiciones fijadas por una ley. Tras el examen de la petición, dará a conocer al Gobierno y al Congreso su respuesta a la misma.

El Consejo Económico, Social y Medioambiental podrá ser consultado por el Gobierno sobre cualquier problema de carácter económico, social o medioambiental. Asimismo, lo podrá ser a petición de un cuarto de las respectivas cámaras del Congreso.

Una ley determinará la composición, atribuciones, competencias y procedimientos, como de sus normas de funcionamiento del Consejo Económico, Social y Medioambiental”.

Sometida a votación fue **rechazada (5-13-0)**.

Por tanto, correspondió poner en votación el **artículo 41 del texto sistematizado**, siendo **aprobado (14-4-0)**.

Al artículo 41 A que se suprime.-

“Artículo 41 A.- La Defensoría de la Naturaleza es un órgano autónomo, descentralizado y con despliegue regional, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se coordina internamente con las demás Defensorías y con otros órganos estatales.

Está encargado de velar por la vigencia, promoción, difusión y defensa de los Derechos de la Naturaleza y los derechos humanos ambientales, garantizados en la Constitución, las leyes y el derecho internacional público.

Es deber del Estado destinar el presupuesto necesario y suficiente para el cumplimiento de sus fines.”

Indicación N° 197 de CC Hoppe, Royo y Giustinianovich para suprimir el artículo 41 A. Sometida a votación fue **aprobada (17-0-0)**.

Al artículo 42 que pasa a ser 30.-

“Artículo 42.- Sus atribuciones y funciones serán:

1. Representar judicial y extrajudicialmente tanto a la Naturaleza, como a las personas, de oficio o a petición de parte, ejerciendo las acciones administrativas, judiciales y cautelares que correspondan según su mandato, ante los organismos pertinentes para el cumplimiento de sus objetivos.
2. Recibir denuncias de personas naturales, personas jurídicas, comunidades y demás organizaciones que quieran proteger los derechos de la Naturaleza, de los animales y derechos humanos ambientales, procurando interponer las acciones que corresponda y/o realizar las coordinaciones que se requieran para asegurar la restitución al Estado de derecho.
3. Velar por el establecimiento de medidas de restauración y reparación del daño ambiental producido.
4. Velar por el cumplimiento y ejecución de las funciones de los distintos organismos del Estado en materia ambiental, participación y consulta indígena, previstas en la ley, en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales.
5. Velar por la participación de las comunidades para que puedan ser consultadas y consideradas sus opiniones en las decisiones que impliquen una afectación a los derechos de la Naturaleza.
6. Promover la adopción, firma o ratificación, según sea el caso, de las declaraciones, pactos y convenios internacionales, y proponer la implementación en la legislación nacional de los tratados internacionales que se relacionen con su competencia.
7. Promover una cultura transversal de respeto a los derechos de la Naturaleza, de los animales y derechos humanos ambientales en toda la sociedad y la institucionalidad pública.
8. Velar por el cumplimiento de sentencias y equivalentes jurisdiccionales que se refieran a la protección, reparación y/o restauración del medio ambiente.
9. Rendir informe anual al Congreso del cumplimiento de su función o cuando le sea requerido.
10. Brindar orientación y asistencia a cualquier persona, comunidad, pueblo u organización que la requiera, para el ejercicio y defensa de los derechos ambientales y la Naturaleza en materias de su competencia.
11. Representar a las comunidades o grupos de personas ante los organismos internacionales en todos aquellos casos que correspondan.
12. Informar como *amicus curiae* en las materias relativas a su competencia.
13. Todas aquellas atribuciones y facultades establecidas por la Ley.”

No habiendo indicaciones, se somete a votación el artículo 42 del texto sistematizado, siendo **aprobado (15-3-0)**.

Al artículo 42 A que pasa a ser 31.-

“Artículo 42 A. Son atribuciones de la Defensoría de la Naturaleza:

1. Ejercer las acciones constitucionales, de oficio o a petición de parte, cuando haya afectación de los derechos humanos ambientales y de la Naturaleza.
2. Ejercer las acciones, denuncias y peticiones a órganos internacionales de control de derechos humanos ambientales y de la Naturaleza, frente a casos de vulneración de los mismos.
3. Realizar diagnóstico, monitoreo, recomendación, investigación, seguimiento y presentación de informes anuales al Congreso sobre la situación de los derechos humanos ambientales y de la Naturaleza.
4. Supervisar el cumplimiento e implementación de los convenios, tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos y de la Naturaleza.
5. Supervisar cualquier clase de acuerdos entre empresas y comunidades o personas individuales, que autoricen en todo o parte la ejecución de proyectos extractivos, a fin de garantizar los derechos humanos ambientales y de la Naturaleza.
6. Monitorear el cumplimiento e implementación de sentencias nacionales y extranjeras sobre materias de derechos humanos ambientales y de la Naturaleza.
7. Velar por la implementación transversal de la perspectiva ecológica en los órganos del Estado.

8. *Presentar proyectos de ley, de reformas a la Constitución o indicaciones a estos y a iniciativas de terceros, así como modificaciones a decretos o reglamentos, respecto a materias de su competencia.*

9. *Formular recomendaciones a las instituciones públicas y privadas respecto a materias que afecten a los derechos humanos ambientales y de la Naturaleza.*

10. *Informar como amicus curiae en las materias relativas a su competencia.*

11. *Promover la adhesión o ratificación de instrumentos internacionales de derechos humanos ambientales y de la Naturaleza*

12. *Las demás que determine la ley.”*

Indicación N° 198 de CC Hoppe, Royo y Giustinianovich para sustituir el artículo 42 A por el siguiente:

“Artículo 42 A.-Unidad de producción de conocimiento e investigación. Existirá una unidad de producción de conocimiento e investigación cuyo objeto será apoyar aquellas causas en las que asuma patrocinio y demás fines de esta institución.”

Sometida a votación fue **aprobado (12-4-2)**.

Al artículo 43 que pasa a ser 32.-

“Artículo 43.- *La Defensoría de la Naturaleza se compondrá de oficinas regionales a cargo de una defensora o defensor de la Naturaleza, cuya dirección será descentralizada, colegiada, paritaria y plurinacional, mediante un Consejo Nacional, el cual coordinará interna y externamente su funcionamiento. Este consejo estará compuesto por miembros electos de entre sus pares y su orgánica y funcionamiento serán regulados por ley.*”

No habiendo indicaciones, se somete a votación el artículo 43 del texto sistematizado, siendo **aprobado (13-5-0)**.

Al artículo 44 que pasa a ser 33.-

“Artículo 44.- *Un Consejo Consultivo se encargará de orientar la estrategia de la Defensoría de la Naturaleza. La ley regulará su organización, funcionamiento, financiamiento y competencias.*”

No habiendo indicaciones, se somete a votación el artículo 44 del texto sistematizado, siendo **aprobado (14-4-0)**.

Al artículo 45 que pasa a ser 34.-

“Artículo 45.- *La defensora o defensor regional de la Naturaleza durará 5 años en su cargo, será nombrada en conformidad a la unidad legislativa intrarregional que esta Constitución establezca, debiendo rendir cuentas ante dicha entidad, la que a su vez estará facultada para removerles de su cargo, conforme a la ley que la regule.*”

No habiendo indicaciones, se somete a votación el artículo 45 del texto sistematizado, siendo **aprobado (14-4-0)**.

Al artículo 45 A, 46 y 47 que se suprimen.-

“Artículo 45 A.- *La Defensora o el Defensor de la Naturaleza será elegido por el Parlamento Plurinacional, por mayoría de sus miembros, de una terna obtenida previo concurso público, tomando en cuenta criterios de especialización y trayectoria en la defensa de los derechos humanos ambientales y de la naturaleza.*

La ley determinará los demás requisitos de postulación al cargo, que garantice la participación popular y de los pueblos indígenas.

Ejercerá sus funciones por un periodo de cinco años, sin posibilidad de nueva designación y podrá ser removido por las causales que señale la ley.”

“Artículo 46.- *Las autoridades y los funcionarios de los servicios públicos tienen la obligación de proporcionar a la Defensoría de la Naturaleza la información*

que solicite en relación con el ejercicio de sus funciones. En caso de no ser debidamente atendida en su solicitud, la Defensoría interpondrá las acciones correspondientes contra la autoridad, que podrá ser procesada y destituida si se demuestra el incumplimiento.”

“Artículo 47.- La Defensoría de la Naturaleza podrá efectuar convenios de colaboración con diversas instituciones públicas y privadas para llevar a cabo sus cometidos.”

Indicaciones N° 199, 200, 201 de CC Hoppe, Royo y Giustinianovich para suprimir los artículos 45 A, 46 y 47. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (18-0-0)**.

Al artículo 48 que se suprime.-

“Artículo 48.- La Defensoría de los Pueblos y la Naturaleza debe velar por los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y de la naturaleza, ejerciendo las acciones necesarias para su efectiva garantía, protección y reparación, sin perjuicio de las acciones y derechos que asisten a los individuos y comunidades.”

No habiendo indicaciones, se somete a votación el artículo 48 del texto sistematizado, resultando un **empate (9-9-0)**. Habiéndose producido un empate, se sometió nuevamente a votación y fue **rechazado (4-15-0)**.

Al epígrafe “§ Del Consejo Autónomo del Medio Ambiente”.-

El convencional Daza afirmó que más que crear Defensorías y derechos de la naturaleza, resulta fundamental una institucionalidad que se haga cargo del tema. A la fecha, en la evaluación de proyectos ambientales hay demasiada arbitrariedad. Este Consejo tiene por objeto evitar la intervención política en la evaluación de los proyectos ambientales. El convencional Jiménez afirmó que espera que se cumplan los derechos de las comunidades en materia ambiental. Es una norma necesaria para garantizar los derechos.

No habiendo indicaciones, se somete a votación el epígrafe del texto sistematizado, siendo **aprobado (14-5-0)**.

Al artículo 49 que pasa a ser 35.-

“Artículo 49.- Consejo Autónomo del Medio Ambiente. El Consejo Autónomo del Medio Ambiente es un organismo autónomo, paritario, de carácter técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene de forma exclusiva la función de evaluar, fiscalizar y sancionar proyectos y/o actividades en materia ambiental.”

El convencional Daza afirmó que la indicación tiene por objeto evitar capturas en el órgano. El convencional Logan llamó la atención sobre la facultad de sancionar toda clase de infracciones por cuanto podría llevar a ser cooptado. La convencional Hoppe relevó la importancia de este órgano que aportará autonomía en razón de su carácter técnico.

El convencional Cozzi expresó que actualmente el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental tiene un carácter técnico, no político. El Consejo autónomo en comento tiene la función de fiscalizar y sancionar, cuestión que le compete a la Superintendencia.

La convencional Royo afirmó que los nombramientos del Servicio de Evaluación Ambiental son políticos. Además del Consejo de Ministros que evidentemente tiene un carácter político.

La convencional Hurtado preguntó cuál es la diferencia entre el Consejo y la Defensoría de la Naturaleza. La convencional Hoppe manifestó que son instituciones diferentes. El convencional Daza explicó que la Defensoría adoptará la defensa de comunidades en temas de índole ambiental. El Consejo, por su parte, será la institucionalidad que determinará dicha institucionalidad ambiental. El convencional Jiménez señaló que la Defensoría además contendrá un modelo de persuasión.

Indicación N° 202 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para reemplazar el artículo 49, por un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo 49.- Del Consejo Autónomo del Medio Ambiente. El Consejo del Medio Ambiente es un órgano colegiado, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de llevar a cabo la evaluación de impacto ambiental de proyectos, dictar la autorización final del proceso de evaluación ambiental, fiscalizar y sancionar toda clase de infracciones a las normas e instrumentos de protección ambiental, y demás facultades que establezca ley.

El Consejo del Medio Ambiente estará dirigido por un Consejo Nacional, integrado por siete miembros, con comprobada competencia en materia ambiental, elegidos por el Congreso Nacional a partir de ternas elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública. Además, funcionará desconcentradamente a través de consejos regionales. La ley regulará, en lo demás, su integración y funcionamiento.

Se organizará conforme a los criterios de plurinacionalidad, paridad y equidad territorial.”.

Sometida a votación fue **aprobada (13-5-0)**.

Al artículo 50, 51, 52, 53, 54 y 55 que se suprimen.-

“Artículo 50.- Organización y composición del Consejo Autónomo del Medio Ambiente. El Consejo se organiza en un Consejo Nacional del Medio Ambiente y en Consejos Regionales. El Consejo Nacional está a cargo de la Directora o Director Nacional Ambiental, quien es la autoridad máxima del organismo. La persona que ocupe el cargo de la Dirección Nacional será designada por acuerdo de la mayoría de los miembros en ejercicio del Consejo Nacional.

La organización del Consejo Autónomo del Medio Ambiente, tanto nacional como regional, se hará en conformidad a lo que señale la ley.”

“Artículo 51.- Evaluación de Impacto Ambiental. El Consejo se hará cargo de ejecutar, organizar y coordinar la Evaluación de Impacto Ambiental a que deban someterse los proyectos y actividades susceptibles de causar un impacto en el medio ambiente, según establezca esta constitución y las leyes. Es atribución exclusiva de este organismo dictar la autorización final de un proceso de Evaluación Ambiental, mediante una Resolución de Calificación Ambiental.

Esta evaluación deberá respetar los principios preventivo, precautorio y de participación ciudadana, y se hará de forma integral, considerando todas las partes de una actividad, presentes o futuras, además de los efectos que puedan provocar sobre el medio ambiente otros proyectos o actividades que operen, o vayan a operar en el mismo ecosistema.”

“Artículo 52.- Acceso a la Reclamación Ambiental. La decisión final de la Evaluación de Impacto Ambiental, podrá ser reclamada directamente ante los Tribunales Ambientales por el titular del proyecto o actividad, las personas que participen de la evaluación o aquellas cuyo ecosistema se vea afectado, cuando exista una ilegalidad sustantiva en el procedimiento de evaluación. Esta reclamación

se efectuará mediante las herramientas y plazos señalados en la ley, sin que pueda exigirse el agotamiento previo de la vía administrativa.”

“Artículo 53.- Fiscalización Ambiental. El Consejo está a cargo de ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización ambiental de toda clase de infracción a las normas e instrumentos de protección ambiental que establezca esta constitución y la ley.”

“Artículo 54.- En ejercicio de sus funciones el Consejo fiscalizará el cumplimiento de las normas, condiciones y medidas establecidas en los instrumentos de protección ambiental, además de adoptar las medidas cautelares y de sanción que establezca la ley”

“Artículo 55.- Responsabilidad ambiental. Constatado un daño ambiental mediante un procedimiento administrativo a consecuencia de la infracción a los instrumentos de protección ambiental, además de las sanciones administrativas que correspondan, quien haya provocado el daño se hará cargo de repararlo en la forma que señale la ley.”

Indicaciones N° 203 a 208 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para suprimir los artículos 50, 51, 52, 53, 54 y 55. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobados (19-0-0)**.

Al epígrafe “§ Agencia Nacional del Agua”.-

La convencional Royo relevó la importancia del derecho al agua como derecho humano fundamental y de garantizar una institucionalidad que lo proteja. El convencional Mayol afirmó que en la medida en que exista un organismo técnico se solucionará el problema del cambio climático. Eso es lo fundamental, por ejemplo, el Código de Aguas dice mucho respecto de esto, donde afirma que se debe priorizar el uso humano y eso se logra con capacidad técnica. El convencional Logan aseveró que la Agencia tiende a pensar en una autonomía institucional y un trabajo interrelacionado.

No habiendo indicaciones, se somete a votación el epígrafe del texto sistematizado, siendo **aprobado (19-0-0)**.

Al artículo 56 que se suprime.-

“Artículo 56.- Autoridad Nacional del Agua. La Autoridad Nacional del Agua es un órgano autónomo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, y cuya principal tarea será asegurar el uso sostenible del agua y sus ecosistemas asociados y la seguridad hídrica, en beneficio de las actuales y futuras generaciones.

Para ello deberá velar por el cumplimiento de la política hídrica nacional que establezca la autoridad respectiva, como una política de adaptación al cambio climático; y como órgano rector único, coordinar el actuar de los demás organismos del Estado con competencias en materia hídrica. Deberá además, otorgar, revisar, modificar, caducar, revocando toda la concesión, permiso o título sobre las aguas; fiscalizar y perseguir las sanciones administrativas y penales que correspondan, sin perjuicio de la reparación del daño causado.

Será la encargada de elaborar un Sistema Nacional Unificado de Información Hídrica, de acceso público, mediante la recopilación y centralización de todos los datos que manejen otros organismos públicos y privados; sin perjuicio de medir y estudiar de manera independiente los recursos hídricos de todo el país.

Como órgano descentralizado, deberá además en cada cuenca, regular, implementar, coordinar y fiscalizar la gestión integrada del agua en todas sus formas y estados, de acuerdo con lo que esta constitución establezca. Para ello, deberá impulsar la constitución de los organismos de cuenca, prestando asistencia técnica y

financiera. En dichos organismos, la participación será vinculante y habrá mecanismos para asegurar la representatividad democrática de todos los interesados de la cuenca, incluyendo los gobiernos regionales, municipalidades y organismos locales, universidades y centros de investigación y todos los usuarios de usos extractivos y no extractivos, con normas especiales para las comunidades vulnerables, pueblos originarios y la sociedad civil. Está prohibida la gestión seccionada de ríos y acuíferos y, tratándose de cuencas compartidas, se deberán considerar instancias de asociatividad y colaboración en su gestión.”

El convencional Cozzi señaló que la indicación N° 210 busca incorporar aquellas ideas que reúnen el texto base con las iniciativas rechazadas en general. Lo importante es avanzar en un órgano técnico. Una de las principales diferencias con la indicación N° 211 es por la complejidad de constitucionalizar los usos prioritarios del agua.

El convencional Stingo se refirió al origen del Código de Aguas. Además, se refirió a las comunidades locales que son afectadas dado que los derechos de aprovechamiento están radicados en unos pocos. Es un negocio implementado por la dictadura militar y la Agencia intenta redefinir las perspectivas de este derecho.

Indicación N° 209 de CC Royo, Hoppe, Vilches, Alvarado, Gómez, Olivares, Dorador y Delgado para eliminar el actual artículo 56. Sometida a votación fue **aprobada (13-3-3)**.

Indicación N° 210 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir los artículos sobre Agencia Nacional del Agua, 56 y 56 A, en el siguiente tenor:

“Artículo 56.- La Autoridad Nacional del Agua es un órgano autónomo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, y cuya principal tarea será la administración de los recursos hídricos. Deberá considerar el aseguramiento del uso sostenible del agua y sus ecosistemas asociados, la seguridad hídrica, todo en beneficio de las actuales y futuras generaciones.

Para ello, deberá implementar la Política Nacional de los Recursos Hídricos que establezca la autoridad respectiva, la que deberá considerar, entre otros factores, pero de relevancia, al cambio climático, bajo un enfoque de cuenca y con un modelo de planificación local. En relación con esto último, deberá funcionar con oficinas territoriales encargadas de la fiscalización y planificación local.

Asimismo, será la encargada de elaborar un Sistema Nacional Unificado de Información Hídrica, de acceso público, mediante la recopilación y centralización de todos los datos que manejen otros organismos públicos y privados; sin perjuicio de medir y estudiar de manera independiente los recursos hídricos de todo el país”.

Esta indicación resulta **rechazada** por incompatible.

Al artículo 56 A que pasa a ser 36.-

“Artículo 56 A.- De la Autoridad Nacional de Aguas. La Autoridad Nacional de Aguas es el órgano autónomo, con patrimonio propio, encargado de la protección y restauración de todos los ecosistemas asociados al agua en Chile, conforme a los derechos de la Naturaleza, y de asegurar el derecho humano al agua y saneamiento. Tendrá asiento por derecho propio en los Consejos Plurinacionales de Cuenca, siendo la encargada de determinar el volumen de agua necesario para cumplir con su mandato, y de los planes de restauración y preservación de las cuencas, acuíferos y zonas costeras. Su integración deberá contemplar las capacidades científicas necesarias para estos objetivos, además de asegurar la paridad, diversidad territorial y participación de los pueblos indígenas. La Autoridad Nacional de Aguas tendrá sede en todas las cuencas del país.

La Autoridad Nacional de Aguas estará a cargo de la coordinación de organismos y recolección de la información hídrica de la cuenca, de manera que se configure un sistema de control y monitoreo de las variables hidrológicas en los componentes del ciclo hídrico local, a escala de cuenca, considerando la disponibilidad y demanda de agua para establecer un balance hídrico por territorio. La Autoridad Nacional de Aguas será la responsable del Catastro Público de Aguas. La Autoridad Nacional de Aguas contará con facultades de fiscalización y sanción en materia de aguas. La Autoridad Nacional de Aguas y la comisión especial del artículo transitorio 2° deberán colaborar en el cumplimiento de sus respectivos mandatos.”

El convencional Mayol afirmó que la Agencia es indispensable para el desarrollo del país. La convencional Royo se refirió a cifras relacionadas con el consumo del agua nacional. La convencional Hoppe afirmó que esta indicación es una norma de consenso trabajada por diversos sectores. El convencional Stingo se refirió al derecho real de aprovechamiento de agua diferente a la concesión provisional del consumo de agua.

Indicación N° 211 de CC Royo, Hoppe, Vilches, Alvarado, Gómez, Olivares, Dorador y Delgado para sustituir el actual artículo 56 A por el siguiente

“Artículo X. Agencia Nacional del Agua. La Agencia Nacional del Agua es un órgano autónomo, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es asegurar el uso sostenible del agua, el acceso al derecho humano al agua y al saneamiento y la conservación y preservación de sus ecosistemas asociados. Para ello, se encargará de recopilar información, coordinar, dirigir y fiscalizar la actuación de los órganos del Estado con competencias en materia hídrica.

Será el órgano encargado de proponer e implementar la Política Hídrica Nacional, para lo cual deberá elaborar y gestionar un sistema público unificado de información hídrica con enfoque integrado de cuencas, que permita garantizar las prioridades de uso establecidas en esta Constitución. Además, estará a cargo de otorgar, revisar, modificar, caducar y revocar autorizaciones de uso de agua.

Deberá fiscalizar el uso responsable y sostenible del agua y aplicar las sanciones administrativas que correspondan. Podrá determinar la calidad de los servicios sanitarios, así como las demás que señale la ley.

La Agencia Nacional del Agua financiará y otorgará asistencia técnica a los Consejos de Cuenca, teniendo asiento propio en dicho órgano. En el evento que éstos no se hayan constituido, la Agencia Nacional del Agua podrá reemplazarlos en sus funciones.”

Sometida a votación fue **aprobada (14-2-3)**.

Al artículo 57 que pasa a ser 37.-

“Artículo 57.- Del Director Nacional. La Agencia Nacional del Agua tendrá una o un Director Nacional. Será nombrado a proposición de la o el Presidente de la República, por acuerdo del Congreso Nacional adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, previo llamado a audiencias públicas, por un período de 5 años y no podrá ser designado por un nuevo período. La designación deberá realizarse a partir de una propuesta plurinominal seleccionada por el Consejo de Alta Dirección Pública. Los candidatos y candidatas no podrán haber desempeñado cargos de elección popular ni haber sido candidatos a ellos, así como tampoco podrán haber desarrollado funciones en el Gobierno o Administración del Estado en cargos que sean de exclusiva confianza del Presidente de la República, en los últimos cuatro años.

Para ser designada, la o el Director Nacional de la Agencia Nacional del Agua, deberá contar con, al menos, diez años de trayectoria en el ámbito de la gestión de recursos hídricos y reunir los demás requisitos que establezca la ley.

La ley regulará las instancias de coordinación entre la Agencia Nacional del Agua y el Ejecutivo, especialmente respecto de la Política Hídrica Nacional. Así como también, la organización, estructura, competencias y funcionamiento de la Agencia.”

Indicación N° 212 de CC Royo, Hoppe, Vilches, Alvarado, Gómez, Olivares, Dorador y Delgado para eliminar el actual artículo 58. Fue **retirada** por sus autores.

Indicación N° 213 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 57, en el siguiente tenor:

“Artículo 57.- La Autoridad Nacional del Agua será dirigida por un Consejo, integrado por ocho miembros, los cuáles serán nombrados por el Presidente de la República, previa aprobación del Senado, por períodos no coincidentes de seis años. Para ser miembro del referido Consejo, se deberá demostrar expertiz y conocimiento sobre administración de recursos hídricos”.

Sometida a votación fue **rechazada (5-13-1)**.

No habiendo más indicaciones, se sometió a votación el artículo 57 del texto sistematizado, el cual fue **aprobado (14-0-5)**.

Al artículo 58 que se suprime.-

“Artículo 58.- De los Consejos Plurinacionales de Cuenca. En cada una de las cuencas de Chile se establecerá un Consejo Plurinacional de Cuenca, encargado de la gestión, gobernanza y planificación estratégica de las aguas con enfoque de cuencas hidrográficas. Cada uno de ellos será integrado por representantes de los titulares de autorizaciones de uso de aguas, de los consumidores de aguas, de los pueblos originarios, de los gobiernos locales y regionales, de los gestores comunitarios de aguas y de la Autoridad Nacional de Aguas. El Consejo de Cuenca deberá velar por la gestión integrada, ecológica, democrática, participativa y plurinacional de las aguas, reconociendo en ello la gestión comunitaria del agua y la función pública del Estado en el saneamiento.

La gobernanza de estas instituciones deberá realizarse de manera que todos los actores que la componen puedan incidir democráticamente en las decisiones, asegurándose que ninguno de ellos pueda alcanzar el control por sí solo, e incentivando los acuerdos.”

Indicación N° 214 y 215 de CC Royo, Hoppe, Vilches, Alvarado, Gómez, Olivares, Dorador y Delgado; y Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para suprimir el artículo 58. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (14-2-0)**.

Al epígrafe “§ Consejo Nacional para la Transición Productiva Socio-ecológica”.-

No habiendo indicaciones se sometió a votación el epígrafe del texto sistematizado y fue **aprobado (13-6-0)**.

Al artículo 59 que pasa a ser 38.-

“Artículo 59.- Órgano. Habrá un Consejo Nacional para la Transición Productiva Socio-ecológica, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de definir la Estrategia Nacional de Transición Productiva Socio-ecológica.

Este Consejo deberá coordinar la elaboración de las Estrategias Regionales de Transición Productiva Socio-ecológica con los correspondientes gobiernos regionales.

La composición, organización, atribuciones y autonomía del Consejo, así como su incidencia en las definiciones presupuestarias y los procedimientos de elaboración y tramitación de las estrategias nacionales y regionales, respectivamente, serán determinadas por ley.”

El convencional Logan sostuvo que la indicación N° 217 es correcta pero hizo una prevención con lo relativo a la facultad que tendrá de coordinar la elaboración de Estrategias Regionales de Transformación Productiva que podría entrar en conflicto con la autoridad central.

Indicación N° 216 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para suprimir el artículo 59. Sometida a votación fue **rechazada (6-12-1)**.

Indicación N° 217 de CC Hoppe, Royo y Giustinianovich para sustituir el actual artículo 59, por el siguiente:

“Artículo 59.- Consejo de Transformación Productiva. El Consejo de Transformación Productiva es un organismo autónomo encargado de definir la Estrategia Nacional de Transformación Productiva Socio-Ecológica, en coordinación con la institucionalidad pública, sea ésta a nivel estatal, regional o local. Este Consejo deberá coordinar la elaboración de las Estrategias Regionales de Transformación Productiva con los correspondientes gobiernos regionales.

La organización y atribuciones del Consejo serán determinadas por la ley. Con todo, esta deberá disponer los procedimientos de elaboración de las estrategias así como los mecanismos de rendición de cuentas para la evaluación de su implementación. Asimismo, dispondrá la incidencia en las definiciones presupuestarias y el procedimiento de seguimiento de las responsabilidades institucionales definidas en las estrategias nacionales o regionales.

El Consejo formará parte en el nombramiento de la Dirección de agencias y empresas públicas estratégicas para la transformación productiva del país, de la manera que lo disponga la ley.

El Consejo será paritario y plurinacional, y estará conformado proporcionalmente por representantes del poder ejecutivo y de los gobiernos regionales, junto con las y los principales actores que se desempeñan en el ámbito del fomento productivo, innovativo, educacional, científico, social y ecológico. Los nombramientos serán realizados por parcialidades, y en estos participaran el poder ejecutivo y legislativo según lo señale la ley.”

Sometida a votación fue **aprobada (14-5-0)**.

Al artículo 60 que se suprime.-

“Artículo 60.- Características. El Consejo deberá integrar proporcionalmente a representantes del Ejecutivo y los gobiernos regionales, junto con las y los principales actores que se desempeñan en el ámbito del fomento productivo, innovativo, académico, educacional, social y ecológico del desarrollo del país.

En los nombramientos, que ocurrirán en parcialidades, deberán participar el Ejecutivo y el Legislativo, según lo determine la ley. En todo caso, dicha integración deberá considerar la paridad de género y representación plurinacional.

Dicho Consejo se coordinará debidamente con la institucionalidad pública, sea ésta a nivel estatal, regional y local, a cargo de estas materias para el cumplimiento de sus atribuciones.

La formulación de las estrategias indicadas en el artículo anterior deberá efectuarse a través de un proceso transparente y participativo, el que será definido en la ley.

La ley establecerá los mecanismos de rendición de cuentas necesarios ante el Congreso y las asambleas legislativas regionales para evaluar la implementación, el seguimiento y las responsabilidades definidas en las estrategias económicas de desarrollo productivo.”

Indicación N° 218 y 219 de CC Hoppe, Royo y Giustinianovich; y Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon,

Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para suprimir el artículo 60. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (17-2-0)**.

Al epígrafe “§ Banco Central”.-

El convencional Daza se refirió a la bondad de consagrar el Banco Central a nivel constitucional y sobre esta materia no debiesen innovar mayormente. El convencional Cruz afirmó que consignar el Banco Central en la Constitución le da seriedad al trabajo de la Convención.

No habiendo sido objeto de indicaciones, se sometió a votación el epígrafe del texto sistematizado y fue **aprobado (18-1-0)**.

Al artículo 61 que se suprime.-

“Artículo 61. Objeto. Existirá un organismo autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico, denominado Banco Central de Chile, a cargo de la política económica monetaria y cambiaria de Chile. Una ley regulará su composición, organización, objetivos, funciones y atribuciones, así como las instancias de coordinación entre el Banco y el Gobierno.”

El convencional Cozzi argumentó que la indicación N° 221 propone un texto con las notas esenciales del Banco Central y el mandato que tiene, incorporando la sostenibilidad ambiental, el empleo, sin poner en riesgo el desempeño del mandato central del Banco Central que es la política monetaria.

El convencional Daza sostuvo que, de la lectura de la indicación que están presentando, existe un acuerdo transversal en que el mandato central es el que consignan en una indicación posterior, no obstante de considerar otro tipo de elementos sin desviarse de este mandato único. La convencional Hurtado manifestó que la indicación N° 221 no pone en riesgo el mandato principal. El inciso tercero agrega que deberá velar por la transparencia.

Indicación N° 220 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para suprimir el art. 61. Sometida a votación fue **aprobada (13-6-0)**.

Indicación N° 221 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir los artículos sobre Banco Central, artículos números 61, 61 A, 61 B, 61 C y 61 D, en el siguiente tenor:

“Artículo 61.- Existirá un organismo autónomo, con patrimonio y personalidad jurídica propia, de carácter técnico, denominado Banco Central, cuyo mandato será velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Tendrá a su disposición los instrumentos de política monetaria con miras a contribuir al sano desarrollo de la economía. El Banco Central de Chile tendrá la potestad exclusiva de emitir monedas y billetes, así como de formular la política monetaria. Su composición, organización, funciones y atribuciones serán determinadas en la ley, la que necesitará para su aprobación de la mayoría de los integrantes del Congreso en ejercicio.

En la fundamentación de sus decisiones, el Banco Central deberá considerar aspectos como la sostenibilidad ambiental, el empleo y el nivel de endeudamiento público y privado, pero sin poner en riesgo el desempeño de su función principal. Estos aspectos constituirán elementos de deliberación, los que se encontrarán supeditados al debido cumplimiento de sus funciones. Las decisiones del Banco Central, así como sus fundamentos y proyecciones, no estarán sujetas a control político.

El Banco Central deberá velar por la transparencia, dará cuenta pública de sus actuaciones, y deberá informar al menos trimestralmente al Presidente de la

República y al Congreso respecto de las políticas y normas generales que dicte en el ejercicio de sus atribuciones.

Asimismo, asesorará al Presidente de la República, cuando éste lo solicite, en todas aquellas materias que digan relación con sus funciones”.

Se entiende **rechazada** por incompatible.

Al artículo 61 A que se suprime.-

“Artículo 61 A. Definición. La política monetaria estará a cargo del Banco Central de Chile que será un organismo autónomo, con patrimonio propio y de carácter técnico. Tendrá a su disposición los instrumentos de política monetaria, los cuales aplicará con miras a contribuir al bien común, al bienestar social y al sano desarrollo de la economía.”

Indicación N° 222 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para suprimir el art. 61 A. Sometida a votación fue **aprobada (14-5-0)**.

Indicación N° 223 de CC Harboe para sustituir el artículo 61A por uno del siguiente tenor:

“Artículo 61A.- Existirá un organismo del Estado, autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico, denominado Banco Central, cuya composición, organización, funciones y atribuciones determinará una ley orgánica constitucional.

Los candidatos propuestos para componer el Consejo del Banco Central, y de forma previa a la votación respectiva, deberán formular una exposición de su postulación al cargo respectivo en una sesión especial y pública ante la Sala del Senado.”

Se entiende **rechazada** por incompatible.

Al artículo 61 B que se suprime.-

“Artículo 61 B. Del Banco Central. El Banco Central es un organismo autónomo, de carácter técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos.”

Indicaciones N° 224 y 225 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez; y Harboe para suprimir el artículo 61 B. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (17-1-0)**.

Al artículo 61 C que pasa a ser 39.-

“Artículo 61 C. Objeto. El Banco Central es un órgano autónomo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, encargado de formular y conducir la política monetaria.

El Banco estará dotado de autonomía orgánica, funcional y financiera respecto del Gobierno.

Su organización, funciones, facultades y sistemas de control, así como la determinación de instancias de coordinación entre el Banco y el Gobierno, serán regulados por una ley aprobada por la mayoría absoluta de los diputados y diputadas en ejercicio.”

El convencional Viera resaltó la importancia de reconocer la autonomía del Banco Central, señalando que los Bancos Centrales en el mundo tienen una función que es controlar la inflación y por ello es muy preciso el inciso primero. Sin perjuicio de que tenga en consideración criterios medioambientales o políticas de empleo. Por todo lo anterior llamó a votar a favor de la indicación N° 227. El convencional Cruz aseveró que este órgano al ser técnico, se diferencia de otros, por cuanto debe formular y conducir la política monetaria.

El convencional Daza informó lo relevante que es tener instancias de coordinación entre el Banco Central y el Gobierno, que en caso alguno es supeditar las funciones de política monetaria al Gobierno de turno.

El convencional Cozzi precisó que el Banco Central ha funcionado en buenos términos, y estuvo de acuerdo con el contenido central del inciso primero de la indicación N° 227. Sin embargo, presentó dudas acerca de la pertinencia del inciso segundo que consigna una instancia de coordinación con el Gobierno.

Indicación N° 226 de CC Harboe para suprimir el artículo 61 C. Sometida a votación fue **rechazada (2-17-0)**.

Indicación N° 227 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para sustituir el artículo 61 C por el siguiente:

“Artículo 1.- Del Banco Central. El Banco Central es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, encargado de formular y conducir la política monetaria.

La ley determinará su organización, atribuciones y sistemas de control, así como la determinación de instancias de coordinación entre el Banco y el Gobierno.”.

Sometida a votación fue **aprobada (18-1-0)**.

Al artículo 61 D que se suprime.-

“Artículo 61 D. Banco Central. Existirá un organismo autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico, denominado Banco Central de Chile, a cargo de la política económica monetaria de Chile.

Contribuirá al bienestar social y desarrollo del país dentro del ámbito de sus competencias, aplicando instrumentos de política monetaria.

La composición, organización, funciones y atribuciones del Banco Central se regularán en una ley orgánica constitucional [de quórum calificado].”

Indicaciones N° 228 y 229 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez; y Harboe para suprimir el artículo 61 D. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (19-0-0)**.

Al artículo 62 que pasa a ser 40.-

“Artículo 62. Fines. En la definición de los instrumentos de política monetaria, el Banco Central deberá considerar el bienestar social y desarrollo del país dentro del ámbito de sus competencias. El Banco Central, además de considerar los niveles de precios futuros para la definición de la Tasa de Política Monetaria, debe tener en cuenta objetivos de pleno empleo, protección y conservación del medio ambiente, desarrollo económico de largo plazo y los demás objetivos que establezca la ley.

El Banco Central de Chile tendrá la obligación de rendir cuenta periódica al Presidenta o Presidente de la República y al Congreso Nacional sobre las políticas a su cargo, respecto de las medidas y normas generales que adopte en el ejercicio de sus funciones, atribuciones y sobre los demás asuntos que se le soliciten mediante informes u otros mecanismos que determine la ley. En este proceso de rendición de cuentas debe tener en cuenta los objetivos ya mencionados u otros que sean establecidos en la ley.”

El convencional Laibe defendió la indicación N° 232 por cuanto establece el objeto del Banco Central y ahonda en algo que está contenido en la Ley Orgánica en lo relativo a velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Además el segundo inciso incluye otros criterios como la estabilidad financiera, volatilidad cambiaria. La protección del empleo es algo que otros Bancos Centrales a nivel mundial consagran. Indicó que se innova en cuanto al cuidado del mediambiente que también está siendo considerado por otros Bancos Mundiales.

El convencional Daza complementó lo dicho y se refirió a la indicación N° 233 que incorpora otros criterios que no forman parte del objetivo, sino que forman parte de los criterios para lograr ese objetivo principal: velar por la estabilidad de los precios. Insistió en que la coordinación en ningún caso implica subordinación, pero es necesaria para que dentro de su autonomía el Banco Central adopte decisiones en el marco de su objeto único.

El convencional Viera suscribió la indicación N° 232 refiriéndose al inciso primero que consagra al Banco Central como órgano técnico que deberá velar por el bien común y estará al servicio de los compatriotas. El Banco Central tiene una finalidad precisa, y contiene una innovación en su inciso segundo con criterios orientadores del mandato único: la política monetaria.

La convencional Royo relevó la importancia de las definiciones en torno al desempeño del Banco Central en el país y la economía chilena. Afirmó que el Banco Central ha tenido una autonomía excesiva. Se refirió al rol del Banco Central aseverando que no debiera ser único y planteó la incorporación de otros objetivos como lo consagra el Banco de Estados Unidos. El convencional Woldarsky se refirió al objeto único del Banco Central que no es suficiente. Estas características del Banco Central deben tener en cuenta la protección del empleo y la protección del medioambiente porque es esta la única posibilidad de revisar un órgano tan importante como el Banco Central y llamó a aprobar la indicación N° 233.

El convencional Jiménez estuvo a favor de la indicación N° 232 porque el Banco Central europeo tiene el mismo modelo que consagra dicha indicación. Se refirió al ejemplo dado del Banco Central estadounidense aseverando que no tiene parangón con el caso chileno. Además se preguntó qué ocurriría en el caso hipotético de que el Banco Central, siguiendo la lógica de la indicación N° 233, no cumpliera dichos objetivos, si acaso tendría alguna sanción pues no dice nada al respecto. Enfatizó que los costos de una mala gestión monetaria la pagan las personas más vulnerables. La convencional Hurtado explicó que la indicación anterior propuesta por su sector, entregaba este deber de transparentar con cuenta pública sus actos. El convencional Gutiérrez se refirió a la hoja en blanco que guía el trabajo del proceso constituyente y llamó a incorporar cosas distintas a las que tiene hoy el Banco Central.

El convencional Cozzi afirmó que deben tomarse en serio la inflación porque afecta a los ingresos de las personas más humildes y es muy inconveniente para el desarrollo de los países. Sin embargo, esos argumentos no quedan plasmados en la indicación N° 232 pues la coordinación será definida con el Gobierno rompiendo con la muralla que tiene con el Banco Central. Si se busca la coordinación con el Gobierno se pierde la autonomía. Finalizó que evaluará la posición en torno al tema con el fin de que a futuro sea aprobada.

El convencional Logan se refirió a las variables de la política monetaria, que no son los objetivos del Banco Central. Además, la indicación ocupa verbos que pueden llevar a interpretar extensivamente los objetivos del Banco Central.

Indicación N° 230 de CC Harboe para suprimir el artículo 62. Sometida a votación fue **rechazada (0-19-0)**.

Indicación N° 231 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir los artículos sobre Banco Central, artículos números 62, 62 A, 62 B, 62 C, 62 D, 63, 63 A, 63 B, 64, 64 A, en el siguiente tenor:

“Artículo 62.- El Banco Central sólo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, sean públicas o privadas. De manera alguna podrá otorgar

a ellas su garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas.

Sin perjuicio de lo anterior, en situaciones excepcionales y transitorias, en las que así lo requiera la preservación del normal funcionamiento de los pagos internos y externos, el Banco Central podrá comprar durante un período determinado y vender, en el mercado secundario abierto, instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, de conformidad a lo establecido en la ley.

Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos o indirectos del Banco Central.

Con todo, en caso de guerra exterior o de peligro de ella, que calificará el Congreso Nacional, el Banco Central podrá obtener, otorgar o financiar créditos al Estado y entidades públicas o privadas.

El Banco Central no podrá adoptar ningún acuerdo que signifique de una manera directa o indirecta establecer normas o requisitos diferentes o discriminatorios en relación a personas, instituciones o entidades que realicen operaciones de la misma naturaleza”.

Sometida a votación fue **rechazada (6-13-0)**.

Indicación N° 232 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para sustituir el actual artículo 62, por el siguiente:

“Artículo 2.- Objeto del Banco Central. Le corresponderá en especial al Banco Central, para contribuir al bienestar de la población, velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, en coordinación con las principales orientaciones de política económica definidas con el Gobierno.

Para el cumplimiento de sus objetivos, el Banco Central deberá considerar la estabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la protección del empleo, la diversificación productiva, el cuidado del medioambiente y patrimonio natural y los principios que señale la Constitución y la ley.”.

Sometida a votación fue **aprobada (11-3-5)**.

Indicación N° 233 de CC Gutiérrez, Hoppe, Llanquileo, Royo y Woldarsky para sustituir el actual artículo 62, por el siguiente:

“Artículo XX.- Objeto. El Banco Central debe contribuir al bienestar de la población y al desarrollo económico sustentable del país. Para ello deberá velar por la estabilidad de los precios, el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, la protección del empleo, la diversificación productiva y el cuidado del medio ambiente, en coordinación con las principales orientaciones de política económica definidas por el Gobierno.”

Se entiende **rechazada** por incompatible con la ya aprobada.

Al artículo 62 A y 62 B que se suprimen.-

“Artículo 62 A. Funciones. El Banco Central velará por la estabilidad de la moneda y la eficacia del sistema financiero, custodiando el normal funcionamiento de los pagos internos y externos.

En la fundamentación de sus decisiones, el Banco Central deberá considerar aspectos como el cambio climático, la sostenibilidad ambiental, el empleo y el nivel de endeudamiento público y privado. Estos aspectos constituirán elementos de deliberación, los que se encontrarán supeditados al debido cumplimiento de sus funciones. Las decisiones del Banco Central, así como sus fundamentos y proyecciones, no estarán sujetas a control político.

El Banco Central deberá velar por la transparencia de sus decisiones, dando cuenta pública de sus actuaciones. Informará, al menos trimestralmente, al Presidente de la República y a la Cámara Plurinacional respecto del ejercicio de sus atribuciones. Asimismo, deberá asesorar al Presidente, cuando éste lo solicite, en todas aquellas materias que digan relación con sus funciones.”

“Artículo 62 B. Sobre el funcionamiento y atribuciones del Banco Central. En el cumplimiento de su objeto, el Banco Central debe tomar en consideración los efectos de la política monetaria en el empleo y en el mercado cambiario en relación con la diversificación productiva.

El Banco Central tiene como atribuciones la regulación de la cantidad de dinero y de crédito en circulación, la ejecución de operaciones de crédito y cambios internacionales, como, asimismo, la dictación de normas en materia monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales.

El Banco Central sólo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, sean públicas o privadas. De manera alguna podrá otorgar a ellas su garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas.

Sin perjuicio de lo anterior, en situaciones excepcionales y transitorias, en las que así lo requiera la preservación del normal funcionamiento de los pagos internos y externos, el Banco Central podrá comprar durante un período determinado y vender, en el mercado secundario abierto, instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, de conformidad a lo establecido en la ley.

Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos o indirectos del Banco Central, salvo en caso de guerra exterior o de peligro de ella, calificados en la forma que establezca la ley.

El Banco Central no podrá adoptar ningún acuerdo que signifique de una manera directa o indirecta establecer normas o requisitos arbitrarios en relación a personas, instituciones o entidades que realicen operaciones de la misma naturaleza.

El Banco Central deberá dar cuenta de sus actuaciones al Congreso de manera trimestral y mantener instancias de coordinación con el Ministerio de Hacienda.”

Indicaciones N° 234, 235 y 236 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez; y Harboe para suprimir los artículos 62 A y 62 B. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (15-0-2)**.

Al artículo 62 C que pasa a ser 41.-

“Artículo 62 C. Fines específicos. Le corresponderá en especial al Banco Central, para contribuir al bienestar de la población, velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, en coordinación con las principales orientaciones de política económica definidas con el Gobierno. De esta forma, contribuirá tanto al desarrollo de una economía sostenible que propenda a un nivel de actividad y empleo acorde a sus fundamentos y capacidad potencial, como el resguardo de la estabilidad financiera.

Las atribuciones del Banco, para estos efectos, serán la regulación de la cantidad de dinero en circulación, la ejecución de operaciones de crédito y cambios internacionales, como, asimismo, la dictación de normas en materia monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales, considerando criterios tales como la estabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la sustentabilidad ambiental, u otros que se establezcan en la ley que lo rija.

El Banco Central rendirá cuenta periódicamente al Presidente de la República y al Congreso Nacional sobre la ejecución de las políticas a su cargo, respecto de las medidas y normas generales que adopte en el ejercicio de sus funciones y atribuciones y sobre los demás asuntos que se le soliciten mediante informes u otros mecanismos que determine la ley.

”

El convencional Daza afirmó que estas atribuciones permiten concretar el cometido del Banco Central, y se condice con el objeto único zanjado en el debate de artículos anteriores.

Indicación N° 237 de CC Harboe para suprimir el artículo 62 C. Sometida a votación fue **rechazada (5-12-2)**.

Indicación N° 238 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para sustituir el actual artículo 62 C, por el siguiente:

“Objeto 3.- Atribuciones. Son atribuciones del Banco Central la regulación de la cantidad de dinero en circulación, la ejecución de operaciones de crédito y cambios internacionales, como, asimismo, la dictación de normas en materia monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales.”

Sometida a votación fue **aprobada (16-3-0)**.

Al artículo 62 D que se suprime.-

“Artículo 62 D. Objetivos y competencias. La función principal del Banco Central será velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Para el cumplimiento de dichas funciones, el Banco Central deberá considerar aspectos como el cambio climático, la sostenibilidad ambiental y el empleo, pero sin poner en riesgo el desempeño de su función principal. Dichos aspectos constituirán exclusivamente elementos de deliberación, que se encontrarán supeditados al debido cumplimiento de las funciones del Banco Central.”

La convencional Bown precisó que una de las consecuencias necesarias de la autonomía del Banco Central es la independencia respecto al poder político. En su opinión es de la postura que haya pocos artículos detallados sobre Banco Central.

Indicación N° 239 y 240 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez; y Harboe para suprimir el artículo 62 D. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (17-0-2)**.

Al artículo 63 que se suprime.-

“Artículo 63. Restricciones y excepción. El Banco Central sólo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, sean estas públicas o privadas. Sin embargo, no podrá otorgar a ellas su garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas.

El Banco Central no podrá adoptar ningún acuerdo que signifique de una manera directa o indirecta establecer normas o requisitos diferentes o discriminatorios con relación a personas, instituciones o entidades que realicen operaciones de la misma naturaleza.

El Banco Central no otorgará créditos, directos o indirectos, que busquen financiar el gasto público o involucren operaciones que puedan comprometer el crédito del Estado, entidades semifiscales, autónomas, gobiernos regionales o de las municipalidades.

Excepcionalmente, en situaciones transitorias, el Banco Central podrá adquirir y ofertar instrumentos de deuda emitidos por el Fisco. Esta decisión deberá adoptarse mediante acuerdo fundado, con el voto favorable de cuatro quintos de los integrantes del Consejo del Banco Central. Estas operaciones deberán llevarse a cabo en el mercado secundario abierto en conformidad a la ley.”

Indicación N° 241 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para suprimir el artículo 63. Sometida a votación fue **aprobada (14-4-1)**.

Indicación N° 242 de CC Harboe para sustituir el artículo 63 por uno del siguiente tenor:

“Artículo 63.- El Banco Central sólo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, sean públicas o privadas. De manera alguna podrá otorgar a ellas su garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas.

Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos o indirectos del Banco Central.

Con todo, en caso de guerra exterior o de peligro de ella, que calificará el Consejo de Seguridad Nacional, el Banco Central podrá obtener, otorgar o financiar créditos al Estado y entidades públicas o privadas.

El Banco Central no podrá adoptar ningún acuerdo que signifique de una manera directa o indirecta establecer normas o requisitos diferentes o discriminatorios en relación a personas, instituciones o entidades que realicen operaciones de la misma naturaleza.”

Se entiende **rechazada** por incompatible.

Al artículo 63 A que pasa a ser 42.-

“Artículo 63 A. De las limitaciones. El Banco Central sólo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, sean éstas públicas o privadas. De ninguna manera podrá otorgar a ellas su garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas.

Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos e indirectos del Banco Central.

Sin perjuicio de lo anterior, en situaciones excepcionales y transitorias en las que así lo requiera la preservación del normal funcionamiento de los pagos internos y externos, el Banco Central podrá comprar durante un período determinado y vender en el mercado secundario abierto, instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, de conformidad a lo establecido en la ley que lo rija.”

El convencional Cruz solicitó votar a favor de la indicación N° 244 pues así como existen prerrogativas también deben existir deberes. El convencional Daza aseveró lo valiosa que es la indicación N° 244 pues toma la norma del artículo 109 de la actual Constitución y establece una excepción donde el Banco Central podrá comprar durante un período determinado y vender, en el mercado secundario abierto en cuyo caso la decisión la adoptará el Consejo con notables diferencias a como ocurre en la actualidad.

Al convencional Cozzi le pareció bien la redacción de la indicación pero le llamó la atención la omisión del inciso quinto del actual artículo 109 pues el Banco Central sí puede discriminar el materia financiera.

Indicación N° 243 de CC Harboe para suprimir el artículo 63 A. Sometida a votación fue **rechazada (2-15-2)**.

Indicación N° 244 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para sustituir el actual artículo 63 A, por el siguiente:

“Artículo 5.- De las limitaciones. El Banco Central sólo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, sean éstas públicas o privadas. De ninguna manera podrá otorgar a ellas su garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas.

Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos e indirectos del Banco Central.

Sin perjuicio de lo anterior, en situaciones excepcionales y transitorias en las que así lo requiera la preservación del normal funcionamiento de los pagos internos y externos, el Banco Central podrá comprar durante un período determinado y vender en el mercado secundario abierto, instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, en conformidad a la ley.”

Sometida a votación fue **aprobada (17-2-0)**.

Al artículo 63 B que se suprime.-

“Artículo 63 B. Restricciones. El Banco Central sólo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, sean públicas o privadas. No podrá otorgar a ellas su garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o

empresas. Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos o indirectos del Banco Central.

Sin perjuicio de lo anterior, en situaciones excepcionales y transitorias, en las que así lo requiera la preservación del normal funcionamiento de los pagos internos y externos, el Banco Central mediante acuerdo fundado del Consejo, adoptado con el voto favorable de al menos cuatro quintos de los consejeros, podrá comprar durante un periodo determinado y vender, en el mercado secundario abierto, para fines de provisión de liquidez, instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, de conformidad a lo establecido en su ley orgánica constitucional.

El Banco Central no podrá adoptar ningún acuerdo que signifique de una manera directa o indirecta establecer normas o requisitos diferentes o discriminatorios en relación a personas, instituciones o entidades que realicen operaciones de la misma naturaleza.”

Indicaciones N° 245 y 246 de Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez; y Harboe para suprimir el artículo 63 B. Sometidas a votación conjunta fueron aprobadas **(15-4-0)**.

Al artículo 64 que pasa a ser 43.-

“Artículo 64. Rendición de cuentas y Provisión de información. El Banco Central rendirá cuenta periódicamente al Presidenta o Presidente de la República y al Congreso Nacional sobre la ejecución de las políticas a su cargo, respecto de las medidas y normas generales que adopte en el ejercicio de sus funciones y atribuciones y sobre los demás asuntos que se le soliciten mediante informes u otros mecanismos que determine la ley.

Dentro de las funciones del Banco se encontrará la de proveer información acerca de la situación económica y financiera de la economía. Deberá considerar para ello la dimensión medioambiental (stock inicial y final de bienes naturales), de género, empleo y desarrollo económico de largo plazo.”

El convencional Stingo explicó que la rendición de cuentas es relevante para dar cuenta de cómo trabaja y opera en sus funciones y así la ciudadanía sepa su actuar. La convencional Hoppe también relevó la importancia de la rendición de cuentas pues establece una obligación de dar cuenta ante el Congreso y va en el sentido de la democracia directa que fijará la Constitución.

Indicación N° 247 de CC Harboe para suprimir el artículo 64. Sometida a votación fue **rechazada (2-16-1)**.

Indicación N° 248 de Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para sustituir el artículo 64, por el siguiente:

“Artículo 4.- Rendición de cuentas. El Banco rendirá cuenta periódicamente al Congreso sobre la ejecución de las políticas a su cargo, respecto de las medidas y normas generales que adopte en el ejercicio de sus funciones y atribuciones y sobre los demás asuntos que se le soliciten mediante informes u otros mecanismos que determine la ley.”

Sometida a votación fue **aprobada (18-1-0)**.

Al artículo 64 A que se suprime.-

“Artículo 64 A. Transparencia y cuenta pública. El Banco Central deberá velar por la transparencia, dará cuenta pública de sus actuaciones, y deberá informar al menos trimestralmente al Presidente de la República y al Senado respecto de las políticas y normas generales que dicte en el ejercicio de sus atribuciones. Asimismo, deberá asesorar al Presidente de la República, cuando éste lo solicite, en todas aquellas materias que digan relación con sus funciones”

Indicaciones N° 249 y 250 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez; y Harboe para suprimir el artículo 64 A. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (18-0-1)**.

Al artículo 65 que se suprime.-

“Artículo 65. Gobernanza, coordinación democrática y probidad. La gobernanza de este organismo recaerá en el Consejo del Banco Central de Chile. La composición de este consejo será paritaria, descentralizada y plurinacional, contemplando la representación sindical y empresarial. Su organización, facultades y sistemas de control, así como sus atribuciones y funciones serán las que la ley señale.

El Consejo elegirá entre sus miembros a una Presidenta o Presidente, que lo representará y tendrá las facultades de dirección y administración que defina la ley.

Este consejo deberá velar porque las funciones del Banco Central se ejerzan en coordinación con la política económica general que defina democráticamente el país. Para ello conformará un espacio de coordinación formal con los ministerios de: Hacienda, Economía, Trabajo y Medioambiente.

No podrán ser miembros del Consejo quienes dentro de los cinco años anteriores a su designación hayan participado en la propiedad o hubiesen sido parte de la gestión o representación de una empresa bancaria, administradora de fondos, o cualquiera otra que preste servicios de intermediación financiera, sin perjuicio de las demás inhabilidades que establezca la ley. Una vez que hayan cesado en sus cargos, los miembros del consejo tendrán las mismas prohibiciones por un periodo de tres años.”

Indicaciones N° 251 y 252 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez; y Harboe para suprimir el artículo 65. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (14-5-0)**.

Indicación N° 253 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir los artículos sobre Banco Central, artículos números 65, 65 A, 65 B, 65 C, 65 D, 66, 67, 68, 69, 69 A, 70, 71 y 72, por el siguiente:

“Artículo 65.- La dirección y administración superior del Banco Central estarán a cargo de un Consejo compuesto por cinco consejeros, designados por el Presidente de la República previo acuerdo del Senado el que deberá ser de dos tercios de sus integrantes en ejercicio. Los miembros del Consejo durarán diez años en sus cargos, pudiendo ser designados para nuevos períodos, y se renovarán por parcialidades, a razón de uno cada dos años.

La proposición de miembros para integrar el Consejo del Banco Central de Chile que el Presidente efectúe al Senado deberá considerar a personas de reconocida trayectoria en la actividad profesional económica o financiera, de a lo menos doce años, propendiendo siempre al fortalecimiento de la autonomía del Banco. Para la debida revisión de los antecedentes de los miembros propuestos por el Presidente de la República, el Senado citará a los candidatos así propuestos a audiencias públicas, las que se realizarán con el único fin de que la instancia se imponga de los antecedentes curriculares y experiencia de los postulantes.

El Presidente del Consejo será designado por el Presidente de la República de entre los miembros del Consejo y durará cinco años en este cargo o el tiempo menor que le reste como consejero, pudiendo ser designado para nuevos períodos.

Los Consejeros del Banco Central no serán objeto de acusación constitucional, interpelación u otro mecanismo de control parlamentario. Los miembros del Consejo cesarán en su cargo por las causales objetivas establecidas en la ley, que impliquen un grave y manifiesto incumplimiento de sus funciones. Este incumplimiento, además, debe ser la causa principal y directa de un daño significativo a la economía del país.

El Consejo del Banco Central enviará un informe de su gestión al Congreso y al Presidente de la República. Para estos efectos realizará una cuenta pública anual.”

Se entiende **rechazada** por incompatible.

Al artículo 65 A y 65 B que se suprimen.-

“Artículo 65 A. Del Consejo y su integración. La dirección y administración superior del Banco estará a cargo del Consejo del Banco Central, al que le corresponderá ejercer las atribuciones y cumplir con las funciones que la ley le encomiende. El Consejo promoverá la integración de la mujer en todos los niveles del Banco Central. Del mismo modo, promoverá el sano encuentro de las diversas naciones, culturas y formas de vida que integran la República.

El Consejo estará constituido por siete integrantes, designados por la Presidencia de la República, con acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de la Cámara Plurinacional. La integración del Consejo cuidará los criterios de paridad, plurinacionalidad y diversidad territorial.

El procedimiento de selección de candidaturas para el Consejo del Banco Central deberá realizarse mediante un concurso público basado en el mérito, de carácter transparente, técnico y fundado. Cumplido lo anterior, se elaborará una nómina de cinco personas, las que se presentarán a la Presidencia de la República para su resolución y designación.

La ley contemplará los requisitos, responsabilidades, inhabilidades e incompatibilidades para las y los consejeros del Banco.”

“Artículo 65 B. Sobre la dirección y administración del Banco Central. La dirección y administración superior del Banco está a cargo de un Consejo, integrado paritariamente por nueve miembros, quienes durarán diez años en su cargo sin reelección y serán designados en parcialidades conforme a lo establecido por la ley, bajo criterios de competencia técnica e independencia política y de los actores del mercado financiero.

El consejo adoptará sus decisiones por la mayoría de sus miembros en ejercicio.

No podrán ser miembros del Consejo quienes dentro de los tres años anteriores a su designación hayan participado en la propiedad o hubiesen sido parte de la gestión o representación de una empresa bancaria, administradora de fondos, o cualquiera otra que preste servicios de intermediación financiera, sin perjuicio de las demás inhabilidades que establezca la ley.

Una vez que hayan cesado en sus cargos, los miembros del consejo tendrán prohibido por un periodo de dos años participar en la propiedad o ser parte de la gestión o representación de una empresa bancaria, administradora de fondos, o cualquiera otra que preste servicios de intermediación financiera, sin perjuicio de las demás inhabilidades que establezca la ley.

El consejo elegirá de entre sus miembros a una Presidenta o Presidente quien ejercerá el cargo durante cinco años, representará al Banco Central y tendrá las facultades de dirección y administración que defina la ley.”

Indicaciones N° 254, 255, 256 y 257 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez; y Harboe para suprimir los artículos 65 y 65 A. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (19-0-0)**.

Al artículo 65 C que pasa a ser 44.-

“Artículo 65 C. Del Consejo del Banco Central. La dirección y administración superior del Banco estará a cargo del Consejo del Banco Central, al que le corresponderá ejercer las atribuciones y cumplir con las funciones que la ley le encomiende al Banco.

El Consejo estará constituido por siete consejeros y consejeras, designados por la o el Presidente de la República, con acuerdo de la Cámara de Diputados y Diputadas, adoptado por la mayoría absoluta de los que se encuentren en ejercicio. Durarán en el cargo por un período de siete años, pudiendo ser designados para el período siguiente, y se renovarán por parcialidades, a razón de uno por cada año.

Los consejeros del Banco Central deben ser profesionales de comprobada idoneidad personal y trayectoria en materias relacionadas con las competencias del Banco y para su designación se considerarán criterios de paridad de género y representación territorial.

La o el Presidente del Consejo será designado por la o el Presidente de la República. Durará tres años o el tiempo menor que le reste como consejero. La o el Presidente del Consejo podrá ser designado para un nuevo periodo en el cargo.

La ley contemplará los requisitos, responsabilidades, inhabilidades e incompatibilidades para las y los consejeros del Banco.”

El convencional Daza argumentó a favor de la indicación N° 259 que modifica el número de integrantes del Consejo pues va en línea de lo afirmado por los expositores en audiencias públicas sobre la materia como por ejemplo el ex Presidente del Banco Central y actual Ministro de Hacienda, señor Mario Marcel. Además la indicación innova en la presidencia del Banco Central para profundizar la autonomía del Banco Central. El convencional Cruz explicó el equilibrio entre la legitimidad democrática y el carácter técnico del Banco Central.

El convencional Cozzi explicó la necesidad de aumentar los integrantes del Consejo pero no está de acuerdo en la forma de nombramiento pues se elimina al Presidente de la República en su mecanismo y se desplaza al Congreso, que es la cámara más política. Esto no va en línea con el acuerdo de presidencialismo adoptado por la Comisión N° 1 de la Convención.

La convencional Hoppe manifestó que de otorgarle el mecanismo de nombramiento al Presidente, sería reforzar su carácter hiperpresidencialista y eso es lo que se intenta morigerar con la indicación N° 259 entregándole al Congreso el nombramiento pues es un organismo representativo y elegido democráticamente. El convencional Mayol discrepó con lo señalado pues el Poder Ejecutivo y Legislativo deben compartir la responsabilidad en el nombramiento. Además, precisó que el Presidente también es elegido democráticamente. El convencional Woldarsky alertó una falsa dicotomía. La opción de la indicación N° 259 mejora el nombramiento donde la terna surgirá de otro órgano autónomo que es la Alta Dirección Pública.

Indicación N° 258 de CC Harboe para suprimir el artículo 65 C. Sometida a votación fue **rechazada (7-12-0)**.

Indicación N° 259 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para sustituir el artículo 65 C, por el siguiente:

“Artículo 6.- Del Consejo del Banco Central. La dirección y administración superior del Banco estará a cargo de un Consejo, al que le corresponderá cumplir las funciones y ejercer las atribuciones que señale la Constitución y la ley.

El Consejo estará integrado por siete consejeras y consejeros designados por la mayoría de los integrantes del Congreso, a partir de ternas propuestas por el Consejo de la Alta Dirección Pública. Durarán en el cargo por un período de nueve años, no reelegibles, renovándose por parcialidades cada tres años en conformidad a la ley.

Los consejeros del Banco Central deben ser profesionales de comprobada idoneidad y trayectoria en materias relacionadas con las competencias de la institución. Para su designación se considerarán criterios de paridad de género y representación territorial.

El Consejo elegirá a su Presidencia la que será ejercida por tres años o el tiempo menor que le reste como consejero. Quien presida el Consejo podrá ser reelegido para un nuevo periodo en el cargo.

La ley determinará los requisitos, responsabilidades, inhabilidades e incompatibilidades para las y los consejeros del Banco.”.

Sometida a votación fue **aprobada (12-6-1)**.

A los artículos 65 D, 66, 67 y 68 que se suprimen.-

“Artículo 65 D. Gobernanza. La dirección y administración superior del Banco Central estará encabezada por un Consejo, integrado por miembros cuyo nombramiento, integración y remoción será determinada por su ley orgánica constitucional. Dicha ley garantizará la autonomía y carácter técnico del Banco Central. Iguales principios se establecerán para los consejeros, tanto en el ejercicio de sus funciones, como en los procedimientos y causales para su remoción. Los consejeros sólo podrán ser removidos por las causales específicamente señaladas en su ley orgánica constitucional, a través de un requerimiento del Presidente de la República con el apoyo de la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados y del Senado respectivamente o a requerimiento de tres quintos de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados y del Senado respectivamente, debiendo dirimir la Corte Suprema dicho requerimiento en pleno.

El Banco deberá buscar la incorporación plena de la mujer en la institución en todos los niveles de su estructura.”

“Artículo 66. De la Presidencia del Consejo. El Consejo del Banco Central será conducido por la Presidencia del Consejo, el cual será designado por la Presidencia de la República. La persona elegida podrá ser reelecta, como máximo, por dos períodos consecutivos. El ejercicio de la presidencia durará tres años, o el tiempo menor que le reste como integrante del Consejo a la persona elegida.

La ley establecerá las atribuciones, responsabilidades e incompatibilidades de la Presidencia del Consejo del Banco Central.”

“Artículo 67. Criterios para la selección. El procedimiento de selección de candidatos y candidatas para consejeros del Banco Central deberá realizarse mediante un concurso público transparente, basado en el mérito, objetivo, técnico y fundado. Cumplido lo anterior, se elaborará una nómina de cinco personas, las que se presentarán a la o el Presidente de la República para su resolución y designación.

La ley regulará el concurso público, el que deberá considerar la participación de la sociedad civil en la selección de las candidaturas.”

“Artículo 68. Duración y renovación. Los consejeros del Banco Central ocuparán el cargo por un período de siete años, pudiendo ser designados para el período siguiente. Se renovarán por parcialidades, a razón de uno por cada año.”

Indicaciones N° 260 a 266 de CC CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez; y Harboe para suprimir los artículos 65 D, 66, 67 y 68. Sometidas a votación fueron **aprobadas (18-0-1)**.

Al artículo 69 que pasa a ser 45.-

“Artículo 69. Inamovilidad y Remoción. Los Consejeros del Banco Central no serán objeto de acusación constitucional, interpelación u otro mecanismo de control parlamentario.

El Presidente de la República, con el acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de la Cámara Plurinacional, podrá remover a alguno o la totalidad de los miembros del Consejo.

La remoción sólo podrá fundarse en la aprobación de acuerdos del Banco que impliquen un grave y manifiesto incumplimiento de sus funciones. Este incumplimiento, además, debe ser la causa principal y directa de un daño significativo a la economía del país.

La persona que haya sido removida del cargo de consejero no podrá ser designada nuevamente.”

El convencional Cruz afirmó que en muchas ocasiones las decisiones pueden afectar a las personas y eso debiera acarrear la responsabilidad. Esto no afecta la

autonomía y establece la necesaria sanción a quien incurra en una actuación que afecte el funcionamiento del Banco Central.

El convencional Cozzi señaló que el mecanismo de remoción no es el adecuado a fin de ejercer su responsabilidad, porque el primero en evaluar el funcionamiento del Banco Central es el mercado. Finalizó señalando que la causal de remoción en lo referido a quienes hayan concurrido con su voto a decisiones que afectan gravemente la consecución del objeto del Banco donde agregaría que esa decisión sea la causa directa del daño causado.

El convencional Daza manifestó que la autonomía es respecto al Presidente de la República. El convencional Woldarsky reforzó la importancia de la independencia de los Consejeros del Banco Central respecto al Gobierno de turno ni a las mayorías circunstanciales. La relevancia de que sean destituidos a través del Pleno de la Corte Suprema es óptimo para fortalecer la independencia.

Indicación N° 267 de CC Harboe para suprimir el artículo 69. Sometida a votación fue **rechazada (4-13-2)**.

Indicación N° 268 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para sustituir el actual artículo 69, por el siguiente:

“Artículo 8°. Responsabilidad de las y los consejeros. Las y los integrantes del Consejo podrán ser destituidos de sus cargos por resolución de la mayoría de los integrantes del pleno de la Corte Suprema, previo requerimiento de la mayoría de quienes ejerzan como consejeros o de un tercio de los congresistas, conforme al procedimiento que establezca la ley.

La remoción sólo podrá fundarse en la circunstancia de que el consejero afectado hubiere realizado actos graves en contra de la probidad pública, o haber incurrido en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades establecidas en la Constitución o la ley, o haya concurrido con su voto a decisiones que afectan gravemente la consecución del objeto del Banco.

La persona destituida no podrá ser designada nuevamente como integrante del Consejo, ni ser funcionaria o funcionario del Banco Central o prestarle servicios, sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley.”.

Sometida a votación fue **aprobada (12-3-4)**.

Al artículo 69 A que se suprime.-

“Artículo 69 A. Cese de las funciones de Consejero. Los Consejeros cesarán en sus funciones por las causales objetivas que establezcan esta Constitución y la ley.”

Indicación N° 269 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para suprimir el artículo 69 A. Sometida a votación fue **aprobada (19-0-0)**.

Al artículo 70 que pasa a ser 46.-

“Artículo 70. Sobre las incompatibilidades de los integrantes del Consejo. La calidad de integrante del Consejo es incompatible con todo cargo o servicio sea o no remunerado que se preste en el sector público o privado, así como con la participación en la propiedad de empresas bancarias y sociedades financieras, hasta por dos años después de haber expirado en funciones, sin perjuicio de las demás incompatibilidades que establezca la ley.”

El convencional Jiménez afirmó que una de las tareas que deben abordarse es evitar la puerta giratoria y por eso se establece una regla de 18 meses de inhabilidad. El convencional Daza afirmó nuevamente la importancia de la autonomía en relación a los principales operadores del mercado.

El convencional Mayol discrepó en cuanto a demonizar al sector privado. Pensó que el periodo de 18 meses dispuesto en la indicación N° 271 es muy largo y lo dispondría en 12 meses, además de extender esa inhabilidad hacia los cargos públicos. El convencional Cozzi precisó que el diseño debe mejorarse y buscar el equilibrio. Se debiera valorar la experiencia en el ámbito privado. La indicación N° 271 podría privarle a personas competentes llegar al cargo de Consejero. Además recalcó la importancia que tiene la inhabilidad posterior de 18 meses en cuyo periodo debieran seguir gozando de su sueldo. La convencional Hurtado creyó necesario establecer este mecanismo de inhabilidades. La convencional Hoppe afirmó que la independencia debe ser respecto al poder político y económico.

Indicación N° 270 de CC Harboe para suprimir el artículo 70. Sometida a votación fue **rechazada (1-17-1)**.

Indicación N° 271 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para sustituir el artículo 70, por el siguiente:

“Artículo 7.- Inhabilidades e incompatibilidades de consejeras y consejeros. No podrán integrar el Consejo quienes en los dieciocho meses anteriores a su designación hayan participado en la propiedad o ejercido como director, gerente o ejecutivo principal de una empresa bancaria, administradora de fondos, o cualquiera otra que preste servicios de intermediación financiera, sin perjuicio de las demás inhabilidades que establezca la ley. Una vez que hayan cesado en sus cargos, los integrantes del consejo tendrán la misma incompatibilidad por un periodo de dieciocho meses.”.

Sometida a votación fue **aprobada (13-0-6)**.

Al artículo 71 y 72 que se suprimen.-

“Artículo 71. La responsabilidad de los consejeros. Los miembros del Consejo podrán ser destituidos de sus cargos por resolución de la mayoría absoluta del pleno del Tribunal Supremo de Justicia, previa petición de la mayoría de quienes ejerzan como consejeros del Banco o de un tercio de los parlamentarios en ejercicio, conforme al procedimiento que establezca la ley. La remoción sólo podrá fundarse en la circunstancia de que el consejero afectado hubiere realizado actos graves en contra de la probidad pública, o por haber incurrido en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades establecidas en la Constitución o la ley, o haya concurrido con su voto a decisiones que afectan gravemente la consecución del objeto del Banco. La persona destituida no podrá ser designada nuevamente como integrante del Consejo, ni ser funcionario del Banco Central o prestarle servicios, sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley.”

“Artículo 72. Norma de cierre legal. Las demás normas sobre composición, organización, funciones y atribuciones del Banco Central se establecerán en una ley.”

Indicaciones N° 272, 273 y 274 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez; y Harboe para suprimir los artículos 71 y 72. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (18-0-1)**.

Al epígrafe “§ Contraloría General de la República” que pasa a ser “Capítulo [XX].- Contraloría General de la República”.-

Indicación N° 275 de CC CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para reemplazar el subtítulo “§ Contraloría General de la República”, por uno nuevo del siguiente tenor: “Capítulo [XX].- Contraloría General de la República”. Sometida a votación fue **aprobada (18-0-1)**.

Al artículo 73 que se suprime.-

“Artículo 73. De la Contraloría General de la República y sus funciones. Un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscalizará el ingreso y la inversión eficiente y eficaz de los fondos del Fisco, de las municipalidades, incluidas todo tipo de corporación municipal, y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes; velará por el cumplimiento del principio de probidad de los funcionarios públicos y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley respectiva.

La ley establecerá su organización interna, la que deberá considerar un organismo colegiado de carácter paritario, denominado Consejo de la Contraloría General de la República ante el cual el Contralor deberá informar sus políticas de fiscalización, sus planes de auditorías y demás que determine la ley.

En ningún caso esta institución podrá ejercer funciones jurisdiccionales.”

Indicación Nº 276 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para suprimir el art. 73. Sometida a votación fue **aprobado (13-6-0)**.

Además, se presentaron las siguientes indicaciones:

Indicación Nº 277 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 73 por el siguiente:

Artículo 73.- Un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades, fundaciones y corporaciones de derecho público, y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes; llevará la contabilidad general de la Nación, y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley respectiva.”

Indicación Nº 278 de CC Harboe para sustituir el artículo 73 por uno del siguiente tenor:

“Artículo 73.- Un organismo del Estado, autónomo, con el nombre de Contraloría General de la República ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes; examinará y juzgará las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades; llevará la contabilidad general de la Nación, y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva.

La Contraloría, con motivo del control de legalidad o de las auditorías, no podrá evaluar los aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o administrativas.

El Contralor General de la República deberá tener a lo menos diez años de título de abogado, haber cumplido cuarenta años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. Será designado por el Presidente de la República con acuerdo del Senado adoptado por los tres quintos de sus miembros en ejercicio, por un período de ocho años y no podrá ser designado para el período siguiente. Con todo, al cumplir 75 años de edad cesará en el cargo. Previo a la votación del Senado, el candidato propuesto deberá formular una exposición de su postulación al cargo respectivo en una sesión especial y pública ante la Sala del Senado.”

Las **indicaciones Nº 277 y 278** se entienden **rechazadas** por incompatibles con la ya aprobada.

Al artículo 73 A que se suprime.-

“Artículo 73 A. De la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República es un organismo autónomo y técnico, que ejercerá el control

de la legalidad de los actos de la Administración, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las regiones autónomas, de los gobiernos locales y de los demás órganos que forman parte de la administración del Estado; examinará las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades; y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley respectiva.

Gozará de autonomía presupuestaria para el cumplimiento de sus funciones. Corresponderá a la ley determinar la forma en que se hará efectiva dicha autonomía.

La Contraloría General de la República, con motivo del control de legalidad o de las auditorías, no podrá evaluar los aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o administrativas.

La Contraloría podrá interpretar las normas jurídicas para el ámbito administrativo, por medio de dictámenes, emitidos de oficio o a petición de un órgano de la administración del Estado.

Una ley determinará la organización, funcionamiento, procedimientos y fijará la planta, régimen de remuneraciones y estatuto de su personal de la Contraloría General de la República.”

Indicaciones Nº 279, 280 y 281 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez; Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain; y Harboe para suprimir el artículo 73 A.

Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (18-1-0)**.

Al artículo 73 B que pasa a ser 47.-

“Artículo 73 B. Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República es un organismo técnico, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de ejercer el control de constitucionalidad y legalidad de los actos de la Administración del Estado, entidades autónomas, de las Municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen la Constitución y la ley. Además estará encargado de fiscalizar el ingreso, cuentas y gasto de los fondos públicos; llevar la contabilidad general del país; y desempeñar las demás funciones que le encomiende la Constitución y la ley.

La organización, funcionamiento, planta, atribuciones y procedimientos de la Contraloría General de la República serán establecidos por la Constitución y la ley.”

El convencional Viera defendió la indicación Nº 284 pues rescata un órgano que ha tenido un buen funcionamiento, y se extiende la realización de auditoría que será determinada por ley. El convencional Bravo se expresó en el mismo sentido.

Indicaciones Nº 282 y 283 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain; y Harboe para suprimir el artículo 73 B. Sometidas a votación fueron **rechazadas (5-13-1)**.

Indicación Nº 284 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para reemplazar el artículo 73 B, por un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo 73.- De la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República es un órgano técnico, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargada de velar por el cumplimiento del principio de probidad en la función pública, ejercer el control de constitucionalidad y legalidad de los actos de la Administración del Estado, incluidos los gobiernos regionales, locales y demás entidades, organismos y servicios que determine la ley.

Estará encargado de fiscalizar y auditar el ingreso, cuentas y gastos de los fondos públicos.

En el ejercicio de sus funciones, no podrá evaluar los aspectos de mérito o conveniencia de las decisiones políticas o administrativas.

La ley establecerá la organización, funcionamiento, planta, procedimientos y demás atribuciones de la Contraloría General de la República.”

Sometida a votación fue **aprobada (16-0-3)**.

Al artículo 73 C que se suprime.-

“Artículo 73 C. La Contraloría General de la República es un órgano autónomo cuyas funciones serán controlar la legalidad de los actos de la Administración del Estado, auditar la utilización de fondos públicos, interpretar de forma vinculante la legislación administrativa, medir el grado de avance de la implementación de derechos sociales y desempeñar las demás tareas que le encomiende la ley.”

Indicaciones Nº 285, 286 y 287 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez; Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain; y Harboe para suprimir el artículo 73 C. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (18-1-0)**.

Al artículo 74 que pasa a ser 48.-

“Artículo 74. El Contralor General de la República será designado por el Presidente de la República con acuerdo de la Cámara de Diputados y Diputadas adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, por un período de ocho años y no podrá ser designado para el período siguiente. Esta designación deberá realizarse a partir de una propuesta plurinominal seleccionada por el Consejo de Alta Dirección Pública. Los candidatos y candidatas no podrán haber desempeñado cargos de elección popular ni haber sido candidatos a ellos, así como tampoco podrán haber desarrollado funciones en el Gobierno o Administración del Estado en cargos que sean de exclusiva confianza del Presidente de la República, en los últimos cuatro años.

Con todo, al cumplir 75 años de edad cesará en el cargo.”

El convencional Daza se refirió a la labor de la Contraloría como fiscalizador de la legalidad de los actos de la administración y, en ese sentido, es necesario excluir de su nombramiento al máximo jefe de la administración, esto es, al Presidente de la República. El convencional Jiménez afirmó la necesidad de mantener una dirección unipersonal.

Indicación Nº 288 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para reemplazar el artículo 74, por un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo 74.- De la dirección de la Contraloría General de la República. La dirección de la Contraloría General de la República estará a cargo de una Contralora o Contralor General, quien será designado por el Congreso, a partir de una terna elaborada por el Consejo de Alta Dirección Pública.

Un Consejo de la Contraloría, cuya conformación y funcionamiento determinará la ley de la Contraloría, aprobará anualmente el programa de fiscalización y auditoría de servicios públicos, determinando servicios o programas que, a su juicio, deben necesariamente ser incluidos en el programa referido.

Los dictámenes que modifican la jurisprudencia administrativa de la Contraloría, deberán ser consultados ante el Consejo.”

Sometida a votación fue **aprobada (14-4-0)**.

Además, se presentaron las siguientes indicaciones:

Indicación Nº 289 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 74 por el siguiente:

“Artículo 74.- El Contralor General de la República deberá tener a lo menos diez años de título de abogado, y poseer las demás calidades necesarias para ser

ciudadano con derecho a sufragio. Será designado por el Presidente de la República que deberá elegir entre una nómina que propondrá el Consejo de Alta Dirección Pública, entre quienes hubieren conseguido las tres mejores calificaciones dentro del señalado concurso público, regulado por la ley. Con todo, al cumplir 75 años de edad cesará en el cargo. Su cargo durará un periodo de seis años y no podrá ser designado para el periodo siguiente”

Indicación Nº 290 de CC Harboe para sustituir el artículo 74 por uno del siguiente tenor:

“Artículo 74.- El Contralor General de la República deberá tener a lo menos diez años de título de abogado, haber cumplido cuarenta años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. Será designado por el Presidente de la República con acuerdo del Senado adoptado por los tres quintos de sus miembros en ejercicio, por un período de ocho años y no podrá ser designado para el período siguiente. Con todo, al cumplir 75 años de edad cesará en el cargo. Previo a la votación del Senado, el candidato propuesto deberá formular una exposición de su postulación al cargo respectivo en una sesión especial y pública ante la Sala del Senado.”

Se entienden **rechazadas** por incompatibles.

Artículo nuevo que se rechaza.-

Indicación Nº 291 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para agregar un nuevo artículo después del 74 que diga lo siguiente:

“Artículo XX.- Existirá un Consejo Asesor Permanente de la Contraloría General de la República, de carácter vinculante, que será el encargado de colaborar en las funciones estratégicas de la institución y demás que establezca la ley.

Estará compuesto por cinco miembros, siendo presidido por el Contralor General de la República, y cuatro consejeros de forma paritaria, que durarán seis años en sus cargos, no podrán ser designados por un nuevo período y se renovarán por parcialidades cada tres años.

Sus miembros deberán ser profesionales que demuestren conocimiento extenso en su área de experticia. Asimismo, una trayectoria profesional mínima de 10 años, y demás requisitos que establezca la ley.

Los Consejeros serán nombrados por el Presidente de la República. Para estos efectos, se formará una nómina de cinco personas que, en cada caso, elaborará la Contraloría General de la República, tras un concurso regulado en la ley.

Los miembros del Consejo cesarán en su cargo por las causales establecidas en la ley. Además, podrán ser removidos por el Contralor General en caso de grave y manifiesto incumplimiento de sus deberes por resolución fundada”

Sometida a votación fue **rechazada (6-13-0)**.

Al artículo 74 A, 74 B y 74 C que se suprimen.-

“Artículo 74 A. La dirección de la Contraloría General de la República estará a cargo de la Contralora General o el Contralor General de la República, quien será designado por la o el Presidente de la República, con acuerdo de la Cámara Territorial (o Congreso Plurinacional), a partir de una terna elaborada por el Consejo de Alta Dirección Pública.

Habrá un Consejo Asesor de la Contraloría General de la República, que participará en la elaboración de las políticas y definiciones estratégicas de la institución, y de los programas anuales de fiscalización y auditoría, y que tendrá las demás atribuciones que establezca la ley. El Consejo Asesor estará compuesto por cinco integrantes, denominados consejeros asesores, y adoptará sus decisiones por la mayoría de sus integrantes.

Las y los consejeros asesores serán designadas o designados por la o el Contralor General, con acuerdo de la Cámara de Diputadas y Diputados (o Congreso Plurinacional), adoptados por los tres quintos de las y los parlamentarios en ejercicio, a partir de una terna elaborada, en cada caso, por el Consejo de Alta Dirección Pública.

Las propuestas de la o el Contralor General de la República, y de las y los consejeros asesores, deberán estar basadas en los principios de mérito, idoneidad y capacidad, privilegiando el conocimiento técnico y experiencia de la persona propuesta en materias vinculadas a las funciones propias de la institución. La o el Contralor General de la República, y las y los consejeros asesores, deberán ser chilena o chileno y tener, a lo menos quince años de título de abogada o abogado, y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadana o ciudadano con derecho a sufragio.

La o el Contralor General de la República durará en el ejercicio de sus funciones por el término de ocho años, no podrá ser designado para el período siguiente, y cesará su cargo al cumplir los 75 años de edad. Las y los consejeros asesores serán designados por periodos de cuatro años, renovables por igual término, por una sola vez.”

“Artículo 74 B. De la dirección y gobernanza de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República actúa bajo la dirección y responsabilidad de un Consejo Contralor, órgano colegiado y paritario compuesto por cinco integrantes, que adoptará sus decisiones por la mayoría de sus miembros en ejercicio.

El Consejo Contralor elegirá de entre sus miembros una Directora o Director, quien representará a la Contraloría General de la República y tendrá las atribuciones de administración que defina la ley.

Para integrar el Consejo Contralor se debe tener la nacionalidad chilena, haber obtenido el título de abogada o abogado con a lo menos diez años de antelación a su designación, contar con comprobada experiencia e idoneidad profesional o académica, no haber sido condenado por delitos en contra de la probidad o que merezca pena aflictiva. Durarán en su cargo ocho años, sin posibilidad de reelección, y serán renovados por parcialidades. Su designación será realizada por concurso público establecido por ley, que resolverá el Pleno del Tribunal Supremo de Justicia por la mayoría de sus integrantes en ejercicio.

Quienes integren el Consejo Contralor cesarán en su cargo al completar su periodo, al cumplir 75 años de edad, por acusación constitucional acogida en su contra, por ser condenado por delito en contra de la probidad o por cualquier un delito que merezca pena aflictiva, o alguna de las demás causales que establezca la ley. No podrá ser elegido en el cargo quien sea o haya sido miembro del Congreso Nacional o haya ocupado algún cargo público, salvo la docencia o en la propia Contraloría, en los dos años inmediatamente anteriores a la elección. Asimismo, quienes hayan integrado el Consejo Contralor no podrán asumir ningún cargo público, trabajar o prestar servicios, a algún órgano de la administración del Estado, salvo la docencia o en la propia Contraloría.”

“Artículo 74 C. Una Contralora o Contralor dirigirá la Contraloría General de la República. Su designación será adoptada por el Congreso Nacional en votación adoptada por la mayoría de sus miembros en ejercicio, previa audiencia pública de los tres candidatos o candidatas que hayan obtenido el mayor número de patrocinios parlamentarios, con un máximo de un tercio de los parlamentarios en ejercicio. Las y los candidatos deberán tener una comprobada idoneidad profesional o académica. Durará en su cargo 9 años, será inamovible y cesará en él al cumplir 70 años de edad.”

Indicaciones Nº 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299 y 300 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez; Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen,

Monckeberg y Larrain; y Harboe para suprimir los artículos 74 A, 74 B y 74 C. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (16-2-1)**.

Al artículo 75 que pasa a ser 49.-

“Artículo 75. Ejercicio de las funciones de la Contraloría. En el ejercicio de la función de control de legalidad, el Contralor General tomará razón de los decretos y resoluciones que, en conformidad a la ley, deben tramitarse por la Contraloría o representará la ilegalidad de que puedan adolecer; pero deberá darles curso cuando, a pesar de su representación, el Presidente de la República insista con la firma de todos sus Ministros, caso en el cual deberá enviar copia de los respectivos decretos a la Cámara de Diputados y Diputadas. En ningún caso dará curso a los decretos de gastos que excedan el límite señalado en la Constitución y, en este caso, remitirá copia íntegra de los antecedentes a la misma Cámara.

Corresponderá, asimismo, al Contralor General de la República tomar razón de los decretos con fuerza de ley, debiendo representarlos cuando ellos excedan o contravengan la ley delegatoria o sean contrarios a la Constitución.

Si la representación tuviere lugar con respecto a un decreto con fuerza de ley, a un decreto promulgatorio de una ley o de una reforma constitucional por apartarse del texto aprobado, o a un decreto o resolución por ser contrario a la Constitución, el Presidente de la República no tendrá la facultad de insistir, y en caso de no conformarse con la representación de la Contraloría deberá remitir los antecedentes a la Corte Constitucional dentro del plazo de diez días, a fin de que éste resuelva la controversia.

De igual modo estarán sometidos al trámite de toma de razón los actos administrativos reglamentarios de las autoridades regionales y las municipalidades. Si la representación fuera por razones de constitucionalidad, el organismo respectivo podrá impugnar ante la Corte Constitucional, de conformidad a lo señalado en el inciso anterior.”

Indicación Nº 301 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir los artículos 75, 75 A y 75 B, por el siguiente:

“Artículo 75.- En el ejercicio de la función de control de legalidad, el Contralor General tomará razón de los decretos y resoluciones que, en conformidad a la ley, deben tramitarse por la Contraloría o representará la ilegalidad de que puedan adolecer; pero deberá darles curso cuando, a pesar de su representación, el Presidente de la República insista con la firma de todos sus Ministros, caso en el cual deberá enviar copia de los respectivos decretos a la Cámara de Diputados. En ningún caso dará curso a los decretos de gastos que excedan el límite señalado en la Constitución y remitirá copia íntegra de los antecedentes a la misma Cámara.

Corresponderá, asimismo, al Contralor General de la República tomar razón de los decretos con fuerza de ley, debiendo representarlos cuando ellos excedan o contravengan la ley delegatoria o sean contrarios a la Constitución.

Si la representación tuviere lugar con respecto a un decreto con fuerza de ley, a un decreto promulgatorio de una ley o de una reforma constitucional por apartarse del texto aprobado, o a un decreto o resolución por ser contrario a la Constitución, el Presidente de la República no tendrá la facultad de insistir, y en caso de no conformarse con la representación de la Contraloría deberá remitir los antecedentes al Tribunal Constitucional dentro del plazo de diez días, a fin de que éste resuelva la controversia.

En lo demás, la organización, el funcionamiento y las atribuciones de la Contraloría General de la República serán materia de una ley de quorum calificado constitucional.”

Sometida a votación fue **rechazada (6-13-0)**.

Indicación Nº 302 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para reemplazar el artículo 75, por un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo 75.- Del control de constitucionalidad y legalidad de la Contraloría. En el ejercicio del control de constitucionalidad y legalidad, la Contraloría General tomará razón de los decretos, resoluciones y otros actos administrativos o representará su ilegalidad. Sin embargo, deberá darles curso cuando la o el Presidente de la República insista con la firma de todos sus Ministros, debiendo enviar copia de los respectivos decretos al Congreso.

En ningún caso dará curso a los decretos de gastos que excedan el límite señalado en la Constitución o la ley y remitirá copia íntegra de los antecedentes al Congreso.

Tratándose de la representación por inconstitucionalidad no procederá insistencia y el pronunciamiento de la Contraloría será reclamable ante el tribunal que señale la ley.

Además, le corresponderá tomar razón de los decretos con fuerza de ley, debiendo representarlos, cuando ellos excedan o contravengan la respectiva ley delegatoria.

Respecto de los decretos, resoluciones y otros actos administrativos de entidades territoriales que, de acuerdo a la ley, deban tramitarse por la Contraloría, la toma de razón corresponderá a la respectiva contraloría regional. Los antecedentes que debieran remitirse, en su caso, lo serán a la correspondiente asamblea regional.”

Sometida a votación fue **aprobada (13-0-5)**.

La **indicación Nº 303** de CC Harboe para sustituir el artículo 75 por uno del siguiente tenor:

“Artículo 75.- En el ejercicio de la función de control de legalidad, el Contralor General tomará razón de los decretos y resoluciones que, en conformidad a la ley, deben tramitarse por la Contraloría o representará la ilegalidad de que puedan adolecer; pero deberá darles curso cuando, a pesar de su representación, el Presidente de la República insista con la firma de todos sus Ministros, caso en el cual deberá enviar copia de los respectivos decretos a la Cámara de Diputados. En ningún caso dará curso a los decretos de gastos que excedan el límite señalado en la Constitución y remitirá copia íntegra de los antecedentes a la misma Cámara.

Corresponderá, asimismo, al Contralor General de la República tomar razón de los decretos con fuerza de ley, debiendo representarlos cuando ellos excedan o contravengan la ley delegatoria o sean contrarios a la Constitución.

Si la representación tuviere lugar con respecto a un decreto con fuerza de ley, a un decreto promulgatorio de una ley o de una reforma constitucional por apartarse del texto aprobado, o a un decreto o resolución por ser contrario a la Constitución, el Presidente de la República no tendrá la facultad de insistir, y en caso de no conformarse con la representación de la Contraloría deberá remitir los antecedentes al Tribunal Constitucional dentro del plazo de diez días, a fin de que éste resuelva la controversia.

En lo demás, la organización, el funcionamiento y las atribuciones de la Contraloría General de la República serán materia de una ley orgánica constitucional.”.

Se entiende **rechazada** por incompatible.

Al artículo 75 A y 75 B que se suprimen.-

“Artículo 75 A. Del control de legalidad de la Contraloría. En el ejercicio de la función de control de juridicidad, la o el Contralor General tomará razón de los decretos y resoluciones que, en conformidad a la ley, deben tramitarse por la Contraloría, o representará la ilegalidad de que puedan adolecer; pero deberá darles curso cuando, a pesar de su representación, la o el Presidente de la República insista con la firma de todos sus Ministros, caso en el cual deberá enviar copia de los respectivos decretos a la Cámara de Diputadas y Diputados. En ningún caso dará curso a los decretos de gastos que excedan el límite señalado en la Constitución y remitirá copia íntegra de los antecedentes a la misma Cámara.

Tratándose de decretos y resoluciones de órganos descentralizados que, de acuerdo a la ley, deban tramitarse por la Contraloría, la toma de razón corresponderá a la respectiva contraloría regional. Los antecedentes que debieran remitirse, en su caso, lo serán a la correspondiente asamblea legislativa regional.

En lo demás, la organización, el funcionamiento y las atribuciones de la Contraloría General de la República serán materia de una ley.”

“Artículo 75 B. Del control de constitucionalidad y legalidad de la Contraloría General de la República. En el ejercicio de su función de control de constitucionalidad y legalidad, la Contraloría General de la República tomará razón de los decretos, resoluciones y demás actos administrativos que deben tramitarse por ella según lo que defina su Consejo Contralor, o representará la antijuridicidad de que puedan adolecer.

Le corresponderá, asimismo, tomar razón de los decretos con fuerza de ley, debiendo representarlos cuando ellos excedan o contravengan la ley delegatoria o sean contrarios a la Constitución.

La Contraloría General de la República, con motivo del control de constitucionalidad, legalidad o de sus auditorías, no podrá evaluar los aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o administrativas que controle.

En caso de representación por la Contraloría, el Presidente de la República podrá insistir junto a la firma de todos sus Ministros. En caso de insistencia, la Contraloría General de la República deberá dar curso al acto representado. En ningún caso se podrá insistir respecto de la representación realizada a decretos de gastos que excedan el límite señalado en la Constitución o la ley, a decretos con fuerza de ley o a actos que sean considerados contrarios a la Constitución.”

Indicaciones Nº 304, 305, 306 y 307 de CC CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez; y Harboe para suprimir los artículos 75 A y 75 B. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (19-0-0)**.

Al artículo 76 que pasa a ser 50.-

“Artículo 76. De la potestad para emitir dictámenes y la facultad fiscalizadora de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República podrá emitir dictámenes obligatorios para toda autoridad, funcionario o empleado de cualquier órgano integrante de la Administración del Estado, de la Administración de las Regiones y de las Municipalidades, incluyendo los directivos de empresas públicas o sociedades en las que tenga participación una entidad estatal o regional.

La Contraloría General de la República no podrá evaluar los aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o administrativas, ni se abocará sobre asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso o sometidos al conocimiento de los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio del deber de colaboración que le recae con los Tribunales de Justicia.

Los órganos de la Administración del Estado, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades, órganos autónomos, empresas públicas, sociedades en que el Estado tenga participación, personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos fiscales o administren bienes públicos, y los demás que defina la ley, estarán sujetos a la fiscalización y auditorías por parte de la Contraloría General de la República. La ley establecerá los procedimientos para el ejercicio de estas potestades fiscalizadoras y auditoras.

La Contraloría General de la República podrá solicitar de las distintas autoridades, funcionarios o empleados de todos los órganos sometidos a su control, los datos e informaciones que necesite para el mejor desempeño de sus labores. La falta de observancia oportuna de estos requerimientos podrá ser sancionada en conformidad a la ley. Para el cumplimiento de toda instrucción, resolución o dictamen, la Contraloría General de la República podrá solicitar auxilio de la fuerza pública en los mismos términos que los Tribunales de Justicia.”

Indicación Nº 308 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para reemplazar el artículo 76, por un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo 76.- De la potestad para emitir dictámenes y la facultad fiscalizadora de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República podrá emitir dictámenes obligatorios para toda autoridad, funcionario o trabajador de cualquier órgano integrante de la Administración del Estado, de las regiones y de las comunas, incluyendo los directivos de empresas públicas o sociedades en las que tenga participación una entidad estatal o cualquier otra entidad territorial.

Los órganos de la Administración del Estado, los Gobiernos Regionales y locales, órganos autónomos, empresas públicas, sociedades en que el Estado tenga participación, personas jurídicas que dispongan de recursos fiscales o administren bienes públicos, y los demás que defina la ley, estarán sujetos a la fiscalización y auditorías de la Contraloría General de la República. La ley regulará el ejercicio de estas potestades fiscalizadoras y auditoras.”.

Sometida a votación fue **aprobada (14-1-4)**.

Al artículo 77 que pasa a ser 51.-

“Artículo 77. De las contralorías regionales. La Contraloría General de la República se desconcentrará territorialmente, mediante contralorías regionales, situadas en cada una de las regiones del país.

La dirección superior de cada contraloría regional estará a cargo de una o un funcionario designado por la o el Contralor General de la República, denominado contralor regional, quien será el representante de la Contraloría General de la República en la respectiva región.

Cada contraloría regional ejercerá las funciones jurídicas, de control externo y de contabilidad de la institución, respecto de los actos administrativos y actuaciones de autoridades y funcionarios de órganos y servicios centralizados y descentralizados de la Administración del Estado, en el ámbito de su región, incluyendo los gobiernos regionales, los gobiernos locales y las empresas públicas situadas en la respectiva región, sin perjuicio de los casos que correspondan a la Contraloría General de la República a nivel central, conforme a la ley.

Las contralorías regionales ejercerán sus funciones con la mayor eficiencia y coordinación. En el ejercicio de sus funciones tendrán la más amplia iniciativa, velando especialmente por mantener la unidad de acción, con el fin de aplicar un criterio uniforme en todo el territorio del país.

La ley determinará las demás atribuciones de las contralorías regionales y regulará su organización y funcionamiento.”

El convencional Daza señaló la importancia de las Contralorías regionales. Afirmó que la distribución del poder en múltiples órganos a nivel nacional es una buena idea, pero genera riesgos que deben ser disipados a través de un órgano fuerte. En ese contexto, la indicación Nº 309 dispone que las Contralorías regionales deban mantener la unidad de acción. El convencional Bravo se manifestó en el mismo sentido porque mejora la redacción del artículo original y aclaró que las Contralorías regionales ya existen, solo que con esta indicación se elevan a rango constitucional. Será la ley quien regule lo relativo a las atribuciones y funcionamiento de ellas.

El convencional Gutiérrez explicó la importancia de las autonomías regionales y afirmó que la propuesta de la indicación Nº 309 es la correcta porque resguarda el proceso de regionalización, pero manteniendo la unidad. El convencional Logan abogó en favor de la indicación Nº 309 que ayuda a la unificación de criterios. Llamó la atención sobre la atribución de fiscalizar entidades públicas, donde puede ocurrir una situación no fiscalizable en la hipótesis de que las municipalidades creen personas jurídicas de derecho privado.

Indicación Nº 309 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para reemplazar el artículo 77, por un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo 77.- De las Contralorías Regionales. La Contraloría General de la República funcionará desconcentradamente en cada una de las regiones del país mediante Contralorías Regionales.

La dirección de cada contraloría regional estará a cargo de una o un Contralor Regional, designado por la o el Contralor General de la República.

En el ejercicio de sus funciones deberán mantener la unidad de acción, con el fin de aplicar un criterio uniforme en todo el territorio del país.

La ley determinará las demás atribuciones de las Contralorías Regionales y regulará su organización y funcionamiento.”

Sometida a votación fue **aprobada (19-0-0)**.

Al artículo 77 A que se suprime.-

“Artículo 77 A. De las Contralorías Regionales. Existirá en cada Región una Contraloría Regional, que serán órganos desconcentrados, encargados del control de constitucionalidad y legalidad, en primera instancia, de todos los actos administrativos emitidos por el Gobierno Regional; Municipalidades; servicios públicos que funcionen dentro de la Región; empresas públicas, sociedades o entidades privadas en las que tengan participación o control entidades regionales o locales; personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos regionales o administren bienes públicos; así como las demás que determine la ley. También se encargará de examinar y auditar las cuentas de estas entidades, en primera instancia.

Cada Contraloría Regional estará a cargo de una Contralora Regional o un Contralor Regional, que durará en su cargo por cinco años, elegido por el Consejo Contralor.

La organización, funcionamiento, planta, atribuciones, procedimientos de las Contralorías Regionales, así como su relación con la Contraloría General de la República, serán establecidos por la Constitución y por la ley.”

Indicación Nº 310 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para suprimir el artículo 77 A. Sometida a votación fue **aprobada (19-0-0)**.

Al artículo 78 que pasa a ser 52.-

“Artículo 78. Condición para el pago de las Tesorerías del Estado. Las Tesorerías del Estado no podrán efectuar ningún pago sino en virtud de un decreto o resolución expedido por autoridad competente, en que se exprese la ley o la parte del presupuesto que autorice aquel gasto. Los pagos se efectuarán considerando, además, el orden cronológico establecido en ella y previa refrendación presupuestaria del documento que ordene el pago.”

No habiendo sido objeto de indicaciones se sometió a votación el artículo 78 del texto sistematizado y fue **aprobado (19-0-0)**.

Al artículo 78 A, 79, 80 y 81 que se suprimen.-

“Artículo 78 A. De los pagos por órganos públicos. Las Tesorerías del Estado no podrán efectuar ningún pago sino en virtud de un decreto o resolución expedido por autoridad competente, en que se exprese la ley o la parte del presupuesto que autorice aquel gasto. Los pagos se efectuarán considerando, además, el orden cronológico establecido en ella y previa refrendación presupuestaria del documento que ordene el pago.

Artículo 79. El grado de avance en la implementación de los derechos sociales establecidos por esta Constitución será medido por la Contraloría General de la República, quien publicará al menos una vez al año, un informe con los indicadores de cumplimiento de estos Para el desarrollo de esta función, la Contraloría considerará los indicadores que las leyes hayan establecido de conformidad al artículo N1.

Artículo 80. Un Consejo de Auditoría Ciudadana, cuya conformación y funcionamiento determinará la ley de la Contraloría, aprobará anualmente el programa de fiscalización y auditoría de servicios públicos, determinando servicios o programas que, a su juicio, deben necesariamente ser incluidos en el programa referido.

Artículo 81. Las leyes que implementen los derechos sociales establecidos en esta Constitución contendrán la especificación de los indicadores de cumplimiento de la política pública que pretendan establecer.”

Indicaciones Nº 311, 312, 313 y 314 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para suprimir los artículos 78 A, 79, 80 y 81. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (18-0-1)**.

Al epígrafe “§ Tribunales Electorales y Servicio Electoral” que pasa a ser “Capítulo XX. Tribunales Electorales y Servicio Electoral”.-

Indicación Nº 315 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para sustituir el título “Tribunales Electorales y Servicio Electoral” por el siguiente “Capítulo XX. Tribunales Electorales y Servicio Electoral”. Sometida a votación fue **aprobada (18-0-1)**.

Al epígrafe “§ Servicio Electoral”.-

No habiendo sido objeto de indicaciones, se sometió a votación el epígrafe y fue **aprobado (17-0-2)**.

Artículo nuevo que se rechaza.-

Indicación Nº 316 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para agregar un nuevo artículo después del epígrafe “Servicio electoral” que contenga el siguiente texto:

“Artículo XX.- Sistema electoral. Habrá un sistema electoral público. Una ley de quórum calificado determinará su organización y funcionamiento, regulará la forma en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios dentro de Chile y en el extranjero, en todo lo no previsto por esta Constitución.

La ley de quórum calificado contemplará, además, un sistema de registro electoral, bajo la dirección del Servicio Electoral, al que se incorporarán, por el solo ministerio de la ley, quienes cumplan los requisitos establecidos por esta Constitución. Esta ley regulará la propaganda y establecerá también un sistema de financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral.

El resguardo del orden público durante los actos electorales y plebiscitarios corresponderá a las Fuerzas Armadas y Carabineros u a otras entidades del modo que indique la ley.

Solo podrá convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos expresamente previstos en esta Constitución”.

Sometida a votación fue **rechazada (5-13-1)**.

Al artículo 82 que pasa a ser 53.-

“Artículo 82. Del Servicio Electoral. El Servicio Electoral es un órgano autónomo de la Administración estatal, revestido de personalidad jurídica y patrimonio propio, que ejercerá la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios; del cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral; de las normas sobre las organizaciones políticas, y las demás funciones que señale la Constitución y la ley.

La dirección superior del Servicio Electoral corresponderá a un Consejo, órgano paritario que ejercerá de forma exclusiva las atribuciones que le encomienden la Constitución y las leyes. El citado Consejo estará integrado por siete consejeros nombrados por el Presidente de la República, previa confirmación de la cámara de representantes, adoptado con el quórum de mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio. Los consejeros nombrados provendrán de un proceso de selección por concurso de alta dirección pública, transparente que se deberá realizar seleccionando a profesionales con destacada actividad académica y especial versación en materias de administración, auditoría y procesos electorales, correspondiendo al Consejo de Alta Dirección Pública elaborar las propuestas plurinominales para la nominación de los candidatos a consejeros del Servicio Electoral. No podrán los postulantes haber desempeñado cargos de elección popular ni haber sido candidatos a ellos, así como tampoco podrán haber desarrollado funciones en el Gobierno o Administración del Estado en cargos que sean de exclusiva confianza del Presidente de la República, en los últimos cuatro años.

Los consejeros del Servicio Electoral durarán diez años en sus cargos. Estos consejeros se someterán al régimen estatutario de la función pública administrativa y al régimen de remuneraciones de esta. El personal del Servicio Electoral se someterá al estatuto administrativo general de la función pública administrativa, correspondiéndole la jefatura administrativa del órgano a un Director Ejecutivo que designará por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio el Consejo del Servicio Electoral.”

La convencional Bown consultó cuáles son las mejoras propuestas por la indicación en comparación al artículo del texto sistematizado. El convencional Cruz se refirió a la composición del Servicio Electoral donde se dispone, a través de la indicación propuesta, que las ternas sean elaboradas por el Consejo de la Alta Dirección Pública, además de establecer un límite de los nombramientos, por ejemplo que no hayan sido candidatos a cargos de elección popular en los últimos 4 años. El convencional Viera señaló que el gran cambio es el régimen de designación de sus integrantes.

Indicación Nº 317 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para reemplazar el artículo 82, por un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo 82.- Del Servicio Electoral. Un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Servicio Electoral, ejercerá la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios, del cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, de las normas sobre organizaciones políticas y las demás funciones que señale la ley.

La dirección superior del Servicio Electoral corresponderá a un Consejo Directivo, el que ejercerá de forma exclusiva las atribuciones que le encomienden la Constitución y las leyes. Dicho Consejo estará integrado por cinco consejeras y consejeros designados por la mayoría absoluta de los integrantes del Congreso, a partir de ternas propuestas por el Consejo de la Alta Dirección Pública. Las y los consejeros durarán ocho años en sus cargos, no podrán ser reelegidos y se renovarán por parcialidades cada cuatro años.

Las y los consejeros deberán ser profesionales de comprobada idoneidad para el cargo. No podrán haber sido candidatas o candidatos, desempeñado un cargo de elección popular, ni haber ocupado cargos de exclusiva confianza en los cuatro años anteriores a su nombramiento.

Las y los consejeros sólo podrán ser removidos por la Corte Suprema a requerimiento de la o el Presidente de la República o de un tercio de los miembros en ejercicio del Congreso por infracción grave a la Constitución o a las leyes, incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en pleno especialmente convocado al efecto y, para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus juezas y jueces en ejercicio.”

Sometida a votación fue **aprobada (14-3-2)**.

Además, se presentaron las siguientes indicaciones:

Indicación Nº 318 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 82 por el siguiente texto:

“Artículo 82.- Servicio Electoral. Un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Servicio Electoral, ejercerá la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios; del cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral; de las normas sobre los partidos políticos, y las demás funciones que señale una ley de quórum calificado. La dirección superior del Servicio Electoral corresponderá a un Consejo Directivo, el que ejercerá de forma exclusiva las atribuciones que le encomienden la Constitución y las leyes.

Dicho Consejo estará integrado por cinco consejeros designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio.

Los Consejeros durarán diez años en sus cargos, no podrán ser designados para un nuevo período y se renovarán por parcialidades cada dos años.

Los Consejeros solo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República o de un tercio de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados, por infracción grave a la Constitución o a las leyes, incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en Pleno, especialmente convocado al efecto, y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio.

La organización y atribuciones del Servicio Electoral serán establecidas por una ley de quorum calificado. Su forma de desconcentración, las plantas, remuneraciones y estatuto del personal serán establecidos por una ley”.

Indicación Nº 319 de CC Harboe para sustituir el artículo 82 por uno del siguiente tenor:

“Artículo 82.- Un organismo del Estado, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Servicio Electoral, ejercerá la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios; del cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral; de las normas sobre los partidos políticos, y las demás funciones que señale una ley orgánica constitucional.

La dirección superior del Servicio Electoral corresponderá a un Consejo Directivo, el que ejercerá de forma exclusiva las atribuciones que le encomienden la Constitución y las leyes. Dicho Consejo estará integrado por cinco consejeros designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. Los Consejeros durarán diez años en sus cargos, no podrán ser designados para un nuevo período y se renovarán por parcialidades cada dos años. Previo a la votación del Senado, los candidatos propuestos deberán formular una exposición de su postulación al cargo respectivo en una sesión especial y pública ante la Sala del Senado.

Los Consejeros sólo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República o de un tercio de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados, por infracción grave a la Constitución o a las leyes, incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en Pleno, especialmente convocado al efecto, y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio. La organización y atribuciones del Servicio Electoral serán establecidas por una ley orgánica constitucional. Su forma de desconcentración, las plantas, remuneraciones y estatuto del personal serán establecidos por una ley.”

Se entienden **rechazadas** por incompatibles con la aprobada.

Artículos 82 A, 82 B, 83, 84, 85 y 86 que se suprimen.-

“Artículo 82 A. Un organismo autónomo y descentralizado denominado Servicio Electoral, tendrá a su cargo la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios; conocerá del escrutinio general y de la calificación de los plebiscitos y elecciones populares proclamando a los candidatos que resulten elegidos. Además, supervisará el cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral y las normas sobre los partidos [y movimientos] políticos; y calificará las elecciones que tengan lugar en aquellas organizaciones privadas que la ley señale, las que deberán sujetarse a las instrucciones generales que imparta el Servicio. La organización y demás atribuciones del Servicio Electoral serán establecidas por la ley.

La dirección superior del Servicio Electoral corresponderá a un Consejo Directivo, el que ejercerá de forma exclusiva las atribuciones que le encomienden la Constitución y las leyes. Dicho Consejo estará integrado por cinco consejeros designados por el Servicio Civil de Alta Dirección Pública. Los Consejeros no podrán haber militado en un partido político, haber sido candidatos a un cargo de elección popular, ni haber ocupado cargos de confianza política en los 5 años anteriores a su nombramiento, durarán seis años en sus cargos, no podrán ser designados para un nuevo período y se renovarán por parcialidades cada dos años.

Los Consejeros solo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República o de un tercio de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados, por infracción grave a la Constitución o las leyes, incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en Pleno, especialmente convocado al efecto, y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio.”

“Artículo 82 B. Del Servicio Electoral. Un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Servicio Electoral, ejercerá la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios; del cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral; de las normas sobre los partidos políticos, y las demás funciones que señale la ley.

La dirección superior del Servicio Electoral corresponderá a un Consejo Directivo, el que ejercerá de forma exclusiva las atribuciones que le encomienden la Constitución y las leyes. Dicho Consejo estará integrado por cinco consejeras y consejeros designados por la o el Presidente de la República, con acuerdo del Congreso, adoptado por los tres quintos de sus integrantes en ejercicio, siendo elegidos de una nómina de cinco personas que, en cada caso, propondrá el Consejo de la Alta Dirección Pública. Las y los consejeros durarán nueve años en sus cargos, no podrán ser designados para un nuevo período y se renovarán por parcialidades cada tres años.

Las y los consejeros sólo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento de la o el Presidente de la República o de un tercio de los miembros en ejercicio del Congreso por infracción grave a la Constitución o a las leyes, incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en pleno, especialmente convocado al efecto, y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus jueces y jueces en ejercicio.

La ley establecerá la organización y atribuciones del Servicio Electoral, su forma de desconcentración, las plantas, remuneraciones y estatuto de su personal.”

“Artículo 83. El Consejo Directivo del Servicio Electoral incluirá en su composición al menos una persona perteneciente a los pueblos y naciones indígenas en su conformación.”

“Artículo 84. El Servicio Electoral deberá contemplar en todos los procesos electorales, donde se elijan representantes indígenas, formas eficaces de difusión de información sobre ellos, los requisitos, reglas y procedimientos que garanticen la efectiva participación de los pueblos y naciones indígenas, sus comunidades, organizaciones y miembros que los componen.”

“Artículo 85. Remoción de consejeros del Servicio Electoral. Los consejeros del Servicio Electoral podrán ser removidos por la Corte Constitucional, a requerimiento del Presidente de la República o de un tercio de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados y Diputadas, por infracción grave a la Constitución o a las leyes, incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en Pleno, especialmente convocado al efecto, y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio.”

“Artículo 86. Organización y funcionamiento del Servicio Electoral. La organización, funcionamiento y demás atribuciones del Servicio Electoral serán establecidas por la ley. Asimismo, sus actos administrativos serán reclamables ante el Tribunal Calificador de Elecciones en la forma que determine la ley.”

Indicaciones Nº 320 a 327 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez; y Harboe para suprimir los artículos 82 A, 82 B, 83, 84, 85 y 86. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobados (18-0-1)**.

Al epígrafe “§ Justicia Electoral/ Tribunales Electorales”.-

Indicación Nº 328 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para suprimir el subtítulo “§ Justicia Electoral”, quedando solo vigente el subtítulo “§ Tribunales Electorales”. Sometida a votación fue **aprobada (19-0-0)**.

Al artículo 87 que pasa a ser 54.-

“Artículo 87. Del Tribunal Calificador de Elecciones: Organización, funcionamiento y competencia. El Tribunal Calificador de Elecciones es un tribunal superior electoral de integración letrada especializada y paritaria, compuesto de siete miembros nombrados por el Presidente de la República con acuerdo de la cámara de diputados o diputadas, adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio. Para estos efectos, se formará una nómina de cinco personas que, en cada caso, elaborará el Consejo de la Judicatura, tras un concurso público de antecedentes y oposición regulado en conformidad a la ley. Los ministros del Tribunal Calificador de Elecciones deberán ser abogados con a lo menos quince años de título, haberse destacado en la actividad profesional o universitaria, de reconocida versación en derecho electoral y derecho público general, no pudiendo tener impedimentos que los inhabiliten para desempeñar el cargo de juez o jueza; y ejercerán su ministerio en régimen de exclusividad y con las prohibiciones de los jueces de la Judicatura. El Tribunal Calificador de Elecciones podrá dictar autos acordados para su organización y una mejor y cumplida administración de justicia.

Será competencia del El Tribunal Calificador de Elecciones:

- a) Conocer del escrutinio general y de la calificación de las elecciones de Presidente de la República, diputados, senadores y gobernadores regionales, de las reclamaciones a que dieren lugar,*
- b) Conocer y resolver los reclamos contencioso administrativos que se entablaren en contra de actos del Servicio Electoral,*
- c) Conocer y resolver las reclamaciones que se formulen en relación a decisiones emanadas de tribunales supremos u órganos equivalentes de partidos políticos constituidos en conformidad a la ley,*
- d) Proclamar los resultados oficiales de dichas elecciones.*

e) Conocer del escrutinio y calificación y resolver los reclamos que se formulen con motivo de los plebiscitos, referéndums, consultas y demás mecanismos de participación directa o semidirecta de la ciudadanía en conformidad a las atribuciones que determine la Constitución y la ley.

El Tribunal Calificador de Elecciones tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los Tribunales Electorales Regionales del país.

Los ministros del Tribunal Calificador de Elecciones durarán diez años en sus funciones, y se someterán a las normas estatutarias, prohibiciones y prerrogativas que la ley establece para los jueces.

El Tribunal Calificador de Elecciones procederá como jurado en la apreciación de los hechos y fallará con arreglo a derecho.

La ley establecerá las plantas de personal del Tribunal Calificador de Elecciones, el estatuto de su personal y las remuneraciones de ministros y personal.

La ley determinará las demás normas de organización, funcionamiento y competencia del Tribunal Calificador de Elecciones.”

El convencional Cruz explicó que la indicación N° 329 tiene por objeto disponer la dedicación exclusiva de los jueces electorales, cuestión indispensable para una debida jurisprudencia en la materia. La convencional Bown preguntó qué ocurriría con el tiempo en que no hay elecciones. El convencional Cruz respondió que el Tribunal Calificador de Elecciones se encarga de conocer apelaciones de los Tribunales Regionales y estos conocen de todo tipo de elecciones de las organizaciones y partidos.

El convencional Bravo afirmó que la nueva Constitución tendrá nuevos mecanismos de democracia directa que repercutirán en el modelo de Justicia Electoral que será permanente. El convencional Daza enfatizó en la composición del Tribunal Calificador de Elecciones, porque destierra el elemento político que lo compone hoy.

Indicación N° 329 CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para reemplazar el artículo 87, por un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo 87.- Del Tribunal Calificador de Elecciones. El Tribunal Calificador de Elecciones conocerá del escrutinio general y de la calificación de las elecciones de las autoridades electas por votación popular a nivel nacional, resolverá las reclamaciones que se suscitaren y proclamará a los que resulten elegidas y elegidos.

Además, conocerá y resolverá los reclamos administrativos que se entablen contra actos del Servicio Electoral y las decisiones emanadas de tribunales supremos u órganos equivalentes de las organizaciones políticas.

Dicho Tribunal conocerá, asimismo, de los plebiscitos nacionales, y tendrá las demás atribuciones que determine la ley.

El Tribunal valorará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

Estará constituido por cinco juezas y jueces, designados en base a criterios de paridad y equidad territorial por el Consejo de la Justicia, los cuales deberán postular en la forma y oportunidad que determine la ley respectiva.

Las juezas y los jueces del Tribunal Calificador de Elecciones durarán seis años en sus funciones.

Una ley regulará la organización y funcionamiento del Tribunal Calificador de Elecciones, plantas, remuneraciones y estatuto del personal.”

Sometida a votación fue **aprobada (14-5-0)**.

Adicionalmente, se presentaron las siguientes indicaciones:

Indicación N° 330 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 87 por el siguiente texto:

“Artículo 87.- Tribunal Calificador de Elecciones. Un tribunal especial, que se denominará Tribunal Calificador de Elecciones, conocerá del escrutinio general y de la calificación de las elecciones de Presidente de la República, de diputados y senadores; resolverá las reclamaciones a que dieren lugar y proclamará a los que resulten elegidos. Dicho Tribunal conocerá, asimismo, de los plebiscitos, y tendrá las demás atribuciones que determine la ley.

Estará constituido por cinco miembros designados en la siguiente forma:

a) Cuatro ministros de la Corte Suprema, designados por esta, mediante sorteo, en la forma y oportunidad que determine la ley de quórum calificado respectiva, y

b) Un ciudadano que hubiere ejercido el cargo de Consejero, Director o Subdirector del Servicio Electoral por un período no inferior a cuatro años, designado por la Corte Suprema en la forma señalada en la letra a) precedente, de entre todos aquéllos que reúnan las calidades indicadas y cuya edad al término de su mandato no sea superior a los 75 años. Las designaciones a que se refiere la letra b) no podrán recaer en personas que sean candidatos o ejerzan cargos de elección popular, Ministro de Estado, Subsecretarios, Delegado presidencial ni dirigente de partido político.

Los miembros de este tribunal durarán cuatro años en sus funciones.

El Tribunal Calificador procederá como jurado en la apreciación de los hechos y sentenciará con arreglo a derecho.

El Tribunal Calificador de Elecciones tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales electorales regionales.

Una ley de quórum calificado regulará la organización y funcionamiento del Tribunal Calificador”.

Indicación Nº 331 de CC Harboe para sustituir el artículo 87 por uno del siguiente tenor

“Artículo 87.- Un tribunal especial del Estado, que se denominará Tribunal Calificador de Elecciones, conocerá del escrutinio general y de la calificación de las elecciones de Presidente de la República, de diputados y senadores; resolverá las reclamaciones a que dieren lugar y proclamará a los que resulten elegidos. Dicho Tribunal conocerá, asimismo, de los plebiscitos, y tendrá las demás atribuciones que determine la ley.

Estará constituido por cinco miembros designados en la siguiente forma:

a) Cuatro ministros de la Corte Suprema, designados por ésta, mediante sorteo, en la forma y oportunidad que determine la ley orgánica constitucional respectiva, y

b) Un ciudadano que hubiere ejercido el cargo de Presidente o Vicepresidente de la Cámara de Diputados o del Senado por un período no inferior a los 365 días, designado por la Corte Suprema en la forma señalada en la letra a) precedente, de entre todos aquellos que reúnan las calidades indicadas.

Las designaciones a que se refiere la letra b) no podrán recaer en personas que sean parlamentarios, candidatos a cargos de elección popular, Ministros de Estado, ni dirigentes de partidos políticos.

Los miembros de este tribunal durarán cuatro años en sus funciones y les serán aplicables las mismas incompatibilidades que esta constitución establece en el art. XX respecto a los diputados de la república.

El Tribunal Calificador procederá como jurado en la apreciación de los hechos y sentenciará con arreglo a derecho.

Una ley orgánica constitucional regulará la organización y funcionamiento del Tribunal Calificador de Elecciones.”

Las indicaciones Nº 330 y 331 se entienden **rechazadas** por incompatibles.

Al artículo 87 A que se suprime.-

“Artículo 87 A. Del Tribunal Calificador de Elecciones. Un órgano autónomo, que se denominará Tribunal Calificador de Elecciones, conocerá del escrutinio

general y de la calificación de las elecciones de las autoridades electas por votación popular a nivel nacional; resolverá las reclamaciones a que dieren lugar y proclamará a los que resulten elegidas y elegidos. Dicho Tribunal conocerá, asimismo, de los plebiscitos nacionales, y tendrá las demás atribuciones que determine la ley.

Estará constituido por cinco juezas y jueces, designados en base a criterios de paridad y equidad territorial, en la siguiente forma:

a) Tres jueces de la jurisdicción ordinaria, designados por el Consejo de Justicia, los cuales deberán postular en la forma y oportunidad que determine la ley respectiva. Las juezas y los jueces electos para el ejercicio de esta función quedarán suspendidos de sus cargos judiciales de origen en tanto se extienda éste.

b) Dos ciudadanas o ciudadanos, designados por el Congreso, que hubieren ejercido el cargo de parlamentaria o parlamentario, habiendo cumplido su periodo completo, sin sanciones del comité de ética del órgano legislativo respectivo y que, por su posición en la escena política, sean garantía de imparcialidad, quienes deberán postular en la forma y oportunidad que determine la ley.

Las designaciones a que se refiere la letra b) no podrán recaer en personas que sean parlamentario, candidato o candidata a cargos de elección popular, Ministro de Estado, ni dirigente de partido político.

Las juezas y los jueces del Tribunal Calificador de Elecciones durarán seis años en sus funciones.

El cargo de jueza o juez del Tribunal Calificador de Elecciones será incompatible con todo empleo o comisión retribuidos con fondos del Fisco, de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado o en las que el Fisco tenga intervención por aportes de capital, y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial.

Asimismo, los cargos de jueza o juez del Tribunal Calificador de Elecciones serán incompatibles con las funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honorem, en las entidades fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales, o en las que el Estado tenga participación por el aporte de capital, o en organizaciones que realicen, con o sin fines de lucro, actividades de asesoría o apoyo parlamentario o a partidos políticos.

El Tribunal Calificador de Elecciones procederá como jurado en la apreciación de los hechos y sentenciará con arreglo a derecho.

Una ley regulará la organización y funcionamiento del Tribunal Calificador de Elecciones, plantas, remuneraciones y estatuto del personal.”

Indicaciones Nº 332, 333 y 334 de Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez; Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain; y Harboe para suprimir el artículo 87 A. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (18-1-0)**.

Al artículo 88 que pasa a ser 55.-

“Artículo 88. **Tribunales Electorales Regionales:** Organización, funcionamiento y competencia. Los Tribunales Electorales Regionales son tribunales superiores electorales de integración letrada especializada y paritaria, compuesto de cinco miembros nombrados por el Presidente de la República con acuerdo de la mayoría absoluta de los diputados o diputadas en ejercicio. Para estos efectos, se formará una nómina de cinco personas que, en cada caso, elaborará el Consejo de la Judicatura, tras un concurso público de antecedentes y oposición regulado en conformidad a la ley. Los ministros de los Tribunales Electorales Regionales deberán ser abogados con a lo menos diez años de título, haberse destacado en la actividad profesional o universitaria, de reconocida versación en derecho electoral y derecho público general, no pudiendo tener impedimentos que los inhabiliten para desempeñar el cargo de juez; y ejercerán su ministerio en régimen de exclusividad y con las prohibiciones de los jueces de la Judicatura. Los Tribunales Electorales Regionales podrán dictar autos acordados para su organización y una mejor y cumplida administración de justicia.

Serán de competencia de los Tribunales Electorales Regionales:

a) Conocer de los contenciosos electorales que se produjeran con motivo de las elecciones en los cuerpos intermedios de la sociedad civil de naturaleza gremial, sindical, vecinal, comunitaria y cooperativa, en conformidad a la ley.

b) Conocer y efectuar el escrutinio general y la calificación de las elecciones administrativas que se verifiquen para las Asambleas Regionales y en los municipios del país, así como conocer y fallar de las reclamaciones a que tienen lugar estas elecciones y proclamar a los candidatos electos.

c) Conocer y resolver, en conformidad a la ley, de los reclamos por notable abandono de deberes o infracción al principio de probidad de alcaldes y concejales, que se formulen por concejales del municipio respectivo.

Las sentencias de los Tribunales Electorales Regionales serán apelables para ante el Tribunal Calificador de Elecciones, en conformidad a la ley de enjuiciamiento electoral.

Los ministros de los Tribunales Electorales Regionales durarán diez años en sus funciones, y quedarán sometidos al régimen estatutario propio de los jueces de la Judicatura.

Los Tribunales Electorales Regionales procederán como jurado en la apreciación de los hechos y fallarán conforme a derecho.

La ley determinará las demás normas de organización, funcionamiento y competencia de estos tribunales, establecerá las plantas de personal de los Tribunales Electorales Regionales, el estatuto de su personal y las remuneraciones de ministros y personal, las que serán equivalentes al escalafón primario, secundario y de empleados de la Judicatura.”

El convencional Cruz manifestó la vinculación que tiene la indicación N° 335 con el artículo anteriormente aprobado porque se especifica la función que deben cumplir los Tribunales Electorales Regionales. Además, la designación parte del Consejo de la Justicia en relación al principio de unidad jurisdiccional y sustituye la valoración de la prueba por la sana crítica. El convencional Daza explicó que la norma mejora la norma vigente en la Constitución. En el mismo sentido se pronunció el convencional Bravo.

Indicación N° 335 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para reemplazar el artículo 88 por un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo 88.- De los Tribunales Electorales Regionales. Habrá tribunales electorales regionales encargados de conocer el escrutinio general y la calificación de las elecciones de nivel regional y comunal, así como resolver las reclamaciones a que dieren lugar y proclamar las candidaturas que resultaren electas. Conocerán, asimismo, de los plebiscitos regionales y comunales, sin perjuicio de las demás atribuciones que determine la ley.

Sus resoluciones serán apelables y su conocimiento corresponderá al Tribunal Calificador de Elecciones en la forma que determine la ley. Igualmente, les corresponderá conocer de la calificación de las elecciones de carácter gremial y de las que tengan lugar en aquellas organizaciones que la ley señale.

Los tribunales electorales regionales estarán constituidos por tres juezas y jueces, designados en base a criterios de paridad y equidad territorial por el Consejo de la Justicia, los cuales deberán postular en la forma y oportunidad que determine la ley respectiva.

Las juezas y los jueces de los tribunales electorales regionales durarán seis años en sus funciones.

Estos tribunales valorarán la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

Una ley regulará la organización y funcionamiento de los tribunales electorales regionales, plantas, remuneraciones y estatuto del personal.”.

Sometida a votación fue **aprobada (16-3-0)**.

Además, se presentaron las siguientes indicaciones:

Indicación Nº 336 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 88 por el siguiente texto:

“Artículo 88.- Tribunales Electorales Regionales. Habrá tribunales electorales regionales encargados de conocer el escrutinio general y la calificación de las elecciones que la ley les encomiende, así como de resolver las reclamaciones a que dieren lugar y de proclamar a los candidatos electos. Sus resoluciones serán apelables para ante el Tribunal Calificador de Elecciones en la forma que determine la ley. Asimismo, les corresponderá conocer de la calificación de las elecciones de carácter gremial y de las que tengan lugar en aquellos grupos intermedios que la ley señale.

Estos tribunales estarán constituidos por un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva, elegido por esta, y por dos miembros designados por el Tribunal Calificador de Elecciones de entre personas que hayan ejercido la profesión de abogado o desempeñado la función de ministro o abogado integrante de Corte de Apelaciones por un plazo no inferior a tres años.

Los miembros de estos tribunales durarán cuatro años en sus funciones y tendrán las inhabilidades e incompatibilidades que determine la ley.

Estos tribunales procederán como jurado en la apreciación de los hechos y sentenciarán con arreglo a derecho.

La ley determinará las demás atribuciones de estos tribunales y regulará su organización y funcionamiento.

Anualmente, se destinarán en la Ley de Presupuestos de la Nación los fondos necesarios para la organización y funcionamiento de estos tribunales, cuyas plantas, remuneraciones y estatuto del personal serán establecidos por ley”.

Indicación Nº 337 de CC Harboe para sustituir el artículo 88 por uno del siguiente tenor:

“Artículo 88.- Habrá tribunales electorales regionales encargados de conocer el escrutinio general y la calificación de las elecciones que la ley les encomiende, así como de resolver las reclamaciones a que dieren lugar y de proclamar a los candidatos electos. Sus resoluciones serán apelables para ante el Tribunal Calificador de Elecciones en la forma que determine la ley. Asimismo, les corresponderá conocer de la calificación de las elecciones de carácter gremial y de las que tengan lugar en aquellos grupos intermedios que la ley señale.

Estos tribunales estarán constituidos por un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva, elegido por ésta, y por dos miembros designados por el Tribunal Calificador de Elecciones de entre personas que hayan ejercido la profesión de abogado o desempeñado la función de ministro o abogado integrante de Corte de Apelaciones por un plazo no inferior a tres años. Los miembros de estos tribunales durarán cuatro años en sus funciones y tendrán las inhabilidades e incompatibilidades que determine la ley. Estos tribunales procederán como jurado en la apreciación de los hechos y sentenciarán con arreglo a derecho. La ley determinará las demás atribuciones de estos tribunales y regulará su organización y funcionamiento.”

Las indicaciones Nº 336 y 337 se entienden **rechazadas** por incompatibles con la ya aprobada.

A los artículos 88 A y 88 B que se suprimen.-

“Artículo 88 A. Los Tribunales Electorales Regionales conocerán las reclamaciones que se presenten en contra de las instrucciones del Servicio Electoral y de actos administrativos de término que dicte dicho servicio; resolverán las reclamaciones a que dieren lugar la calificación de las elecciones y proclamarán a los que resulten elegidos. Sus resoluciones serán apelables ante el Tribunal Superior Electoral en la forma que determine la ley.

Cada Tribunal Electoral Regional estará conformado por tres jueces nominados por el Consejo de la Magistratura. La organización y demás atribuciones de estos tribunales serán establecidas por ley.”

“Artículo 88 B. De los tribunales electorales regionales. Habrá tribunales electorales regionales encargados de conocer el escrutinio general y la calificación de las elecciones de nivel regional y comunal, así como de resolver las reclamaciones a que dieren lugar y de proclamar a las candidaturas que resultaran electas, de los plebiscitos regionales o comunales, y las de más que la ley les encomiende; asimismo conocerá de los plebiscitos regionales o comunales, y tendrán las demás atribuciones que la ley les encomiende.

Sus resoluciones serán apelables para ante el Tribunal Calificador de Elecciones en la forma que determine la ley. Asimismo, les corresponderá conocer de la calificación de las elecciones de carácter gremial y de las que tengan lugar en aquellas organizaciones que la ley señale.

Estos tribunales estarán constituidos por tres juezas y jueces, designados en la siguiente forma:

a) Dos juezas o jueces de la jurisdicción ordinaria, designados por el Consejo de Justicia, los cuales deberán postular en la forma y oportunidad que determine la ley respectiva. Las juezas y los jueces electos para el ejercicio de esta función quedarán suspendidos de sus cargos judiciales de origen en tanto se extienda éste.

b) Una ciudadana o ciudadano, designado por la asamblea legislativa regional respectiva, de entre personas que hayan ejercido la profesión de abogada o abogado por un plazo no inferior a tres años, en la respectiva región.

Las designaciones a que se refiere la letra b) no podrán recaer en personas que sean parlamentario ni integrante de una asamblea legislativa regional, candidato o candidata a cargos de elección popular, ni dirigente de partido político.

Las juezas y los jueces de los tribunales electorales regionales durarán seis años en sus funciones y tendrán las inhabilidades e incompatibilidades que determine la ley.

Estos tribunales procederán como jurado en la apreciación de los hechos y sentenciarán con arreglo a derecho.

La ley determinará las demás atribuciones de los tribunales electorales regionales y regulará su organización y funcionamiento, plantas, remuneraciones y estatuto del personal.”

Indicación Nº 338 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para suprimir los artículos 88 A, 88 B, 89, 89 A y 90. Sometida a votación fue **rechazada (5-14-0)**.

Indicaciones Nº 339, 340, 341 y 342 CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez; y Harboe para suprimir los artículos 88 A y 88 B. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (18-0-1)**.

Al artículo 89 que pasa a ser 56.-

“Artículo 89. Corresponderá al Tribunal Superior Electoral conocer de las apelaciones de las reclamaciones que se presenten en contra de las sentencias de los tribunales electorales regionales.

Este tribunal estará constituido por tres miembros de la Corte Suprema, que deberán cumplir con los demás requisitos que determine la ley.”

El convencional Logan resaltó la indicación Nº 343, sin embargo mostró preocupación por cuanto las atribuciones del Tribunal Calificador de Elecciones dejan fuera el conocimiento de la elección de grupos intermedios. El convencional Cruz señaló que la indicación pretende plegar la justicia electoral a la jurisdicción y mantener la unidad jurisdiccional. El convencional Bravo señaló que en el artículo 88

aprobado con la indicación N° 335 ya está consignada la preocupación del convencional Logan.

Indicación N° 343 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para reemplazar el artículo 89 por un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo 89.- De la gestión y superintendencia. La gestión administrativa y la superintendencia directiva y correccional del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales regionales corresponderán al Consejo de la Justicia.”

Sometida a votación fue **aprobada (14-2-3)**.

A los artículos 89 A y 90 que se suprimen.-

“Artículo 89 A. Enjuiciamiento electoral. La ley establecerá los procedimientos judiciales relativos a los contenciosos sometidos a la competencia de los tribunales de justicia electorales, velando por la garantía del debido proceso.”

“Artículo 90. Financiamiento del Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales. Anualmente, se destinarán en la Ley de Presupuestos los fondos necesarios para la organización y funcionamiento del Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales.”

Indicación N° 344 y 345 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para suprimir los artículos 89 A y 90. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (19-0-0)**.

Al epígrafe “§ De la Dirección de Servicio Civil” que se suprime.-

Indicación N° 346 de CC Cruz y Laibe al epígrafe “§ De la Dirección de Servicio Civil”, para suprimirlo. Sometida a votación fue **aprobada (16-0-0)**.

Al artículo 91 que pasa a ser 57.-

“Artículo 91. De la Dirección de Servicio Civil. Existirá un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, denominado Dirección de Servicio Civil, cuya regulación será determinada por una ley sujeta a un quórum de mayoría absoluta en todo aquello que no sea expresamente regulado por esta Constitución.”

El convencional Cozzi argumentó en favor de la modernización del Estado y, uno de esos aspectos, dice relación con la planta de funcionarios, su mérito, instrumentos de evaluación, mejorar sus condiciones laborales, entre otras. El convencional Viera manifestó que la Alta Dirección Pública sería un sistema asociado al Servicio Civil. Compartió la necesidad de contar con un órgano como este, pero con una redacción más detallada.

Indicación N° 347 de CC Cruz y Laibe, al artículo 91, para sustituirlo por el siguiente texto:

“Artículo 91. Consejo del Servicio Civil.- El Consejo del Servicio Civil será un organismo autónomo de la Administración estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de resguardar los principios de no discriminación, mérito y capacidad en los procedimientos de selección, desarrollo y cese de los cargos públicos que componen el servicio civil, así como su imparcialidad, agilidad y transparencia. Solo se reservará la información cuya difusión pudiera afectar el adecuado funcionamiento de estos procedimientos, en conformidad con la ley.

Integran el servicio civil los cargos de la Administración Pública en el nivel central, regional y municipal, que, bajo la dirección del gobierno correspondiente a cada nivel, implementan las políticas públicas y proveen o garantizan, en su caso, la prestación de servicios públicos, en forma continua y permanente. Su desempeño

deberá ser objetivo y políticamente neutral, en concordancia con el carácter profesional y técnico que les es propio. Se excluyen del servicio civil los cargos de exclusiva confianza que son parte del gobierno central, regional y municipal, y que son declarados como tales por esta Constitución o la Ley atendiendo a la naturaleza de sus funciones.

La dirección superior del Consejo del Servicio Civil estará a cargo de un Consejo Directivo de 7 integrantes que hayan destacado en el ámbito de la gestión pública y tengan, al menos, 15 años de experiencia profesional. 3 integrantes serán nombrados por la Presidencia de la República, a partir de una terna confeccionada por el Congreso. 4 integrantes serán nombrados por el Congreso, a partir de una terna confeccionada por la Presidencia de la República. Los consejeros elegirán de entre ellos a un Presidente y durarán 5 años, pudiendo ser renovados por una vez. Sólo podrán ser removidos anticipadamente por infracción grave de la Constitución o la ley o mal desempeño declarados por la Corte Suprema.

El Consejo Directivo:

a) Conducirá los procesos de selección a partir de las cuales serán nombrados los directivos de los servicios públicos que integren el servicio civil y aprobará su remoción anticipada, que deberá fundarse en incapacidad, mal desempeño o vulneración de la ley. Tratándose de los jefes superiores de servicios, y de los demás casos que la ley y esta Constitución señalen, el Consejo Directivo definirá directamente las nóminas que se propondrán a la autoridad incluyendo en ellas a los postulantes más idóneos para el cargo que se requiera proveer;

b) Promoverá reformas y medidas tendientes al mejoramiento de la gestión del personal del sector público, incluyendo la capacitación, la medición del desempeño y las relaciones laborales;

c) Impartirá normas de aplicación general en materias de gestión y desarrollo de personas en la Administración Pública;

d) Velará por la correcta aplicación de la normativa del servicio civil denunciando, ante las autoridades respectivas, las irregularidades de que conozca, y

e) Desempeñará las demás funciones que señalen esta Constitución y la ley.

La Ley regulará los demás aspectos de la composición, remoción y funcionamiento del Consejo Directivo.”

Sometida a votación fue **aprobada (14-3-1)**.

Además, se presentó la siguiente indicación:

Indicación Nº 348 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 91 por el siguiente:

“Artículo 91.- Un organismo autónomo, de carácter técnico, con el nombre de Dirección de Servicio Civil tendrá a su cargo la superintendencia sobre las relaciones laborales dentro de la Administración del Estado, debiendo velar por un eficiente y efectivo cumplimiento de la función administrativa, en concordancia con los principios y normas que la regulan.

En el cumplimiento de sus funciones, la Dirección de Servicio Civil deberá:

a) Reglamentar los sistemas del sistema de selección de los empleos y cargos públicos;

b) Supervigilar que la realización de los concursos para la provisión de ellos sea realizada en condiciones de igualdad de oportunidades y respetando siempre el carácter técnico y profesional de estas funciones y empleos;

c) Impartir normas de aplicación general en materias de gestión y desarrollo de personas de los Ministerios y servicios dependientes o relacionados a través de

ellos, a fin de asegurar el cumplimiento de estándares en las relaciones laborales de la Administración del Estado;

d) Visar los reglamentos de calificaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado;

e) Diseñar e implementar los planes y programas de inducción, acompañamiento, formación y desarrollo de altos directivos públicos; reglamentará el sistema de evaluación de desempeño de los funcionarios de la Administración del Estado;

f) Fomentar y apoyar la profesionalización y desarrollo de las unidades de personal o gestión de personas de los ministerios y servicios, velando por su mejoramiento continuo y permanente; y,

g) Desempeñar las demás funciones que le encomiende la Constitución y las leyes.

La dirección y administración de la Dirección de Servicio Civil estarán a cargo del Consejo del Servicio Civil, al cual corresponderá ejercer las atribuciones y cumplir con las funciones que establecen esta Constitución y las leyes.

El Consejo estará constituido por cinco integrantes, los que serán designados por el Presidente de la República previa ratificación de dos terceras partes de los senadores en ejercicio. Sus miembros durarán diez años en sus cargos, no pudiendo ser designados para nuevos periodos y debiendo renovarse de a un integrante cada dos años.”

Se entiende **rechazada** por incompatible.

A los artículos 91 A, 92, 93, 94, 95 y 96 que se suprimen.-

“Artículo 91 A. Un órgano autónomo denominado Dirección Nacional del Servicio Civil tendrá la función de regular, implementar y supervigilar la provisión, promoción y gestión de los cargos públicos que componen el servicio civil, así como el funcionamiento de los mecanismos de calificaciones e incentivos a la función pública. Una ley regulará su composición y funcionamiento.”

“Artículo 92.- De las funciones de la Dirección de Servicio Civil. Un organismo autónomo con el nombre de Dirección de Servicio Civil tendrá a su cargo la superintendencia sobre las relaciones laborales dentro de la Administración del Estado, debiendo velar por un eficiente y efectivo cumplimiento de la función administrativa, en concordancia con los principios y normas que la regulan.

En el cumplimiento de sus funciones, la Dirección de Servicio Civil deberá:

a) Reglamentar los sistemas del sistema de selección de los empleos y cargos públicos;

b) Supervigilar que la realización de los concursos para la provisión de ellos sea realizada en condiciones de igualdad de oportunidades y respetando siempre el carácter técnico y profesional de estas funciones y empleos;

c) Impartir normas de aplicación general en materias de gestión y desarrollo de personas de los Ministerios y servicios dependientes o relacionados a través de ellos, a fin de asegurar el cumplimiento de estándares en las relaciones laborales de la Administración del Estado;

d) Visar los reglamentos de calificaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado;

e) Diseñar e implementar los planes y programas de inducción, acompañamiento, formación y desarrollo de altos directivos públicos; reglamentará el sistema de evaluación de desempeño de los funcionarios de la Administración del Estado;

f) Fomentar y apoyar la profesionalización y desarrollo de las unidades de personal o gestión de personas de los ministerios y servicios, velando por su mejoramiento continuo y permanente; y,

g) *Desempeñar las demás funciones que le encomiende la Constitución y las leyes.*”

“Artículo 93. Del Consejo del Servicio Civil. La dirección y administración de la Dirección de Servicio Civil estarán a cargo del Consejo del Servicio Civil, al cual corresponderá ejercer las atribuciones y cumplir con las funciones que establecen esta Constitución y las leyes.

El Consejo estará constituido por cinco integrantes, los que serán designados por el Presidente de la República previa ratificación de dos terceras partes de los senadores en ejercicio. Sus miembros durarán diez años en sus cargos, no pudiendo ser designados para nuevos períodos y debiendo renovarse de a un integrante cada dos años.”

“Artículo 94. Del funcionamiento del Consejo del Servicio Civil. El Consejo deberá funcionar con la asistencia de, a lo menos, tres de sus miembros, y los acuerdos se entenderán adoptados cuando cuenten con el voto favorable de la mayoría de los asistentes, salvo que la ley exija una mayoría especial.”

“Artículo 95. Incompatibilidades. El cargo de consejero será incompatible con todo cargo o servicio, sea o no remunerado, que se preste en el sector privado, con excepción de las labores docentes o académicas y de las funciones desempeñadas en corporaciones o fundaciones, públicas o privadas, que no persigan fines de lucro, siempre que por ellas no perciban remuneración.

También será incompatible con todo cargo o servicio retribuido con fondos fiscales o municipales y con funciones en instituciones fiscales, semifiscales, organismos autónomos, empresas del Estado, y en general, en todo servicio público creado por ley.”

“Artículo 96. Causales de cesación. Un consejero puede ser removido de su cargo sólo con motivo de incapacidad o de un grave y manifiesto incumplimiento de sus funciones, a solicitud del Presidente de la República y con los votos favorables de dos tercios de los senadores en ejercicio.”

Indicaciones Nº 349 a 354 de CC Cruz y Laibe a los artículos 91 A, 92, 93, 94, 95 y 96 para suprimirlos. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (18-0-0)**.

Al epígrafe “§ Servicios Notariales y Registrales de carácter público”.-

La convencional Bown señaló que entiende la mala percepción que hay de las Notarías, pero es una garantía para el sistema democrático. La fe pública debe ser regulada de forma completa. La convencional Royo explicó que la iniciativa tiene por objetivo modernizar el sistema de la fe pública. No puede seguir existiendo el lucro en las Notarías ni en el Conservador de Bienes Raíces. Esta iniciativa busca digitalizar todo el sistema.

El convencional Botto se refirió a la indicación Nº 256 donde es la ley quien establece el pago de tasas o aranceles. El convencional Stingo comentó que es una muy buena idea la de crear el Servicio. El convencional Bravo se refirió a los procesos constituyentes colombiano y ecuatoriano que establecieron normas similares. Llamó a tener cuidado en la implementación de estos cambios.

No habiendo indicaciones se sometió a votación el epígrafe del texto sistematizado y fue **aprobado (17-1-1)**.

Nuevo artículo que pasa a ser 58.-

Indicación Nº 355 de CC Cruz, Botto, Gutiérrez, Daza y Namor para agregar un artículo inicial nuevo en esta materia notarial que señale lo siguiente:

“Artículo.- Es deber del Estado el resguardo de la fe pública, la seguridad del tráfico jurídico, la regulación y supervigilancia en la formación de documentos que tengan valor probatorio o el carácter de auténticos, debiendo garantizar el acceso de la población a estos.

La ley establecerá el pago de tasas o aranceles por las actuaciones que involucren el resguardo de la fe pública en atención a la cuantía y materia del asunto de que se trate.”

Sometida a votación fue **aprobada (15-3-1)**.

Al artículo 97 que pasa a ser 59.-

“Artículo 97. Del Servicio Nacional de Fe Pública. Habrá un Servicio Nacional de Fe Pública, encargado de la certificación de los actos que sean requeridos en conformidad con la ley y del debido registro, guarda, custodia y almacenamiento de los instrumentos respectivos, en conformidad con la ley.

Estará integrado por funcionarios públicos designados en forma objetiva, transparente y en función de sus méritos.

La ley establecerá los actos e instrumentos que serán objeto de este registro, y regulará el funcionamiento, nombramiento, las atribuciones y las obligaciones de transparencia de los funcionarios públicos y todas aquellas otras materias que no estén expresamente reguladas en la Constitución.”

La convencional Bown precisó que está de acuerdo en que estos temas deban propender a un sistema gratuito y que no constituyan una barrera de acceso para nadie, pero no cree que eso deba quedar en la Constitución.

Indicación Nº 356 de CC Cruz, Botto, Gutiérrez, Daza y Namor para sustituir el artículo 97 por el siguiente:

“Artículo.- Existirá un organismo autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico, denominado Consejo Superior para la Fe Pública encargado de la supervigilancia de los procesos de certificación, instrumentación, registro, archivo, custodia y almacenamiento de los instrumentos que determine la ley; los nombramientos y la fiscalización técnica y económica de las instituciones que los lleven a cabo, la solución de controversias suscitadas en el marco de sus atribuciones y del resguardo y protección de los datos personales de la ciudadanía que dichas actuaciones supongan.”

Sometida a votación fue **rechazada (8-9-2)**.

Indicación Nº 357 de CC Hoppe y Royo para sustituir el actual artículo 97 por el siguiente:

“Artículo 97. Del Servicio Nacional de Fe Pública. El Servicio Nacional de Fe Pública, será el órgano encargado de la certificación y del debido registro, guarda, custodia y almacenamiento de los instrumentos públicos y privados que determine la ley.

La designación de los notarios, archiveros y conservadores del Servicio de Fe Pública se realizará de forma objetiva, transparente y en función de sus méritos. La ley regulará los requisitos de su nombramiento, inhabilidades, atribuciones y remuneraciones.”

Sometida a votación fue **aprobada (15-3-1)**.

Artículo nuevo que se rechaza.-

Indicación Nº 358 de CC Cruz, Botto, Gutiérrez, Daza y Namor para agregar el siguiente artículo a continuación del anterior como número 98 en este caso:

“Artículo 98. Composición del Consejo Superior para la Fe Pública.- El Consejo se compone por nueve integrantes elegidos de acuerdo a criterios de paridad de género, plurinacionalidad y mérito, conforme a la siguiente integración:

- a) 3 elegidos por el Consejo Nacional de Justicia
- b) 2 elegidos por la Corte Suprema
- c) 2 elegidos por los pueblos originarios
- d) 1 elegido por el Consejo para la Transparencia
- e) 1 elegido por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas

Las y los integrantes del Consejo Superior para la Fe Pública señalados en las letras a) y b) deberán ser profesionales abogados o abogadas con a lo menos diez años del título correspondiente, que se hubieren destacado en la actividad profesional, académica o en la función pública.

Las y los integrantes del Consejo para la Fe Pública durarán seis años en sus cargos y no podrán ser reelegidos, debiendo renovarse por parcialidades cada tres años de conformidad a lo establecido por la ley.”

Sometida a votación fue **rechazada (2-14-3)**.

Al artículo 98 que pasa a ser 60.-

“Artículo 98.- Es deber del Estado garantizar el acceso gratuito a los servicios auxiliares de administración de Justicia, transitando hacia un modelo digitalizado, que asegure la transparencia, publicidad, simplificación y gratuidad.”

La convencional Hoppe señaló que el objeto de la indicación es digitalizar los registros. La convencional Bown preguntó si con esto se termina con el sistema de receptores privados. El convencional Viera suscribió la buena idea, pero sugirió que la norma vuelva a la Comisión para ser discutida con más detalle. La convencional Royo se manifestó en un sentido similar.

Indicación Nº 359 de CC Hoppe y Royo para sustituir el actual artículo 98 por el siguiente:

“Artículo 98.- Es deber del Estado garantizar el acceso gratuito a todos los servicios auxiliares de administración de Justicia, transitando hacia un modelo digitalizado, que asegure la transparencia, publicidad, simplificación y gratuidad.”

Sometida a votación fue **aprobada (13-4-2)**.

Al artículo 99 que se suprime.-

“Artículo 99.- Los servicios notariales y registrales son públicos. Los requisitos de nombramiento, inhabilidades, atribuciones y remuneraciones de notarios, archiveros y conservadores serán regulados por la ley.”

Indicación Nº 360 de CC Hoppe y Royo para eliminar el actual artículo 99. Sometida a votación fue **aprobada (13-5-1)**.

Al artículo 100 que pasa a ser 61.-

“Artículo 100.- La ley podrá establecer el pago de tasas por actuaciones y certificaciones en atención a la cuantía y materia del asunto de que se trate. Los dineros recaudados irán a beneficio fiscal.”

Indicación Nº 361 de CC Hoppe y Royo para sustituir el actual artículo 100 por el siguiente:

“Artículo 100.- Todos servicios notariales y registrales son públicos. Sólo la ley podrá establecer el pago de tasas por actuaciones y certificaciones en atención a la

cuantía y materia del asunto de que se trate. Los dineros recaudados irán a beneficio fiscal.”

Sometida a votación fue **aprobada (13-4-2)**.

Al epígrafe “§ Servicio Nacional del Consumidor” que pasa a ser “§ Agencia Nacional del Consumidor”.-

El convencional Stingo manifestó la necesidad de que este Servicio cuente con una autonomía para proteger a los consumidores y para establecer políticas en su favor propone este Servicio. El convencional Cozzi manifestó su votación favorable al artículo pues la redacción de la norma está bien configurada sin perjuicio de su perfeccionamiento. Además, es necesario que se garantice un debido proceso en las sanciones.

Indicación Nº 362 de CC Stingo para sustituir el título § Servicio Nacional del Consumidor por el siguiente: “§ Agencia Nacional del Consumidor”. Sometida a votación fue **aprobada (17-1-1)**.

Al artículo 101 que pasa a ser 62.-

“Artículo 101.- El Servicio Nacional del Consumidor es un organismo autónomo, jerarquizado y desconcentrado cuyo principal objetivo es la protección de las personas en su rol de consumidores de bienes y servicios asegurando su participación equitativa en dignidad y derechos.

Corresponderá a este órgano la realización de acciones de información y educación tendientes a difundir los derechos y deberes del consumidor, así como dar cumplimiento a las normas y políticas públicas relacionadas con la materia, asegurando en todo momento igualdad en el trato a los distintos actores del procedimiento.

Para el debido cumplimiento de sus funciones, el Servicio Nacional del Consumidor contará con facultades fiscalizadoras, sancionatorias, normativas y de interpretación de la ley, pudiendo dictar instrucciones y/o circulares complementarias e interpretativas de normas, así como la facultad de mediar en todos aquellos casos en que dicha alternativa parezca apropiada para la resolución del conflicto.

El Servicio Nacional del Consumidor velará por el debido acceso a la Justicia mediante el ejercicio de las acciones, tanto individuales como colectivas de los consumidores.

En los casos de relevancia pública en que sean gravemente comprometidos los derechos al consumidor, el SERNAC deberá hacerse parte de los procedimientos judiciales o administrativos ya iniciados.

El ejercicio de este derecho estará protegido por las acciones constitucionales establecidas en esta Constitución. La acción de tutela operará sobre los actos u omisiones abusivas por quienes provean bienes o servicios.”

Indicación Nº 363 de CC Stingo para sustituir al actual artículo 101 del texto sistematizado, por el siguiente:

“Artículo 101. La Agencia Nacional del Consumidor es un organismo autónomo, cuya finalidad es la protección de las personas en su rol de consumidoras y usuarias de bienes y servicios.

Para el debido cumplimiento de su finalidad, la Agencia Nacional del Consumidor contará con facultades fiscalizadoras, sancionatorias y regulatorias.

Su composición, organización, atribuciones y funciones serán determinadas por una ley.”

Sometida a votación fue **aprobada (16-0-3)**.

Al epígrafe “§ Consejo de Verdad, Reparación y Garantías de no Repetición”.-

No habiendo indicaciones se sometió a votación el epígrafe del texto sistematizado y fue **aprobado (12-6-1)**.

Al artículo 102 que se suprime.-

“Artículo 102.- El Consejo de Verdad, Reparación y Garantías de no Repetición. Existirá un Consejo de Verdad, Reparación y Garantías de no Repetición cuyo objeto será velar por el cumplimiento, por parte del Estado, de sus deberes en materia de derechos de justicia transicional, de carácter permanente y autónomo, que tendrá los siguientes objetivos prioritarios:

1. Convocar, con la máxima celeridad posible, a la formación de las siguientes Comisiones de Verdad Histórica, Reparación Integral y Garantías de No Repetición, conformadas por un grupo de personas de reconocida idoneidad, paritario, plurinacional y con pertinencia cultural y territorial, que elaboren cada una un informe que tendrá por objeto aportar a esclarecer la verdad, identificar la participación en y contribución a vulneraciones de derechos humanos y de la Naturaleza por parte del Estado y de particulares, y recomendar medidas de verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición, respecto de:

a. Las personas, comunidades, territorios y ecosistemas afectados por vulneraciones de derechos humanos y de la Naturaleza, en los casos de contaminación crónica o degradación histórica generada por la minería, la agroindustria, la industria forestal, la salmonicultura, la industria energética y otras actividades productivas en el país.

b. Las violaciones de derechos humanos y usurpación territorial sufridos por los pueblos indígenas y naciones preexistentes desde la Colonia hasta la actualidad, reconociendo en especial los derechos ancestrales sobre el territorio.

c. Las violaciones a los derechos humanos cometidas en la revuelta popular de octubre de 2019, incluyendo los casos de prisión arbitraria.

d. Las niñas, niños y adolescentes víctimas de las políticas de infancia del Estado de Chile, en particular, del Servicio Nacional de Menores, en particular respecto de los deberes del Estado establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño.

e. Los crímenes y las responsabilidades de la Dictadura civil y militar de 1973 a 1990, en especial respecto de responsabilidades civiles y empresariales, de la sustracción de menores, de las víctimas no calificadas, de los efectos de la impunidad, y de las víctimas y perpetradores fallecidos sin que se haya establecido justicia.

2. Recibir los informes realizados por las comisiones de verdad, darlos a conocer a la sociedad toda, poner los antecedentes pertinentes en manos de la justicia y encargarse de que los órganos correspondientes den cumplimiento a las orientaciones y políticas recomendadas.

3. Investigar, recopilar antecedentes y recibir testimonios por iniciativa propia o a partir de una denuncia o solicitud de un individuo o una colectividad, de cualquier violación a los derechos humanos y de la Naturaleza, y formular recomendaciones de verdad, justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición, en conjunto con los pueblos, las víctimas, los colectivos y las organizaciones.

4. Contribuir con las víctimas y sus colectivos al ejercicio del derecho a la justicia, en su amplio sentido, facilitando y entregando los antecedentes y/o información recopilada a las entidades encargadas de representar judicialmente a las víctimas. En aquellos casos de víctimas fallecidas, o de comunidades o colectivos víctimas de violaciones a los derechos humanos y de la Naturaleza en un pasado remoto, el Consejo deberá diseñar mecanismos alternativos que permitan satisfacer el deber del Estado de hacer justicia a través de medidas de restitución histórica, reconocimiento póstumo, medidas de justicia simbólica u otros.

5. Calificar a las víctimas, individuales o colectivas, de violaciones a los derechos humanos y de vulneraciones a la Naturaleza.

6. *Recomendar leyes que garanticen la no repetición de las violaciones a los derechos humanos y de la Naturaleza, a partir del trabajo con las víctimas y sobrevivientes y personas expertas en esas materias.*

7. *Diseñar e impulsar políticas públicas que contribuyan a garantizar el derecho a la memoria, a través de la recuperación, la preservación y el acceso público a sitios de memoria y archivos de memoria y derechos humanos, educación en derechos humanos y pedagogía de la memoria, participación de víctimas y comunidades, gestión autónoma de iniciativas de memoria y otras.*

8. *El Consejo tendrá el deber de preservar, sistematizar y poner a disposición pública los antecedentes recopilados y producidos en el marco de su trabajo y de las comisiones de verdad. Para ello se establecerán condiciones de publicidad y acceso con criterios públicos, consensuados y transparentes, las que se regirán por las mismas normativas del resto de las reparticiones públicas relativas al envío de sus archivos al Archivo Nacional.*

9. *El ejercicio de cualquier otra función o atribución que le confiera la ley.”*

El convencional Viera explicó su voto en contra porque si bien estos Consejos son necesarios, no es necesario que estén en la Constitución. Pensar que los problemas de derechos humanos se solucionarán con su reconocimiento en la Constitución es petrificar el texto. El convencional Laibe coincidió que se podría rigidizar una situación y no le parece conveniente. Además, no le pareció correcto que tenga atribuciones como investigar pues esas facultades son propias de la Defensoría del Pueblo. El convencional Cozzi explicó que la justicia trasicional es aquella que transita de un régimen dictatorial a uno democrático. Además, la propuesta genera confusión en torno a sus competencias.

El convencional Woldarsky explicó que no basta con la discrecionalidad del Gobierno de turno para prevenir violaciones de derechos humanos y en ese contexto defendió la necesidad de contar con una entidad de estas características en la Constitución. La convencional Royo explicó la necesidad de un Consejo como este, que ha sido creado en las constituciones de Sudafrica y Colombia. El convencional Gutiérrez explicó que la Comisión Rettig fue criticada porque devino de un Decreto y no de una ley. Además, afirmó que en un contexto como nuestra democracia no es suficiente una creación a nivel legal de una Comisión porque la realidad demuestra que las violaciones a los derechos humanos no cesan. El convencional Daza se refirió a las violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social y en ese contexto sí es necesario un Consejo como éste, pero se debe analizar cómo se consagrará el Consejo.

El convencional Cruz señaló que la propuesta no tiene bordes claros en relación con el ejercicio de la jurisdicción. Además, rigidiza su composición. Enfatizó que en la justicia transicional se deben consignar límites factuales y temporales, no deben ser de carácter permanente. Explicó que este órgano tiene superposiciones con otros. Finalizó explicando que debería estar en una norma transitoria. El convencional Stingo se manifestó en un sentido similar. La convencional Hurtado manifestó que la propuesta tiene un sesgo ideológico y rechazará la propuesta.

La convencional Llanquileo explicó que las instituciones no han dado respuesta a la violación de derechos humanos. La convencional Hoppe explicó que precisamente hay un régimen transicional y existe un sector político negacionista que afirma la ideologización del tema.

Indicación Nº 364 de CC Hoppe y Royo para sustituir el actual artículo 102 por el siguiente:

“Artículo 102.- El Consejo de Verdad, Reparación y Garantías de no Repetición. Existirá un órgano colegiado, autónomo, con patrimonio propio y personalidad jurídica, cuyo objeto será velar por el cumplimiento por parte del Estado de sus deberes en materia de derechos de justicia transicional.

El Consejo tendrá las siguientes funciones:

a) Convocar a la formación de comisiones de Verdad Histórica, Reparación Integral y Garantías de No Repetición que tengan por objeto esclarecer la verdad, identificar la participación y contribución a vulneraciones de derechos humanos y de la Naturaleza por parte del Estado y de particulares.

b) Investigar, recopilar antecedentes y recibir testimonios por iniciativa propia o a partir de una denuncia o solicitud de un individuo o una colectividad, de cualquier violación a los derechos humanos y de la Naturaleza para facilitar y entregar los antecedentes recopilados al Sistema de Justicia y a las entidades encargadas de representar judicialmente a las víctimas.

c) Diseñar mecanismos alternativos de reparación y garantías de no repetición, tales como de medidas de restitución histórica, reconocimiento póstumo, medidas de justicia simbólica u otros.

d) Calificar a las víctimas, individuales o colectivas, de violaciones a los derechos humanos y de la Naturaleza.

e) Recomendar leyes y políticas públicas que garanticen la no repetición de las violaciones a los derechos humanos y de la Naturaleza, a partir del trabajo con las víctimas y sobrevivientes y personas expertas en esas materias.

f) Preservar, sistematizar y poner a disposición pública los antecedentes recopilados y producidos en el marco de su trabajo y de las comisiones de verdad.

g) El ejercicio de cualquier otra función o atribución que le confiera la ley.”

Sometida a votación fue **rechazada (9-10-0)**.

Por tanto, correspondió votar el **artículo 102 del texto sistematizado**, siendo **rechazado (9-10-0)**.

Al artículo 103 que se suprime.-

“Artículo 103. Composición del Consejo: El Consejo estará compuesto por:

a. Dos Consejeros(as) nombrados por la Presidencia.

b. Dos Consejeros(as) nombrados por el Congreso Nacional, a partir de una nómina de no menos de doce candidaturas presentadas por la Presidencia.

c. Un Consejero(a) elegido por las Universidades del Estado.

d. Cuatro Consejeros(as) elegidos por las organizaciones de derechos humanos, ambientales, organizaciones representantes de pueblos indígenas y tribales.

Las nóminas sobre las que se elijan las y los Consejeros deberán estar compuestas por personas reconocidas y de comprobada integridad y trayectoria, que tengan conocimiento, comprensión y experiencia en ámbitos de la defensa y la promoción de los derechos humanos y de la Naturaleza.

El Consejo deberá conformarse de manera paritaria y garantizando la participación de al menos dos Consejeros(as) representantes de organizaciones de pueblos indígenas y/o tribales.

El Consejo elegirá un(a) Presidente(a) y una Vicepresidenta(e), quienes necesariamente deben conformar una dupla paritaria.

El Consejo tendrá un Secretario(a) Ejecutivo(a), de función profesional, elegido por concurso público y de comprobada formación y trayectoria profesional en la defensa y la promoción de los derechos humanos, especialmente en relación con los ámbitos de la justicia transicional.”

Indicación Nº 365 de CC Hoppe y Royo para sustituir el actual artículo 103 por el siguiente:

“Artículo 103. Composición del Consejo. El Consejo estará integrado por personas de reconocida y de comprobada integridad y trayectoria, que tengan conocimiento, comprensión y experiencia en ámbitos de la defensa y la promoción de los derechos humanos y de la Naturaleza.

La cantidad de integrantes, su forma de nombramiento, organización, atribuciones y funciones específicas del Consejo serán determinadas por una ley.”

Sometida a votación fue **rechazada (9-8-2)**.

Corresponde entonces votar el **artículo 103 del texto sistematizado** y fue **rechazado (9-8-2)**.

Al artículo 104 que pasa a ser 63.-

“Artículo 104.- Garantía de justicia y no repetición, de que nunca más un presidente abuse de su poder y le declare la guerra a su propio pueblo.”

La convencional Villena precisó que esta iniciativa surge a partir de la participación popular, de hecho es una Iniciativa Popular de Norma llamada “Cárcel para Piñera” y llamó a disipar dudas respecto a su contenido pues en ningún sentido implicará cárcel.

No habiendo indicaciones se sometió a votación el artículo 104 del texto sistematizado y fue **aprobado (10-9-0)**.

Al epígrafe “§ Del Consejo de Pueblos Indígenas”.-

No habiendo indicaciones al epígrafe del texto sistematizado, se sometió a votación y fue **aprobado (14-5-0)**.

Al artículo 105 que pasa a ser 64.-

“Artículo 105. Del Consejo de Pueblos Indígenas. Existirá un órgano colegiado, autónomo, con patrimonio propio y personalidad jurídica de derecho público, en el que tendrán representación todos los pueblos y naciones preexistentes en forma que determina la ley, encargado de diseñar y promover políticas públicas respetuosas de los derechos individuales y colectivos reconocidos por la Constitución, el sistema internacional de los derechos humanos y las leyes, velando por la efectiva transversalización de los principios de plurinacionalidad e interculturalidad en la sociedad y en toda la institucionalidad estatal.

Es deber del Estado destinar el presupuesto necesario y suficiente para el adecuado cumplimiento de sus fines.”

La convencional Llanquileo se hizo cargo de explicar este órgano dado que estos artículos logran materializar la libre determinación de los pueblos indígenas. La convencional Laibe manifestó su voto a favor de este órgano sin perjuicio de cuestiones que deberán ser discutidas nuevamente por esta Comisión. En particular, no le convenció la idea de que estén a cargo del diseño de políticas públicas pues eso le corresponde al Poder Ejecutivo, elegido de forma democrática.

El convencional Daza manifestó la necesidad de consagrar un órgano como éste. La convencional Royo apoyó la iniciativa pues hace un esfuerzo relevante en torno al derecho a la libre determinación y otorga una estructura orgánica a los pueblos originarios.

El convencional Cozzi se manifestó en contra de este órgano pues aísla a los pueblos indígenas. Se crea una institucionalidad paralela. Más que un órgano autónomo es una institución corporativa que los dejará aislados de la sociedad generando tensión en las discusiones que atañen a los pueblos indígenas.

El convencional Gutiérrez explicó que el Consejo procurará que las políticas públicas no aislarán a los pueblos indígenas sino que se insertarán en estas, haciendo efectiva la transversalización de los criterios de plurinacionalidad e interculturalidad. El convencional Woldarsky señaló que este órgano es necesario para dejar el colonialismo atrás.

El convencional Viera expresó que es una muy buena idea porque permitirá un adecuado funcionamiento del Estado plurinacional, y no implica aislamiento. La convencional Hoppe se manifestó a favor de la institucionalidad propuesta pues la interculturalidad es un diálogo de ida y vuelta, y con este órgano se hará operativa la interculturalidad.

No habiendo indicaciones, se sometió a votación el **artículo 105 del texto sistematizado** y fue **aprobado (14-5-0)**.

Al artículo 106 que pasa a ser 65.-

“Artículo 106. De las funciones del Consejo de Pueblos Indígenas. El Consejo de Pueblos Indígenas tendrá las siguientes funciones:

1) Participar en la planificación estratégica, creación, desarrollo e implementación de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida y el ejercicio efectivo del derecho al desarrollo de los mismos pueblos, respetando el principio de libre determinación de cada uno de ellos y su participación mediante un procedimiento de consulta libre, previa, informada y vinculante.

2) Diseñar, dirigir, impulsar, implementar y dar cuenta de los procesos de participación y consulta indígenas conforme a la Constitución, los estándares internacionales de derechos humanos y las leyes.

3) Efectuar los nombramientos, conforme al procedimiento establecido en su ley, para todos aquellos cargos públicos que no sean de elección popular y que correspondan a cupos o escaños reservados. En caso de que la elección de los mismos dependa de otro organismo, los nombres que integren la lista sobre la cual se efectuará la elección serán propuestos por el Consejo de Pueblos Indígenas.

4) Responder requerimientos y formular recomendaciones a todos los órganos públicos respecto a las políticas que impulsan, en cuanto a la forma más adecuada de implementar los estándares consagrados en la Constitución y los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas.

5) Requerir a los órganos respectivos la adecuación de normas legales y reglamentarias que no se ajusten a los estándares establecidos en la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

6) Requerir a las Defensorías de los Pueblos Indígenas y de la Naturaleza para que ejerzan algunas de las facultades que la Constitución y la ley les encomiendan, en defensa de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y de la naturaleza.

7) Atender y responder las dudas de las comunidades y los pueblos respecto de políticas, leyes u actos administrativos a fin de encausar sus demandas antes las instituciones y garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos.

8) Sistematizar, restaurar, resguardar y difundir todos los archivos históricos y jurídicos relacionados con pueblos indígenas.

9) Las demás funciones que le encomiende la ley.”

No habiendo indicaciones al artículo, se sometió a votación el **artículo 106 del texto sistematizado** y fue **aprobado (13-5-1)**.

Al artículo 107 que pasa a ser 66.-

“Artículo 107.- De la regulación del Consejo de Pueblos Indígenas. La ley regulará el número de miembros y formas de integración, la planta funcionaria y la organización administrativa y territorial de acuerdo a los principios de descentralización y facilidad de acceso al servicio, observando el principio de equidad territorial, democracia interna y representación de los pueblos.”

No habiendo indicaciones al artículo, se sometió a votación el **artículo 107 del texto sistematizado** y fue **aprobado (14-5-0)**.

Artículo nuevo que se rechaza.-

Indicación Nº 366 de CC Aguilera, Catrileo, Galleguillos, Loncon y Millabur para agregar un nuevo artículo:

“Artículo x. Comisión de Restitución Territorial Indígena. Se creará una Comisión de Restitución Territorial Indígena, dependiente del poder ejecutivo, cuya obligación y finalidad será:

1. Recibir, conocer y estudiar las solicitudes de reclamación territorial efectuadas por los pueblos y naciones indígenas o sus comunidades.

2. Elaborar un Plan de Demarcación, Registro, Titulación, Restitución y Reparación según corresponda, con el objetivo de dar respuesta a cada una de las reclamaciones territoriales recibidas.

3. Ejecutar el Plan de Demarcación, Registro, Titulación, Restitución y Reparación para hacer efectivo el proceso de entrega de tierras y territorios indígenas.

4. Elaborar un catastro general del estado de las tierras y territorios que hayan sido objeto de reclamación, ya sea que se encuentren en posesión o dominio de particulares o del fisco.

Para la determinación de las tierras y territorios susceptibles de restitución o reparación, se considerarán aquellas que tradicionalmente han sido ocupadas por el respectivo pueblo o nación indígena, que podrán ser acreditadas por todo tipo de antecedentes que puedan dar fe de la ocupación o posesión tradicional. Estos podrán ser registros públicos e históricos, informes oficiales, investigaciones sobre determinación y pérdida territorial indígena, sentencias emitidas por tribunales, informes técnicos que acrediten la posesión u ocupación territorial tradicional, hitos y espacios de significación cultural, espiritual o ceremonial, memoria oral, toponimia, homogeneidad ecológica, entre otros.

La integración de la comisión se realizará mediante un proceso público y transparente, debiendo establecerse como criterios de selección de sus integrantes, la comprobada experiencia técnica o académica en las materias objeto de la Comisión, la paridad y la plurinacionalidad, garantizando la participación de los diversos pueblos y naciones indígenas.

Una norma transitoria regulará los plazos de instalación y funcionamiento de la Comisión.”

El convencional Laibe sostuvo que algunas funciones podrían estar incluidas en el Consejo Indígena. La convencional Llanquileo llamó a aprobar la indicación pues es importante precisar cómo se materializará el derecho en cuestión. El convencional Jiménez sostuvo que el funcionamiento de la devolución de tierras hoy es deficiente y por ello se crea esta Comisión. Esto viene a dar pronta solución a los problemas territoriales.

El convencional Cozzi afirmó que la indicación confunde el plano político con el jurídico. Se le están entregando facultades jurisdiccionales a un órgano que dependerá del Ejecutivo. El convencional Viera sostuvo que el órgano propuesto no es autónomo porque depende del Ejecutivo.

Sometida a votación fue **rechazada (8-9-2)**.

Artículo nuevo que se rechaza.-

Indicación Nº 367 de CC Aguilera, Catrileo, Galleguillos, Loncon y Millabur para agregar un nuevo artículo:

“Artículos x. Tribunal Especial de Restitución Territorial Indígena. Se creará un Tribunal Especial de Restitución Territorial Indígena de carácter autónomo, plurinacional y paritario. Su integración, nombramiento de sus jueces, funcionamiento, presupuesto y demás aspectos para su adecuada operación, será regulado por la ley.

Son competencias del Tribunal Especial de Restitución Territorial Indígena, sin perjuicio de lo señalado en la ley, las siguientes:

1.- Conocer y resolver los reclamos, acciones y recursos interpuestos contra las resoluciones y recomendaciones emitidas por la Comisión de Restitución Territorial Indígena conforme a las etapas y procedimientos señalados en el Plan de Demarcación, Registro, Titulación, Restitución y Reparación.

2.- Conocer y resolver reclamos, acciones y recursos interpuestos en los procesos de expropiación, incluida la determinación de la indemnizaciones pecuniarias en favor de los expropiados y la entrega material de las tierras, territorios y bienes naturales conforme a la Constitución y las leyes;

3.- Conocer y resolver reclamos, acciones y recursos interpuestos en los procesos de reparación y remedios alternativos a la expropiación.

4.- Las demás competencias que establezca la ley.

El Tribunal Especial de Restitución Territorial Indígena deberá desarrollar un procedimiento adecuado, expedito y oportuno, con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo”.

El convencional Cruz señaló que la indicación rompe con el principio de unidad jurisdiccional y constituye una comisión especial que rompe con lo prescrito por los derechos humanos. El convencional Laibe no vio la necesidad de un tribunal especial considerando que se creó un Consejo de la Justicia que tiene componentes plurinacionales.

Sometida a votación fue **rechazada (6-11-1)**.

Al epígrafe “§ Justicia Constitucional”.-

No habiendo indicaciones se sometió a votación el epígrafe del texto sistematizado y fue **aprobado (17-0-2)**.

Al epígrafe “§ Revisión represiva de la ley”.-

La convencional Bown se refirió a la indicación N° 370 y sostuvo que en general los principios del inciso primero le parecen bien. Pero en el inciso segundo consagran que todo órgano del Estado podrá interpretar la Constitución y eso va en contra de establecer un control concentrado de constitucionalidad.

El convencional Daza explicó que justicia constitucional no significa que deba haber un órgano que concentre el control. Sin embargo, se ha ido asentando que en virtud de la creación de tantos órganos a nivel territorial se necesite una instancia clara a fin de zanjar esas discusiones. En ese escenario es necesario un órgano de justicia constitucional especializado. Afirmó que el control concreto de inaplicabilidad debiera mantenerse en el Sistema de Justicia Nacional, pero el control de constitucionalidad debe radicarse en la entidad especializada. Este tipo de detalles deberán analizarse con posterioridad, pero consideró que la indicación N° 370 es buena. Preciso que en caso alguno se busca mantener el actual Tribunal Constitucional. El convencional Viera aseveró que el control de la ley, aunque parezcan funciones propias de un Tribunal, no lo son, en tanto su cometido es controlar la ley y las fuentes del derecho. Se refirió al modelo y tipo de control que se realizará: concreto, deferente y débil.

El convencional Bravo se refirió a la indicación N° 370 y precisó que el inciso segundo busca que cuando corresponda en el marco de sus competencias aplicar una norma, se tenga en consideración la Constitución a fin de que su actuar no produzca efectos inconstitucionales.

El convencional Gutiérrez precisó que justicia constitucional no implica crear una Corte Constitucional, pero así lo declaran las iniciativas. Además, explicó que lo propuesto no le satisface porque él está en contra de la mantención del Tribunal Constitucional y, por tanto, se abstendrá. La convencional Royo señaló, en los

mismos términos del convencional Gutiérrez, que no le pareció la subsistencia del Tribunal Constitucional y urge la revisión del modelo a crear.

El convencional Cruz precisó que la propuesta de Corte Constitucional no es la continuidad del actual Tribunal Constitucional. Habrá diversos conflictos de competencia que harán necesaria la Corte. El convencional Laibe explicó que las contiendas de competencia necesitarán de alguien que las resuelva, además de los problemas que surjan entre el sistema nacional de justicia y el indígena. Además, la propuesta se hace cargo del nombramiento y las competencias como el control preventivo de constitucionalidad. En ese sentido, no es igual al Tribunal Constitucional.

El convencional Jiménez se refirió al debate que se han dado en relación con la Corte Constitucional y reiteró el problema que podría surgir a partir de los conflictos que pueda haber en la institucionalidad.

Indicación Nº 368 de CC Bravo y Villena para suprimir el título “§ Revisión represiva de la ley”.

Sometida a votación fue **aprobada (16-0-3)**.

Al artículo 108 que pasa a ser 67.-

“Artículo 108. Los tribunales de justicia deberán, en el marco de sus competencias, aplicar la legislación vigente interpretándola conforme a esta Constitución. En ningún caso podrán dejar de aplicar normas legales que no hayan sido declaradas inaplicables conforme a los artículos que siguen.”

Indicación Nº 369 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para suprimir el artículo 108, 109, 110, 111 y 112. Fue **retirada** por sus autores.

Indicación Nº 370 de CC Bravo y Villena para sustituir el actual artículo 108, por el siguiente:

“Artículo 108.- De la justicia constitucional. La justicia constitucional será ejercida por una Corte Constitucional, con la finalidad de garantizar la supremacía de la Constitución, bajo los principios de deferencia a los electos con potestad legislativa presunción de constitucionalidad de la ley, búsqueda de una interpretación conforme con la Constitución y no justiciabilidad de asuntos de naturaleza exclusivamente política.

Los órganos del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones, deberán aplicar las normas, en el ámbito de sus competencias, efectuando una interpretación orientada hacia la Constitución.

La Corte Constitucional deberá interpretar la Constitución ajustada a la pertinencia cultural de los pueblos indígenas, cuando corresponda.”.

Sometida a votación fue **aprobada (14-1-4)**.

A los artículos 109, 110 y 111 que se suprimen.-

“Artículo 109. La Corte Suprema, en sala especialmente constituida y formada por nueve jueces y juezas elegidos por sorteo, podrá declarar, a petición del tribunal que conoce de una gestión judicial, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en el asunto que se sigue ante ese tribunal tenga efectos contrarios a la Constitución.

Las partes intervinientes podrán en cualquier etapa procesal y antes de la dictación de sentencia firme, solicitar al tribunal que se encuentra conociendo de la gestión que plantee la cuestión de inaplicabilidad ante la Corte Suprema. El tribunal examinará si procede y en tal caso presentará dicha cuestión suspendiendo, si el caso

lo amerita, el procedimiento en que el precepto legal incide. El rechazo de una solicitud de parte deberá hacerse por resolución fundada.”

“Artículo 110. La cuestión de inaplicabilidad será acogida si el precepto legal cuestionado: (1) resulta decisivo para la resolución del asunto controvertido; (2) no puede ser interpretado de modo de evitar los efectos inconstitucionales de su aplicación a la gestión respectiva. El tribunal decidirá la cuestión de inaplicabilidad por mayoría. La sentencia que acoge la cuestión solo contendrá las razones que fundamentan el voto de mayoría.

Declarada la inaplicabilidad de un precepto legal, este no podrá ser aplicado en la gestión judicial en la que se originó la cuestión de constitucionalidad.

Con el acuerdo de la mayoría, la sentencia que rechaza la cuestión de inaplicabilidad podrá declarar la interpretación del precepto legal en conformidad a esta Constitución. El juez o jueza deberá aplicar dicha interpretación, siendo infracción de ley su inobservancia.”

“Artículo 111. Si la inaplicabilidad se fundare en la inconstitucionalidad del precepto legal, el tribunal así lo declarará en la sentencia. En este caso la sentencia, además de producir el efecto indicado en el artículo anterior, será enviada a la Cámara de Diputados, que podrá modificar o derogar el precepto en cuestión mediante un procedimiento simplificado.”

La modificación del precepto legal no obstará a que pueda acogerse respecto de ella otra cuestión de inconstitucionalidad.

Indicaciones Nº 371, 372 y 373 de CC Bravo y Villena para suprimir los actuales artículos 109, 110 y 111. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (16-2-1)**.

Al epígrafe “§ Corte Constitucional”.-

El convencional Viera señaló que votará a favor de esto, pero dado que el órgano encargado del control de constitucionalidad no es un tribunal, preferiría que el nombre sea “Consejo”.

El convencional Bravo precisó que este órgano no es la continuación del actual Tribunal Constitucional. El convencional Daza señaló la necesidad de que este órgano conozca exclusivamente del control de constitucionalidad, no de casos concretos. Esto es otra demostración de que el tema requiere de una nueva discusión y deliberación al interior de la Comisión.

El convencional Cozzi manifestó que es necesario explicitar lo que hace el órgano: dirimir competencias de índole constitucional conforme a las normas constitucionales. Si se llama Corte Constitucional, eso es efecto del desprestigio que ocasionó el Tribunal Constitucional. El convencional Gutiérrez dio cuenta que ya se suprimió la facultad de resolver las inaplicabilidades, entonces se preguntó dónde quedará esa competencia.

Sometido a votación el epígrafe del texto sistematizado fue **aprobado (14-2-3)**.

Al artículo 112 que se suprime.-

“Artículo 112.- Principios del ejercicio de la jurisdicción constitucional. Los primeros llamados a la interpretación de la Constitución son los órganos legisladores en tanto representantes de los pueblos de Chile. En consecuencia, la jurisdicción constitucional ejercerá sus atribuciones considerando los criterios de presunción de constitucionalidad de la ley, deferencia a los poderes electos, corrección funcional, interpretación conforme y no justiciabilidad de cuestiones políticas.”

Indicación Nº 374 de CC Bravo y Villena para suprimir el actual artículo 112. Sometida a votación fue **aprobado (16-1-2)**.

Al artículo 113 que se suprime.-

“Artículo 113.- De la jurisdicción constitucional. La jurisdicción constitucional será ejercida por una Corte Constitucional, con la finalidad de garantizar la supremacía de la Constitución, bajo los principios de deferencia a los órganos legislativos, presunción de constitucionalidad de la ley, búsqueda de una interpretación conforme con la Constitución y no justiciabilidad de asuntos de naturaleza exclusivamente política.

Los órganos del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones, deberán aplicar las normas, en el ámbito de sus competencias, efectuando una interpretación orientada hacia la Constitución.”

Indicación Nº 375 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 113 por el siguiente texto:

“Artículo 113.- Habrá una Corte Constitucional cuya función será garantizar la supremacía de esta Constitución”.

Sometida a votación fue **rechazada (5-13-1)**.

Por tanto, correspondió votar el **artículo 113 del texto sistematizado** y fue **rechazado (6-10-2)**.

Al artículo 113 A que se suprime.-

“Artículo 113 A.- La jurisdicción constitucional es ejercida por la Corte Constitucional Plurinacional y tiene la finalidad de velar por la supremacía de la Constitución, ejercer el control de constitucionalidad, cautelar el respeto y la vigencia de los derechos humanos y de la naturaleza.”

Indicaciones Nº 376 y 377 de CC Bravo y Villena; Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para suprimir el artículo 113 A. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (14-4-1)**.

Al artículo 114 que se suprime.-

“Artículo 114.- De la Corte Constitucional. Existirá una Corte Constitucional encargada de garantizar la supremacía constitucional.

La Corte Constitucional se integrará por once miembros que tendrán el tratamiento de jueces y juezas constitucionales.

Para ser juez o jueza constitucional se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener 15 o más años desde la obtención de la licenciatura en ciencias jurídicas.

b) Acreditar ser juristas de reconocida versación en derecho público o académicos en ejercicio en universidades del Estado o reconocidas por éste.

c) Acreditar idoneidad democrática que habilite para el desempeño del cargo, conforme a lo que establezca la ley.

d) No tener impedimento legal o constitucional para el cargo.

Durarán 9 años en sus cargos. Los jueces y juezas constitucionales no podrán ser reelegidos.”

El convencional Cozzi aseveró que la indicación Nº 379 tiene por objeto definir el perfil de los jueces constitucionales y la propuesta pasa por suprimir que sean personas que hayan sido destacadas en el ámbito público. Es valioso que aquí se puedan incorporar personas del ámbito judicial como ocurre en el Tribunal Constitucional alemán.

La convencional Bown se refirió a la complejidad de la letra c) del artículo referido. El convencional Woldarsky no estuvo de acuerdo con la indicación N° 379 porque si la naturaleza del control es constitucional no procede el literal b). Creyó más acertado el lenguaje del texto sistematizado que la indicación. El convencional Daza explicó que establecer un perfil es insuficiente y así lo ha demostrado la práctica del Tribunal Constitucional. El Tribunal ha degradado su institucionalidad porque las personas que lo han conformado no cumplen con un perfil adecuado. Así, manifestó que es mejor la indicación N° 381.

Indicación N° 378 de CC Bravo y Villena para suprimir el actual artículo 114. Sometida a votación fue **aprobada (16-2-1)**.

Indicación N° 379 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 114 por el siguiente texto:

“Artículo 114.- La Corte Constitucional estará integrada por once jueces, que deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Ser chilenos;
- b) Tener a lo menos 15 años de título de abogado y haberse destacado en el ámbito académico, judicial o administrativo; y
- c) No tener impedimento constitucional o legal para el cargo.

Los jueces de la Corte Constitucional durarán nueve años en sus cargos y se renovarán individualmente por parcialidades cada tres. No podrán ser reelegidos.”

Se entiende **rechazada** por incompatible.

Al artículo 114 A que pasa a ser 68.-

“Artículo 114 A.- Corte Constitucional. La Corte Constitucional es un órgano jurisdiccional autónomo, técnico, profesional, independiente e imparcial, encargado del control de la supremacía de la Constitución, cuyas resoluciones se encuentran fundadas únicamente en razones de derecho y gozan de eficacia de cosa juzgada.

Estará conformada, paritariamente y con criterios de plurinacionalidad y equidad territorial, por quince juezas y jueces, uno de los cuales será su presidenta o presidente, elegido por sus pares y que ejercerá sus funciones durante dos años.

Las juezas y los jueces de la Corte Constitucional durarán nueve años en sus cargos o hasta que cumplan setenta y cinco años, y se renovarán por parcialidades cada tres años.

Funcionará en salas preferentemente especializadas, integradas por cinco juezas o jueces, o en pleno, de conformidad a lo dispuesto por la ley.

Las juezas y los jueces de la Corte Constitucional serán elegidas y elegidos de la siguiente manera:

a) Un tercio será elegido por el Congreso. Tres serán nombrados directamente por la Cámara Territorial y dos serán previamente propuestos por la Cámara de Diputadas y Diputados para su aprobación o rechazo por la Cámara Territorial, en base a criterios técnicos y de mérito profesional. Los nombramientos, o la propuesta en su caso, se efectuarán en votaciones únicas y requerirán para su aprobación del voto favorable de los tres quintos de las y los parlamentarios en ejercicio.

b) Un tercio será elegido por la Presidencia de la República, en base a criterios técnicos y de mérito profesional, eligiéndolos de una nómina de cinco personas que, en cada caso, propondrá el Consejo de la Justicia.

c) Un tercio será elegido de entre las juezas y los jueces de la jurisdicción ordinaria, por votación, entre sus pares que ostenten la calidad de titulares. Las juezas y los jueces electos para el ejercicio de esta función quedarán suspendidos de sus cargos judiciales de origen en tanto se extienda éste.

Las y los postulantes al cargo de juez o jueza de la Corte Constitucional deberán ser abogadas o abogados, con más de quince años de ejercicio profesional, todas y todos juristas de reconocida competencia, y que se desempeñen o hayan desempeñado como juezas o jueces de la jurisdicción ordinaria, fiscales del Ministerio

Público, defensoras o defensores penales públicos, académicas y académicos de Universidades acreditadas por el Estado, provenientes de diversas regiones del país y que pertenezcan a distintas especialidades del Derecho. Al menos dos tercios de sus integrantes, deberán provenir y haber ejercido sus funciones, por un mínimo de cinco años, en regiones diversas a la metropolitana.

No podrán ser jueces o juezas de la Corte Constitucional quienes se hubiesen desempeñado en cargos de elección popular, hubiesen sido candidatas o candidatos a estos, o quienes hayan desempeñado el cargo de Ministra o Ministro de Estado, u otros cargos de exclusiva confianza del gobierno, durante los ocho años anteriores a la elección.

Una ley determinará la organización, funcionamiento, procedimientos y fijará la planta, régimen de remuneraciones y estatuto del personal de la Corte Constitucional.”

El convencional Bravo explicó que los jueces serán elegidos por tercios: Congreso; Presidente de la República; y Sistema Nacional de Justicia. La convencional Villena sostuvo que las propuestas en torno a la Corte Constitucional no implican una continuidad, de hecho, existe una norma transitoria que dispone el cese del funcionamiento actual del Tribunal Constitucional.

El convencional Daza afirmó la necesidad de establecer un mecanismo que garantice que los jueces tengan la idoneidad para ejercer sus cargos. Se refirió al cuoteo que existe hoy en el Tribunal Constitucional permitiendo que operadores políticos lleguen a ser Ministros del Tribunal Constitucional.

El convencional Cozzi destacó que 15 jueces es un número adecuado para el funcionamiento de la Corte. Añadió la necesidad de incorporar al perfil de los jueces la expertise en materias diversas al ámbito constitucional. Destacó que la composición sea por tercios dándole un equilibrio institucional al control.

Indicación Nº 380 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para suprimir el artículo 114 A y 114 B. Fue **retirada** por sus autores.

Indicación Nº 381 de de CC Bravo y Villena para sustituir el artículo 114 A, por el siguiente:

“Artículo 114 A.- Corte Constitucional. La Corte Constitucional es un órgano autónomo, técnico, profesional, independiente e imparcial, encargado del control de la supremacía de la Constitución, cuyas resoluciones se encuentran fundadas únicamente en razones de derecho.

Estará conformada, paritariamente y con criterios de plurinacionalidad y equidad territorial, por quince juezas y jueces, uno de los cuales será su presidenta o presidente, elegido por sus pares y que ejercerá sus funciones durante dos años.

Las juezas y los jueces de la Corte Constitucional durarán nueve años en sus cargos o hasta que cumplan setenta años, y se renovarán por parcialidades cada tres años.

Funcionará en salas preferentemente especializadas, integradas por cinco juezas o jueces, o en pleno, de conformidad a lo dispuesto por la ley.

Las juezas y los jueces de la Corte Constitucional serán elegidas y elegidos en base a criterios técnicos y de mérito profesional, de la siguiente manera:

- a) Un tercio será elegido por el Congreso, de nóminas de cinco personas que, en cada caso, propondrá el Consejo de Alta Dirección Pública. Estas designaciones se efectuarán en votaciones únicas y requerirán para su aprobación del voto favorable de los tres quintos de las y los parlamentarios en ejercicio.
- b) Un tercio será elegido por la Presidencia de la República, de nóminas de cinco personas que, en cada caso, propondrá el Consejo de la Justicia.

c) Un tercio será elegido de entre las juezas y los jueces del Sistema Nacional de Justicia, por votación, entre sus pares que ostenten la calidad de titulares. Las juezas y los jueces electos para el ejercicio de esta función quedarán suspendidos de sus cargos judiciales de origen en tanto se extienda éste.

Su nombramiento se realizará previa convocatoria pública, abierta y transparente del órgano que corresponda realizar la elección, con al menos seis meses de anticipación.

Las y los postulantes al cargo de juez o jueza de la Corte Constitucional deberán ser abogadas o abogados, con más de quince años de ejercicio profesional, todas y todos juristas de reconocida competencia, y que se desempeñen o hayan desempeñado como juezas o jueces del Sistema Nacional de Justicia, fiscales del Ministerio Público, defensoras o defensores penales públicos, académicas y académicos de Universidades acreditadas por el Estado, y que pertenezcan a distintas especialidades del Derecho.

Al menos dos tercios de las y los jueces de la Corte Constitucional deberán provenir y haber ejercido sus funciones, por un mínimo de cinco años, en regiones diversas a la metropolitana. A lo menos dos de sus integrantes deben provenir de pueblos indígenas.

No podrán ser jueces o juezas de la Corte Constitucional quienes se hubiesen desempeñado en cargos de elección popular, hubiesen sido candidatas o candidatos a estos, o quienes hayan desempeñado el cargo de Ministra o Ministro de Estado, u otros cargos de exclusiva confianza del gobierno, durante los seis años anteriores a la elección. De igual manera, no podrán tener impedimento alguno que los inhabilite para desempeñar el cargo de juez del Sistema Nacional de Justicia.

Una ley determinará la organización, funcionamiento, procedimientos y fijará la planta, régimen de remuneraciones y estatuto del personal de la Corte Constitucional.”.

Sometida a votación fue **aprobada (12-1-6)**.

Al artículo 114 B que se suprime.-

“Artículo 114 B.- Integración. La Corte Constitucional Plurinacional se integra de manera paritaria, plurinacional y con miembros que representen la diversidad territorial. Está compuesta por once miembros y a lo menos dos de ellos deben provenir de pueblos indígenas. Su nombramiento se realizará previa convocatoria pública, abierta y transparente del Órgano que corresponda realizar la elección, con al menos seis meses de anticipación.”

Indicación N° 382 de CC Bravo y Villena para suprimir el actual artículo 114 B. Sometida a votación fue **aprobada (17-0-2)**.

Al artículo 115 que se suprime.-

“Artículo 115.- Nombramiento de los jueces y juezas constitucionales. Los jueces y juezas constitucionales serán designados de la siguiente forma:

a) Corresponderá al Congreso Nacional nombrar cinco jueces o juezas: tres por la Cámara de Diputados y cuatro por el Senado.

b) Corresponderá a la Presidencia de la República nombrar dos jueces o juezas constitucionales.

c) Corresponderá al Consejo de la Judicatura nombrar cuatro jueces o juezas constitucionales.

Los jueces y juezas constitucionales serán seleccionados a través de un procedimiento público, transparente, participativo y deliberativo, que incluirá el llamado a audiencias públicas de nominación, pudiendo cualquier persona formular cuestionamientos respecto de cualquiera de los postulantes.

Los órganos que intervengan en el nombramiento de los miembros de la Corte Constitucional velarán por difundir y comunicar a la ciudadanía de los méritos de los postulantes para su conocimiento, garantizando que el proceso de nombramiento

incorpore los principios de pluralismo político, paridad de género, plurinacionalidad y diversidad territorial.”

Indicación N° 383 de CC Bravo y Villena para suprimir el actual artículo 115. Sometida a votación fue **aprobada (14-3-2)**.

Indicación N° 384 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 115 por el siguiente texto:

“Artículo 115.- Los jueces de la Corte Constitucional serán designados de la siguiente forma:

a) Tres designados por el Presidente de la República.

b) Dos elegidos por el Senado y dos por la Cámara de Diputados. Los nombramientos se efectuarán, para cada caso, en votaciones únicas y requerirán para su aprobación del voto favorable de los tres quintos de los senadores o diputados en ejercicio, según corresponda, previo llamado a audiencias públicas para examinar la nómina de candidatos.

c) Cuatro elegidos por la Corte Suprema en una votación secreta que se celebrará en sesión especialmente convocada para tal efecto.

Los nombramientos se realizarán, en cada caso, de entre una nómina de cinco personas. Las nóminas serán públicas y se formarán previo concurso de antecedentes, promoviendo la equidad de género.

Para los nombramientos del literal a) [Presidente de la República] la nómina será propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública.

Tratándose de los nombramientos del literal b) [Senado y Cámara de Diputados] la nómina será propuesta por las respectivas Comisiones de Constitución y Legislación de cada Cámara. Para los nombramientos de la letra c) [Corte Suprema], la nómina será propuesta por el Consejo de la Judicatura.

Los jueces de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones del país podrán postular, en igualdad de condiciones frente a los otros postulantes, a la nómina que se deba conformar según la letra c) de este artículo. En caso de nombramiento, cesará en su cargo, pudiendo retornar al mismo una vez terminando su periodo en la Corte Constitucional, sin que ello afecte sus condiciones de jubilación.

Los jueces suplentes de la Corte Constitucional que sea necesario designar de conformidad a la ley, se nombrarán conforme a las reglas precedentes.”

Se entiende **rechazada** por incompatible.

A los artículos 115 A y 115 B que se suprimen.-

“Artículo 115 A.- *Nombramiento. Los jueces constitucionales serán nombrados de la siguiente forma:*

1. *Tres de ellos por el Parlamento Plurinacional. Se deben elegir en votaciones únicas y para su aprobación requieren mayoría absoluta de sus miembros.*

2. *Tres de ellos por el Presidente de la República.*

3. *Tres de ellos por el Consejo de la Justicia.*

4. *Dos jueces constitucionales que tengan la calidad de indígena.*

La ley determinará los requisitos y establecerá un proceso participativo con los pueblos para generar el mecanismo de nombramiento, que estará a cargo del Consejo de Pueblos Indígenas.”

“Artículo 115 B.- *Para realizar el nombramiento, cada órgano deberá abrir una convocatoria previa con, a lo menos, 6 meses de anticipación a la fecha de nombramiento para hacer entrega de antecedentes. La ley fijará los requisitos de postulación, que a lo menos consistirán: en haber cumplido 35 años de edad, poseer título de abogada o abogado, y contar con especialización o experiencia acreditada de a lo menos 10 años en disciplinas de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derechos Humanos o Derecho Ambiental.*

No podrán ser elegidos como jueces constitucionales aquellas personas que en su actuar profesional hayan menoscabado los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas. Se exigirán antecedentes comprobables para acreditarlo.”

Indicaciones N° 385, 386 y 387 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain; y Bravo y Villena para suprimir los artículos 115 A y 115 B. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (16-0-2)**.

Al artículo 116 que pasa a ser 69.-

“Artículo 116.- Inamovilidad e independencia. Los jueces y juezas constitucionales serán independientes de todo poder público o privado e inamovibles. Cesarán en el cargo por las causales que señale la ley y por su acusación en juicio político aprobada en su contra.”

La convencional Bown sostuvo que la acusación constitucional no tiene sentido porque el controlador pasa a ser controlado. El convencional Cruz llamó a votar a favor de la indicación N° 388 porque permite que cesen en un tiempo específico. El convencional Cozzi se refirió a la relevancia de determinar quién dirimirá la incapacidad legal sobreviniente.

Indicación N° 388 de CC Bravo y Villena para reemplazar el artículo 116 del texto sistematizado, por un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo 116. Inamovilidad e independencia. Las juezas y jueces de la Corte Constitucional son independientes de todo otro poder y gozan de inamovilidad. Cesarán en sus cargos por haber cumplido su periodo, por incapacidad legal sobreviniente, por renuncia, por sentencia penal condenatoria, por remoción, enfermedad incompatible con el ejercicio de la función u otra causa establecida en la ley.”.

Sometida a votación fue **aprobada (15-1-3)**.

Indicación N° 389 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 116 por el siguiente texto:

“Artículo 116.- Los jueces de la Corte Constitucional serán independientes e inamovibles. Cesarán en el cargo por las siguientes causales:

- a) Cumplimiento del plazo de su nombramiento.*
- b) Renuncia aceptada por la Corte Constitucional.*
- c) Haber cumplido setenta y cinco años de edad.*
- d) Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente, lo que será declarado por el pleno de la Corte Suprema en sesión especialmente convocada al efecto.*

En caso de que un juez de la Corte Constitucional cese en su cargo, se procederá a su reemplazo por quien corresponda de conformidad con las normas precedentes, por el tiempo que falte para completar el período del reemplazado.”

Se entiende **rechazada** por incompatible.

A los artículos 116 A y 116 B que se suprimen.-

“Artículo 116 A.- Los miembros de la Corte Constitucional Plurinacional son independientes de todo otro poder y gozan de inamovilidad. Cesarán sus cargos por haber cumplido el periodo de su mandato, por incapacidad legal sobreviniente, por renuncia, por sentencia penal condenatoria, por remoción u otra causa establecida en la ley.”

“Artículo 116 B.- Duración en el cargo. Los jueces constitucionales durarán 6 años en su cargo. Se renovarán anualmente dos de sus miembros, con excepción del último año, que se renovará uno solo. No podrán ser reelegidos. Sólo podrán ser

removidos por las causales que señale la ley y cesarán en sus funciones al cumplir 70 años de edad.

El ejercicio de la jurisdicción constitucional es de dedicación exclusiva.

La ley determinará las inhabilidades e incompatibilidades para ejercer el cargo.”

Indicaciones N° 390, 391 y 392 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain; y Bravo y Villena para suprimir los artículos 116 A y 116 B. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (16-0-3)**.

Al artículo 117 que se suprime.-

“Artículo 117.- Inhabilidades e incompatibilidades. No podrá ser nombrado juez o jueza de la Corte Constitucional quienes durante los ocho años anteriores a su elección se hayan desempeñado en algún cargo de exclusiva confianza del Gobierno en la Administración del Estado o en un cargo de elección popular. Tampoco podrán ejercer dichos cargos o funciones durante el término de los cuatro años posteriores al término de su periodo.

La ley determinará las demás inhabilidades e incompatibilidades.”

Indicación N° 393 de CC Bravo y Villena para suprimir el actual artículo 117. Sometida a votación fue **aprobada (11-6-2)**.

Indicación N° 394 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 117 por el siguiente texto:

“Artículo 117.- No podrá ser nombrado juez de la Corte Constitucional quien esté inhabilitado legalmente para desempeñar el cargo de juez ordinario. Tampoco podrá ser nombrado quien durante los cuatro años anteriores a su nombramiento se haya desempeñado en algún cargo de exclusiva confianza en el Gobierno, en un cargo de elección popular o hubiera sido militante de algún partido político; y no podrán ejercer dichos cargos o funciones durante el año posterior al cese de sus funciones.

Los miembros de la Corte Constitucional estarán sometidos a los artículos [actuales arts. 58, 59 y 81]. No podrán ejercer la profesión de abogado o cualquier otra actividad remunerada, salvo académicas; ni cualquier acto de los establecidos en los incisos segundo y tercero del artículo [actual art. 60].

Quienes se hubiesen desempeñado como jueces de la Corte Constitucional, no podrán patrocinar, actuar como apoderados o realizar gestión alguna en causas ante la misma Corte, por un plazo de tres años.”

Se entiende **rechazada** por incompatible.

Al artículo 117 A que pasa a ser 70.-

“Artículo 117 A.- De las juezas y jueces de la Corte Constitucional. La calidad de juez o jueza de la Corte Constitucional es incompatible con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o con empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de la carrera funcionaria; con el ejercicio libre de la profesión de abogada o abogado y con cualquier actividad profesional o comercial. La ley determinará las demás incompatibilidades e inhabilidades.

Las juezas y jueces de la Corte Constitucional serán inamovibles y no podrán ser reelegidos, salvo aquel que lo haya sido como reemplazante y hubiere ejercido el cargo por un período menor a cinco años. Cesarán en sus cargos por condena por crimen o simple delito, renuncia y enfermedad incompatible con el ejercicio de la función.

En caso que un juez o una jueza de la Corte Constitucional cese en su cargo, se procederá a su reemplazo por quien corresponda, de acuerdo con el inciso quinto

del artículo anterior y por el tiempo que falte para completar el período del reemplazado.

Al terminar su periodo, y durante los dos años siguientes, no podrán optar a ningún cargo de elección popular ni de exclusiva confianza de alguna autoridad.”

Indicación N° 395 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para suprimir el artículo 117 A. Sometida a votación fue **rechazada (5-12-2)**.

Indicación N° 396 de CC Bravo y Villena para sustituir el artículo 117 A, por el siguiente:

“Artículo 117 A. De las incompatibilidades e inhabilidades. El ejercicio del cargo de jueza o juez de la Corte Constitucional es de dedicación exclusiva. La ley determinará las demás incompatibilidades e inhabilidades para el desempeño de este cargo.

Al terminar su periodo, y durante los dos años siguientes, no podrán optar a ningún cargo de elección popular ni de exclusiva confianza de alguna autoridad.”

Sometida a votación fue **aprobada (16-1-2)**.

Al artículo 118 que se suprime.-

“Artículo 118.- Atribuciones de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene las competencias que en este artículo se señalan y se ejercerán conforme a los principios referidos en el artículo 1o.

Serán atribuciones de la Corte Constitucional:

1. Resolver conflictos de competencia o de atribuciones que se susciten entre los gobiernos regionales, cualquier órgano de administración del Estado y la administración central, a solicitud de cualquiera de éstas.

2. Ejercer exclusivamente el control abstracto de constitucionalidad o convencionalidad de los preceptos legales sometidos a su conocimiento.

a) Habrá acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los preceptos legales que el juez que conoce de la gestión pendiente someta a conocimiento de la Corte Constitucional. Este requerimiento judicial podrá iniciarse como un incidente por las partes de la cuestión pendiente o bien de oficio por parte del tribunal. Esta resolución judicial será inapelable.

b) Habrá acción pública de inconstitucionalidad contra los preceptos legales que hayan sido declarados inaplicables en tres oportunidades previas, por el mismo vicio de constitucionalidad.

3. Declarar la inconstitucionalidad por vicios de forma que se adviertan durante el procedimiento de formación de la ley o por vicios de forma y competencia de las leyes aprobadas por las asambleas regionales, antes de su promulgación por el gobernador regional, incluyendo su estatuto regional. Esta atribución se ejercerá a solicitud de un tercio de los representantes de la cámara territorial en ejercicio o por un tercio de los miembros de la asamblea regional respectiva.

4. Pronunciarse discrecionalmente sobre la correcta interpretación general de los derechos fundamentales en la sentencia que resuelve sobre la apelación de una acción de tutela general de los derechos fundamentales, cuando el asunto revista especial relevancia constitucional, lo que determinará la Corte Constitucional antes de la admisión a trámite.

5. Revisar la compatibilidad de los tratados internacionales con la Constitución, previo a la promulgación y emisión del instrumento de ratificación o adhesión. La Corte Constitucional informará al Congreso Nacional y al Presidente de la República, en los plazos que determine la ley, el resultado de la revisión.

6. Declarar la inconstitucionalidad de preceptos o actos normativos nacionales, regionales o locales de carácter general y obligatorio de rango infralegal. Para iniciar este proceso habrá acción popular.

7. Resolver los reclamos en caso que el Presidente de la República no promulgue una ley cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda. Igual atribución tendrá respecto de la promulgación de la legislación regional.

8. Resolver las cuestiones que se susciten sobre constitucionalidad con relación a la convocatoria a un plebiscito, referendos u otros mecanismos de participación directa, sin perjuicio de la competencia de la justicia electoral.

9. Resolver las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia.

10. Resolver sobre conflictos que se susciten sobre inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo respecto de los ministros de Estado, parlamentarios o gobernadores regionales.

11. Las demás que le confiera la Constitución.

El procedimiento, quórum y legitimación activa para cada atribución se determinará por la ley para cada caso. No obstante, siempre podrán intervenir en el proceso constitucional la Defensoría de los Pueblos en defensa de los derechos fundamentales y órganos colegisladores en ejercicio o defensa de sus competencias.”

El convencional Cruz apoyó la propuesta sustentada por los convencionales Bravo y Villena ya que considera la especialidad de la Corte Constitucional. En ese contexto se revisará la constitucionalidad de los estatutos regionales. Además, la Corte Constitucional defenderá la nueva propuesta de Carta Fundamental.

El convencional Daza mencionó que este órgano ejercerá la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, de lo cual no estuvo de acuerdo pues prefiere que la conozca la Corte Suprema. Esto es muy importante porque uno de los problemas que tiene el Tribunal Constitucional es el conocimiento de la inaplicabilidad porque hay muchas causas que tienen un efecto patrimonial muy importante. Finalmente estuvo de acuerdo en la acción pública de inconstitucionalidad, pero no limitado a preceptos que hayan sido declarados previamente aplicables.

La convencional Bown afirmó que la indicación N° 398 conserva la posibilidad de que sean las partes quienes activen la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y las otras propuestas le dejan entregada esa posibilidad al juez de la causa.

La convencional Royo expresó la importancia de debatir en torno a las competencias de la justicia constitucional. Consideró inadecuada la competencia establecida en el número 6 que replica vicios terribles como el que quedó de manifiesto en caso como el de la Píldora del día después. El convencional Viera señaló que este es el corazón de la justicia constitucional. Insistió en que este órgano controla el poder. Existe un problema porque un órgano sin legitimación democrática puede tumbar la voluntad soberana, por lo que no debería conocer cuestiones de fondo como la señalada en el numeral 6 de la indicación N° 401.

El convencional Stingo previno que votará a favor, pero con la intención de que vuelva a discutirse en la Comisión. Además celebró que la indicación N° 398 elimine el control preventivo. El convencional Cozzi se manifestó en un sentido similar al convencional Stingo y destacó que su indicación no propone eliminar el control preventivo, sino dejar al Poder Ejecutivo y Legislativo ajeno del control sobre los vicios de forma. Otra cuestión que le pareció importante incluir en otra oportunidad es lo referente al control de convencionalidad.

El convencional Gutiérrez sí advirtió control preventivo en la indicación N° 398 en el numeral 3 y 10. Además, se refirió a la inaplicabilidad por inconstitucionalidad que dispone la indicación N° 401. El convencional Bravo mencionó que con las atribuciones que propone a través de la indicación N° 401 la Corte Constitucional no se convertirá en una tercera cámara como lo ha sido el actual Tribunal Constitucional.

Indicación Nº 397 de CC Bravo y Villena para suprimir el actual artículo 118. Sometida a votación fue **aprobada (11-5-3)**.

Indicación Nº 398 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 118 por el siguiente texto:

“Artículo 118.- Son atribuciones de la Corte Constitucional:

1º Resolver las contiendas de competencia que se susciten entre órganos políticos o administrativas y los tribunales de justicia; entre órganos nacionales, por una parte, y regionales, provinciales o comunales, de otra; entre estos últimos entre sí; y las contiendas entre el gobernador y consejo regional, y entre el alcalde y consejo municipal [actual art. 126].

2º Ejercer exclusivamente el control de constitucionalidad y convencionalidad de los preceptos legales sometidos a su conocimiento. Para ello:

a) Cualquiera de las partes en una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial, podrá requerir la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación resulte contraria a la Constitución y que haya sido decisivo en la dictación de una sentencia definitiva o interlocutoria; salvo materias penales y de amparo de derechos fundamentales, en que el requerimiento se podrá deducir en cualquier estado procesal de la causa.

b) Habrá acción pública de inconstitucionalidad contra los preceptos legales que hayan sido declarados inaplicables en al menos una oportunidad previa, por el mismo vicio de constitucionalidad.

3º Declarar la inconstitucionalidad por vicios de forma que se adviertan durante el procedimiento de formación de una ley, habiendo sido ésta totalmente despachada por el Congreso Nacional y antes de su publicación. El requerimiento se formulará por un cuarto de los diputados o senadores en ejercicio por el Presidente de la República.

4º Ejercer el control de constitucionalidad de los tratados internacionales, antes de su promulgación y ratificación.

5º Resolver las cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad de una resolución, decreto supremo o decreto con fuerza de ley del Presidente de la República. Para ello:

a) El Presidente de la República podrá formular el requerimiento dentro de los diez días siguientes a que Contraloría rechace por inconstitucional una resolución, decreto supremo o decreto con fuerza de ley.

b) Una cuarta parte de la Cámara de Diputados podrá formular el requerimiento dentro de los treinta días siguientes a la publicación de la resolución, decreto supremo o decreto con fuerza de ley del que Contraloría haya tomado razón en infracción de la Constitución

6º Resolver los reclamos en caso de que el Presidente de la República no promulgue una ley cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda.

7º Resolver las cuestiones que se susciten sobre constitucionalidad con relación a la convocatoria a un plebiscito, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Tribunal Calificador de Elecciones.

8º Resolver sobre los conflictos que se susciten sobre inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los ministros de Estado, parlamentarios, jueces de la Corte Suprema, Fiscal Nacional, Contralor General de la República, Gobernadores Regionales y otras autoridades que señale la ley.

9º Resolver sobre las cuestiones de constitucionalidad de los autos acordados dictados por la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones y Tribunal Calificador de Elecciones; así como las instrucciones generales dictadas por el Fiscal Nacional, y los acuerdos del Consejo de la Judicatura, a solicitud de parte interesada.

10º Declarar la inconstitucionalidad por vicios de forma que se adviertan durante el procedimiento de reforma constitucional. El requerimiento se formulará por un cuarto de los diputados o senadores en ejercicio, o por el Presidente de la República.

11° Resolver sobre las cuestiones de constitucionalidad de los reglamentos y resoluciones de las Cámaras del Congreso Nacional, a solicitud de un cuarto de los diputados o senadores en ejercicio.”

Se entiende **rechazada** por incompatible.

Artículo nuevo que se rechaza.-

Indicación Nº 399 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para agregar un nuevo artículo a continuación del artículo 118, del siguiente texto:

“Artículo X.- La Corte Constitucional conocerá de la acción de unificación de jurisprudencia, en el caso de la acción de protección de garantías constitucionales, dentro de los cinco días contados desde la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones respectiva. Para estos efectos, la Corte hará un examen de pertinencia de la acción de unificación interpuesta, donde evaluará la existencia de sentencias contradictorias en causas que interpreten una misma garantía constitucional, y que se trate de un conflicto de relevancia jurídica, casos en los cuales declarará la admisibilidad de la acción debiendo ser resuelta por el pleno de la Corte Constitucional por mayoría de sus miembros.”

Sometida a votación fue **rechazada (4-14-1)**.

Al artículo 118 A que pasa a ser 71.-

“Artículo 118 A.- Atribuciones de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tendrá las siguientes atribuciones:

1. Resolver las acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, nacionales o regionales, y en contra de estatutos regionales.

2. Resolver las acciones de inconstitucionalidad por omisión de las medidas legislativas necesarias para el cumplimiento de las normas constitucionales.

3. Resolver los requerimientos de inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación, en cualquier gestión pendiente que se siga ante un tribunal, resulte contraria a la Constitución.

4. Resolver los reclamos en caso de que la o el Presidente de la República no promulgue una ley nacional cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda, o una o un gobernador regional no promulgue una ley regional cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso del que corresponda.

5. Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales recaídas en la acción constitucional de tutela de los derechos fundamentales.

6. Resolver las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre las autoridades del Estado central y las autoridades de las regiones autónomas o los gobiernos locales.

7. Resolver las contiendas de competencias suscitadas entre las autoridades políticas o órganos administrativos y cualquier tribunal.

8. Las demás previstas en esta Constitución y la ley.

El procedimiento, el quórum y la legitimación activa para el ejercicio de cada atribución se determinará por la ley. Con todo, las acciones de los numerales 1 y 2 de este artículo, podrán ser presentadas por el Presidente o Presidenta de la República, por el Congreso, por la Defensoría del Pueblo, por la gobernadora o el gobernador regional correspondiente y por la ciudadanía de forma colectiva; el requerimiento indicado en el numeral 3 podrá ser presentado sólo por el juez o jueza que conoce de la gestión pendiente, de oficio o a petición de parte, esta última tramitada incidentalmente en la misma causa y cuya resolución será inapelable; la del numeral 4, por el Congreso o por la asamblea regional que corresponde, según el caso; y las

cuestiones y contiendas de competencia contempladas en los numerales 6 y 7 podrán ser deducidas por cualquiera de las autoridades en conflicto.”

Indicación Nº 400 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para suprimir el artículo 118 A y 118 B. Fue **retirada** por sus autores.

Indicación Nº 401 de CC Bravo y Villena para sustituir el artículo 118 A, por el siguiente:

“Artículo 118 A. Atribuciones de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tendrá las siguientes atribuciones, ejerciéndolas conforme a los principios referidos en el artículo 108 [De la justicia constitucional]:

1. Resolver las acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes, disposiciones normativas con fuerza de ley, en contra de estatutos regionales, de autonomías territoriales indígenas y de cualquier otra entidad territorial.
2. Resolver las acciones de inconstitucionalidad por omisión de las medidas legislativas necesarias para el cumplimiento de las normas constitucionales.
3. Resolver la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los preceptos legales, que la o el juez que conoce de la gestión pendiente someta a conocimiento de la Corte Constitucional. El requerimiento sólo se iniciará a petición del tribunal que conozca del asunto, de oficio o a petición de parte, la que se tramitará como incidente y cuya resolución será inapelable.
4. Resolver la acción pública de inconstitucionalidad contra los preceptos legales que hayan sido declarados inaplicables en tres oportunidades previas, por el mismo vicio de constitucionalidad.
5. Resolver los reclamos en caso que la Presidenta o el Presidente de la República no promulgue una ley cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda. Igual atribución tendrá respecto de la promulgación de la normativa regional.
6. Pronunciarse sobre la correcta interpretación de los derechos fundamentales en la sentencia que resuelva la apelación de acciones de tutela de derechos fundamentales, cuando el asunto revista especial relevancia constitucional, en la forma que determine la ley.
7. Resolver conflictos de competencia o de atribuciones que se susciten entre las entidades territoriales autónomas, con cualquier otro órgano del Estado, o entre éstos, a solicitud de cualquiera de los antes mencionados.
8. Resolver las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia.
9. Resolver las contiendas de competencia entre la jurisdicción indígena y el sistema nacional de justicia.
10. Resolver el recurso interpuesto en contra de las decisiones de la jurisdicción indígena por vulneración de derechos humanos, interpretados interculturalmente.
11. Las demás previstas en esta Constitución y la ley.

El procedimiento, el quórum y la legitimación activa para el ejercicio de cada atribución se determinará por la ley.”.

Sometida a votación fue **aprobada (14-0-5)**.

Al artículo 118 B que se suprime.-

“Artículo 118 B.- Atribuciones. La Corte Constitucional Plurinacional tendrá las siguientes atribuciones:

1. *Resolver las acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes y otros preceptos normativos, nacionales o las que se originen en las entidades territoriales o regionales autónomas.*
2. *Resolver los requerimientos de inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación, en cualquier gestión pendiente, resulte contraria a la Constitución, a petición del juez que conoce de la causa.*

3. Resolver las acciones constitucionales por omisión o inactividad del legislador
4. Interpretar la constitución, ajustada a la pertinencia cultural de los pueblos cuando corresponda.
5. Declarar la inconstitucionalidad de los preceptos legales o reformas constitucionales que afecten a los pueblos indígenas cuando hayan sido aprobadas sin proceso de consulta previa, de acuerdo a los estándares internacionales.
6. Resolver las contiendas de competencia suscitadas entre las entidad territoriales autónomas, o entre éstas y los órganos de la Administración del Estado u otro órgano del Estado Plurinacional.
7. Resolver las contiendas de competencia entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción común.
8. Resolver el recurso interpuesto en contra de las decisiones de la jurisdicción indígena por vulneración de derechos humanos, interpretados interculturalmente.
9. Resolver los conflictos de competencia entre órganos y autoridades de la administración del Estado, del Parlamento Plurinacional y aquellas que ejerzan la función jurisdiccional.
10. Las demás que determine la ley.”

Indicación Nº 402 de CC Bravo y Villena para suprimir el actual artículo 118 B. Sometida a votación fue **aprobada (18-0-1)**.

Al artículo 119 que se suprime.-

“Artículo 119.- De los efectos de las sentencias de la Corte Constitucional. La interpretación de la Constitución que haga la Corte Constitucional en las causas de que conozca tendrá efecto de cosa juzgada constitucional y su decisión obligará a todos los órganos públicos. Contra las sentencias de la Corte Constitucional no procederá recurso alguno.

La Corte Constitucional publicará su sentencia y desde la fecha de su publicación, ninguna autoridad podrá invocar ni reproducir el contenido material del precepto legal o acto jurídico declarado inconstitucional mientras subsistan en la Constitución las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma constitucional y la norma ordinaria.

La Corte Constitucional enviará oficio a los poderes colegisladores informando su decisión, a fin de que éstos inicien una reforma legal o constitucional, si así lo estimaren y cuando corresponda.”

Indicación Nº 403 de CC Bravo y Villena para suprimir el actual artículo 119. Sometida a votación fue **aprobada (12-5-2)**.

Indicación Nº 404 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 119 por el siguiente texto:

“Artículo 119.- En el ejercicio de sus facultades, la Corte Constitucional será el intérprete final de la Constitución y sus decisiones serán vinculantes para todo órgano del Estado, así como para toda persona, institución o grupo.

Contra sus resoluciones no procederá recurso alguno. No obstante, la Corte podrá rectificar de oficio los errores de hecho en que hubiere incurrido.

Las disposiciones que la Corte declare inconstitucionales no podrán convertirse en ley y se entenderán invalidadas desde la publicación en el Diario Oficial de la sentencia que acoja el reclamo, la que no producirá efecto retroactivo.

Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de todo o parte de una ley, resolución, decreto supremo, decreto con fuerza de ley, auto acordado, u otros, en su caso, se publicarán en el Diario Oficial dentro de los tres días siguientes a su dictación.”

Se entiende **rechazada** por incompatible.

Artículo nuevo que se rechaza.-

Indicación Nº 405 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para agregar un nuevo artículo:

“Artículo X.- En el evento que el tribunal de la gestión pendiente desconozca los efectos de la sentencia que haya declarado la inaplicabilidad de un precepto, la parte agraviada podrá recurrir extraordinariamente ante el pleno de la Corte Constitucional para su pronunciamiento, pudiendo dictar sentencia de reemplazo”.

Sometida a votación fue **rechazada (5-13-1)**.

Al artículo 119 A que pasa a ser 72.-

“Artículo 119 A.- De las sentencias de la Corte Constitucional y sus efectos. Las sentencias de la Corte Constitucional se adoptarán por consenso o por la mayoría de juezas o jueces que establezca la ley; en este último caso, sólo contendrán las razones que fundamentan el voto de mayoría. Tienen carácter vinculante, con efecto de cosa juzgada y de cumplimiento obligatorio para todos los órganos públicos, y contra ellas no cabe recurso ulterior alguno.

Las sentencias sobre inconstitucionalidad o inaplicabilidad podrán limitarse a declarar la interpretación del precepto legal en conformidad a la Constitución. La Corte Constitucional sólo podrá acoger la inconstitucionalidad de una disposición legislativa o de una norma con fuerza de ley, o la inaplicabilidad de un precepto legal, cuando no sea posible interpretarlo de modo de evitar efectos inconstitucionales.

Cuando la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de una disposición legislativa o de una norma con fuerza de ley, la sentencia tendrá efectos derogatorios a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, la que no producirá efecto retroactivo. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material de la disposición legislativa o de la norma con fuerza de ley declarada inconstitucional, mientras subsistan en la Constitución las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación con la norma ordinaria.

Si la Corte Constitucional verifica la existencia de inconstitucionalidad por omisión, lo pondrá en conocimiento del órgano legislativo competente, nacional o regional, a fin de que éste actúe con arreglo a las formas previstas por la Constitución, para subsanar tal omisión.

Declarada la inaplicabilidad de un precepto legal, éste no podrá ser aplicado en la gestión judicial pendiente en la que se originó el requerimiento.”

El convencional Cruz instó por aprobar la indicación Nº 406 pues incorpora la cosa juzgada constitucional. Sin perjuicio de ello se recalca un principio importante: la deferencia al legislador y la presunción de constitucionalidad.

Indicación Nº 406 de CC Bravo y Villena para sustituir el artículo 119 A, por el siguiente:

“Artículo 119 A.- De las sentencias de la Corte Constitucional y sus efectos. Las sentencias de la Corte Constitucional se adoptarán por consenso o por la mayoría de juezas o jueces que establezca la ley. Tienen carácter vinculante, con efecto de cosa juzgada y de cumplimiento obligatorio para todos los órganos públicos, y contra ellas no cabe recurso ulterior alguno.

La Corte Constitucional sólo podrá acoger la inconstitucionalidad de una disposición legislativa o de una norma con fuerza de ley, o la inaplicabilidad de un precepto legal, cuando no sea posible interpretarlo de modo de evitar efectos inconstitucionales.

Declarada la inaplicabilidad de un precepto legal, éste no podrá ser aplicado en la gestión judicial en la que se originó la cuestión de constitucionalidad.

Cuando la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de una disposición legislativa o de una norma con fuerza de ley, la sentencia tendrá efectos derogatorios a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material de la disposición legislativa o de la norma con fuerza de ley declarada inconstitucional, mientras subsistan en la Constitución las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación con la norma ordinaria.

Si la Corte Constitucional verifica la existencia de inconstitucionalidad por omisión, lo pondrá en conocimiento del órgano legislativo competente, a fin de que éste actúe con arreglo a las formas previstas por la Constitución, para subsanar tal omisión.”.

Sometida a votación fue **aprobada (13-0-4)**.

Indicación Nº 407 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir en el inciso primero del artículo 119 A la frase: “solo contendrán las razones que fundamentan el voto de mayoría” por la siguiente frase: “contendrán las razones que fundamenten el voto de mayoría y de minoría.”

Se entiende **rechazada** por incompatible.

A los artículos 119 B y 120 que se suprimen.-

“Artículo 119 B.- La Corte Constitucional Plurinacional debe observar los principios de plurinacionalidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, plurilingüismo e igual dignidad de las culturas.

Sus sentencias son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ulterior alguno.

La sentencia que declara la inaplicabilidad o la inconstitucionalidad de un precepto no permitirá revisar procesos fenecidos mediante sentencias que tengan la calidad de cosa juzgada, en los que se haya hecho aplicación de la ley inconstitucional.

La ley determinará los procedimientos que regirán ante la Corte Constitucional Plurinacional.”

“Artículo 120.- Reserva legal de organización y procedimientos. La organización, funcionamiento y estatuto de los jueces constitucionales, serán reguladas por la ley.”

Indicaciones Nº 408, 409 y 410 de CC Bravo y Villena; y Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para suprimir los artículos 119 B y 120. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (15-1-3)**.

Al epígrafe “§ Consejo de Contendencias de Competencia” y a los artículos 121, 122, 123, 124 y 125 que se suprimen.-

“Artículo 121.- Objetivo. Las contiendas de competencia entre los diferentes órganos constitucionales serán resueltas por un Consejo de contiendas de competencia, de conformidad a las disposiciones siguientes y la ley.

Existirá una contienda de competencia cuando dos órganos, de los identificados en este capítulo, consideren que carecen o tienen competencias suficientes para resolver una determinada materia.”

“Artículo 122.- Composición. El Consejo estará compuesto por siete integrantes, los que serán designados por la Cámara de Diputadas y Diputados a partir de ternas elaboradas por el sistema de Alta Dirección Pública. La designación e integración del Consejo debe respetar los criterios de paridad, descentralización y plurinacionalidad.

Sus integrantes durarán en el cargo 3 años renovables por un período y se reemplazarán por parcialidades cada 3 años evitando la renovación conjunta de nombramientos de la misma autoridad. Deberán tener reconocido prestigio y más de

diez años de titulación en ciencias jurídicas, administración pública o ciencias políticas.

Una ley determinará la organización del Consejo, su funcionamiento, procedimientos y fijará la planta, el estatuto de su personal, y las remuneraciones por las audiencias a las que sus integrantes concurren.

“Artículo 123.- Atribuciones. Son atribuciones del Consejo, resolver las contiendas de competencias que se susciten entre:

1) Las autoridades del poder ejecutivo central y las autoridades ejecutivas y legislativas del gobierno regional o comunal;

2) El Congreso Nacional y las autoridades ejecutivas y legislativas regionales o comunales;

3) Las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia;

4) Las autoridades políticas o administrativas regionales y las comunales.

El requerimiento del poder ejecutivo central, solo podrá ser presentado por el o la Presidenta de la República. En el caso del requerimiento del Congreso Nacional, éste deberá ser aprobado por la mayoría de los diputados y las diputadas en ejercicio. El requerimiento de las autoridades ejecutivas regionales, solo podrá ser presentado por el Gobierno Regional. El requerimiento de las autoridades legislativas regionales, deberá ser aprobado por la mayoría de los y las asambleístas en ejercicio. El requerimiento de las autoridades comunales podrá ser presentado por el alcalde o la alcaldesa, así como por la mayoría en ejercicio del concejo municipal.

El Consejo resolverá las demás contiendas de competencia que determinen las leyes.”

“Artículo 124.- Reglas de procedimiento.

1) El requerimiento deberá ser fundado indicando con claridad el o los asuntos contenidos en el conflicto de competencia. En ningún caso el Consejo podrá ejercer sus atribuciones respecto de otros asuntos que no sean los expresamente sometidos a su conocimiento, ni podrá extenderse a puntos no alegados por las partes.

2) El requerimiento deberá presentarse en el plazo de tres meses desde que se tenga conocimiento de la contienda o del acto u omisión que la origine. Cuando corresponda, este plazo se contará desde que el acto haya sido publicado o notificado.

3) El Consejo podrá funcionar con un quórum mínimo de cinco integrantes. En caso de empate con integración par, decidirá el integrante más antiguo de la autoridad que estuviera excluida de la contienda.

4) No constituirá inhabilidad el hecho de que el consejero que conozca de un asunto haya sido nombrado por alguna de las autoridades partes de la contienda.

5) Los asuntos serán conocidos en audiencia pública y contradictoria.

6) La decisión del Consejo no podrá ser recurrida ni revisada por autoridad o tribunal alguno.”

“Artículo 125.- Efectos del dictamen. La decisión del Consejo señalará la autoridad competente para conocer de la materia indicada en el requerimiento.

Si el requerimiento tuviese como pretensión que un órgano público deje de conocer un asunto, o declarar que un acto afinado haya sido dictado fuera de su ámbito de competencia, la decisión que lo acoge ordenará, además, la suspensión inmediata de ese conocimiento o del acto, la orden de remisión de los antecedentes a la autoridad competente y la privación de efectos de todos los actos que la autoridad desprovista de competencia hubiese dictado.

Si el requerimiento tiene por objeto prevenir un conflicto relevante y posible pero futuro, la decisión del Consejo tendrá efectos generales.

El Consejo podrá siempre adoptar medidas provisionales para la correcta y eficaz resolución del conflicto. En ningún caso podrá pronunciarse sobre el fondo de los actos cuya competencia se reclama.”

El convencional Bravo comentó que propuso estas indicaciones supresivas en el entendido de que las contiendas de competencia las conocerá la Corte Constitucional. El convencional Daza explicó que este Consejo fue propuesto en el entendido de que no habría un órgano especializado de justicia constitucional. Por lo tanto, declinó en su pretensión de establecer este órgano, siempre bajo la hipótesis de que el bloque de artículos aprobados sobre justicia constitucional vuelva a una discusión más detallada. El convencional Viera se manifestó en el mismo sentido.

Indicación Nº 411 a 416 de CC Bravo y Villena para suprimir el título “§ Consejo de Contiendas de Competencia”, artículo 121, 122, 123, 124, y 125. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (15-1-3)**.

Al epígrafe “§ De las acciones jurisdiccionales para la tutela de derechos fundamentales / Acciones constitucionales de tutela”

Por acuerdo unánime de las y los integrantes de la Comisión, se decidió votar separadamente el epígrafe “§ De las acciones jurisdiccionales para la tutela de derechos fundamentales”. Sometido a votación fue **rechazado (5-14-0)**.

Se sometió a votación el epígrafe “§ Acciones constitucionales de tutela” y fue **aprobado (19-0-0)**.

Al artículo 126 que se suprime.-

El convencional Daza creyó importante designar los principios que informen el procedimiento al que sean sometidas las acciones constitucionales. Así, se impedirá la desnaturalización de ellas. En ese contexto, llamó a votar a favor de la indicación Nº 419.

El convencional Bravo precisó que el inciso primero es problemático porque involucra a las acciones legales, como por ejemplo, aquéllas previstas en la denominada ley Zamudio, acción de tutela de derechos fundamentales, etc. Por ello votará a favor de la indicación Nº 417.

La convencional Royo explicó que muchas veces el acceso a la justicia se complejiza cuando existe una serie de formalidades en el mecanismo de interposición de acciones. En ese sentido es importante avanzar para que las personas accedan de manera más sencilla.

Indicación Nº 417 y 418 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez; y Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para suprimir el artículo 126. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (14-3-2)**.

Indicación Nº 419 de CC Daza para reemplazar el artículo 126 del texto sistematizado, por un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo 126.- Principios generales para la protección jurisdiccional de derechos fundamentales. Las acciones que protejan derechos fundamentales se sustanciarán mediante procedimientos previstos por la Constitución y la ley, en conformidad con los principios preferencia, oficialidad, celeridad, bilateralidad y desformalización o sencillez.

El contenido y alcance de los derechos fundamentales se interpretarán de conformidad a los principios reconocidos por esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte. Con todo, se deberá velar siempre por alcanzar el sentido más favorable posible para estos derechos según el caso concreto.”

Se entiende **rechazada** por incompatible.

Al artículo 127 que pasa a ser 73.-

“Artículo 127.- Acción de tutela general de derechos fundamentales. Toda persona agraviada por actos u omisiones que priven, perturben o amenacen los derechos fundamentales o los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, tendrá acción de amparo para ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre ante el juez competente, quien adoptará de inmediato todas las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de aquélla.

Tratándose de un derecho fundamental que conlleva el otorgamiento de una prestación o beneficio de un titular determinado, deberá acreditarse que se ha incurrido en una ilegalidad o arbitrariedad al negarse el acceso a la prestación, por cumplir con los requisitos o condiciones de la política pública respectiva para hacerse acreedor de ella.

Esta acción se podrá impetrar mientras la conducta denunciada persista, de acuerdo con un procedimiento autónomo, urgente, preferente, informal, sumarísimo, bilateral y contradictorio. La ley regulará esta acción y determinará que sea conocida por los tribunales más cercanos a la actora, garantizando la accesibilidad a la justicia, sin que el tribunal pueda excusarse de resolver el asunto aún por falta de ley que regule el procedimiento aplicable.

El tribunal competente podrá en cualquier momento del procedimiento decretar una orden de no innovar o establecer medidas cautelares cuando la situación de urgencia lo haga exigible, y alzarlas o dejarlas sin efecto cuando lo estime conveniente, a petición de parte o de oficio.

El amparo sólo podrá entablarse una vez que se haya agotado la vía administrativa, cuando proceda y siempre que no exista otro medio procesal que permita plantear la controversia idóneamente ante un tribunal diferente. Se exceptúan aquellos casos en que, por su urgencia y gravedad, el agotamiento de la vía administrativa o de los otros remedios procesales disponibles pueda provocar un daño irreparable.

No podrá deducirse esta acción constitucional contra las resoluciones judiciales dictadas por los tribunales de la República, salvo respecto de aquellas personas que no hayan intervenido en el proceso respectivo y a quienes les afecte lo resuelto.”

El convencional Cruz propuso que se acoja la indicación N° 420 pues tiene varias novedades en comparación a la acción de protección actual. Se amplía el catálogo de derechos fundamentales; el tribunal competente es el de instancia que designe la ley; se consigna que no exista otra acción que se pueda reclamar en ese sentido, salvo que por su gravedad provoque un daño irreparable. Añadió que el objetivo es restablecer el imperio del derecho. El convencional Jiménez agregó que dentro de los avances que tiene es que las acciones que amparan derechos tienen una titularidad amplia y llamó a votar a favor de la indicación N° 420.

El convencional Daza también llamó a votar a favor de la indicación N° 420, ya que se hace cargo de una serie de problemas que se dan en la práctica, como lo sería el poder ejercer la acción mientras la vulneración aun exista para evitar que la acción no se pueda presentar por un tema de plazo. Preciso que esta es una acción cautelar que se utilizará en caso de no tener otra opción, además de la posibilidad de presentarla en tribunales de instancia, lo que es muy importante para concretar el acceso a la justicia.

El convencional Cozzi invitó a votar a favor de la indicación N° 420, pero hizo algunas observaciones al respecto, mencionando que se elimina la calificación de que el acto u omisión impugnado debe ser ilegal, lo que le parece un error, dado que la mayoría de los derechos colisionan entre sí, dejando un espacio muy grande para el juez. También debe ser la Constitución la que defina cuál es el tribunal en la que se

presentará la acción. Tampoco le parece aconsejable que la acción pueda ser utilizada contra resoluciones judiciales.

El convencional Bravo llamó a votar a favor de la indicación N° 420, destacando los siguientes tres aspectos: que son justiciables todos los derechos fundamentales; que el tribunal más cercano a la persona es el competente; y es una medida para tener una solución cautelar, no siendo un mecanismo para resolver la materia de fondo.

El convencional Viera señaló que a propósito de la violación de los derechos fundamentales, existe la garantía de éstos que es la reserva legal, por lo que no se preocuparía por la falta de mención del concepto “ilegal”. Esta acción no es un sucedáneo de una decisión de largo conocimiento, pero advierte un problema en el inciso séptimo, dado que el pleno ya aprobó una norma de acción de privación de nacionalidad. La convencional Villena señaló que la Comisión 2 no debió aprobar esas acciones, dado que es esta la Comisión la mandatada por Reglamento a ver las acciones constitucionales.

Indicación N° 420 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para sustituir el actual artículo 127, por el siguiente:

“Artículo 127.- Acción de tutela de derechos fundamentales. Toda persona que por causa de un acto u omisión sufra una amenaza, perturbación o privación en el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales, podrá concurrir por sí o por cualquiera a su nombre ante el tribunal de instancia que determine la ley, el que adoptará de inmediato todas las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho. Esta acción se podrá deducir mientras la vulneración persista.

Esta acción cautelar será procedente cuando la persona afectada no disponga de otra acción, recurso o medio procesal para reclamar de su derecho, salvo aquellos casos en que, por su urgencia y gravedad, pueda provocarle un daño grave inminente o irreparable.

Al acoger o rechazar la acción, se deberá señalar el procedimiento judicial que en derecho corresponda y que permita la resolución del asunto.

El tribunal competente podrá en cualquier momento del procedimiento, de oficio o a petición de parte, decretar cualquier medida provisional que estime necesaria, y alzarlas o dejarlas sin efecto cuando lo estime conveniente.

No podrá deducirse esta acción contra resoluciones judiciales, salvo respecto de aquellas personas que no hayan intervenido en el proceso respectivo y a quienes afecten sus resultados.

La apelación en contra de la sentencia definitiva será conocida por la Corte de Apelaciones respectiva. El recurso será conocido por la Corte Suprema si respecto a la materia de derecho objeto de la acción existen interpretaciones contradictorias sostenidas en dos o más sentencias firmes emanadas de los tribunales del Sistema Nacional de Justicia. De estimarse en el examen de admisibilidad que no existe tal contradicción, se ordenará que sea remitido junto con sus antecedentes a la Corte de Apelaciones correspondiente para que, si lo estima admisible, lo conozca y resuelva.

Esta acción también procederá cuando por acto o resolución administrativa se prive o desconozca la nacionalidad chilena. La interposición de la acción suspenderá los efectos del acto o resolución recurrida.

Tratándose de los derechos de la naturaleza y derechos ambientales, podrán ejercer esta acción tanto la Defensoría de la Naturaleza como cualquier persona o grupo.

En el caso de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, esta acción podrá ser deducida por sus instituciones representativas, autoridades tradicionales o la Defensoría de los Pueblos.”

Sometida a votación fue **aprobada (15-1-3)**.

Además, se presentaron las siguientes indicaciones:

Indicación Nº 421 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 127 por el siguiente:

“Artículo 127.- Acción de amparo. Toda persona agraviada por un acto u omisión ilegal, del Estado o los particulares, que afecte o amenace el legítimo ejercicio de los derechos y garantías reconocidos en esta Constitución, tendrá acción de amparo para ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Esta acción se podrá impetrar dentro de treinta días contados desde el conocimiento del acto u omisión reclamada. La ley establecerá un procedimiento urgente, preferente, sumario y contradictorio para su tramitación y resolución.

El tribunal competente podrá en cualquier momento del procedimiento decretar medidas cautelares cuando concurren los requisitos para ello y alzarlas cuando lo estime conveniente, a petición de parte o de oficio.

El amparo sólo podrá entablarse una vez que se haya agotado la vía administrativa, cuando proceda, y siempre que no exista otro medio procesal más idóneo. Se exceptúan aquellos casos en que, por su urgencia y gravedad, el agotamiento de la vía administrativa o de los otros remedios procesales disponibles pueda provocar un daño irreparable. No procederá contra actos legislativos ni contra resoluciones judiciales.”

Indicación Nº 422 de CC Llanquileo para sustituir el actual artículo 127, por el siguiente:

“Artículo 127.- Acción de tutela de derechos fundamentales. Toda persona que por causa de un acto u omisión sufra una amenaza, perturbación o privación en el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales, podrá concurrir por sí o por cualquiera a su nombre ante la Corte de Apelaciones más cercana, que adoptará de inmediato todas las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho. Esta acción se podrá deducir mientras la vulneración persista.

Esta acción cautelar será procedente cuando la persona afectada no disponga de otra acción, recurso o medio procesal para reclamar de su derecho, salvo aquellos casos en que, por su urgencia y gravedad, pueda provocarle un daño grave inminente o irreparable.

Cualquier tribunal del país podrá recibir la acción de tutela de que trata este artículo, estando obligado a remitir por la vía más expedita y en el plazo máximo de dos horas, los antecedentes a la Corte del territorio jurisdiccional respectivo.

Al acoger o rechazar la acción, se deberá señalar el procedimiento judicial que en derecho corresponda y que permita la resolución del asunto.

La Corte de Apelaciones podrá en cualquier momento del procedimiento, de oficio o a petición de parte, decretar cualquier medida provisional que estime necesaria, y alzarlas o dejarlas sin efecto cuando lo estime conveniente.

No podrá deducirse esta acción contra resoluciones judiciales, salvo respecto de aquellas personas que no hayan intervenido en el proceso respectivo y a quienes afecten sus resultados.

La apelación en contra de la sentencia definitiva será conocida por la Corte Suprema.

Esta acción también procederá cuando por acto o resolución administrativa se prive o desconozca la nacionalidad chilena. La interposición de la acción suspenderá los efectos del acto o resolución recurrida.

Tratándose de los derechos de la naturaleza y derechos ambientales, podrán ejercer esta acción tanto la Defensoría de la Naturaleza como cualquier persona o grupo.

En el caso de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, esta acción podrá ser deducida por sus instituciones representativas, autoridades tradicionales o la Defensoría de los Pueblos.”

Las indicaciones N° 421 y 422 se entienden **rechazadas** por incompatibles.

A los artículos 127 A, 127 B y 127 C que se suprimen.-

“Artículo 127 A.- Acción de protección constitucional. Toda persona que requiera tutela cautelar en el ejercicio de los derechos que esta Constitución le reconoce, podrá reclamar, por sí o por otro en su nombre, para que un tribunal de primer grado jurisdiccional, con la competencia más próxima para conocer la materia de que trata la acción, adopte, en el más breve plazo, las medidas de protección necesarias.

La ley dispondrá de un sistema sencillo y rápido para la presentación, distribución y resolución de la acción interpuesta.

El tribunal, antes de decidir la acción cautelar, podrá adoptar cualquier medida provisional urgente. Al resolver la acción, podrá proponer el procedimiento judicial que en derecho proceda y que permita la resolución completa del conflicto sometido a su decisión.

La sentencia definitiva del tribunal será apelable.”

“Artículo 127 B. Acción de protección. Toda persona que por causa de un acto u omisión efectuada por agentes del Estado o particulares, sufra una amenaza, perturbación o privación indebida en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos por la presente Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en Chile, podrá concurrir por sí o por cualquiera a su nombre, ante cualquier Juzgado de Letras territorialmente competente, para que adopte de inmediato las providencias que estime necesarias para restablecer prontamente el imperio del derecho.

La ley establecerá el procedimiento para la sustanciación de esta acción, velando por que aquel sea conocido de forma preferente por el Tribunal. Con todo, no podrán transcurrir más de diez días corridos entre la interposición de la acción y su resolución de primera instancia, salvo en los casos excepcionales que fije la ley. No procederá esta acción cuando exista otro medio o recurso especial para lograr la protección de los derechos y garantías lesionados, ni para impugnar sentencias judiciales.

La sentencia de primera instancia será apelable ante Tribunales de Apelaciones, la que deberá resolver en plazo breve y perentorio. Procederá recurso de unificación de jurisprudencia ante la Corte Suprema, la que conocerá de forma preferente.

El procedimiento, los requisitos de su interposición, la ejecución del fallo y los demás elementos procesales serán establecidos por la ley.”

“Artículo 127 C.- Acción constitucional de tutela de derechos. Toda persona que, por causa de actos u omisiones, fuere afectada o amenazada en sus derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución y las leyes, o en los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, podrá accionar de tutela, por sí o por cualquiera en su nombre, para reclamar la protección de tales derechos, ante el tribunal de instancia que determine la ley, el cual deberá adoptar de inmediato todas las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la o las personas afectadas.

El tribunal de instancia competente podrá, en cualquier momento del procedimiento, decretar de oficio o a petición de parte, una orden de no innovar o disponer medidas cautelares cuando la situación de urgencia lo haga exigible, como también alzarlas o dejarlas sin efecto.

El procedimiento de la acción de tutela de derechos será sencillo, rápido, gratuito, desformalizado y preferentemente oral. La ley regulará el procedimiento de

esta acción y determinará que sea conocida por el tribunal más cercano al domicilio o residencia de la persona afectada, garantizando la accesibilidad a la justicia.

Esta acción procederá cuando la o el afectado no disponga de otra acción o recurso u otro medio de defensa judicial, salvo aquellos casos en que, por su urgencia y gravedad, pueda provocar un daño irreparable.

La sentencia sobre la acción de tutela de derechos, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse para ante el tribunal de apelación que corresponda, conforme a las reglas generales y tramitándose de forma prioritaria, sin perjuicio de su eventual revisión por la Corte Constitucional, de acuerdo a lo que establezca esta Constitución y la ley.”

Indicaciones Nº 423, 424 y 425 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain; y Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para suprimir los artículos 127 A, 127 B y 127 C.

Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (19-0-0)**.

Al artículo 128 que se suprime.-

“Artículo 128.- La sentencia pronunciada por el tribunal que resuelva esta acción de tutela general de derechos fundamentales, será apelable ante la Corte de Apelaciones respectiva, o ante la Corte Constitucional, la que conocerá del asunto cuando, antes de la admisión a trámite, determine que el caso reviste de especial relevancia constitucional. De estimarse que no reviste el asunto de esta relevancia, se remitirán los antecedentes a la Corte de Apelaciones competente para que conozca de la tutela.”

Indicación Nº 426 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para eliminar el artículo 128. Sometida a votación fue **aprobada (14-4-1)**.

Indicación Nº 427 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 128 por el siguiente:

“Artículo 128.- El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución en el artículo y numerales correspondientes al [derecho a la vida, a la igualdad ante la ley, al debido proceso conforme al cual nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho; la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada; libertad de conciencia y de culto, el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado; libertad de enseñanza; libertad de opinión y expresión; derecho de reunión pacífico; derecho a asociarse sin permiso previo; a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación; derecho a sindicarse; derecho a desarrollar cualquier actividad económica y estatuto del Estado empresario; la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica; libertad para adquirir el dominio sobre toda clase de bienes conforme a la Constitución y la ley; el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporeales; y derechos de propiedad intelectual e industrial y libertad de crear y de investigación científica], podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº [que reconoce el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación] del artículo [sobre los derechos fundamentales reconocidos y asegurados por la propuesta de Nueva

Constitución], cuando una persona natural vea afectado directamente su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada, y siempre que la cuestión no haya sido entregada al conocimiento y juzgamiento, por cualquier vía, de los tribunales ambientales.

La sentencia que se dicte ya sea que lo acoja, rechace o declare inadmisible el recurso, será apelable ante la Corte Constitucional.”

Se entiende **rechazada** por incompatible.

Al artículo 129 que pasa a ser 74.-

“Artículo 129. Acción de Amparo. Toda persona que ilegalmente sufra una privación, perturbación o amenaza a su derecho a la libertad personal y seguridad individual, o que sea arrestada, detenida o presa con infracción a lo dispuesto en esta Constitución o las leyes, podrá concurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, ante el Juez de Garantía que determine la ley, a fin de que éste adopte de inmediato las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la persona afectada, pudiendo inclusive decretar su libertad inmediata.

El proceso de amparo será breve y sumarísimo, revistiendo de un carácter preferente para el Tribunal respecto de toda otra acción o petición que sustancie ante él. En ningún caso podrán transcurrir más de dos días entre el ingreso de un amparo y su resolución. Contra la sentencia de primera instancia procederá recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones competente, la que deberá resolver en un plazo no mayor a dos días corridos. Toda infracción a los plazos contemplados en esta norma conlleva la responsabilidad personal de las y los jueces involucrados. La ley establecerá los presupuestos y el procedimiento para la sustanciación del habeas corpus.

El Tribunal podrá ordenar que la persona sea traída a su presencia y su decreto será obedecido por todas las autoridades encargadas de las cárceles o lugares de detención. Conocidos los antecedentes correspondientes, el Tribunal decretará la libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales.

Las autoridades o funcionarios que ordenaren el ocultamiento de la persona arrestada, detenida, confinada, condenada o secuestrada, o se negaren a presentarlo al Tribunal competente, o en cualquier otra forma burlaren el hábeas corpus, como también los agentes ejecutores de tales actos, incurrirán en el delito de secuestro o de desaparición forzada de personas en su caso. El Tribunal deberá remitir los antecedentes al Ministerio Público para que inicie la investigación correspondiente, pudiendo ordenar a las Fuerzas de Orden y Seguridad realicen las gestiones necesarias para ubicar a la persona agraviada.”

El convencional Daza sostuvo que en la indicación N° 428 se propone la acción de amparo o habeas corpus, prefiriendo el primer término por el principio de lenguaje claro que rige a la Convención. Por tratarse de una acción tan relevante dentro de los sistemas jurídicos universales, no se ha innovado mucho en su consagración, siendo el articulado de la Constitución de 1925 parte de la inspiración, reconociendo su tradición, así como la actual acción de amparo del Código Procesal Penal.

La convencional Llanquileo señaló que tiene discrepancia con la indicaciones N° 428, dado que estima que debería ser la Corte de Apelaciones la competente para conocer de esta acción y la Corte Suprema la competente para conocer de la apelación, por lo que llamó a apoyar la indicación N° 430.

El convencional Cruz señaló que van a apoyar la indicación 428, dado que si bien se quiso usar de modelo la Constitución de 1925, hay novedades. El convencional Bravo también mencionó que esta propuesta recoge una larga materia constitucional del habeas corpus, manteniendo varios elementos de la tradición, incluyendo cuál es el tribunal competente, al indicar que será la magistratura que

señale la ley. La convencional Royo señaló que existe una diferencia importante entre la propuesta de las indicaciones N° 428 y N° 429, que tiene que ver con el inciso final sobre los amparos preventivos, recogiendo el primero el derecho de la seguridad individual, que dada su relevancia práctica es algo que no se debe restringir en el nuevo articulado.

Indicación N° 428 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para sustituir el actual artículo 129 por el siguiente:

“Artículo 129. Acción de amparo. Toda persona que sea arrestada, detenida o presa con infracción a lo dispuesto en esta Constitución o las leyes, podrá concurrir por sí o por cualquiera persona a su nombre, sin formalidades, ante la magistratura que señale la ley, a fin de que esta adopte de inmediato las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la persona afectada, pudiendo inclusive decretar su libertad inmediata.

Esa magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del tribunal competente, procediendo en todo breve y sumariamente, y corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija. Sin perjuicio de lo señalado, el tribunal deberá agotar todas las medidas conducentes a determinar la existencia y condiciones de la persona que se encontrare privada de libertad.

Esta acción también procederá respecto de toda persona que ilegalmente sufra una privación, perturbación o amenaza a su derecho a la libertad personal o seguridad individual, debiendo en tal caso adoptarse todas las medidas que sean conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.”

Sometida a votación fue **aprobada (11-3-4)**.

Además, se presentaron las siguientes indicaciones:

Indicación N° 429 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 129 por el siguiente:

“Artículo 9.- Habeas corpus. Toda persona que se hallare arrestada, detenida, presa o que sufra cualquier privación o amenaza en su libertad y seguridad individual, con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia, que se ponga a disposición del juez competente o decretar su libertad inmediata, procediendo en todo breve y sumariamente”.

Indicación N° 430 de CC Llanquileo para sustituir el actual artículo 129, por el siguiente:

“Artículo 129. Acción de amparo. Toda persona que sea arrestada, detenida o presa con infracción a lo dispuesto en esta Constitución o las leyes, podrá concurrir por sí o por cualquiera persona a su nombre, sin formalidades, ante la Corte de Apelaciones respectiva, a fin de que esta adopte de inmediato las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la persona afectada, pudiendo inclusive decretar su libertad inmediata.

Cualquier tribunal del país podrá recibir la acción de amparo de que trata este artículo, estando obligado a remitir por la vía más expedita y en el plazo máximo de dos horas, los antecedentes a la Corte de Apelaciones del territorio jurisdiccional respectivo.

La Corte de Apelaciones podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las

cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del tribunal competente, procediendo en todo breve y sumariamente, y corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija. Sin perjuicio de lo señalado, la Corte de Apelaciones deberá agotar todas las medidas conducentes a determinar la existencia y condiciones de la persona que se encontrare privada de libertad.

Esta acción también procederá respecto de toda persona que ilegalmente sufra una privación, perturbación o amenaza a su derecho a la libertad personal o seguridad individual, debiendo en tal caso adoptarse todas las medidas que sean conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

La sentencia dictada será susceptible de recurso de apelación que será conocido y resuelto por la Corte Suprema.”

Las indicaciones N° 429 y 439 se entienden **rechazadas** por incompatibles.

Al artículo 129 A que se suprime.-

“Artículo 129 A.- Acción de tutela de la libertad personal. Toda persona privada de libertad con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes dictadas en su conformidad, podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre ante el juzgado de garantía competente, con el objeto de que examine la legalidad de su privación de libertad y, en todo caso, para que examine las condiciones en que se encontrare, constituyéndose, si fuere necesario, en el lugar en que ella estuviere. La jueza o el juez podrá ordenar inmediatamente la libertad de la persona o adoptar las medidas que fueren procedentes, para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la persona afectada.

El abogado o abogada de la persona privada de libertad, sus parientes o cualquier persona en su nombre podrán siempre ocurrir ante el juez que conociere del caso o aquél del lugar donde aquélla se encontrare, para solicitar que ordene que sea conducida a su presencia y se ejerzan las facultades establecidas en el inciso anterior.

Con todo, si la privación de libertad hubiere sido ordenada por resolución judicial, sólo podrá impugnarse por los medios procesales que correspondan ante el tribunal que la hubiere dictado.

La misma acción, y en igual forma, podrá ser deducida en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra afectación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. El juez o jueza competente dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la persona afectada.

La ley regulará los demás aspectos del procedimiento de esta acción, para asegurar su efectividad.”

Indicación N° 431 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para eliminar el artículo 129 A. Sometida a votación fue **aprobada (15-4-0)**.

Indicación N° 432 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 129 A por el siguiente:

“Artículo X.- Toda persona que se hallare arrestada, detenida o presa con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la persona afectada.

Esa magistratura podrá ordenar que la persona sea llevada a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o

lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del juez competente, procediendo en todo breve y sumariamente, y corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija.

El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La respectiva magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.”

Se entiende **rechazada** por incompatible.

Al artículo 129 B que se suprime.-

“Artículo 129 B.- Habeas Corpus. Toda persona arrestada, presa o detenida con infracción de lo dispuesto en esta Constitución o en las leyes, podrá reclamar por sí, o por cualquiera a su nombre, ante el tribunal y en la forma que determine la ley. Dicha magistratura podrá ordenar que la persona afectada sea traída a su presencia, y de comprobarse que la detención ha sido o devenido ilegal, dispondrá su libertad inmediata, procediendo siempre de forma rápida, eficaz y sin mayor formalidad.

La misma acción podrá ser interpuesta respecto de una medida cautelar o pena privativa de libertad establecida judicialmente, cuando en la ejecución de esta, se vulneraren sus derechos constitucionales. En este caso el tribunal podrá constituirse en el lugar en que la persona estuviere detenida, ordenando las medidas necesarias para reestablecer sus derechos.

Igualmente, será procedente esta acción respecto de todo acto de autoridad o de particular que vulnere o amenace ilegalmente la libertad personal y seguridad individual de otra persona. El tribunal dispondrá en tal caso todas las medidas necesarias para salvaguardar el o los derechos afectados, en el plazo más breve posible.”

Indicación Nº 433 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larraín para suprimir los artículos 129 B y 130. Sometida a votación fue **rechazada (6-13-0)**.

Indicación Nº 434 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para eliminar el artículo 129 B. Sometida a votación fue **aprobada (18-1-0)**.

Al artículo 130 que pasa a ser 75.-

“Artículo 130.- Compensación por prisión sin condena. Toda persona privada de libertad que sea absuelta, o que no resulte condenada definitivamente, será compensada por cada día que haya permanecido en prisión. El monto diario de compensación será único, determinado por ley y otorgado mediante un procedimiento administrativo simple y expedito.

Esta compensación no procederá en el caso que el afectado hubiere contribuido a que se haya ordenado la privación de libertad con su comportamiento indebido o negligente.”

El convencional Woldarsky señaló que estas indicaciones son muy interesantes, la Nº 435 y 436 especialmente, dado que hacen una distinción entre la privación de libertad indebida y la indemnización por error judicial como dos conceptos distintos, destacando que una de las actuaciones que ha tenido este Estado es el uso político de la privación de la libertad.

El convencional Daza señaló que la indicación Nº 435 es un avance concreto para compensar a las personas que han estado de manera indebida privados de libertad, mandando al legislador para que defina el procedimiento en estas

situaciones, el cual debe ser simple y expedito. Hay un abuso de la prisión preventiva en este país dado que al país no le sale gratis tener a personas privadas de libertad por largo tiempo, sin condena y en prisión preventiva. Esta norma se hace cargo de las situaciones en las que la prisión preventiva pudiera ser justificada, por lo que es una norma bien equilibrada.

El convencional Cozzi comentó que ya se aprobó en el pleno la norma de indemnización por error judicial, por lo que no sería necesaria una nueva norma. Se preguntó qué pasa con las salidas alternativas. Esto es algo que tiene que ser demandado en tribunales y complica que sea el juez civil el que tenga que apreciar cuestiones que son más bien de índole penal. Se está haciendo un estatuto de responsabilidad objetiva, por lo que le pareció que puede ser complejo desde la perspectiva de persecución penal.

El convencional Viera señaló que, sobre estas acciones, que la primera establece un imperativo dado lo grave que es la privación injusta de la libertad, por lo que hay que hacerse responsable. En la segunda, el problema del actual diseño radica en las exigencias dadas por el adverbio “injustificada, errónea o arbitrariamente”. Lo que aquí se hace es bajar el estándar sobre el error injustificado. El convencional Stingo señaló que alguien tiene que pagar el costo de tener a una persona detenida de forma indebida, por lo que se propone que sea el Estado el responsable.

Indicación Nº 435 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para sustituir el actual artículo 130, por el siguiente:

“Artículo 130.- Compensación por privación de libertad indebida. Toda persona que sea absuelta, sobreseída definitivamente o que no resulte condenada, será compensada por cada día que haya permanecido privada de libertad. El monto diario de compensación será fijado por la ley y su pago se realizará mediante un procedimiento simple y expedito.

La compensación no procederá cuando la privación de libertad se haya decretado por una causal fundada en una conducta efectiva del imputado.”.

Sometida a votación fue **aprobada (14-3-2)**.

Al artículo 131 que pasa a ser 76.-

“Artículo 131.- Acción de responsabilidad por falta de servicio judicial. Toda persona cuya detención sea judicialmente declarada ilegal o que haya sido condenada penalmente por sentencia dictada con falta de servicio judicial y luego sea absuelta, tendrá derecho a ser indemnizada de todos los perjuicios que el proceso y la decisión condenatoria le hubiere causado. Si todo o parte del daño se derivase de la privación de libertad, la compensación, que siempre podrá exigir en conformidad al art. 1, será imputada a la presente indemnización.

La misma indemnización procederá por las actuaciones o decisiones administrativas derivadas del funcionamiento judicial que, con falta de servicio, generen daño.”

Indicación Nº 436 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para sustituir el actual artículo 131, por el siguiente:

“Artículo 131.- Acción de indemnización por error judicial. Toda persona que haya sido condenada por sentencia dictada con error injustificado o falta de servicio judicial, tendrá derecho a ser indemnizada de todos los perjuicios que el proceso y la decisión condenatoria le hubieren causado.

Si todo o parte del daño deriva de la privación de libertad, la compensación, que siempre se podrá exigir en conformidad al artículo anterior, será imputada a la presente indemnización.

La misma indemnización procederá por las actuaciones o decisiones administrativas derivadas del funcionamiento judicial que, con falta de servicio, generen daño.”.

Sometida a votación fue **aprobada (14-2-3)**.

Indicación Nº 437 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 131 por el siguiente:

“Artículo 131.- Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos, de los gobiernos regionales o de las municipalidades, podrá reclamar en contra del Estado ante los tribunales que determine la ley sin mayor fundamento que el hecho lesionador y este artículo. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere recaer en el funcionario que hubiere causado el daño, y que cuya persecución corresponde a la Administración según el procedimiento establecido en la ley.”

Se entiende **rechazada** por incompatible.

A los artículos 132, 133 y 133 A que se suprimen.-

“Artículo 132.- Reclamación por pérdida o desconocimiento de la nacionalidad. La persona afectada por acto o resolución de autoridad administrativa que la prive de su nacionalidad chilena o se la desconozca, podrá recurrir, por sí o por cualquiera a su nombre, dentro del plazo de 30 días, ante la Corte Suprema, la que conocerá como jurado y en tribunal pleno. La interposición del recurso podrá suspender los efectos del acto o resolución recurridos.”

“Artículo 133. Acción de protección de derechos colectivos. Existirá acción popular contra todo acto u omisión ilegítimo que atente contra los derechos y garantías constitucionales de incidencia colectiva o de protección de la Naturaleza. Esta acción podrá ser deducida, además, por la Defensoría del Pueblo o la Defensoría de la Naturaleza.

La ley establecerá el procedimiento y los presupuestos para el conocimiento y resolución de la presente acción, garantizando el derecho de los involucrados a ser oídos como a la interposición de recursos.”

“Artículo 133 A.- La ley regulará las acciones populares para la protección de derechos e intereses colectivos relacionados con la libre competencia, el medio ambiente, la salud pública, el patrimonio, la protección del consumidor y otros de similar naturaleza.

Las medidas adoptadas por parte de un tribunal y que se encuentren establecidas por una sentencia ejecutoriada en una tutela general de derechos fundamentales, podrán extenderse respecto de todas aquellas personas que se encuentren en una situación equivalente o análoga del que haya reclamado su intervención.”

Indicaciones Nº 438, 439, 441 y 442 para suprimir los artículos 132, 133 y 133 A. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (19-0-0)**.

Artículo nuevo que se rechaza.-

Indicación Nº 440 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para agregar un nuevo artículo:

“Artículo X.- Los derechos reconocidos en los numerales [SE REFIERE A LOS DERECHOS SOCIALES] del artículo [SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES RECONOCIDOS POR LA PROPUESTA DE NUEVA CONSTITUCIÓN], serán configurados por el legislador, quien determinará sus contenidos, límites y modalidades de cumplimiento.

El legislador deberá establecer un recurso especial de tutela para asegurar la efectiva protección de las obligaciones emanadas de cada uno de estos derechos, según hayan sido identificadas en la ley. Este recurso será de conocimiento de la Corte de Apelaciones respectiva en primera instancia, y de la Corte Suprema en segunda instancia. Los tribunales de justicia, al conocer de estos recursos, deberán dar debida consideración a las restricciones presupuestarias del Estado, así como al principio de no regresividad de los derechos.

El legislador deberá dar cumplimiento a la obligación de configuración legal de derechos contenida en el inciso primero en el plazo de 2 años a contar de la publicación de esta Constitución. Si el legislador no cumple con esta obligación, en el plazo señalado, cualquier persona podrá recurrir a la Corte Constitucional para que declare que el Presidente, o el Congreso Nacional en su caso, han incurrido en una omisión constitucional inexcusable.”

Sometida a votación fue **rechazada (6-12-1)**.

A los artículos 134 y 134 A que se suprimen.-

“Artículo 134.- Acción de Tutela del Derecho a un Medio Ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de los Derechos de la Naturaleza. Es deber del Estado garantizar el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y los derechos de la naturaleza a través de una acción de tutela especial. Esta acción es de interés público y podrá ser ejercida por cualquier persona, comunidad o por la Defensoría de la Naturaleza cuando, producto de una acción u omisión se amenace, perturbe o prive de su ejercicio, la preservación, conservación y/o restauración de la naturaleza y el derecho de las presentes o futuras generaciones a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

La acción de tutela del medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y de los derechos de la naturaleza, será de competencia de los Tribunales de Apelaciones respectivos, que deberán, de oficio o a petición de parte, disponer medidas precautorias y dictar sentencias que dispongan al cese de la amenaza, perturbación o privación, bajo los principios de esta Constitución y los instrumentos internacionales en materia ambiental.

En todo lo no señalado en esta disposición, regirá el procedimiento general sobre tutela de derechos fundamentales establecido en esta Constitución; no obstante, el legislador habrá de disponer medidas especiales, que posibiliten materialmente el acceso a la tutela de garantías constitucionales a aquellas personas, grupos, comunidades y territorios vulnerables o a quienes representen los intereses de la propia Naturaleza.”

“Artículo 134 A.- Procederá, también, la acción de amparo frente a situaciones de hecho que exijan brindar tutela urgente al derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como también en aquellas materias que carezcan de una regulación específica o no estén cubiertas por un instrumento de gestión ambiental que la legislación consagre.”

Indicaciones Nº 443 y 444 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para eliminar los artículos 134 y 134 A. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (19-0-0)**.

Artículo nuevo que se rechaza.-

Indicación Nº 445 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para agregar un nuevo artículo después del 134 A que diga lo siguiente:

“Artículo X.- Cualquier persona podrá denunciar las infracciones a la regulación constitucional sobre la libertad de emprender y el Estado empresario contenida en esta Constitución.

El actor no necesitará tener interés actual en los hechos denunciados.

La acción podrá intentarse dentro de seis meses contados desde que se hubiere producido la infracción, sin más formalidad ni procedimiento que el establecido para el recurso de amparo, ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que conocerá de ella en primera instancia y la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y adoptar, si este fuera el caso, la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Deducida la acción, el tribunal deberá investigar la infracción denunciada y dar curso progresivo a los autos hasta el fallo respectivo.

Contra la sentencia definitiva, procederá el recurso de apelación, que deberá interponerse en el plazo de cinco días, ante la Corte Constitucional y que, en caso de no serlo, deberá ser consultada. Esta Corte conocerá del caso en una de sus Salas.

Si la sentencia estableciere fundadamente que la denuncia carece de toda base, el actor será responsable de los perjuicios que hubiere causado.”

Sometida a votación fue **rechazada (5-13-1)**.

Al epígrafe “§ Reforma y Reemplazo de la Constitución” y Título I “Reforma constitucional”.-

El convencional Cozzi esperó que este tema pueda volver a ser debatido en la Comisión. Además, se refirió al quórum de aprobación de reforma, que sea de 4/7. Es un quórum mayoritario, pero no tan rígido, tomando en consideración que la Constitución deberá ser reformada. Se refirió al plebiscito de algunos temas a reformar, advirtiendo que los plebiscitos ratificatorios podrían ser usados por caudillos populistas. Finalizó sosteniendo que el mecanismo de iniciativa popular de reforma que permite llevarla directamente a plebiscito no es la adecuada, lo mejor es que las cámaras democráticas lo establezcan. Tampoco estuvo de acuerdo con el mecanismo de reemplazo, porque no ve la necesidad de abrir la puerta a nuevas asambleas constituyentes.

La convencional Villena llamó a aprobar las indicaciones que ha suscrito pues tienen algo novedoso, como por ejemplo que la reforma pueda ser iniciada por participación popular. Otra cuestión relevante es el referéndum de reforma constitucional. Además, resaltó la indicación que habla de la Asamblea Constituyente para que nunca más se tenga que replicar un Acuerdo por la Paz.

El convencional Cruz se refirió a la reforma constitucional, indicando que es menester precisar aquellas que tendrán por objeto reformar ciertos capítulos y, en ese sentido, deben tener un tratamiento diverso, por ejemplo, quórum de 4/7 y un referéndum. Dicho referendo es bastante exigente por cuanto exige el 10% del padrón electoral. Además, resaltó la prohibición de retroceso en materia de derechos fundamentales. El convencional Stingo mencionó que el procedimiento está muy bien logrado en caso de necesidad de un reemplazo constitucional.

La convencional Royo explicó la importancia de destrabar los anclajes autoritarios que han heredado de la dictadura y abrir los procesos democráticos en el ámbito de reforma constitucional y en el reemplazo de la Constitución. La convencional Llanquileó llamó a aprobar las indicaciones que dicen relación con la participación popular en materia de reforma constitucional, que incluyen a los pueblos originarios y que agregan la Consulta Indígena en la materia, para hacer una Constitución más democrática.

El convencional Bravo se manifestó a favor de las indicaciones que suscribe, que en lo referido a reforma constitucional incorporan la posibilidad de someter la reforma a referéndum constitucional. Valoró la mantención del plebiscito para las reformas constitucionales e indicó que le parece razonable que algunas materias no

sean relevantes para ser plebiscitadas. También estuvo a favor del quórum de 4/7, pues no es imposible de alcanzar. En relación al reemplazo de la Constitución, relevó la importancia de consagrar un mecanismo como éste. La historia constitucional muestra que es necesario revisar el texto constitucional. Finalizó sosteniendo que votará a favor del referéndum constituyente periódico.

La convencional Bown explicó que la importancia de la reforma constitucional es procurar el diálogo democrático futuro que permita adecuar la Constitución a los tiempos. No se puede dejar a las mayorías circunstanciales la decisión sobre los derechos y libertades de las personas. Las mayorías calificadas van en buena línea con aquello. Agregó que se debe propender a un sistema de participación estable. Un buen texto constitucional es uno que se puede ir reformando, pero no tan fácilmente, para que propenda a la estabilidad del país y a la certeza jurídica. Finalizó señalando que hay una tendencia a creer que las Constituciones cambian la vida de las personas, en circunstancias que la Constitución genera un marco de acción que puede permitir cambiar la vida de las personas.

El convencional Gutiérrez aseveró que el capítulo de reforma y reemplazo constitucional es concordante con lo aprobado por la Comisión sobre Principios Constitucionales que propende a una democracia directa, esto es, la posibilidad de que el pueblo proponga reformas constitucionales o las deba ratificar, haciendo protagonista al pueblo de Chile en las decisiones.

La convencional Ruth Hurtado se refirió en términos generales a las reformas constitucionales y su importancia, señalando que existe una necesidad de que la norma se adecúe a la sociedad, pero debe haber responsabilidad en lo que se ofrece a la ciudadanía. En ese sentido se debe deliberar en el Congreso la reforma constitucional.

El convencional Daza explicó que las normas de reforma constitucional le otorgan estabilidad a la Constitución. La actual Constitución, al no permitir que se hiciera cargo de la dinámica social, dio paso a la revuelta de 2019. Destacó que la indicación N° 449 establece que los proyectos de reforma no podrán suprimir derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Se manifestó a favor del referéndum popular de reforma constitucional porque existe una barrera de entrada relevante para activarlos: 10% del padrón electoral. Finalizó señalando que consideraría hipócrita no disponer de un mecanismo de reemplazo constitucional.

El convencional Woldarsky resaltó la participación ciudadana en la reforma y reemplazo constitucional. Agregó que existe una obligación de no retroceder en los derechos fundamentales y que el proyecto que proponen es más democrático y permite la oportunidad de que a futuro se convoque una Asamblea Constituyente. El convencional Saldaña, por su parte, puntualizó que la soberanía reside en los pueblos y eso va en línea con que las reformas deban pasar por el plebiscito de la ciudadanía. Además, explicó que en derecho, las cosas se deshacen como se hacen, y si una Constitución se hace por Asamblea Constituyente, bien puede deshacerse a través de ella.

El convencional Viera explicó que la Constitución no debe ser pétrea, pero debe ser rígida. A eso apuntan las indicaciones propuestas porque permiten la modificación y, si fueran razonables, no habría problema en que sean ratificados a través del referéndum. Esto se hace cargo de la crisis de representación política, porque las personas podrán participar de las decisiones. El plebiscito de referéndum popular puede ser activado con el 10% del padrón electoral, que es alto, alrededor de 1.500.000.

Se sometió a votación el epígrafe “§ Reforma y Reemplazo de la Constitución” junto con el “TÍTULO I. Reforma constitucional” del texto sistematizado y fueron **aprobados (18-0-1)**.

Al artículo 135 que se suprime.-

“Artículo 135.- Principios. El mecanismo de reforma constitucional reconoce el ejercicio del poder constituyente derivado, en la forma y con los procedimientos de participación ciudadana que se indicarán; teniendo como única limitación la no regresión en materia de derechos fundamentales reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile relativos a derechos humanos; y, además, el respeto al Estado social y democrático de derechos.”

Indicación Nº 446 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para eliminar el artículo 135. Sometido a votación fue **aprobado (15-2-2)**.

Al artículo 136 que se suprime.-

“Artículo 136.- De la reforma constitucional y su iniciativa. La Constitución podrá ser reformada por el Congreso o por los pueblos mediante plebiscito.

Todo proyecto de reforma constitucional deberá señalar expresamente de qué forma se agrega, altera, reemplaza o deroga una norma de la Constitución.

El Estado deberá implementar instancias de información, educación y difusión para el adecuado ejercicio de los mecanismos de participación popular en la reforma constitucional, a través de las instituciones pertinentes y, asimismo, deberá dar publicidad de las reformas constitucionales sometidas a plebiscito para una correcta deliberación, en su caso.

Una vez promulgada una reforma constitucional, y desde la fecha de su vigencia, sus disposiciones formarán parte de la Constitución y se tendrán por incorporadas a ésta.

En lo no previsto en este título, serán aplicables a la tramitación de los proyectos de reforma constitucional las normas sobre formación de la ley, iniciativa popular de ley y plebiscitos.”

Indicación Nº 447 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para eliminar el artículo 136. Sometida a votación fue **aprobada (15-3-1)**.

Indicación Nº 448 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 136 por el siguiente:

“Artículo 136.- Los proyectos de reforma constitucional podrán ser iniciados por mensaje presidencial o moción parlamentaria de cualquiera de sus miembros en ejercicio.

Los proyectos de reforma constitucional se someterán a las mismas reglas de tramitación de las leyes previstas en esta Constitución. El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada Cámara el voto conforme de las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio.

No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o estando vigente alguno de los estados de excepción constitucional.”

Se entiende **rechazada** por incompatible

Al artículo 136 A que pasa a ser 77.-

“Artículo 136 A.- Procedimiento de reforma constitucional. Los proyectos de reforma a la Constitución podrán ser iniciados por mensaje presidencial o por moción parlamentaria. Los proyectos de reforma constitucional también podrán ser iniciados por las y los ciudadanos. Para ello, la propuesta deberá contar con el patrocinio de, al menos, el cero coma cinco por ciento [0,5%] del padrón electoral que hubiere sido establecido para la última elección parlamentaria.

Para su aprobación, el proyecto de reforma necesitará del voto conforme de la mayoría de los y las diputadas en ejercicio.

Los proyectos de reforma constitucional deberán expresamente alterar, agregar o derogar una disposición perteneciente a la Constitución.

En lo no previsto en este Capítulo, serán aplicables a la tramitación de los proyectos de reforma constitucional las normas sobre formación de la ley, debiendo respetarse siempre el quórum señalado en el inciso anterior.”

Indicación Nº 449 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para sustituir el actual artículo 136 A, por el siguiente artículo:

“Artículo 136 A.- Procedimiento de reforma constitucional. Los proyectos de reforma a la Constitución podrán ser iniciados por mensaje presidencial, moción parlamentaria o por iniciativa popular.

Los proyectos de reforma constitucional iniciados por las y los ciudadanos deberán contar con el patrocinio en los términos señalados en esta Constitución.

Para su aprobación, el proyecto de reforma necesitará del voto conforme al quórum de cuatro séptimos de las y los parlamentarios en ejercicio.

Todo proyecto de reforma constitucional deberá señalar expresamente de qué forma se agrega, altera, reemplaza o deroga una norma de la Constitución.

En lo no previsto en este Capítulo, serán aplicables a la tramitación de los proyectos de reforma constitucional las normas sobre formación de la ley, debiendo respetarse siempre el quórum señalado en los incisos anteriores.

Los proyectos de reforma no podrán suprimir derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución.”.

Sometida a votación fue **aprobada (16-0-3)**.

Indicación Nº 450 de CC Jiménez para, en el artículo 136 A, agregar después de la expresión “moción parlamentaria”, la siguiente frase: “o por iniciativa de los pueblos indígenas”. Sometida a votación fue **aprobada (11-5-3)**.

Además, el convencional Jiménez retiró las siguientes indicaciones:

Indicación Nº 451 del CC Jiménez para agregar un nuevo inciso en el artículo 136 A: “Los proyectos de reforma constitucional iniciados por las y los ciudadanos y los pueblos indígenas, deberán contar con los patrocinios en los términos señalados en esta Constitución”.

Indicación Nº 452 del CC Jiménez para agregar un nuevo inciso en el artículo 136 A: “Los proyectos de reforma constitucional indígena sólo podrán versar respecto a aquellas materias que regulen plurinacionalidad, libredeterminación y demás derechos colectivos de los pueblos indígenas”.

Indicación Nº 453 del CC Jiménez para agregar un nuevo inciso al artículo 136 A: “Los proyectos de reforma a la Constitución podrán ser iniciados además por iniciativa indígena cuando se trate de temas que los afecten directamente. Para ello, deberán contar con la cantidad de patrocinios respecto al padrón electoral indígena, en conformidad a esta Constitución”.

Artículo nuevo que pasa a ser 78.-

Indicación Nº 454 de CC Jiménez para agregar un nuevo artículo en el título de “Reforma constitucional”:

“Artículo XX: Los proyectos de reforma a la Constitución podrán ser iniciados además por los pueblos indígenas cuando se trate de temas que versen sobre plurinacionalidad, libredeterminación y demás derechos colectivos de los pueblos indígenas. Para ello, deberán contar con la cantidad de patrocinios respecto al padrón electoral indígena, en conformidad a esta Constitución”.

Sometida a votación fue **aprobado (10-7-1)**.

A los artículos 136 B, 136 C y 136 D que se suprimen.-

“Artículo 136 B.- Del proyecto de ley de reforma constitucional. El proyecto de ley de reforma de la Constitución podrá ser iniciado por mensaje de la o el Presidente de la República, por moción de cualquiera de las y los integrantes del Congreso, y por iniciativa popular.

La iniciativa popular de ley que cumplierse los requisitos establecidos en esta Constitución y cuyo contenido fuere una reforma constitucional, será ingresada al Congreso para su respectiva tramitación.

Para su aprobación por el Congreso, cualquier proyecto de ley de reforma a la presente Constitución necesitará del voto conforme de la mayoría absoluta de las y los parlamentarios en ejercicio.”

“Artículo 136 C.- Iniciativa de la reforma constitucional. Los proyectos de reforma constitucional podrán ser presentados por:

a) El/la Presidente de la República, con acuerdo del Vicepresidente.

b) Patrocinio de no menos que 1/5 ni más de 2/5 de los diputados o diputadas, o no menos que 1/5 ni más de 2/5 senadores o senadoras en ejercicio.

c) Los 2/5 de las Asambleas Legislativas Regionales, en votación especialmente convocada al efecto, aprobada por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio.

d) Iniciativas ciudadanas suscritas por a lo menos el ocho por ciento del padrón electoral que hubiese sido establecido para la última elección parlamentaria. Los proyectos deberán referirse únicamente a materias constitucionales y se presentarán en la Cámara de Diputados y Diputadas o en el Senado, a elección de quienes lo suscriban.”

“Artículo 136 D.- Procedimiento de reforma constitucional. Presentado el proyecto de reforma constitucional, en cualquiera de las cámaras del Congreso Nacional, deberá ser aprobado por el voto conforme de la mayoría absoluta de los diputados/as y senadores/as en ejercicio.

Sin perjuicio de las normas previstas en este capítulo, serán aplicables a la tramitación de los proyectos de reforma constitucional, las normas sobre formación de la ley que establece esta constitución.”

Indicaciones Nº 455, 456 y 457 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para eliminar los artículos 136 B, 136 C y 136 D. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (16-1-2)**.

Al artículo 137 que pasa a ser 79.-

“Artículo 137.- Convocatoria a referendo. La Cámara de Diputados y Diputadas deberá convocar a referéndum ratificatorio tratándose de proyectos de reforma constitucional aprobados por ella que recaigan sobre las siguientes materias:

(a) alteración de la forma de Estado;

(b) modificación del período presidencial y del de los y las integrantes del Congreso Nacional;

(c) reformas a los capítulos sobre principios fundamentales y derechos fundamentales;

(d) las regulaciones de este capítulo.

La reforma constitucional aprobada por la Cámara se entenderá ratificada si alcanza la mayoría de los votos en el referéndum. El sufragio en este referendo será obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en Chile.

Es deber del Congreso Nacional y de los órganos del Estado descentralizados dar adecuada publicidad a la propuesta de reforma que se someterá a referendo, debiendo promover el involucramiento público a través de distintas vías en su discusión. El deber de publicidad deberá desarrollarse dentro de los 90 días anteriores

a la celebración del referéndum. La ley regulará los deberes específicos, así como los mecanismos de participación, a que se refiere este inciso.”

Indicación Nº 458 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para sustituir el artículo 137 por el siguiente:

“Artículo 137.- Convocatoria a referendo. La Cámara de Diputados y Diputadas deberá convocar a referéndum ratificatorio tratándose de proyectos de reforma constitucional aprobados por ella que recaigan sobre las siguientes materias:

- (a) alteración de la forma de Estado;*
- (b) modificación del período presidencial y del de los y las integrantes del Congreso Nacional;*
- (c) reformas a los capítulos sobre principios fundamentales y derechos fundamentales;*
- (d) las regulaciones de este capítulo.*

La reforma constitucional aprobada por la Cámara se entenderá ratificada si alcanza la mayoría de los votos en el referéndum. El sufragio en este referendo será obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en Chile.

Es deber del Congreso Nacional y de los órganos del Estado descentralizados dar adecuada publicidad a la propuesta de reforma que se someterá a referendo, debiendo promover el involucramiento público a través de distintas vías en su discusión. El deber de publicidad deberá desarrollarse dentro de los 90 días anteriores a la celebración del referéndum. La ley regulará los deberes específicos, así como los mecanismos de participación, a que se refiere este inciso.”.

Sometida a votación fue **aprobada (13-5-1)**.

A los artículos 137 A y 137 B que se suprimen.-

“Artículo 137 A.- Del plebiscito ratificatorio sobre reformas constitucionales aprobadas por el Congreso. Todo proyecto de ley de reforma constitucional aprobado por el Congreso, deberá ser sometido a plebiscito nacional, con el objeto de que los pueblos lo aprueben o lo rechacen. El sufragio en este plebiscito será obligatorio.

Para que la reforma constitucional aprobada por el Congreso sea ratificada por los pueblos, la opción de aprobación en el plebiscito deberá obtener más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos.

En caso de que el proyecto de reforma constitucional fuese rechazado en el plebiscito, el Congreso deberá archivar tal proyecto, y no podrán presentarse mensajes, mociones ni iniciativas populares que reproduzcan el contenido material rechazado, sino después de un año.”

“Artículo 137 B- Referéndum ratificatorio y plebiscito dirimente. Aprobado que sea el proyecto de reforma constitucional por el Congreso, este lo enviará al Presidente de la República quien, dentro del plazo de treinta días corridos, deberá someterlo a referéndum ratificatorio; a menos que el proyecto haya sido aprobado por el voto conforme de las dos terceras partes de los miembros de cada cámara, en cuyo caso se omitirá tal referéndum.

La convocatoria a referéndum ratificatorio o plebiscito temático se efectuará con a los menos sesenta días de anticipación, y se llevará a cabo el último domingo anterior al vencimiento del plazo señalado, con una adecuada campaña de educación y difusión. La ley regulará los deberes específicos de los órganos del Estado encargados de tal función.

La reforma constitucional se entenderá ratificada o aprobada por la ciudadanía, si obtiene el voto conforme de la mayoría de los sufragios válidamente emitidos, siendo obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en Chile.”

Indicaciones Nº 459 y 460 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para eliminar los artículos 137 A y 137 B. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (18-1-0)**.

Al artículo 138 que pasa a ser 80.-

“Artículo 138.- Iniciativa popular de reforma constitucional. Un grupo de ciudadanos y ciudadanas igual a un diez por ciento del último padrón electoral, podrá presentar una propuesta de reforma constitucional para que sea votada mediante referéndum nacional de manera conjunta con la próxima elección parlamentaria.

Se contará con un plazo de 180 días desde su registro para que la propuesta sea conocida por la ciudadanía y pueda reunir los patrocinios exigidos.

En caso de reunir el apoyo requerido, la Cámara de Diputados y Diputadas podrá, por mayoría de las y los diputados en ejercicio, aprobar una propuesta de reforma constitucional alternativa a la propuesta popular. En tal caso, la ciudadanía dispondrá de dos cédulas electorales en el referéndum. En la primera, se preguntará si debe existir o no modificación constitucional. En la segunda, se preguntará por las dos alternativas propuestas.

Es deber del Congreso Nacional y de los órganos del Estado descentralizados dar adecuada publicidad a la o las propuestas de reforma que se someterán a referendo, en los mismos términos del art. N2.

La propuesta de reforma constitucional se entenderá aprobada si la alternativa de modificación ganadora representa, al menos, un veinte por ciento del padrón electoral y alcanza la mayoría en la votación respectiva.”

Indicación Nº 461 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para sustituir el actual artículo 138, por el siguiente:

“Artículo 138.- Referéndum popular de reforma constitucional. Un mínimo equivalente al diez por ciento de la ciudadanía correspondiente al último padrón electoral, podrá presentar una propuesta de reforma constitucional para ser votada mediante referéndum nacional conjuntamente con la próxima elección parlamentaria.

Existirá un plazo de ciento ochenta días desde su registro para que la propuesta sea conocida por la ciudadanía y pueda reunir los patrocinios exigidos.

En caso que el proyecto popular de reforma constitucional reúna el apoyo requerido, el Congreso podrá aprobar un proyecto alternativo sobre la misma materia y dentro de un periodo máximo de dos meses, para que ambas sean consultadas. La propuesta del Congreso debe ser aprobada por la mayoría de los integrantes del Congreso. En este caso, para el plebiscito, la ciudadanía dispondrá de dos alternativas: en la primera, si aprueba o rechaza la reforma constitucional y, en la segunda, se preguntará por las dos alternativas propuestas.

La propuesta de reforma constitucional se entenderá aprobada si la alternativa de modificación ganadora alcanza la mayoría en la votación respectiva.

Es deber del Congreso y de los órganos del Estado descentralizados dar adecuada publicidad a la o las propuestas de reforma que se someterán a referéndum.”

Sometida a votación fue **aprobada (13-5-1)**.

Indicación Nº 462 de CC Jiménez para agregar un nuevo inciso en el artículo 138 del siguiente tenor: “Los miembros de pueblos indígenas cuyos patrocinios sean equivalentes a la sumatoria del diez por ciento de cada pueblo respecto al último padrón electoral indígena, podrán presentar una propuesta de reforma constitucional para que sea votada mediante referéndum de manera conjunta con la próxima elección parlamentaria. También podrán presentar propuesta de reforma constitucional las comunidades y asociaciones indígenas con personalidad jurídica, los cacicazgos tradicionales reconocidos por ley y asociaciones u organizaciones indígenas tradicionales en la cantidad o proporción que establezca la ley”.

Sometida a votación fue **rechazada (8-9-2)**.

Indicación Nº 463 de CC Jiménez para agregar un nuevo inciso en el artículo 138 del siguiente tenor: “Estas propuestas sólo podrán versar respecto a aquellas

materias que regulen plurinacionalidad, libredeterminación y demás derechos colectivos de los pueblos indígenas”.

Sometida a votación fue **rechazada (8-10-1)**.

A los artículos 138 A y 139 que se suprimen.-

“Artículo 138 A.- De la reforma constitucional mediante plebiscito. Un grupo de ciudadanas y ciudadanos no inferior al 10% de las ciudadanas y ciudadanos con derecho a voto de acuerdo con los registros electorales, podrá presentar un proyecto de reforma constitucional parcial para que sea sometido directamente a plebiscito nacional. El sufragio en este plebiscito será obligatorio.

En caso de que el proyecto popular de reforma constitucional reúna el apoyo requerido, dentro del plazo correspondiente, contado desde su registro, el Congreso podrá aprobar, por la mayoría de las y los parlamentarios en ejercicio, un proyecto de reforma constitucional alternativo a la propuesta popular, sobre la misma materia y dentro de un periodo máximo de dos meses, para que ambas sean plebiscitadas. En este caso, para el plebiscito, la ciudadanía dispondrá de dos cédulas electorales; en la primera, se preguntará si está de acuerdo o no con proceder a la reforma constitucional en la materia y, en la segunda, se preguntará por las dos alternativas propuestas.

Se entenderá que la ciudadanía aprueba la reforma constitucional, si respecto a la primera cédula, la opción de aprobación obtiene más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos; en tal caso, el proyecto de reforma constitucional aprobado en el plebiscito será aquél que obtenga más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, en la segunda cédula.

Si el Congreso no hubiese presentado un proyecto de reforma constitucional alternativo a la propuesta popular, en el plazo y sobre la materia correspondiente, la ciudadanía sólo dispondrá de una cédula electoral en el plebiscito, en la que se preguntará si aprueba o no tal proyecto. Se entenderá aprobado el proyecto de reforma constitucional plebiscitado si éste obtiene más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos.”

“Artículo 139.- Consulta con los pueblos indígenas. Los proyectos de reforma constitucional susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, deberán ser consultadas con los pueblos mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas.”

Indicaciones Nº 464 y 465 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para eliminar los artículos 138 A y 139. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (19-0-0)**.

Al artículo 139 A que pasa a ser 81.-

“Artículo 139 A.- Los proyectos de reforma constitucional susceptibles de afectar a los pueblos indígenas, deberán ser sometidos a una consulta con los pueblos, mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones representativas, de acuerdo a lo dispuesto en esta Constitución y las leyes dictadas a su conformidad.”

Indicación Nº 466 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para sustituir el actual artículo 139 A, por el siguiente:

“Artículo 139 A.- Los proyectos de reforma constitucional susceptibles de afectar a los pueblos indígenas, deberán ser sometidos a una consulta con los pueblos, mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones representativas, de acuerdo a lo dispuesto en esta Constitución y las leyes dictadas a su conformidad.” Fue **retirada** por sus autores.

Se puso en votación el **artículo 139 A del texto sistematizado** y fue **aprobado (15-2-2)**.

Al “Título II. Procedimiento para elaborar una nueva Constitución”.-

Se puso en votación el título del texto sistematizado y fue **aprobado (13-5-0)**.

Al artículo 140 que pasa a ser 82.-

“Artículo 140.- Procedimiento para el reemplazo de la Constitución. El reemplazo total de la Constitución solo podrá realizarse a través de una Asamblea Constituyente convocada por medio de un referendo.

La convocatoria a referendo constituyente corresponderá a la presidencia de la República, la que deberá contar con la aprobación de la Cámara de Diputados y Diputadas. La convocatoria también corresponderá a la Cámara de Diputados y Diputadas, la que deberá reunir el voto conforme de las [cuatro séptimas] partes de sus integrantes en ejercicio.

La convocatoria a referendo constituyente también podrá ser convocada por iniciativa popular. Para ello, la ciudadanía deberá patrocinar la convocatoria con, a lo menos, firmas correspondientes al 20% del padrón electoral que hubiere sido establecido para la última elección parlamentaria. La convocatoria para la instalación de la Asamblea Constituyente será aprobada si en el referendo es votada favorablemente por la mayoría de quienes participen en él. El sufragio en este referendo será obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en Chile. Una ley regulará los aspectos generales que permitan la instalación de la Asamblea Constituyente, la que en todo caso tendrá la facultad de definir el quórum de aprobación de las normas y su propio reglamento de funcionamiento. La Asamblea Constituyente tendrá como única función la redacción de una propuesta de Nueva Constitución.

Una vez redactada y aprobada la propuesta de texto de Nueva Constitución por la Asamblea, ésta se disolverá de pleno derecho.”

Indicación Nº 467 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para sustituir el actual artículo 140, por el siguiente:

“Artículo 140.- Procedimiento para el reemplazo de la Constitución. El reemplazo total de la Constitución sólo podrá realizarse a través de una Asamblea Constituyente convocada por medio de un referéndum.

La convocatoria a referéndum constituyente podrá ser convocada por iniciativa popular. Para ello, la ciudadanía deberá patrocinar la convocatoria con, a lo menos, firmas correspondientes al veinte por ciento del padrón electoral que hubiere sido establecido para la última elección parlamentaria.

También corresponderá a la presidencia de la República, por medio de un decreto, convocar al referéndum, el que deberá contar con la aprobación de los cuatro séptimos de las y los integrantes del Congreso.

Asimismo, la convocatoria corresponderá al Congreso, por medio de una ley, aprobada por las cuatro séptimas partes de sus integrantes.

La convocatoria para la instalación de la Asamblea Constituyente será aprobada si en el referendo es votada favorablemente por la mayoría de quienes participen en él. El sufragio en este referendo será obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en Chile.”

Sometida a votación fue **aprobada (14-2-3)**.

A los artículos 140 A y 140 B que se suprimen.-

“Artículo 140 A.- Iniciativa para elaborar una nueva Constitución. La Constitución podrá ser reemplazada, en su totalidad, por una Asamblea Constituyente, convocada por el Congreso o por los pueblos mediante un plebiscito constituyente.

El Congreso podrá convocar, directamente, a una Asamblea Constituyente a través de una ley aprobada con el voto conforme de los cuatro séptimos de las y los parlamentarios en ejercicio.

La convocatoria a Asamblea Constituyente mediante un plebiscito podrá realizarse por la o el Presidente de la República, por el Congreso y por una iniciativa popular.

Corresponderá a la o el Presidente de la República convocar a plebiscito constituyente a través de un decreto con la firma de todas y todos los Ministros de Estado, y al Congreso mediante un acuerdo con el voto conforme de los cuatro séptimos de las y los parlamentarios en ejercicio.

Un grupo de ciudadanas y ciudadanos no inferior al 20% de las ciudadanas y ciudadanos con derecho a voto de acuerdo con los registros electorales, podrá convocar a plebiscito constituyente.

Para que la convocatoria a Asamblea Constituyente sea aprobada en el plebiscito, la opción de aprobación deberá obtener más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos. El sufragio en este plebiscito será obligatorio.”

“Artículo 140 B.- Procedimiento de reemplazo de la Constitución. El reemplazo total de la Constitución solo podrá realizarse a través de una Asamblea Constituyente convocada por medio de un plebiscito. La convocatoria a plebiscito constituyente corresponderá a la presidencia de la República, la que deberá contar con la aprobación de la Cámara de Diputados y Diputadas, acordada por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio o bien por los 2/3 del Congreso pleno. También podrá provocarse la convocatoria a plebiscito constituyente por iniciativa popular, con, a lo menos, firmas correspondientes al 25% del padrón electoral que hubiere sido establecido para la última elección parlamentaria.

La convocatoria para la instalación de la Asamblea Constituyente será aprobada si obtiene el voto conforme de la mayoría de los sufragios válidamente emitidos, siendo obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en Chile.

La ley regulará los aspectos generales que permitan la instalación de la Asamblea Constituyente, la que en todo caso tendrá la facultad de definir su propio reglamento de funcionamiento. La Asamblea Constituyente tendrá como única función la redacción de una propuesta de nueva constitución. Una vez redactada y aprobada la propuesta de texto de nueva constitución por la Asamblea, ésta se disolverá de pleno derecho.”

Indicaciones Nº 468 y 469 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para eliminar los artículos 140 A y 140 B. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (19-0-0).**

Al artículo 141 que pasa a ser 83.-

“Artículo 141.- De la Asamblea Constituyente. Una ley regulará la forma de integración de la Asamblea Constituyente, el sistema de elección de sus integrantes, su duración, su organización mínima, los mecanismos de participación popular y consulta indígena del proceso, y demás aspectos generales que permitan su instalación y funcionamiento regular.

Con todo, la Asamblea Constituyente deberá ser integrada paritariamente y con equidad territorial, con participación en igualdad de condiciones entre independientes e integrantes de partidos políticos, y con escaños reservados para pueblos originarios, y deberá contar con el apoyo técnico, administrativo y financiero necesario para su instalación y funcionamiento, y para la difusión de su labor, en los términos que establezca la ley.

La Asamblea Constituyente tendrá como función redactar una propuesta de texto de Nueva Constitución, y estará facultada para definir el quórum de aprobación de las normas y dictar su propio reglamento.

Una vez redactada y aprobada la propuesta de texto constitucional, ésta se comunicará a la o el Presidente de la República, y la Asamblea Constituyente se disolverá de pleno derecho.”

Indicación Nº 470 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para sustituir el actual artículo 141, por el siguiente:

“Artículo 141.- De la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente tendrá como única función la redacción de una propuesta de Nueva Constitución. Estará integrada paritariamente y con equidad territorial, con participación en igualdad de condiciones entre independientes e integrantes de partidos políticos, y con escaños reservados para pueblos originarios.

Una ley regulará su integración, el sistema de elección, su duración, que no será inferior a dieciocho meses, su organización mínima, los mecanismos de participación popular y consulta indígena del proceso y demás aspectos generales que permitan su instalación y funcionamiento regular.

La Asamblea Constituyente tendrá la facultad de definir el quórum de aprobación de las normas y su propio reglamento de funcionamiento.

Una vez redactada y entregada la propuesta de nueva constitución a la autoridad competente, la Asamblea Constituyente se disolverá de pleno derecho.”.

Sometida a votación fue **aprobada (13-6-0)**.

Al artículo 142 que pasa a ser 84.-

“Artículo 142.- Del plebiscito ratificador de una Nueva Constitución. Comunicada la propuesta de texto de Nueva Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente, deberá convocarse a un plebiscito nacional para que los pueblos aprueben o rechacen la propuesta. El sufragio en este plebiscito será obligatorio.

Para que la propuesta de texto de Nueva Constitución aprobado por la Asamblea Constituyente sea ratificada por los pueblos, la opción de aprobación en el plebiscito deberá obtener más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos.

Si la propuesta de Nueva Constitución fuere aprobada en el plebiscito, se procederá a su promulgación y correspondiente publicación.”

Indicación Nº 471 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para sustituir el actual artículo 142 por el siguiente:

“Artículo 142.- Del plebiscito ratificador de una Nueva Constitución. Entregada la propuesta de Nueva Constitución, deberá convocarse a un referéndum para su aprobación o rechazo. El sufragio en este plebiscito será obligatorio.

Para que la propuesta sea aprobada deberá obtener el voto favorable de más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos.

Si la propuesta de Nueva Constitución fuera aprobada en el plebiscito, se procederá a su promulgación y correspondiente publicación.”

Sometida a votación fue **aprobada (13-6-0)**.

Al artículo 143 que se suprime.-

“Artículo 143.- Del plebiscito constituyente periódico. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo XX (sobre la iniciativa para elaborar una Nueva Constitución), a los veinte años de la entrada en vigencia de esta Constitución y, a partir de entonces, sucesivamente cada veinte años, junto con la elección periódica de parlamentarias y parlamentarios más próxima, se someterá a plebiscito nacional la posibilidad de modificar la presente Constitución.

En tal caso, la ciudadanía dispondrá de una cédula electoral que contendrá la siguiente pregunta: ¿Aprueba usted que se modifique la Constitución vigente? Bajo la cuestión planteada habrá dos rayas horizontales, una al lado de la otra; la primera de ellas tendrá en su parte inferior la expresión "Apruebo", y la segunda la palabra "Rechazo", a fin de que la o el elector pueda marcar su preferencia sobre una de las dos alternativas.

En caso de que la opción de aprobación obtenga más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos en el plebiscito, se entenderá de pleno derecho que se ha convocado a una Asamblea Constituyente, la que se regirá por lo dispuesto en los artículos XX (De la Asamblea Constituyente) y XX (Del plebiscito ratificador de una Nueva Constitución).

Con todo, la Asamblea Constituyente así convocada deberá decidir, una vez instalada, si procederá a elaborar una propuesta de reforma constitucional o el texto de una Nueva Constitución. En el primer caso, las reglas contenidas en este título, relativas al texto de una Nueva Constitución, se aplicarán a la propuesta de reforma constitucional de la Asamblea.”

Indicación Nº 472 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para eliminar el artículo 143. Sometida a votación fue **aprobada (19-0-0)**.

Artículo nuevo que se rechaza.-

Indicación Nº 473 de CC Bravo y Villena para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo 143 bis.- Del referéndum constituyente periódico. A los veinte años de la entrada en vigencia de esta Constitución y, a partir de entonces, sucesivamente cada veinte años, junto con la elección periódica de parlamentarias y parlamentarios más próxima, se someterá a referéndum la posibilidad de modificar la presente Constitución.

En tal caso, la ciudadanía dispondrá de una cédula electoral en la que se preguntará si aprueba o rechaza la modificación de la Constitución vigente.

En caso de que la opción de aprobación obtenga más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos en el plebiscito, se entenderá de pleno derecho que se ha convocado a una Asamblea Constituyente, la que se regirá por lo dispuesto en los artículos 141 (De la Asamblea Constituyente) y 142 (Del plebiscito ratificadorio de una Nueva Constitución).

Con todo, la Asamblea Constituyente así convocada deberá decidir, una vez instalada, si procederá a elaborar una propuesta de reforma constitucional o una nueva Constitución, aplicándose las reglas de este capítulo que correspondan.”.

Sometida a votación fue **rechazada (6-9-4)**.

Al artículo 144 que pasa a ser 85.-

“Artículo 144.- En ningún caso se podrá reclamar sobre el contenido de los textos aprobados de conformidad al procedimiento regulado en este capítulo.”

Indicación Nº 474 de CC Bravo, Hoppe, Daza, Viera, Laibe y Jiménez para sustituir el actual artículo 144, por el siguiente:

“Artículo 144.- Improcedencia de impugnaciones. Ninguna autoridad, ni tribunal, podrá conocer acciones, reclamos o recursos vinculados con las tareas que la Constitución le asigna a la Asamblea ni con el contenido de las normas propuestas.”.

Sometida a votación fue **aprobada (13-6-0)**.

Al epígrafe § Derechos de personas privadas de libertad

El convencional Daza se refirió a la importancia de los fines preventivos y de reinserción de la pena que son aquellos que justifican la restricción de derechos fundamentales de las personas.

El convencional Cozzi explicó que las buenas intenciones de proteger los derechos de las personas privadas de libertad se ven ensombrecidas con la norma aprobada por el Pleno que impide la participación de particulares en la ejecución de las penas.

La convencional Llanquileó precisó que la Convención está sujeta a los Tratados Internacionales en Derechos Humanos que reconocen derechos a los pueblos indígenas, lo que también es aplicable en este punto.

Se puso en votación el epígrafe de texto sistematizado y fue **aprobado (13-3-3)**.

Al artículo 145 que pasa a ser 86.-

“Artículo 145.- De los derechos de las personas privadas de libertad. Las personas privadas de libertad, ya sea por medida cautelar o sanciones penales, no quedan suspendidas del ejercicio y goce de sus derechos fundamentales por el hecho de encontrarse privadas de libertad. Se prohíbe cualquier tipo de trabajo forzado.

Se reconoce el derecho a la reinserción social a todas aquellas personas infractoras de ley y aquellas que hayan sido privadas de libertad, ya sea por medida cautelar o sanción penal. Las personas tendrán derecho a acceder a intervenciones, acciones, programas, facilidades que tengan por objeto garantizar este derecho sin discriminación alguna y con plena sujeción a los derechos que esta constitución y los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile reconocen. Las personas privadas de libertad e infractores de ley tendrán derecho a posterior a una evaluación de intervención personalizada acceder a capacitación y un trabajo remunerado, educación, seguridad social, deporte y a los beneficios en el ámbito de la cultura y desarrollo integral de su personalidad. Es deber del Estado garantizar el derecho a la reinserción social

Las mujeres y personas gestantes embarazadas tendrán derecho, antes, durante y después del parto, a acceder a los servicios relacionados con sus procesos, a la lactancia correspondiente y al apego con su hijo o hija. Es deber del Estado y las instituciones respectivas garantizar el acceso y disponibilidad a este derecho.”

Indicación Nº 475 de CC Royo y Villena para sustituir el actual artículo 145, por uno del siguiente tenor:

“Artículo 145.- De los derechos de las personas privadas de libertad. Las personas sometidas a cualquier forma de privación de libertad conservarán los derechos fundamentales contemplados en esta Constitución y en los tratados de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile.

Es deber del Estado garantizar el acceso a la capacitación, a ejercer un trabajo remunerado, a la seguridad social, a la educación, a la integridad física y psíquica, al deporte y a la cultura, con perspectiva de género e intercultural.

El hacinamiento en los recintos penitenciarios atenta gravemente contra los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

Las mujeres y personas gestantes embarazadas tendrán derecho, antes, durante y después del parto, a acceder a los servicios de salud que requieran, a la lactancia y al vínculo directo y permanente con su hijo o hija, teniendo en consideración el interés superior del niño, niña o adolescente.

Es deber del Estado garantizar que las personas pertenecientes a los pueblos y naciones originarias tengan las condiciones que permitan ejercer su derecho a la identidad e integridad cultural y se dará preferencia a medidas distintas al encarcelamiento.”

Sometida a votación fue **aprobada (13-4-2)**.

Indicación Nº 476 de CC Caiguan para sustituir el “Artículo 145.- De los derechos de las personas privadas de libertad”, por un artículo 145 del siguiente tenor:

“Artículo 145. Derechos de las personas privadas de libertad. Las personas privadas de libertad reclusas en establecimientos penitenciarios gozan de los derechos fundamentales establecidos en esta Constitución y en los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Chile es parte y que se encuentran vigentes, salvo aquellos cuyo ejercicio o goce se restrinjan o suspendan temporalmente de forma expresa por ley, resolución o sentencia judicial. Corresponderá a la ley regular la ejecución penal.

Las mujeres y personas gestantes que deban cumplir o cumplan una pena privativa de libertad, tendrán derecho a solicitar la suspensión del inicio de la

ejecución o cambio en su modalidad, bajo el principio de interés superior del niño. La ley determinará los casos y la forma de ejercer ese derecho.”

Se entiende **rechazada** por incompatible.

Artículo nuevo que se rechaza.-

Indicación Nº 477 de CC Caiguan para agregar, luego del artículo “Artículo 145.- Obligaciones generales del Estado respecto a personas privadas de libertad” , un artículo 145 bis del siguiente tenor:

“Artículo 145 BIS.-Derechos de las personas privadas de libertad de origen indígena. Cuando se impongan sanciones penales a personas pertenecientes a los pueblos y naciones indígenas se garantizarán las condiciones que permitan ejercer su derecho a su identidad e integridad cultural y se dará preferencia a medidas distintas al encarcelamiento.”

Sometida a votación fue **rechazada (8-8-3)**.

Al artículo 146 que pasa a ser 87.-

“Artículo 146.- Obligaciones generales del Estado respecto a personas privadas de libertad. Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad por el Estado será tratada con el debido respeto a su dignidad.

Es deber del Estado, en su especial posición de garante frente a las personas privadas de libertad, velar por el resguardo y ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales consagrados en esta Constitución y en los instrumentos internacionales de los derechos humanos.

Sólo el Estado puede ejecutar el cumplimiento de las penas y medidas privativas de libertad decretadas por los tribunales de justicia, a través de instituciones públicas especialmente establecidas para estos fines. Esta función no podrá ser ejercida por privados.

Los establecimientos penitenciarios deben estar administrados por personal civil especializado, el cual debe contar con los recursos suficientes para el cumplimiento de su función institucional.

Los establecimientos penitenciarios deberán separar a la población penal utilizando criterios apropiados para garantizar el respeto de los derechos humanos de la persona privada de libertad y su seguridad.

Las personas sometidas a una medida de seguridad de internación o a la medida cautelar de internación provisional, no podrán permanecer en un establecimiento penitenciario, debiendo ser trasladadas a una institución especializada en salud mental para realizar la custodia, tratamiento o la internación, según correspondiere.

Cuando se impongan sanciones penales a personas pertenecientes a los pueblos y naciones originarias se garantizarán las condiciones que permitan ejercer su derecho a su identidad e integridad cultural y se dará preferencia a medidas distintas al encarcelamiento.

Una ley regulará la ejecución de la pena, de conformidad con lo establecido en este artículo, contemplando, al menos, las condiciones de cumplimiento de penas y medidas de seguridad, el régimen interno y disciplinario de los establecimientos penitenciarios. La ejecución de sanciones penales o medidas cautelares privativas de libertad estarán siempre sujetas a control judicial.”

Indicación Nº 478 de CC Royo y Villena para sustituir el actual artículo 146, por uno del siguiente tenor:

“Artículo 146.- Obligaciones del Estado durante la ejecución de la pena. Solo el Estado ejecutará el cumplimiento de las penas y medidas privativas de libertad decretadas por los tribunales de justicia, a través de instituciones públicas especialmente establecidas para estos fines.

Los establecimientos penitenciarios serán administrados por personal civil especializado, distinto del órgano encargado de la seguridad del recinto.

Los establecimientos penitenciarios deberán separar a la población penal utilizando criterios apropiados para garantizar el respeto de los derechos humanos de la persona privada de libertad y su seguridad.

Las personas sometidas a una medida de seguridad de internación o a la medida cautelar de internación provisional, no podrán permanecer en un establecimiento penitenciario, debiendo asumir su custodia las personas o instituciones de salud mental, según correspondiere.

Las visitas en los establecimientos penitenciarios tienen derecho a no ser sometidas a tratos o procedimiento vejatorios o degradantes, y es deber del Estado disponer todos los medios tecnológicos, materiales y humanos como forma de garantizar este derecho.”

Sometida a votación fue **aprobada (13-3-3)**.

Indicación Nº 479 de CC Caiguan para sustituir el artículo “Artículo 146.- Obligaciones generales del Estado respecto a personas privadas de libertad.”, por el que se expresa del siguiente tenor:

“Artículo 146.- Del servicio penitenciario. El servicio penitenciario es un órgano técnico perteneciente a la administración civil del Estado que cuenta con personal especializado de carácter no castrense. La ley regulará su estructura, atribuciones, competencias, responsabilidades, su vínculo y coordinación con los otros organismos públicos que tengan incidencia en la ejecución de las medidas cautelares y de las sanciones penales.”

Se entiende **rechazada** por incompatible.

Al artículo 147 que pasa a ser 88.-

“Artículo 147.- Extensión de la pena y efectos colaterales. Las personas privadas de libertad gozan de los derechos consagrados en esta Constitución y no podrán sufrir limitaciones a otros derechos que aquellos que sean expresamente y razonablemente restringidos en la resolución judicial. Se prohíbe totalmente la pena de muerte, y, salvo respecto de los delitos de lesa humanidad, aquellas de carácter perpetuo o duración ilimitada o indefinida.

El Estado debe mitigar los efectos adversos de la privación de libertad respecto de la familia y la comunidad de la persona sujeta a esta, esto mediante medidas adecuadas de apoyo a las personas que estén bajo su cuidado y dependencia.”

Indicación Nº 480 de CC Royo y Villena para sustituir el actual artículo 147, por uno del siguiente tenor:

“Artículo 147. Extensión de la pena. Las personas privadas de libertad gozan de los derechos consagrados en esta Constitución y no podrán sufrir limitaciones a otros derechos que aquellos que sean estrictamente necesarios para la ejecución de la pena y deberán ser establecidos expresamente en la resolución judicial.”

Sometida a votación fue **aprobada (15-0-4)**.

Indicación Nº 481 de CC Caiguan para sustituir el “Artículo 147.- Extensión de la pena y efectos colaterales”, por el del siguiente tenor:

“Artículo 147.- Medidas de asistencia post penitenciaria y apoyo familiar. Las personas sujetas a una sanción penal o que hayan cumplido esta, tendrán derecho a ser asistidas en su proceso de preparación y posterior egreso del sistema de ejecución penal, a fin de facilitar objetivos como la recuperación de sus lazos familiares, el acceso al mercado laboral, instituciones educativas, sistemas de seguridad social, salud y vivienda. El Estado debe mitigar los efectos adversos de la privación de libertad mediante medidas adecuadas de apoyo para la familia y

comunidad de la persona sujeta a esta; en especial, a quienes estén bajo su cuidado y dependencia.”

Se entiende **rechazada** por incompatible.

Al artículo 148 que pasa a ser 89.-

“Artículo 148.- Prohibición de la tortura, aislamiento e incomunicación. Ninguna persona privada de libertad podrá ser sometida a tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni trabajos forzosos. Asimismo, no podrá ser sometida a aislamiento o incomunicación como sanción disciplinaria. Tampoco podrá quedar incomunicada en la investigación de delitos en que hubiere participado, salvo en hipótesis calificadas y durante un tiempo proporcional y razonable, señalados expresamente por el legislador.”

No habiendo indicaciones se sometió a votación el **artículo 148 del texto sistematizado** y fue **aprobado (17-0-2)**.

Al artículo 149 que pasa a ser 90.-

“Artículo 149.- Derecho a petición. Las personas privadas de libertad tienen el derecho a hacer peticiones a la autoridad penitenciaria y a la judicatura para el resguardo de sus derechos y a recibir una respuesta oportuna. Asimismo tienen derecho a mantener la comunicación y el contacto personal, directo y periódico con sus redes de apoyo y personas encargadas de su asesoría jurídica, sin que el ejercicio de estos derechos se pueda entorpecer, suspender o vulnerar por razones disciplinarias o administrativas.

Las visitas tienen derecho a no ser sometidas a tratos o procedimiento vejatorios o degradantes, y es deber del Estado disponer todos los medios tecnológicos, materiales y humanos como forma de garantizar este derecho.”

Indicación Nº 482 de CC Caiguan para sustituir el epígrafe del “Artículo 149.- Derecho a petición” por el del siguiente tenor: “Artículo 149.- Derecho a petición, comunicación y visitas”. Sometida a votación fue **rechazada (6-13-0)**.

Indicación Nº 483 de CC Royo y Villena para reemplazar en el artículo 149 inciso primero la expresión “judicatura” por la siguiente frase “tribunal de ejecución de la pena”. Sometida a votación fue **aprobada (14-1-4)**. Por tanto, se entiende también aprobado el primer inciso del artículo 149 del texto sistematizado con la modificación hecha a través de la indicación recién aprobada.

Indicación Nº 484 de CC Royo y Villena para eliminar el inciso segundo del artículo 149. Sometida a votación fue **aprobada (13-5-1)**.

Al artículo 150 que pasa a ser 91.-

“Artículo 150.- Derecho a la inserción social. El cumplimiento de las sanciones penales se enfocará hacia la inserción e inclusión de la persona condenada, garantizando durante la ejecución de la pena un enfoque de género, etario, pertinencia cultural, igualdad material y no discriminación, especial consideración de las personas pertenecientes a grupos históricamente excluidos y aquellas en situación de vulnerabilidad; y un ambiente adecuado de acuerdo a la naturaleza y gravedad del delito y de las demás condiciones de las personas condenadas.

La persona privada de libertad tiene el derecho a la inserción social. Es deber del Estado proveer las condiciones que aseguren la participación de las personas condenadas en la vida en comunidad, para su inserción social y para el libre desarrollo de su personalidad, así como la creación y fortalecimiento de programas de justicia restaurativa. Estos programas deben ser ofrecidos durante y con posterioridad a la ejecución de la pena, y serán asumidos por las personas de manera libre y voluntaria.

El Estado garantiza a los reclusos la posibilidad de realizar trabajos productivos, con pleno respeto de sus derechos, cuyas ganancias no podrán ser imputadas al pago de sanciones penales o disciplinarias.

Las personas que hayan sido condenadas por un delito tendrán derecho a la eliminación de sus antecedentes penales, salvo las excepciones que la ley señale. Tales antecedentes sólo podrán ser consultados por un tribunal. No serán en ningún caso considerados como información pública, salvo por los registros especiales que la ley disponga.”

Indicación Nº 485 de CC Royo y Villena para sustituir el actual artículo 150, por uno del siguiente tenor:

“Artículo 150.- Derecho a la inserción, integración social y reparación. La ejecución de las sanciones penales se enfocará hacia la inserción e integración de la persona condenada.

Es deber del Estado elaborar políticas, planes y programas para la efectiva inserción e integración de las personas privadas de libertad y deberá siempre considerarse un enfoque de género, etario, pertinencia cultural, igualdad material y no discriminación, procurando un desarrollo integral de la persona.

El Estado garantizará a las personas privadas de libertad el acceso a trabajos productivos, con pleno respeto de sus derechos laborales y de seguridad social.”

Sometida a votación fue **aprobada (15-4-0)**.

Indicación Nº 486 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para agregar en el artículo 150 el siguiente inciso final: “Con todo, el Estado deberá priorizar la inserción social de adolescentes”.

Sometida a votación fue **aprobada (16-2-1)**.

A los artículos 150 A y 151 que se suprimen.-

“Artículo 150 A.- El derecho a la reinserción social. Todas las personas que hayan sido privadas de libertad, tanto por prisión preventiva o por condena, podrán acceder a todas las acciones, programas y capacitaciones que faciliten su reinserción al medio libre.

Las acciones, programas y capacitaciones de reinserción se diseñarán y ejecutarán por personal especializado y capacitado, incorporando en todos ellos un enfoque integral de derechos humanos que permitan su desistimiento delictivo.

Cuando esta privación de libertad afecte a adolescentes, mujeres y disidencias y diversidades sexo genéricas se deberá aplicar en la elaboración y ejecución de estos programas la perspectiva de género.

La persona privada de libertad gozará de todos los derechos fundamentales contenidos en este capítulo y todos aquellos reconocidos en tratados de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile, con excepción de aquellos que se vean expresamente limitados en la respectiva sentencia condenatoria. Con todo, tendrá derecho a un trabajo remunerado, a las prestaciones de seguridad social, a la recreación, a la cultura y, en general, al pleno desarrollo de su personalidad.”

“Artículo 151.- Control del crecimiento de la población carcelaria. Toda iniciativa de ley penal debe justificar las penas propuestas en términos de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. La pena privativa de libertad sólo podrá ser establecida cuando no haya una sanción menos gravosa que pueda ser igualmente adecuada para los fines legítimos perseguidos por el legislador en una sociedad democrática.

Además, deberá realizar una estimación de su impacto social, fiscal y carcelario y deberá tomar las medidas adecuadas para asegurar las condiciones que hagan posible el pleno ejercicio de los derechos de las personas privadas de libertad.”

Indicación Nº 487 y 489 de CC Royo y Villena para eliminar los artículos 150 A y 151. Sometidas a votación conjunta fueron **aprobadas (17-2-0)**.

Indicación Nº 488 de CC Caiguan para sustituir el “Artículo 150 A.- El derecho a la reinserción social”, por uno del siguiente tenor:

“Artículo 150 A. Derecho a la inserción social. Las personas condenadas a una sanción penal tienen derecho a la inserción social. El Estado garantizará que la ejecución de la pena posibilite el desistimiento delictual mediante el trato basado en el enfoque de derechos humanos y de género, la pertinencia cultural y la implementación de programas de justicia restaurativa.

Las personas que hayan cumplido una sanción penal tienen derecho a la eliminación de sus antecedentes penales, sin más trámites y excepciones que señale la ley.”

Se entiende **rechazada** por incompatible.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

A continuación, se deja constancia de las normas transitorias que fueron aprobadas en general por la Comisión, y por tanto, incluidas en el texto sistematizado. No obstante, dado el acuerdo adoptado por la Convención en orden a someter las normas transitorias a un procedimiento diferenciado que será definido por la Mesa Directiva, **la Comisión acordó no votar en particular estas normas, a la espera de que sean sometidas al procedimiento que se acuerde próximamente.**

Disposición Transitoria Primera.-

“Primera- Creación de los Tribunales Ambientales. Los Tribunales Ambientales referidos en el artículo XX, serán creados por el Estado en un plazo máximo de 2 años desde la entrada en vigencia de la Constitución en aquellas regiones en que no existan.”

Disposición Transitoria Segunda.-

“Segunda.- El Consejo Superior del Ministerio Público deberá ser establecido dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución. Instalado el Consejo Superior, cesa de inmediato, por ministerio de la Constitución, el Fiscal Nacional que se encuentre en el desempeño de su función.”

Disposición Transitoria Tercera.-

“Tercera.- Los cargos de fiscales regionales en funciones a la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución deberán permanecer en el ejercicio de sus cargos por el tiempo que esta establezca y en caso que su desempeño se haya extendido por un término superior, deberán cesar de inmediato, no pudiendo ser reelegidos ni postularse nuevamente al mismo cargo.”

Disposición transitoria Tercera A.-

“Tercera A.- El fiscal nacional y los y las fiscales regionales que se encuentren desempeñando dichos cargos al momento de entrar en vigencia la presente Constitución y el Consejo Supremo de Justicia, deben poner formalmente sus cargos a disposición de dicho organismo, para que designe a los integrantes del Consejo General de Fiscales de acuerdo al procedimiento establecido en el Capítulo del Ministerio Público.”

Disposición Transitoria Cuarta.-

“Cuarta.- Los y las fiscales y los funcionarios y las funcionarias que se encuentren en funciones a la época de la entrada en vigencia de esta Constitución

permanecerán en sus cargos y solo cesaran en ellos de conformidad con lo que dispongan sus respectivos estatutos.”

Disposición Transitoria Quinta.-

“Quinta. Las normas constitucionales sobre el Ministerio Público, la ley orgánica constitucional del Ministerio Público, el Código Procesal Penal y aquellas que modifiquen el Código Orgánico de Tribunales para su implementación, se aplicarán exclusivamente a los hechos cuyo principio de ejecución sea posterior a la entrada en vigencia de tales disposiciones.

Los procesos para la investigación y juzgamiento de crímenes que de acuerdo al derecho internacional constituyan crímenes de lesa humanidad, guerra o genocidio, perpetrados antes del periodo señalado, continuarán rigiéndose por el Código de Procedimiento Penal. La Corte Suprema de Justicia a través de autos acordados adoptará todas las medidas necesarias para la investigación oportuna y la tramitación preferente de estos procesos.”

Disposición Transitoria Sexta.-

“Sexta. Verificada la instalación del Consejo Superior de la Defensoría Penal Pública, dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de la Constitución, cesa por ministerio de esta el Defensor Nacional en ejercicio.”

Disposición Transitoria Séptima.-

“Séptima.- La Defensoría del Pueblo deberá quedar instalada dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución. La ley que regule la organización, funciones, financiamiento y atribuciones de la Defensoría del Pueblo deberá ser dictada dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de la presente Constitución.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos, creado por la Ley Nº 20.405, y la Defensoría de la Niñez, creada por la Ley Nº 21.067, se entenderán suprimidos una vez que entre en vigencia la ley que regule la organización, funciones, financiamiento y atribuciones de la Defensoría del Pueblo. Esta última ley deberá determinar el proceso para el traspaso de los funcionarios, del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez, a la Defensoría del Pueblo.

Para todos los efectos, se entenderá que la Defensoría del Pueblo creada por esta Constitución es el continuador legal y sucesor en todos los bienes, derechos y obligaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de la Defensoría de la Niñez, respectivamente.”

Disposición Transitoria Séptima A.-

“Séptima A.- La Defensoría de los Derechos Humanos entrará en funcionamiento en conformidad con lo indicado en su ley orgánica, la que se deberá dictar en un plazo máximo de 2 años desde la entrada en vigencia de la Constitución.

Mientras no se dicte la ley y se defina la forma en que el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de los Derechos de la Niñez se incorporen a la Defensoría, estas se mantendrán vigentes.”

Disposición Transitoria Séptima B.-

“Séptima B.- En un plazo de 2 años el Congreso deberá tramitar y finalizar una ley que regule la organización y funcionamiento de la Defensoría de los Pueblos, además de tramitar y finalizar la modificación de la ley orgánica de la Corporación de Asistencia Judicial, la que deberá establecer la incorporación de dicha institución en esta Defensoría, como una Defensoría especializada en temas civiles.”

Disposición Transitoria Octava.-

“Octava.- En el plazo de dos años el Congreso Plurinacional deberá tramitar y finalizar la ley orgánica que regule la organización y funcionamiento de la Defensoría de la Naturaleza, respetando los principios de esta Constitución y los instrumentos

internacionales suscritos por Chile, debiendo realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para el correcto y eficaz desempeño de sus fines.”

Disposición Transitoria Octava A.-

“Octava A.- En el plazo de dos años desde que se aprueba la presente constitución, el Parlamento Plurinacional deberá tramitar y publicar la ley a que se refiere el artículo III, respetando los principios de esta constitución y los instrumentos internacionales suscritos por Chile, debiendo realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para el correcto y eficaz desempeño de sus fines. El diseño de esta ley debe contemplar un proceso participativo popular y de consulta previa y vinculante con los pueblos indígenas.”

Disposición Transitoria Novena.-

“Novena.- Instalación de la justicia electoral. Dentro del plazo de 6 meses contados desde la entrada en vigencia de esta Constitución, deberán ser instalados los tribunales de la nueva justicia electoral.”

Disposición Transitoria Novena A.-

“Novena A. Dentro del plazo de 6 meses contados desde la entrada en vigencia de esta Constitución, deberán ser instalados los tribunales de la nueva justicia electoral. Mientras los nuevos tribunales no se encuentren instalados, el Tribunal Calificador de Elecciones y los Tribunales Electorales Regionales seguirán conociendo de todas las causas electorales hasta su total tramitación, tras lo cual serán disueltos.

Las nuevas competencias de escrutinio y calificación electoral traspasadas al Servicio electoral deberán ser ejercidas en la primera elección que siga a la entrada en vigencia de esta Constitución. Los actuales consejeros del Servel seguirán en sus funciones hasta el momento que cesen en su cargo conforme a la Ley.

Las causas contra alcaldes y concejales deberán conocerse en el respectivo tribunal contencioso administrativo una vez que estos hayan comenzado a funcionar, según lo establecido en las normas constitucionales que regulan dichos tribunales y sus procedimientos.”

Disposición Transitoria Décima.-

“Décima. En el plazo de 2 años desde la entrada en vigencia de esta Constitución, se convocará a concursos públicos para los servicios notariales y registrales, de conformidad con el nuevo marco constitucional.”

A la Disposición Transitoria Décimo Primera.-

“Décimo primera. El órgano legislativo, en el plazo de dos años, deberá aprobar una ley que se encargará de avanzar en una progresiva desnotarización y simplificación de todo tipo de trámites.”

Indicación Nº 490 de CC Cruz, Botto, Gutiérrez, Daza y Namor para sustituir la disposición transitoria décimo primera por la siguiente:

“Artículo transitorio.- Dentro del plazo de dos años desde la entrada en vigencia de esta Constitución, deberá dictarse la ley sobre el Consejo Superior para la Fe Pública, la que se encargará de avanzar en la simplificación y eliminación de trámites que requieran de la intervención de un ministro de fe; la tecnologización de los mismos y la modificación del actual sistema de nombramiento de notarios, conservadores y archiveros judiciales.”

Disposición Transitoria Décimo Segunda.-

“Décimo segunda. En el plazo de seis meses, una ley creará el Consejo de Verdad, Reparación y Garantías de No Repetición. La misma ley establecerá el plazo en que el Consejo deberá convocar a la formación de las Comisiones de Verdad Histórica señaladas en esta Constitución, que no podrá ser superior a 60 días desde su conformación.”

Disposición Transitoria Décimo Tercera.-

“Décimo tercera. Dentro del plazo de seis meses contados desde la entrada en vigencia de la Constitución, el Gobierno debe dar inicio al proceso de participación y consulta indígena que co-diseñará la norma legal encargada de regular la estructura orgánica, atribuciones y procedimientos sobre los que se organizará el Consejo de Pueblo Indígenas.

La ley deberá contemplar al menos, el número de consejeros por pueblo, el procedimiento de elección, los procedimientos y criterios objetivos que regularán la elección o propuestas de nombres para ocupar cupos o escaños reservados que no sean de elección popular, el número de oficinas territoriales y funcionarios de planta.

El proceso de consulta previa, libre, informada y vinculante deberá concluir en el plazo máximo de un año, y su resultado será vinculante para el Congreso Nacional encargado de dictar la ley respectiva.

El Consejo de Pueblo Indígena sustituirá a la actual Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. La ley regulará la forma en que se efectuará el traspaso progresivo de las funciones que actualmente desempeña la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena hacia el Consejo de Pueblos Indígenas que, en cualquier caso, no deberá tardar más de tres años desde la entrada en vigencia de la ley y deberá considerar al menos la planta y distribución de oficinas territoriales actuales.”

Disposición Transitoria Décimo Cuarta.-

“Décimo cuarta. La Corte Constitucional deberá quedar instalada en el plazo de 90 días desde la entrada en vigencia de la Constitución.

Los ministros del Tribunal Constitucional cesaran por ministerio de la Constitución una vez entrada en vigencia la actual Constitución y no podrán postularse para jueces o juezas de la Corte Constitucional.

En el marco de la competencia de la nueva Corte Constitucional, esta substanciará y fallará las causas pendientes a la fecha de cesación de los ministros del tribunal.”

Disposición Transitoria Décimo Cuarta A.-

“Décimo cuarta A. La Corte Constitucional deberá quedar instalada dentro de los cuatro meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución. Con todo, la Corte Constitucional podrá instalarse y comenzar a funcionar con, a lo menos, dos tercios de sus integrantes.

Las y los ministros del Tribunal Constitucional no podrán ser elegidas o elegidos como juezas o jueces de la Corte Constitucional.

Para proceder al primer nombramiento de las juezas y jueces de la Corte Constitucional se aplicarán las siguientes reglas:

a) El tercio correspondiente al Congreso será elegido conforme a lo dispuesto en el artículo XX (Corte Constitucional), para lo cual se convocará, previamente, a un concurso público por las Cámaras del Congreso, dentro del primer mes de entrada en vigencia de esta Constitución.

b) El tercio correspondiente a la Presidencia de la República será nombrado tan pronto el Consejo de la Justicia se hubiere instalado y haya procedido a proponerle las nóminas a que se refiere el artículo XX (Corte Constitucional).

c) El tercio que corresponde ser elegido de entre los jueces y juezas de la jurisdicción ordinaria, por votación, entre sus pares que ostenten la calidad de titulares, se hará a partir de un padrón de personas habilitadas para sufragar, conforme al artículo XX (Corte Constitucional), elaborado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, dentro del primer mes de entrada en vigencia de la presente Constitución, considerando como día de cierre del mencionado padrón la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución. La inscripción de candidaturas, el proceso electoral y su calificación estarán a cargo del Tribunal Calificador de Elecciones, el cual determinará las fechas y demás aspectos necesarios para su correcto desarrollo, y que podrá requerir la asistencia y colaboración del Servicio Electoral, en caso necesario. La elección se realizará en la fecha que establezca el

Tribunal Calificador de Elecciones, la que no podrá ser superior a los tres meses de la entrada en vigencia de esta Constitución.

La ley que regule la organización, funcionamiento, procedimientos y fije la planta, régimen de remuneraciones y estatuto del personal de la Corte Constitucional, deberá ser dictada dentro de los tres meses siguientes a la vigencia de la presente Constitución.

Cuando corresponda la primera renovación parcial de las juezas y jueces de la Corte Constitucional, a los tres años de su instalación, se escogerán por sorteo quienes deberán cesar en sus funciones y renovarse, dos de cada tercio correspondiente. Para la segunda renovación parcial, se hará un sorteo para escoger dos de cada tercio, entre las personas restantes que fueron elegidas al instalarse la Corte. A partir de entonces se estará a lo establecido en el artículo XX. Para todos los efectos, los plazos de renovación se contarán desde la fecha en que la Corte Constitucional completará la totalidad de su primera integración de juezas y jueces. Los sorteos antes señalados serán realizados por el Tribunal Calificador de Elecciones.”

Disposición Transitoria Décimo Cuarta B.-

“Décimo cuarta B. La Corte Constitucional Plurinacional deberá quedar instalada en el plazo de tres meses desde que entra en vigencia esta constitución. Los jueces constitucionales tendrán [iniciativa incompleta]”

Disposición Transitoria Décimo Cuarta C.-

“Décimo cuarta C. Los jueces que se nombren para la primera instalación de la Corte Constitucional, previo sorteo, durarán en el cargo tres, seis y nueve años respectivamente.”

Disposición Transitoria Décimo Quinta.-

“Décimo quinta. El Tribunal Constitucional se entenderá suprimido de pleno derecho al cabo de seis meses de la entrada en vigencia de esta Constitución.

Las causas que se encuentren radicadas en el Tribunal Constitucional, al momento de la entrada en vigencia de la presente Constitución, seguirán siendo conocidas por éste hasta su sentencia de término. Para dicho efecto, los procedimientos y demás disposiciones legales que les eran aplicables subsistirán vigentes por el término necesario para la conclusión de dichos procesos, la cual no podrá exceder el plazo señalado en el inciso primero del artículo XX transitorio (anterior).

Vencido el anterior plazo, las causas que se mantuvieron pendientes serán traspasadas a la Corte Constitucional, que asumirá su tramitación en conformidad al procedimiento vigente al momento de su iniciación.”

Disposición Transitoria Décimo Quinta A.-

“Décimo quinta A. Transcurridos seis meses de la entrada en vigencia de esta constitución, se entiende finalizada la existencia legal del Tribunal Constitucional, de pleno derecho. Debe cerrar sus causas y emitir un informe detallando las que queden pendientes. Vencido este plazo, pasarán todas las causas a la Corte Constitucional Plurinacional.”

Disposición Transitoria Décimo Sexta.-

“Décimo sexta. Respecto al nombramiento de los jueces constitucionales de pueblos indígenas.

Para el caso que la ley no esté publicada al momento del nombramiento, el Parlamento Plurinacional debe realizar una convocatoria con a lo menos 6 meses de anticipación a la fecha de nombramiento para hacer entrega de antecedentes, los cuales a lo menos consistirán en acreditar la calidad de indígena de acuerdo a las normas de cada pueblo, haber cumplido 35 años de edad, poseer título de abogada o abogado y contar con especialización o experiencia acreditada de a lo menos 8

años en disciplinas de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derechos Humanos o Derecho Ambiental.

Para la calificación de méritos, se tomará en cuenta haber ejercido como autoridad originaria bajo el sistema jurídico propio del pueblo al que pertenece, acreditar vínculo territorial o su participación activa en organizaciones indígenas.”

Disposición Transitoria Décimo Séptima.-

“Décimo séptima. La ley que regule la acción de tutela de derechos establecida en el artículo XX (Acción constitucional de tutela de derechos) deberá ser dictada dentro de los tres meses siguientes a la vigencia de la presente Constitución.

Mientras no entre en vigencia la ley mencionada en el inciso anterior, se aplicará lo establecido a continuación.

El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

A estos efectos, se aplicará el procedimiento regulado en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, contenido en el Acta 94-2015 de la Corte Suprema, que subsistirá vigente por el término necesario para la tramitación de estos recursos, el cual no podrá exceder el plazo señalado en el inciso primero de este artículo.”

Disposición Transitoria Décimo Octava.-

“Décimo octava. La ley que regule la acción de tutela de la libertad personal establecida en el artículo XX (Acción de tutela de la libertad personal) deberá ser dictada dentro de los tres meses siguientes a la vigencia de la presente Constitución.

Mientras no entre en vigencia la ley mencionada en el inciso anterior, se aplicará lo establecido a continuación.

Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

La Corte de Apelaciones podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del juez competente, procediendo en todo breve y sumariamente, y corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija.

El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La Corte de Apelaciones respectiva dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

A estos efectos, se aplicará el procedimiento regulado en el Auto Acordado de la Corte Suprema de 19 de diciembre de 1932, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo, que subsistirá vigente por el término necesario para la tramitación de estos recursos, el cual no podrá exceder el plazo señalado en el inciso primero de este artículo.”

Disposición Transitoria Décimo Novena.-

“Décimo novena.- Amnistía. Concédese amnistía a todos quienes, en calidad de autores, cómplices o encubridores, en cualquiera de los grados de desarrollo del delito, hayan incurrido o se encuentren imputados por hechos delictivos o que revistan características de un hecho delictivo consistentes en las figuras descritas en los cuerpos normativos que siguen:

Del Código Penal los artículos 121, 126, 261, 262, 268 sexies, 268 septies, 269, 292, 293 y 294, 391 en grado de frustrado, 474 a 481. 484, numerales 1, 4, 6, 7 y 8 del artículo 485, 486 y 487, numerales 1, 4 y 21 del artículo 495, numerales 1 y 5 del artículo 496; y los que queden comprendidos en las figuras del 449 ter, 449 quater y el inciso final del 450 del Código Penal;

Del Decreto 400, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley N° 17.798, Sobre Control de Armas, y sus modificaciones;

Del Código de Justicia Militar los artículos 416 bis, 416 ter y 417;

De la ley N° 12.927 sobre seguridad del Estado.

Sea que se encuentren o no sometidas a investigación formalizada o desformalizada, imputadas o condenadas, y si cumplieren las condiciones establecidas en los artículos 2º y 3º siguientes de forma copulativa.

Asimismo, se concederá amnistía a los adolescentes que hayan incurrido en los delitos señalados en el inciso anterior y se encuentren siendo investigados de conformidad a la ley N° 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente.”

Disposición Transitoria Vigésima.-

“Vigésima.- Alcance temporal. Serán beneficiarios de la amnistía quienes, cumpliendo los demás requisitos de la presente ley, hayan sido imputados o condenados por hechos que hubieran acontecido entre el 07 de octubre de 2019, hasta el día de ratificada la presente constitución en el plebiscito de salida.”

Disposición Transitoria Vigésima primera.-

“Vigésima primera.- Elemento subjetivo. Para efectos de esta ley, serán beneficiarias las personas imputadas o condenadas, por hechos ocurridos en protestas, manifestaciones o movilizaciones sociales, o con ocasión o a propósito de ellas.

Para probar la circunstancia anterior, bastará la prueba indiciaria o cualquier otro medio probatorio. No obstante las reglas generales en materia de recursos, la resolución que rechace la solicitud será apelable.”

Disposición Transitoria Vigésima segunda.-

“Vigésima segunda.- Sobre imputados sujetos a medidas cautelares privativas de libertad. En el caso de aquellas personas sujetas a alguna medida cautelar privativa o restrictiva de libertad, por el sólo hecho de solicitar su revisión invocando la concurrencia de las condiciones de los artículos 1º, 2º y 3º de la presente ley, éstas serán revocadas en cada caso, hasta que el juez de la causa resuelva sobre la solicitud.

Del mismo modo, se dejarán sin efecto las órdenes de detención y todo tipo de apremio.

Sin perjuicio de las reglas generales, la resolución que revoque las medidas cautelares de conformidad al inciso anterior, será inapelable.”

Disposición Transitoria Vigésima tercera.-

“Vigésima tercera.- Sobre aplicación. La aplicación de la amnistía, en cada caso, corresponderá al tribunal competente el cual adoptará, de acuerdo a las leyes procesales vigentes y con carácter de urgencia, las decisiones pertinentes para el cumplimiento de la presente Ley, cualquiera sea el estado de tramitación del proceso y de la jurisdicción de que se trate.

Esta decisión deberá adoptarse en el plazo máximo de dos meses, sin perjuicio de los recursos que correspondan, los cuales, además no tendrán efectos suspensivos.

Esta amnistía será aplicada de oficio o a petición de parte, con audiencia del Ministerio Público, y será una acción con carácter público.

La resolución del Juez de Garantía respectivo que se pronuncie sobre esta solicitud rechazando la aplicación de la presente amnistía podrá ser apelada únicamente por el imputado. La resolución que concede la amnistía será inapelable. Tampoco procederá el recurso de queja.

En caso de que el Juez de Garantía o la Corte de Apelaciones respectiva conceda la presente amnistía se entenderá de pleno derecho que la privación de libertad sufrida por el imputado fue manifiestamente errónea o arbitraria, pudiendo en consecuencia, la parte afectada, ejercer la acción de indemnización por error judicial en el plazo de 06 meses desde que la resolución estuviere firme y ejecutoriada.

Salvo respecto de los plazos señalados en el inciso anterior, las acciones contempladas en esta Ley serán imprescriptibles.”

Disposición Transitoria Vigésima Cuarta.-

“Vigésima cuarta.- Sobre “no condena”. No obstante lo dispuesto en el artículo 93 N° 4 del Código Penal, por efecto de esta ley se extinguirá la responsabilidad penal de las personas beneficiadas por la presente ley, las cuales podrán o no encontrarse imputadas o condenadas por alguno de los delitos del artículo 1º, en ningún caso tendrán el carácter de condenados para todo efecto legal.”

Disposición Transitoria Vigésima Quinta.-

“Vigésima quinta.- Sobre alcance a fuerzas de orden y seguridad. No quedarán comprendidos en la amnistía a que se refiere el artículo 1º de la presente ley, quienes fueron miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Públicas, o funcionarios de cualquiera de los organismos y poderes del Estado a la época de la comisión de los hechos.”

Disposición Transitoria Vigésima Sexta.-

“Vigésima sexta.- Sobre persecución laboral. La presente amnistía dejará sin efecto las resoluciones judiciales y actos administrativos que hayan producido despidos, sanciones, limitaciones o suspensiones de los derechos de los trabajadores o sindicales, derivados de los hechos contemplados en los artículos 1, 2 y 3, sea por haber participado en huelga o en cualquier movimiento reivindicatorio o de reclamación de derechos regidos por la legislación vigente.

Esto significa la restitución a los afectados de los derechos que tendrían al momento de la aplicación de la ley de no haberse producido aquellas medidas, y en caso de imposibilidad de restituir los derechos afectados estos serán indemnizados a cargo del Estado.”

(iv) Indicaciones rechazadas

Con el objeto de poder dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 95 del Reglamento General, se identifican en esta sección las indicaciones rechazadas en la Comisión.

Indicación N° 2 de CC Harboe para sustituir el artículo 1 por uno del siguiente tenor:

“Artículo 1.- Prevención y solución de conflictos socioambientales. El Estado promoverá el pleno respeto y cuidado del medio ambiente y establecerá instituciones y mecanismos colaborativos de gestión para la prevención y solución de conflictos ambientales. Una ley establecerá las formas de participación de las comunidades”

Indicación N° 4 de CC Harboe para sustituir el inciso primero del artículo 2 por uno del siguiente tenor: “Existirá al menos un Tribunal ambiental en cada región del país, los que tendrán las siguientes competencias:”

Indicación N° 5 de CC Harboe para sustituir los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 2 por uno del siguiente tenor: “Una ley determinará su organización, integración, sistema recursivo, normas de funcionamiento y demás potestades necesarias para el cumplimiento de sus fines” Corresponde a la ley delimitar su integración y procedimientos de funcionamiento.”

Indicación N° 8 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 3, por el siguiente:

“Artículo 3.- Un organismo autónomo y jerarquizado denominado Ministerio Público, conformado como persona jurídica de derecho público, dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos que pudiesen ser constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado. Ejercerá la acción penal pública en representación exclusiva de la sociedad, en la forma prevista por la ley. En dichas funciones deberá velar por el respeto y promoción de los derechos humanos, considerando también los intereses de la víctima, respecto de quienes deberá adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para protegerlas, al igual que a los testigos.

Ninguna ley ni autoridad podrán en caso alguno impedir o establecer condiciones que entorpezcan el desarrollo de la investigación y el ejercicio de la acción penal pública cuando se trate de hechos que comprometan el interés público, el patrimonio de la nación o bienes jurídicos colectivos”.

Indicación N° 9 de CC Harboe para sustituir el artículo 3 por uno del siguiente tenor:

“Artículo 3.- Un organismo del Estado, autónomo, jerarquizado, con el nombre de Ministerio Público, dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales, y en sus investigaciones deberá apegarse a las exigencias del Debido Proceso consagrado en de esta Constitución. Todo acto que contravenga tales exigencias es nulo y acarreará las consecuencias indemnizatorias y correctivas previstas en la ley.

El ofendido por el delito y las demás personas que determine la ley podrán ejercer igualmente la acción penal.

El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad durante la investigación, sin perjuicio de su dependencia dispuesta en el artículo XX de esta Carta, asumiendo completamente la responsabilidad jerárquica sobre las consecuencias que el ejercicio de tal prerrogativa pueda acarrear. Con todo, las actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben, requerirán de aprobación judicial previa a una solicitud escrita y fundada del fiscal a cargo de la investigación, sin perjuicio de dejar constancia de su encargo. La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite dichas órdenes y no podrá calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibición de la autorización judicial previa ya descrita.”

Indicación N° 11 de CC Logan para sustituir, en el artículo 3 inciso 1°, las palabras “la víctima” por “las víctimas”.

Indicación N° 12 de CC Logan para sustituir, en el artículo 3 inciso 1°, en el artículo 3 inciso 1°, la palabra “deberá” por “deberán”.

Indicación N° 13 de CC Logan para eliminar, en el artículo 3 inciso 2°, la palabra “contra”.

Indicación N° 16 de CC Logan para sustituir, en el artículo 3 A inciso 1°, la frase “autónomo funcional y financieramente,” por la frase “jerarquizado, funcional y financieramente autónomo.”

Indicación N° 17 de CC Logan para sustituir, en el artículo 3 A inciso 1°, las frase “Está integrado por los y las fiscales, los funcionarios y las funcionarias, el o la fiscal nacional, los y las fiscales regionales y los cargos directivos, quienes serán designados y designadas, previo concurso público, por el Consejo Supremo de Justicia, ajustándose a las normas que la Constitución y la ley determinen.” por la frase, “Está integrado por el o la Fiscal Nacional; por los y las fiscales regionales y supra territoriales; por fiscales adjuntos y por funcionarios y funcionarias. El Ministerio Público tiene a su cargo la dirección, en forma exclusiva, de la investigación de los hechos constitutivos de delitos y el ejercicio de la acción penal pública y la adopción de medidas para proteger a las víctimas y testigos.

Indicación N° 18 de CC Logan para sustituir el artículo 3 A inciso 2, por el siguiente: “Existirá una o un Fiscal Regional en cada una de las regiones del país, a menos que por su cantidad de población o por su extensión territorial, sea necesario nombrar más de uno. Podrán crearse fiscalías supra territoriales a nivel nacional, especializadas en la investigación de delitos complejos que la ley determinará”.

Indicación N° 21 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 4, por el siguiente:

“Artículo 4.- Estructura organizacional y funciones. El Ministerio Público es un organismo autónomo funcional y financieramente. Está integrado por los y las fiscales, los funcionarios y las funcionarias, el o la fiscal nacional, los y las fiscales regionales y los cargos directivos.

Existirá un o una fiscal regional en cada una de las regiones o zonas geográficas en las cuales se divida el país, a menos que la ley disponga que exista más de un o una fiscal en una región o zona geográfica determinada. El o la fiscal regional será responsable de la conducción administrativa del Ministerio Público en su territorio.”

Indicación N° 23 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para suprimir en el artículo 5 la siguiente frase: “con perspectiva de género y, luego de la palabra “objetividad”.

Indicación N° 26 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 7, y remplazarlo por el siguiente:

“Artículo 7.- Ninguna ley ni autoridad podrán en caso alguno impedir o establecer condiciones que entorpezcan el desarrollo de la investigación y el ejercicio de la acción penal pública cuando se trate de hechos que comprometan el interés público, el patrimonio de la nación o contra bienes jurídicos colectivos.

Estas funciones serán desarrolladas por intermedio de los fiscales, quienes serán independientes en el ejercicio de ellas, sin que ninguna autoridad o persona externa pueda interferir en las mismas, debiendo actuar conforme con los principios de legalidad, objetividad, responsabilidad, unidad de acción, oportunidad, mínima intervención penal y garantías del debido proceso. En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales.

En materias laborales sus funcionarios se regirán por las normas del Derecho del Trabajo, sin perjuicio de sus reglamentaciones internas y del estatuto legal de la institución.

El Ministerio Público será financieramente autónomo. El ofendido por el delito y las demás personas que determine la ley podrán ejercer igualmente la acción penal.

El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública para el ejercicio de sus funciones y participará tanto en la fijación de metas y objetivos como en la evaluación del cumplimiento de estas órdenes, metas y objetivos en la forma que determine la ley. La autoridad policial requerida deberá cumplir sin más trámite dichas órdenes y no podrá calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibición de la autorización judicial, salvo que esta orden sea verbal.

Las actuaciones que priven, amenacen o perturben al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura, requerirán siempre de aprobación judicial previa.”

Indicación N° 27 de CC Logan para sustituir, en el artículo 7 inciso 1°, la palabra “podrán” por “podrá”.

Indicación N° 28 de CC Logan para eliminar, en el artículo 7 inciso 1°, la palabra “contra”.

Indicación N° 29 de CC Logan para eliminar, en el artículo 7 inciso 2°, la frase “quienes serán independientes en el ejercicio de ellas”.

Indicación N° 30 de Logan para incorporar, en el artículo 7 inciso 2°, la palabra “externa” luego de la palabra “persona”.

Indicación N° 31 CC Logan para eliminar, en el artículo 7 inciso 2°, la palabra “autonomía”.

Indicación N° 32 de CC Logan para incorporar, en el artículo 7 inciso 2° la frase “de acción” luego de la palabra “unidad”.

Indicación N° 33 de CC Logan para incorporar, en el artículo 7 inciso 3°, la frase “El Ministerio Público será financieramente autónomo.”, antes de “En materias laborales...”

Indicación N° 34 de CC Logan para incorporar, en el artículo 7 inciso 5 la frase “y participará tanto en la fijación de metas y objetivos como en la evaluación del cumplimiento de estas órdenes, metas y objetivos en la forma que determine la ley.” luego de la frase “para el ejercicio de sus funciones”

Indicación N° 35 de CC Logan para sustituir, en el artículo 7 inciso 5, la segunda palabra “salvo” por “a menos”.

Indicación N° 36 de CC Logan para incorporar al inciso final del artículo 7, la palabra “restrinjan” entre las palabras “amenacen” y “o”.

Indicación N° 37 de CC Logan para eliminar al inciso final del artículo 7, la frase “o lo restrinjan o perturben”.

Indicación N° 39 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 7 A, y remplazarlo por el siguiente:

“Artículo 7 A.- Investigación de los delitos y persecución penal estatal. Los y las fiscales del Ministerio Público tienen a su cargo la dirección, en forma exclusiva, de la investigación de los hechos constitutivos de delitos y el ejercicio de la acción penal pública, actuando con independencia y sin injerencias indebidas de cualquier persona o institución pública o privada.

Los y las fiscales deben someter su acción a la ley y a los criterios generales de actuación que se dicten a partir de las políticas de persecución penal definidas de

la forma prevista en la presente Constitución. Bajo ningún respecto los y las fiscales pueden ejercer facultades jurisdiccionales.

Las actuaciones de investigación que priven, restrinjan o perturben al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura requerirán de aprobación judicial previa

Los y las fiscales pueden impartir órdenes directas a las policías durante las investigaciones que desarrollen y participará tanto en la fijación de metas y objetivos como en la evaluación del cumplimiento de estas órdenes, metas y objetivos en la forma que determine la ley. La autoridad requerida debe cumplir sin más trámite dichas órdenes y sin calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo para requerir la exhibición de la autorización judicial previa, en los casos previstos en el inciso anterior.

Los delitos en los cuales se encuentre comprometido el interés público y el patrimonio fiscal son siempre de acción penal pública y la ley no podrá limitar, restringir ni condicionar su investigación y persecución.”

Indicación N° 40 de CC Logan para eliminar, en el artículo 7 A inciso 1, la frase “con independencia y”.

Indicación N° 41 de CC Logan para incorporar, en el artículo 7 A inciso 1, la frase “externa, ya sea” antes de la frase pública o privada.

Indicación N° 42 de CC Logan para sustituir, en el artículo 7 A inciso 1, la frase “El o la fiscal nacional y los y las fiscales regionales no pueden desarrollar en ningún caso actividades de investigación ni ejercer la acción penal pública.” Por la frase: “De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y testigos.”.

Indicación N° 43 de CC Logan para incorporar, en el artículo 7 A inciso 4, la frase “y participará tanto en la fijación de metas y objetivos como en la evaluación del cumplimiento de estas órdenes, metas y objetivos en la forma que determine la ley.” luego de la frase “que desarrollen”.

Indicación N° 45 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir en el artículo 8, y remplazarlo por el siguiente:

“Artículo 8.- Estatuto legal. Una ley determinará la organización y atribuciones del Ministerio Público, señalará las calidades y requisitos que deberán tener y cumplir las y los fiscales para su nombramiento y las causales de su remoción. Los fiscales cesaran en su cargo al cumplir los 75 años.

Las autoridades superiores de la institución deberán siempre fundar aquellas órdenes e instrucciones dirigidas a los fiscales, que puedan afectar una investigación o el ejercicio de la acción penal.”

Indicación N° 46 de CC Harboe para sustituir el artículo 8 por uno del siguiente tenor:

“Artículo 8.- Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones del Ministerio Público, señalará las calidades y requisitos que deberán tener y cumplir los fiscales para su nombramiento y las causales de remoción de los fiscales adjuntos, en lo no contemplado en la Constitución. Las personas que sean designadas fiscales no podrán tener impedimento alguno que las inhabilite para desempeñar el cargo de juez. Los fiscales regionales y adjuntos cesarán en su cargo al cumplir 75 años de edad.

La ley orgánica constitucional establecerá el grado de independencia y autonomía y la responsabilidad que tendrán los fiscales en la dirección de la investigación y en el ejercicio de la acción penal pública, en los casos que tengan a su cargo. En todo caso, la ley tendrá a la vista la estructura jerárquica del Ministerio Pública dispuesta en el artículo 10.”

Indicación N° 47 de CC Logan para eliminar, en el artículo 8 inciso 1, la frase “y les serán aplicables las mismas prerrogativas, derechos y obligaciones que a los jueces y juezas”

Indicación N° 50 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 8 A y remplazarlo por el siguiente:

“Artículo 8 A.- Designación y estatuto aplicable a los integrantes del Ministerio Público. En el Ministerio Público no existirán cargos de exclusiva confianza del o la fiscal nacional ni de los y las fiscales regionales.

El cargo de fiscal regional podrá ser desempeñado por quien tenga la calidad de abogado o abogada por un lapso de a los menos diez años y se encuentra habilitado para el ejercicio de la profesión. No será requisito para ser elegido como fiscal regional el tener la calidad de fiscal adjunto con a lo menos diez años de experiencia en el cargo.

Los y las fiscales regionales duraran cuatro años en sus cargos y no podrá tener lugar su reelección ni una nueva postulación al cargo, ya sea en la misma o en otra región del territorio nacional. Podrán, en todo caso, postular a los cargos vacantes en la institución sujetándose a los requisitos establecidos para ello. Será causal de inhabilidad para asumir el cargo de fiscal regional el haberlo desempeñado previamente en la misma o en otra región del país, de forma interrumpida o ininterrumpida, o cualquiera sea el tiempo que haya transcurrido desde que cesó en el ejercicio de su cargo.

La responsabilidad de él o la fiscal nacional y de los y las fiscales regionales, por el cumplimiento de las obligaciones que la Constitución y la ley les imponen, se podrá hacer efectiva a través del juicio político.”

Indicación N° 51 de CC Logan para sustituir el artículo 8 A, por otro nuevo del siguiente tenor:

“Artículo 8 A.- Designación y estatuto aplicable a los integrantes del Ministerio Público. La selección y designación de fiscales y funcionarios y funcionarias del Ministerio Público, será regulada por una ley que además definirá el estatuto de responsabilidad administrativa, estableciendo un catálogo de conductas prohibidas, determinando sanciones proporcionadas al tipo de infracción cometida, las que deberán ser acreditadas conforme un procedimiento administrativo legalmente tramitado con pleno respeto a las garantías del debido proceso.

Existirá una o un Fiscal Regional en cada una de las regiones del país, a menos que por su cantidad de población o por su extensión territorial, sea necesario nombrar más de uno.

Podrán crearse fiscalías supra territoriales a nivel nacional, especializadas en la investigación de delitos complejos que la ley determinará.

Las y los fiscales regionales y supra territoriales especializados serán nombrados por Fiscal Nacional de una propuesta en cuaterna paritaria elaborada por el Consejo General del Ministerio Público.

Toda candidata o candidato a fiscal regional o supra territorial especializado, deberá concursar en un procedimiento público y de mérito ante el Consejo Técnico de Evaluación de Antecedentes, y expondrá un plan de trabajo teniendo en cuenta los fenómenos delictuales de la respectiva región o especialidad.

Las y los fiscales regionales y supra territoriales deberán haberse desempeñado como fiscal adjunto, con cinco o más años de experiencia en el cargo, no haber sido fiscal regional o supra territorial durante los dos años anteriores, haber aprobado cursos de formación especializada impartidos por una Escuela de Fiscales establecida por ley y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. Durarán cuatro años en el cargo y una vez concluida íntegramente estas funciones, podrán retornar al cargo que detentaban anteriormente en el Ministerio Público. No podrán ser reelectos ni podrán postular nuevamente a este cargo en ninguna región del país. En el caso de los fiscales supra territoriales,

deberán poseer los conocimientos específicos suficientes para la respectiva área de especialización.”

Indicación N° 53 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 9 y remplazarlo por el siguiente:

“Artículo 9.- De los fiscales regionales y supra territoriales. Existirá una o un Fiscal Regional en cada una de las regiones del país, a menos que por su cantidad de población o por su extensión territorial, sea necesario nombrar más de uno.

Podrán crearse fiscalías supra territoriales a nivel nacional, especializadas en la investigación de delitos complejos que la ley determinará.

Las y los fiscales regionales y supra territoriales especializados serán nombrados por el Consejo Superior del Ministerio Público.

Toda candidata o candidato a fiscal regional o supra territorial especializado, deberá concursar en un procedimiento público y de mérito ante el Consejo Superior del Ministerio Público, y expondrá un plan de trabajo teniendo en cuenta los fenómenos delictuales de la respectiva región o especialidad.

Las y los fiscales regionales y supra territoriales deberán haberse desempeñado como fiscales adjuntos, con cinco o más años de experiencia en el cargo, no haber sido fiscal regional o supra territorial durante los dos años anteriores, haber aprobado cursos de formación especializada impartidos por una Escuela de Fiscales establecida por ley y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. Durarán cuatro años en el cargo y una vez concluida íntegramente estas funciones, podrán retornar al cargo que detentaban anteriormente en el Ministerio Público. No podrán ser reelectos ni podrán postular nuevamente a este cargo en ninguna región del país. En el caso de los fiscales supra territoriales, deberán poseer los conocimientos específicos suficientes para cada área de especialización.”

Indicación N° 54 de CC Harboe para sustituir el artículo 9 por uno del siguiente tenor:

“Artículo 9.- Existirá un Fiscal Regional en cada una de las regiones en que se divide administrativamente el país, a menos que la población o la extensión geográfica de la región hagan necesario nombrar más de uno.

Los fiscales regionales serán nombrados por el Fiscal Nacional, a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones de la respectiva región. En caso que en la región exista más de una Corte de Apelaciones, la terna será formada por un pleno conjunto de todas ellas, especialmente convocado al efecto por el Presidente de la Corte de más antigua creación.

Los fiscales regionales deberán tener a lo menos cinco años de título de abogado, haber cumplido 35 años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio; durarán ocho años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser designados como fiscales regionales por el período siguiente en otra Región, lo que no obsta a que puedan ser nombrados en otro cargo del Ministerio Público.”

Indicación N° 55 de CC Logan para sustituir, en el artículo 9 inciso 3, la frase: “Consejo Superior del Ministerio Público” por la frase “el o la Fiscal Nacional de una propuesta en cuaterna paritaria elaborada por el Consejo General del Ministerio Público.”

Indicación N° 56 de CC Logan para sustituir, en el artículo 9 inciso 4, la frase: “Consejo Superior del Ministerio Público” por la frase “Consejo Técnico de Evaluación de Antecedentes”

Indicación N° 57 de CC Logan para incorporar, en el artículo 9 inciso 5°, la frase “durante los dos años anteriores” luego de la frase “no haber sido fiscal regional o supraterritorial”.

Indicación N° 58 de CC Logan para sustituir, en el artículo 9 inciso 5°, la frase “para cada” por la frase “para la respectiva”.

Indicación N° 60 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir, el artículo 10, y remplazarlo por el siguiente:

“Artículo 10.- Dirección Superior. El Fiscal Nacional del Ministerio Público tendrá la dirección superior del organismo. Será designado por el Presidente de la República con acuerdo de la mayoría de la Cámara de Representantes del Poder Legislativo a propuesta de un organismo denominado Consejo Técnico de Evaluación de Antecedentes, el que incorporará en dicha propuesta a la misma cantidad de mujeres y hombres. El o la Fiscal Nacional deberá tener a lo menos diez años de título de abogado, ser o haber sido fiscal adjunto del Ministerio Público, haber cumplido 35 años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio; durará seis años en el ejercicio de sus funciones y no podrá ser designado para el período siguiente.

El Fiscal Nacional tendrá como funciones:

- a) Dirigir el Ministerio Público e impartir instrucciones generales.
- b) Designar y remover a un Director Ejecutivo del organismo, en un concurso público y transparente;
- c) Seleccionar a los fiscales del Ministerio Público y definir su promoción, traslados y cese de funciones, como de los funcionarios de esta institución, conforme a los principios de igualdad y no discriminación;
- d) Velar por la adecuada conducta de los fiscales y funcionarios y su corrección conforme al régimen disciplinario. Los procesos disciplinarios estarán a cargo de una fiscalía independiente, que garantizará el debido proceso, establecida en la forma que determine la ley;
- e) Supervigilar la formación, capacitación, habilitación y continuo perfeccionamiento de los fiscales y funcionarios del Ministerio Público;
- f) Determinar la gestión de personas y administrar los recursos financieros, tecnológicos y materiales del Ministerio Público.
- g) Estudiar y proponer a las autoridades que correspondan la creación o supresión de fiscalías, con el fin de cumplir con las funciones del Ministerio Público en el país. Existirá a lo menos una fiscalía en cada comuna del país.
- h) Ejercer la supervigilancia de la Escuela de formación de fiscales y funcionarios del Ministerio Público, y designar a los fiscales que ejercerán la Dirección y funciones académicas temporales en dicha Escuela

Existirá un Consejo Técnico de Evaluación de Antecedentes, el que será funcionalmente autónomo sin que las autoridades institucionales puedan tener injerencia en sus decisiones. Este Consejo estará compuesto por diez miembros, elegidos de forma equitativa y paritaria por votación directa de los fiscales y de los funcionarios del Ministerio Público.

Los integrantes de ese Consejo Técnico deberán contar con un título profesional, podrán o no provenir desde el interior de la institución y tendrán los mismos derechos y obligaciones que los miembros del Consejo encargado del nombramiento de los jueces y funcionarios del Sistema Nacional de Justicia.

El Consejo Técnico de Evaluación de Antecedentes se encargará del análisis curricular y de idoneidad de todos los candidatos y candidatas a Fiscal Nacional, fiscal regional, fiscal supraterritorial especializado y funcionarios de cargos directivos, procediendo a conformar las respectivas listas con las y los postulantes que se encuentran aptos y aptas para asumir los respectivos cargos vacantes, debiendo siempre en el proceso de selección contemplar espacios para la participación y opinión ciudadana.

El Consejo Técnico tomará los acuerdos por mayoría y sus integrantes del durarán seis años en el cargo, no pudiendo ser reelectos y tendrán las mismas restricciones en el desempeño de otras funciones que tienen los miembros del Consejo encargado de los nombramientos en el Sistema Nacional de Justicia

Indicación N° 61 CC Harboe para sustituir el artículo 10 por uno del siguiente tenor:

“Artículo 10.- El Fiscal Nacional es la autoridad superior del Ministerio Público, de quien dependerán jerárquica y directamente los fiscales regionales y los fiscales adjuntos. El Fiscal Nacional tendrá la superintendencia directiva, correccional y económica del Ministerio Público, en conformidad a la ley orgánica constitucional respectiva.”

Indicación N° 62 de CC Logan para sustituir, en el artículo 10 inciso 1°, la frase “Consejo Superior” por “Fiscal Nacional”.

Indicación N° 63 de CC Logan para agregar, en el artículo 10 inciso 1°, la frase “será designado por el Presidente de la República con acuerdo de la mayoría de la Cámara de Representantes del Poder Legislativo a propuesta de un organismo denominado Consejo Técnico de Evaluación de Antecedentes, el que incorporará en dicha propuesta a la misma cantidad de mujeres y hombres. El o la Fiscal Nacional deberá tener a lo menos 10 años el título de abogado, ser o haber sido fiscal del Ministerio Público, haber cumplido 35 años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio; durará seis años en el ejercicio de sus funciones y no podrá ser designado para el período siguiente. Los nominados deberán comparecer ante la Cámara de Representantes donde expondrán en audiencia pública su Plan Estratégico Nacional, compromiso ético, relación interinstitucional y la propuesta de política de persecución penal”.

Indicación N° 64 de CC Logan para sustituir, en el artículo 10 inciso 2°, la frase “Consejo Superior” por “Fiscal Nacional”.

Indicación N° 65 de CC Logan para eliminar, en el artículo 10 inciso 2° letra a) la frase “y especiales al efecto.”.

Indicación N° 66 de CC Logan para incorporar, en el artículo 10 inciso 2° letra b) la frase “ y remover de sus funciones” luego de la palabra “transparente;”.

Indicación N° 67 de CC Logan para sustituir, en el artículo 10 inciso 2° del artículo 10 la letra c), la frase “de entre sus miembros a un Presidente y Vicepresidente;” por la frase: “Designar a los fiscales regionales y supraterritoriales de la propuesta en cuaterna paritaria elaborada por el Consejo General.

Indicación N° 68 de CC Logan para incorporar, en el artículo 10 inciso 2° letra d) la frase “y definir” luego de la frase “Ministerio Público;”.

Indicación N° 69 de CC Logan para incorporar, en el artículo 10 inciso 2° letra d) del artículo 10, la frase “en la forma que determine la ley” luego de la frase “Ministerio Público;”.

Indicación N° 70 de CC Logan para sustituir, en el artículo 10 inciso 2° letra h) la frase “a las autoridades que correspondan” por la frase “al Consejo General del Ministerio Público”.

Indicación N° 71 de CC Logan para incorporar en el artículo 10 al inciso 2° letra h) la frase final “Existirá a lo menos una fiscalía en cada comuna.”.

Indicación N° 72 de CC Logan para incorporar, en el artículo 10 al inciso 2° letra i), la frase final “y designar, con acuerdo del Consejo General del Ministerio Público, a los fiscales que ejercerán la Dirección y funciones académicas en dicha Escuela”

Indicación N° 73 de CC Logan para sustituir, en el artículo 10 inciso 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8° por los siguientes nuevos incisos 3°, 4° y 5°, del siguiente tenor:

“Existirá un Consejo Técnico de Evaluación de Antecedentes, el que será funcionalmente autónomo sin que las autoridades institucionales puedan tener injerencia en sus decisiones. Este Consejo estará compuesto por once miembros cuyos requisitos y forma de selección estará establecidos por la ley.

El Consejo Técnico de Evaluación de Antecedentes se encargará del análisis curricular y de idoneidad de todos los candidatos y candidatas a Fiscal Nacional, fiscal regional, fiscal supraterritorial especializado y funcionarios de cargos directivos, procediendo a conformar las respectivas listas con las y los postulantes que se encuentran aptos y aptas para asumir los respectivos cargos vacantes, debiendo siempre en el proceso de selección contemplar espacios para la participación y opinión ciudadana.

El Consejo Técnico tomará los acuerdos por mayoría y sus integrantes durarán seis años en el cargo, no pudiendo ser reelectos y tendrán las mismas restricciones en el desempeño de otras funciones que tienen los miembros del Consejo encargado de los nombramientos en el Sistema Nacional de Justicia.”

Indicación N° 75 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 10 A, por uno nuevo del siguiente tenor:

“Artículo 10 A. La dirección del Ministerio Público recaerá en el Fiscal Nacional, quien será designado por el Presidente de la República con acuerdo de la mayoría de la Cámara de Representantes del Poder Legislativo a propuesta de un organismo denominado Consejo Técnico de Evaluación de Antecedentes, el que incorporará en dicha propuesta a la misma cantidad de mujeres y hombres. El o la Fiscal Nacional deberá tener a lo menos diez años de título de abogado, ser o haber sido fiscal adjunto del Ministerio Público, haber cumplido 35 años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio; durará seis años en el ejercicio de sus funciones y no podrá ser designado para el período siguiente.

Existirá un Consejo Técnico de Evaluación de Antecedentes, el que será funcionalmente autónomo sin que las autoridades institucionales puedan tener injerencia en sus decisiones. Este Consejo estará compuesto por diez miembros, elegidos de forma equitativa y paritaria por votación directa de los fiscales y de los funcionarios del Ministerio Público.

Los integrantes de ese Consejo Técnico deberán contar con un título profesional, podrán o no provenir desde el interior de la institución y tendrán los mismos derechos y obligaciones que los miembros del Consejo encargado del nombramiento de los jueces y funcionarios del Sistema Nacional de Justicia.

El Consejo Técnico de Evaluación de Antecedentes se encargará del análisis curricular y de idoneidad de todos los candidatos y candidatas a Fiscal Nacional, fiscal regional, fiscal supraterritorial especializado y funcionarios de cargos directivos, procediendo a conformar las respectivas listas con las y los postulantes que se encuentran aptos y aptas para asumir los respectivos cargos vacantes, debiendo siempre en el proceso de selección contemplar espacios para la participación y opinión ciudadana.

El Consejo Técnico tomará los acuerdos por mayoría y sus integrantes durarán seis años en el cargo, no pudiendo ser reelectos y tendrán las mismas restricciones en el desempeño de otras funciones que tienen los miembros del Consejo encargado de los nombramientos en el Sistema Nacional de Justicia”

Indicación N° 76 de CC Logan para sustituir el artículo 10 A, por uno nuevo del siguiente tenor:

“Artículo 10 A. La dirección del Ministerio Público recaerá en el Fiscal Nacional, quien será designado por el Presidente de la República con acuerdo de la mayoría de la Cámara de Representantes del Poder Legislativo a propuesta de un organismo denominado Consejo Técnico de Evaluación de Antecedentes, el que incorporará en dicha propuesta a la misma cantidad de mujeres y hombres. El o la Fiscal Nacional

deberá tener a lo menos diez años de título de abogado, ser o haber sido fiscal adjunto del Ministerio Público, haber cumplido 35 años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio; durará seis años en el ejercicio de sus funciones y no podrá ser designado para el período siguiente.

Existirá un Consejo Técnico de Evaluación de Antecedentes, el que será funcionalmente autónomo sin que las autoridades institucionales puedan tener injerencia en sus decisiones. Este Consejo estará compuesto por once miembros cuyos requisitos y forma de selección estará establecidos por la ley.

El Consejo Técnico de Evaluación de Antecedentes se encargará del análisis curricular y de idoneidad de todos los candidatos y candidatas a Fiscal Nacional, fiscal regional, fiscal supraterritorial especializado y funcionarios de cargos directivos, procediendo a conformar las respectivas listas con las y los postulantes que se encuentran aptos y aptas para asumir los respectivos cargos vacantes, debiendo siempre en el proceso de selección contemplar espacios para la participación y opinión ciudadana.

El Consejo Técnico tomará los acuerdos por mayoría y sus integrantes durarán seis años en el cargo, no pudiendo ser reelectos y tendrán las mismas restricciones en el desempeño de otras funciones que tienen los miembros del Consejo encargado de los nombramientos en el Sistema Nacional de Justicia.”

Indicación N° 77 de CC Harboe para sustituir el artículo 10 A por uno del siguiente tenor:

“Artículo 10A.- El Fiscal Nacional será designado por el Presidente de la República, a propuesta en quina de la Corte Suprema y con acuerdo del Senado adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto. Si el Senado no aprobare la proposición del Presidente de la República, la Corte Suprema deberá completar la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento.

El Fiscal Nacional deberá tener a lo menos diez años de título de abogado, haber cumplido cuarenta años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio; durará ocho años en el ejercicio de sus funciones y no podrá ser designado para el período siguiente.

El Fiscal Nacional cesará en sus funciones al cumplir 75 años de edad.”

Indicación N° 78 de CC Harboe para suprimir el artículo 11.

Indicación N° 80 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 11 por el siguiente:

“Artículo 11.- De la responsabilidad administrativa. El Estado será responsable patrimonialmente por los daños causados por un error injustificado o por la arbitrariedad de los fiscales, en conformidad a la ley, lo que se ventilará en tribunales administrativos en un procedimiento de lato conocimiento.

La ley definirá el estatuto de responsabilidad administrativa de fiscales y funcionarios, estableciendo un catálogo de conductas prohibidas, determinando sanciones proporcionadas al tipo de infracción cometida, las que deberán ser acreditadas conforme un procedimiento administrativo legalmente tramitado con pleno respeto a las garantías del debido proceso.

Para aplicar la sanción de remoción se requerirá del voto favorable de los dos tercios de los miembros del Consejo. La decisión de remoción de los fiscales será apelable ante la Corte Constitucional quien para ratificarla deberá contar con el voto favorable de dos tercios de sus miembros en ejercicio.

El Consejo deberá implementar una Fiscalía de control y asuntos internos, de carácter supra territorial, la que deberá velar por la transparencia, imparcialidad e independencia en el ejercicio de las funciones de los fiscales y estará a cargo de las investigaciones administrativas respecto de los fiscales y funcionarios del Ministerio

Público, y propondrá al Consejo, previa formulación de cargos, las sanciones que estime de conformidad a la ley.”

Indicación N° 81 de CC Logan para eliminar, en el artículo 11 inciso 1°, la frase “Todo sin perjuicio de la responsabilidad civil de los fiscales que con sus decisiones hubieran causado responsabilidad patrimonial del Estado.”.

Indicación N° 82 de CC Logan para incorporar, en el artículo 11 inciso 2°, la frase “General del Ministerio Público. Remoción que será apelable ante la Corte Constitucional” luego de la palabra: “Consejo”.

Indicación N° 83 de CC Logan para incorporar, en el artículo 11 inciso 2°, la frase final. “La decisión de remoción de los fiscales será apelable ante la Corte Constitucional quien para ratificarla deberá contar con el voto favorable de dos tercios de sus miembros en ejercicio”.

Indicación N° 84 de CC Logan para eliminar al inciso 3° del artículo 11, la frase “y penales”.

Indicación N° 86 de CC Harboe para suprimir en el artículo 12 la frase “Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior,”

Indicación N° 87 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para agregar en el artículo 12 un inciso 2° del siguiente tenor “Las investigaciones penales de fiscales y funcionarios del Ministerio Público estarán a cargo de una fiscalía regional o supraterritorial distinta de aquella de la que el fiscal o funcionario se desempeña”.

Indicación N° 88 de CC Logan para incorporar, en el artículo 12 un inciso 2°, del siguiente tenor “Las investigaciones penales de fiscales y funcionarios del Ministerio Público estarán a cargo de una fiscalía regional o supraterritorial distinta de aquella de la que el fiscal o funcionario se desempeña”.

Indicación N° 90 de CC Logan para sustituir, el artículo 13 por otro del siguiente tenor:

“Artículo 13.- Del Consejo General del Ministerio Público. Existirá un Consejo General del Ministerio Público, presidido por el Fiscal Nacional y compuesto además por los fiscales regionales y los fiscales supra territoriales especializados. Este Consejo General, en el mes de diciembre de cada año, y habiendo previamente escuchado a los representantes de las organizaciones civiles que lo soliciten, deberá fijar los objetivos anuales en materia de persecución penal y los criterios de actuación para el cumplimiento de dichos objetivos, pudiendo establecer orientaciones diferenciadas en las diversas unidades administrativas atendido la naturaleza de los distintos delitos, debiendo siempre velar por la transparencia y objetividad, resguardando los intereses de la sociedad y el respeto de los derechos humanos. Las Asociaciones de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público tendrán siempre derecho a ser oídos por el Consejo General.”

Indicación N° 91 CC Harboe para sustituir en el artículo 13 la frase “Presidente del Consejo Superior” por “Fiscal Nacional”.

Indicación N° 93 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 14 por el siguiente:

“Artículo 14.- De los fiscales del Ministerio Público. Existirán fiscales adjuntos al Ministerio Público a cargo de ejercer las atribuciones que la Constitución y las leyes le entregan a la institución, quienes serán designados por el Consejo Superior del

Ministerio Público, a propuesta en terna del fiscal regional o supra territorial especializado respectivo, la que deberá formarse por concurso público de antecedentes y oposición.

Los postulantes a fiscal adjunto deberán poseer las calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio, tener el título de abogado y haber aprobado satisfactoriamente un proceso de formación especializado impartido por la Escuela de formación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, institución cuyas atribuciones y organización serán establecidas por ley.

Existirán fiscales asistentes que se encargaran de apoyar la labor de los fiscales adjuntos, quienes además los subrogaran. Los requisitos de nombramiento y funciones de los fiscales asistentes serán determinadas por ley.

Los fiscales adjuntos, fiscales asistentes y funcionarios tendrán un sistema de promoción y ascenso que garantice una carrera funcionaria que fomente la excelencia técnica y la acumulación de experiencia profesional. Los fiscales tendrán, inmunidad funcional e intangibilidad remuneratoria.

Los fiscales adjuntos, fiscales asistentes y funcionarios tendrán derecho a ejercer las libertades de expresión y de asociatividad sin mas límite que aquellos legalmente establecidos para todos los funcionarios públicos.

Cada año el Consejo Superior propondrá al Poder Legislativo la dotación de fiscales y funcionarios y el presupuesto necesario para cumplir con las funciones establecidas por esta Constitución. Al momento de discutir la ley de presupuesto y previo a resolver lo relativo al Ministerio Público, se deberá oír al Fiscal Nacional, a las asociaciones de fiscales y funcionarios y a la sociedad civil.”

Indicación N° 94 de Harboe para sustituir en el artículo 14 la frase “Consejo Superior del Ministerio Público” por “fiscal nacional”

Indicación N° 95 de CC Logan para incorporar, en el artículo 14 inciso 1°, la palabra “adjunto” antes de la frase “del Ministerio Público”

Indicación N° 96 de CC Logan para sustituir, en el artículo 14 inciso 1°, la palabra “Consejo Superior” por “Fiscal Nacional”.

Indicación N° 97 de CC Logan para incorporar, en el artículo 14 inciso 2°, la palabra “adjunto” antes de la frase “deberán poseer”.

Indicación N° 98 de CC Logan para eliminar, en el artículo 14 inciso 4° las palabras: “la misma” y “establecida para los jueces”

Indicación N° 99 de CC Logan para incorporar, en el artículo 14 un nuevo inciso 5° del siguiente tenor: “Los fiscales adjuntos, fiscales asistentes y funcionarios tendrán derecho a ejercer las libertades de expresión y de asociatividad sin más límite que aquellos legalmente establecidos para todos los funcionarios públicos.”

Indicación N° 104 de CC Logan para sustituir el artículo 16, por un nuevo artículo 16 del siguiente tenor:

“Artículo 16.- De la remoción del Fiscal Nacional, fiscales regionales y supra territoriales. El Fiscal Nacional solo podrá ser removido por la Corte Constitucional a requerimiento del Presidente de la Republica o de un tercio de los miembros en ejercicio de la Camara de Representantes, previa interpelación, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte Constitucional conocerá del asunto en pleno y en sesión especialmente convocado al efecto y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de los 4/7 de sus miembros en ejercicio. La declaración de remoción se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa que procediere en contra del consejero o fiscal removido.

Los fiscales regionales y los fiscales supra territoriales solo podrán ser removidos por la Corte Constitucional a requerimiento del Presidente de la República,

del Fiscal Nacional o de la Cámara de Representantes por la mayoría de sus miembros en ejercicio, en casos de negligencia grave o por incumplimiento grave y reiterado de deberes y obligaciones. La Corte Constitucional conocerá del asunto en pleno convocado especialmente al efecto y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de los dos tercios de sus miembros en ejercicio.”

Indicación N° 105 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir en el inciso 2° del artículo 16, la frase “la mayoría” por “los dos tercios”.

Indicación N° 107 de CC Harboe para suprimir del artículo 17 la expresión “los consejeros y”.

Indicación N° 109 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 18, por uno del siguiente tenor:

“Artículo 18.- Quienes ejerzan los cargos de Presidente del Consejo Superior del Ministerio Público, de fiscal supraterritorial, de fiscales regionales y de fiscales jefes comunales deberán rendir anualmente una cuenta pública de su gestión, en la forma determinada en la ley. En el caso de las personas del Fiscal Nacional y fiscales supraterritoriales, rendirán la cuenta pública ante la Cámara de Representantes; los y las fiscales regionales, ante la Asamblea Regional y las organizaciones sociales del territorio, convocadas para tal al efecto y los y las fiscales jefes comunales ante el Concejo Municipal respectivo y organizaciones comunitarias”.

Indicación N° 110 de CC Logan para sustituir el artículo 18 por uno del siguiente tenor:

“Artículo 18. De la rendición de cuentas. Quienes ejerzan los cargos de Fiscal Nacional, de fiscal supraterritorial, de fiscales regionales y de fiscales jefes comunales deberán rendir anualmente una cuenta pública de su gestión, en la forma determinada en la ley. El Fiscal Nacional y fiscales supraterritoriales, rendirán la cuenta pública ante la Cámara de Representantes; los y las fiscales regionales, ante la Asamblea Regional y las organizaciones sociales del territorio, convocadas para tal al efecto y los y las fiscales jefes comunales ante el Concejo Municipal respectivo y organizaciones comunitarias.

Cada año el Consejo General del Ministerio Público propondrá al Poder Legislativo la dotación de fiscales y funcionarios y el presupuesto necesario para cumplir con las funciones establecidas por esta Constitución. Al momento de discutir la ley de presupuesto y previo a resolver lo relativo al Ministerio Público, se deberá oír al Fiscal Nacional, a las asociaciones de fiscales y funcionarios y a la sociedad civil.”

Indicación N° 111 de CC Harboe para sustituir en el artículo 18 la frase “El Presidente del Consejo Superior” por “Fiscal Nacional”.

Indicación N° 114 de CC Harboe para sustituir en el artículo 19 el inciso segundo por uno del siguiente tenor “Toda persona tendrá el derecho a ser oída, con las debidas garantías, dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, por un tribunal independiente e imparcial, previamente establecido por ley, para la resolución de sus conflictos jurídicos. En consecuencia, nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que se hallare establecido por la ley con anterioridad a la perpetración del hecho fundante de la pretensión ejercida.”

Indicación N° 115 de CC Harboe para sustituir en el artículo 19 el inciso tercero por uno del siguiente tenor “Toda sentencia emanada de un tribunal deberá fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Los actos del proceso serán públicos, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley para proteger

la intimidad, la privacidad, el honor o la seguridad de cualquier persona que debiere tomar parte en el juicio, para evitar la divulgación de un secreto protegido por la ley o para velar por la moral, el orden público o la seguridad nacional en una sociedad democrática. Cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia, los tribunales podrán decretar la reserva de determinados actos del proceso en la medida que ello sea estrictamente necesario.”

Indicación N° 118 del CC Harboe para sustituir el artículo 21 por uno del siguiente tenor: “Artículo 21.-Derecho a la defensa jurídica. Toda persona tendrá derecho a la defensa jurídica en la forma que la ley señale y a comunicarse libre y privadamente con el abogado de su elección, sin que ninguna autoridad o individuo pueda impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos.”

La indicación N° 119 del CC Harboe para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo XXX. Derecho a ser oído y a la prueba. De conformidad con las normas legales de procedimiento aplicables, toda persona tendrá derecho a formular las pretensiones, excepciones, alegaciones y defensas que estimare oportunas, a rendir las pruebas relevantes para acreditar sus presentaciones y a ejercer la impugnación de la sentencia en la forma y oportunidades establecidas en la ley.” Del mismo modo, toda persona tendrá derecho para conocer oportunamente las pretensiones, excepciones y pruebas hechas valer en su contra, así como para examinarlas, contradecirlas y objetarlas, debiendo contar con un tiempo adecuado para la preparación de su defensa.

En consecuencia, toda persona contará con el derecho interrogar a quienes comparezcan a prestar testimonio y de obtener la comparecencia de partes, testigos, peritos u otras personas que puedan aportar antecedentes respecto de los hechos, de conformidad con las normas legales aplicables.”

Indicación N° 120 del CC Harboe para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor: “Artículo XXX. Derecho a intérprete o traductor. Las personas que no comprendan o hablen el idioma empleado en el tribunal tendrán el derecho a ser asistidas por un traductor o intérprete para intervenir en el proceso, el cual será gratuito si carecieren de los medios suficientes para pagarlos.”

Indicación N° 121 Del CC Harboe para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor: “Artículo XXX. Derecho a una resolución fundada y a la impugnación. Toda resolución emanada de un tribunal deberá ser fundada, con excepción de aquellas que se pronunciaren sobre cuestiones de mero trámite. La fundamentación expresará sucintamente, pero con precisión, las razones de hecho y de derecho que justificaren las decisiones adoptadas. Las sentencias que resuelvan total o parcialmente el conflicto jurídico sometido a la decisión del tribunal, así como las resoluciones que pongan término al procedimiento o hagan imposible su continuación serán susceptibles de ser impugnadas mediante los recursos establecidos en la ley para ser revisadas por un tribunal distinto, sin perjuicio de las excepciones legales establecidas sobre la base de criterios de razonabilidad y proporcionalidad para la persecución de fines legítimos, para velar por la uniformidad de la jurisprudencia o para la promoción y fortalecimiento de otros derechos y valores.”

Indicación N° 122 Del CC Harboe para agregar un nuevo epígrafe: “Garantías del Proceso Penal”.

Indicación N° 125 de CC Harboe para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo XXX. Presunción de inocencia y derechos del imputado. Toda persona acusada de delito penal tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley, en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Por tanto, ninguna persona será considerada culpable de un delito penal ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme.

La información sobre sanciones penales o administrativas sólo podrá ser tratada por un organismo público, dentro de la órbita de sus competencias. Esta información sólo podrá ser comunicada a otro organismo público que la requiera, dentro de la órbita de sus competencias.”

Indicación N° 126 del CC Harboe para agregar nuevo artículo del siguiente tenor: “Artículo XXX. Tecnología en la administración de justicia. Una ley establecerá las condiciones de aplicación de tecnologías de automatización en la administración de justicia. En todo caso, ninguna pena que afecte derechos fundamentales podrá ser impuesta a través de decisiones adoptadas exclusivamente a través de sistemas de decisiones automatizadas.”

Indicación N° 127 del CC Harboe para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor: “Artículo XXX. Protección de datos personales. La información sobre sanciones penales o administrativas sólo podrá ser tratada por un organismo público, dentro de la órbita de sus competencias. Esta información sólo podrá ser comunicada a otro organismo público que la requiera, dentro de la órbita de sus competencias.”

Indicación N° 128 del CC Harboe para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor: “Artículo XXX. Derecho a guardar silencio. Toda persona imputada por un delito penal tiene derecho a guardar silencio. El ejercicio de este derecho no le ocasionará ninguna consecuencia legal adversa; sin embargo, si renuncia a él, todo lo que manifieste podrá ser usado en su contra.”

Indicación N° 129 del CC Harboe para agregar un artículo del siguiente tenor: “Artículo XXX. Derecho a la no autoincriminación. Toda persona imputada por un delito penal tendrá el derecho a no ser obligada a declarar contra sí misma, ni a declararse culpable, así como tendrá el derecho a negarse a responder aquellas preguntas cuya respuesta pudiere acarrearle un peligro de persecución penal a sí misma o a su cónyuge, conviviente, ascendientes, descendientes, pupilos, guardadores, adoptantes, adoptados, parientes colaterales hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad y demás personas que, según los casos y circunstancias, señale la ley.”

Indicación N° 130 del CC Harboe para agregar un artículo del siguiente tenor: “Artículo XXX. Métodos prohibidos de interrogación. Queda absolutamente prohibido todo método de investigación o de interrogación que menoscabe o coarte la libertad del imputado para declarar. En consecuencia, no podrá ser sometido a ninguna clase de coacción, amenaza o promesa. Sólo se admitirá la promesa de una ventaja que estuviere expresamente prevista en la ley penal o procesal penal. Se prohíbe, en consecuencia, todo método que afecte la memoria o la capacidad de comprensión y de dirección de los actos del imputado, en especial cualquier forma de maltrato, amenaza, violencia corporal o psíquica, tortura, engaño, o la administración de psicofármacos y la hipnosis. Estas prohibiciones rigen aun para el evento de que el imputado consintiere en la utilización de alguno de los métodos vedados.”

Indicación N° 131 del CC Harboe para agregar un artículo del siguiente tenor: “Artículo XXX. Derecho a conocer la acusación. Toda persona perseguida penalmente tendrá derecho a ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la acusación formulada en su contra.”

Indicación N° 132 del CC Harboe para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor: “Artículo XXX. Derecho a la defensa penal. Toda persona imputada de delito penal tiene el derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley. Todo imputado tendrá derecho a ser informado, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre un defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo. El imputado tendrá derecho a ser defendido por un letrado desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra. Las facultades, derechos y garantías que la Constitución Política de la República, el Código Procesal Penal y otras leyes reconocen al imputado, podrán hacerse valer por la persona a quien se atribuyere participación en un hecho punible desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra y hasta la completa ejecución de la sentencia. Para este efecto, se entenderá por primera actuación del procedimiento cualquiera diligencia o gestión, sea de investigación, de carácter cautelar o de otra especie, que se realizare por o ante un tribunal con competencia en lo criminal, el ministerio público o la policía, en la que se atribuyere a una persona responsabilidad en un hecho punible.”

Indicación N° 133 del CC Harboe para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor: “Artículo XXX. Derecho al juicio previo. Ninguna persona podrá ser condenada o penada, ni sometida a una medida de seguridad por hechos que revisten el carácter de delitos penales, sino en virtud de una sentencia fundada, dictada por un tribunal independiente e imparcial. Toda persona tendrá derecho a hallarse presente durante el juicio penal, sin perjuicio de las normas legales que regulen el orden, el decoro y la seguridad de las personas que participen del procedimiento penal.”

Indicación N° 134 del CC Harboe para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor: “Artículo XXX. Legalidad de las medidas privativas o restrictivas de libertad. No se podrá citar, arrestar, detener, someter a prisión preventiva ni aplicar cualquier otra forma de privación o restricción de libertad a persona alguna, sino en los casos y en las formas señaladas por la Constitución y las leyes. Las disposiciones legales que autorizan la restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o del ejercicio de alguna de sus facultades serán interpretadas restrictivamente y no se podrán aplicar por analogía.”

Indicación N° 135 del CC Harboe para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor: “Artículo XXX. Principio de legalidad de las penas y de tipicidad de los delitos penales. Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella.”

Indicación N° 136 del CC Harboe para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor: “Artículo XXX. Jurisdiccionalidad. Nadie puede ser arrestado, detenido o privado de libertad sino por orden de un tribunal y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante, con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes. Con todo, toda persona tendrá derecho a que se le exprese específica y claramente el motivo de su privación de libertad.”

Indicación N° 137 del CC Harboe para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor: “Artículo XXX. Privación en lugares destinados al efecto. Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva, preso o privado de libertad, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto. Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso, sin dejar constancia de la orden judicial correspondiente en un registro que será público.”

Indicación N° 138 del CC Harboe para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor: “Artículo XXX. Derecho a comunicar la privación de libertad. Ninguna incomunicación puede impedir que el funcionario encargado del lugar de privación de libertad visite al arrestado o detenido, procesado o preso, que se encuentre en tal. Este funcionario está obligado, siempre que el arrestado, detenido o privado de libertad lo requiera, a transmitir al juez competente la copia de la orden de detención, o a reclamar para que se le dé dicha copia, o a dar él mismo un certificado de hallarse detenido aquel individuo, si al tiempo de su detención se hubiere omitido este requisito. La persona privada de libertad tendrá derecho a que el encargado de la guardia del recinto al cual fuere conducido informe, en su presencia, al familiar o a la persona que le indicare, que ha sido detenido, preso o privado de libertad, el motivo de la detención o prisión y el lugar donde se encontrare. La persona imputada tendrá derecho a entrevistarse privadamente con su abogado de acuerdo al régimen del establecimiento de detención o privación de libertad, el que sólo contemplará las restricciones necesarias para el mantenimiento del orden y la seguridad del recinto.”

Indicación N° 139 del CC Harboe para agregar un nuevo artículo:

“Artículo XXX. Amparo. Toda persona privada de libertad tendrá derecho a ser conducida sin demora ante un juez de garantía o ante el tribunal que señale la ley, con el objeto de que examine la legalidad de su privación de libertad y, en todo caso, para que examine las condiciones en que se encontrare, constituyéndose, si fuere necesario, en el lugar en que ella estuviere. El juez podrá ordenar la libertad del afectado o adoptar las medidas que fueren procedentes.

El abogado de la persona privada de libertad, sus parientes o cualquier persona en su nombre podrán siempre ocurrir ante el juez que conociere del caso o aquél del lugar donde aquélla se encontrare, para solicitar que ordene que sea conducida a su presencia y se ejerzan las facultades señaladas.”

Indicación N° 140 del CC Harboe para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor: “Artículo XXX. Derecho al recurso contra la sentencia condenatoria. Toda persona condenada por un delito penal, incluyendo aquella cuya condena se hubiere impuesto en virtud de un recurso interpuesto en contra de una decisión absolutoria, tendrá el derecho para impugnar la sentencia condenatoria y la pena que se le haya impuesto ante un tribunal distinto mediante un recurso ordinario, accesible y eficaz que permita una revisión integral de las cuestiones de hecho y de derecho. El legislador podrá establecer recursos distintos de la apelación para dichos efectos.”

Indicación N° 141 del CC Harboe para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor: “Artículo XXX. Derecho a una única persecución. La persona condenada, absuelta o sobreseída definitivamente por sentencia ejecutoriada, no podrá ser sometida a un nuevo procedimiento, investigación o persecución penal por el mismo hecho.”

Indicación N° 142 del CC Harboe para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor: “Artículo XXX. Derecho a la indemnización por error judicial. Toda persona que hubiere sido condenada en cualquier instancia de un proceso penal por una sentencia errónea o arbitraria y luego hubiere sido absuelta o sobreseída tendrá derecho a obtener reparación por los perjuicios efectivamente sufridos. Asimismo, procede este derecho respecto de toda persona que haya sido objeto de una privación de libertad ilegal o arbitraria, así como de aquellas personas sometidas a prisión preventiva y que no fueren condenadas por sentencia firme en dicho proceso, en la medida que no hubieren contribuido a su uso con su comportamiento indebido o negligente.”

Indicación N° 151 de CC Harboe para suprimir el artículo 25.

Indicación N° 154 de CC Harboe para suprimir el artículo 27.

Indicación N° 160 de CC Harboe para suprimir el artículo 28.

Indicación N° 162 de CC Harboe para suprimir el artículo 28 A.

Indicación N° 180 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 34 sobre Defensoría del Pueblo, por el siguiente:

“Artículo 34.- Habrá una Defensoría de las Personas, con personalidad jurídica y patrimonio propio, para el control de la Administración del Estado, resolviendo quejas ciudadanas por medio de decisiones de persuasión. Le corresponderá representar los intereses de los ciudadanos ante cualquier organismo de la Administración del Estado. Para ello, a solicitud del usuario, podrá intervenir ante cualquier repartición pública a fin de solicitar cuenta respecto de todo trámite cuya demora ocasione lesión en los derechos de los usuarios.

Las competencias y atribuciones señaladas podrán ser ejercidas por la Defensoría respecto de las personas, naturales o jurídicas, que ejerzan actividades de servicio público o de utilidad pública.

Para un mejor desempeño de la Defensoría, esta tendrá oficinas regionales para el control de la Administración central que esté desconcentrada o descentralizada, y, de las regionales o locales que correspondan a su campo de competencia territorial.

La Defensoría podrá inspeccionar la actividad de los órganos de la Administración del Estado. Asimismo, podrá formular sugerencias, recomendaciones o informes a las respectivas autoridades, los que se orientarán a la adopción de medidas que corrijan o eviten acciones u omisiones que afecten negativamente la regularidad, continuidad e igualdad en la satisfacción de las necesidades públicas a su cargo.

Cada año la Defensoría realizará un informe de su gestión, el que deberá contener su actividad, con especial atención en relación con su quehacer con la Administración del Estado para una mejora continua del mismo.

La Defensoría podrá ejercer las acciones y recursos constitucionales que establezca la ley, optando siempre por funciones de *amicus curiae* a las de litigante a través de opiniones consultivas”.

Indicación N° 183 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir los artículos 35, 36, 36 A, 36 B, 37 y 37 A, 38, 38 A, 39, 39 A, 39 B, 40, sobre Defensoría del Pueblo, por el siguiente:

“Artículo 35.- La organización y atribuciones de la Defensoría serán reguladas por ley de más alto rango que la Constitución establezca para ello y, a falta de regulación expresa sobre ello, por una ley que sea aprobada por la mayoría absoluta de los congresistas en las respectivas cámaras. La ley tendrá en cuenta especialmente que la naturaleza de la Defensoría es ser una magistratura de opinión y persuasión y que esté ajena a actividades político-partidistas o de independientes que ejerzan cargos políticos, además de las otras particularidades indicadas en los artículos precedentes.

La Defensoría será presidida por el Defensor de las Personas, quien será elegido por los dos tercios de los senadores en ejercicio a propuesta de una quina formada por el Consejo de la Judicatura u órgano del Poder Judicial equivalente, y, a falta de este, por la Corte Suprema. Los postulantes deberán tener el título de abogado y deberán haber sobresalido en el ámbito académico o profesional por al menos 10 años.

El Defensor de las Personas durará 6 años en el cargo, no podrá ser reelegido, salvo quien haya ejercido en el cargo lo hiciera por menos de dos años. Cesará en el cargo por acuerdo de la mayoría absoluta del Senado a solicitud de una cuarta parte de la Cámara de Diputados, para el caso de notable abandono de deberes.

Para un mejor desempeño de la Defensoría, esta tendrá oficinas regionales para el control de la Administración central que esté desconcentrada o descentralizada, y, de las regionales o locales que correspondan a su campo de competencia territorial.

La organización interna de la Defensoría será la que indique la ley de mayor rango posible para su especial protección”.

Indicación N° 196 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir los artículos 41, 41 A, 42, 42 A, 43, 44, 45, 45 A, 46, 47 y 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55, por el siguiente:

“Artículo 41.- Habrá un Consejo Económico, Social y Medioambiental, de carácter técnico, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que, emitirá, a requerimiento del Gobierno, su dictamen sobre iniciativas de ley, normas reglamentarias, ordenanzas y decretos, como, asimismo, en la planificación y desarrollo de proyectos que puedan afectar el medio ambiente. Su enfoque deberá tener en vista la protección del medioambiente, como de los factores positivos en lo económico y social de la región y el país.

Para estos efectos, el Consejo podrá designar a cualquiera de sus miembros para que exponga ante el Congreso los dictámenes en relación con su ámbito de competencia.

El Consejo Económico, Social y Medioambiental podrá ser solicitado por vía de petición en las condiciones fijadas por una ley. Tras el examen de la petición, dará a conocer al Gobierno y al Congreso su respuesta a la misma.

El Consejo Económico, Social y Medioambiental podrá ser consultado por el Gobierno sobre cualquier problema de carácter económico, social o medioambiental. Asimismo, lo podrá ser a petición de un cuarto de las respectivas cámaras del Congreso.

Una ley determinará la composición, atribuciones, competencias y procedimientos, como de sus normas de funcionamiento del Consejo Económico, Social y Medioambiental”.

Indicación N° 210 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir los artículos sobre Agencia Nacional del Agua, 56 y 56 A, en el siguiente tenor:

“Artículo 56.- La Autoridad Nacional del Agua es un órgano autónomo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, y cuya principal tarea será la administración de los recursos hídricos. Deberá considerar el aseguramiento del uso sostenible del agua y sus ecosistemas asociados, la seguridad hídrica, todo en beneficio de las actuales y futuras generaciones.

Para ello, deberá implementar la Política Nacional de los Recursos Hídricos que establezca la autoridad respectiva, la que deberá considerar, entre otros factores, pero de relevancia, al cambio climático, bajo un enfoque de cuenca y con un modelo de planificación local. En relación con esto último, deberá funcionar con oficinas territoriales encargadas de la fiscalización y planificación local.

Asimismo, será la encargada de elaborar un Sistema Nacional Unificado de Información Hídrica, de acceso público, mediante la recopilación y centralización de todos los datos que manejen otros organismos públicos y privados; sin perjuicio de medir y estudiar de manera independiente los recursos hídricos de todo el país”.

Indicación N° 213 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 57, en el siguiente tenor: “Artículo 57.- La Autoridad Nacional del Agua será dirigida por un Consejo, integrado por ocho miembros, los cuáles serán nombrados por el Presidente de la República, previa aprobación del Senado, por períodos no coincidentes de seis años. Para ser miembro del referido Consejo, se deberá demostrar expertiz y conocimiento sobre administración de recursos hídricos”.

Indicación N° 216 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para suprimir el artículo 59.

Indicación N° 221 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir los artículos sobre Banco Central, artículos números 61, 61 A, 61 B, 61 C y 61 D, en el siguiente tenor:

“Artículo 61.- Existirá un organismo autónomo, con patrimonio y personalidad jurídica propia, de carácter técnico, denominado Banco Central, cuyo mandato será velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Tendrá a su disposición los instrumentos de política monetaria con miras a contribuir al sano desarrollo de la economía. El Banco Central de Chile tendrá la potestad exclusiva de emitir monedas y billetes, así como de formular la política monetaria. Su composición, organización, funciones y atribuciones serán determinadas en la ley, la que necesitará para su aprobación de la mayoría de los integrantes del Congreso en ejercicio.

En la fundamentación de sus decisiones, el Banco Central deberá considerar aspectos como la sostenibilidad ambiental, el empleo y el nivel de endeudamiento público y privado, pero sin poner en riesgo el desempeño de su función principal. Estos aspectos constituirán elementos de deliberación, los que se encontrarán supeditados al debido cumplimiento de sus funciones. Las decisiones del Banco Central, así como sus fundamentos y proyecciones, no estarán sujetas a control político.

El Banco Central deberá velar por la transparencia, dará cuenta pública de sus actuaciones, y deberá informar al menos trimestralmente al Presidente de la República y al Congreso respecto de las políticas y normas generales que dicte en el ejercicio de sus atribuciones.

Asimismo, asesorará al Presidente de la República, cuando éste lo solicite, en todas aquellas materias que digan relación con sus funciones”.

Indicación N° 223 de CC Harboe para sustituir el artículo 61A por uno del siguiente tenor:

“Artículo 61A.- Existirá un organismo del Estado, autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico, denominado Banco Central, cuya composición, organización, funciones y atribuciones determinará una ley orgánica constitucional.

Los candidatos propuestos para componer el Consejo del Banco Central, y de forma previa a la votación respectiva, deberán formular una exposición de su postulación al cargo respectivo en una sesión especial y pública ante la Sala del Senado.”

Indicación N° 226 de CC Harboe para suprimir el artículo 61 C.

Indicación N° 230 de CC Harboe para suprimir el artículo 62.

Indicación N° 231 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir los artículos sobre Banco Central, artículos números 62, 62 A, 62 B, 62 C, 62 D, 63, 63 A, 63 B, 64, 64 A, en el siguiente tenor:

“Artículo 62.- El Banco Central sólo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, sean públicas o privadas. De manera alguna podrá otorgar a ellas su garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas.

Sin perjuicio de lo anterior, en situaciones excepcionales y transitorias, en las que así lo requiera la preservación del normal funcionamiento de los pagos internos y externos, el Banco Central podrá comprar durante un período determinado y vender,

en el mercado secundario abierto, instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, de conformidad a lo establecido en la ley.

Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos o indirectos del Banco Central.

Con todo, en caso de guerra exterior o de peligro de ella, que calificará el Congreso Nacional, el Banco Central podrá obtener, otorgar o financiar créditos al Estado y entidades públicas o privadas.

El Banco Central no podrá adoptar ningún acuerdo que signifique de una manera directa o indirecta establecer normas o requisitos diferentes o discriminatorios en relación a personas, instituciones o entidades que realicen operaciones de la misma naturaleza”.

Indicación N° 233 de CC Gutiérrez, Hoppe, Llanquileo, Royo y Woldarsky para sustituir el actual artículo 62, por el siguiente:

“Artículo XX.- Objeto. El Banco Central debe contribuir al bienestar de la población y al desarrollo económico sustentable del país. Para ello deberá velar por la estabilidad de los precios, el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, la protección del empleo, la diversificación productiva y el cuidado del medio ambiente, en coordinación con las principales orientaciones de política económica definidas por el Gobierno.”

Indicación N° 237 de CC Harboe para suprimir el artículo 62 C.

Indicación N° 242 de CC Harboe para sustituir el artículo 63 por uno del siguiente tenor:

“Artículo 63.- El Banco Central sólo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, sean públicas o privadas. De manera alguna podrá otorgar a ellas su garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas.

Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos o indirectos del Banco Central.

Con todo, en caso de guerra exterior o de peligro de ella, que calificará el Consejo de Seguridad Nacional, el Banco Central podrá obtener, otorgar o financiar créditos al Estado y entidades públicas o privadas.

El Banco Central no podrá adoptar ningún acuerdo que signifique de una manera directa o indirecta establecer normas o requisitos diferentes o discriminatorios en relación a personas, instituciones o entidades que realicen operaciones de la misma naturaleza.”

Indicación N° 243 de CC Harboe para suprimir el artículo 63 A.

Indicación N° 247 de CC Harboe para suprimir el artículo 64

Indicación N° 253 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir los artículos sobre Banco Central, artículos números 65, 65 A, 65 B, 65 C, 65 D, 66, 67, 68, 69, 69 A, 70, 71 y 72, por el siguiente:

“Artículo 65.- La dirección y administración superior del Banco Central estarán a cargo de un Consejo compuesto por cinco consejeros, designados por el Presidente de la República previo acuerdo del Senado el que deberá ser de dos tercios de sus integrantes en ejercicio. Los miembros del Consejo durarán diez años en sus cargos, pudiendo ser designados para nuevos períodos, y se renovarán por parcialidades, a razón de uno cada dos años.

La proposición de miembros para integrar el Consejo del Banco Central de Chile que el Presidente efectúe al Senado deberá considerar a personas de reconocida trayectoria en la actividad profesional económica o financiera, de a lo menos doce años, propendiendo siempre al fortalecimiento de la autonomía del Banco. Para la debida revisión de los antecedentes de los miembros propuestos por

el Presidente de la República, el Senado citará a los candidatos así propuestos a audiencias públicas, las que se realizarán con el único fin de que la instancia se imponga de los antecedentes curriculares y experiencia de los postulantes.

El Presidente del Consejo será designado por el Presidente de la República de entre los miembros del Consejo y durará cinco años en este cargo o el tiempo menor que le reste como consejero, pudiendo ser designado para nuevos períodos.

Los Consejeros del Banco Central no serán objeto de acusación constitucional, interpelación u otro mecanismo de control parlamentario. Los miembros del Consejo cesarán en su cargo por las causales objetivas establecidas en la ley, que impliquen un grave y manifiesto incumplimiento de sus funciones. Este incumplimiento, además, debe ser la causa principal y directa de un daño significativo a la economía del país.

El Consejo del Banco Central enviará un informe de su gestión al Congreso y al Presidente de la República. Para estos efectos realizará una cuenta pública anual.”

Indicación N° 258 de CC Harboe para suprimir el artículo 65 C.

Indicación N° 267 de CC Harboe para suprimir el artículo 69.

Indicación N° 270 de CC Harboe para suprimir el artículo 70.

Indicación N° 277 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larraín para sustituir el artículo 73 por el siguiente: Artículo 73.- Un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades, fundaciones y corporaciones de derecho público, y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes; llevará la contabilidad general de la Nación, y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley respectiva.”

Indicación N° 278 de CC Harboe para sustituir el artículo 73 por uno del siguiente tenor:

“Artículo 73.- Un organismo del Estado, autónomo, con el nombre de Contraloría General de la República ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes; examinará y juzgará las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades; llevará la contabilidad general de la Nación, y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva.

La Contraloría, con motivo del control de legalidad o de las auditorías, no podrá evaluar los aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o administrativas.

El Contralor General de la República deberá tener a lo menos diez años de título de abogado, haber cumplido cuarenta años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. Será designado por el Presidente de la República con acuerdo del Senado adoptado por los tres quintos de sus miembros en ejercicio, por un período de ocho años y no podrá ser designado para el período siguiente. Con todo, al cumplir 75 años de edad cesará en el cargo. Previo a la votación del Senado, el candidato propuesto deberá formular una exposición de su postulación al cargo respectivo en una sesión especial y pública ante la Sala del Senado.”

Indicación N° 282 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larraín para suprimir el artículo 73 B.

Indicación N° 283 de CC Harboe para suprimir el artículo 73 B.

Indicación Nº 289 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 74 por el siguiente: “Artículo 74.- El Contralor General de la República deberá tener a lo menos diez años de título de abogado, y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. Será designado por el Presidente de la República que deberá elegir entre una nómina que propondrá el Consejo de Alta Dirección Pública, entre quienes hubieren conseguido las tres mejores calificaciones dentro del señalado concurso público, regulado por la ley. Con todo, al cumplir 75 años de edad cesará en el cargo. Su cargo durará un periodo de seis años y no podrá ser designado para el periodo siguiente”

Indicación Nº 290 de CC Harboe para sustituir el artículo 74 por uno del siguiente tenor: “Artículo 74.- El Contralor General de la República deberá tener a lo menos diez años de título de abogado, haber cumplido cuarenta años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. Será designado por el Presidente de la República con acuerdo del Senado adoptado por los tres quintos de sus miembros en ejercicio, por un período de ocho años y no podrá ser designado para el período siguiente. Con todo, al cumplir 75 años de edad cesará en el cargo. Previo a la votación del Senado, el candidato propuesto deberá formular una exposición de su postulación al cargo respectivo en una sesión especial y pública ante la Sala del Senado.”

Indicación Nº 291 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para agregar un nuevo artículo después del 74 que diga lo siguiente:

“Artículo XX.- Existirá un Consejo Asesor Permanente de la Contraloría General de la República, de carácter vinculante, que será el encargado de colaborar en las funciones estratégicas de la institución y demás que establezca la ley.

Estará compuesto por cinco miembros, siendo presidido por el Contralor General de la República, y cuatro consejeros de forma paritaria, que durarán seis años en sus cargos, no podrán ser designados por un nuevo período y se renovarán por parcialidades cada tres años.

Sus miembros deberán ser profesionales que demuestren conocimiento extenso en su área de experticia. Asimismo, una trayectoria profesional mínima de 10 años, y demás requisitos que establezca la ley.

Los Consejeros serán nombrados por el Presidente de la República. Para estos efectos, se formará una nómina de cinco personas que, en cada caso, elaborará la Contraloría General de la República, tras un concurso regulado en la ley.

Los miembros del Consejo cesarán en su cargo por las causales establecidas en la ley. Además, podrán ser removidos por el Contralor General en caso de grave y manifiesto incumplimiento de sus deberes por resolución fundada”

Indicación Nº 301 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir los artículos 75, 75 A y 75 B, por el siguiente:

“Artículo 75.- En el ejercicio de la función de control de legalidad, el Contralor General tomará razón de los decretos y resoluciones que, en conformidad a la ley, deben tramitarse por la Contraloría o representará la ilegalidad de que puedan adolecer; pero deberá darles curso cuando, a pesar de su representación, el Presidente de la República insista con la firma de todos sus Ministros, caso en el cual deberá enviar copia de los respectivos decretos a la Cámara de Diputados. En ningún caso dará curso a los decretos de gastos que excedan el límite señalado en la Constitución y remitirá copia íntegra de los antecedentes a la misma Cámara.

Corresponderá, asimismo, al Contralor General de la República tomar razón de los decretos con fuerza de ley, debiendo representarlos cuando ellos excedan o contravengan la ley delegatoria o sean contrarios a la Constitución.

Si la representación tuviere lugar con respecto a un decreto con fuerza de ley, a un decreto promulgatorio de una ley o de una reforma constitucional por apartarse del texto aprobado, o a un decreto o resolución por ser contrario a la Constitución, el Presidente de la República no tendrá la facultad de insistir, y en caso de no conformarse con la representación de la Contraloría deberá remitir los antecedentes al Tribunal Constitucional dentro del plazo de diez días, a fin de que éste resuelva la controversia.

En lo demás, la organización, el funcionamiento y las atribuciones de la Contraloría General de la República serán materia de una ley de quorum calificado constitucional.”

Indicación Nº 303 de CC Harboe para sustituir el artículo 75 por uno del siguiente tenor:

“Artículo 75.- En el ejercicio de la función de control de legalidad, el Contralor General tomará razón de los decretos y resoluciones que, en conformidad a la ley, deben tramitarse por la Contraloría o representará la ilegalidad de que puedan adolecer; pero deberá darles curso cuando, a pesar de su representación, el Presidente de la República insista con la firma de todos sus Ministros, caso en el cual deberá enviar copia de los respectivos decretos a la Cámara de Diputados. En ningún caso dará curso a los decretos de gastos que excedan el límite señalado en la Constitución y remitirá copia íntegra de los antecedentes a la misma Cámara.

Corresponderá, asimismo, al Contralor General de la República tomar razón de los decretos con fuerza de ley, debiendo representarlos cuando ellos excedan o contravengan la ley delegatoria o sean contrarios a la Constitución.

Si la representación tuviere lugar con respecto a un decreto con fuerza de ley, a un decreto promulgatorio de una ley o de una reforma constitucional por apartarse del texto aprobado, o a un decreto o resolución por ser contrario a la Constitución, el Presidente de la República no tendrá la facultad de insistir, y en caso de no conformarse con la representación de la Contraloría deberá remitir los antecedentes al Tribunal Constitucional dentro del plazo de diez días, a fin de que éste resuelva la controversia.

En lo demás, la organización, el funcionamiento y las atribuciones de la Contraloría General de la República serán materia de una ley orgánica constitucional.”.

Indicación Nº 316 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para agregar un nuevo artículo después del epígrafe “Servicio electoral” que contenga el siguiente texto:

“Artículo XX.- Sistema electoral. Habrá un sistema electoral público. Una ley de quórum calificado determinará su organización y funcionamiento, regulará la forma en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios dentro de Chile y en el extranjero, en todo lo no previsto por esta Constitución.

La ley de quórum calificado contemplará, además, un sistema de registro electoral, bajo la dirección del Servicio Electoral, al que se incorporarán, por el solo ministerio de la ley, quienes cumplan los requisitos establecidos por esta Constitución. Esta ley regulará la propaganda y establecerá también un sistema de financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral.

El resguardo del orden público durante los actos electorales y plebiscitarios corresponderá a las Fuerzas Armadas y Carabineros u a otras entidades del modo que indique la ley.

Solo podrá convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos expresamente previstos en esta Constitución”.

Indicación Nº 318 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 82 por el siguiente texto:

“Artículo 82.- Servicio Electoral. Un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Servicio Electoral, ejercerá la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios; del cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral; de las normas sobre los partidos políticos, y las demás funciones que señale una ley de quórum calificado. La dirección superior del Servicio Electoral corresponderá a un Consejo Directivo, el que ejercerá de forma exclusiva las atribuciones que le encomienden la Constitución y las leyes.

Dicho Consejo estará integrado por cinco consejeros designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio.

Los Consejeros durarán diez años en sus cargos, no podrán ser designados para un nuevo período y se renovarán por parcialidades cada dos años.

Los Consejeros solo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República o de un tercio de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados, por infracción grave a la Constitución o a las leyes, incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en Pleno, especialmente convocado al efecto, y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio.

La organización y atribuciones del Servicio Electoral serán establecidas por una ley de quorum calificado. Su forma de desconcentración, las plantas, remuneraciones y estatuto del personal serán establecidos por una ley”.

Indicación Nº 319 de CC Harboe para sustituir el artículo 82 por uno del siguiente tenor:

“Artículo 82.- Un organismo del Estado, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Servicio Electoral, ejercerá la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios; del cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral; de las normas sobre los partidos políticos, y las demás funciones que señale una ley orgánica constitucional.

La dirección superior del Servicio Electoral corresponderá a un Consejo Directivo, el que ejercerá de forma exclusiva las atribuciones que le encomienden la Constitución y las leyes. Dicho Consejo estará integrado por cinco consejeros designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. Los Consejeros durarán diez años en sus cargos, no podrán ser designados para un nuevo período y se renovarán por parcialidades cada dos años. Previo a la votación del Senado, los candidatos propuestos deberán formular una exposición de su postulación al cargo respectivo en una sesión especial y pública ante la Sala del Senado.

Los Consejeros sólo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República o de un tercio de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados, por infracción grave a la Constitución o a las leyes, incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en Pleno, especialmente convocado al efecto, y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio. La organización y atribuciones del Servicio Electoral serán establecidas por una ley orgánica constitucional. Su forma de desconcentración, las plantas, remuneraciones y estatuto del personal serán establecidos por una ley.”

Indicación Nº 330 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 87 por el siguiente texto:

“Artículo 87.- Tribunal Calificador de Elecciones. Un tribunal especial, que se denominará Tribunal Calificador de Elecciones, conocerá del escrutinio general y de la calificación de las elecciones de Presidente de la República, de diputados y senadores; resolverá las reclamaciones a que dieren lugar y proclamará a los que resulten elegidos. Dicho Tribunal conocerá, asimismo, de los plebiscitos, y tendrá las demás atribuciones que determine la ley.

Estará constituido por cinco miembros designados en la siguiente forma:

a) Cuatro ministros de la Corte Suprema, designados por esta, mediante sorteo, en la forma y oportunidad que determine la ley de quórum calificado respectiva, y

b) Un ciudadano que hubiere ejercido el cargo de Consejero, Director o Subdirector del Servicio Electoral por un período no inferior a cuatro años, designado por la Corte Suprema en la forma señalada en la letra a) precedente, de entre todos aquéllos que reúnan las calidades indicadas y cuya edad al término de su mandato no sea superior a los 75 años. Las designaciones a que se refiere la letra b) no podrán recaer en personas que sean candidatos o ejerzan cargos de elección popular, Ministro de Estado, Subsecretarios, Delegado presidencial ni dirigente de partido político.

Los miembros de este tribunal durarán cuatro años en sus funciones.

El Tribunal Calificador procederá como jurado en la apreciación de los hechos y sentenciará con arreglo a derecho.

El Tribunal Calificador de Elecciones tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales electorales regionales.

Una ley de quórum calificado regulará la organización y funcionamiento del Tribunal Calificador”.

Indicación Nº 331 de CC Harboe para sustituir el artículo 87 por uno del siguiente tenor

“Artículo 87.- Un tribunal especial del Estado, que se denominará Tribunal Calificador de Elecciones, conocerá del escrutinio general y de la calificación de las elecciones de Presidente de la República, de diputados y senadores; resolverá las reclamaciones a que dieren lugar y proclamará a los que resulten elegidos. Dicho Tribunal conocerá, asimismo, de los plebiscitos, y tendrá las demás atribuciones que determine la ley.

Estará constituido por cinco miembros designados en la siguiente forma:

a) Cuatro ministros de la Corte Suprema, designados por ésta, mediante sorteo, en la forma y oportunidad que determine la ley orgánica constitucional respectiva, y

b) Un ciudadano que hubiere ejercido el cargo de Presidente o Vicepresidente de la Cámara de Diputados o del Senado por un período no inferior a los 365 días, designado por la Corte Suprema en la forma señalada en la letra a) precedente, de entre todos aquellos que reúnan las calidades indicadas.

Las designaciones a que se refiere la letra b) no podrán recaer en personas que sean parlamentarios, candidatos a cargos de elección popular, Ministros de Estado, ni dirigentes de partidos políticos.

Los miembros de este tribunal durarán cuatro años en sus funciones y les serán aplicables las mismas incompatibilidades que esta constitución establece en el art. XX respecto a los diputados de la república.

El Tribunal Calificador procederá como jurado en la apreciación de los hechos y sentenciará con arreglo a derecho.

Una ley orgánica constitucional regulará la organización y funcionamiento del Tribunal Calificador de Elecciones.”

Indicación Nº 336 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 88 por el siguiente texto:

“Artículo 88.- Tribunales Electorales Regionales. Habrá tribunales electorales regionales encargados de conocer el escrutinio general y la calificación de las

elecciones que la ley les encomiende, así como de resolver las reclamaciones a que dieren lugar y de proclamar a los candidatos electos. Sus resoluciones serán apelables para ante el Tribunal Calificador de Elecciones en la forma que determine la ley. Asimismo, les corresponderá conocer de la calificación de las elecciones de carácter gremial y de las que tengan lugar en aquellos grupos intermedios que la ley señale.

Estos tribunales estarán constituidos por un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva, elegido por esta, y por dos miembros designados por el Tribunal Calificador de Elecciones de entre personas que hayan ejercido la profesión de abogado o desempeñado la función de ministro o abogado integrante de Corte de Apelaciones por un plazo no inferior a tres años.

Los miembros de estos tribunales durarán cuatro años en sus funciones y tendrán las inhabilidades e incompatibilidades que determine la ley.

Estos tribunales procederán como jurado en la apreciación de los hechos y sentenciarán con arreglo a derecho.

La ley determinará las demás atribuciones de estos tribunales y regulará su organización y funcionamiento.

Anualmente, se destinarán en la Ley de Presupuestos de la Nación los fondos necesarios para la organización y funcionamiento de estos tribunales, cuyas plantas, remuneraciones y estatuto del personal serán establecidos por ley”.

Indicación Nº 337 de CC Harboe para sustituir el artículo 88 por uno del siguiente tenor:

“Artículo 88.- Habrá tribunales electorales regionales encargados de conocer el escrutinio general y la calificación de las elecciones que la ley les encomiende, así como de resolver las reclamaciones a que dieren lugar y de proclamar a los candidatos electos. Sus resoluciones serán apelables para ante el Tribunal Calificador de Elecciones en la forma que determine la ley. Asimismo, les corresponderá conocer de la calificación de las elecciones de carácter gremial y de las que tengan lugar en aquellos grupos intermedios que la ley señale.

Estos tribunales estarán constituidos por un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva, elegido por ésta, y por dos miembros designados por el Tribunal Calificador de Elecciones de entre personas que hayan ejercido la profesión de abogado o desempeñado la función de ministro o abogado integrante de Corte de Apelaciones por un plazo no inferior a tres años. Los miembros de estos tribunales durarán cuatro años en sus funciones y tendrán las inhabilidades e incompatibilidades que determine la ley. Estos tribunales procederán como jurado en la apreciación de los hechos y sentenciarán con arreglo a derecho. La ley determinará las demás atribuciones de estos tribunales y regulará su organización y funcionamiento.”

Indicación Nº 338 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para suprimir el artículo 88 A, 88 B, 89, 89 A, 90.

Indicación Nº 348 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 91 por el siguiente:

“Artículo 91.- Un organismo autónomo, de carácter técnico, con el nombre de Dirección de Servicio Civil tendrá a su cargo la superintendencia sobre las relaciones laborales dentro de la Administración del Estado, debiendo velar por un eficiente y efectivo cumplimiento de la función administrativa, en concordancia con los principios y normas que la regulan.

En el cumplimiento de sus funciones, la Dirección de Servicio Civil deberá:

a) Reglamentar los sistemas del sistema de selección de los empleos y cargos públicos;

b) Supervigilar que la realización de los concursos para la provisión de ellos sea realizada en condiciones de igualdad de oportunidades y respetando siempre el carácter técnico y profesional de estas funciones y empleos;

c) Impartir normas de aplicación general en materias de gestión y desarrollo de personas de los Ministerios y servicios dependientes o relacionados a través de ellos, a fin de asegurar el cumplimiento de estándares en las relaciones laborales de la Administración del Estado;

d) Visar los reglamentos de calificaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado;

e) Diseñar e implementar los planes y programas de inducción, acompañamiento, formación y desarrollo de altos directivos públicos; reglamentará el sistema de evaluación de desempeño de los funcionarios de la Administración del Estado;

f) Fomentar y apoyar la profesionalización y desarrollo de las unidades de personal o gestión de personas de los ministerios y servicios, velando por su mejoramiento continuo y permanente; y,

g) Desempeñar las demás funciones que le encomiende la Constitución y las leyes.

La dirección y administración de la Dirección de Servicio Civil estarán a cargo del Consejo del Servicio Civil, al cual corresponderá ejercer las atribuciones y cumplir con las funciones que establecen esta Constitución y las leyes.

El Consejo estará constituido por cinco integrantes, los que serán designados por el Presidente de la República previa ratificación de dos terceras partes de los senadores en ejercicio. Sus miembros durarán diez años en sus cargos, no pudiendo ser designados para nuevos períodos y debiendo renovarse de a un integrante cada dos años.”

Indicación Nº 356 de CC Cruz, Botto, Gutiérrez, Daza y Namor para sustituir el artículo 97 por el siguiente: “Artículo.- Existirá un organismo autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico, denominado Consejo Superior para la Fe Pública encargado de la supervigilancia de los procesos de certificación, instrumentación, registro, archivo, custodia y almacenamiento de los instrumentos que determine la ley; los nombramientos y la fiscalización técnica y económica de las instituciones que los lleven a cabo, la solución de controversias suscitadas en el marco de sus atribuciones y del resguardo y protección de los datos personales de la ciudadanía que dichas actuaciones supongan.”

Indicación Nº 358 de CC Cruz, Botto, Gutiérrez, Daza y Namor para agregar el siguiente artículo a continuación del anterior como número 98 en este caso:

“Artículo 98. Composición del Consejo Superior para la Fe Pública.- El Consejo se compone por nueve integrantes elegidos de acuerdo a criterios de paridad de género, plurinacionalidad y mérito, conforme a la siguiente integración:

a) 3 elegidos por el Consejo Nacional de Justicia

b) 2 elegidos por la Corte Suprema

c) 2 elegidos por los pueblos originarios

d) 1 elegido por el Consejo para la Transparencia

e) 1 elegido por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas

Las y los integrantes del Consejo Superior para la Fe Pública señalados en las letras a) y b) deberán ser profesionales abogados o abogadas con a lo menos diez años del título correspondiente, que se hubieren destacado en la actividad profesional, académica o en la función pública.

Las y los integrantes del Consejo para la Fe Pública durarán seis años en sus cargos y no podrán ser reelegidos, debiendo renovarse por parcialidades cada tres años de conformidad a lo establecido por la ley.”

Indicación Nº 364 de CC Hoppe y Royo para sustituir el actual artículo 102 por el siguiente:

“Artículo 102.- El Consejo de Verdad, Reparación y Garantías de no Repetición. Existirá un órgano colegiado, autónomo, con patrimonio propio y personalidad jurídica, cuyo objeto será velar por el cumplimiento por parte del Estado de sus deberes en materia de derechos de justicia transicional.

El Consejo tendrá las siguientes funciones:

a) Convocar a la formación de comisiones de Verdad Histórica, Reparación Integral y Garantías de No Repetición que tengan por objeto esclarecer la verdad, identificar la participación y contribución a vulneraciones de derechos humanos y de la Naturaleza por parte del Estado y de particulares.

b) Investigar, recopilar antecedentes y recibir testimonios por iniciativa propia o a partir de una denuncia o solicitud de un individuo o una colectividad, de cualquier violación a los derechos humanos y de la Naturaleza para facilitar y entregar los antecedentes recopilados al Sistema de Justicia y a las entidades encargadas de representar judicialmente a las víctimas.

c) Diseñar mecanismos alternativos de reparación y garantías de no repetición, tales como de medidas de restitución histórica, reconocimiento póstumo, medidas de justicia simbólica u otros.

d) Calificar a las víctimas, individuales o colectivas, de violaciones a los derechos humanos y de la Naturaleza.

e) Recomendar leyes y políticas públicas que garanticen la no repetición de las violaciones a los derechos humanos y de la Naturaleza, a partir del trabajo con las víctimas y sobrevivientes y personas expertas en esas materias.

f) Preservar, sistematizar y poner a disposición pública los antecedentes recopilados y producidos en el marco de su trabajo y de las comisiones de verdad.

g) El ejercicio de cualquier otra función o atribución que le confiera la ley.”

Indicación Nº 365 de CC Hoppe y Royo para sustituir el actual artículo 103 por el siguiente:

“Artículo 103. Composición del Consejo. El Consejo estará integrado por personas de reconocida y de comprobada integridad y trayectoria, que tengan conocimiento, comprensión y experiencia en ámbitos de la defensa y la promoción de los derechos humanos y de la Naturaleza.

La cantidad de integrantes, su forma de nombramiento, organización, atribuciones y funciones específicas del Consejo serán determinadas por una ley.”

Indicación Nº 366 de CC Aguilera, Catrileo, Galleguillos, Loncon y Millabur para agregar un nuevo artículo:

“Artículo x. Comisión de Restitución Territorial Indígena. Se creará una Comisión de Restitución Territorial Indígena, dependiente del poder ejecutivo, cuya obligación y finalidad será:

1. Recibir, conocer y estudiar las solicitudes de reclamación territorial efectuadas por los pueblos y naciones indígenas o sus comunidades.

2. Elaborar un Plan de Demarcación, Registro, Titulación, Restitución y Reparación según corresponda, con el objetivo de dar respuesta a cada una de las reclamaciones territoriales recibidas.

3. Ejecutar el Plan de Demarcación, Registro, Titulación, Restitución y Reparación para hacer efectivo el proceso de entrega de tierras y territorios indígenas.

4. Elaborar un catastro general del estado de las tierras y territorios que hayan sido objeto de reclamación, ya sea que se encuentren en posesión o dominio de particulares o del fisco.

Para la determinación de las tierras y territorios susceptibles de restitución o reparación, se considerarán aquellas que tradicionalmente han sido ocupadas por el respectivo pueblo o nación indígena, que podrán ser acreditadas por todo tipo de antecedentes que puedan dar fe de la ocupación o posesión tradicional. Estos podrán ser registros públicos e históricos, informes oficiales, investigaciones sobre determinación y pérdida territorial indígena, sentencias emitidas por tribunales, informes técnicos que acrediten la posesión u ocupación territorial tradicional, hitos y espacios de significación cultural, espiritual o ceremonial, memoria oral, toponimia, homogeneidad ecológica, entre otros.

La integración de la comisión se realizará mediante un proceso público y transparente, debiendo establecerse como criterios de selección de sus integrantes, la comprobada experiencia técnica o académica en las materias objeto de la

Comisión, la paridad y la plurinacionalidad, garantizando la participación de los diversos pueblos y naciones indígenas.

Una norma transitoria regulará los plazos de instalación y funcionamiento de la Comisión.”

Indicación Nº 367 de CC Aguilera, Catrileo, Galleguillos, Loncon y Millabur para agregar un nuevo artículo:

“Artículos x. Tribunal Especial de Restitución Territorial Indígena. Se creará un Tribunal Especial de Restitución Territorial Indígena de carácter autónomo, plurinacional y paritario. Su integración, nombramiento de sus jueces, funcionamiento, presupuesto y demás aspectos para su adecuada operación, será regulado por la ley.

Son competencias del Tribunal Especial de Restitución Territorial Indígena, sin perjuicio de lo señalado en la ley, las siguientes:

1.- Conocer y resolver los reclamos, acciones y recursos interpuestos contra las resoluciones y recomendaciones emitidas por la Comisión de Restitución Territorial Indígena conforme a las etapas y procedimientos señalados en el Plan de Demarcación, Registro, Titulación, Restitución y Reparación.

2.- Conocer y resolver reclamos, acciones y recursos interpuestos en los procesos de expropiación, incluida la determinación de la indemnizaciones pecuniarias en favor de los expropiados y la entrega material de las tierras, territorios y bienes naturales conforme a la Constitución y las leyes;

3.- Conocer y resolver reclamos, acciones y recursos interpuestos en los procesos de reparación y remedios alternativos a la expropiación.

4.- Las demás competencias que establezca la ley.

El Tribunal Especial de Restitución Territorial Indígena deberá desarrollar un procedimiento adecuado, expedito y oportuno, con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo”.

Indicación Nº 375 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 113 por el siguiente texto: “Artículo 113.- Habrá una Corte Constitucional cuya función será garantizar la supremacía de esta Constitución”.

Indicación Nº 379 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 114 por el siguiente texto:

“Artículo 114.- La Corte Constitucional estará integrada por once jueces, que deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Ser chilenos;

b) Tener a lo menos 15 años de título de abogado y haberse destacado en el ámbito académico, judicial o administrativo; y

c) No tener impedimento constitucional o legal para el cargo.

Los jueces de la Corte Constitucional durarán nueve años en sus cargos y se renovarán individualmente por parcialidades cada tres. No podrán ser reelegidos.”

Indicación Nº 384 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 115 por el siguiente texto:

“Artículo 115.- Los jueces de la Corte Constitucional serán designados de la siguiente forma:

a) Tres designados por el Presidente de la República.

b) Dos elegidos por el Senado y dos por la Cámara de Diputados. Los nombramientos se efectuarán, para cada caso, en votaciones únicas y requerirán para su aprobación del voto favorable de los tres quintos de los senadores o diputados en ejercicio, según corresponda, previo llamado a audiencias públicas para examinar la nómina de candidatos.

c) Cuatro elegidos por la Corte Suprema en una votación secreta que se celebrará en sesión especialmente convocada para tal efecto.

Los nombramientos se realizarán, en cada caso, de entre una nómina de cinco personas. Las nóminas serán públicas y se formarán previo concurso de antecedentes, promoviendo la equidad de género.

Para los nombramientos del literal a) [Presidente de la República] la nómina será propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública.

Tratándose de los nombramientos del literal b) [Senado y Cámara de Diputados] la nómina será propuesta por las respectivas Comisiones de Constitución y Legislación de cada Cámara. Para los nombramientos de la letra c) [Corte Suprema], la nómina será propuesta por el Consejo de la Judicatura.

Los jueces de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones del país podrán postular, en igualdad de condiciones frente a los otros postulantes, a la nómina que se deba conformar según la letra c) de este artículo. En caso de nombramiento, cesará en su cargo, pudiendo retornar al mismo una vez terminando su periodo en la Corte Constitucional, sin que ello afecte sus condiciones de jubilación.

Los jueces suplentes de la Corte Constitucional que sea necesario designar de conformidad a la ley, se nombrarán conforme a las reglas precedentes.”

Indicación N° 389 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 116 por el siguiente texto:

“Artículo 116.- Los jueces de la Corte Constitucional serán independientes e inamovibles. Cesarán en el cargo por las siguientes causales:

a) Cumplimiento del plazo de su nombramiento.

b) Renuncia aceptada por la Corte Constitucional.

c) Haber cumplido setenta y cinco años de edad.

d) Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente, lo que será declarado por el pleno de la Corte Suprema en sesión especialmente convocada al efecto.

En caso de que un juez de la Corte Constitucional cese en su cargo, se procederá a su reemplazo por quien corresponda de conformidad con las normas precedentes, por el tiempo que falte para completar el período del reemplazado.”

Indicación N° 394 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 117 por el siguiente texto:

“Artículo 117.- No podrá ser nombrado juez de la Corte Constitucional quien esté inhabilitado legalmente para desempeñar el cargo de juez ordinario. Tampoco podrá ser nombrado quien durante los cuatro años anteriores a su nombramiento se haya desempeñado en algún cargo de exclusiva confianza en el Gobierno, en un cargo de elección popular o hubiera sido militante de algún partido político; y no podrán ejercer dichos cargos o funciones durante el año posterior al cese de sus funciones.

Los miembros de la Corte Constitucional estarán sometidos a los artículos [actuales arts. 58, 59 y 81]. No podrán ejercer la profesión de abogado o cualquier otra actividad remunerada, salvo académicas; ni cualquier acto de los establecidos en los incisos segundo y tercero del artículo [actual art. 60].

Quienes se hubiesen desempeñado como jueces de la Corte Constitucional, no podrán patrocinar, actuar como apoderados o realizar gestión alguna en causas ante la misma Corte, por un plazo de tres años.”

Indicación N° 395 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para suprimir el artículo 117 A.

Indicación N° 398 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 118 por el siguiente texto:

“Artículo 118.- Son atribuciones de la Corte Constitucional:

1º Resolver las contiendas de competencia que se susciten entre órganos políticos o administrativas y los tribunales de justicia; entre órganos nacionales, por una parte, y regionales, provinciales o comunales, de otra; entre estos últimos entre sí; y las contiendas entre el gobernador y consejo regional, y entre el alcalde y consejo municipal [actual art. 126].

2º Ejercer exclusivamente el control de constitucionalidad y convencionalidad de los preceptos legales sometidos a su conocimiento. Para ello:

a) Cualquiera de las partes en una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial, podrá requerir la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación resulte contraria a la Constitución y que haya sido decisivo en la dictación de una sentencia definitiva o interlocutoria; salvo materias penales y de amparo de derechos fundamentales, en que el requerimiento se podrá deducir en cualquier estado procesal de la causa.

b) Habrá acción pública de inconstitucionalidad contra los preceptos legales que hayan sido declarados inaplicables en al menos una oportunidad previa, por el mismo vicio de constitucionalidad.

3º Declarar la inconstitucionalidad por vicios de forma que se adviertan durante el procedimiento de formación de una ley, habiendo sido ésta totalmente despachada por el Congreso Nacional y antes de su publicación. El requerimiento se formulará por un cuarto de los diputados o senadores en ejercicio por el Presidente de la República.

4º Ejercer el control de constitucionalidad de los tratados internacionales, antes de su promulgación y ratificación.

5º Resolver las cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad de una resolución, decreto supremo o decreto con fuerza de ley del Presidente de la República. Para ello:

a) El Presidente de la República podrá formular el requerimiento dentro de los diez días siguientes a que Contraloría rechace por inconstitucional una resolución, decreto supremo o decreto con fuerza de ley.

b) Una cuarta parte de la Cámara de Diputados podrá formular el requerimiento dentro de los treinta días siguientes a la publicación de la resolución, decreto supremo o decreto con fuerza de ley del que Contraloría haya tomado razón en infracción de la Constitución

6º Resolver los reclamos en caso de que el Presidente de la República no promulgue una ley cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda.

7º Resolver las cuestiones que se susciten sobre constitucionalidad con relación a la convocatoria a un plebiscito, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Tribunal Calificador de Elecciones.

8º Resolver sobre los conflictos que se susciten sobre inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los ministros de Estado, parlamentarios, jueces de la Corte Suprema, Fiscal Nacional, Contralor General de la República, Gobernadores Regionales y otras autoridades que señale la ley.

9º Resolver sobre las cuestiones de constitucionalidad de los autos acordados dictados por la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones y Tribunal Calificador de Elecciones; así como las instrucciones generales dictadas por el Fiscal Nacional, y los acuerdos del Consejo de la Judicatura, a solicitud de parte interesada.

10º Declarar la inconstitucionalidad por vicios de forma que se adviertan durante el procedimiento de reforma constitucional. El requerimiento se formulará por un cuarto de los diputados o senadores en ejercicio, o por el Presidente de la República.

11º Resolver sobre las cuestiones de constitucionalidad de los reglamentos y resoluciones de las Cámaras del Congreso Nacional, a solicitud de un cuarto de los diputados o senadores en ejercicio.”

Indicación Nº 399 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen,

Monckeberg y Larrain para agregar un nuevo artículo a continuación del artículo 118, del siguiente texto: “Artículo X.- La Corte Constitucional conocerá de la acción de unificación de jurisprudencia, en el caso de la acción de protección de garantías constitucionales, dentro de los cinco días contados desde la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones respectiva. Para estos efectos, la Corte hará un examen de pertinencia de la acción de unificación interpuesta, donde evaluará la existencia de sentencias contradictorias en causas que interpreten una misma garantía constitucional, y que se trate de un conflicto de relevancia jurídica, casos en los cuales declarará la admisibilidad de la acción debiendo ser resuelta por el pleno de la Corte Constitucional por mayoría de sus miembros.”

Indicación Nº 404 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 119 por el siguiente texto:

“Artículo 119.- En el ejercicio de sus facultades, la Corte Constitucional será el intérprete final de la Constitución y sus decisiones serán vinculantes para todo órgano del Estado, así como para toda persona, institución o grupo.

Contra sus resoluciones no procederá recurso alguno. No obstante, la Corte podrá rectificar de oficio los errores de hecho en que hubiere incurrido.

Las disposiciones que la Corte declare inconstitucionales no podrán convertirse en ley y se entenderán invalidadas desde la publicación en el Diario Oficial de la sentencia que acoja el reclamo, la que no producirá efecto retroactivo.

Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de todo o parte de una ley, resolución, decreto supremo, decreto con fuerza de ley, auto acordado, u otros, en su caso, se publicarán en el Diario Oficial dentro de los tres días siguientes a su dictación.”

Indicación Nº 405 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para agregar un nuevo artículo: “Artículo X.- En el evento que el tribunal de la gestión pendiente desconozca los efectos de la sentencia que haya declarado la inaplicabilidad de un precepto, la parte agraviada podrá recurrir extraordinariamente ante el pleno de la Corte Constitucional para su pronunciamiento, pudiendo dictar sentencia de reemplazo”.

Indicación Nº 407 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir en el inciso primero del artículo 119 A la frase: “solo contendrán las razones que fundamentan el voto de mayoría” por la siguiente frase: “contendrán las razones que fundamenten el voto de mayoría y de minoría.”

Indicación Nº 419 de CC Daza para reemplazar el artículo 126 del texto sistematizado, por un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo 126.- Principios generales para la protección jurisdiccional de derechos fundamentales. Las acciones que protejan derechos fundamentales se sustanciarán mediante procedimientos previstos por la Constitución y la ley, en conformidad con los principios preferencia, oficialidad, celeridad, bilateralidad y desformalización o sencillez.

El contenido y alcance de los derechos fundamentales se interpretarán de conformidad a los principios reconocidos por esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte. Con todo, se deberá velar siempre por alcanzar el sentido más favorable posible para estos derechos según el caso concreto.”

Indicación Nº 421 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 127 por el siguiente:

“Artículo 127.- Acción de amparo. Toda persona agraviada por un acto u omisión ilegal, del Estado o los particulares, que afecte o amenace el legítimo ejercicio de los derechos y garantías reconocidos en esta Constitución, tendrá acción de amparo para ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Esta acción se podrá impetrar dentro de treinta días contados desde el conocimiento del acto u omisión reclamada. La ley establecerá un procedimiento urgente, preferente, sumario y contradictorio para su tramitación y resolución.

El tribunal competente podrá en cualquier momento del procedimiento decretar medidas cautelares cuando concurren los requisitos para ello y alzarlas cuando lo estime conveniente, a petición de parte o de oficio.

El amparo sólo podrá entablarse una vez que se haya agotado la vía administrativa, cuando proceda, y siempre que no exista otro medio procesal más idóneo. Se exceptúan aquellos casos en que, por su urgencia y gravedad, el agotamiento de la vía administrativa o de los otros remedios procesales disponibles pueda provocar un daño irreparable. No procederá contra actos legislativos ni contra resoluciones judiciales.”

Indicación Nº 422 de CC Llanquileo para sustituir el actual artículo 127, por el siguiente:

“Artículo 127.- Acción de tutela de derechos fundamentales. Toda persona que por causa de un acto u omisión sufra una amenaza, perturbación o privación en el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales, podrá concurrir por sí o por cualquiera a su nombre ante la Corte de Apelaciones más cercana, que adoptará de inmediato todas las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho. Esta acción se podrá deducir mientras la vulneración persista.

Esta acción cautelar será procedente cuando la persona afectada no disponga de otra acción, recurso o medio procesal para reclamar de su derecho, salvo aquellos casos en que, por su urgencia y gravedad, pueda provocar un daño grave inminente o irreparable.

Cualquier tribunal del país podrá recibir la acción de tutela de que trata este artículo, estando obligado a remitir por la vía más expedita y en el plazo máximo de dos horas, los antecedentes a la Corte del territorio jurisdiccional respectivo.

Al acoger o rechazar la acción, se deberá señalar el procedimiento judicial que en derecho corresponda y que permita la resolución del asunto.

La Corte de Apelaciones podrá en cualquier momento del procedimiento, de oficio o a petición de parte, decretar cualquier medida provisional que estime necesaria, y alzarlas o dejarlas sin efecto cuando lo estime conveniente.

No podrá deducirse esta acción contra resoluciones judiciales, salvo respecto de aquellas personas que no hayan intervenido en el proceso respectivo y a quienes afecten sus resultados.

La apelación en contra de la sentencia definitiva será conocida por la Corte Suprema.

Esta acción también procederá cuando por acto o resolución administrativa se prive o desconozca la nacionalidad chilena. La interposición de la acción suspenderá los efectos del acto o resolución recurrida.

Tratándose de los derechos de la naturaleza y derechos ambientales, podrán ejercer esta acción tanto la Defensoría de la Naturaleza como cualquier persona o grupo.

En el caso de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, esta acción podrá ser deducida por sus instituciones representativas, autoridades tradicionales o la Defensoría de los Pueblos.”

Indicación Nº 427 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 128 por el siguiente:

“Artículo 128.- El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución en el artículo y numerales correspondientes al [derecho a la vida, a la igualdad ante la ley, al debido proceso conforme al cual nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho; la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada; libertad de conciencia y de culto, el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado; libertad de enseñanza; libertad de opinión y expresión; derecho de reunión pacífico; derecho a asociarse sin permiso previo; a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación; derecho a sindicarse; derecho a desarrollar cualquier actividad económica y estatuto del Estado empresario; la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica; libertad para adquirir el dominio sobre toda clase de bienes conforme a la Constitución y la ley; el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporeales; y derechos de propiedad intelectual e industrial y libertad de crear y de investigación científica], podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Procederá, también, el recurso de protección en el caso del N° [que reconoce el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación] del artículo [sobre los derechos fundamentales reconocidos y asegurados por la propuesta de Nueva Constitución], cuando una persona natural vea afectado directamente su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada, y siempre que la cuestión no haya sido entregada al conocimiento y juzgamiento, por cualquier vía, de los tribunales ambientales.

La sentencia que se dicte ya sea que lo acoja, rechace o declare inadmisibile el recurso, será apelable ante la Corte Constitucional.”

Indicación Nº 429 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 129 por el siguiente: “Artículo 9.- Habeas corpus. Toda persona que se hallare arrestada, detenida, presa o que sufra cualquier privación o amenaza en su libertad y seguridad individual, con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia, que se ponga a disposición del juez competente o decretar su libertad inmediata, procediendo en todo breve y sumariamente”.

Indicación Nº 430 de CC Llanquileo para sustituir el actual artículo 129, por el siguiente:

“Artículo 129. Acción de amparo. Toda persona que sea arrestada, detenida o presa con infracción a lo dispuesto en esta Constitución o las leyes, podrá concurrir por sí o por cualquiera persona a su nombre, sin formalidades, ante la Corte de Apelaciones respectiva, a fin de que esta adopte de inmediato las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la persona afectada, pudiendo inclusive decretar su libertad inmediata.

Cualquier tribunal del país podrá recibir la acción de amparo de que trata este artículo, estando obligado a remitir por la vía más expedita y en el plazo máximo de

dos horas, los antecedentes a la Corte de Apelaciones del territorio jurisdiccional respectivo.

La Corte de Apelaciones podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del tribunal competente, procediendo en todo breve y sumariamente, y corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija. Sin perjuicio de lo señalado, la Corte de Apelaciones deberá agotar todas las medidas conducentes a determinar la existencia y condiciones de la persona que se encontrare privada de libertad.

Esta acción también procederá respecto de toda persona que ilegalmente sufra una privación, perturbación o amenaza a su derecho a la libertad personal o seguridad individual, debiendo en tal caso adoptarse todas las medidas que sean conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

La sentencia dictada será susceptible de recurso de apelación que será conocido y resuelto por la Corte Suprema.”

Indicación Nº 432 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 129 A por el siguiente:

“Artículo X.- Toda persona que se hallare arrestada, detenida o presa con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la persona afectada.

Esa magistratura podrá ordenar que la persona sea llevada a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del juez competente, procediendo en todo breve y sumariamente, y corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija.

El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La respectiva magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.”

Indicación Nº 433 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para suprimir los artículos 129 B y 130.

Indicación Nº 437 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 131 por el siguiente: “Artículo 131.- Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos, de los gobiernos regionales o de las municipalidades, podrá reclamar en contra del Estado ante los tribunales que determine la ley sin mayor fundamento que el hecho lesionador y este artículo. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere recaer en el funcionario que hubiere causado el daño, y que cuya persecución corresponde a la Administración según el procedimiento establecido en la ley.”

Indicación Nº 440 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para agregar un nuevo artículo:

“Artículo X.- Los derechos reconocidos en los numerales [SE REFIERE A LOS DERECHOS SOCIALES] del artículo [SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES RECONOCIDOS POR LA PROPUESTA DE NUEVA CONSTITUCIÓN], serán configurados por el legislador, quien determinará sus contenidos, límites y modalidades de cumplimiento.

El legislador deberá establecer un recurso especial de tutela para asegurar la efectiva protección de las obligaciones emanadas de cada uno de estos derechos, según hayan sido identificadas en la ley. Este recurso será de conocimiento de la Corte de Apelaciones respectiva en primera instancia, y de la Corte Suprema en segunda instancia. Los tribunales de justicia, al conocer de estos recursos, deberán dar debida consideración a las restricciones presupuestarias del Estado, así como al principio de no regresividad de los derechos.

El legislador deberá dar cumplimiento a la obligación de configuración legal de derechos contenida en el inciso primero en el plazo de 2 años a contar de la publicación de esta Constitución. Si el legislador no cumple con esta obligación, en el plazo señalado, cualquier persona podrá recurrir a la Corte Constitucional para que declare que el Presidente, o el Congreso Nacional en su caso, han incurrido en una omisión constitucional inexcusable.”

Indicación Nº 445 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para agregar un nuevo artículo después del 134 A que diga lo siguiente:

“Artículo X.- Cualquier persona podrá denunciar las infracciones a la regulación constitucional sobre la libertad de emprender y el Estado empresario contenida en esta Constitución.

El actor no necesitará tener interés actual en los hechos denunciados.

La acción podrá intentarse dentro de seis meses contados desde que se hubiere producido la infracción, sin más formalidad ni procedimiento que el establecido para el recurso de amparo, ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que conocerá de ella en primera instancia y la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y adoptar, si este fuera el caso, la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Deducida la acción, el tribunal deberá investigar la infracción denunciada y dar curso progresivo a los autos hasta el fallo respectivo.

Contra la sentencia definitiva, procederá el recurso de apelación, que deberá interponerse en el plazo de cinco días, ante la Corte Constitucional y que, en caso de no serlo, deberá ser consultada. Esta Corte conocerá del caso en una de sus Salas.

Si la sentencia estableciere fundadamente que la denuncia carece de toda base, el actor será responsable de los perjuicios que hubiere causado.”

Indicación Nº 448 de CC Labra, Mayol, Bown, Hurtado, Cozzi, Fontaine, Tepper, Silva, Rebolledo, Vega, Ossandon, Celis, De la Maza, Jurgensen, Monckeberg y Larrain para sustituir el artículo 136 por el siguiente:

“Artículo 136.- Los proyectos de reforma constitucional podrán ser iniciados por mensaje presidencial o moción parlamentaria de cualquiera de sus miembros en ejercicio.

Los proyectos de reforma constitucional se someterán a las mismas reglas de tramitación de las leyes previstas en esta Constitución. El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada Cámara el voto conforme de las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio.

No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o estando vigente alguno de los estados de excepción constitucional.”

Indicación Nº 462 de CC Jiménez para agregar un nuevo inciso en el artículo 138 del siguiente tenor: “Los miembros de pueblos indígenas cuyos patrocinos sean equivalentes a la sumatoria del diez por ciento de cada pueblo respecto al último padrón electoral indígena, podrán presentar una propuesta de reforma constitucional para que sea votada mediante referéndum de manera conjunta con la próxima elección parlamentaria. También podrán presentar propuesta de reforma constitucional las comunidades y asociaciones indígenas con personalidad jurídica, los cacicazgos tradicionales reconocidos por ley y asociaciones u organizaciones indígenas tradicionales en la cantidad o proporción que establezca la ley”.

Indicación Nº 463 de CC Jiménez para agregar un nuevo inciso en el artículo 138 del siguiente tenor: “Estas propuestas sólo podrán versar respecto a aquellas materias que regulen plurinacionalidad, libredeterminación y demás derechos colectivos de los pueblos indígenas”.

Indicación Nº 473 de CC Bravo y Villena para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo 143 bis.- Del referéndum constituyente periódico. A los veinte años de la entrada en vigencia de esta Constitución y, a partir de entonces, sucesivamente cada veinte años, junto con la elección periódica de parlamentarias y parlamentarios más próxima, se someterá a referéndum la posibilidad de modificar la presente Constitución.

En tal caso, la ciudadanía dispondrá de una cédula electoral en la que se preguntará si aprueba o rechaza la modificación de la Constitución vigente.

En caso de que la opción de aprobación obtenga más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos en el plebiscito, se entenderá de pleno derecho que se ha convocado a una Asamblea Constituyente, la que se regirá por lo dispuesto en los artículos 141 (De la Asamblea Constituyente) y 142 (Del plebiscito ratificatorio de una Nueva Constitución).

Con todo, la Asamblea Constituyente así convocada deberá decidir, una vez instalada, si procederá a elaborar una propuesta de reforma constitucional o una nueva Constitución, aplicándose las reglas de este capítulo que correspondan.”.

Indicación Nº 476 de CC Caiguan para sustituir el “Artículo 145.- De los derechos de las personas privadas de libertad”, por un artículo 145 del siguiente tenor:

“Artículo 145. Derechos de las personas privadas de libertad. Las personas privadas de libertad recluidas en establecimientos penitenciarios gozan de los derechos fundamentales establecidos en esta Constitución y en los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Chile es parte y que se encuentran vigentes, salvo aquellos cuyo ejercicio o goce se restrinjan o suspendan temporalmente de forma expresa por ley, resolución o sentencia judicial. Corresponderá a la ley regular la ejecución penal.

Las mujeres y personas gestantes que deban cumplir o cumplan una pena privativa de libertad, tendrán derecho a solicitar la suspensión del inicio de la ejecución o cambio en su modalidad, bajo el principio de interés superior del niño. La ley determinará los casos y la forma de ejercer ese derecho.”

Indicación Nº 477 de CC Caiguan para agregar, luego del artículo “Artículo 145.- Obligaciones generales del Estado respecto a personas privadas de libertad”, un artículo 145 bis del siguiente tenor: “Artículo 145 BIS.-Derechos de las personas privadas de libertad de origen indígena. Cuando se impongan sanciones penales a personas pertenecientes a los pueblos y naciones indígenas se garantizarán las condiciones que permitan ejercer su derecho a su identidad e integridad cultural y se dará preferencia a medidas distintas al encarcelamiento.”

Indicación Nº 479 de CC Caiguan para sustituir el artículo “Artículo 146.- Obligaciones generales del Estado respecto a personas privadas de libertad.”, por el que se expresa del siguiente tenor: “Artículo 146.- Del servicio penitenciario. El

servicio penitenciario es un órgano técnico perteneciente a la administración civil del Estado que cuenta con personal especializado de carácter no castrense. La ley regulará su estructura, atribuciones, competencias, responsabilidades, su vínculo y coordinación con los otros organismos públicos que tengan incidencia en la ejecución de las medidas cautelares y de las sanciones penales.”

Indicación Nº 481 de CC Caiguan para sustituir el “Artículo 147.- Extensión de la pena y efectos colaterales”, por el del siguiente tenor: “Artículo 147.- Medidas de asistencia post penitenciaria y apoyo familiar. Las personas sujetas a una sanción penal o que hayan cumplido esta, tendrán derecho a ser asistidas en su proceso de preparación y posterior egreso del sistema de ejecución penal, a fin de facilitar objetivos como la recuperación de sus lazos familiares, el acceso al mercado laboral, instituciones educativas, sistemas de seguridad social, salud y vivienda. El Estado debe mitigar los efectos adversos de la privación de libertad mediante medidas adecuadas de apoyo para la familia y comunidad de la persona sujeta a esta; en especial, a quienes estén bajo su cuidado y dependencia.”

Indicación Nº 482 de CC Caiguan para sustituir el epígrafe del “Artículo 149.- Derecho a petición” por el del siguiente tenor: “Artículo 149.- Derecho a petición, comunicación y visitas”.

Indicación Nº 488 de CC Caiguan para sustituir el “Artículo 150 A.- El derecho a la reinserción social”, por uno del siguiente tenor:

“Artículo 150 A. Derecho a la inserción social. Las personas condenadas a una sanción penal tienen derecho a la inserción social. El Estado garantizará que la ejecución de la pena posibilite el desistimiento delictual mediante el trato basado en el enfoque de derechos humanos y de género, la pertinencia cultural y la implementación de programas de justicia restaurativa.

Las personas que hayan cumplido una sanción penal tienen derecho a la eliminación de sus antecedentes penales, sin más trámites y excepciones que señale la ley.”

IV.- PROPUESTA CONSTITUCIONAL

Como consecuencia de la deliberación y votación antes expuesta, cuyo detalle puede consultarse en las respectivas actas disponibles en el enlace: https://www.cconstituyente.cl/comisiones/comision_sesiones.aspx?prmID=30 la Comisión recomendó, con fecha 4 de abril de 2022, aprobar las siguientes normas constitucionales:

“§ Justicia Ambiental

Artículo 1.- Tribunales Ambientales. Los Tribunales Ambientales conocen y resuelven las acciones de impugnación de la legalidad de los actos administrativos que se pronuncien sobre materia ambiental, de la acción de Reparación por Daño Ambiental y de la Acción de Tutela Ambiental y de los Derechos de la Naturaleza.

Habrá al menos un Tribunal Ambiental en cada Región del país y se constituirán de forma unipersonal. Para decidir los conflictos de su competencia, deberán tener en consideración los principios ambientales presentes en esta Constitución y los Tratados Internacionales ratificados y vigentes en materia ambiental.

Las acciones para impugnar la legalidad de los actos administrativos que se pronuncien sobre materia ambiental, podrán interponerse directamente a los

Tribunales Ambientales, sin que pueda exigirse el agotamiento previo de la vía administrativa.

La ley dispondrá medidas especiales que posibiliten materialmente el acceso a la Justicia Ambiental a aquellas personas, grupos, comunidades o territorios vulnerables.

Artículo 2.- Mecanismos colaborativos en conflictos socioambientales.

Es deber del Estado promover e implementar mecanismos colaborativos de gestión para la prevención y solución de conflictos socioambientales, garantizando el acceso gratuito e informado, para toda persona o comunidad afectada en el ejercicio de sus derechos ambientales.

La ley asegurará la infraestructura, equipamiento e instalaciones necesarias para tal fin a nivel nacional y regional, junto con el asesoramiento profesional y técnico especializado para promover el diálogo entre todas las partes interesadas.

Capítulo [XX].- Ministerio Público

Artículo 3.- Del Ministerio Público. *El Ministerio Público es un organismo autónomo y jerarquizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene como funciones dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos que pudiesen ser constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado.*

Ejercerá la acción penal pública en representación exclusiva de la sociedad, en la forma prevista por la ley. En dichas funciones deberá velar por el respeto y promoción de los derechos humanos, considerando también los intereses de la víctima, respecto de quienes deberá adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para protegerlas, al igual que a los testigos.

Ninguna ley ni autoridad podrá en caso alguno impedir o establecer condiciones que entorpezcan el desarrollo de la investigación y el ejercicio de la acción penal pública cuando se trate de hechos que comprometan el interés público, el patrimonio de la nación o contra bienes jurídicos colectivos.

En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales.

La víctima del delito y las demás personas que determine la ley podrán ejercer igualmente la acción penal.

El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública para el ejercicio de sus funciones. La autoridad policial requerida deberá cumplir sin más trámite dichas órdenes y no podrá calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibición, a menos que ésta sea verbal, de la autorización judicial.

Las actuaciones que amenacen, priven o perturben al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura, requerirán siempre de autorización judicial previa y motivada.

Artículo 4.- De la organización y atribuciones del Ministerio Público. *Una ley determinará la organización y atribuciones del Ministerio Público, señalará las calidades y requisitos que deberán tener y cumplir las y los fiscales para su nombramiento y las causales de su remoción. Los fiscales cesarán en su cargo al cumplir los 70 años.*

Las autoridades superiores de la institución deberán siempre fundar aquellas órdenes e instrucciones dirigidas a los fiscales que puedan afectar una investigación o el ejercicio de la acción penal.

Artículo 5.- De la Fiscalía Regional. *Existirá una Fiscalía Regional en cada región del país, sin perjuicio que la ley podrá establecer más de una por región.*

Las y los fiscales regionales deberán haberse desempeñado como fiscales adjuntos durante cinco o más años, no haber ejercido como fiscal regional, haber aprobado cursos de formación especializada y poseer las demás calidades que establezca la ley.

Durarán cuatro años y una vez concluida su labor, podrán retornar a la función que ejercían en el Ministerio Público. No podrán ser reelectos ni postular nuevamente a fiscal regional.

Artículo 6.- Dirección del Ministerio Público. *La dirección superior del Ministerio Público reside en un Consejo Superior, órgano colegiado, paritario, que designará de entre sus miembros a un presidente y a un director ejecutivo.*

Artículo 7.- Del Consejo Superior del Ministerio Público. *El Consejo estará compuesto por siete miembros, designados de la siguiente manera:*

a) Tres integrantes elegidos democráticamente por las y los fiscales entre sus pares.

b) Un integrante elegido democráticamente por funcionarios y funcionarias del Ministerio Público entre sus pares.

c) Tres integrantes elegidos por el Congreso plurinacional a partir de ternas elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública. Los candidatos y candidatas no podrán haber desempeñado cargos de elección popular ni haber sido candidatos a ellos, así como tampoco podrán haber desarrollado funciones en el Gobierno o Administración del Estado en cargos que sean de exclusiva confianza del Presidente de la República, en los últimos cuatro años.

La ley establecerá el procedimiento y los requisitos que deberán reunir los consejeros del Ministerio Público. Los consejeros durarán cuatro años en sus cargos y no podrán ser reelegidos, debiendo renovarse por parcialidades en conformidad a lo que señale la ley.

La calidad de consejero es incompatible con todo otro cargo o función sea o no remunerada, con excepción de la docencia universitaria con los límites que señale la ley.

Las y los consejeros indicados en las letras a) y b) se entenderán suspendidos del ejercicio de su función mientras dure su cometido, pudiendo retornar al ejercicio de sus funciones una vez cumplido este desempeño.

Artículo 8.- Atribuciones del Consejo Superior del Ministerio Público. *El Consejo Superior del Ministerio Público tendrá las siguientes atribuciones:*

a) Dirigir el organismo, velando por el cumplimiento de sus objetivos;

b) Determinar la política de gestión profesional de las y los funcionarios del Ministerio Público.

c) Supervigilar la política de persecución penal adoptada por el Comité del Ministerio Público.

d) Evaluar y calificar permanentemente el desempeño de las y los funcionarios.

e) *Designar a su presidente, a los fiscales regionales, fiscales adjuntos y demás funcionarios del Ministerio Público en conformidad a la ley.*

f) *Ejercer la potestad disciplinaria respecto de las y los funcionarios, en conformidad a la ley.*

g) *Definir las necesidades presupuestarias, gestionando los recursos para su adecuado funcionamiento.*

h) *Las demás atribuciones que establezca la ley.*

Artículo 9.- El Presidente del Consejo. *El Presidente del Consejo del Ministerio Público dirigirá las sesiones ordinarias y extraordinarias del órgano y representará a la institución ante los demás órganos del Estado, sin perjuicio de las demás atribuciones que señale la ley.*

Artículo 10.- Del Comité del Ministerio Público. *Existirá un Comité del Ministerio Público, compuesto por el Presidente del Consejo Superior y los fiscales regionales.*

El Comité deberá fijar la política de persecución penal y los criterios de actuación para el cumplimiento de dichos objetivos, debiendo siempre velar por la transparencia y objetividad, resguardando los intereses de la sociedad y el respeto de los derechos humanos.

Artículo 11.- Fiscales Adjuntos del Ministerio Público. *Existirán fiscales adjuntos del Ministerio Público quienes ejercerán su labor autónomamente en los casos específicos que se les asignen, conforme a los límites establecidos en la Constitución y las leyes.*

Artículo 12.- De la rendición de cuentas. *El Presidente del Consejo Superior del Ministerio Público y los fiscales regionales deberán rendir, anualmente, una cuenta pública de su gestión. En el caso del Presidente del Consejo Superior, se rendirá la cuenta ante el Congreso y en el caso de los fiscales regionales, ante la Asamblea Regional.*

§ Del derecho a un proceso con todas las garantías y de la asistencia jurídica

Artículo 13.- Derecho a un proceso con todas las garantías. *Toda persona tendrá derecho a un proceso razonable y justo, adecuado a sus fines, ante un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley.*

El proceso sólo podrá ser regulado por la ley.

Toda persona tiene derecho a un proceso en que se salvaguarden las garantías mínimas que se señalan en esta Constitución, sin perjuicio de las restantes garantías procesales que se establezcan en la ley y en los tratados internacionales que se encuentren vigentes y hayan sido ratificados por Chile.

Toda persona tiene derecho a ser oída y juzgada en procesos o juicios que se resuelvan en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, en igualdad de condiciones y bilateralidad de la audiencia. Las resoluciones y sentencias judiciales que serán suficientemente motivadas, asegurándose el acceso a un recurso efectivo contra lo resuelto ante un tribunal de mayor grado jurisdiccional que determine la ley.

Los actos procesales deben estar desprovistos de formalismos innecesarios. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades no esenciales.

Toda persona tendrá derecho a la defensa en la forma que la ley señale, sin que ninguna autoridad o individuo pueda impedirlo, restringirlo o perturbarlo indebidamente. En el ejercicio de este derecho se deberá garantizar la comunicación libre y privada con quien ejerza su defensa jurídica.

La Constitución asegura a toda persona el derecho a ser asistida gratuitamente por un traductor, intérprete o facilitador, con el fin de que puedan acceder a toda la información e intervenir en el proceso, considerando todos los ajustes de procedimiento necesarios y adecuados a su persona.

Artículo 14.- Derecho a la asesoría jurídica gratuita. *Toda persona tiene derecho a la asesoría jurídica gratuita. El Estado asegura la asesoría jurídica gratuita e íntegra por parte de abogadas y abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, a toda persona que no pueda obtenerla por sí misma. La ley establecerá los medios para concretar este derecho.*

Asimismo, es deber del Estado otorgar asistencia jurídica especializada para la protección del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, especialmente cuando estos han sido sujetos de medidas de protección, procurando crear todas las condiciones necesarias para el resguardo de sus derechos.

Artículo 15.- Garantías procesales penales. *Toda persona imputada por un delito tiene derecho a las siguientes garantías mínimas:*

a) Ser presumido como inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. No se podrá presumir de derecho la responsabilidad penal.

b) A ser informada sin demora, en una lengua o idioma que comprenda y en forma detallada de sus derechos, de la naturaleza y causas de la investigación seguida contra ella y de la acusación formulada en su contra.

c) A estar presente en el juicio y a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección. Tendrá derecho a ser asistida por un defensor proporcionado por el Estado, si no pudiere defenderse por sí misma, el cual será gratuito si carece de los medios suficientes para pagarlo. El imputado tendrá derecho a ser defendido por un letrado desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra.

d) Formular las pretensiones, excepciones, alegaciones y defensas que estime oportunas.

e) A rendir las pruebas y contrastar efectivamente aquellas que le perjudiquen.

f) A guardar silencio o, en caso de consentir en prestar declaración, no ser obligada a declarar contra sí misma ni a reconocer su culpabilidad. La declaración o reconocimiento de la persona imputada solamente serán válidas si son hechas sin coacción de ninguna naturaleza y en presencia de una abogada o abogado que haya asumido su defensa. Tampoco podrán ser obligados a declarar en su contra sus ascendientes, descendientes, cónyuge, conviviente civil, y demás personas que señale la ley. El ejercicio de este derecho no ocasionará ninguna consecuencia legal adversa.

g) A impugnar de la sentencia en la forma y oportunidades establecidas en la ley, mediante un recurso accesible y eficaz.

h) La persona condenada, absuelta o sobreseída definitivamente por sentencia ejecutoriada, no podrá ser sometida a un nuevo procedimiento, investigación o persecución penal por el mismo hecho.

i) Queda prohibido todo método de investigación o de interrogación que menoscabe o coarte la libertad del imputado para declarar. En consecuencia, no podrá ser sometido a ninguna clase de coacción o amenaza.

j) Las sanciones que se apliquen deberán ser siempre proporcionales a la infracción cometida. Estará prohibida la aplicación de sanciones corporales, la pena de muerte o aquellas que establezcan una privación de libertad indefinida.

k) No podrá imponerse la pena de confiscación de bienes, sin perjuicio del comiso en los casos establecidos por las leyes. El comiso de ganancias no será considerado una pena.

Las garantías procesales mínimas precedentemente consignadas son aplicables, en lo que sea pertinente, a toda clase de procedimientos ya sea judiciales o administrativos.

Artículo 16.- Del principio de legalidad de los delitos y las penas. Ninguna persona podrá ser perseguida, castigada penalmente u objeto de una medida de seguridad penal, sino en virtud de una ley propiamente tal que haya entrado en vigor con anterioridad a la perpetración del hecho, salvo que posteriormente entre en vigencia una nueva ley favorable para el imputado.

La ley no podrá castigar ningún hecho sin que la conducta que constituye su núcleo esté expresa y determinadamente contemplada en ella.

Artículo 17.- Servicio Integral de Acceso a la Justicia. Un organismo autónomo, de carácter técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Servicio Integral de Acceso a la Justicia, tendrá por función prestar asesoría, defensa y representación jurídica letrada de calidad, así como también brindar apoyo profesional de tipo psicológico y social en los casos que corresponda.

El Servicio Integral de Acceso a la Justicia estará estructurado por las áreas de atención que establezca su ley, la cual deberá considerar a lo menos, áreas de asuntos civiles y de consumo, de defensa laboral, de asuntos de las familias, de contencioso administrativo, de personas mayores, de derechos humanos, de medio ambiente y de defensa de víctimas penales.

En lo demás, la composición, organización, funciones y atribuciones del Servicio Integral de Acceso a la Justicia será determinada por la ley, considerando criterios de paridad y equidad territorial.

Capítulo [XX].- Defensoría Penal Pública

Artículo 18.- De la Defensoría Penal Pública. La Defensoría Penal Pública es un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por función proporcionar defensa penal a los imputados por hechos que pudiesen configurar un delito que deban ser conocidos por los tribunales con competencia en lo penal, desde la primera actuación de la investigación dirigida en su contra y hasta la completa ejecución de la pena que le haya sido impuesta, y que carezcan de defensa letrada.

Estará facultada para denunciar al Estado ante los Organismos Internacionales de Derechos Humanos, cuando en el curso de las investigaciones y procedimientos penales en que intervenga, constate violaciones de derechos fundamentales, en coordinación con otros órganos del Estado.

La ley determinará la organización y atribuciones de la Defensoría Penal Pública, debiendo garantizarse su independencia externa.

Artículo 19.- De la defensa penal pública. La función de defensa penal pública será ejercida exclusivamente por defensoras y defensores penales públicos. Los servicios de defensa jurídica que preste la Defensoría Penal Pública no podrán ser licitados o delegados en abogados particulares, sin perjuicio de la contratación excepcional que pueda realizar en los casos y forma que establezca la ley.

Artículo 20.- Dirección de la Defensoría Penal Pública. La dirección superior de la Defensoría Penal Pública reside en un Consejo Superior, órgano colegiado, paritario, que designará de entre sus miembros a un presidente y a un director ejecutivo.

Artículo 21.- Del Consejo Superior de la Defensoría Penal Pública. El Consejo Superior estará integrado por siete integrantes designados de la siguiente manera:

- a) Tres integrantes elegidos democráticamente por los defensores y defensoras entre sus pares.
- b) Un integrante elegido democráticamente por funcionarios y funcionarias de la Defensoría Penal Pública entre sus pares.
- c) Tres integrantes elegidos por el Congreso plurinacional a partir de ternas elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública. Los candidatos y candidatas no podrán haber desempeñado cargos de elección popular ni haber sido candidatos a ellos, así como tampoco podrán haber desarrollado funciones en el Gobierno o Administración del Estado en cargos que sean de exclusiva confianza del Presidente de la República, en los últimos cuatro años.

La ley establecerá el procedimiento y los requisitos que deberán reunir los consejeros de la Defensoría Penal Pública. Los consejeros durarán cuatro años en sus cargos y no podrán ser reelegidos, debiendo renovarse por parcialidades en conformidad a lo que señale la ley.

La calidad de consejero es incompatible con todo otro cargo o función sea o no remunerada, con excepción de la docencia universitaria con los límites que señale la ley.

Las y los consejeros indicados en las letras a) y b) se entenderán suspendidos del ejercicio de su función mientras dure su cometido, pudiendo retornar al ejercicio de sus funciones una vez cumplido este desempeño.

Artículo 22.- Atribuciones del Consejo Superior de la Defensoría Penal Pública. El Consejo Superior de la Defensoría Penal Pública tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Dirigir el organismo, velando por el cumplimiento de sus objetivos;
- b) Determinar la política de gestión profesional de las y los funcionarios de la Defensoría Penal Pública.
- c) Evaluar y calificar permanentemente el desempeño de las y los funcionarios.
- d) Designar al defensor nacional y a los defensores regionales en conformidad a la ley.
- e) Ejercer la potestad disciplinaria respecto de las y los funcionarios, en conformidad a la ley.
- f) Definir las necesidades presupuestarias, gestionando los recursos para su adecuado funcionamiento.
- g) Las demás atribuciones que establezca la ley.

Artículo 23.- Del Defensor o Defensora Nacional. La o el Defensor Nacional dirigirá las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Superior de la Defensoría Penal Pública y representará a la institución ante los demás órganos del Estado, sin perjuicio de las demás atribuciones que señale la ley.

§ De la Defensoría del Pueblo

Artículo 24.- Defensoría del Pueblo. Un organismo autónomo, de carácter técnico, con personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio y titularidad unipersonal denominada Defensoría del Pueblo tendrá por finalidad la promoción, protección y colaboración en la defensa de los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución, en los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos y en las leyes, ante los actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y de entidades privadas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública, en los términos que establezca la ley respectiva.

La Defensoría del Pueblo velará siempre por el resguardo efectivo del interés ciudadano en la gestión y finalidad que la Constitución y las leyes confieren a dichos órganos y entidades.

La ley determinará la organización, funciones, financiamiento y atribuciones de la Defensoría del Pueblo.

El presupuesto de la Defensoría del Pueblo estará fijado en una glosa especial del presupuesto del Estado para el desempeño de sus funciones.

Artículo 25.- Actuación de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo actuará de manera gratuita y simplificada y ejercerá sus atribuciones, de oficio o a petición de parte, en favor de las personas, agrupaciones o pueblos, según sea el caso.

Las autoridades estarán obligadas a colaborar con los requerimientos necesarios para la libre función de la Defensoría del Pueblo, la que podrá acceder a la información reservada de las instituciones, sin obstáculo alguno, y podrá constituirse en dependencias de los órganos objeto de fiscalización.

Artículo 26.- Atribuciones de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo tendrá, a lo menos, las siguientes atribuciones:

1. Supervigilar, en relación a su mandato constitucional, a los órganos del Estado y entidades privadas.
2. Formular recomendaciones a los órganos del Estado y entidades privadas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública, en materias de su competencia, las que no serán vinculantes.
3. Realizar acciones de seguimiento y monitoreo respecto de las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales en materia de derechos humanos y las sentencias dictadas en contra del estado por tribunales internacionales.
4. Tramitar quejas o reclamos a solicitud de cualquier persona o agrupación que lo solicite ante el organismo que corresponda, el que estará siempre obligado a proporcionarle la información y colaboración necesaria para su solución.
5. Practicar mediaciones o buenos oficios entre las personas y los organismos públicos o entidades privadas, en materias de su competencia.

6. Litigar cuando se identifiquen patrones de violación de derechos humanos, interponiendo las acciones y recursos que esta Constitución y las leyes establecen, incluidas las de naturaleza colectiva y administrativa, que determine su ley.
7. Interponer acciones legales ante los tribunales de justicia respecto de hechos que revistan carácter de crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra, tortura, desaparición forzada de personas, y demás que establezca la ley.
8. Custodiar y preservar los antecedentes reunidos por comisiones de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
9. Educar en derechos humanos.
10. Iniciativa de ley en materias de su competencia.
11. Las demás que fije la ley.

La Defensoría del Pueblo ejercerá plenamente sus atribuciones en todo tiempo y lugar, incluido durante la vigencia de los estados de excepción que se establezcan.

Artículo 27.- Defensor del Pueblo. La Defensoría del Pueblo estará a cargo de una Defensora o de un Defensor que será designado por acuerdo de la mayoría absoluta de las y los miembros en ejercicio del Congreso, según proposición que efectúen las organizaciones sociales y de derechos humanos, en la forma y cumpliendo los requisitos que determine la ley.

El procedimiento de las organizaciones sociales y de derechos humanos deberá asegurar que las personas propuestas por las organizaciones cumplan los requisitos de experiencia comprobable, trayectoria, pluralismo, compromiso y conocimiento en materia de derechos humanos.

La Defensora o el Defensor del Pueblo durará un período de cinco años en el ejercicio del cargo. Sólo podrá ser reelegido, por una vez para un nuevo período. Al cesar su mandato y durante los dos años siguientes, no podrá optar a ningún cargo de elección popular ni de exclusiva confianza de alguna autoridad.

Gozará de inamovilidad en su cargo y será inviolable en el ejercicio de sus atribuciones. Cesará en su cargo únicamente por condena por crimen o simple delito, renuncia, enfermedad incompatible con el ejercicio de la función y por remoción. Sólo podrá ser removido por el Congreso, por iniciativa propia o del número de ciudadanos/as que determine la ley orgánica, con un quórum igual o superior al de su designación, por notable abandono de deberes o por conducta incompatible con la ética pública, los valores democráticos o los derechos humanos, en la forma que establezca la ley.

La Defensoría del Pueblo rendirá cuenta pública anual ante la ciudadanía, sin perjuicio del informe que deberá remitir una vez al año al Congreso, el que también será público.

Artículo 28.- Organización de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo se organizará internamente, de manera paritaria, con equidad territorial y con la participación de los pueblos indígenas, a través de defensorías regionales y defensorías especializadas, que funcionarán en forma desconcentrada, con autonomía relativa, en conformidad a lo que señale su ley.

Dentro de las defensorías especializadas se contemplarán áreas de derechos de niños, niñas y adolescentes; de mujeres, disidencias y diversidades sexuales; de personas mayores; de personas de pueblos originarios y afrodescendientes; de personas con discapacidad; de personas privadas de libertad;

de personas migrantes, refugiadas y apátridas, sin perjuicio de las demás áreas que señale la ley.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo contará con consejos consultivos nacionales, regionales y comunales y de los pueblos indígenas, en los términos que establezca la ley.

§ De la Defensoría de la Naturaleza

Artículo 29.- La Defensoría de la Naturaleza. Es un organismo técnico, autónomo, de derecho público, paritario, plurinacional, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, la que se regulará por estas normas y aquellas que la ley orgánica establezca.

La Defensoría de la Naturaleza tendrá por objeto la difusión, prevención, promoción, defensa y protección de los Derechos de la Naturaleza, de los animales y los derechos humanos ambientales garantizados en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales en materia ambiental, derechos de la Naturaleza y de los animales vigentes en Chile.

La Defensoría velará por el interés colectivo. Para el cumplimiento de sus fines deberá coordinar con la Defensoría de los Pueblos y con los demás órganos estatales, quienes deberán colaborar con aquellos requerimientos relacionados con el ámbito de sus funciones, de acuerdo a los principios constitucionales del buen vivir, in dubio pro-natura, intergeneracional, precautorio, restaurativo, y demás contemplados en la Constitución, las leyes y en los instrumentos internacionales vigentes en Chile.

Artículo 30.- Sus atribuciones y funciones serán:

1. Representar judicial y extrajudicialmente tanto a la Naturaleza, como a las personas, de oficio o a petición de parte, ejerciendo las acciones administrativas, judiciales y cautelares que correspondan según su mandato, ante los organismos pertinentes para el cumplimiento de sus objetivos.
2. Recibir denuncias de personas naturales, personas jurídicas, comunidades y demás organizaciones que quieran proteger los derechos de la Naturaleza, de los animales y derechos humanos ambientales, procurando interponer las acciones que corresponda y/o realizar las coordinaciones que se requieran para asegurar la restitución al Estado de derecho.
3. Velar por el establecimiento de medidas de restauración y reparación del daño ambiental producido.
4. Velar por el cumplimiento y ejecución de las funciones de los distintos organismos del Estado en materia ambiental, participación y consulta indígena, previstas en la ley, en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales.
5. Velar por la participación de las comunidades para que puedan ser consultadas y consideradas sus opiniones en las decisiones que impliquen una afectación a los derechos de la Naturaleza.
6. Promover la adopción, firma o ratificación, según sea el caso, de las declaraciones, pactos y convenios internacionales, y proponer la implementación en la legislación nacional de los tratados internacionales que se relacionen con su competencia.
7. Promover una cultura transversal de respeto a los derechos de la Naturaleza, de los animales y derechos humanos ambientales en toda la sociedad y la institucionalidad pública.
8. Velar por el cumplimiento de sentencias y equivalentes jurisdiccionales que se refieran a la protección, reparación y/o restauración del medio ambiente.

9. *Rendir informe anual al Congreso del cumplimiento de su función o cuando le sea requerido.*
10. *Brindar orientación y asistencia a cualquier persona, comunidad, pueblo u organización que la requiera, para el ejercicio y defensa de los derechos ambientales y la Naturaleza en materias de su competencia.*
11. *Representar a las comunidades o grupos de personas ante los organismos internacionales en todos aquellos casos que correspondan.*
12. *Informar como amicus curiae en las materias relativas a su competencia.*
13. *Todas aquellas atribuciones y facultades establecidas por la Ley.*

Artículo 31.- Unidad de producción de conocimiento e investigación.

Existirá una unidad de producción de conocimiento e investigación cuyo objeto será apoyar aquellas causas en las que asuma patrocinio y demás fines de esta institución.

Artículo 32.- *La Defensoría de la Naturaleza se compondrá de oficinas regionales a cargo de una defensora o defensor de la Naturaleza, cuya dirección será descentralizada, colegiada, paritaria y plurinacional, mediante un Consejo Nacional, el cual coordinará interna y externamente su funcionamiento. Este consejo estará compuesto por miembros electos de entre sus pares y su orgánica y funcionamiento serán regulados por ley.*

Artículo 33.- *Un Consejo Consultivo se encargará de orientar la estrategia de la Defensoría de la Naturaleza. La ley regulará su organización, funcionamiento, financiamiento y competencias.*

Artículo 34.- *La defensora o defensor regional de la Naturaleza durará 5 años en su cargo, será nombrada en conformidad a la unidad legislativa intrarregional que esta Constitución establezca, debiendo rendir cuentas ante dicha entidad, la que a su vez estará facultada para removerles de su cargo, conforme a la ley que la regule.*

§ Del Consejo Autónomo del Medio Ambiente

Artículo 35.- Del Consejo Autónomo del Medio Ambiente. *El Consejo del Medio Ambiente es un órgano colegiado, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de llevar a cabo la evaluación de impacto ambiental de proyectos, dictar la autorización final del proceso de evaluación ambiental, fiscalizar y sancionar toda clase de infracciones a las normas e instrumentos de protección ambiental, y demás facultades que establezca ley.*

El Consejo del Medio Ambiente estará dirigido por un Consejo Nacional, integrado por siete miembros, con comprobada competencia en materia ambiental, elegidos por el Congreso Nacional a partir de ternas elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública. Además, funcionará desconcentradamente a través de consejos regionales. La ley regulará, en lo demás, su integración y funcionamiento.

Se organizará conforme a los criterios de plurinacionalidad, paridad y equidad territorial.

§ Agencia Nacional del Agua

Artículo 36.- Agencia Nacional del Agua. *La Agencia Nacional del Agua es un órgano autónomo, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio,*

cuya finalidad es asegurar el uso sostenible del agua, el acceso al derecho humano al agua y al saneamiento y la conservación y preservación de sus ecosistemas asociados. Para ello, se encargará de recopilar información, coordinar, dirigir y fiscalizar la actuación de los órganos del Estado con competencias en materia hídrica.

Será el órgano encargado de proponer e implementar la Política Hídrica Nacional, para lo cual deberá elaborar y gestionar un sistema público unificado de información hídrica con enfoque integrado de cuencas, que permita garantizar las prioridades de uso establecidas en esta Constitución. Además, estará a cargo de otorgar, revisar, modificar, caducar y revocar autorizaciones de uso de agua.

Deberá fiscalizar el uso responsable y sostenible del agua y aplicar las sanciones administrativas que correspondan. Podrá determinar la calidad de los servicios sanitarios, así como las demás que señale la ley.

La Agencia Nacional del Agua financiará y otorgará asistencia técnica a los Consejos de Cuenca, teniendo asiento propio en dicho órgano. En el evento que éstos no se hayan constituido, la Agencia Nacional del Agua podrá reemplazarlos en sus funciones.

Artículo 37.- Del Director Nacional. *La Agencia Nacional del Agua tendrá una o un Director Nacional. Será nombrado a proposición de la o el Presidente de la República, por acuerdo del Congreso Nacional adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, previo llamado a audiencias públicas, por un período de 5 años y no podrá ser designado por un nuevo período. La designación deberá realizarse a partir de una propuesta plurinominal seleccionada por el Consejo de Alta Dirección Pública. Los candidatos y candidatas no podrán haber desempeñado cargos de elección popular ni haber sido candidatos a ellos, así como tampoco podrán haber desarrollado funciones en el Gobierno o Administración del Estado en cargos que sean de exclusiva confianza del Presidente de la República, en los últimos cuatro años.*

Para ser designada, la o el Director Nacional de la Agencia Nacional del Agua, deberá contar con, al menos, diez años de trayectoria en el ámbito de la gestión de recursos hídricos y reunir los demás requisitos que establezca la ley.

La ley regulará las instancias de coordinación entre la Agencia Nacional del Agua y el Ejecutivo, especialmente respecto de la Política Hídrica Nacional. Así como también, la organización, estructura, competencias y funcionamiento de la Agencia.

§ Consejo Nacional para la Transición Productiva Socio-ecológica

Artículo 38.- Consejo de Transformación Productiva. *El Consejo de Transformación Productiva es un organismo autónomo encargado de definir la Estrategia Nacional de Transformación Productiva Socio-Ecológica, en coordinación con la institucionalidad pública, sea ésta a nivel estatal, regional o local. Este Consejo deberá coordinar la elaboración de las Estrategias Regionales de Transformación Productiva con los correspondientes gobiernos regionales.*

La organización y atribuciones del Consejo serán determinadas por la ley. Con todo, esta deberá disponer los procedimientos de elaboración de las estrategias así como los mecanismos de rendición de cuentas para la evaluación de su implementación. Asimismo, dispondrá la incidencia en las definiciones presupuestarias y el procedimiento de seguimiento de las responsabilidades institucionales definidas en las estrategias nacionales o regionales.

El Consejo formará parte en el nombramiento de la Dirección de agencias y empresas públicas estratégicas para la transformación productiva del país, de la manera que lo disponga la ley.

El Consejo será paritario y plurinacional, y estará conformado proporcionalmente por representantes del poder ejecutivo y de los gobiernos regionales, junto con las y los principales actores que se desempeñan en el ámbito del fomento productivo, innovativo, educacional, científico, social y ecológico. Los nombramientos serán realizados por parcialidades, y en estos participaran el poder ejecutivo y legislativo según lo señale la ley.

§ Banco Central

Artículo 39.- Del Banco Central. *El Banco Central es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, encargado de formular y conducir la política monetaria.*

La ley determinará su organización, atribuciones y sistemas de control, así como la determinación de instancias de coordinación entre el Banco y el Gobierno.

Artículo 40.- Objeto del Banco Central. *Le corresponderá en especial al Banco Central, para contribuir al bienestar de la población, velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, en coordinación con las principales orientaciones de política económica definidas con el Gobierno.*

Para el cumplimiento de sus objetivos, el Banco Central deberá considerar la estabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la protección del empleo, la diversificación productiva, el cuidado del medioambiente y patrimonio natural y los principios que señale la Constitución y la ley.

Artículo 41.- Atribuciones. *Son atribuciones del Banco Central la regulación de la cantidad de dinero en circulación, la ejecución de operaciones de crédito y cambios internacionales, como, asimismo, la dictación de normas en materia monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales.*

Artículo 42.- De las limitaciones. *El Banco Central sólo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, sean éstas públicas o privadas. De ninguna manera podrá otorgar a ellas su garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas.*

Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos e indirectos del Banco Central.

Sin perjuicio de lo anterior, en situaciones excepcionales y transitorias en las que así lo requiera la preservación del normal funcionamiento de los pagos internos y externos, el Banco Central podrá comprar durante un período determinado y vender en el mercado secundario abierto, instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, en conformidad a la ley.

Artículo 43.- Rendición de cuentas. *El Banco rendirá cuenta periódicamente al Congreso sobre la ejecución de las políticas a su cargo, respecto de las medidas y normas generales que adopte en el ejercicio de sus funciones y atribuciones y sobre los demás asuntos que se le soliciten mediante informes u otros mecanismos que determine la ley.*

Artículo 44.- Del Consejo del Banco Central. La dirección y administración superior del Banco estará a cargo de un Consejo, al que le corresponderá cumplir las funciones y ejercer las atribuciones que señale la Constitución y la ley.

El Consejo estará integrado por siete consejeras y consejeros designados por la mayoría de los integrantes del Congreso, a partir de ternas propuestas por el Consejo de la Alta Dirección Pública. Durarán en el cargo por un período de nueve años, no reelegibles, renovándose por parcialidades cada tres años en conformidad a la ley.

Los consejeros del Banco Central deben ser profesionales de comprobada idoneidad y trayectoria en materias relacionadas con las competencias de la institución. Para su designación se considerarán criterios de paridad de género y representación territorial.

El Consejo elegirá a su Presidencia la que será ejercida por tres años o el tiempo menor que le reste como consejero. Quien presida el Consejo podrá ser reelegido para un nuevo periodo en el cargo.

La ley determinará los requisitos, responsabilidades, inhabilidades e incompatibilidades para las y los consejeros del Banco.

Artículo 45.- Responsabilidad de las y los consejeros. Las y los integrantes del Consejo podrán ser destituidos de sus cargos por resolución de la mayoría de los integrantes del pleno de la Corte Suprema, previo requerimiento de la mayoría de quienes ejerzan como consejeros o de un tercio de los congresistas, conforme al procedimiento que establezca la ley.

La remoción sólo podrá fundarse en la circunstancia de que el consejero afectado hubiere realizado actos graves en contra de la probidad pública, o haber incurrido en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades establecidas en la Constitución o la ley, o haya concurrido con su voto a decisiones que afectan gravemente la consecución del objeto del Banco.

La persona destituida no podrá ser designada nuevamente como integrante del Consejo, ni ser funcionaria o funcionario del Banco Central o prestarle servicios, sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley.

Artículo 46.- Inhabilidades e incompatibilidades de consejeras y consejeros. No podrán integrar el Consejo quienes en los dieciocho meses anteriores a su designación hayan participado en la propiedad o ejercido como director, gerente o ejecutivo principal de una empresa bancaria, administradora de fondos, o cualquiera otra que preste servicios de intermediación financiera, sin perjuicio de las demás inhabilidades que establezca la ley. Una vez que hayan cesado en sus cargos, los integrantes del consejo tendrán la misma incompatibilidad por un periodo de dieciocho meses.

Capítulo [XX].- Contraloría General de la República

Artículo 47.- De la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República es un órgano técnico, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargada de velar por el cumplimiento del principio de probidad

en la función pública, ejercer el control de constitucionalidad y legalidad de los actos de la Administración del Estado, incluidos los gobiernos regionales, locales y demás entidades, organismos y servicios que determine la ley.

Estará encargado de fiscalizar y auditar el ingreso, cuentas y gastos de los fondos públicos.

En el ejercicio de sus funciones, no podrá evaluar los aspectos de mérito o conveniencia de las decisiones políticas o administrativas.

La ley establecerá la organización, funcionamiento, planta, procedimientos y demás atribuciones de la Contraloría General de la República.

Artículo 48.- De la dirección de la Contraloría General de la República. *La dirección de la Contraloría General de la República estará a cargo de una Contralora o Contralor General, quien será designado por el Congreso, a partir de una terna elaborada por el Consejo de Alta Dirección Pública.*

Un Consejo de la Contraloría, cuya conformación y funcionamiento determinará la ley de la Contraloría, aprobará anualmente el programa de fiscalización y auditoría de servicios públicos, determinando servicios o programas que, a su juicio, deben necesariamente ser incluidos en el programa referido.

Los dictámenes que modifican la jurisprudencia administrativa de la Contraloría, deberán ser consultados ante el Consejo.

Artículo 49.- Del control de constitucionalidad y legalidad de la Contraloría. *En el ejercicio del control de constitucionalidad y legalidad, la Contraloría General tomará razón de los decretos, resoluciones y otros actos administrativos o representará su ilegalidad. Sin embargo, deberá darles curso cuando la o el Presidente de la República insista con la firma de todos sus Ministros, debiendo enviar copia de los respectivos decretos al Congreso.*

En ningún caso dará curso a los decretos de gastos que excedan el límite señalado en la Constitución o la ley y remitirá copia íntegra de los antecedentes al Congreso.

Tratándose de la representación por inconstitucionalidad no procederá insistencia y el pronunciamiento de la Contraloría será reclamable ante el tribunal que señale la ley.

Además, le corresponderá tomar razón de los decretos con fuerza de ley, debiendo representarlos, cuando ellos excedan o contravengan la respectiva ley delegatoria.

Respecto de los decretos, resoluciones y otros actos administrativos de entidades territoriales que, de acuerdo a la ley, deban tramitarse por la Contraloría, la toma de razón corresponderá a la respectiva contraloría regional. Los antecedentes que debieran remitirse, en su caso, lo serán a la correspondiente asamblea regional.

Artículo 50.- De la potestad para emitir dictámenes y la facultad fiscalizadora de la Contraloría General de la República. *La Contraloría General de la República podrá emitir dictámenes obligatorios para toda autoridad, funcionario o trabajador de cualquier órgano integrante de la Administración del Estado, de las regiones y de las comunas, incluyendo los directivos de empresas públicas o sociedades en las que tenga participación una entidad estatal o cualquier otra entidad territorial.*

Los órganos de la Administración del Estado, los Gobiernos Regionales y locales, órganos autónomos, empresas públicas, sociedades en que el Estado tenga

participación, personas jurídicas que dispongan de recursos fiscales o administren bienes públicos, y los demás que defina la ley, estarán sujetos a la fiscalización y auditorías de la Contraloría General de la República. La ley regulará el ejercicio de estas potestades fiscalizadoras y auditoras.

Artículo 51.- De las Contralorías Regionales. *La Contraloría General de la República funcionará desconcentradamente en cada una de las regiones del país mediante Contralorías Regionales.*

La dirección de cada contraloría regional estará a cargo de una o un Contralor Regional, designado por la o el Contralor General de la República.

En el ejercicio de sus funciones deberán mantener la unidad de acción, con el fin de aplicar un criterio uniforme en todo el territorio del país.

La ley determinará las demás atribuciones de las Contralorías Regionales y regulará su organización y funcionamiento.

Artículo 52.- Condición para el pago de las Tesorerías del Estado. *Las Tesorerías del Estado no podrán efectuar ningún pago sino en virtud de un decreto o resolución expedido por autoridad competente, en que se exprese la ley o la parte del presupuesto que autorice aquel gasto. Los pagos se efectuarán considerando, además, el orden cronológico establecido en ella y previa refrendación presupuestaria del documento que ordene el pago.*

Capítulo XX. Tribunales Electorales y Servicio Electoral

§ Servicio Electoral

Artículo 53.- Del Servicio Electoral. *Un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Servicio Electoral, ejercerá la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios, del cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, de las normas sobre organizaciones políticas y las demás funciones que señale la ley.*

La dirección superior del Servicio Electoral corresponderá a un Consejo Directivo, el que ejercerá de forma exclusiva las atribuciones que le encomienden la Constitución y las leyes. Dicho Consejo estará integrado por cinco consejeras y consejeros designados por la mayoría absoluta de los integrantes del Congreso, a partir de ternas propuestas por el Consejo de la Alta Dirección Pública. Las y los consejeros durarán ocho años en sus cargos, no podrán ser reelegidos y se renovarán por parcialidades cada cuatro años.

Las y los consejeros deberán ser profesionales de comprobada idoneidad para el cargo. No podrán haber sido candidatas o candidatos, desempeñado un cargo de elección popular, ni haber ocupado cargos de exclusiva confianza en los cuatro años anteriores a su nombramiento.

Las y los consejeros sólo podrán ser removidos por la Corte Suprema a requerimiento de la o el Presidente de la República o de un tercio de los miembros en ejercicio del Congreso por infracción grave a la Constitución o a las leyes, incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en pleno especialmente convocado al efecto y, para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus juezas y jueces en ejercicio.

§ Tribunales Electorales

Artículo 54.- Del Tribunal Calificador de Elecciones. El Tribunal Calificador de Elecciones conocerá del escrutinio general y de la calificación de las elecciones de las autoridades electas por votación popular a nivel nacional, resolverá las reclamaciones que se suscitaren y proclamará a los que resulten elegidas y elegidos.

Además, conocerá y resolverá los reclamos administrativos que se entablen contra actos del Servicio Electoral y las decisiones emanadas de tribunales supremos u órganos equivalentes de las organizaciones políticas.

Dicho Tribunal conocerá, asimismo, de los plebiscitos nacionales, y tendrá las demás atribuciones que determine la ley.

El Tribunal valorará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

Estará constituido por cinco juezas y jueces, designados en base a criterios de paridad y equidad territorial por el Consejo de la Justicia, los cuales deberán postular en la forma y oportunidad que determine la ley respectiva.

Las juezas y los jueces del Tribunal Calificador de Elecciones durarán seis años en sus funciones.

Una ley regulará la organización y funcionamiento del Tribunal Calificador de Elecciones, plantas, remuneraciones y estatuto del personal.

Artículo 55.- De los Tribunales Electorales Regionales. Habrá tribunales electorales regionales encargados de conocer el escrutinio general y la calificación de las elecciones de nivel regional y comunal, así como resolver las reclamaciones a que dieran lugar y proclamar las candidaturas que resultaren electas. Conocerán, asimismo, de los plebiscitos regionales y comunales, sin perjuicio de las demás atribuciones que determine la ley.

Sus resoluciones serán apelables y su conocimiento corresponderá al Tribunal Calificador de Elecciones en la forma que determine la ley. Igualmente, les corresponderá conocer de la calificación de las elecciones de carácter gremial y de las que tengan lugar en aquellas organizaciones que la ley señale.

Los tribunales electorales regionales estarán constituidos por tres juezas y jueces, designados en base a criterios de paridad y equidad territorial por el Consejo de la Justicia, los cuales deberán postular en la forma y oportunidad que determine la ley respectiva.

Las juezas y los jueces de los tribunales electorales regionales durarán seis años en sus funciones.

Estos tribunales valorarán la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

Una ley regulará la organización y funcionamiento de los tribunales electorales regionales, plantas, remuneraciones y estatuto del personal.

Artículo 56.- De la gestión y superintendencia. La gestión administrativa y la superintendencia directiva y correccional del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales regionales corresponderán al Consejo de la Justicia.

Artículo 57.- Consejo del Servicio Civil. El Consejo del Servicio Civil será un organismo autónomo de la Administración estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de resguardar los principios de no discriminación, mérito y capacidad en los procedimientos de selección, desarrollo y cese de los cargos públicos que componen el servicio civil, así como su imparcialidad, agilidad y

transparencia. Solo se reservará la información cuya difusión pudiera afectar el adecuado funcionamiento de estos procedimientos, en conformidad con la ley.

Integran el servicio civil los cargos de la Administración Pública en el nivel central, regional y municipal, que, bajo la dirección del gobierno correspondiente a cada nivel, implementan las políticas públicas y proveen o garantizan, en su caso, la prestación de servicios públicos, en forma continua y permanente. Su desempeño deberá ser objetivo y políticamente neutral, en concordancia con el carácter profesional y técnico que les es propio. Se excluyen del servicio civil los cargos de exclusiva confianza que son parte del gobierno central, regional y municipal, y que son declarados como tales por esta Constitución o la Ley atendiendo a la naturaleza de sus funciones.

La dirección superior del Consejo del Servicio Civil estará a cargo de un Consejo Directivo de 7 integrantes que hayan destacado en el ámbito de la gestión pública y tengan, al menos, 15 años de experiencia profesional. 3 integrantes serán nombrados por la Presidencia de la República, a partir de una terna confeccionada por el Congreso. 4 integrantes serán nombrados por el Congreso, a partir de una terna confeccionada por la Presidencia de la República. Los consejeros elegirán de entre ellos a un Presidente y durarán 5 años, pudiendo ser renovados por una vez. Sólo podrán ser removidos anticipadamente por infracción grave de la Constitución o la ley o mal desempeño declarados por la Corte Suprema.

El Consejo Directivo:

- a) Conducirá los procesos de selección a partir de las cuales serán nombrados los directivos de los servicios públicos que integren el servicio civil y aprobará su remoción anticipada, que deberá fundarse en incapacidad, mal desempeño o vulneración de la ley. Tratándose de los jefes superiores de servicios, y de los demás casos que la ley y esta Constitución señalen, el Consejo Directivo definirá directamente las nóminas que se propondrán a la autoridad incluyendo en ellas a los postulantes más idóneos para el cargo que se requiera proveer;
- b) Promoverá reformas y medidas tendientes al mejoramiento de la gestión del personal del sector público, incluyendo la capacitación, la medición del desempeño y las relaciones laborales;
- c) Impartirá normas de aplicación general en materias de gestión y desarrollo de personas en la Administración Pública;
- d) Velará por la correcta aplicación de la normativa del servicio civil denunciando, ante las autoridades respectivas, las irregularidades de que conozca, y
- e) Desempeñará las demás funciones que señalen esta Constitución y la ley.

La Ley regulará los demás aspectos de la composición, remoción y funcionamiento del Consejo Directivo.

§ Servicios Notariales y Registrales de carácter público

Artículo 58.- Es deber del Estado el resguardo de la fe pública, la seguridad del tráfico jurídico, la regulación y supervigilancia en la formación de documentos que tengan valor probatorio o el carácter de auténticos, debiendo garantizar el acceso de la población a estos.

La ley establecerá el pago de tasas o aranceles por las actuaciones que involucren el resguardo de la fe pública en atención a la cuantía y materia del asunto de que se trate.

Artículo 59.- Del Servicio Nacional de Fe Pública. El Servicio Nacional de Fe Pública, será el órgano encargado de la certificación y del debido registro, guarda, custodia y almacenamiento de los instrumentos públicos y privados que determine la ley.

La designación de los notarios, archiveros y conservadores del Servicio de Fe Pública se realizará de forma objetiva, transparente y en función de sus méritos. La ley regulará los requisitos de su nombramiento, inhabilidades, atribuciones y remuneraciones.

Artículo 60.- Es deber del Estado garantizar el acceso gratuito a todos los servicios auxiliares de administración de Justicia, transitando hacia un modelo digitalizado, que asegure la transparencia, publicidad, simplificación y gratuidad.

Artículo 61.- Todos servicios notariales y registrales son públicos. Sólo la ley podrá establecer el pago de tasas por actuaciones y certificaciones en atención a la cuantía y materia del asunto de que se trate. Los dineros recaudados irán a beneficio fiscal.

§ Agencia Nacional del Consumidor

Artículo 62.- La Agencia Nacional del Consumidor es un organismo autónomo, cuya finalidad es la protección de las personas en su rol de consumidoras y usuarios de bienes y servicios.

Para el debido cumplimiento de su finalidad, la Agencia Nacional del Consumidor contará con facultades fiscalizadoras, sancionatorias y regulatorias.

Su composición, organización, atribuciones y funciones serán determinadas por una ley.

§ Consejo de Verdad, Reparación y Garantías de no Repetición

Artículo 63.- Garantía de justicia y no repetición, de que nunca más un presidente abuse de su poder y le declare la guerra a su propio pueblo.

§ Del Consejo de Pueblos Indígenas

Artículo 64.- Del Consejo de Pueblos Indígenas. Existirá un órgano colegiado, autónomo, con patrimonio propio y personalidad jurídica de derecho público, en el que tendrán representación todos los pueblos y naciones preexistentes en forma que determina la ley, encargado de diseñar y promover políticas públicas respetuosas de los derechos individuales y colectivos reconocidos por la Constitución, el sistema internacional de los derechos humanos y las leyes, velando por la efectiva transversalización de los principios de plurinacionalidad e interculturalidad en la sociedad y en toda la institucionalidad estatal.

Es deber del Estado destinar el presupuesto necesario y suficiente para el adecuado cumplimiento de sus fines.

Artículo 65.- De las funciones del Consejo de Pueblos Indígenas. El Consejo de Pueblos Indígenas tendrá las siguientes funciones:

1) Participar en la planificación estratégica, creación, desarrollo e implementación de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida y el ejercicio efectivo del

derecho al desarrollo de los mismos pueblos, respetando el principio de libre determinación de cada uno de ellos y su participación mediante un procedimiento de consulta libre, previa, informada y vinculante.

2) Diseñar, dirigir, impulsar, implementar y dar cuenta de los procesos de participación y consulta indígenas conforme a la Constitución, los estándares internacionales de derechos humanos y las leyes.

3) Efectuar los nombramientos, conforme al procedimiento establecido en su ley, para todos aquellos cargos públicos que no sean de elección popular y que correspondan a cupos o escaños reservados. En caso de que la elección de los mismos dependa de otro organismo, los nombres que integren la lista sobre la cual se efectuará la elección serán propuestos por el Consejo de Pueblos Indígenas.

4) Responder requerimientos y formular recomendaciones a todos los órganos públicos respecto a las políticas que impulsan, en cuanto a la forma más adecuada de implementar los estándares consagrados en la Constitución y los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas.

5) Requerir a los órganos respectivos la adecuación de normas legales y reglamentarias que no se ajusten a los estándares establecidos en la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

6) Requerir a las Defensorías de los Pueblos Indígenas y de la Naturaleza para que ejerzan algunas de las facultades que la Constitución y la ley les encomiendan, en defensa de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y de la naturaleza.

7) Atender y responder las dudas de las comunidades y los pueblos respecto de políticas, leyes u actos administrativos a fin de encausar sus demandas antes las instituciones y garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos.

8) Sistematizar, restaurar, resguardar y difundir todos los archivos históricos y jurídicos relacionados con pueblos indígenas.

9) Las demás funciones que le encomiende la ley.

Artículo 66.- De la regulación del Consejo de Pueblos Indígenas. *La ley regulará el número de miembros y formas de integración, la planta funcionaria y la organización administrativa y territorial de acuerdo a los principios de descentralización y facilidad de acceso al servicio, observando el principio de equidad territorial, democracia interna y representación de los pueblos.*

§ Justicia Constitucional

Artículo 67.- De la justicia constitucional. *La justicia constitucional será ejercida por una Corte Constitucional, con la finalidad de garantizar la supremacía de la Constitución, bajo los principios de deferencia a los electos con potestad legislativa presunción de constitucionalidad de la ley, búsqueda de una interpretación conforme con la Constitución y no justiciabilidad de asuntos de naturaleza exclusivamente política.*

Los órganos del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones, deberán aplicar las normas, en el ámbito de sus competencias, efectuando una interpretación orientada hacia la Constitución.

La Corte Constitucional deberá interpretar la Constitución ajustada a la pertinencia cultural de los pueblos indígenas, cuando corresponda.

§ Corte Constitucional

Artículo 68.- Corte Constitucional. La Corte Constitucional es un órgano autónomo, técnico, profesional, independiente e imparcial, encargado del control de la supremacía de la Constitución, cuyas resoluciones se encuentran fundadas únicamente en razones de derecho.

Estará conformada, paritariamente y con criterios de plurinacionalidad y equidad territorial, por quince juezas y jueces, uno de los cuales será su presidenta o presidente, elegido por sus pares y que ejercerá sus funciones durante dos años.

Las juezas y los jueces de la Corte Constitucional durarán nueve años en sus cargos o hasta que cumplan setenta años, y se renovarán por parcialidades cada tres años.

Funcionará en salas preferentemente especializadas, integradas por cinco juezas o jueces, o en pleno, de conformidad a lo dispuesto por la ley.

Las juezas y los jueces de la Corte Constitucional serán elegidas y elegidos en base a criterios técnicos y de mérito profesional, de la siguiente manera:

a) Un tercio será elegido por el Congreso, de nóminas de cinco personas que, en cada caso, propondrá el Consejo de Alta Dirección Pública. Estas designaciones se efectuarán en votaciones únicas y requerirán para su aprobación del voto favorable de los tres quintos de las y los parlamentarios en ejercicio.

b) Un tercio será elegido por la Presidencia de la República, de nóminas de cinco personas que, en cada caso, propondrá el Consejo de la Justicia.

c) Un tercio será elegido de entre las juezas y los jueces del Sistema Nacional de Justicia, por votación, entre sus pares que ostenten la calidad de titulares. Las juezas y los jueces electos para el ejercicio de esta función quedarán suspendidos de sus cargos judiciales de origen en tanto se extienda éste.

Su nombramiento se realizará previa convocatoria pública, abierta y transparente del órgano que corresponda realizar la elección, con al menos seis meses de anticipación.

Las y los postulantes al cargo de juez o jueza de la Corte Constitucional deberán ser abogadas o abogados, con más de quince años de ejercicio profesional, todas y todos juristas de reconocida competencia, y que se desempeñen o hayan desempeñado como juezas o jueces del Sistema Nacional de Justicia, fiscales del Ministerio Público, defensoras o defensores penales públicos, académicas y académicos de Universidades acreditadas por el Estado, y que pertenezcan a distintas especialidades del Derecho.

Al menos dos tercios de las y los jueces de la Corte Constitucional deberán provenir y haber ejercido sus funciones, por un mínimo de cinco años, en regiones diversas a la metropolitana. A lo menos dos de sus integrantes deben provenir de pueblos indígenas.

No podrán ser jueces o juezas de la Corte Constitucional quienes se hubiesen desempeñado en cargos de elección popular, hubiesen sido candidatas o candidatos a estos, o quienes hayan desempeñado el cargo de Ministra o Ministro de Estado, u otros cargos de exclusiva confianza del gobierno, durante los seis años anteriores a la elección. De igual manera, no podrán tener impedimento alguno que los inhabilite para desempeñar el cargo de juez del Sistema Nacional de Justicia.

Una ley determinará la organización, funcionamiento, procedimientos y fijará la planta, régimen de remuneraciones y estatuto del personal de la Corte Constitucional.

Artículo 69.- Inamovilidad e independencia. Las juezas y jueces de la Corte Constitucional son independientes de todo otro poder y gozan de inamovilidad. Cesarán en sus cargos por haber cumplido su periodo, por incapacidad legal sobreviniente, por renuncia, por sentencia penal condenatoria, por remoción, enfermedad incompatible con el ejercicio de la función u otra causa establecida en la ley.

Artículo 70.- De las incompatibilidades e inhabilidades. El ejercicio del cargo de jueza o juez de la Corte Constitucional es de dedicación exclusiva. La ley determinará las demás incompatibilidades e inhabilidades para el desempeño de este cargo.

Al terminar su periodo, y durante los dos años siguientes, no podrán optar a ningún cargo de elección popular ni de exclusiva confianza de alguna autoridad.

Artículo 71.- Atribuciones de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tendrá las siguientes atribuciones, ejerciéndolas conforme a los principios referidos en el artículo De la justicia constitucional:

1. Resolver las acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes, disposiciones normativas con fuerza de ley, en contra de estatutos regionales, de autonomías territoriales indígenas y de cualquier otra entidad territorial.
2. Resolver las acciones de inconstitucionalidad por omisión de las medidas legislativas necesarias para el cumplimiento de las normas constitucionales.
3. Resolver la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los preceptos legales, que la o el juez que conoce de la gestión pendiente someta a conocimiento de la Corte Constitucional. El requerimiento sólo se iniciará a petición del tribunal que conozca del asunto, de oficio o a petición de parte, la que se tramitará como incidente y cuya resolución será inapelable.
4. Resolver la acción pública de inconstitucionalidad contra los preceptos legales que hayan sido declarados inaplicables en tres oportunidades previas, por el mismo vicio de constitucionalidad.
5. Resolver los reclamos en caso que la Presidenta o el Presidente de la República no promulgue una ley cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda. Igual atribución tendrá respecto de la promulgación de la normativa regional.
6. Pronunciarse sobre la correcta interpretación de los derechos fundamentales en la sentencia que resuelva la apelación de acciones de tutela de derechos fundamentales, cuando el asunto revista especial relevancia constitucional, en la forma que determine la ley.
7. Resolver conflictos de competencia o de atribuciones que se susciten entre las entidades territoriales autónomas, con cualquier otro órgano del Estado, o entre éstos, a solicitud de cualquiera de los antes mencionados.
8. Resolver las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia.
9. Resolver las contiendas de competencia entre la jurisdicción indígena y el sistema nacional de justicia.
10. Resolver el recurso interpuesto en contra de las decisiones de la jurisdicción indígena por vulneración de derechos humanos, interpretados interculturalmente.
11. Las demás previstas en esta Constitución y la ley.

El procedimiento, el quórum y la legitimación activa para el ejercicio de cada atribución se determinará por la ley.

Artículo 72.- De las sentencias de la Corte Constitucional y sus efectos.

Las sentencias de la Corte Constitucional se adoptarán por consenso o por la mayoría de juezas o jueces que establezca la ley. Tienen carácter vinculante, con efecto de cosa juzgada y de cumplimiento obligatorio para todos los órganos públicos, y contra ellas no cabe recurso ulterior alguno.

La Corte Constitucional sólo podrá acoger la inconstitucionalidad de una disposición legislativa o de una norma con fuerza de ley, o la inaplicabilidad de un precepto legal, cuando no sea posible interpretarlo de modo de evitar efectos inconstitucionales.

Declarada la inaplicabilidad de un precepto legal, éste no podrá ser aplicado en la gestión judicial en la que se originó la cuestión de constitucionalidad.

Cuando la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de una disposición legislativa o de una norma con fuerza de ley, la sentencia tendrá efectos derogatorios a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material de la disposición legislativa o de la norma con fuerza de ley declarada inconstitucional, mientras subsistan en la Constitución las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación con la norma ordinaria.

Si la Corte Constitucional verifica la existencia de inconstitucionalidad por omisión, lo pondrá en conocimiento del órgano legislativo competente, a fin de que éste actúe con arreglo a las formas previstas por la Constitución, para subsanar tal omisión.

§ Acciones constitucionales de tutela

Artículo 73.- Acción de tutela de derechos fundamentales. *Toda persona que por causa de un acto u omisión sufra una amenaza, perturbación o privación en el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales, podrá concurrir por sí o por cualquiera a su nombre ante el tribunal de instancia que determine la ley, el que adoptará de inmediato todas las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho. Esta acción se podrá deducir mientras la vulneración persista.*

Esta acción cautelar será procedente cuando la persona afectada no disponga de otra acción, recurso o medio procesal para reclamar de su derecho, salvo aquellos casos en que, por su urgencia y gravedad, pueda provocarle un daño grave inminente o irreparable.

Al acoger o rechazar la acción, se deberá señalar el procedimiento judicial que en derecho corresponda y que permita la resolución del asunto.

El tribunal competente podrá en cualquier momento del procedimiento, de oficio o a petición de parte, decretar cualquier medida provisional que estime necesaria, y alzarlas o dejarlas sin efecto cuando lo estime conveniente.

No podrá deducirse esta acción contra resoluciones judiciales, salvo respecto de aquellas personas que no hayan intervenido en el proceso respectivo y a quienes afecten sus resultados.

La apelación en contra de la sentencia definitiva será conocida por la Corte de Apelaciones respectiva. El recurso será conocido por la Corte Suprema si respecto a la materia de derecho objeto de la acción existen interpretaciones contradictorias sostenidas en dos o más sentencias firmes emanadas de los tribunales del Sistema Nacional de Justicia. De estimarse en el examen de admisibilidad que no existe tal

contradicción, se ordenará que sea remitido junto con sus antecedentes a la Corte de Apelaciones correspondiente para que, si lo estima admisible, lo conozca y resuelva.

Esta acción también procederá cuando por acto o resolución administrativa se prive o desconozca la nacionalidad chilena. La interposición de la acción suspenderá los efectos del acto o resolución recurrida.

Tratándose de los derechos de la naturaleza y derechos ambientales, podrán ejercer esta acción tanto la Defensoría de la Naturaleza como cualquier persona o grupo.

En el caso de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, esta acción podrá ser deducida por sus instituciones representativas, autoridades tradicionales o la Defensoría de los Pueblos.

Artículo 74.- Acción de amparo. Toda persona que sea arrestada, detenida o presa con infracción a lo dispuesto en esta Constitución o las leyes, podrá concurrir por sí o por cualquiera persona a su nombre, sin formalidades, ante la magistratura que señale la ley, a fin de que esta adopte de inmediato las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la persona afectada, pudiendo inclusive decretar su libertad inmediata.

Esa magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del tribunal competente, procediendo en todo breve y sumariamente, y corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija. Sin perjuicio de lo señalado, el tribunal deberá agotar todas las medidas conducentes a determinar la existencia y condiciones de la persona que se encontrare privada de libertad.

Esta acción también procederá respecto de toda persona que ilegalmente sufra una privación, perturbación o amenaza a su derecho a la libertad personal o seguridad individual, debiendo en tal caso adoptarse todas las medidas que sean conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Artículo 75.- Compensación por privación de libertad indebida. Toda persona que sea absuelta, sobreseída definitivamente o que no resulte condenada, será compensada por cada día que haya permanecido privada de libertad. El monto diario de compensación será fijado por la ley y su pago se realizará mediante un procedimiento simple y expedito.

La compensación no procederá cuando la privación de libertad se haya decretado por una causal fundada en una conducta efectiva del imputado.

Artículo 76.- Acción de indemnización por error judicial. Toda persona que haya sido condenada por sentencia dictada con error injustificado o falta de servicio judicial, tendrá derecho a ser indemnizada de todos los perjuicios que el proceso y la decisión condenatoria le hubieren causado.

Si todo o parte del daño deriva de la privación de libertad, la compensación, que siempre se podrá exigir en conformidad al artículo anterior, será imputada a la presente indemnización.

La misma indemnización procederá por las actuaciones o decisiones administrativas derivadas del funcionamiento judicial que, con falta de servicio, generen daño.

§ Reforma y Reemplazo de la Constitución

Título I. Reforma constitucional

Artículo 77.- Procedimiento de reforma constitucional. Los proyectos de reforma a la Constitución podrán ser iniciados por mensaje presidencial, moción parlamentaria o por iniciativa de los pueblos indígenas o por iniciativa popular.

Los proyectos de reforma constitucional iniciados por las y los ciudadanos deberán contar con el patrocinio en los términos señalados en esta Constitución.

Para su aprobación, el proyecto de reforma necesitará del voto conforme al quórum de cuatro séptimos de las y los parlamentarios en ejercicio.

Todo proyecto de reforma constitucional deberá señalar expresamente de qué forma se agrega, altera, reemplaza o deroga una norma de la Constitución.

En lo no previsto en este Capítulo, serán aplicables a la tramitación de los proyectos de reforma constitucional las normas sobre formación de la ley, debiendo respetarse siempre el quórum señalado en los incisos anteriores.

Los proyectos de reforma no podrán suprimir derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución.

Artículo 78.- Los proyectos de reforma a la Constitución podrán ser iniciados además por los pueblos indígenas cuando se trate de temas que versen sobre plurinacionalidad, libre determinación y demás derechos colectivos de los pueblos indígenas. Para ello, deberán contar con la cantidad de patrocinios respecto al padrón electoral indígena, en conformidad a esta Constitución.

Artículo 79.- Convocatoria a referendo. La Cámara de Diputados y Diputadas deberá convocar a referéndum ratificatorio tratándose de proyectos de reforma constitucional aprobados por ella que recaigan sobre las siguientes materias:

- (a) alteración de la forma de Estado;
- (b) modificación del período presidencial y del de los y las integrantes del Congreso Nacional;
- (c) reformas a los capítulos sobre principios fundamentales y derechos fundamentales;
- (d) las regulaciones de este capítulo.

La reforma constitucional aprobada por la Cámara se entenderá ratificada si alcanza la mayoría de los votos en el referéndum. El sufragio en este referendo será obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en Chile.

Es deber del Congreso Nacional y de los órganos del Estado descentralizados dar adecuada publicidad a la propuesta de reforma que se someterá a referendo, debiendo promover el involucramiento público a través de distintas vías en su discusión. El deber de publicidad deberá desarrollarse dentro de los 90 días anteriores a la celebración del referéndum. La ley regulará los deberes específicos, así como los mecanismos de participación, a que se refiere este inciso.

Artículo 80.- Referéndum popular de reforma constitucional. Un mínimo equivalente al diez por ciento de la ciudadanía correspondiente al último padrón electoral, podrá presentar una propuesta de reforma constitucional para ser votada mediante referéndum nacional conjuntamente con la próxima elección parlamentaria.

Existirá un plazo de ciento ochenta días desde su registro para que la propuesta sea conocida por la ciudadanía y pueda reunir los patrocinios exigidos.

En caso que el proyecto popular de reforma constitucional reúna el apoyo requerido, el Congreso podrá aprobar un proyecto alternativo sobre la misma materia y dentro de un periodo máximo de dos meses, para que ambas sean consultadas. La propuesta del Congreso debe ser aprobada por la mayoría de los integrantes del Congreso. En este caso, para el plebiscito, la ciudadanía dispondrá de dos alternativas: en la primera, si aprueba o rechaza la reforma constitucional y, en la segunda, se preguntará por las dos alternativas propuestas.

La propuesta de reforma constitucional se entenderá aprobada si la alternativa de modificación ganadora alcanza la mayoría en la votación respectiva.

Es deber del Congreso y de los órganos del Estado descentralizados dar adecuada publicidad a la o las propuestas de reforma que se someterán a referéndum.

Artículo 81.- *Los proyectos de reforma constitucional susceptibles de afectar a los pueblos indígenas, deberán ser sometidos a una consulta con los pueblos, mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones representativas, de acuerdo a lo dispuesto en esta Constitución y las leyes dictadas a su conformidad.*

Título II. Procedimiento para elaborar una nueva Constitución

Artículo 82.- Procedimiento para el reemplazo de la Constitución. *El reemplazo total de la Constitución sólo podrá realizarse a través de una Asamblea Constituyente convocada por medio de un referéndum.*

La convocatoria a referéndum constituyente podrá ser convocada por iniciativa popular. Para ello, la ciudadanía deberá patrocinar la convocatoria con, a lo menos, firmas correspondientes al veinte por ciento del padrón electoral que hubiere sido establecido para la última elección parlamentaria.

También corresponderá a la presidencia de la República, por medio de un decreto, convocar al referéndum, el que deberá contar con la aprobación de los cuatro séptimos de las y los integrantes del Congreso.

Asimismo, la convocatoria corresponderá al Congreso, por medio de una ley, aprobada por las cuatro séptimas partes de sus integrantes.

La convocatoria para la instalación de la Asamblea Constituyente será aprobada si en el referendo es votada favorablemente por la mayoría de quienes participen en él. El sufragio en este referendo será obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en Chile.

Artículo 83.- De la Asamblea Constituyente. *La Asamblea Constituyente tendrá como única función la redacción de una propuesta de Nueva Constitución. Estará integrada paritariamente y con equidad territorial, con participación en igualdad de condiciones entre independientes e integrantes de partidos políticos, y con escaños reservados para pueblos originarios.*

Una ley regulará su integración, el sistema de elección, su duración, que no será inferior a dieciocho meses, su organización mínima, los mecanismos de participación popular y consulta indígena del proceso y demás aspectos generales que permitan su instalación y funcionamiento regular.

La Asamblea Constituyente tendrá la facultad de definir el quórum de aprobación de las normas y su propio reglamento de funcionamiento.

Una vez redactada y entregada la propuesta de nueva constitución a la autoridad competente, la Asamblea Constituyente se disolverá de pleno derecho.

Artículo 84.- Del plebiscito ratificador de una Nueva Constitución. *Entregada la propuesta de Nueva Constitución, deberá convocarse a un referéndum para su aprobación o rechazo. El sufragio en este plebiscito será obligatorio.*

Para que la propuesta sea aprobada deberá obtener el voto favorable de más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos.

Si la propuesta de Nueva Constitución fuera aprobada en el plebiscito, se procederá a su promulgación y correspondiente publicación.

Artículo 85.- Improcedencia de impugnaciones. *Ninguna autoridad, ni tribunal, podrá conocer acciones, reclamos o recursos vinculados con las tareas que la Constitución le asigna a la Asamblea ni con el contenido de las normas propuestas.*

§ Derechos de personas privadas de libertad

Artículo 86.- De los derechos de las personas privadas de libertad. *Las personas sometidas a cualquier forma de privación de libertad conservarán los derechos fundamentales contemplados en esta Constitución y en los tratados de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile.*

Es deber del Estado garantizar el acceso a la capacitación, a ejercer un trabajo remunerado, a la seguridad social, a la educación, a la integridad física y psíquica, al deporte y a la cultura, con perspectiva de género e intercultural.

El hacinamiento en los recintos penitenciarios atenta gravemente contra los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

Las mujeres y personas gestantes embarazadas tendrán derecho, antes, durante y después del parto, a acceder a los servicios de salud que requieran, a la lactancia y al vínculo directo y permanente con su hijo o hija, teniendo en consideración el interés superior del niño, niña o adolescente.

Es deber del Estado garantizar que las personas pertenecientes a los pueblos y naciones originarias tengan las condiciones que permitan ejercer su derecho a la identidad e integridad cultural y se dará preferencia a medidas distintas al encarcelamiento.

Artículo 87.- Obligaciones del Estado durante la ejecución de la pena. *Solo el Estado ejecutará el cumplimiento de las penas y medidas privativas de libertad decretadas por los tribunales de justicia, a través de instituciones públicas especialmente establecidas para estos fines.*

Los establecimientos penitenciarios serán administrados por personal civil especializado, distinto del órgano encargado de la seguridad del recinto.

Los establecimientos penitenciarios deberán separar a la población penal utilizando criterios apropiados para garantizar el respeto de los derechos humanos de la persona privada de libertad y su seguridad.

Las personas sometidas a una medida de seguridad de internación o a la medida cautelar de internación provisional, no podrán permanecer en un establecimiento penitenciario, debiendo asumir su custodia las personas o instituciones de salud mental, según correspondiere.

Las visitas en los establecimientos penitenciarios tienen derecho a no ser sometidas a tratos o procedimiento vejatorios o degradantes, y es deber del Estado

disponer todos los medios tecnológicos, materiales y humanos como forma de garantizar este derecho.

Artículo 88.- Extensión de la pena. *Las personas privadas de libertad gozan de los derechos consagrados en esta Constitución y no podrán sufrir limitaciones a otros derechos que aquellos que sean estrictamente necesarios para la ejecución de la pena y deberán ser establecidos expresamente en la resolución judicial.*

Artículo 89.- Prohibición de la tortura, aislamiento e incomunicación. *Ninguna persona privada de libertad podrá ser sometida a tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni trabajos forzados. Asimismo, no podrá ser sometida a aislamiento o incomunicación como sanción disciplinaria. Tampoco podrá quedar incomunicada en la investigación de delitos en que hubiere participado, salvo en hipótesis calificadas y durante un tiempo proporcional y razonable, señalados expresamente por el legislador.*

Artículo 90.- Derecho a petición. *Las personas privadas de libertad tienen el derecho a hacer peticiones a la autoridad penitenciaria y al tribunal de ejecución de la pena para el resguardo de sus derechos y a recibir una respuesta oportuna. Asimismo tienen derecho a mantener la comunicación y el contacto personal, directo y periódico con sus redes de apoyo y personas encargadas de su asesoría jurídica, sin que el ejercicio de estos derechos se pueda entorpecer, suspender o vulnerar por razones disciplinarias o administrativas.*

Artículo 91.- Derecho a la inserción, integración social y reparación. *La ejecución de las sanciones penales se enfocará hacia la inserción e integración de la persona condenada.*

Es deber del Estado elaborar políticas, planes y programas para la efectiva inserción e integración de las personas privadas de libertad y deberá siempre considerarse un enfoque de género, etario, pertinencia cultural, igualdad material y no discriminación, procurando un desarrollo integral de la persona.

El Estado garantizará a las personas privadas de libertad el acceso a trabajos productivos, con pleno respeto de sus derechos laborales y de seguridad social.

Con todo, el Estado deberá priorizar la inserción social de adolescentes”.

...

**COMISIÓN DE SISTEMAS DE JUSTICIA, ÓRGANOS AUTONOMOS DE
CONTROL Y REFORMA CONSTITUCIONAL
7 de abril de 2022.**

Tratado y acordado en sesiones celebradas los días 19, 21, 26, 27 de octubre; 2, 3, 4, 9, 10, 11, 24, 25 y 30 de noviembre; 1, 2, 7, 9, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de diciembre de 2021; 6 de enero de 2022; 2, 3, 4, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25 y 28 de febrero de 2022; y 8, 9, 14, 17, 28, 29 y 30 de marzo; y 4 de abril de 2022; con la asistencia de las y los convencionales constituyentes integrantes de la Comisión: Carol Bown, Daniel Bravo, Ruggero Cozzi, Andrés Cruz, Mauricio Daza, Hugo Gutiérrez, Vanessa Hoppe, Ruth Hurtado, Luis Jiménez, Patricia Labra, Tomás Laibe, Natividad Llanquileo, Rodrigo Logan, Luis Mayol, Manuela Royo, Daniel Stingo, Christian Viera, Ingrid Villena y Manuel Woldarsky. Asistieron también las y los convencionales constituyentes: Rodrigo Álvarez, Constanza Hube, Felipe Mena, Eric Chinga, Lisette Vergara, Renato Garin, Bessy Gallardo, Roberto Vega, Carolina Vilches, Elisa Giustinianovich, Hernán Larraín, Bernardo Fontaine, Loreto Vallejos, Harry Jurgensen, Tammy Pustilnick, Geoconda Navarrete, Marco Arellano, César Uribe, Elsa Labraña, Carolina Videla, Marcos Barraza, Malucha Pinto, Mariela Serey, Fernando Atria, Cristobal Andrade, Alvin Saldaña, María Magdalena Rivera, Manuel José Ossandón, Miguel Ángel Botto y Eduardo Cretton.

V.- Anexos.

A. Detalle de las votaciones en general

Sesión N° 52

	Bown*	Bravo	Cozzi	Cruz	Daza	Gutiérrez	Hoppe	Hurtado	Jiménez	Labra	Laibe	Llanquileo	Logan	Mayol**	Royo	Stingo	Viera	Villena	Woldarsky	A Favor	En contra	Abstenciones	No Votos	Resultado
179	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	A	F	F	C	C	C	C	7	11	1	0	Re
560	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	19	0	0	0	Ap
608	C	C	C	F	C	C	C	C	x	A	F	C	A	C	C	C	C	C	C	2	14	2	1	Re
695	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	A	C	A	F	C	C	C	C	C	6	11	2	0	Re
706	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	A	F	A	C	C	F	C	C	F	4	13	2	0	Re
850	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	A	F	C	F	C	C	C	7	11	1	0	Re
909	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	A	C	F	F	F	F	F	13	5	1	0	Ap
917	C	C	C	C	C	F	C	C	C	A	C	F	A	C	C	C	C	C	C	2	15	2	0	Re
763	C	F	C	F	F	F	F	C	F	A	A	F	F	C	F	C	F	F	F	12	5	2	0	Ap
615	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	14	5	0	0	Ap
25	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	A	F	C	C	C	C	C	6	12	1	0	Re
96	A	C	F	F	C	C	C	A	C	F	C	C	A	F	C	C	C	C	C	4	12	3	0	Re
202	A	F	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	C	F	F	F	F	F	15	1	3	0	Ap
431	C	C	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	F	C	F	F	F	C	F	13	5	1	0	Ap
559	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	18	0	1	0	Ap
805	C	F	C	F	F	F	F	A	F	C	F	F	A	C	F	F	F	F	F	13	4	2	0	Ap
861	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	C	C	C	C	F	11	8	0	0	Ap
440	F	C	F	F	A	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C	C	8	10	1	0	Re

444	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	15	4	0	0	Ap
445	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	15	4	0	0	Ap
15	C	C	C	C	A	C	F	C	C	C	C	F	A	C	F	C	C	C	F	4	13	2	0	Re
77	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	7	12	0	0	Re
190	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	14	5	0	0	Ap
366	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	F	A	C	C	F	C	C	C	2	15	2	0	Re
409	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	18	1	0	0	Ap
466	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	16	2	1	0	Ap
564	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	A	C	C	C	C	C	C	3	15	1	0	Re
574	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	14	5	0	0	Ap
657 y 1028	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A	C	C	C	C	C	F	2	16	1	0	Re
1017	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A	C	F	C	C	F	F	5	13	1	0	Re
913	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	A	F	C	C	A	F	F	F	C	8	9	2	0	Re
963	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	2	17	0	0	Re
588	C	C	C	F	A	F	C	C	C	A	C	C	A	C	A	C	C	C	F	3	12	4	0	Re
813	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	A	C	C	C	C	C	F	6	12	1	0	Re
943	C	C	C	F	A	A	F	A	C	F	C	F	F	C	F	C	C	A	F	7	8	4	0	Re
785	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	7	12	0	0	Re
ICI 186	C	C	C	C	C	A	F	C	F	C	C	F	A	C	A	C	C	C	F	4	12	3	0	Re
IPN 20	C	F	C	C	F	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	A	F	F	10	8	1	0	Ap
76	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	A	F	C	C	C	C	C	6	12	1	0	Re
173	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	A	F	C	C	C	C	C	6	12	1	0	Re
201	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	A	C	F	F	C	C	C	C	C	7	11	1	0	Re

558	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	16	2	1	0	Ap
580	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	14	5	0	0	Ap
631	C	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	F	C	C	F	F	F	F	C	12	6	1	0	Ap
641	C	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	F	F	C	F	F	F	F	F	14	4	1	0	Ap
798	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	7	12	0	0	Re
172	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	7	12	0	0	Re
349	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	7	12	0	0	Re
412	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	2	17	0	0	Re
643	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	A	C	C	C	C	3	15	1	0	Re
717	x	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	14	4	0	1	Ap
866	F	F	F	F	A	F	A	C	A	F	F	F	C	F	A	C	C	F	C	10	5	4	0	Ap
936	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	13	6	0	0	Ap
937	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	18	1	0	0	Ap
IPN 04	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	A	C	F	F	F	A	F	F	F	14	3	2	0	Ap
IPN 46	F	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	C	F	C	7	12	0	0	Re
168	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	7	12	0	0	Re
733	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	7	12	0	0	Re
344	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	C	15	4	0	0	Ap
924	C	F	C	F	A	F	F	C	F	A	F	F	F	C	F	F	F	F	C	12	5	2	0	Ap
714	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	A	C	F	C	C	C	F	5	13	1	0	Re
801	C	C	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	12	7	0	0	Ap
541	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	15	4	0	0	Ap
815	A	C	C	F	F	C	C	A	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	F	8	9	2	0	Re

899	C	F	C	C	A	F	F	C	A	A	C	F	F	C	F	C	C	F	C	7	9	3	0	Re
839	C	C	C	C	A	F	C	C	A	C	C	F	A	C	C	C	C	C	F	3	13	3	0	Re
902	C	F	C	F	F	F	F	C	F	A	C	F	F	C	F	F	F	F	F	13	5	1	0	Ap
1016	C	C	C	C	A	C	A	C	A	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	3	13	3	0	Re
370	C	F	C	C	F	F	F	C	F	C	C	F	A	C	F	F	C	F	F	10	8	1	0	Ap
636	C	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	F	F	C	F	F	F	F	F	14	4	1	0	Ap
889	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	A	C	F	F	F	F	F	13	5	1	0	Ap
ICI 105	C	C	C	C	F	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	7	12	0	0	Re
ICI 183	x	C	X	C	C	F	F	x	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	6	10	0	3	Re
439 y 521	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	A	C	A	C	C	C	F	3	14	2	0	Re
573	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	14	5	0	0	Ap
625	A	C	F	F	F	C	C	F	A	F	F	C	F	F	C	C	C	C	C	8	9	2	0	Re
792	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	3	15	1	0	Re
914	C	F	C	F	A	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	12	6	1	0	Ap
557	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	17	2	0	0	Ap	
954	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	14	5	0	0	Ap
816	C	F	C	F	F	F	F	C	A	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	13	5	1	0	Ap
876	C	F	C	F	A	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	A	11	6	2	0	Ap
457	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	14	5	0	0	Ap
1006	C	C	C	F	A	A	F	C	A	C	F	F	A	C	F	C	C	C	F	6	9	4	0	Re
788	C	F	C	C	C	C	F	C	A	C	A	F	F	C	F	C	C	F	C	6	11	2	0	Re
ICI 62	C	F	C	C	A	C	F	C	F	C	C	F	A	C	F	C	C	F	F	7	10	2	0	Re
ICI 87	C	F	C	C	A	A	F	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F	7	10	2	0	Re

214	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	14	5	0	0	Ap
400	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C	C	8	11	0	0	Re
465	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	18	1	0	0	Ap
579	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	13	6	0	0	Ap
592	C	F	C	C	F	F	A	C	F	C	A	F	F	C	A	C	C	F	C	7	9	3	0	Re
711	C	F	C	F	A	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	12	6	1	0	Ap

* Desde la votación de la ICC N° 344 a la ICC N° 889 la convencional Bown fue reemplazada por el convencional Mena.

** Convencional Mayol consigna que deseaba votar a favor por la ICC N° 409.

Sesión N° 53

	Bown	Bravo	Cozzi	Cruz	Daza	Gutiérrez	Hoppe	Hurtado	Jiménez	Labra	Laibe	Llanquileo	Logan	Mayol	Royo	Stingo	Viera	Villena	Woldarsky	A Favor	En contra	Abstenciones	No Votos	Resultado
89	F	F	X	F	F	F	F	A	F	C	A	F	F	C	F	F	F	F	F	14	2	2	1	Ap
184	F	C	X	F	C	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	6	12	0	1	Re
325	F	F	X	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	15	2	1	1	Ap
472	F	F	X	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	15	3	0	1	Ap
562	F	C	X	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C	C	7	11	0	1	Re
729	F	C	X	F	C	C	C	F	A	F	A	C	F	F	C	F	C	C	C	7	9	2	1	Re
915	C	F	X	F	F	C	F	C	F	A	F	F	F	C	F	F	F	F	C	12	5	1	1	Ap
223	C	F	C	F	C	F	C	C	A	C	F	F	A	C	C	C	C	F	C	6	11	2	0	Re
377	C	F	C	C	A	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	F	8	10	1	0	Re
425	C	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	14	2	3	0	Ap
467	A	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	F	F	C	F	F	F	F	C	13	4	2	0	Ap
544	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	17	1	1	0	Ap
694	F	C	F	F	C	F	C	F	A	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	7	11	1	0	Re

53	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	A	C	F	F	C	F	F	F	C	12	6	1	0	Ap
112	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	A	F	A	C	F	C	C	C	F	5	12	2	0	Re
160	C	C	C	F	C	F	F	C	A	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	7	11	1	0	Re
181	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	F	C	A	F	C	C	C	C	C	7	11	1	0	Re
182	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	7	12	0	0	Re
205	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	A	C	F	F	C	C	C	C	C	7	11	1	0	Re
501	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C	C	8	11	0	0	Re
731	C*	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	6	13	0	0	Re
802	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	14	5	0	0	Ap
803	C	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	F	F	C	F	F	F	F	F	14	4	1	0	Ap
817 y 940	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	17	1	1	0	Ap
829	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	A	C	F	F	C	C	C	C	C	7	11	1	0	Re
880	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	14	4	1	0	Ap
900	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	18	1	0	0	Ap
964	C	F	C	C	A	F	F	C	F	C	C	F	F	C	F	C	C	F	F	9	9	1	0	Re
1026	C	C	C	C	C	F	F	C	A	A	C	F	F	C	F	C	C	A	F	6	10	3	0	Re
ICI 242	C	C	C	C	A	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	A	C	A	F	6	10	3	0	Re
460	C	F	C	C	A	F	A	x	A	C	x	F	A	x	F	C	C	F	F	6	6	4	3	Re
490	C	C	C	F	A	F	F	x	C	A	C	F	A	x	F	C	C	A	F	6	7	4	2	Re
748	C	A	x	C	F	F	F	x	A	C	C	F	A	x	F	A	C	A	F	6	5	5	3	Re
756	C	F	C	C	A	F	F	x	C	A	C	F	A	x	F	C	C	F	F	7	7	3	2	Re
918	C	F	C	C	F	F	F	x	C	C	C	F	F	x	F	C	C	F	C	8	9	0	2	Re
1007	C	A	C	F	A	C	F	x	C	A	A	C	A	x	F	C	C	A	F	4	7	6	2	Re

1034	C	C	C	C	F	F	F	x	A	C	C	F	F	x	F	C	C	C	F	7	9	1	2	Re
ICI 92	C	A	C	C	A	F	F	x	F	C	C	F	A	x	F	A	C	A	F	6	6	5	2	Re

* Convencional Bown consigna que deseaba votar a favor por la ICC N° 731.

Sesión N° 55

	Bown	Bravo	Cozzi	Cruz	Daza	Gutiérrez	Hoppe	Hurtado	Jiménez	Labra	Laibe	Llanquileo	Logan	Mayol	Royo	Stingo	Viera	Villena	Woldarsky	A Favor	En contra	Abstenciones	No Votos	Resultado
611	C	F	X	F	F	F	F	A	x	A	F	x	F	A	F	F	F	F	F	12	1	3	3	Ap
653	F	F	X	F	F	F	F	F	x	F	F	x	F	F	F	F	F	F	F	16	0	0	3	Ap
619	F	C	X	F	C	C	C	F	A	F	F	x	F	F	C	C	A	C	A	7	7	3	2	Re
1031	F	F	X	F	F	F	F	F	F	F	F	x	F	F	F	F	F	F	F	17	0	0	2	Ap
461	C	F	X	C	F	F	F	C	F	C	C	x	C	C	F	C	C	F	F	8	9	0	2	Re
703	C	F	X	C	F	F	F	C	F	C	C	x	C	C	F	C	C	F	F	8	9	0	2	Re
IPN 55	C	F	X	C	F	F	F	C	x	C	C	x	F	C	F	C	C	F	F	8	8	0	3	Em
IPN 55 (rep)	C	F	X	C	F	F	F	C	F	C	C	x	F	C	F	C	C	F	F	9	8	0	2	Ap
ICI 183	C	F	X	C	F	F	F	C	x	C	C	x	C	C	F	C	C	F	F	7	9	0	3	Re

B. Detalle de las votaciones en particular

Sesión N° 56

	Bown	Bravo	Cozzi	Cruz	Daza	Gutiérrez	Hoppe	Hurtado	Jiménez	Labra	Laibe	Llanquileo	Logan	Mayol	Royo	Stingo	Viera	Villena	Woldarsky	A Favor	En contra	Abstenciones	No Votos	Resultado
Epígrafe "Justicia Ambiental"	C	F	F	F	F	F	F	C	x	A	F	F	F	C	F	F	F	F	F	14	3	1	1	Ap .
Ind. 1	C	F	C	F	F	F	F	C	x	A	F	F	F	C	F	F	F	F	F	13	4	1	1	Ap .
3	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	14	5	0	0	Ap .

6	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	18	0	1	0	Ap
7	C	F	A	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	14	4	1	0	Ap
10	F	F	F	F	C	F	C	F	A	F	F	C	F	F	C	F	F	C	12	6	1	0	Ap
11, 12 y 13	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	A	C	F	F	C	C	C	C	7	11	1	0	Re
14 y 15	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	17	1	1	0	Ap
19 y 20	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	19	0	0	0	Ap
22, 24, 25 y 38	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	19	0	0	0	Ap
44	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	16	0	3	0	Ap
48 y 49	F	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	15	4	0	0	Ap
52	A	F	A	F	F	F	F	C	F	C	F	F	A	C	F	F	F	F	13	3	3	0	Ap
59	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	C	C	F	F	F	F	13	6	0	0	Ap
74	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	A	C	x	F	F	F	12	5	1	1	Ap
78	A	C	F	C	C	C	x	F	C	A	C	C	C	A	C	C	C	C	2	13	3	1	Re
79	C	F	C	F	F	F	x	C	F	C	F	F	A	C	F	F	F	F	12	5	1	1	Ap
85	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	A	C	F	F	F	F	13	5	1	0	Ap
89	C	F	A	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	14	4	1	0	Ap
92	C	F	A	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	14	4	1	0	Ap
100, 101, 102, 103 y 106	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	19	0	0	0	Ap
108	C	F	A	F	F	F	F	A	F	C	F	F	A	A	F	F	F	F	13	2	4	0	Ap
112	C	F	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	15	1	3	0	Ap
113	A	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	16	0	3	0	Ap
116	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	17	1	1	0	Ap
117	F	F	F	F	F	F	F	X	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	18	0	0	1	Ap

119	F	C	F	C	C	C	C	F	A	F	C	C	F	F	C	C	C	C	6	12	1	0	Re
120	F	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C	7	12	0	0	Re
121	F	C	F	C	C	C	C	A	A	F	C	C	A	F	C	C	C	C	4	12	3	0	Re
122	C	C	A	C	C	C	C	C	x	C	F	C	C	C	C	C	C	C	1	16	1	1	Re
123	C	F	F	F	F	F	F	C	A	A	F	F	F	A	F	F	F	F	14	2	3	0	Ap
124	A	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	A	F	F	F	F	14	0	5	0	Ap
125	A	C	F	C	C	C	C	F	C	A	C	C	F	A	C	C	C	C	3	13	3	0	Re
126	A	C	C	C	C	C	C	A	C	F	C	C	F	A	C	C	C	C	2	14	3	0	Re
127	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A	C	C	C	C	1	17	1	0	Re
128	C	C	F	C	C	C	C	C	C	A	C	C	F	C	F	C	C	C	3	15	1	0	Re
129	C	C	F	C	C	C	C	A	C	A	C	C	F	A	C	C	C	C	2	14	3	0	Re
130	A	C	F	C	C	C	C	F	C	A	C	C	F	A	C	C	C	C	3	13	3	0	Re
131	A	C	F	C	C	C	C	F	C	A	C	C	F	A	C	C	C	C	3	13	3	0	Re
132	A	C	F	F	C	C	C	F	C	A	C	C	F	F	C	C	C	C	5	12	2	0	Re
133	A	C	F	C	C	C	C	F	C	A	C	C	F	F	C	C	C	C	4	13	2	0	Re
134	A	C	F	C	C	C	C	A	C	A	C	C	F	F	C	C	C	C	3	13	3	0	Re
135	A	C	F	C	C	C	C	X	C	A	C	C	F	F	C	C	C	C	3	13	2	1	Re
136	A	C	F	C	C	C	C	A	C	A	C	C	F	F	C	C	C	C	3	13	3	0	Re
137	F	C	F	C	C	C	C	A	C	A	C	C	F	F	C	C	C	C	4	13	2	0	Re
138	A	C	F	C	C	C	C	F	C	A	C	C	F	F	C	C	C	C	4	13	2	0	Re
139	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	2	16	1	0	Re
140	C	C	F	C	C	C	F	C	C	A	C	C	F	C	C	C	C	C	3	15	1	0	Re
141	C	C	F	C	C	C	C	C	C	A	C	C	F	F	C	C	C	x	3	14	1	1	Re

142	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	F	F	C	C	C	C	2	14	2	1	Re .	
143	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	19	0	0	0	Ap .	
144*	F	F	F	F	F	F	F	X	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	18	0	0	1	Ap .	
Art. 23	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	C	F	C	8	11	0	0	Re .
145	A	F	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	15	0	4	0	Ap .
146	C	F	A	F	F	F	F	C	F	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	13	5	1	0	Ap .
147, 148, 149 y 150	A	F	A	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	15	0	4	0	Ap .
151	F	C	A	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	5	13	1	0	Re .
152	A	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	F	A	A	F	F	F	F	F	13	2	4	0	Ap .
153	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	C	F	F	F	F	F	F	16	1	2	0	Ap .
154	A	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	4	14	1	0	Re .
155	C	F	A	F	F	F	F	C	x	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	13	4	1	1	Ap .
156, 157, 158 y 159	A	F	A	F	F	F	F	C	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	14	1	4	0	Ap .
160	A	C	F	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	A	C	C	C	C	C	1	14	4	0	Re .
161	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	14	5	0	0	Ap .
162	F	C	F	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	A	C	C	C	C	C	2	15	2	0	Re .
163	C	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	F	F	C	F	F	F	F	F	14	4	1	0	Ap .
164	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	16	3	0	0	Ap .
165 a 177	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	16	0	3	0	Ap .
178	A	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	15	2	2	0	Ap .
179	A	F	A	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	A	F	F	F	F	F	14	0	5	0	Ap .
181 y 182	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	A	16	0	3	0	Ap .
183	F	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	6	13	0	0	Re .

184	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	17	0	2	0	Ap.
185	A	F	A	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	14	0	5	0	Ap.
186 y 187	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	18	0	1	0	Ap.
188	A	F	A	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	14	0	5	0	Ap.
189, 190 y 191	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	16	0	3	0	Ap.
192	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	14	5	0	0	Ap.
193, 194 y 195	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	19	0	0	0	Ap.

* Convencional Hurtado es reemplazada por el convencional Mena (votaciones marcadas)

Sesión N° 57

	Bown	Bravo	Cozzi	Cruz	Daza	Gutiérrez	Hoppe	Hurtado	Jiménez	Labra	Laibe	Llanquileo	Logan	Mayol	Royo	Stingo	Viera	Villena	Woldarsky	A Favor	En contra	Abstenciones	No Votos	Resultado
Epígrafe "De la Defensoría de la Naturaleza "	x	F	C	F	F	x	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	13	4	0	2	Ap.
Ind. 196	x	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	5	13	0	1	Re.
Art. 41	x	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	14	4	0	1	Ap.
Ind. 197	x	F	F	F	F	F	F	F	x	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	17	0	0	2	Ap.
Art. 42	x	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	15	3	0	1	Ap.
Ind. 198	x	F	C	F	F	F	F	C	A	C	F	F	A	C	F	F	F	F	F	12	4	2	1	Ap.
Art. 43	x	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	13	5	0	1	Ap.
Art. 44	x	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	14	4	0	1	Ap.
Art. 45	x	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	14	4	0	1	Ap.
Ind. 199, 200 y 201	x	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	18	0	0	1	Ap.
Art. 48	x	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	F	9	9	0	1	E m.

Art. 48 (rep)	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	4	15	0	0	Re .
Epígrafe "Del Consejo Autónomo del Medio Ambiente"	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	14	5	0	0	Ap .
Ind. 202	C	F	C	F	F	F	F	C	x	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	13	5	0	1	Ap .
Ind. 203 a 208	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	19	0	0	0	Ap .
Epígrafe "Agencia Nacional del Agua"	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	19	0	0	0	Ap .
Ind. 209	C	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	F	A	A	F	F	F	F	F	13	3	3	0	Ap .
Ind. 211	C	F	A	F	F	F	F	C	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	14	2	3	0	Ap .
Ind. 213	F	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	A	F	C	C	C	C	C	5	13	1	0	Re .
Art. 57	A	F	A	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	14	0	5	0	Ap .
Ind. 214 y 215	C	F	F	F	F	x	F	F	x	F	F	F	F	x	C	F	F	F	F	14	2	0	3	Ap .
Epígrafe "Consejo Nacional para la Transición Productiva Socio-ecológica"	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	13	6	0	0	Ap .
Ind. 216	F	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	A	F	C	F	C	C	C	6	12	1	0	Re .
Ind. 217	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	14	5	0	0	Ap .
Ind. 218 y 219	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	17	2	0	0	Ap .
Epígrafe "Banco Central"	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	18	1	0	0	Ap .
Ind. 220	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	13	6	0	0	Ap .
Ind. 222	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	14	5	0	0	Ap .
Ind. 224 y 225	C	F	F	F	F	F	F	F	F	x	F	F	F	F	F	F	F	F	F	17	1	0	1	Ap .
Ind. 226	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	2	17	0	0	Re .
Ind. 227	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	18	1	0	0	Ap .

Ind. 228 y 229	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	19	0	0	0	Ap .
Ind. 230	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0	19	0	0	Re .
Ind. 231	F	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	6	13	0	0	Re .
Ind. 232	A	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	A	A	C	A	F	F	F	C	11	3	5	0	Ap .

Sesión N° 58

	Bown	Bravo	Cozzi	Cruz	Daza	Gutiérrez	Hoppe	Hurtado	Jiménez	Labra	Laibe	Llanquileo	Logan	Mayol	Royo	Stingo	Viera	Villena	Woldarsky	A Favor	En contra	Abstenciones	No Votos	Resultado
Ind. 234, 235 y 236	F	F	F	F	F	x	F	X	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	15	0	2	2	Ap .
237	F	C	A	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	A	C	C	C	C	C	5	12	2	0	Re .
238	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	16	3	0	0	Ap .
239 y 240	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	17	0	2	0	Ap .
241	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	C	A	F	F	F	F	F	14	4	1	0	Ap .
243	A	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	A	C	C	C	C	C	2	15	2	0	Re .
244	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	17	2	0	0	Ap .
245 y 246	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	15	4	0	0	Ap .
247	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	2	16	1	0	Re .
248	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	18	1	0	0	Ap .
249 y 250	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	18	1	0	0	Ap .
251 y 252	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	14	5	0	0	Ap .
254 a 257	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	19	0	0	0	Ap .
258	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	7	12	0	0	Re .
259	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	A	C	F	F	F	F	F	12	6	1	0	Ap .

260 a 266	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	18	0	1	0	Ap
267	F	C	F	C	C	C	C	A	C	F	C	C	A	F	C	C	C	C	C	4	13	2	0	Re
268	C	F	C	F	F	C	F	A	F	A	F	F	A	A	F	F	F	F	F	12	3	4	0	Ap
269	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	19	0	0	0	Ap
270	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	1	17	1	0	Re
271	A	F	A	F	F	A	F	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	13	0	6	0	Ap
272 a 274	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	18	0	1	0	Ap
275	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	18	0	1	0	Ap
276	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	13	6	0	0	Ap
279 a 281	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	18	1	0	0	Ap
282 y 283	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	A	F	C	C	C	C	F	5	13	1	0	Re
284	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	16	0	3	0	Ap
285 a 287	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	18	1	0	0	Ap
288	C	F	C	F	F	F	F	C	F	x	F	F	F	C	F	F	F	F	F	14	4	0	1	Ap
291	F	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	6	13	0	0	Re
292 a 300	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	16	2	1	0	Ap
301	F	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	6	13	0	0	Re
302	A	F	A	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	x	13	0	5	1	Ap
304 a 307	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	19	0	0	0	Ap
308	C	F	A	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	14	1	4	0	Ap
309	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	19	0	0	0	Ap
310	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	19	0	0	0	Ap

Art 78.	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	19	0	0	0	Ap .
Ind. 311 a 314	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	18	0	1	0	Ap .
315	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	18	0	1	0	Ap .
Epígrafe "Servicio Electoral"	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	17	0	2	0	Ap .
316	F	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	A	F	C	C	C	C	C	5	13	1	0	Re .
317	A	F	A	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	14	3	2	0	Ap .
320 a 327	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	18	0	1	0	Ap .
328	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	19	0	0	0	Ap .
329	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	14	5	0	0	Ap .
332 a 334	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	18	1	0	0	Ap .
335	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	16	3	0	0	Ap .
338	F	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	5	14	0	0	Re .
339 a 342	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	18	0	1	0	Ap .
343	A	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	14	2	3	0	Ap .
344 y 345	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	19	0	0	0	Ap .

Sesión N° 60

	Bown	Bravo	Cozzi	Cruz	Daza	Gutiérrez	Hoppe	Hurtado	Jiménez	Labra	Laibe	Llanquileo	Logan	Mayol	Royo	Stingo	Viera	Villena	Woldarsky	A Favor	En contra	Abstenciones	No Votos	Resultado
Ind. 346	F	F	F	F	F	F	F	F	x	x	F	F	F	F	x	F	F	F	F	16	0	0	3	A p.
347	C	F	A	F	F	F	F	C	F	x	F	F	F	C	F	F	F	F	F	14	3	1	1	A p.
349 a 354	F	F	F	F	F	F	F	F	F	x	F	F	F	F	F	F	F	F	F	18	0	0	1	A p.
Epígrafe "Servicios Notariales y	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	17	1	1	0	A p.

Epígrafe "Justicia Constitucional "	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	A	17	0	2	0	A p.
368	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	A	16	0	3	0	A p.
370	A	F	F	F	F	A	F	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	A	14	1	4	0	A p.
371-373	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	C	16	2	1	0	A p.
Epígrafe "Corte Constitucional "	F	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	C	14	2	3	0	A p.
374	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	C	16	1	2	0	A p.
375	F	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	A	F	C	C	C	C	C	5	13	1	0	Re .
Art. 113	C	C	F	C	C	A	C	F	C	F	C	A	C	F	F	x	C	C	F	6	10	2	1	Re .
376 y 377	F	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	C	14	4	1	0	A p.
378	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	C	16	2	1	0	A p.
381	A	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	A	A	F	A	F	F	F	C	12	1	6	0	A p.
382	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	A	17	0	2	0	A p.
383	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	A	F	F	F	F	F	F	A	14	3	2	0	A p.
385-387	F	F	x	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	A	16	0	2	1	A p.
388	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	C	15	1	3	0	A p.
390-392	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	A	16	0	3	0	A p.
393	C	F	C	F	F	A	F	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	F	C	11	6	2	0	A p.
395	F	C	A	C	C	F	C	F	C	F	C	C	A	F	C	C	C	C	C	5	12	2	0	Re .
396	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	C	16	1	2	0	A p.
397	C	F	C	F	F	A	F	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	F	A	11	5	3	0	A p.
399	F	C	A	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	4	14	1	0	Re .
401	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	A	14	0	5	0	A p.

402	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	18	0	1	0	A p.
403	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	F	A	12	5	2	0	A p.
405	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	A	F	C	C	C	C	C	5	13	1	0	Re .
406	F	F	F	F	F	A	F	x	F	F	F	A	x	F	A	F	F	F	A	13	0	4	2	A p.
408-410	A	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	A	15	1	3	0	A p.
411-416	F	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	A	15	1	3	0	A p.
Epígrafe "De las acciones jurisdiccionales para (...)"	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	5	14	0	0	Re .
Epígrafe "Acciones constitucionales de tutela"	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	19	0	0	0	A p.
417 y 418	F	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	C	14	3	2	0	A p.
420	A	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	15	1	3	0	A p.
423, 424 y 425	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	19	0	0	0	A p.
426	C	F	A	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	14	4	1	0	A p.
428	A	F	A	F	F	F	F	C	x	C	F	A	F	F	F	F	F	F	A	11	3	4	1	A p.
431	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	15	4	0	0	A p.
433	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	6	13	0	0	Re .
434	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	18	1	0	0	A p.
435	A	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	14	3	2	0	A p.
436	A	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	14	2	3	0	A p.
438, 439, 441 y 442	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	19	0	0	0	A p.
440	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	A	F	C	C	C	C	C	6	12	1	0	Re .
443 y 444	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	19	0	0	0	A p.
445	F	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	A	F	C	C	C	C	C	5	13	1	0	Re .

Epígrafe "Reforme y Reemplazo de la Constitución (...)"	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	1 8	0	1	0	A p.
446	C	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	F	A	F	F	1 5	2	2	0	A p.
447	C	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	F	C	F	F	1 5	3	1	0	A p.
449	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	F	F	1 6	0	3	0	A p.
450	A	F	A	F	A	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	1 1	5	3	0	A p.
454	C	F	x	C	A	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	1 0	7	1	1	A p.
455-457	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	F	F	1 6	1	2	0	A p.
458	C	F	C	F	F	F	F	A	F	C	F	F	C	C	F	F	1 3	5	1	0	A p.
459 y 460	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	1 8	1	0	0	A p.
461	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	A	C	F	F	1 3	5	1	0	A p.
462	C	F	C	C	A	F	F	C	F	C	C	F	A	C	F	C	8	9	2	0	Re .
463	C	F	C	C	A	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	C	8	1 0	1	0	Re .
464 y 465	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	1 9	0	0	0	A p.
Art. 139 A	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	C	A	F	F	1 5	2	2	0	A p.
Título "Procedimient o para elaborar na nueva Constitución"	C	F	x	F	F	F	F	C	F	C	F	F	C	C	F	F	1 3	5	0	1	A p.
467	F	F	C	F	F	F	F	A	F	A	F	F	C	A	F	F	1 4	2	3	0	A p.
468 y 469	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	1 9	0	0	0	A p.
470	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	C	C	F	F	1 3	6	0	0	A p.
471	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	C	C	F	F	1 3	6	0	0	A p.
472	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	1 9	0	0	0	A p.
473	C	F	C	C	C	A	C	C	F	A	A	F	C	A	F	C	6	9	4	0	Re .

474	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	C	C	F	F	F	F	1 3	6	0	0	A p.
Epígrafe "Derechos de las personas privadas de libertad"	A	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	A	C	F	F	C	F	1 3	3	3	0	A p.
475	C	F	A	F	F	F	F	A	F	C	F	F	C	C	F	F	F	F	1 3	4	2	0	A p.
477	C	F	C	C	A	F	F	C	F	C	C	F	A	C	F	C	A	F	8	8	3	0	Re .
478	C	F	A	F	F	F	F	A	F	C	F	F	A	C	F	F	F	F	1 3	3	3	0	A p.
480	A	F	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	1 5	0	4	0	A p.
Art. 148	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	1 7	0	2	0	A p.
482	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	F	C	C	C	6	1 3	0	0	Re .
483	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	A	F	A	F	F	F	C	F	1 4	1	4	0	A p.
484	C	F	F	F	C	F	F	A	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	1 3	5	1	0	A p.
485	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	1 5	4	0	0	A p.
486	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	1 6	2	1	0	A p.
487 y 489	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	1 7	2	0	0	A p.

* Reemplazo del convencional Logan por el convencional Logan (votaciones marcadas)
** Reemplazo de la convencional Hurtado por el convencional Cretton (votaciones marcadas)
*** Reemplazo de la convencional Hoppe por el convencional Saldaña (votaciones marcadas)

C. Informe de enlace transversal

(i) Convencional Carol Bown

Martes 05 de abril

NORMAS APROBADAS EN COMISIÓN SISTEMA DE JUSTICIA, ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y REFORMA CONSTITUCIONAL
ANÁLISIS TRANSVERSALIZACIÓN

Comentario general:

Se aprecia, en términos generales, referencias normativas a cada uno de los criterios definidos por la Comisión de Transversalización (Derechos humanos, Género, Plurinacionalidad, Inclusión, Descentralización), salvo aquel Socioecológico.
De una revisión particular de las normas aprobadas, se observa una excesiva referencia a pueblos originarios. Dichas referencias se materializan tanto en la

creación de órganos, como también en el establecimiento de criterios que deben cumplirse para su integración.

Derechos humanos
Género
Socioecológico
Plurinacionalidad
Inclusión
Descentralización

Justicia Ambiental

Artículo 1.- Tribunales Ambientales. Los Tribunales Ambientales conocen y resuelven las acciones de impugnación de la legalidad de los actos administrativos que se pronuncien sobre materia ambiental, de la acción de Reparación por Daño Ambiental y de la Acción de Tutela Ambiental y de los Derechos de la Naturaleza. Habrá al menos un Tribunal Ambiental en cada Región del país y se constituirán de forma unipersonal. Para decidir los conflictos de su competencia, deberán tener en consideración los principios ambientales presentes en esta Constitución y los Tratados Internacionales ratificados y vigentes en materia ambiental. Las acciones para impugnar la legalidad de los actos administrativos que se pronuncien sobre materia ambiental, podrán interponerse directamente a los Tribunales Ambientales, sin que pueda exigirse el agotamiento previo de la vía administrativa. La ley dispondrá medidas especiales que posibiliten materialmente el acceso a la Justicia Ambiental a aquellas personas, grupos, comunidades o territorios vulnerables.

Artículo 2.- Mecanismos colaborativos en conflictos socioambientales. Es deber del Estado promover e implementar mecanismos colaborativos de gestión para la prevención y solución de conflictos socioambientales, garantizando el acceso gratuito e informado, para toda persona o comunidad afectada en el ejercicio de sus derechos ambientales. La ley asegurará la infraestructura, equipamiento e instalaciones necesarias para tal fin a nivel nacional y regional, junto con el asesoramiento profesional y técnico especializado para promover el diálogo entre todas las partes interesadas.

Capítulo [XX].- Ministerio Público

Artículo 3.- Del Ministerio Público. El Ministerio Público es un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene como funciones dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos que pudiesen ser constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado. Ejercerá la acción penal pública en representación exclusiva de la sociedad, en la forma prevista por la ley. En dichas funciones deberá velar por el respeto y promoción de los derechos humanos, considerando también los intereses de la víctima, respecto de quienes deberá adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para protegerlas, al igual que a los testigos. Ninguna ley ni autoridad podrá en caso alguno impedir o establecer condiciones que entorpezcan el desarrollo de la investigación y el ejercicio de la acción penal pública cuando se trate de hechos que comprometan el interés público, el patrimonio de la nación o contra bienes jurídicos colectivos. En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales. La víctima del delito y las demás personas que determine la ley podrán ejercer igualmente la acción penal. El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública para el ejercicio de sus funciones. La autoridad policial requerida deberá cumplir sin más trámite dichas órdenes y no podrá calificar su fundamento,

oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibición, a menos que ésta sea verbal, de la autorización judicial.

Las actuaciones que amenacen, priven o perturben al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura, requerirán siempre de autorización judicial previa y motivada.

Artículo 4.- De la organización y atribuciones del Ministerio Público. Una ley determinará la organización y atribuciones del Ministerio Público, señalará las calidades y requisitos que deberán tener y cumplir las y los fiscales para su nombramiento y las causales de su remoción. Los fiscales cesarán en su cargo al cumplir los 70 años.

Las autoridades superiores de la institución deberán siempre fundar aquellas órdenes e instrucciones dirigidas a los fiscales que puedan afectar una investigación o el ejercicio de la acción penal.

Artículo 9.- De la Fiscalía Regional. Existirá una Fiscalía Regional en cada región del país, sin perjuicio que la ley podrá establecer más de una por región.

Las y los fiscales regionales deberán haberse desempeñado como fiscales adjuntos durante cinco o más años, no haber ejercido como fiscal regional, haber aprobado cursos de formación especializada y poseer las demás calidades que establezca la ley.

Durarán cuatro años y una vez concluida su labor, podrán retornar a la función que ejercían en el Ministerio Público. No podrán ser reelectos ni postular nuevamente a fiscal regional.

Artículo 5.- Dirección del Ministerio Público. La dirección superior del Ministerio Público reside en un Consejo Superior, órgano colegiado, paritario, que designará de entre sus miembros a un presidente y a un director ejecutivo.

Artículo 6.- Del Consejo Superior del Ministerio Público. El Consejo estará compuesto por siete miembros, designados de la siguiente manera:

- a) Tres integrantes elegidos democráticamente por las y los fiscales entre sus pares.
- b) Un integrante elegido democráticamente por funcionarios y funcionarias del Ministerio Público entre sus pares.
- c) Tres integrantes elegidos por el Congreso plurinacional a partir de ternas elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública. Los candidatos y candidatas no podrán haber desempeñado cargos de elección popular ni haber sido candidatos a ellos, así como tampoco podrán haber desarrollado funciones en el Gobierno o Administración del Estado en cargos que sean de exclusiva confianza del Presidente de la República, en los últimos cuatro años.

La ley establecerá el procedimiento y los requisitos que deberán reunir los consejeros del Ministerio Público. Los consejeros durarán cuatro años en sus cargos y no podrán ser reelegidos, debiendo renovarse por parcialidades en conformidad a lo que señale la ley.

La calidad de consejero es incompatible con todo otro cargo o función sea o no remunerada, con excepción de la docencia universitaria con los límites que señale la ley.

Las y los consejeros indicados en las letras a) y b) se entenderán suspendidos del ejercicio de su función mientras dure su cometido, pudiendo retornar al ejercicio de sus funciones una vez cumplido este desempeño

Artículo 7.- Atribuciones del Consejo Superior del Ministerio Público. El Consejo Superior del Ministerio Público tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Dirigir el organismo, velando por el cumplimiento de sus objetivos.
- b) Determinar la política de gestión profesional de las y los funcionarios del Ministerio Público.
- c) Supervigilar la política de persecución penal adoptada por el Comité del Ministerio Público.

- d) Evaluar y calificar permanentemente el desempeño de las y los funcionarios.
- e) Designar a su presidente, a los fiscales regionales, fiscales adjuntos y demás funcionarios del Ministerio Público en conformidad a la ley.
- f) Ejercer la potestad disciplinaria respecto de las y los funcionarios, en conformidad a la ley.
- g) Definir las necesidades presupuestarias, gestionando los recursos para su adecuado funcionamiento.
- h) Las demás atribuciones que establezca la ley.

Artículo 8.- El Presidente del Consejo. El Presidente del Consejo del Ministerio Público dirigirá las sesiones ordinarias y extraordinarias del órgano y representará a la institución ante los demás órganos del Estado, sin perjuicio de las demás atribuciones que señale la ley.

Artículo 10.- Del Comité del Ministerio Público. Existirá un Comité del Ministerio Público, compuesto por el Presidente del Consejo Superior y los fiscales regionales. El Comité deberá fijar la política de persecución penal y los criterios de actuación para el cumplimiento de dichos objetivos, debiendo siempre velar por la transparencia y objetividad, resguardando los intereses de la sociedad y el respeto de los derechos humanos.

Artículo 11.- Fiscales Adjuntos del Ministerio Público. Existirán fiscales adjuntos del Ministerio Público quienes ejercerán su labor autónomamente en los casos específicos que se les asignen, conforme a los límites establecidos en la Constitución y las leyes.

Artículo 12.- De la rendición de cuentas. El Presidente del Consejo Superior del Ministerio Público y los fiscales regionales deberán rendir, anualmente, una cuenta pública de su gestión. En el caso del Presidente del Consejo Superior, se rendirá la cuenta ante el Congreso y en el caso de los fiscales regionales, ante la Asamblea Regional.

§ Del derecho a un proceso con todas las garantías y de la asistencia jurídica

Artículo 19.- Derecho a un proceso con todas las garantías. Toda persona tendrá derecho a un proceso razonable y justo, adecuado a sus fines, ante un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley. El proceso sólo podrá ser regulado por la ley.

Toda persona tiene derecho a un proceso en que se salvaguarden las garantías mínimas que se señalan en esta Constitución, sin perjuicio de las restantes garantías procesales que se establezcan en la ley y en los tratados internacionales que se encuentren vigentes y hayan sido ratificados por Chile.

Toda persona tiene derecho a ser oída y juzgada en procesos o juicios que se resuelvan en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, en igualdad de condiciones y bilateralidad de la audiencia. Las resoluciones y sentencias judiciales que serán suficientemente motivadas, asegurándose el acceso a un recurso efectivo contra lo resuelto ante un tribunal de mayor grado jurisdiccional que determine la ley.

Artículo 21.- Derecho a la asesoría jurídica gratuita. Toda persona tiene derecho a la asesoría jurídica gratuita. El Estado asegura la asesoría jurídica gratuita e íntegra por parte de abogadas y abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, a toda persona que no pueda obtenerla por sí misma. La ley establecerá los medios para concretar este derecho.

Asimismo, es deber del Estado otorgar asistencia jurídica especializada para la protección del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, especialmente cuando estos han sido sujetos de medidas de protección, procurando crear todas las condiciones necesarias para el resguardo de sus derechos.

Artículo 21 bis.- Garantías procesales penales. Toda persona imputada por un delito tiene derecho a las siguientes garantías mínimas:

- a) Ser presumido como inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. No se podrá presumir de derecho la responsabilidad penal.
- b) A ser informada sin demora, en una lengua o idioma que comprenda y en forma detallada de sus derechos, de la naturaleza y causas de la investigación seguida contra ella y de la acusación formulada en su contra.
- c) A estar presente en el juicio y a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección. Tendrá derecho a ser asistida por un defensor proporcionado por el Estado, si no pudiere defenderse por sí misma, el cual será gratuito si carece de los medios suficientes para pagarlo. El imputado tendrá derecho a ser defendido por un letrado desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra.
- d) Formular las pretensiones, excepciones, alegaciones y defensas que estimare oportunas.
- e) A rendir las pruebas y contrastar efectivamente aquellas que le perjudiquen.
- f) A guardar silencio o, en caso de consentir en prestar declaración, no ser obligada a declarar contra sí misma ni a reconocer su culpabilidad. La declaración o reconocimiento de la persona imputada solamente serán válidas si son hechas sin coacción de ninguna naturaleza y en presencia de una abogada o abogado que haya asumido su defensa. Tampoco podrán ser obligados a declarar en su contra sus ascendientes, descendientes, cónyuge, conviviente civil, y demás personas que señale la ley. El ejercicio de este derecho no ocasionará ninguna consecuencia legal adversa.
- g) A impugnar de la sentencia en la forma y oportunidades establecidas en la ley, mediante un recurso accesible y eficaz.
- h) La persona condenada, absuelta o sobreseída definitivamente por sentencia ejecutoriada, no podrá ser sometida a un nuevo procedimiento, investigación o persecución penal por el mismo hecho.
- i) Queda prohibido todo método de investigación o de interrogación que menoscabe o coarte la libertad del imputado para declarar. En consecuencia, no podrá ser sometido a ninguna clase de coacción o amenaza.
- j) Las sanciones que se apliquen deberán ser siempre proporcionales a la infracción cometida. Estará prohibida la aplicación de sanciones corporales, la pena de muerte o aquellas que establezcan una privación de libertad indefinida.
- k) No podrá imponerse la pena de confiscación de bienes, sin perjuicio del comiso en los casos establecidos por las leyes. El comiso de ganancias no será considerado una pena.

Las garantías procesales mínimas precedentemente consignadas son aplicables, en lo que sea pertinente, a toda clase de procedimientos ya sea judiciales o administrativos.

Artículo 21 ter.- Del principio de legalidad de los delitos y las penas. Ninguna persona podrá ser perseguida, castigada penalmente u objeto de una medida de seguridad penal, sino en virtud de una ley propiamente tal que haya entrado en vigor con anterioridad a la perpetración del hecho, salvo que posteriormente entre en vigencia una nueva ley favorable para el imputado.

La ley no podrá castigar ningún hecho sin que la conducta que constituye su núcleo esté expresa y determinadamente contemplada en ella.

Artículo 22.- Servicio Integral de Acceso a la Justicia. Un organismo autónomo, de carácter técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Servicio Integral de Acceso a la Justicia, tendrá por función prestar asesoría, defensa y representación jurídica letrada de calidad, así como también brindar apoyo profesional de tipo psicológico y social en los casos que corresponda.

El Servicio Integral de Acceso a la Justicia estará estructurado por las áreas de atención que establezca su ley, la cual deberá considerar a lo menos, áreas de asuntos civiles y de consumo, de defensa laboral, de asuntos de las familias, de

contencioso administrativo, de personas mayores, de derechos humanos, de medio ambiente y de defensa de víctimas penales.

En lo demás, la composición, organización, funciones y atribuciones del Servicio Integral de Acceso a la Justicia será determinada por la ley, considerando criterios de paridad y equidad territorial.

Capítulo [XX].- Defensoría Penal Pública

Artículo 24.- De la Defensoría Penal Pública. La Defensoría Penal Pública es un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por función proporcionar defensa penal a los imputados por hechos que pudiesen configurar un delito que deban ser conocidos por los tribunales con competencia en lo penal, desde la primera actuación de la investigación dirigida en su contra y hasta la completa ejecución de la pena que le haya sido impuesta, y que carezcan de defensa letrada.

Estará facultada para denunciar al Estado ante los Organismos Internacionales de Derechos Humanos, cuando en el curso de las investigaciones y procedimientos penales en que intervenga, constate violaciones de derechos fundamentales, en coordinación con otros órganos del Estado.

La ley determinará la organización y atribuciones de la Defensoría Penal Pública, debiendo garantizarse su independencia externa.

Artículo 25.- De la defensa penal pública. La función de defensa penal pública será ejercida exclusivamente por defensoras y defensores penales públicos. Los servicios de defensa jurídica que preste la Defensoría Penal Pública no podrán ser licitados o delegados en abogados particulares, sin perjuicio de la contratación excepcional que pueda realizar en los casos y forma que establezca la ley.

Artículo 27.- Dirección de la Defensoría Penal Pública. La dirección superior de la Defensoría Penal Pública reside en un Consejo Superior, órgano colegiado, paritario, que designará de entre sus miembros a un presidente y a un director ejecutivo.

Artículo 28.- Del Consejo Superior de la Defensoría Penal Pública. El Consejo Superior estará integrado por siete integrantes designados de la siguiente manera:

- a) Tres integrantes elegidos democráticamente por los defensores y defensoras entre sus pares.
- b) Un integrante elegido democráticamente por funcionarios y funcionarias de la Defensoría Penal Pública entre sus pares.
- c) Tres integrantes elegidos por el Congreso plurinacional a partir de ternas elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública. Los candidatos y candidatas no podrán haber desempeñado cargos de elección popular ni haber sido candidatos a ellos, así como tampoco podrán haber desarrollado funciones en el Gobierno o Administración del Estado en cargos que sean de exclusiva confianza del Presidente de la República, en los últimos cuatro años.

La ley establecerá el procedimiento y los requisitos que deberán reunir los consejeros de la Defensoría Penal Pública. Los consejeros durarán cuatro años en sus cargos y no podrán ser reelegidos, debiendo renovarse por parcialidades en conformidad a lo que señale la ley.

La calidad de consejero es incompatible con todo otro cargo o función sea o no remunerada, con excepción de la docencia universitaria con los límites que señale la ley.

Las y los consejeros indicados en las letras a) y b) se entenderán suspendidos del ejercicio de su función mientras dure su cometido, pudiendo retornar al ejercicio de sus funciones una vez cumplido este desempeño.

Artículo 31.- Atribuciones del Consejo Superior de la Defensoría Penal Pública.

El Consejo Superior de la Defensoría Penal Pública tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Dirigir el organismo, velando por el cumplimiento de sus objetivos;

- b) Determinar la política de gestión profesional de las y los funcionarios de la Defensoría Penal Pública.
- c) Evaluar y calificar permanentemente el desempeño de las y los funcionarios.
- d) Designar al defensor nacional y a los defensores regionales en conformidad a la ley.
- e) Ejercer la potestad disciplinaria respecto de las y los funcionarios, en conformidad a la ley.
- f) Definir las necesidades presupuestarias, gestionando los recursos para su adecuado funcionamiento.
- g) Las demás atribuciones que establezca la ley.

Artículo 29.- Del Defensor o Defensora Nacional. La o el Defensor Nacional dirigirá las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Superior de la Defensoría Penal Pública y representará a la institución ante los demás órganos del Estado, sin perjuicio de las demás atribuciones que señale la ley.

§ De la Defensoría del Pueblo

Artículo 34. Defensoría del Pueblo. Un organismo autónomo, de carácter técnico, con personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio y titularidad unipersonal denominada Defensoría del Pueblo tendrá por finalidad la promoción, protección y colaboración en la defensa de los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución, en los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos y en las leyes, ante los actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y de entidades privadas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública, en los términos que establezca la ley respectiva.

La Defensoría del Pueblo velará siempre por el resguardo efectivo del interés ciudadano en la gestión y finalidad que la Constitución y las leyes confieren a dichos órganos y entidades.

La ley determinará la organización, funciones, financiamiento y atribuciones de la Defensoría del Pueblo.

El presupuesto de la Defensoría del Pueblo estará fijado en una glosa especial del presupuesto del Estado para el desempeño de sus funciones.

Artículo 35. Actuación de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo actuará de manera gratuita y simplificada y ejercerá sus atribuciones, de oficio o a petición de parte, en favor de las personas, agrupaciones o pueblos, según sea el caso.

Las autoridades estarán obligadas a colaborar con los requerimientos necesarios para la libre función de la Defensoría del Pueblo, la que podrá acceder a la información reservada de las instituciones, sin obstáculo alguno, y podrá constituirse en dependencias de los órganos objeto de fiscalización.

Artículo 36. Atribuciones de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo tendrá, a lo menos, las siguientes atribuciones:

1. Supervigilar, en relación a su mandato constitucional, a los órganos del Estado y entidades privadas.
2. Formular recomendaciones a los órganos del Estado y entidades privadas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública, en materias de su competencia, las que no serán vinculantes.
3. Realizar acciones de seguimiento y monitoreo respecto de las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales en materia de derechos humanos y las sentencias dictadas en contra del estado por tribunales internacionales.
4. Tramitar quejas o reclamos a solicitud de cualquier persona o agrupación que lo solicite ante el organismo que corresponda, el que estará siempre obligado a proporcionarle la información y colaboración necesaria para su solución.
5. Practicar mediaciones o buenos oficios entre las personas y los organismos públicos o entidades privadas, en materias de su competencia.

6. Litigar cuando se identifiquen patrones de violación de derechos humanos, interponiendo las acciones y recursos que esta Constitución y las leyes establecen, incluidas las de naturaleza colectiva y administrativa, que determine su ley.
7. Interponer acciones legales ante los tribunales de justicia respecto de hechos que revistan carácter de crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra, tortura, desaparición forzada de personas, y demás que establezca la ley.
8. Custodiar y preservar los antecedentes reunidos por comisiones de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
9. Educar en derechos humanos.
10. Iniciativa de ley en materias de su competencia.
11. Las demás que fije la ley.

La Defensoría del Pueblo ejercerá plenamente sus atribuciones en todo tiempo y lugar, incluido durante la vigencia de los estados de excepción que se establezcan.

Artículo 37. Defensor del Pueblo. La Defensoría del Pueblo estará a cargo de una Defensora o de un Defensor que será designado por acuerdo de la mayoría absoluta de las y los miembros en ejercicio del Congreso, según proposición que efectúen las organizaciones sociales y de derechos humanos, en la forma y cumpliendo los requisitos que determine la ley.

El procedimiento de las organizaciones sociales y de derechos humanos deberá asegurar que las personas propuestas por las organizaciones cumplan los requisitos de experiencia comprobable, trayectoria, pluralismo, compromiso y conocimiento en materia de derechos humanos.

La Defensora o el Defensor del Pueblo durará un período de cinco años en el ejercicio del cargo. Sólo podrá ser reelegido, por una vez para un nuevo período. Al cesar su mandato y durante los dos años siguientes, no podrá optar a ningún cargo de elección popular ni de exclusiva confianza de alguna autoridad.

Gozará de inamovilidad en su cargo y será inviolable en el ejercicio de sus atribuciones. Cesará en su cargo únicamente por condena por crimen o simple delito, renuncia, enfermedad incompatible con el ejercicio de la función y por remoción. Sólo podrá ser removido por el Congreso, por iniciativa propia o del número de ciudadanos/as que determine la ley orgánica, con un quórum igual o superior al de su designación, por notable abandono de deberes o por conducta incompatible con la ética pública, los valores democráticos o los derechos humanos, en la forma que establezca la ley.

La Defensoría del Pueblo rendirá cuenta pública anual ante la ciudadanía, sin perjuicio del informe que deberá remitir una vez al año al Congreso, el que también será público.

Artículo 39. Organización de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo se organizará internamente, de manera paritaria, con equidad territorial y con la participación de los pueblos indígenas, a través de defensorías regionales y defensorías especializadas, que funcionarán en forma desconcentrada, con autonomía relativa, en conformidad a lo que señale su ley.

Dentro de las defensorías especializadas se contemplarán áreas de derechos de niños, niñas y adolescentes; de mujeres, disidencias y diversidades sexo-genéricas; de personas mayores; de personas de pueblos originarios y afrodescendientes; de personas con discapacidad; de personas privadas de libertad; de personas migrantes, refugiadas y apátridas, sin perjuicio de las demás áreas que señale la ley.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo contará con consejos consultivos nacionales, regionales y comunales y de los pueblos indígenas, en los términos que establezca la ley.

§ De la Defensoría de la Naturaleza

Artículo 41.- La Defensoría de la Naturaleza: Es un organismo técnico, autónomo, de derecho público, paritario, plurinacional, descentralizado, con personalidad jurídica

y patrimonio propio, la que se regulará por estas normas y aquellas que la ley orgánica establezca.

La Defensoría de la Naturaleza tendrá por objeto la difusión, prevención, promoción, defensa y protección de los Derechos de la Naturaleza, de los animales y los derechos humanos ambientales garantizados en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales en materia ambiental, derechos de la Naturaleza y de los animales vigentes en Chile.

La Defensoría velará por el interés colectivo. Para el cumplimiento de sus fines deberá coordinar con la Defensoría de los Pueblos y con los demás órganos estatales, quienes deberán colaborar con aquellos requerimientos relacionados con el ámbito de sus funciones, de acuerdo a los principios constitucionales del buen vivir, in dubio pro-natura, intergeneracional, precautorio, restaurativo, y demás contemplados en la Constitución, las leyes y en los instrumentos internacionales vigentes en Chile.

Artículo 42.- Sus atribuciones y funciones serán:

1. Representar judicial y extrajudicialmente tanto a la Naturaleza, como a las personas, de oficio o a petición de parte, ejerciendo las acciones administrativas, judiciales y cautelares que correspondan según su mandato, ante los organismos pertinentes para el cumplimiento de sus objetivos.
2. Recibir denuncias de personas naturales, personas jurídicas, comunidades y demás organizaciones que quieran proteger los derechos de la Naturaleza, de los animales y derechos humanos ambientales, procurando interponer las acciones que corresponda y/o realizar las coordinaciones que se requieran para asegurar la restitución al Estado de derecho.
3. Velar por el establecimiento de medidas de restauración y reparación del daño ambiental producido.
4. Velar por el cumplimiento y ejecución de las funciones de los distintos organismos del Estado en materia ambiental, participación y consulta indígena, previstas en la ley, en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales.
5. Velar por la participación de las comunidades para que puedan ser consultadas y consideradas sus opiniones en las decisiones que impliquen una afectación a los derechos de la Naturaleza.
6. Promover la adopción, firma o ratificación, según sea el caso, de las declaraciones, pactos y convenios internacionales, y proponer la implementación en la legislación nacional de los tratados internacionales que se relacionen con su competencia.
7. Promover una cultura transversal de respeto a los derechos de la Naturaleza, de los animales y derechos humanos ambientales en toda la sociedad y la institucionalidad pública.
8. Velar por el cumplimiento de sentencias y equivalentes jurisdiccionales que se refieran a la protección, reparación y/o restauración del medio ambiente.
9. Rendir informe anual al Congreso del cumplimiento de su función o cuando le sea requerido.
10. Brindar orientación y asistencia a cualquier persona, comunidad, pueblo u organización que la requiera, para el ejercicio y defensa de los derechos ambientales y la Naturaleza en materias de su competencia.
11. Representar a las comunidades o grupos de personas ante los organismos internacionales en todos aquellos casos que correspondan.
12. Informar como amicus curiae en las materias relativas a su competencia.
13. Todas aquellas atribuciones y facultades establecidas por la Ley.

Artículo 42 A.-Unidad de producción de conocimiento e investigación. Existirá una unidad de producción de conocimiento e investigación cuyo objeto será apoyar aquellas causas en las que asuma patrocinio y demás fines de estas institución.

Artículo 43.- La Defensoría de la Naturaleza se compondrá de oficinas regionales a cargo de una defensora o defensor de la Naturaleza, cuya dirección será descentralizada, colegiada, paritaria y plurinacional, mediante un Consejo Nacional, el cual coordinará interna y externamente su funcionamiento. Este consejo estará

compuesto por miembros electos de entre sus pares y su orgánica y funcionamiento serán regulados por ley.

Artículo 44.- Un Consejo Consultivo se encargará de orientar la estrategia de la Defensoría de la Naturaleza. La ley regulará su organización, funcionamiento, financiamiento y competencias.

Artículo 45.- La defensora o defensor regional de la Naturaleza durará 5 años en su cargo, será nombrada en conformidad a la unidad legislativa intrarregional que esta Constitución establezca, debiendo rendir cuentas ante dicha entidad, la que a su vez estará facultada para removerles de su cargo, conforme a la ley que la regule.

§ Del Consejo Autónomo del Medio Ambiente

Artículo 49.- Del Consejo Autónomo del Medio Ambiente. El Consejo del Medio Ambiente es un órgano colegiado, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de llevar a cabo la evaluación de impacto ambiental de proyectos, dictar la autorización final del proceso de evaluación ambiental, fiscalizar y sancionar toda clase de infracciones a las normas e instrumentos de protección ambiental, y demás facultades que establezca ley.

El Consejo del Medio Ambiente estará dirigido por un Consejo Nacional, integrado por siete miembros, con comprobada competencia en materia ambiental, elegidos por el Congreso Nacional a partir de ternas elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública. Además, funcionará desconcentradamente a través de consejos regionales. La ley regulará, en lo demás, su integración y funcionamiento.

Se organizará conforme a los criterios de plurinacionalidad, paridad y equidad territorial.

§ Agencia Nacional del Agua

Artículo X. Agencia Nacional del Agua. La Agencia Nacional del Agua es un órgano autónomo, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es asegurar el uso sostenible del agua, el acceso al derecho humano al agua y al saneamiento y la conservación y preservación de sus ecosistemas asociados. Para ello, se encargará de recopilar información, coordinar, dirigir y fiscalizar la actuación de los órganos del Estado con competencias en materia hídrica.

Será el órgano encargado de proponer e implementar la Política Hídrica Nacional, para lo cual deberá elaborar y gestionar un sistema público unificado de información hídrica con enfoque integrado de cuencas, que permita garantizar las prioridades de uso establecidas en esta Constitución. Además, estará a cargo de otorgar, revisar, modificar, caducar y revocar autorizaciones de uso de agua.

Deberá fiscalizar el uso responsable y sostenible del agua y aplicar las sanciones administrativas que correspondan. Podrá determinar la calidad de los servicios sanitarios, así como las demás que señale la ley.

La Agencia Nacional del Agua financiará y otorgará asistencia técnica a los Consejos de Cuenca, teniendo asiento propio en dicho órgano. En el evento que éstos no se hayan constituido, la Agencia Nacional del Agua podrá reemplazarlos en sus funciones.

Artículo 57.- Del Director Nacional. La Agencia Nacional del Agua tendrá una o un Director Nacional. Será nombrado a proposición de la o el Presidente de la República, por acuerdo del Congreso Nacional adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, previo llamado a audiencias públicas, por un período de 5 años y no podrá ser designado por un nuevo período. La designación deberá realizarse a partir de una propuesta plurinominal seleccionada por el Consejo de Alta Dirección Pública. Los candidatos y candidatas no podrán haber desempeñado cargos de elección popular ni haber sido candidatos a ellos, así como tampoco podrán haber desarrollado funciones en el Gobierno o Administración del Estado en cargos que

sean de exclusiva confianza del Presidente de la República, en los últimos cuatro años.

Para ser designada, la o el Director Nacional de la Agencia Nacional del Agua, deberá contar con, al menos, diez años de trayectoria en el ámbito de la gestión de recursos hídricos y reunir los demás requisitos que establezca la ley.

La ley regulará las instancias de coordinación entre la Agencia Nacional del Agua y el Ejecutivo, especialmente respecto de la Política Hídrica Nacional. Así como también, la organización, estructura, competencias y funcionamiento de la Agencia.

§ Consejo Nacional para la Transición Productiva Socio-ecológica

Artículo 59.- Consejo de Transformación Productiva. El Consejo de Transformación Productiva es un organismo autónomo encargado de definir la Estrategia Nacional de Transformación Productiva Socio-Ecológica, en coordinación con la institucionalidad pública, sea ésta a nivel estatal, regional o local. Este Consejo deberá coordinar la elaboración de las Estrategias Regionales de Transformación Productiva con los correspondientes gobiernos regionales.

La organización y atribuciones del Consejo serán determinadas por la ley. Con todo, esta deberá disponer los procedimientos de elaboración de las estrategias así como los mecanismos de rendición de cuentas para la evaluación de su implementación. Asimismo, dispondrá la incidencia en las definiciones presupuestarias y el procedimiento de seguimiento de las responsabilidades institucionales definidas en las estrategias nacionales o regionales.

El Consejo formará parte en el nombramiento de la Dirección de agencias y empresas públicas estratégicas para la transformación productiva del país, de la manera que lo disponga la ley.

El Consejo será paritario y plurinacional, y estará conformado proporcionalmente por representantes del poder ejecutivo y de los gobiernos regionales, junto con las y los principales actores que se desempeñan en el ámbito del fomento productivo, innovativo, educacional, científico, social y ecológico. Los nombramientos serán realizados por parcialidades, y en estos participaran el poder ejecutivo y legislativo según lo señale la ley.

§ Banco Central

Artículo 1.- Del Banco Central. El Banco Central es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, encargado de formular y conducir la política monetaria.

La ley determinará su organización, atribuciones y sistemas de control, así como la determinación de instancias de coordinación entre el Banco y el Gobierno.

Artículo 2.- Objeto del Banco Central. Le corresponderá en especial al Banco Central, para contribuir al bienestar de la población, velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, en coordinación con las principales orientaciones de política económica definidas con el Gobierno.

Para el cumplimiento de sus objetivos, el Banco Central deberá considerar la estabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la protección del empleo, la diversificación productiva, el cuidado del medioambiente y patrimonio natural y los principios que señale la Constitución y la ley.

Artículo 3.- Atribuciones. Son atribuciones del Banco Central la regulación de la cantidad de dinero en circulación, la ejecución de operaciones de crédito y cambios internacionales, como, asimismo, la dictación de normas en materia monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales.

Artículo 4.- Rendición de cuentas. El Banco rendirá cuenta periódicamente al Congreso sobre la ejecución de las políticas a su cargo, respecto de las medidas y normas generales que adopte en el ejercicio de sus funciones y atribuciones y sobre

los demás asuntos que se le soliciten mediante informes u otros mecanismos que determine la ley.

Artículo 5.- De las limitaciones. El Banco Central sólo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, sean éstas públicas o privadas. De ninguna manera podrá otorgar a ellas su garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas.

Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos e indirectos del Banco Central.

Sin perjuicio de lo anterior, en situaciones excepcionales y transitorias en las que así lo requiera la preservación del normal funcionamiento de los pagos internos y externos, el Banco Central podrá comprar durante un período determinado y vender en el mercado secundario abierto, instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, en conformidad a la ley.

Artículo 6.- Del Consejo del Banco Central. La dirección y administración superior del Banco estará a cargo de un Consejo, al que le corresponderá cumplir las funciones y ejercer las atribuciones que señale la Constitución y la ley.

El Consejo estará integrado por siete consejeras y consejeros designados por la mayoría de los integrantes del Congreso, a partir de ternas propuestas por el Consejo de la Alta Dirección Pública. Durarán en el cargo por un período de nueve años, no reelegibles, renovándose por parcialidades cada tres años en conformidad a la ley.

Los consejeros del Banco Central deben ser profesionales de comprobada idoneidad y trayectoria en materias relacionadas con las competencias de la institución. Para su designación se considerarán criterios de paridad de género y representación territorial.

El Consejo elegirá a su Presidencia la que será ejercida por tres años o el tiempo menor que le reste como consejero. Quien presida el Consejo podrá ser reelegido para un nuevo periodo en el cargo.

La ley determinará los requisitos, responsabilidades, inhabilidades e incompatibilidades para las y los consejeros del Banco.

Artículo 7.- Inhabilidades e incompatibilidades de consejeras y consejeros. No podrán integrar el Consejo quienes en los dieciocho meses anteriores a su designación hayan participado en la propiedad o ejercido como director, gerente o ejecutivo principal de una empresa bancaria, administradora de fondos, o cualquiera otra que preste servicios de intermediación financiera, sin perjuicio de las demás inhabilidades que establezca la ley. Una vez que hayan cesado en sus cargos, los integrantes del consejo tendrán la misma incompatibilidad por un periodo de dieciocho meses.

Artículo 8°. Responsabilidad de las y los consejeros. Las y los integrantes del Consejo podrán ser destituidos de sus cargos por resolución de la mayoría de los integrantes del pleno de la Corte Suprema, previo requerimiento de la mayoría de quienes ejerzan como consejeros o de un tercio de los congresistas, conforme al procedimiento que establezca la ley.

La remoción sólo podrá fundarse en la circunstancia de que el consejero afectado hubiere realizado actos graves en contra de la probidad pública, o haber incurrido en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades establecidas en la Constitución o la ley, o haya concurrido con su voto a decisiones que afectan gravemente la consecución del objeto del Banco.

La persona destituida no podrá ser designada nuevamente como integrante del Consejo, ni ser funcionaria o funcionario del Banco Central o prestarle servicios, sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley.

Capítulo [XX].- Contraloría General de la República

Artículo 73.- De la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República es un órgano técnico, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargada de velar por el cumplimiento del principio de probidad en la función pública, ejercer el control de constitucionalidad y legalidad de los actos de la Administración del Estado, incluidos los gobiernos regionales, locales y demás entidades, organismos y servicios que determine la ley.

Estará encargado de fiscalizar y auditar el ingreso, cuentas y gastos de los fondos públicos.

En el ejercicio de sus funciones, no podrá evaluar los aspectos de mérito o conveniencia de las decisiones políticas o administrativas.

La ley establecerá la organización, funcionamiento, planta, procedimientos y demás atribuciones de la Contraloría General de la República.

Artículo 74.- De la dirección de la Contraloría General de la República. La dirección de la Contraloría General de la República estará a cargo de una Contralora o Contralor General, quien será designado por el Congreso, a partir de una terna elaborada por el Consejo de Alta Dirección Pública.

Un Consejo de la Contraloría, cuya conformación y funcionamiento determinará la ley de la Contraloría, aprobará anualmente el programa de fiscalización y auditoría de servicios públicos, determinando servicios o programas que, a su juicio, deben necesariamente ser incluidos en el programa referido.

Los dictámenes que modifican la jurisprudencia administrativa de la Contraloría, deberán ser consultados ante el Consejo.

Artículo 75.- Del control de constitucionalidad y legalidad de la Contraloría. En el ejercicio del control de constitucionalidad y legalidad, la Contraloría General tomará razón de los decretos, resoluciones y otros actos administrativos o representará su ilegalidad. Sin embargo, deberá darles curso cuando la o el Presidente de la República insista con la firma de todos sus Ministros, debiendo enviar copia de los respectivos decretos al Congreso.

En ningún caso dará curso a los decretos de gastos que excedan el límite señalado en la Constitución o la ley y remitirá copia íntegra de los antecedentes al Congreso.

Tratándose de la representación por inconstitucionalidad no procederá insistencia y el pronunciamiento de la Contraloría será reclamable ante el tribunal que señale la ley.

Además, le corresponderá tomar razón de los decretos con fuerza de ley, debiendo representarlos, cuando ellos excedan o contravengan la respectiva ley delegatoria.

Respecto de los decretos, resoluciones y otros actos administrativos de entidades territoriales que, de acuerdo a la ley, deban tramitarse por la Contraloría, la toma de razón corresponderá a la respectiva contraloría regional. Los antecedentes que debieran remitirse, en su caso, lo serán a la correspondiente asamblea regional.

Artículo 76.- De la potestad para emitir dictámenes y la facultad fiscalizadora de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República podrá emitir dictámenes obligatorios para toda autoridad, funcionario o trabajador de cualquier órgano integrante de la Administración del Estado, de las regiones y de las comunas, incluyendo los directivos de empresas públicas o sociedades en las que tenga participación una entidad estatal o cualquier otra entidad territorial.

Los órganos de la Administración del Estado, los Gobiernos Regionales y locales, órganos autónomos, empresas públicas, sociedades en que el Estado tenga participación, personas jurídicas que dispongan de recursos fiscales o administren bienes públicos, y los demás que defina la ley, estarán sujetos a la fiscalización y auditorías de la Contraloría General de la República. La ley regulará el ejercicio de estas potestades fiscalizadoras y auditoras.

Artículo 77.- De las Contralorías Regionales. La Contraloría General de la República funcionará desconcentradamente en cada una de las regiones del país mediante Contralorías Regionales.

La dirección de cada contraloría regional estará a cargo de una o un Contralor Regional, designado por la o el Contralor General de la República.

En el ejercicio de sus funciones deberán mantener la unidad de acción, con el fin de aplicar un criterio uniforme en todo el territorio del país.

La ley determinará las demás atribuciones de las Contralorías Regionales y regulará su organización y funcionamiento.

Artículo 78. Condición para el pago de las Tesorerías del Estado. Las Tesorerías del Estado no podrán efectuar ningún pago sino en virtud de un decreto o resolución expedido por autoridad competente, en que se exprese la ley o la parte del presupuesto que autorice aquel gasto. Los pagos se efectuarán considerando, además, el orden cronológico establecido en ella y previa refrendación presupuestaria del documento que ordene el pago.

Capítulo XX. Tribunales Electorales y Servicio Electoral

§ Servicio Electoral

Artículo 82.- Del Servicio Electoral. Un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Servicio Electoral, ejercerá la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios, del cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, de las normas sobre organizaciones políticas y las demás funciones que señale la ley.

La dirección superior del Servicio Electoral corresponderá a un Consejo Directivo, el que ejercerá de forma exclusiva las atribuciones que le encomienden la Constitución y las leyes. Dicho Consejo estará integrado por cinco consejeras y consejeros designados por la mayoría absoluta de los integrantes del Congreso, a partir de ternas propuestas por el Consejo de la Alta Dirección Pública. Las y los consejeros durarán ocho años en sus cargos, no podrán ser reelegidos y se renovarán por parcialidades cada cuatro años.

Las y los consejeros deberán ser profesionales de comprobada idoneidad para el cargo. No podrán haber sido candidatas o candidatos, desempeñado un cargo de elección popular, ni haber ocupado cargos de exclusiva confianza en los cuatro años anteriores a su nombramiento.

Las y los consejeros sólo podrán ser removidos por la Corte Suprema a requerimiento de la o el Presidente de la República o de un tercio de los miembros en ejercicio del Congreso por infracción grave a la Constitución o a las leyes, incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en pleno especialmente convocado al efecto y, para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus juezas y jueces en ejercicio.

§ Tribunales Electorales

Artículo 87.- Del Tribunal Calificador de Elecciones. El Tribunal Calificador de Elecciones conocerá del escrutinio general y de la calificación de las elecciones de las autoridades electas por votación popular a nivel nacional, resolverá las reclamaciones que se suscitaren y proclamará a los que resulten elegidas y elegidos. Además, conocerá y resolverá los reclamos administrativos que se entablen contra actos del Servicio Electoral y las decisiones emanadas de tribunales supremos u órganos equivalentes de las organizaciones políticas.

Dicho Tribunal conocerá, asimismo, de los plebiscitos nacionales, y tendrá las demás atribuciones que determine la ley.

El Tribunal valorará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

Estará constituido por cinco juezas y jueces, designados en base a criterios de paridad y equidad territorial por el Consejo de la Justicia, los cuales deberán postular en la forma y oportunidad que determine la ley respectiva.

Las juezas y los jueces del Tribunal Calificador de Elecciones durarán seis años en sus funciones.

Una ley regulará la organización y funcionamiento del Tribunal Calificador de Elecciones, plantas, remuneraciones y estatuto del personal.

Artículo 88.- De los Tribunales Electorales Regionales. Habrá tribunales electorales regionales encargados de conocer el escrutinio general y la calificación de las elecciones de nivel regional y comunal, así como resolver las reclamaciones a que dieren lugar y proclamar las candidaturas que resultaren electas. Conocerán, asimismo, de los plebiscitos regionales y comunales, sin perjuicio de las demás atribuciones que determine la ley.

Sus resoluciones serán apelables y su conocimiento corresponderá al Tribunal Calificador de Elecciones en la forma que determine la ley. Igualmente, les corresponderá conocer de la calificación de las elecciones de carácter gremial y de las que tengan lugar en aquellas organizaciones que la ley señale.

Los tribunales electorales regionales estarán constituidos por tres juezas y jueces, designados en base a criterios de paridad y equidad territorial por el Consejo de la Justicia, los cuales deberán postular en la forma y oportunidad que determine la ley respectiva.

Las juezas y los jueces de los tribunales electorales regionales durarán seis años en sus funciones.

Estos tribunales valorarán la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

Una ley regulará la organización y funcionamiento de los tribunales electorales regionales, plantas, remuneraciones y estatuto del personal.

Artículo 89.- De la gestión y superintendencia. La gestión administrativa y la superintendencia directiva y correccional del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales regionales corresponderán al Consejo de la Justicia.

Artículo 91. Consejo del Servicio Civil.- El Consejo del Servicio Civil será un organismo autónomo de la Administración estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de resguardar los principios de no discriminación, mérito y capacidad en los procedimientos de selección, desarrollo y cese de los cargos públicos que componen el servicio civil, así como su imparcialidad, agilidad y transparencia. Solo se reservará la información cuya difusión pudiera afectar el adecuado funcionamiento de estos procedimientos, en conformidad con la ley.

Integran el servicio civil los cargos de la Administración Pública en el nivel central, regional y municipal, que, bajo la dirección del gobierno correspondiente a cada nivel, implementan las políticas públicas y proveen o garantizan, en su caso, la prestación de servicios públicos, en forma continua y permanente. Su desempeño deberá ser objetivo y políticamente neutral, en concordancia con el carácter profesional y técnico que les es propio. Se excluyen del servicio civil los cargos de exclusiva confianza que son parte del gobierno central, regional y municipal, y que son declarados como tales por esta Constitución o la Ley atendiendo a la naturaleza de sus funciones.

La dirección superior del Consejo del Servicio Civil estará a cargo de un Consejo Directivo de 7 integrantes que hayan destacado en el ámbito de la gestión pública y tengan, al menos, 15 años de experiencia profesional. 3 integrantes serán nombrados por la Presidencia de la República, a partir de una terna confeccionada por el Congreso. 4 integrantes serán nombrados por el Congreso, a partir de una terna confeccionada por la Presidencia de la República. Los consejeros elegirán de entre ellos a un Presidente y durarán 5 años, pudiendo ser renovados por una vez. Sólo podrán ser removidos anticipadamente por infracción grave de la Constitución o la ley o mal desempeño declarados por la Corte Suprema.

El Consejo Directivo:

- a) Conducirá los procesos de selección a partir de las cuales serán nombrados los directivos de los servicios públicos que integren el servicio civil y aprobará su remoción anticipada, que deberá fundarse en incapacidad, mal desempeño o vulneración de la ley. Tratándose de los jefes superiores de servicios, y de los demás casos que la ley y esta Constitución señalen, el Consejo Directivo definirá directamente las nóminas que se propondrán a la autoridad incluyendo en ellas a los postulantes más idóneos para el cargo que se requiera proveer;
 - b) Promoverá reformas y medidas tendientes al mejoramiento de la gestión del personal del sector público, incluyendo la capacitación, la medición del desempeño y las relaciones laborales;
 - c) Impartirá normas de aplicación general en materias de gestión y desarrollo de personas en la Administración Pública;
 - d) Velará por la correcta aplicación de la normativa del servicio civil denunciando, ante las autoridades respectivas, las irregularidades de que conozca, y
 - e) Desempeñará las demás funciones que señalen esta Constitución y la ley.
- La Ley regulará los demás aspectos de la composición, remoción y funcionamiento del Consejo Directivo.

§ Servicios Notariales y Registrales de carácter público

Artículo.- Es deber del Estado el resguardo de la fe pública, la seguridad del tráfico jurídico, la regulación y supervigilancia en la formación de documentos que tengan valor probatorio o el carácter de auténticos, debiendo garantizar el acceso de la población a estos.

La ley establecerá el pago de tasas o aranceles por las actuaciones que involucren el resguardo de la fe pública en atención a la cuantía y materia del asunto de que se trate.

Artículo 97. Del Servicio Nacional de Fe Pública. El Servicio Nacional de Fe Pública, será el órgano encargado de la certificación y del debido registro, guarda, custodia y almacenamiento de los instrumentos públicos y privados que determine la ley.

La designación de los notarios, archiveros y conservadores del Servicio de Fe Pública se realizará de forma objetiva, transparente y en función de sus méritos. La ley regulará los requisitos de su nombramiento, inhabilidades, atribuciones y remuneraciones.

Artículo 98.- Es deber del Estado garantizar el acceso gratuito a todos los servicios auxiliares de administración de Justicia, transitando hacia un modelo digitalizado, que asegure la transparencia, publicidad, simplificación y gratuidad.

Artículo 100.- Todos servicios notariales y registrales son públicos. Sólo la ley podrá establecer el pago de tasas por actuaciones y certificaciones en atención a la cuantía y materia del asunto de que se trate. Los dineros recaudados irán a beneficio fiscal.

§ Agencia Nacional del Consumidor

Artículo 101. La Agencia Nacional del Consumidor es un organismo autónomo, cuya finalidad es la protección de las personas en su rol de consumidoras y usuarias de bienes y servicios.

Para el debido cumplimiento de su finalidad, la Agencia Nacional del Consumidor contará con facultades fiscalizadoras, sancionatorias y regulatorias.

Su composición, organización, atribuciones y funciones serán determinadas por una ley.

§ Consejo de Verdad, Reparación y Garantías de no Repetición

Artículo 104.- Garantía de justicia y no repetición, de que nunca más un presidente abuse de su poder y le declare la guerra a su propio pueblo.

§ Del Consejo de Pueblos Indígenas

Artículo 105. Del Consejo de Pueblos Indígenas. Existirá un órgano colegiado, autónomo, con patrimonio propio y personalidad jurídica de derecho público, en el que tendrán representación todos los pueblos y naciones preexistentes en forma que determina la ley, encargado de diseñar y promover políticas públicas respetuosas de los derechos individuales y colectivos reconocidos por la Constitución, el sistema internacional de los derechos humanos y las leyes, velando por la efectiva transversalización de los principios de plurinacionalidad e interculturalidad en la sociedad y en toda la institucionalidad estatal.

Es deber del Estado destinar el presupuesto necesario y suficiente para el adecuado cumplimiento de sus fines.

Artículo 106. De las funciones del Consejo de Pueblos Indígenas. El Consejo de Pueblos Indígenas tendrá las siguientes funciones:

- 1) Participar en la planificación estratégica, creación, desarrollo e implementación de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida y el ejercicio efectivo del derecho al desarrollo de los mismos pueblos, respetando el principio de libre determinación de cada uno de ellos y su participación mediante un procedimiento de consulta libre, previa, informada y vinculante.
- 2) Diseñar, dirigir, impulsar, implementar y dar cuenta de los procesos de participación y consulta indígenas conforme a la Constitución, los estándares internacionales de derechos humanos y las leyes.
- 3) Efectuar los nombramientos, conforme al procedimiento establecido en su ley, para todos aquellos cargos públicos que no sean de elección popular y que correspondan a cupos o escaños reservados. En caso de que la elección de los mismos dependa de otro organismo, los nombres que integren la lista sobre la cual se efectuará la elección serán propuestos por el Consejo de Pueblos Indígenas.
- 4) Responder requerimientos y formular recomendaciones a todos los órganos públicos respecto a las políticas que impulsan, en cuanto a la forma más adecuada de implementar los estándares consagrados en la Constitución y los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas.
- 5) Requerir a los órganos respectivos la adecuación de normas legales y reglamentarias que no se ajusten a los estándares establecidos en la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
- 6) Requerir a las Defensorías de los Pueblos Indígenas y de la Naturaleza para que ejerzan algunas de las facultades que la Constitución y la ley les encomiendan, en defensa de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y de la naturaleza.
- 7) Atender y responder las dudas de las comunidades y los pueblos respecto de políticas, leyes u actos administrativos a fin de encausar sus demandas antes las instituciones y garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos.
- 8) Sistematizar, restaurar, resguardar y difundir todos los archivos históricos y jurídicos relacionados con pueblos indígenas.
- 9) Las demás funciones que le encomiende la ley.

Artículo 107.- De la regulación del Consejo de Pueblos Indígenas. La ley regulará el número de miembros y formas de integración, la planta funcionaria y la organización administrativa y territorial de acuerdo a los principios de descentralización y facilidad de acceso al servicio, observando el principio de equidad territorial, democracia interna y representación de los pueblos.

§ Justicia Constitucional

§ Revisión represiva de la ley

Artículo 108.- De la justicia constitucional. La justicia constitucional será ejercida por una Corte Constitucional, con la finalidad de garantizar la supremacía de la Constitución, bajo los principios de deferencia a los electos con potestad legislativa presunción de constitucionalidad de la ley, búsqueda de una interpretación conforme con la Constitución y no justiciabilidad de asuntos de naturaleza exclusivamente política.

Los órganos del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones, deberán aplicar las normas, en el ámbito de sus competencias, efectuando una interpretación orientada hacia la Constitución.

La Corte Constitucional deberá interpretar la Constitución ajustada a la pertinencia cultural de los pueblos indígenas, cuando corresponda.

§ Corte Constitucional

Artículo 114 A.- Corte Constitucional. La Corte Constitucional es un órgano autónomo, técnico, profesional, independiente e imparcial, encargado del control de la supremacía de la Constitución, cuyas resoluciones se encuentran fundadas únicamente en razones de derecho.

Estará conformada, **paritariamente** y con **criterios de plurinacionalidad y equidad territorial**, por quince juezas y jueces, uno de los cuales será su presidenta o presidente, elegido por sus pares y que ejercerá sus funciones durante dos años.

Las juezas y los jueces de la Corte Constitucional durarán nueve años en sus cargos o hasta que cumplan setenta años, y se renovarán por parcialidades cada tres años. Funcionará en salas preferentemente especializadas, integradas por cinco juezas o jueces, o en pleno, de conformidad a lo dispuesto por la ley.

Las juezas y los jueces de la Corte Constitucional serán elegidas y elegidos en base a criterios técnicos y de mérito profesional, de la siguiente manera:

a) Un tercio será elegido por el Congreso, de nóminas de cinco personas que, en cada caso, propondrá el Consejo de Alta Dirección Pública. Estas designaciones se efectuarán en votaciones únicas y requerirán para su aprobación del voto favorable de los tres quintos de las y los parlamentarios en ejercicio.

b) Un tercio será elegido por la Presidencia de la República, de nóminas de cinco personas que, en cada caso, propondrá el Consejo de la Justicia.

c) Un tercio será elegido de entre las juezas y los jueces del Sistema Nacional de Justicia, por votación, entre sus pares que ostenten la calidad de titulares. Las juezas y los jueces electos para el ejercicio de esta función quedarán suspendidos de sus cargos judiciales de origen en tanto se extienda éste.

Su nombramiento se realizará previa convocatoria pública, abierta y transparente del órgano que corresponda realizar la elección, con al menos seis meses de anticipación.

Las y los postulantes al cargo de juez o jueza de la Corte Constitucional deberán ser abogadas o abogados, con más de quince años de ejercicio profesional, todas y todos juristas de reconocida competencia, y que se desempeñen o hayan desempeñado como juezas o jueces del Sistema Nacional de Justicia, fiscales del Ministerio Público, defensoras o defensores penales públicos, académicas y académicos de Universidades acreditadas por el Estado, y que pertenezcan a distintas especialidades del Derecho.

Al menos dos tercios de las y los jueces de la Corte Constitucional deberán provenir y haber ejercido sus funciones, por un mínimo de cinco años, en regiones diversas a la metropolitana. A lo menos dos de sus integrantes deben provenir de pueblos indígenas.

No podrán ser jueces o juezas de la Corte Constitucional quienes se hubiesen desempeñado en cargos de elección popular, hubiesen sido candidatas o candidatos a estos, o quienes hayan desempeñado el cargo de Ministra o Ministro de Estado, u otros cargos de exclusiva confianza del gobierno, durante los seis años anteriores a

la elección. De igual manera, no podrán tener impedimento alguno que los inhabilite para desempeñar el cargo de juez del Sistema Nacional de Justicia.

Una ley determinará la organización, funcionamiento, procedimientos y fijará la planta, régimen de remuneraciones y estatuto del personal de la Corte Constitucional.

Artículo 116. Inamovilidad e independencia. Las juezas y jueces de la Corte Constitucional son independientes de todo otro poder y gozan de inamovilidad. Cesarán en sus cargos por haber cumplido su periodo, por incapacidad legal sobreviniente, por renuncia, por sentencia penal condenatoria, por remoción, enfermedad incompatible con el ejercicio de la función u otra causa establecida en la ley.

Artículo 117 A. De las incompatibilidades e inhabilidades. El ejercicio del cargo de jueza o juez de la Corte Constitucional es de dedicación exclusiva. La ley determinará las demás incompatibilidades e inhabilidades para el desempeño de este cargo.

Al terminar su periodo, y durante los dos años siguientes, no podrán optar a ningún cargo de elección popular ni de exclusiva confianza de alguna autoridad.

Artículo 118 A. Atribuciones de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tendrá las siguientes atribuciones, ejerciéndolas conforme a los principios referidos en el artículo 108 [De la justicia constitucional]:

1. Resolver las acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes, disposiciones normativas con fuerza de ley, en contra de estatutos regionales, de autonomías territoriales indígenas y de cualquier otra entidad territorial.
2. Resolver las acciones de inconstitucionalidad por omisión de las medidas legislativas necesarias para el cumplimiento de las normas constitucionales.
3. Resolver la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los preceptos legales, que la o el juez que conoce de la gestión pendiente someta a conocimiento de la Corte Constitucional. El requerimiento sólo se iniciará a petición del tribunal que conozca del asunto, de oficio o a petición de parte, la que se tramitará como incidente y cuya resolución será inapelable.
4. Resolver la acción pública de inconstitucionalidad contra los preceptos legales que hayan sido declarados inaplicables en tres oportunidades previas, por el mismo vicio de constitucionalidad.
5. Resolver los reclamos en caso que la Presidenta o el Presidente de la República no promulgue una ley cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda. Igual atribución tendrá respecto de la promulgación de la normativa regional.
6. Pronunciarse sobre la correcta interpretación de los derechos fundamentales en la sentencia que resuelva la apelación de acciones de tutela de derechos fundamentales, cuando el asunto revista especial relevancia constitucional, en la forma que determine la ley.
7. Resolver conflictos de competencia o de atribuciones que se susciten entre las entidades territoriales autónomas, con cualquier otro órgano del Estado, o entre éstos, a solicitud de cualquiera de los antes mencionados.
8. Resolver las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia.
9. Resolver las contiendas de competencia entre la jurisdicción indígena y el sistema nacional de justicia.
10. Resolver el recurso interpuesto en contra de las decisiones de la jurisdicción indígena por vulneración de derechos humanos, interpretados interculturalmente.
11. Las demás previstas en esta Constitución y la ley.

El procedimiento, el quórum y la legitimación activa para el ejercicio de cada atribución se determinará por la ley.

Artículo 119 A.- De las sentencias de la Corte Constitucional y sus efectos. Las sentencias de la Corte Constitucional se adoptarán por consenso o por la mayoría de

juezas o jueces que establezca la ley. Tienen carácter vinculante, con efecto de cosa juzgada y de cumplimiento obligatorio para todos los órganos públicos, y contra ellas no cabe recurso ulterior alguno.

La Corte Constitucional sólo podrá acoger la inconstitucionalidad de una disposición legislativa o de una norma con fuerza de ley, o la inaplicabilidad de un precepto legal, cuando no sea posible interpretarlo de modo de evitar efectos inconstitucionales.

Declarada la inaplicabilidad de un precepto legal, éste no podrá ser aplicado en la gestión judicial en la que se originó la cuestión de constitucionalidad.

Cuando la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de una disposición legislativa o de una norma con fuerza de ley, la sentencia tendrá efectos derogatorios a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material de la disposición legislativa o de la norma con fuerza de ley declarada inconstitucional, mientras subsistan en la Constitución las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación con la norma ordinaria.

Si la Corte Constitucional verifica la existencia de inconstitucionalidad por omisión, lo pondrá en conocimiento del órgano legislativo competente, a fin de que éste actúe con arreglo a las formas previstas por la Constitución, para subsanar tal omisión.

§ Acciones constitucionales de tutela

Artículo 127.- Acción de tutela de derechos fundamentales. Toda persona que por causa de un acto u omisión sufra una amenaza, perturbación o privación en el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales, podrá concurrir por sí o por cualquiera a su nombre ante el tribunal de instancia que determine la ley, el que adoptará de inmediato todas las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho. Esta acción se podrá deducir mientras la vulneración persista. Esta acción cautelar será procedente cuando la persona afectada no disponga de otra acción, recurso o medio procesal para reclamar de su derecho, salvo aquellos casos en que, por su urgencia y gravedad, pueda provocar un daño grave inminente o irreparable.

Al acoger o rechazar la acción, se deberá señalar el procedimiento judicial que en derecho corresponda y que permita la resolución del asunto.

El tribunal competente podrá en cualquier momento del procedimiento, de oficio o a petición de parte, decretar cualquier medida provisional que estime necesaria, y alzarlas o dejarlas sin efecto cuando lo estime conveniente.

No podrá deducirse esta acción contra resoluciones judiciales, salvo respecto de aquellas personas que no hayan intervenido en el proceso respectivo y a quienes afecten sus resultados.

La apelación en contra de la sentencia definitiva será conocida por la Corte de Apelaciones respectiva. El recurso será conocido por la Corte Suprema si respecto a la materia de derecho objeto de la acción existen interpretaciones contradictorias sostenidas en dos o más sentencias firmes emanadas de los tribunales del Sistema Nacional de Justicia. De estimarse en el examen de admisibilidad que no existe tal contradicción, se ordenará que sea remitido junto con sus antecedentes a la Corte de Apelaciones correspondiente para que, si lo estima admisible, lo conozca y resuelva. Esta acción también procederá cuando por acto o resolución administrativa se prive o desconozca la nacionalidad chilena. La interposición de la acción suspenderá los efectos del acto o resolución recurrida.

Tratándose de los derechos de la naturaleza y derechos ambientales, podrán ejercer esta acción tanto la Defensoría de la Naturaleza como cualquier persona o grupo.

En el caso de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, esta acción podrá ser deducida por sus instituciones representativas, autoridades tradicionales o la Defensoría de los Pueblos.

Artículo 129. Acción de amparo. Toda persona que sea arrestada, detenida o presa con infracción a lo dispuesto en esta Constitución o las leyes, podrá concurrir por sí o por cualquiera persona a su nombre, sin formalidades, ante la magistratura que

señale la ley, a fin de que esta adopte de inmediato las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la persona afectada, pudiendo inclusive decretar su libertad inmediata.

Esa magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del tribunal competente, procediendo en todo breve y sumariamente, y corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija. Sin perjuicio de lo señalado, el tribunal deberá agotar todas las medidas conducentes a determinar la existencia y condiciones de la persona que se encontrare privada de libertad.

Esta acción también procederá respecto de toda persona que ilegalmente sufra una privación, perturbación o amenaza a su derecho a la libertad personal o seguridad individual, debiendo en tal caso adoptarse todas las medidas que sean conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Artículo 130.- Compensación por privación de libertad indebida. Toda persona que sea absuelta, sobreseída definitivamente o que no resulte condenada, será compensada por cada día que haya permanecido privada de libertad. El monto diario de compensación será fijado por la ley y su pago se realizará mediante un procedimiento simple y expedito.

La compensación no procederá cuando la privación de libertad se haya decretado por una causal fundada en una conducta efectiva del imputado.

Artículo 131.- Acción de indemnización por error judicial. Toda persona que haya sido condenada por sentencia dictada con error injustificado o falta de servicio judicial, tendrá derecho a ser indemnizada de todos los perjuicios que el proceso y la decisión condenatoria le hubieren causado.

Si todo o parte del daño deriva de la privación de libertad, la compensación, que siempre se podrá exigir en conformidad al artículo anterior, será imputada a la presente indemnización.

La misma indemnización procederá por las actuaciones o decisiones administrativas derivadas del funcionamiento judicial que, con falta de servicio, generen daño.

§ Reforma y Reemplazo de la Constitución

TÍTULO I. Reforma constitucional

Artículo 136 A.- Procedimiento de reforma constitucional. Los proyectos de reforma a la Constitución podrán ser iniciados por mensaje presidencial, moción parlamentaria o por iniciativa de los pueblos indígenas o por iniciativa popular.

Los proyectos de reforma constitucional iniciados por las y los ciudadanos deberán contar con el patrocinio en los términos señalados en esta Constitución.

Para su aprobación, el proyecto de reforma necesitará del voto conforme al quórum de cuatro séptimos de las y los parlamentarios en ejercicio.

Todo proyecto de reforma constitucional deberá señalar expresamente de qué forma se agrega, altera, reemplaza o deroga una norma de la Constitución.

En lo no previsto en este Capítulo, serán aplicables a la tramitación de los proyectos de reforma constitucional las normas sobre formación de la ley, debiendo respetarse siempre el quórum señalado en los incisos anteriores.

Los proyectos de reforma no podrán suprimir derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución.

Artículo XX: Los proyectos de reforma a la Constitución podrán ser iniciados además por los pueblos indígenas cuando se trate de temas que versen sobre plurinacionalidad, libredeterminación y demás derechos colectivos de los pueblos indígenas. Para ello, deberán contar con la cantidad de patrocinios respecto al padrón electoral indígena, en conformidad a esta Constitución.

Artículo 137.- Convocatoria a referendo. La Cámara de Diputados y Diputadas deberá convocar a referéndum ratificatorio tratándose de proyectos de reforma constitucional aprobados por ella que recaigan sobre las siguientes materias:

- (a) alteración de la forma de Estado;
- (b) modificación del período presidencial y del de los y las integrantes del Congreso Nacional;
- (c) reformas a los capítulos sobre principios fundamentales y derechos fundamentales;
- (d) las regulaciones de este capítulo.

La reforma constitucional aprobada por la Cámara se entenderá ratificada si alcanza la mayoría de los votos en el referéndum. El sufragio en este referendo será obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en Chile.

Es deber del Congreso Nacional y de los órganos del Estado descentralizados dar adecuada publicidad a la propuesta de reforma que se someterá a referendo, debiendo promover el involucramiento público a través de distintas vías en su discusión. El deber de publicidad deberá desarrollarse dentro de los 90 días anteriores a la celebración del referéndum. La ley regulará los deberes específicos, así como los mecanismos de participación, a que se refiere este inciso.

Artículo 138.- Referéndum popular de reforma constitucional. Un mínimo equivalente al diez por ciento de la ciudadanía correspondiente al último padrón electoral, podrá presentar una propuesta de reforma constitucional para ser votada mediante referéndum nacional conjuntamente con la próxima elección parlamentaria. Existirá un plazo de ciento ochenta días desde su registro para que la propuesta sea conocida por la ciudadanía y pueda reunir los patrocinios exigidos.

En caso que el proyecto popular de reforma constitucional reúna el apoyo requerido, el Congreso podrá aprobar un proyecto alternativo sobre la misma materia y dentro de un periodo máximo de dos meses, para que ambas sean consultadas. La propuesta del Congreso debe ser aprobada por la mayoría de los integrantes del Congreso. En este caso, para el plebiscito, la ciudadanía dispondrá de dos alternativas: en la primera, si aprueba o rechaza la reforma constitucional y, en la segunda, se preguntará por las dos alternativas propuestas.

La propuesta de reforma constitucional se entenderá aprobada si la alternativa de modificación ganadora alcanza la mayoría en la votación respectiva.

Es deber del Congreso y de los órganos del Estado descentralizados dar adecuada publicidad a la o las propuestas de reforma que se someterán a referéndum.

Artículo 139 A.- Los proyectos de reforma constitucional susceptibles de afectar a los pueblos indígenas, deberán ser sometidos a una consulta con los pueblos, mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones representativas, de acuerdo a lo dispuesto en esta Constitución y las leyes dictadas a su conformidad.

Título II. Procedimiento para elaborar una nueva Constitución

Artículo 140.- Procedimiento para el reemplazo de la Constitución. El reemplazo total de la Constitución sólo podrá realizarse a través de una Asamblea Constituyente convocada por medio de un referéndum.

La convocatoria a referéndum constituyente podrá ser convocada por iniciativa popular. Para ello, la ciudadanía deberá patrocinar la convocatoria con, a lo menos, firmas correspondientes al veinte por ciento del padrón electoral que hubiere sido establecido para la última elección parlamentaria.

También corresponderá a la presidencia de la República, por medio de un decreto, convocar al referéndum, el que deberá contar con la aprobación de los cuatro séptimos de las y los integrantes del Congreso.

Asimismo, la convocatoria corresponderá al Congreso, por medio de una ley, aprobada por las cuatro séptimas partes de sus integrantes.

La convocatoria para la instalación de la Asamblea Constituyente será aprobada si en el referendo es votada favorablemente por la mayoría de quienes participen en él. El sufragio en este referendo será obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en Chile.

Artículo 141.- De la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente tendrá como única función la redacción de una propuesta de Nueva Constitución. **Estará integrada paritariamente** y con **equidad territorial**, con participación en igualdad de condiciones entre independientes e integrantes de partidos políticos, **y con escaños reservados para pueblos originarios**.

Una ley regulará su integración, el sistema de elección, su duración, que no será inferior a dieciocho meses, su organización mínima, los mecanismos de participación popular y consulta indígena del proceso y demás aspectos generales que permitan su instalación y funcionamiento regular.

La Asamblea Constituyente tendrá la facultad de definir el quórum de aprobación de las normas y su propio reglamento de funcionamiento.

Una vez redactada y entregada la propuesta de nueva constitución a la autoridad competente, la Asamblea Constituyente se disolverá de pleno derecho.

Artículo 142.- Del plebiscito ratificador de una Nueva Constitución. Entregada la propuesta de Nueva Constitución, deberá convocarse a un referéndum para su aprobación o rechazo. El sufragio en este plebiscito será obligatorio.

Para que la propuesta sea aprobada deberá obtener el voto favorable de más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos.

Si la propuesta de Nueva Constitución fuera aprobada en el plebiscito, se procederá a su promulgación y correspondiente publicación.

Artículo 144.- Improcedencia de impugnaciones. Ninguna autoridad, ni tribunal, podrá conocer acciones, reclamos o recursos vinculados con las tareas que la Constitución le asigna a la Asamblea ni con el contenido de las normas propuestas.

§ Derechos de personas privadas de libertad

Artículo 145.- De los derechos de las personas privadas de libertad. **Las personas sometidas a cualquier forma de privación de libertad conservarán los derechos fundamentales contemplados en esta Constitución y en los tratados de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile.**

Es deber del Estado garantizar el acceso a la capacitación, a ejercer un trabajo remunerado, a la seguridad social, a la educación, a la integridad física y psíquica, al deporte y a la cultura, **con perspectiva de género e intercultural**.

El hacinamiento en los recintos penitenciarios atenta gravemente contra los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

Las mujeres y personas gestantes embarazadas tendrán derecho, antes, durante y después del parto, a acceder a los servicios de salud que requieran, a la lactancia y al vínculo directo y permanente con su hijo o hija, teniendo en consideración el interés superior del niño, niña o adolescente.

Es deber del Estado garantizar que las personas pertenecientes a los pueblos y naciones originarias tengan las condiciones que permitan ejercer su derecho a la identidad e integridad cultural y se dará preferencia a medidas distintas al encarcelamiento.

Artículo 146.- Obligaciones del Estado durante la ejecución de la pena. Solo el Estado ejecutará el cumplimiento de las penas y medidas privativas de libertad decretadas por los tribunales de justicia, a través de instituciones públicas especialmente establecidas para estos fines.

Los establecimientos penitenciarios serán administrados por personal civil especializado, distinto del órgano encargado de la seguridad del recinto.

Los establecimientos penitenciarios deberán separar a la población penal utilizando criterios apropiados para garantizar el respeto de los [derechos humanos](#) de la persona privada de libertad y su seguridad.

Las personas sometidas a una medida de seguridad de internación o a la medida cautelar de internación provisional, no podrán permanecer en un establecimiento penitenciario, debiendo asumir su custodia las personas o instituciones de salud mental, según correspondiere.

[Las visitas en los establecimientos penitenciarios tienen derecho a no ser sometidas a tratos o procedimiento vejatorios o degradantes, y es deber del Estado disponer todos los medios tecnológicos, materiales y humanos como forma de garantizar este derecho.](#)

Artículo 147. Extensión de la pena. Las personas privadas de libertad gozan de los derechos consagrados en esta Constitución y no podrán sufrir limitaciones a otros derechos que aquellos que sean estrictamente necesarios para la ejecución de la pena y deberán ser establecidos expresamente en la resolución judicial.

Artículo 148.- Prohibición de la tortura, aislamiento e incomunicación. [Ninguna persona privada de libertad podrá ser sometida a tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni trabajos forzosos. Asimismo, no podrá ser sometida a aislamiento o incomunicación como sanción disciplinaria. Tampoco podrá quedar incomunicada en la investigación de delitos en que hubiere participado, salvo en hipótesis calificadas y durante un tiempo proporcional y razonable, señalados expresamente por el legislador.](#)

Artículo 149.- Derecho a petición. [Las personas privadas de libertad tienen el derecho a hacer peticiones a la autoridad penitenciaria y al tribunal de ejecución de penas para el resguardo de sus derechos y a recibir una respuesta oportuna. Asimismo tienen derecho a mantener la comunicación y el contacto personal, directo y periódico con sus redes de apoyo y personas encargadas de su asesoría jurídica, sin que el ejercicio de estos derechos se pueda entorpecer, suspender o vulnerar por razones disciplinarias o administrativas.](#)

Artículo 150.- Derecho a la inserción, integración social y reparación. [La ejecución de las sanciones penales se enfocará hacia la inserción e integración de la persona condenada.](#)

[Es deber del Estado elaborar políticas, planes y programas para la efectiva inserción e integración de las personas privadas de libertad y **deberá siempre considerarse un enfoque de género**, etario, **pertinencia cultural**, igualdad material y no discriminación, procurando un desarrollo integral de la persona.](#)

[El Estado garantizará a las personas privadas de libertad el acceso a trabajos productivos, con pleno respeto de sus derechos laborales y de seguridad social.](#)

[Con todo, el Estado deberá priorizar la inserción social de adolescentes.](#)

Comentario a normas aprobadas en el comparado de normas correspondientes a bloques II y III de la Comisión de Sistema de Justicia, Órganos de Control y Reforma Constitucional:

Se aprecia, en términos generales, referencias normativas a cada uno de los criterios definidos por la Comisión de Transversalización (Derechos humanos, Género, Plurinacionalidad, Inclusión, Descentralización), salvo aquel Socioecológico.

De una revisión particular de las normas aprobadas, se observa una excesiva referencia a pueblos originarios. Dichas referencias se materializan tanto en la creación de órganos, como también en el establecimiento de criterios que deben cumplirse para su integración.